



PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
LC/G.2259-P

Copyright © Naciones Unidas, abril del 2005. Todos los derechos reservados.

Primera edición

ISSN impreso 1020 5152 / ISSN

ISBN 92 1 322621 7

Número de venta: S.04.II.G.148

Impreso en Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, EE.UU. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

2004



Panorama social

DE AMÉRICA LATINA



NACIONES UNIDAS

CEPAL

El *Panorama social de América Latina* es preparado anualmente por la División de Desarrollo Social y la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL, dirigidas por Martín Hopenhayn y Hubert Escaith, respectivamente. La edición del año 2004 contó con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y con el apoyo de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ). Fue coordinada por Juan Carlos Feres, Arturo León e Irma Arriagada, quienes junto con Guiomar Bay, Simone Cecchini, Fabiana Del Popolo, Ernesto Espíndola, José Miguel Guzmán, Martín Hopenhayn, Sandra Huenchuan, Dirk Jaspers-Faijjer, Xavier Mancero, Jorge Martínez, Francisca Miranda, Fernando Medina, Jorge Rodríguez y Miguel Villa se encargaron de la redacción de los capítulos y la síntesis. En las tareas de preparación y procesamiento de los antecedentes estadísticos trabajaron María de la Luz Avendaño, Carlos Daroch, Ernesto Espíndola, Marco Galván, Daniela González y Carlos Howes.

Notas explicativas

En los cuadros del presente Panorama social de América Latina se han empleado los siguientes signos:

- Tres puntos (...) indican que los datos faltan, no constan por separado o no están disponibles.
- Dos rayas y un punto (-.-) indican que el tamaño de la muestra no resulta suficiente para estimar la categoría respectiva con una confiabilidad y precisión adecuadas.
- La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable.
- Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable o no es comparable.
- Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
- El punto (.) se usa para separar los decimales.
- El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1990-1998, indica que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.
- La palabra “dólares” se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
- Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

ÍNDICE

RESEÑA	15
SÍNTESIS	17
CAPÍTULO I POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	51
A. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA	53
1. Evolución económica	53
2. Perspectivas de la pobreza en la región	55
3. Tendencias de la pobreza	59
B. PERSPECTIVAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA	67
C. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA POBREZA	72
1. Factores demográficos	74
2. Factores educativos	77
3. Mercado de trabajo	79
4. Factores de acceso a servicios básicos y a la tenencia de activos	82
5. Cambios en el perfil de la pobreza desde 1990	84
D. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO: CONVERGENCIA HACIA UNA MAYOR INEQUIDAD	88
1. Índice de Gini	89
2. Índice de Atkinson y otros	93
CAPÍTULO II TRANSFORMACIONES DEMOGRÁFICAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y CONSECUENCIAS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	97
Introducción	99
A. LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Y LAS TENDENCIAS DEL ENVEJECIMIENTO	100
1. Descenso sostenido de la fecundidad y la mortalidad	100
2. Disminución del crecimiento y remodelación etaria de la población	104
3. La disminución de la tasa de dependencia demográfica: el bono demográfico y su aprovechamiento	106
4. El envejecimiento de la población y los desafíos que plantea	106
5. Escenarios posibles y principales desafíos para las políticas	109
B. TENDENCIAS Y CAMBIOS DE LA FECUNDIDAD	111
1. La baja de la fecundidad y sus disparidades entre y dentro de los países	111
2. Fecundidad por edades y maternidad adolescente	116
3. Preferencias reproductivas y anticoncepción	119
4. Implicaciones sociales y de política	122
C. TENDENCIAS Y CAMBIOS DE LA MORTALIDAD	124
1. Mortalidad general	124
2. La mortalidad infantil	126
3. Mortalidad por edad y causas	130
D. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO	133
1. Presencia de la migración en el desarrollo	133
2. Los patrones y tendencias: transformaciones en marcha	135
3. Rasgos distintivos de la migración: complejidad en aumento	137

E. MIGRACIÓN INTERNA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	145
1. Una región urbana con una deuda histórica con el ámbito rural	145
2. Migración y movilidad de la población dentro de los países.....	148
3. Redistribución espacial de la población y migración interna: determinantes, efectos y políticas	149
CAPÍTULO III SITUACIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD: TENSIONES Y PARADOJAS	153
Introducción	155
A. LOS JÓVENES TIENEN MÁS EDUCACIÓN PERO MENOS EMPLEO.....	156
B. LAS MUJERES JÓVENES TIENEN MÁS EDUCACIÓN QUE LOS HOMBRES JÓVENES, PERO MENOS ACCESO AL EMPLEO Y EN PEORES CONDICIONES.....	167
C. LOS JÓVENES TIENEN MEJOR SALUD QUE EL RESTO DE LOS GRUPOS ETARIOS, AUNQUE ESTÁN MENOS ATENDIDOS EN SU MORBIMORTALIDAD ESPECÍFICA	172
D. LAS TASAS DE FECUNDIDAD DE LAS JÓVENES SE REDUCEN OSTENSIBLEMENTE, PERO AÚN PERSISTE LA MATERNIDAD A EDADES RELATIVAMENTE TEMPRANAS.....	176
E. AUN CUANDO EL CONSUMO SIMBÓLICO SE EXPANDE ENTRE LOS JÓVENES A UN RITMO ACELERADO, ESTOS ENCUENTRAN SEVERAS RESTRICCIONES PARA INCREMENTAR SU CONSUMO MATERIAL.....	183
F. A MODO DE COROLARIO: ENTRE LA PRECOCIDAD Y LA POSTERGACIÓN	191
CAPÍTULO IV ESTRUCTURAS FAMILIARES, TRABAJO DOMÉSTICO Y BIENESTAR EN AMÉRICA LATINA	193
Introducción	195
A. EVOLUCIÓN DE LAS DIVERSAS ESTRUCTURAS FAMILIARES POR TIPO DE HOGAR Y ETAPA DEL CICLO DE VIDA FAMILIAR	196
1. Relaciones entre los tipos de hogares y las dimensiones económicas y demográficas	196
2. Evolución de las familias según los tipos de hogares	198
3. La diversidad de las familias nucleares en América Latina.....	200
4. Evolución de las familias según las etapas del ciclo de vida.....	202
B. EVOLUCIÓN DE LAS DIVERSAS ESTRUCTURAS FAMILIARES EN RELACIÓN CON EL BIENESTAR.....	205
1. Estructura familiar y bienestar.....	205
2. Familias e ingresos familiares	208
C. LAS FAMILIAS Y LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO	211
1. La división del trabajo por género dentro y fuera del hogar	211
2. Resultados de dos encuestas de uso de tiempo en México y Uruguay	212
D. POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN ENTRE VIDA LABORAL Y VIDA FAMILIAR	217
CAPÍTULO V AGENDA SOCIAL	225
PROGRAMAS NACIONALES PARA LA JUVENTUD EN AMÉRICA LATINA	
Introducción	227
A. LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD EN AMÉRICA LATINA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DE JUVENTUD Y DE LOS PROPIOS JÓVENES	228
1. La edad como referente en las políticas de juventud y la ambigüedad del sujeto juvenil	229
2. La percepción de los problemas de la juventud por parte de las autoridades	230
3. Las principales causas de los problemas de la juventud.....	231
4. La perspectiva de los jóvenes	233

B. LAS POLÍTICAS NACIONALES DE JUVENTUD EN AMÉRICA LATINA	235
1. Paradigmas y enfoques de las políticas de juventud en América Latina.....	235
2. El marco normativo-jurídico de las políticas nacionales de juventud.....	238
3. La institucionalidad pública en materia de juventud	244
C. LA OFERTA PROGRAMÁTICA EN MATERIA DE JUVENTUD.....	249
1. Características, financiamiento y tipos de programas en ejecución.....	249
D. AGENDA INTERNACIONAL	253
BIBLIOGRAFÍA	263
ANEXO ESTADÍSTICO	271
PUBLICACIONES DE LA CEPAL	393

ÍNDICE DE CUADROS, GRÁFICOS Y RECUADROS

Cuadros

Cuadro I.1	América Latina (20 países): evolución de algunos indicadores socioeconómicos, 1990-2003	54
Cuadro I.2	América Latina: incidencia de la pobreza y la indigencia, 1980-2002.....	55
Cuadro I.3	América Latina: población pobre e indigente, 1980-2002	56
Cuadro I.4	América Latina (18 países): indicadores de pobreza e indigencia, 1990-2001/2003	62
Cuadro I.5	América Latina (18 países): rasgos seleccionados de los hogares pobres, 1999-2003	73
Cuadro I.6	América Latina (18 países): características demográficas de los hogares pobres y no pobres, 1999-2003	76
Cuadro I.7	América Latina (18 países): características educativas de los hogares pobres y no pobres, 1999-2003	79
Cuadro I.8	América Latina (18 países): características laborales de los hogares pobres y no pobres, 1999-2003	81
Cuadro I.9	América Latina (18 países): características de la vivienda y los servicios básicos de los hogares pobres y no pobres, 1999-2003	83
Cuadro I.10	América Latina (18 países): rasgos seleccionados de los hogares pobres, 1989-1991	85
Cuadro I.11	Estratificación de países según el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso, 1990-2002	91
Cuadro I.12	Estratificación de países según el índice de Atkinson ($\alpha=2$) de la distribución del ingreso, 1990-2002.....	94
Cuadro II.1	Indicadores del proceso de envejecimiento demográfico para América Latina y el Caribe, 2000, 2025 y 2050.....	107
Cuadro II.2	América Latina y el Caribe (países y años seleccionados): evolución de la tasa global de fecundidad (TGF) según zona de residencia y nivel de educación de la madre	115
Cuadro II.3	Correlaciones simples entre las tasas específicas de fecundidad y la tasa global de fecundidad (TGF) mundial y de América Latina y el Caribe	117
Cuadro II.4	América Latina (13 países): tasa de mortalidad infantil según área de residencia y nivel de educación de la madre	129
Cuadro II.5	América Latina y el Caribe: población inmigrante según origen, rondas censales de 1970-2000	137
Cuadro II.6	Estados Unidos: <i>stocks</i> de población inmigrante de origen latinoamericano y caribeño, 1970, 1980, 1990 y 2000	139
Cuadro II.7	Latinoamericanos y caribeños en Europa y otros países con información disponible, alrededor del 2000	141
Cuadro II.8	España: <i>stocks</i> de latinoamericanos y caribeños residentes por país de nacimiento y sexo, 1991 y 2001	142
Cuadro II.9	Japón: población residente nacida en Brasil según sexo, 1994-1997	143
Cuadro II.10	América Latina y el Caribe: porcentajes y tasas de crecimiento de la población urbana y rural, 1950-2000.....	146
Cuadro II.11	América Latina y el Caribe: metrópolis (5 millones o más de habitantes) en el año 2000	147
Cuadro II.12	América Latina y el Caribe: evolución del índice de primacía, 1950-2000.....	147
Cuadro II.13	América Latina (países seleccionados): estimaciones indirectas del peso de la migración neta campo-ciudad en el crecimiento urbano, 1980-2000	148
Cuadro II.14	Estimaciones de la cuantía de la migración hacia, desde y dentro de aglomerados metropolitanos y escolaridad media de los inmigrantes, emigrantes y no migrantes	149
Mapa II.1	América Latina y el Caribe: porcentaje de población urbana por países, 2000.....	146
Cuadro III.1	América Latina (16 países): porcentaje de personas ocupadas en sectores de baja productividad, según grupo de edad y sexo, total nacional, 1990-2002	163

Cuadro III.2	América Latina (17 países): tasa de ocupación de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad según nivel educacional y sexo, total nacional, 1990-2002	169
Cuadro III.3	América Latina (18 países): actividad del total de jóvenes de 15 a 29 años y de los jóvenes jefes de hogar, según sexo, total nacional, 1999-2002	171
Cuadro III.4	América Latina (14 países): tasas globales de mortalidad por grupo de edad y sexo, alrededor del 2000	173
Cuadro III.5	América Latina (14 países): distribución porcentual de la mortalidad por causas entre jóvenes de 15 a 24 años, según sexo, alrededor del 2000	174
Cuadro III.6	América Latina (19 países): evolución de la concentración de la fecundidad en la juventud por países, total nacional, 1987 y 2003	177
Cuadro III.7	América Latina (11 países): evolución de la proporción de madres en mujeres de 15 a 19 años, por edades simples, total nacional, alrededor de 1990 y del 2001	180
Cuadro III.8	América Latina (7 países): evolución de la proporción de madres o embarazadas por primera vez (EPV) en mujeres de 15 a 19 años, por nivel educativo, total nacional, mediados de los ochenta y mediados de los noventa	180
Cuadro III.9	Argentina, Chile y Colombia: edad de los usuarios de internet, total nacional, alrededor del 2002.....	184
Cuadro III.10	Chile, Colombia y México: actividades que realizan los jóvenes de 15 a 29 años de edad durante el tiempo libre, total nacional, alrededor del 2002.....	185
Cuadro III.11	América Latina (19 países): incidencias de pobreza e indigencia, 1990 y 2002	185
Cuadro III.12	América Latina (13 países): incidencia de pobreza e indigencia urbana y rural, 2002.....	188
Cuadro IV.1	América Latina (18 países): distribución de los hogares según tipo, zonas urbanas, 1990-2002	221
Cuadro IV.2	América Latina (18 países): tipos de familias nucleares y trabajo femenino en zonas urbanas, 1990-2002.....	222
Cuadro IV.3	América Latina (18 países): distribución de las familias según la etapa del ciclo vital familiar, zonas urbanas, 1990-2002	223
Cuadro IV.4	América Latina (18 países): incidencia de la pobreza entre los hogares según tipo, zonas urbanas, 1990-2002	224
Cuadro V.1	América Latina y el Caribe (15 países): principales problemas en orden de importancia.....	230
Cuadro V.2	América Latina y el Caribe (15 países): causas de los principales problemas de la juventud	232
Cuadro V.3	Paradigmas de la fase juvenil en los enfoques de políticas y programas	236
Cuadro V.4	América Latina y el Caribe (15 países): normativa internacional en materia de niñez y adolescencia	241
Cuadro V.5	América Latina (11 países): delimitación de la responsabilidad penal de los jóvenes.....	243
Cuadro V.6	América Latina y el Caribe (15 países): principales temas considerados en los cambios legislativos hasta el año 2003	245
Cuadro V.7	América Latina y el Caribe (19 países): jerarquía administrativa de los organismos gubernamentales oficiales de juventud	246
Cuadro V.8	América Latina y el Caribe (14 países): origen de los recursos destinados a los programas orientados hacia la juventud	252

Gráficos

Gráfico I.1	América Latina: evolución de la pobreza y de la indigencia, 1990-2004.....	56
Gráfico I.2	América Latina: distribución de la población total, pobre e indigente en áreas urbanas y rurales, 2002	58
Gráfico I.3	América Latina: distribución de la población pobre e indigente por país, 2002	59
Gráfico I.4	América Latina (17 países): evolución de la pobreza y la indigencia por país, 1990-1999, 1999-2001/2003.....	60
Gráfico I.5	América Latina (18 países): índices de incidencia de pobreza, 2001-2003 (brecha de pobreza y FTG ₂).....	64

Gráfico I.6	América Latina (17 países): porcentajes de avance en la reducción de la pobreza extrema y la pobreza total entre 1990 y 2004.....	69
Gráfico I.7	América Latina: tasas de crecimiento del PIB total y del PIB per cápita necesarios para reducir el nivel de pobreza de 1990 a la mitad, 2004-2015.....	70
Gráfico I.8	América Latina: cambio en las tasas de crecimiento requeridas para reducir la pobreza a la mitad según el grado de cambio distributivo, 2004-2015.....	71
Gráfico I.9	América Latina (18 países): cociente de ingresos entre el decil más rico y los cuatro deciles más pobres, 2002.....	90
Gráfico I.10	América Latina (18 países): coeficiente de Gini con y sin exclusión del decil más rico, 2002.....	90
Gráfico II.1	Tasa global de fecundidad: evolución según grandes regiones del mundo, 1970-2005.....	103
Gráfico II.2	Esperanza de vida al nacer: evolución según grandes regiones del mundo, 1950-2005.....	103
Gráfico II.3	Tasas de crecimiento anual en la región y países seleccionados, 1950-2050.....	104
Gráfico II.4	América Latina y el Caribe: crecimiento demográfico estimado y proyectado por decenio y grupos de edad, 1950-1960, 1990-2000 y 2040-2050.....	105
Gráfico II.5	Crecimiento porcentual de América Latina y el Caribe por sexo y edad, 2000-2010.....	105
Gráfico II.6	América Latina y el Caribe: año en que “termina” el bono demográfico según país.....	107
Gráfico II.7	América Latina y el Caribe (20 países): tasa global de fecundidad (TGF) en 1950-1955 y porcentaje de cambio entre 1950 y 2005.....	112
Gráfico II.8	América Latina y el Caribe (países seleccionados): nivel de pobreza en torno del 2002 y tasa global de fecundidad (TGF) estimada para el período 2000-2005.....	113
Gráfico II.9	América Latina (5 países): tasa global de fecundidad (TGF) para mujeres indígenas y no indígenas (criterio de autopertenencia), por zona de residencia, censos del 2000.....	116
Gráfico II.10	América Latina (10 países): evolución de la maternidad adolescente según edad simple, en torno de 1990-2000.....	118
Gráfico II.11	América Latina (países y años seleccionados): mujeres de 15 a 19 años según condición de maternidad y actividad económica.....	118
Gráfico II.12	América Latina (15 países): tasa de prevalencia anticonceptiva de mujeres en unión, alrededor de 1990 y cifra más reciente.....	120
Gráfico II.13	América Latina y el Caribe (países y años seleccionados): demanda insatisfecha de planificación familiar, cifra más reciente.....	120
Gráfico II.14	América Latina y el Caribe: esperanza de vida al nacer, 1950-1955, 1985-1990 y 2000-2005.....	125
Gráfico II.15	América Latina y el Caribe: diferencia entre la esperanza de vida al nacer de hombres y mujeres, 1950-1955, 1985-1990 y 2000-2005.....	126
Gráfico II.16	América Latina y el Caribe: tasa de mortalidad infantil, 1950-1955, 1985-1990 y 2000-2005.....	127
Gráfico II.17	América Latina y el Caribe (países seleccionados): tasa de mortalidad infantil de la población indígena y no indígena (criterio de autopertenencia), por zona de residencia de la madre.....	130
Gráfico II.18	América Latina: distribución de las defunciones por grandes grupos de edad, 1950-2005.....	131
Gráfico II.19	América Latina y el Caribe: porcentaje de población inmigrante según procedencia, 1970-2000.....	136
Gráfico II.20	América Latina y el Caribe: migrantes internacionales dentro de la región y en los Estados Unidos, 1970-2000.....	136
Gráfico II.21	América Latina y el Caribe (11 países): índices de masculinidad de la población nacida en el extranjero y en la región, alrededor del 2000.....	138
Gráfico II.22	América Latina y el Caribe (11 países): porcentajes de la población nacida en el extranjero, alrededor del 2000.....	138
Gráfico II.23	Estados Unidos: porcentaje de población inmigrante de origen latinoamericano y caribeño según subregiones, 1970-2000.....	140
Gráfico II.24	Estados Unidos: índice de masculinidad de la población nativa y de inmigrantes según región de origen, año 2000.....	141

Gráfico II.25	América Latina (países seleccionados): probabilidad de haber sido migrante entre divisiones administrativas menores en los últimos 5 años, por grupos de edad, ronda de censos del 2000	150
Gráfico III.1	América Latina (11 países): evolución de la población que completó la enseñanza primaria por tramos etarios, total nacional, 1990-2002	157
Gráfico III.2	América Latina (11 países): evolución de la población que completó la educación secundaria, total nacional, 1990-2002	157
Gráfico III.3	América Latina (14 países): evolución del logro educativo en enseñanza terciaria entre jóvenes de 25 a 29 años, total nacional, 1990-2002	158
Gráfico III.4	América Latina (11 países): término de la educación primaria, secundaria y terciaria en jóvenes de 25 a 29 años de quintiles seleccionados, total nacional, 2002	159
Gráfico III.5	América Latina (16 países): término de la educación primaria en quintiles seleccionados, en jóvenes de 25 a 29 años, total nacional, 2002	160
Gráfico III.6	América Latina (16 países): término de la educación secundaria en jóvenes de 25 a 29 años, quintiles seleccionados, total nacional, 2002	161
Gráfico III.7	América Latina (15 países): término de la educación primaria por tramos etarios y área geográfica, año 2002	161
Gráfico III.8	América Latina (15 países): término de la educación secundaria por tramos etarios y área geográfica, año 2002	162
Gráfico III.9	América Latina (17 países): tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 29 años de edad según nivel educativo, total nacional, 1990-2002	164
Gráfico III.10	América Latina (17 países): tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad según quintiles seleccionados, total nacional, 1990-2002	165
Gráfico III.11	América Latina (16 países): porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de edad en empleos de baja productividad, según quintiles seleccionados, 1990-2002	165
Gráfico III.12	América Latina (11 países): porcentaje de término de la enseñanza primaria y secundaria en los jóvenes de 15 a 29 años según sexo, 2002	168
Gráfico III.13	América Latina (16 países): término de la educación terciaria entre jóvenes de 25 a 29 años de edad según sexo, total nacional, 2002	168
Gráfico III.14	América Latina (16 países): tasas de desempleo por grupo de edad y sexo, total nacional, 1990-2002	169
Gráfico III.15	América Latina (6 países): distribución de las mujeres de 15 a 29 años por número de hijos tenidos según estrato socioeconómico, alrededor del año 2000	178
Gráfico III.16	América Latina (6 países): distribución de las mujeres de 17 años por número de hijos tenidos según estrato socioeconómico, alrededor del año 2000	179
Gráfico III.17	América Latina (5 países): mujeres que usaron anticonceptivos modernos en su primera relación sexual, total nacional, mediados de los años noventa	181
Gráfico III.18	América Latina (18 países): incidencia de la pobreza juvenil y total, alrededor del 2002	186
Gráfico III.19	América Latina (18 países): ingresos laborales medios de los jóvenes según grupos de edad y categorías de pobreza, total nacional, 2002	187
Gráfico III.20	América Latina (15 países): jóvenes de 15 a 29 años de edad en empleos de baja productividad, según nivel educacional, total nacional, alrededor del 2002	189
Gráfico IV.1	América Latina (18 países): relaciones entre el PIB per cápita, la tasa de crecimiento de la población media anual, 1995-2000 y los distintos tipos de hogares y familias, 1990-2002	197
Gráfico IV.2	América Latina (16 países): cambios en los tipos de hogares y en las familias, zonas urbanas, 1990-2002	199
Gráfico IV.3	América Latina (18 países): tipos de familias nucleares y trabajo femenino en zonas urbanas, 1990-2002	201
Gráfico IV.4	América Latina (16 países): etapas del ciclo de vida familiar, zonas urbanas, circa 1990 y 2002	202
Gráfico IV.5	América Latina (18 países): participación de las familias según diferentes etapas del ciclo de vida familiar en quintiles seleccionados, zonas urbanas, 2002	206

Gráfico IV.6	América Latina (16 países): incidencia de la indigencia y de la pobreza no indigente según tipos de hogares y familias, zonas urbanas, 2002.....	207
Gráfico IV.7	América Latina (16 países): incidencia de la indigencia y de la pobreza no indigente según etapas del ciclo de vida familiar, zonas urbanas, año 2002.....	207
Gráfico IV.8	América Latina (16 países): hogares y familias con y sin aportantes de ingresos laborales según tipos de hogar y familia, zonas urbanas, 2002.....	209
Gráfico IV.9	América Latina (16 países): hogares y familias urbanas con y sin miembros dependientes según tipos de hogar y familia, zonas urbanas, 2002.....	209
Gráfico IV.10	América Latina (16 países): hogares y familias urbanas con adultos mayores de 65 años, 2002.....	210
Gráfico IV.11	México: promedio de horas semanales destinadas a actividades domésticas por tipo de actividad y sexo, 2002.....	214
Gráfico IV.12	México: miembros del hogar que destinan tiempo a actividades domésticas por tipo de actividad y sexo, 2002.....	215
Gráfico IV.13	Montevideo: promedio de horas semanales destinadas a actividades domésticas agrupadas por tipo de actividad y sexo, 2003.....	216

Recuadros

Recuadro I.1	Método utilizado para la medición de la pobreza.....	57
Recuadro I.2	Indicadores para la medición de la pobreza.....	65
Recuadro I.3	Chile: importantes avances en la reducción de la pobreza.....	66
Recuadro I.4	Metodología empleada en las proyecciones.....	71
Recuadro I.5	Probabilidades de pobreza.....	86
Recuadro I.6	Estratificación de países según el coeficiente de Gini.....	92
Recuadro I.7	¿Cómo medir los cambios del nivel de desigualdad?.....	95
Recuadro II.1	El modelo de la transición demográfica.....	101
Recuadro II.2	La transición demográfica en América Latina y el Caribe y la situación de los países según la natalidad.....	102
Recuadro II.3	Países según etapas en proceso de envejecimiento.....	108
Recuadro II.4	La seguridad económica de las personas mayores en América Latina y el Caribe.....	109
Recuadro II.5	Determinantes próximos de la fecundidad: el modelo de Bongaarts.....	121
Recuadro II.6	La mortalidad en la niñez y los objetivos del Milenio.....	128
Recuadro II.7	Los impactos de las remesas a nivel de los hogares que las reciben.....	144
Recuadro IV.1	Tipos de hogares y familias construidos a partir de encuestas de hogares.....	199
Recuadro IV.2	Tipología del ciclo de vida familiar construida a partir de las encuestas de hogares.....	203
Recuadro IV.3	Chile: demandas de las familias según tipo y ciclo de vida al Programa Puente.....	204
Recuadro IV.4	La medición del trabajo en las encuestas de uso de tiempo.....	213
Recuadro V.1	Distintos enfoques en las políticas de juventud.....	237
Recuadro V.2	Convención Internacional de la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud.....	239
Recuadro V.3	Novena Conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe.....	254

En la edición 2004 del *Panorama social de América Latina* se analizan las tendencias recientes en materia de pobreza y distribución del ingreso en los países latinoamericanos, junto con las importantes transformaciones demográficas registradas en las últimas décadas en la región. Se analiza con especial énfasis la situación socioeconómica de la juventud y las normativas institucionales y programáticas de las políticas orientadas a los jóvenes. Asimismo, se examinan los cambios en la estructura de los hogares y el papel que desempeñan las familias en el bienestar social.

En el capítulo sobre pobreza y distribución del ingreso figuran proyecciones de la magnitud de la pobreza y de la indigencia en el 2003 y el 2004. A partir de ellas, se concluye que el proceso de superación de la pobreza se encuentra estancado en la región desde 1997, incluso con un leve deterioro en el 2003. Con respecto a la distribución del ingreso, América Latina sigue siendo la región del planeta con peores indicadores, lo que se ve agravado porque en algunos países se observa incluso una acentuación de la concentración del ingreso. Por consiguiente, es imperioso el desarrollo de políticas distributivas que apunten a mejorar la capacidad de generación de ingresos de los estratos de menores recursos, tanto mediante el fortalecimiento de las redes de protección social como a través de la adopción de un modelo productivo más inclusivo.

El capítulo en el que se abordan las grandes transformaciones demográficas en América Latina y el Caribe recoge parte importante del trabajo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, en particular el realizado de conformidad con los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994). En este capítulo se analizan la transición demográfica y el envejecimiento de la población, la fecundidad, la mortalidad, la migración internacional y el desarrollo, la migración interna, la distribución espacial de la población y las repercusiones de estos fenómenos en las políticas públicas, la equidad social y el ejercicio de los derechos humanos.

El capítulo III está dedicado a un análisis de la situación social de los jóvenes. En él se examina su dinámica demográfica, su inserción laboral, la organización familiar en la que se encuentran inmersos y su acceso a la salud y a la educación. Asimismo, se analizan distintos aspectos de la participación de la juventud y las características de sus consumos culturales. Se advierte que los jóvenes latinoamericanos viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de paradojas que crean tensiones, entre las que destacan el mayor acceso a la educación con

menores posibilidades de empleo, el mayor acceso a la información con menor acceso al poder y las mayores expectativas de autonomía con menores posibilidades de concretarla, a todo lo cual se suma el hecho de que sus mayores aptitudes para el sistema productivo van acompañadas de la exclusión de este.

En el cuarto capítulo se avanza en el análisis de los cambios en las estructuras familiares y sus vínculos con el bienestar en América Latina. La familia sigue desempeñando una importante función de apoyo y protección como consecuencia de la limitada cobertura social que caracteriza a los países de la región, en especial frente al desempleo, la enfermedad, la vejez y la migración, por lo cual la familia sigue siendo un recurso estratégico en términos de bienestar. En este capítulo se hace referencia también a la creciente importancia que se asigna a la familia en los nuevos enfoques aplicados en la formulación de políticas sociales, sobre todo de las destinadas a superar la pobreza.

En esta oportunidad, el capítulo dedicado a la agenda social contiene un análisis de los principales resultados de una encuesta sobre los programas nacionales orientados a la juventud, realizada por la CEPAL entre organismos gubernamentales encargados de las políticas públicas destinadas a los jóvenes en América Latina. Al respecto, se observa un panorama bastante heterogéneo en cuanto a la capacidad de respuesta de los gobiernos ante los problemas de la juventud. Las políticas adoptadas dejan en evidencia distintos paradigmas, a veces superpuestos, y una escasa articulación con los mecanismos institucionales más adecuados para orientar la formulación y el desarrollo de acciones específicas para los jóvenes.

En la edición 2004 del *Panorama social de América Latina* se analizan las importantes transformaciones demográficas registradas en las últimas décadas en la región, se examina la situación socioeconómica de la juventud latinoamericana, se reseñan las directrices y las normativas institucionales y programáticas de las políticas orientadas a los jóvenes y se describen los cambios en la estructura de los hogares y el papel que desempeñan las familias. Como es habitual, se presentan asimismo las tendencias recientes en materia de pobreza y distribución del ingreso en los países latinoamericanos.

En el primer capítulo figuran proyecciones de la magnitud de la pobreza y de la indigencia en el 2003 y el 2004. A partir de ellas, se concluye que el proceso de superación de la pobreza se encuentra estancado en la región desde 1997, incluso con un leve deterioro en el 2003. Sin embargo, el mayor crecimiento económico proyectado para el 2004 permite prever que algunos países seguirán en condiciones de cumplir la meta de reducir la pobreza extrema a la mitad en el año 2015.

Con respecto a la distribución del ingreso, América Latina sigue siendo la región del planeta con peores indicadores, lo que se ve agravado porque en algunos países se observa incluso una acentuación de la concentración del ingreso. Por consiguiente, es imperioso el desarrollo de políticas distributivas que apunten a mejorar la capacidad de generación de ingresos de los estratos de menores recursos, tanto mediante el fortalecimiento de las redes de protección social como a través de la adopción de un modelo productivo más inclusivo.

El capítulo en el que se abordan las grandes transformaciones demográficas en América Latina y el Caribe recoge parte importante del trabajo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, en particular el realizado de conformidad con los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994). En este capítulo se analizan la transición demográfica y el envejecimiento de la población, la fecundidad, la mortalidad, la migración internacional y el desarrollo, la migración interna, la distribución espacial de la población y las repercusiones de todos estos fenómenos en las políticas públicas, la equidad social y el ejercicio de los derechos humanos.

El capítulo III de esta edición del *Panorama social de América Latina* está dedicado a un análisis de la situación social de los jóvenes, producto de un estudio conjunto de la CEPAL y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ). En él se examina una amplia gama de dimensiones de la realidad de los jóvenes latinoamericanos, entre las que destacan su dinámica demográfica, su inserción laboral, la organización familiar en la que se encuentran inmersos y su acceso a la salud y a la educación. Asimismo, se analizan distintos aspectos de la participación de la juventud y las características de sus consumos culturales. Se advierte que los jóvenes latinoamericanos viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de paradojas que crean tensiones, entre las que destacan el mayor acceso a la educación con menores posibilidades de empleo, el mayor acceso a la información con menor acceso al poder y las mayores

expectativas de autonomía con menores posibilidades de concretarla, a todo lo cual se suma el hecho de que sus mayores aptitudes para el sistema productivo van acompañadas de la exclusión de este.

En el cuarto capítulo se avanza en el análisis de los cambios en las estructuras familiares y sus vínculos con el bienestar en América Latina. La familia sigue desempeñando una importante función de apoyo y protección como consecuencia de la limitada cobertura social que caracteriza a los países de la región, en especial frente al desempleo, la enfermedad, la vejez y la migración, por lo cual la familia sigue siendo un recurso estratégico en términos de bienestar. En este capítulo se hace referencia también a la creciente importancia que se asigna a la familia en los nuevos enfoques aplicados en la formulación de políticas sociales, sobre todo de las destinadas a superar la pobreza.

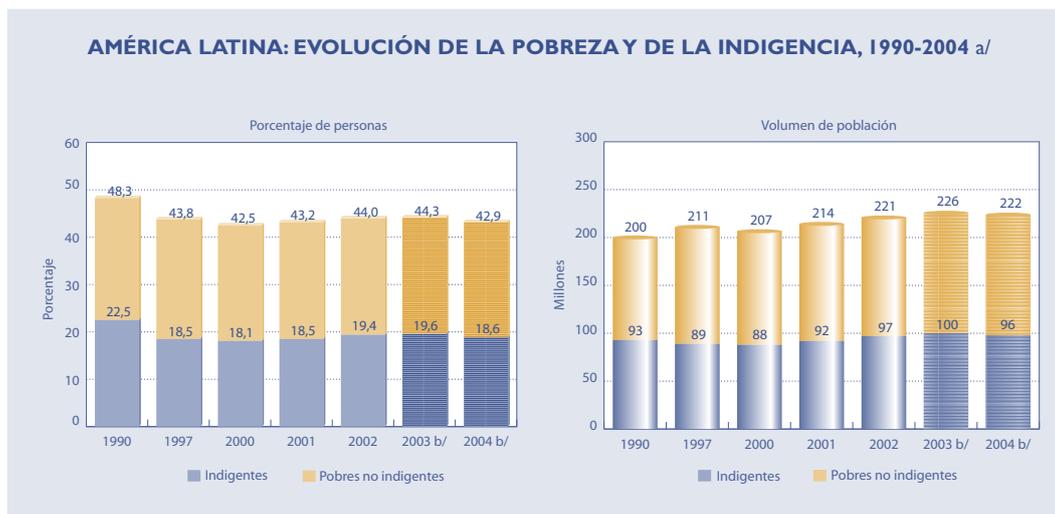
En esta oportunidad, el capítulo dedicado a la agenda social contiene un análisis de los principales resultados de una encuesta sobre los programas nacionales orientados a la juventud, realizada por la CEPAL entre organismos gubernamentales encargados de las políticas públicas destinadas a los jóvenes en América Latina. El objetivo del estudio era examinar, desde la perspectiva de esos organismos oficiales, las directrices y las normativas institucionales y programáticas que sirven de base a las políticas pertinentes y conocer la percepción de las autoridades nacionales sobre la situación de los jóvenes y sus problemas específicos. Al respecto, se observa un panorama bastante heterogéneo en cuanto a la capacidad de respuesta de los gobiernos ante los problemas de la juventud. Las medidas programáticas adoptadas dejan en evidencia distintos paradigmas, a veces superpuestos, y una escasa articulación con los mecanismos institucionales más adecuados para orientar la formulación y el desarrollo de políticas específicas para los jóvenes.

POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Las cifras más recientes sobre pobreza e indigencia en América Latina, correspondientes al año 2002, muestran que en la región vivían 221 millones de personas pobres (44,0% de la población), de las cuales 97 millones se encontraban en condiciones de pobreza extrema o indigencia (19,4%). Aun cuando estos datos representan un estancamiento en el proceso de superación de la pobreza respecto de 1997, la comparación con 1990 arroja un balance positivo, concretamente una disminución de la pobreza y la indigencia de 4,3 y 3,1 puntos porcentuales, respectivamente (véase el gráfico 1).

Como resultado del escaso crecimiento del producto por habitante de la región en el 2003, los índices de pobreza y de indigencia se habrían incrementado marginalmente ese año, ascendiendo a 44,3% y 19,6%, respectivamente. Sin embargo, el mayor crecimiento que se ha dado en el 2004 permite prever una disminución de la tasa de pobreza algo superior a un punto porcentual, gracias a lo cual el porcentaje de pobres sería un 42,9% en tanto que la indigencia afectaría a un 18,6% de la población. Estos cambios serían insuficientes para contrarrestar el crecimiento de la población en el mismo período, por lo que no cabe esperar un descenso del número de pobres e indigentes respecto del 2002. Los pobres ascenderían a 222 millones y los indigentes a 96 millones.

La determinación del grado de avance en el cumplimiento de la primera meta de desarrollo del Milenio, basada en las proyecciones de pobreza para el año 2004, sugiere que América Latina ha retrocedido nuevamente en la senda hacia la reducción de la



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Estimación correspondiente a 18 países de la región más Haití. Las cifras colocadas sobre las secciones naranja de las barras representan el número total de personas pobres (indigentes más pobres no indigentes).

b/ Las cifras correspondientes a 2003 y 2004 son proyecciones.

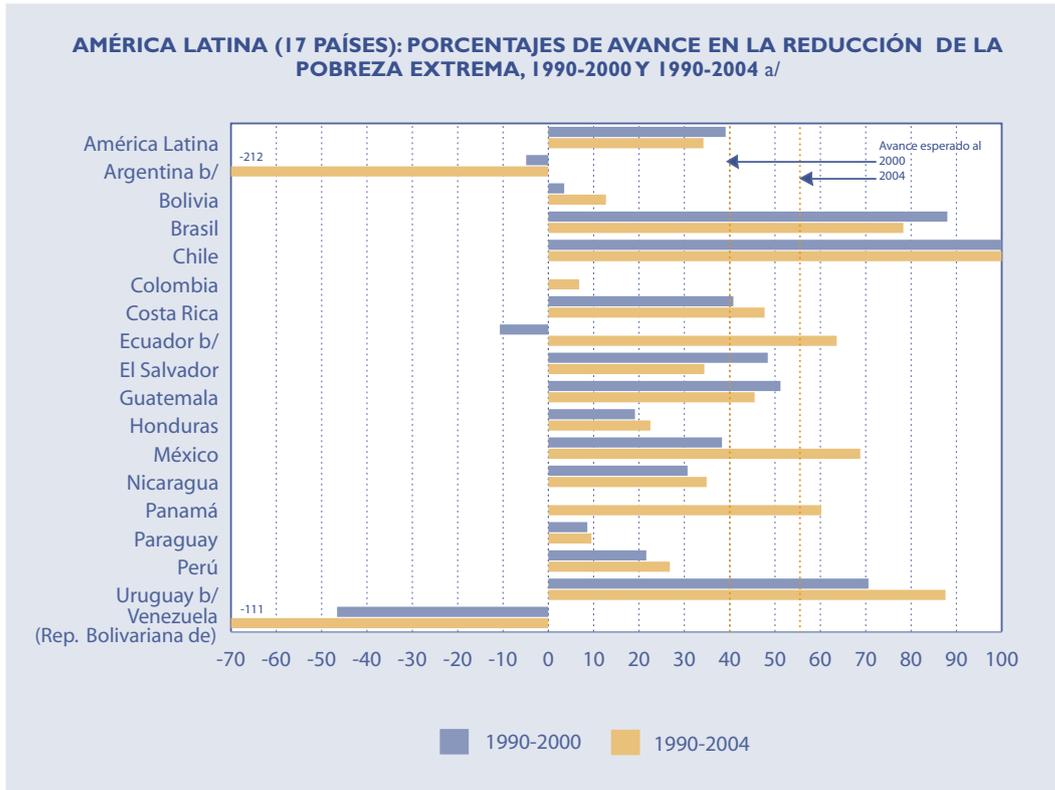
pobreza extrema. Conviene recordar que en el año 2000 la región había alcanzado un porcentaje de avance cercano al 40%, acorde con el tiempo transcurrido hasta entonces para el cumplimiento de la meta. Debido a la crisis económica que afectó a varios países en los años posteriores, en el 2002 sufrió un rezago, ya que mostró un grado de avance de apenas un 27,6% en lugar del equivalente al 48% que debería haber logrado. El pronóstico sobre la situación de pobreza extrema en la región hasta el 2004, basado en las proyecciones de crecimiento actualmente disponibles para este año, indica que la tasa de avance podría aumentar a un 34%, lo que representaría un adelanto importante, pero considerablemente inferior al deseable (56%) (véase el gráfico 2).

Ya en el 2000, Chile era el único país de la región que había cumplido con la meta de reducción de la pobreza extrema. Las cifras más recientes sobre este país, del año 2003, confirman esta situación al poner de manifiesto una nueva reducción de la indigencia. Chile también ha sido el único país de la región que ha cumplido con la meta más exigente de reducir la pobreza total a la mitad y solo en Brasil, Ecuador, México, Panamá y Uruguay los porcentajes de avance en el cumplimiento de la primera meta de desarrollo de Milenio serían iguales o superiores al 56%. Por otra parte, Argentina y Venezuela seguirían presentando un mayor nivel de indigencia que en 1990.

El atraso sufrido por la región en el proceso de consecución de la primera meta de desarrollo del Milenio, unido al menor número de años que restan para alcanzarla, indican que, en comparación con estimaciones previas, los países de la región tendrán que elevar el ritmo de crecimiento económico en el período 2004–2015.¹ En efecto, las simulaciones realizadas sobre la base de las encuestas de hogares más recientes en los países de la región indican que para alcanzar esta meta el producto por habitante debería crecer en América Latina a una tasa del 2,9% anual en los próximos once años y no del 2,6%, como se estimaba en el año 2002, en el supuesto de que la distribución del ingreso no

¹ En la edición 2002-2003 del *Panorama social de América Latina* se afirma que la tasa de crecimiento del producto por habitante de la región necesaria para reducir la pobreza extrema a la mitad era de un 2,6% anual.

Gráfico 2



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ El porcentaje de avance se calcula dividiendo la reducción (o aumento) de la pobreza (o indigencia) en puntos porcentuales observada en el período por la mitad de la tasa de pobreza (o indigencia) de 1990. Las líneas punteadas representan el porcentaje de avance esperado al 2000 (40%, línea izquierda) y al 2004 (56%, línea derecha).

b/ Área urbana.

presente variaciones sustanciales en ese período. Más aun, cabe advertir que el grupo de países con más altos niveles de indigencia estaría enfrentando un reto cada vez mayor, puesto que precisaría crecer al 4,4% anual por habitante, 0,8 puntos porcentuales más que lo estimado anteriormente.

Siempre en relación con la primera meta, la CEPAL ha insistido en que el mejoramiento de la distribución del ingreso potencia el efecto del crecimiento económico. De hecho, la tasa de crecimiento regional proyectada para alcanzar la meta relativa a la pobreza extrema podría reducirse aproximadamente 0,2 puntos porcentuales por cada punto porcentual de reducción en el coeficiente de Gini. Por lo tanto, en caso de producirse una baja del 5% de este coeficiente (aproximadamente equivalente a 0,025 puntos de su valor), el producto regional por habitante debería crecer al 2,1% anual, en lugar del 2,9% antes mencionado. En un contexto en el que las tasas de crecimiento necesarias para cumplir con las metas de reducción de la pobreza son de difícil consecución, sobre todo en los países más pobres, queda en evidencia la importancia de lograr avances en materia de redistribución del ingreso.

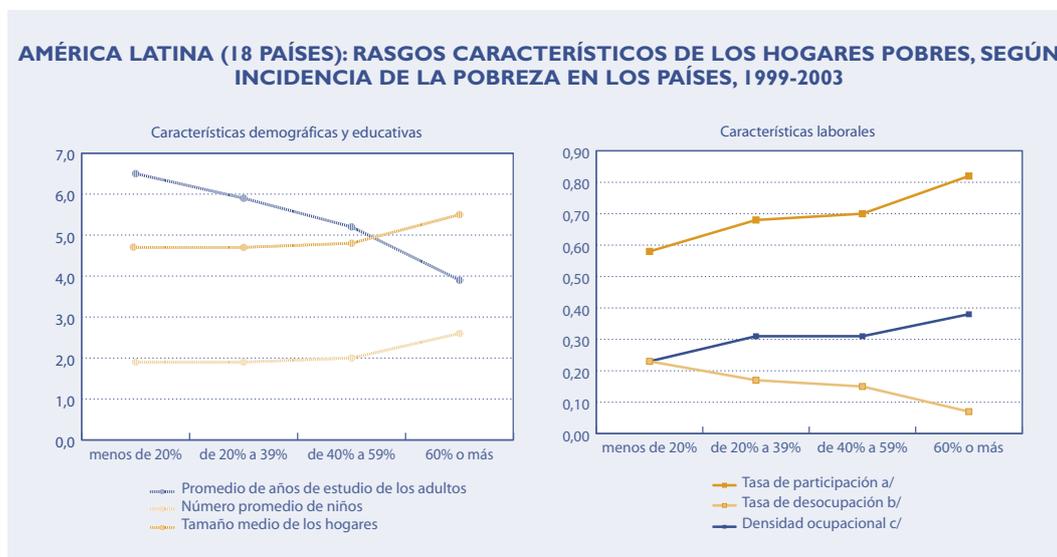
RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA POBREZA

El análisis de las condiciones en las que viven los pobres en América Latina, identificados como tales en función de la insuficiencia de recursos monetarios, es un requisito esencial para profundizar la comprensión del fenómeno de la pobreza y la formulación de políticas orientadas a su superación. Los factores que dificultan la eficaz inserción social de los pobres abarcan ámbitos tan diversos como el tamaño y la composición del hogar, la dotación de capital humano, la posibilidad de una adecuada participación en el mercado laboral y el acceso a la vivienda y los servicios básicos.

En lo que respecta al tamaño del hogar, se observa que los hogares pobres se caracterizan por estar integrados por un gran número de personas, muchas de las cuales son niños, situación que da lugar a altas tasas de dependencia demográfica (véase el gráfico 3).

La posibilidad de percibir ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de consumo de los miembros del hogar se ve mermada tanto por su baja tasa de ocupación como por la limitada capacidad de generar ingresos suficientes de los que tienen un trabajo. Por una parte, las bajas tasas de densidad ocupacional (cociente entre el total de ocupados por hogar y el número de personas que lo integran) se ve agravada por las dificultades para conseguir empleo. Este fenómeno es aún más marcado en países con tasas de pobreza superiores al 20%, donde solo uno de cada cuatro integrantes del hogar se encuentra ocupado. Además, cabe la posibilidad de que el hogar cuente con una alta proporción de miembros ocupados, en cuyo caso la pobreza responde en mayor medida a los bajos ingresos laborales, lo que es mucho más evidente en los países con tasas de pobreza superiores al 50% (véase el gráfico 3).

Gráfico 3



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Población económicamente activa (ocupados y desocupados) dividida por población en edad de trabajar.

b/ Número de desocupados dividido por la población económicamente activa.

c/ Número de ocupados dividido por el número de integrantes del hogar.

Uno de los factores que influyen en mayor medida en la determinación del nivel de ingresos laborales y la calidad del empleo es la dotación de capital humano de los participantes en el mercado laboral. En numerosos países de la región, muchos de los adultos que viven en hogares pobres no han terminado la educación primaria y, en algunos casos, ni siquiera han cursado tres años de estudios. En consecuencia, es muy probable que los empleos que consigan se encuentren en sectores de baja productividad, por lo general muy inestables y sin acceso a prestaciones sociales de salud y jubilación. De hecho, en la mayoría de los países, el ingreso individual de los ocupados en hogares pobres alcanza para cubrir sus propias necesidades básicas, pero deja un margen muy reducido para atender las necesidades de cualquier otro miembro del hogar.

Ahora bien, las condiciones inadecuadas de saneamiento y la falta de servicios básicos son una clara manifestación de la baja calidad de vida a la que están sujetos los hogares de escasos recursos, especialmente en los países con altas tasas de pobreza. En efecto, mientras en los países con tasas de pobreza inferiores a 20% la confluencia de dos o más situaciones de carencia afecta a menos de la décima parte de los hogares pobres, este porcentaje asciende a más del 50% en países con mayores niveles de pobreza como Bolivia, Nicaragua y Honduras. No obstante, cabe mencionar que en varios países con tasas de pobreza superiores al 40%, factores como el hacinamiento, y la falta de agua potable, servicios sanitarios y luz eléctrica también afectan a un amplio segmento de la población identificada como no pobre.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO: CONVERGENCIA HACIA UNA MAYOR INEQUIDAD

En los últimos años, la distribución del ingreso en América Latina no ha mostrado una evolución alentadora. La aguda concentración del ingreso se ha convertido en uno de los rasgos más distintivos de la región, lo que le ha valido ser considerada la más rezagada del planeta en materia distributiva.

La mala distribución del ingreso de América Latina se destaca en el contexto internacional, especialmente por el elevado porcentaje de recursos que concentra el 10% de los hogares de más altos ingresos. En efecto, si se calculan los valores del coeficiente de Gini considerando únicamente al 90% restante de los hogares, las cifras son notablemente inferiores a las correspondientes a toda la población. La reducción del valor del índice de Gini tras la aplicación de ese procedimiento fluctúa entre 0,116 en Uruguay y 0,192 en Brasil. Estas variaciones son mucho mayores que las observadas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la disminución del coeficiente de Gini ante la exclusión del décimo decil no superaría los 0,040 puntos del valor del indicador.²

Por otra parte, la estratificación de países en cuatro categorías a partir del coeficiente de Gini demuestra que, pese a que la desigualdad se manifiesta de distintas maneras en la región, muchos países presentan niveles de inequidad similares, especialmente en aquellos de alta y muy alta concentración del ingreso. Más aún, si se compara la clasificación descrita, basada en datos del 2002, con la correspondiente a 1990, se observa que los países han ido convergiendo hacia una mayor inequidad distributiva (véase el cuadro 1).

² Las cifras sobre Estados Unidos provienen del BID (1998).

ESTRATIFICACIÓN DE PAÍSES DE ACUERDO CON EL COEFICIENTE DE GINI DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, 1990–2002										
Grado de desigualdad	1990		1994		1997		1999		2002	
Muy alto 0,5800 – 1	Brasil	0,627	Brasil	0,621	Brasil	0,638	Brasil	0,640	Brasil	0,639
	Honduras	0,615	Nicaragua	0,582	Nicaragua	0,584			Argentina c/	0,590
	Guatemala	0,582							Honduras	0,588
Alto 0,5200 – 0,5799	Chile	0,554	Colombia b/	0,579	Colombia b/	0,577	Honduras	0,564	Nicaragua	0,579
	Panamá b/	0,545	Honduras	0,560	Guatemala	0,560	Colombia b/	0,564	Colombia b/	0,575
	Bolivia d/	0,538	Chile	0,553	Chile	0,560	Chile	0,559	Bolivia b/	0,554
	México	0,536	Panamá b/	0,548	Honduras	0,558	Rep. Dominicana	0,554	Chile	0,550
	Colombia b/	0,531	México	0,539	Panamá b/	0,552	Perú	0,545	Rep. Dominicana	0,544
					México	0,539	México	0,542	Guatemala	0,543
					Perú	0,532	Argentina c/	0,542	El Salvador	0,525
					Bolivia b/	0,531	Panamá b/	0,533	Perú	0,525
				Argentina c/	0,530	Ecuador b/	0,521			
Medio 0,4700 – 0,5199	Argentina c/	0,501	Bolivia b/	0,514	El Salvador	0,510	El Salvador	0,518	Panamá b/	0,515
	Uruguay b/	0,492	Paraguay b/	0,511	Venezuela	0,507	Bolivia b/	0,504	México	0,514
	Venezuela (Rep. Bolivariana de)	0,471	Argentina c/	0,508	Paraguay b/	0,493	Venezuela	0,498	Ecuador b/	0,513
			El Salvador	0,507			Paraguay b/	0,497	Paraguay b/	0,511
			Venezuela (Rep. Bolivariana de)	0,486			Costa Rica	0,473	Venezuela (Rep. Bolivariana de)	0,500
			Ecuador b/	0,479					Costa Rica	0,488
Bajo 0 – 0,4699	Ecuador b/	0,461	Costa Rica	0,461	Ecuador b/	0,469	Uruguay b/	0,440	Uruguay b/	0,455
	Costa Rica	0,438	Uruguay b/	0,423	Costa Rica	0,450				
					Uruguay b/	0,430				

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a/ Incluye ingresos iguales a cero.

b/ Área urbana.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Ocho ciudades principales más El Alto.

Los datos confirman que América Latina es una región con niveles altos y crecientes de concentración del ingreso, por lo que mejorar su distribución no solo es un imperativo ético sino que, además, favorecería una mayor tasa de crecimiento y la reducción de la pobreza. Los efectos negativos que ejercen en el crecimiento la mala distribución del ingreso y, especialmente, la muy desigual distribución del patrimonio, se ven potenciados en la región por el inadecuado funcionamiento de los mercados, que dificulta el acceso al crédito y al conocimiento.

Para mejorar la distribución del ingreso es necesario adoptar políticas públicas que apunten a los siguientes fines: i) facilitar el acceso a los activos (tierra, capital, conocimiento y tecnología); ii) lograr un desarrollo productivo con alta participación de pequeñas y medianas empresas y un desarrollo territorial equilibrado, y iii) aplicar políticas sociales basadas en los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia; para ello se requieren recursos, lo que puede lograrse mediante un adecuado pacto fiscal y una asignación más eficiente de estos.

TRANSFORMACIONES DEMOGRÁFICAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y CONSECUENCIAS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Las tendencias demográficas y sus consecuencias para el desarrollo han sido siempre objeto de debate, investigación y medidas públicas en los países de América Latina y el Caribe. Existe abundante documentación sobre los fenómenos que han caracterizado la dinámica de la población regional desde la segunda mitad del siglo XX. El ritmo del proceso de transición demográfica describe muy certeramente el tipo de transformación que se está produciendo, sobre todo en el caso del descenso sostenido y generalizado de la mortalidad y la rápida disminución de la tasa de fecundidad. Cabe destacar que la desaceleración del ritmo de crecimiento de la población ha atenuado la presión sobre los ecosistemas y los recursos públicos.

Cada vez queda más en evidencia que las cuestiones relativas a la población, además de imponer nuevos desafíos en términos de formulación de políticas públicas, han ido adquiriendo una complejidad creciente, por lo que se necesitan información detallada y análisis pormenorizados. Aún se observan rezagos importantes en materia de control de la mortalidad y de la fecundidad no deseada, que afectan sistemáticamente a los países y los grupos más pobres, incluida la población indígena. Estos rezagos son de enorme relevancia, dado que los fenómenos mencionados son una grave limitación para el logro de las metas de desarrollo del Milenio. El avance de la transición demográfica trae aparejada la confluencia de antiguos problemas con nuevos, sobre todo los planteados por el envejecimiento de la estructura por edades y el estrecho horizonte temporal en el cual se mantendrán relaciones de dependencia bajas, potencialmente favorables al desarrollo. A estos temas se suman otros, también de gran relevancia, que no están directamente vinculados con el proceso de transición demográfica propiamente tal, como ocurre con la fecundidad entre las adolescentes, la concentración urbana y la relación entre migración internacional y desarrollo.

Con el propósito de analizar las transformaciones demográficas, se utiliza información actualizada de diversas fuentes y se recoge buena parte de los estudios de la CEPAL en materia de población, en los que se ha otorgado primordial importancia al vínculo entre la población y el desarrollo. Al respecto, los países de la región se enfrentan a una compleja situación, dadas las fuertes motivaciones para migrar, y las consecuencias cada vez más notorias de la migración, entre las que destaca el aumento de las remesas y las restricciones al ingreso e integración de los inmigrantes en los países desarrollados.

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Y LAS TENDENCIAS DEL ENVEJECIMIENTO

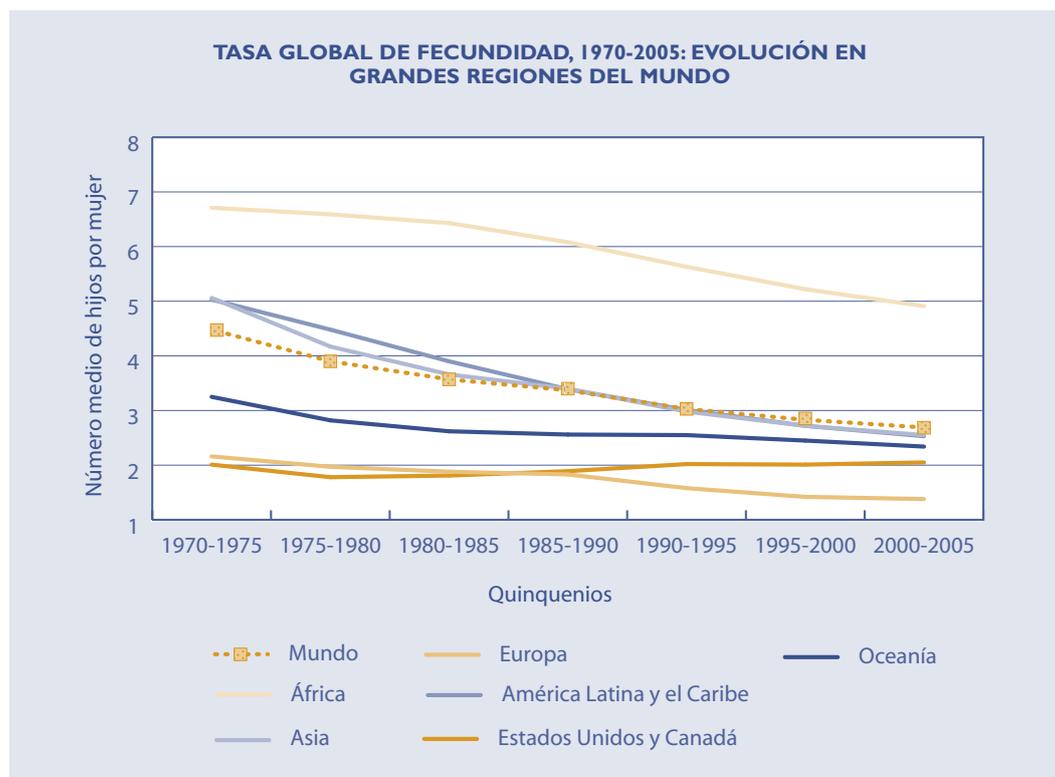
La transición demográfica de América Latina y el Caribe se produjo en un período mucho más corto que en los países europeos. El descenso de la mortalidad, iniciado en la primera mitad del siglo XX, y la disminución de la fecundidad, que se generaliza a partir de los años sesenta, fueron mucho más rápidos que los cambios observados en países desarrollados. En la actualidad, se registra una baja tasa de crecimiento de la población (cercana al 1,5% anual); a esto se suma la aparición del fenómeno del envejecimiento

de la población, que está transformando las sociedades de la región. En el marco de esta evolución, se observa una acelerada disminución de la fecundidad, cuyos niveles iniciales, períodos de disminución y valores actuales varían de un país a otro.

En promedio, la región presenta una tasa de fecundidad inferior a tres hijos por mujer y una esperanza de vida al nacer de 72 años, valores alcanzados en un lapso inferior al registrado por los países europeos (véanse los gráficos 4 y 5). A mediados del siglo XX, la tasa de crecimiento anual de la población de América Latina y el Caribe era del 2,7%. La población regional aumentó de 161 millones en 1950 a 512 millones en el 2000, y se prevé que ascenderá a 695 millones en el 2025. Mientras en 1950 la población de la región representaba menos del 7% del total mundial, esa proporción se eleva en la actualidad a cerca del 9%. Dada la heterogeneidad de la transición, el ritmo de crecimiento anual oscila entre menos de un 0,5% y un 2,5% (véase el gráfico 6).

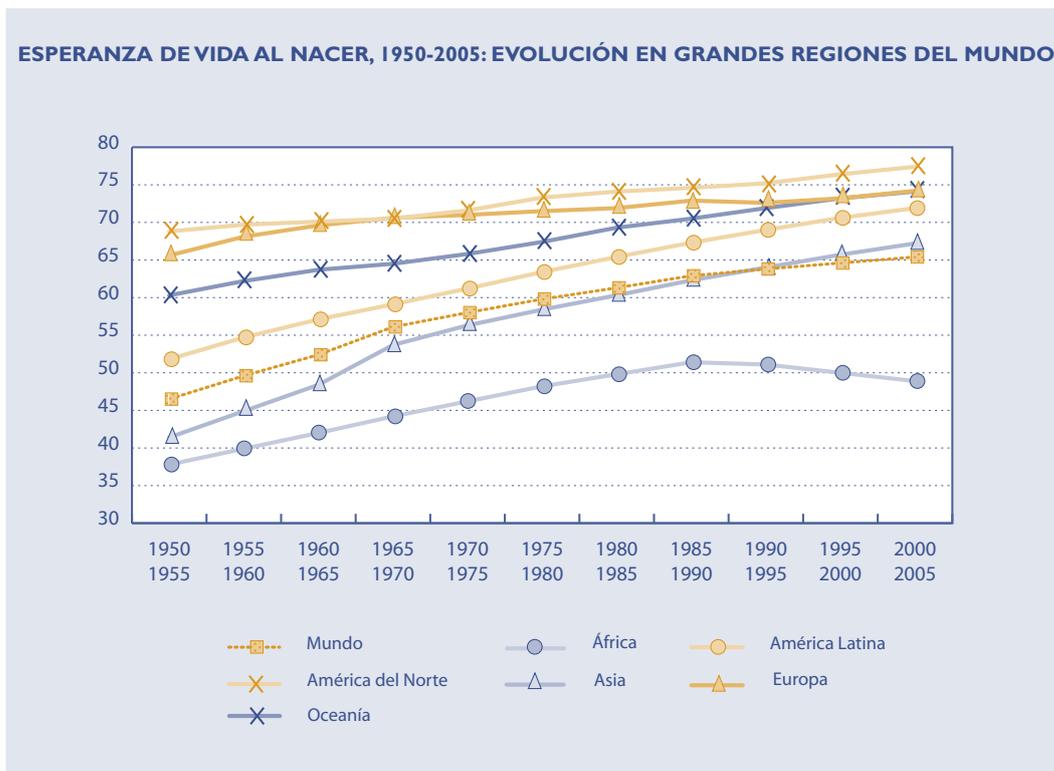
La transición no solo ha consistido en el envejecimiento de la población, sino también en la disminución de la tasa de dependencia, lo que contribuye a una holgura demográfica a mediano plazo, puesto que favorece la actividad económica. En cambio, el primero de estos fenómenos plantea enormes desafíos sociales, debido a que la proporción y el número absoluto de personas de 60 años y más se incrementarán sostenidamente en los próximos

Gráfico 4



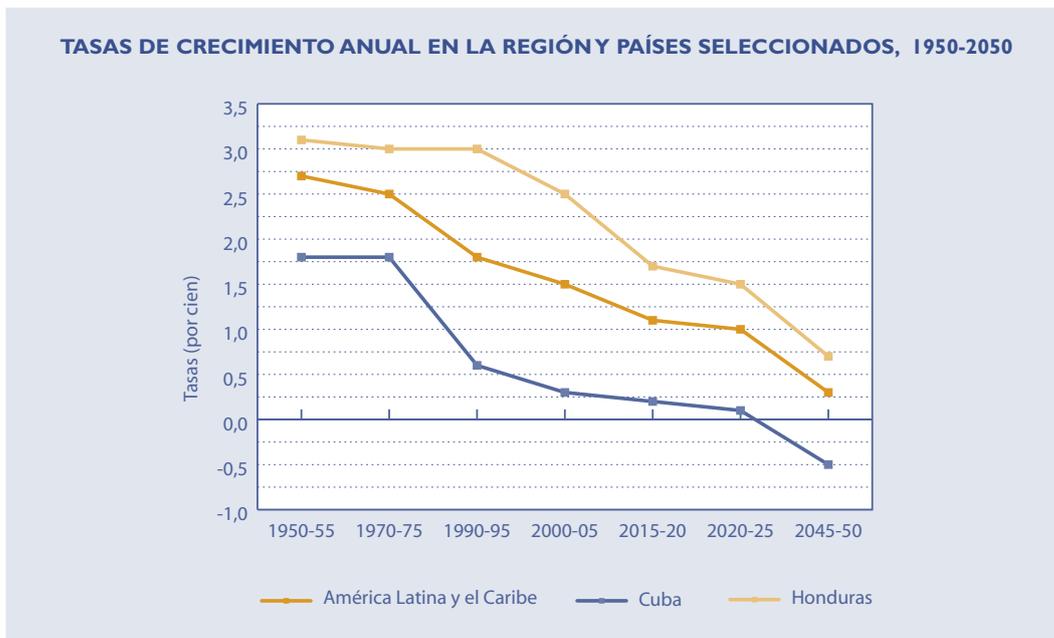
Fuente: Naciones Unidas *World Population Prospects: The 2002 Revision*, Nueva York, 2003; y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "América Latina y el Caribe: estimaciones y proyecciones de población 1950-2050", *Boletín demográfico*, N° 73 (LC/G.2225-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, enero del 2004. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/S.03.II.G.209.

Gráfico 5



Fuente: Naciones Unidas *World Population Prospects: The 2002 Revision*, Nueva York, 2003; y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “América Latina y el Caribe: estimaciones y proyecciones de población, 1950-2050”, *Boletín demográfico*, N° 73 (LC/G.2225-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, enero del 2004. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/S.03.II.G.209.

Gráfico 6



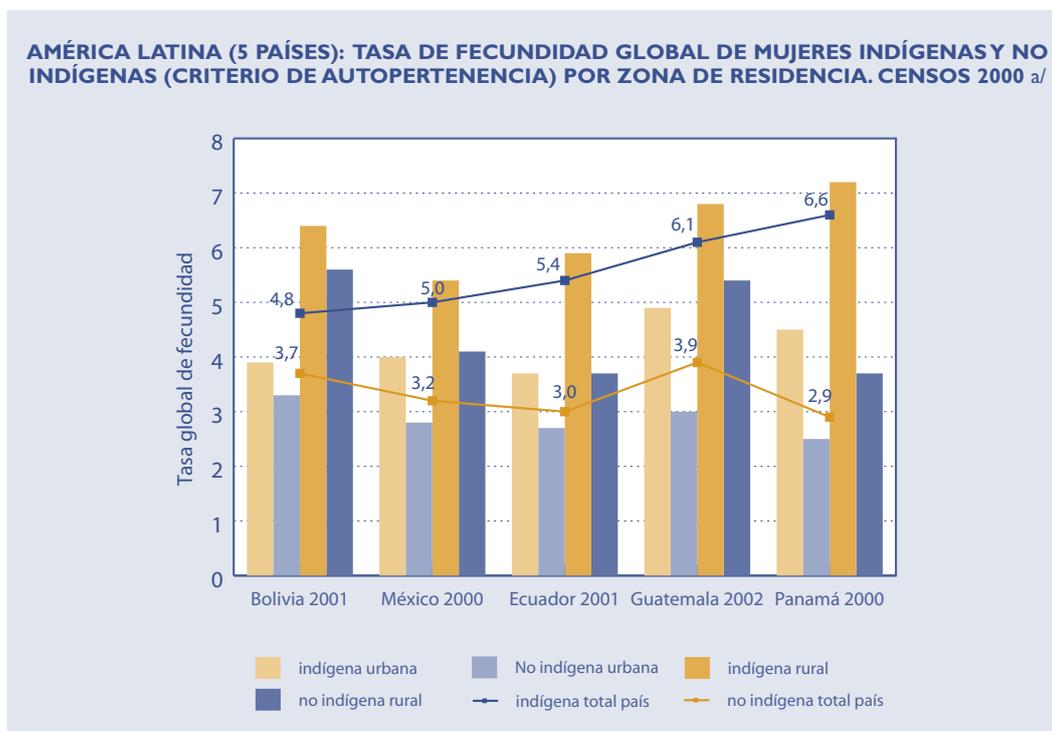
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estimaciones y proyecciones de población vigentes.

decenios y la velocidad de cambio de este segmento de la población será entre tres y cinco veces mayor que el de su conjunto en los períodos 2000-2025 y 2025-2050, respectivamente. Hacia el 2050 uno de cada cuatro latinoamericanos será un adulto mayor.

TENDENCIAS Y CAMBIOS DE LA FECUNDIDAD

La disminución generalizada de la fecundidad es uno de los aspectos más destacados de la evolución de la población en nuestra región, aunque aún hay países y grupos sociales en los que sigue siendo alta. Los índices pertinentes fluctúan entre porcentajes inferiores al nivel de reemplazo en Cuba y otros Estados insulares del Caribe, hasta índices superiores a los cuatro hijos en Guatemala y Haití. Estas diferencias responden al mayor o menor uso de anticonceptivos y revelan una demanda insatisfecha de planificación familiar. Las disparidades entre países se verifican también en su interior, pues las tasas de fecundidad son sistemáticamente más elevadas entre los grupos pobres y los pueblos indígenas, especialmente en los países con mayor proporción de población rural. En muchos de estos casos, una tasa de fecundidad relativamente alta dificulta la superación de la pobreza y constituye una expresión más de la falta de equidad social. Hay países donde las disparidades son enormes, ya que la tasa de fecundidad de los grupos más postergados equivale al triple de la tasa que presentan los grupos de mayores ingresos. La elevada fecundidad también sigue siendo un rasgo distintivo de muchas poblaciones indígenas, independientemente de la etapa del proceso de transición demográfica en que se encuentra el respectivo país (véase el gráfico 7).

Gráfico 7



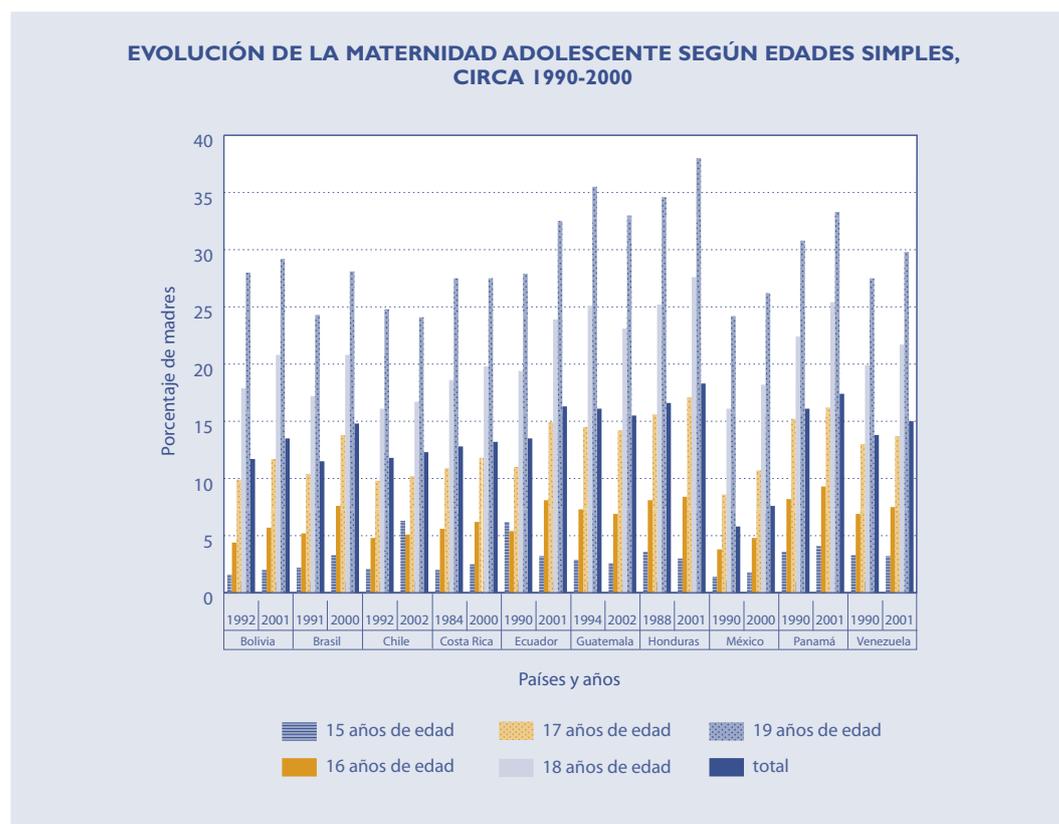
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Proyecto sobre población indígena y afrodescendiente a partir de datos provenientes de la ronda de censos del 2000.
a/ Corresponde a mujeres indígenas y no indígenas, definidas de acuerdo a criterio de pertenencia.

Las tasas de fecundidad se redujeron considerablemente en todos los grupos de edad, salvo entre las adolescentes menores de 20 años y sobre todo las menores de 18 años (véase el gráfico 8). En la actualidad, entre un 25% y un 35% de las mujeres, según el país, tiene su primer hijo antes de cumplir los 20 años, lo que puede menoscabar los efectos positivos del descenso de la fecundidad. Aunque en algunos casos el embarazo parece ser una opción deliberada para conseguir reconocimiento social o bien responde a un patrón cultural bien definido, sus efectos negativos están ampliamente documentados y suelen acentuarse cuando la maternidad se da al margen de una unión estable, lo que en muchos países es un fenómeno cada vez más generalizado. Además, en todos los países la fecundidad es mucho más alta en los grupos postergados de la sociedad, lo que acentúa la necesidad de políticas públicas en este plano.

TENDENCIAS Y CAMBIOS DE LA MORTALIDAD

El descenso de las tasas de mortalidad en la región inició el proceso de transición demográfica en la primera mitad del siglo XX. A partir de 1950 el promedio de vida registró un aumento sostenido y se calcula que a comienzos del presente siglo es de 71,9 años, lo que representa un alza de 20 años. En este ámbito, como en muchos otros, el panorama regional no es homogéneo: en Martinica, Guadalupe y Costa Rica la edad

Gráfico 8

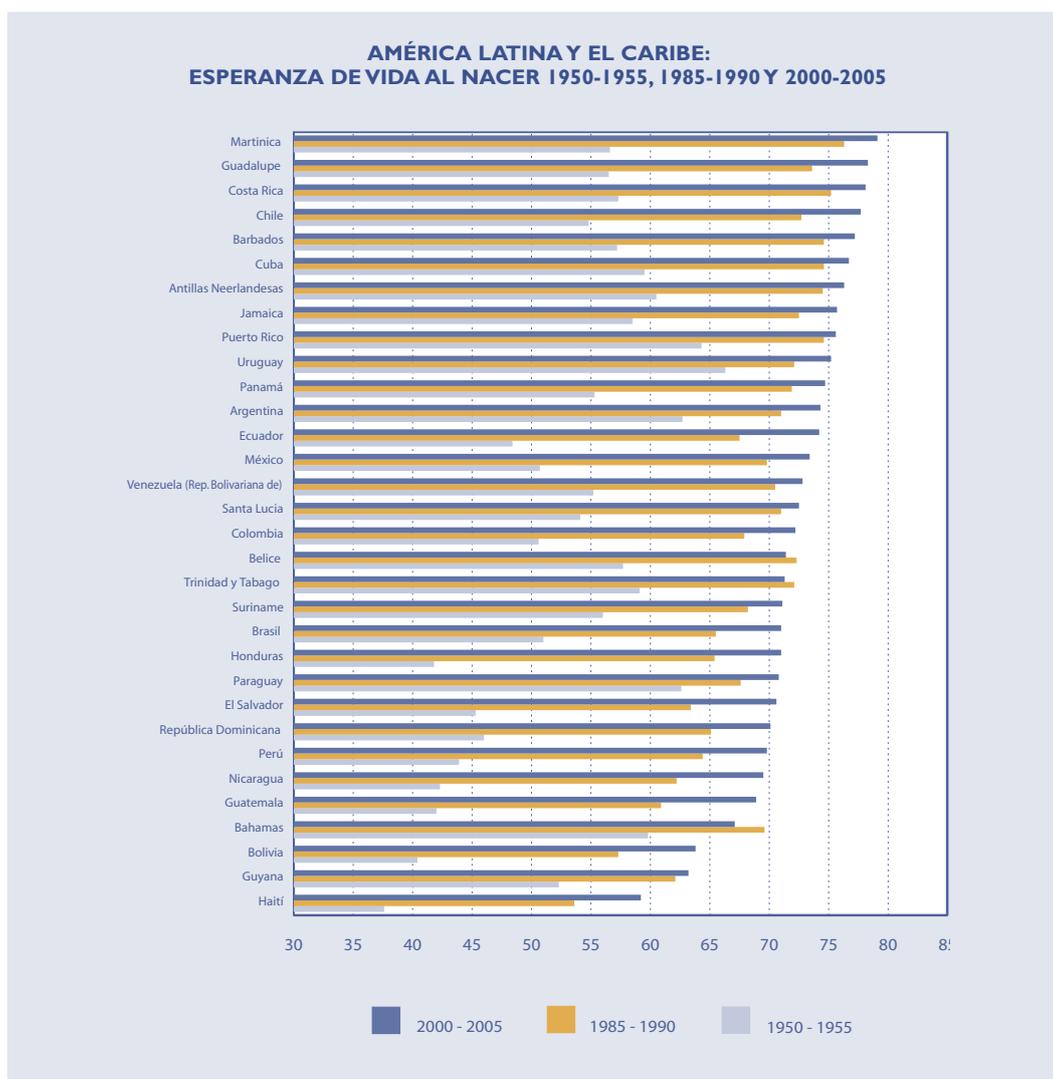


Fuente: Procesamiento especial de bases de microdatos censales y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Panorama social de América Latina, edición 2002-2003* (LC/G.2209-P/E), Santiago de Chile, 2003. Población de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.185.

promedio supera los 78 años y en el otro extremo se encuentra Haití, con una edad promedio de 59,2 años (véase el gráfico 9). Paralelamente, la sobremortalidad masculina ha aumentado, lo que obedece al incremento de las defunciones atribuibles a enfermedades cardiovasculares, causas externas (accidentes y traumatismos), hechos violentos y tumores malignos. La diferencia en la esperanza de vida al nacer entre ambos sexos pasó de una ventaja de las mujeres equivalente a 3,5 años a mitad del siglo XX a cerca de 6,5 a fines de este.

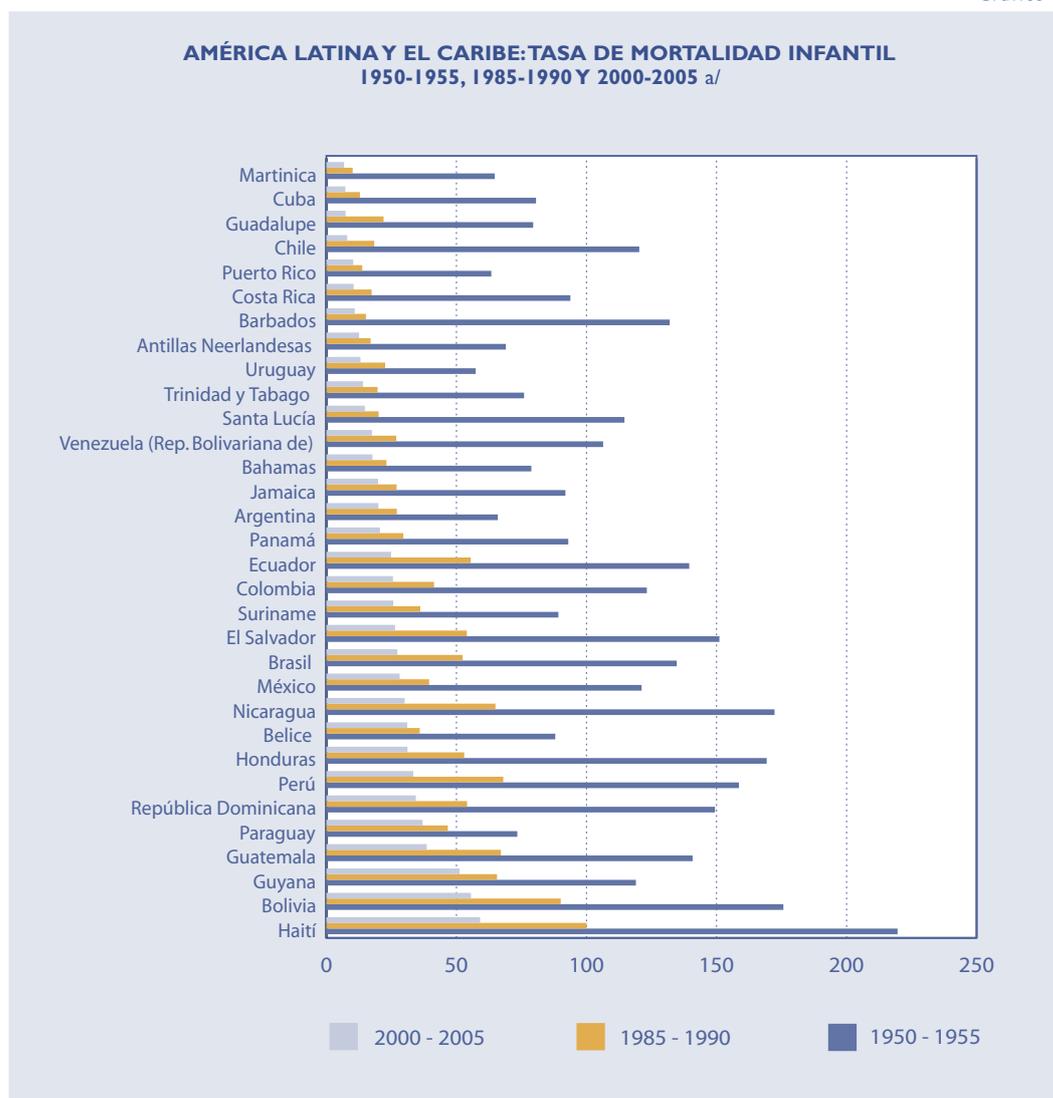
El aumento de la esperanza de vida al nacer es un logro indiscutible en la región, que en un comienzo respondió fundamentalmente al descenso de la mortalidad en la infancia. Esta última se ha reducido de un valor promedio de 128 muertes de menores de un año por cada mil nacidos vivos a 28 en el período comprendido entre 1950-1955 y 2000-2005. El descenso de la tasa de mortalidad infantil tiene algunas peculiaridades.

Gráfico 9



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, junio del 2004.

Gráfico 10



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, junio del 2004; y Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision*, vol. I (ST/ESA/SER.A/198), Nueva York, 2003.

a/ Defunciones de menores de un año por mil nacidos vivos.

En primer lugar, se ha dado en todos los países y ocurrió con relativa independencia de la situación social y económica; en segundo término, la mortalidad infantil sigue reflejando desigualdades sociales, pues persisten importantes diferencias entre países y, sobre todo, entre distintas zonas de un mismo país (véase el gráfico 10); en este contexto, los menos favorecidos son los niños de las áreas rurales y los hijos de madres con menos instrucción. Distinta es la situación de los grupos indígenas, cuya tasa de mortalidad infantil es siempre superior a la del resto de la población, lo que obedece a la postergación que han sufrido, ya que han sido objeto de menos medidas de control de la mortalidad (véase el gráfico 11).

A pesar de los grandes avances en la reducción de la mortalidad infantil, en la mayoría de los países de la región se debería mantener e incluso aumentar el ritmo de

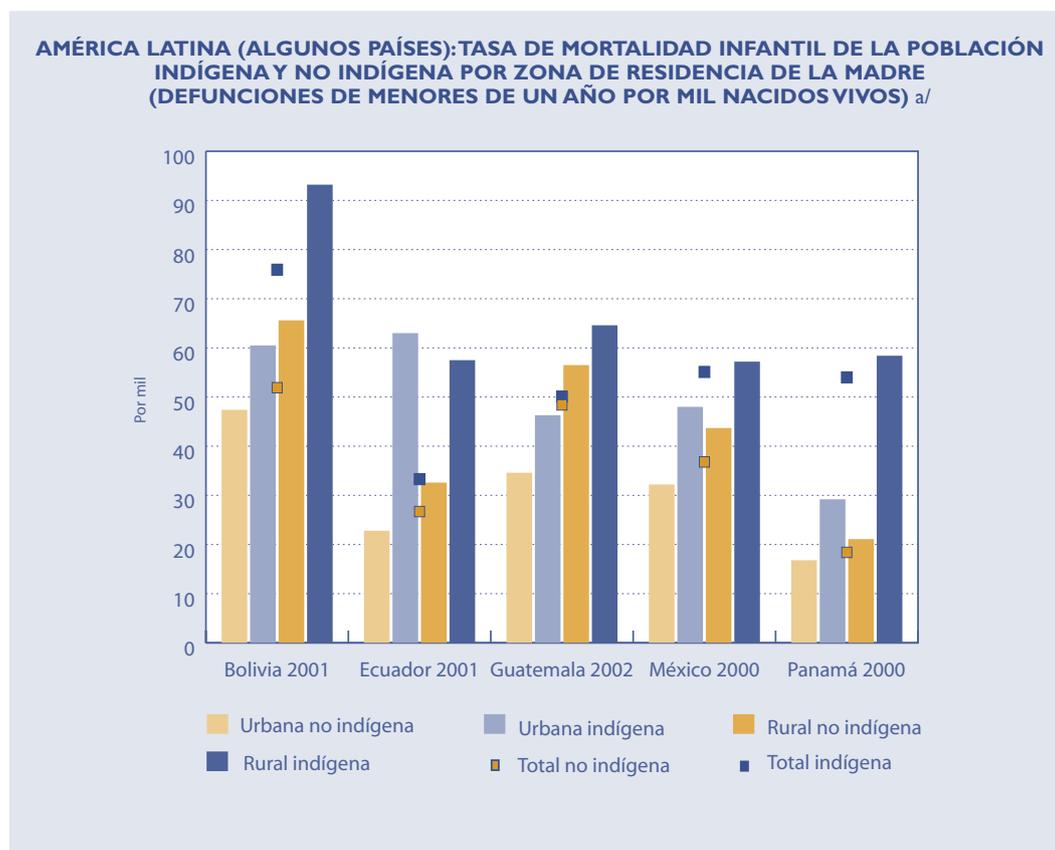
descenso de la mortalidad de menores de cinco años para alcanzar la meta de desarrollo del Milenio, que plantea reducir en dos tercios el nivel registrado en 1990.

Paralelamente a la transición demográfica, se observa un proceso de transición epidemiológica, signada por un cambio del perfil de la morbilidad y la mortalidad por causas, y de la distribución de las defunciones por edad. Esta transición se caracteriza por la disminución porcentual de las muertes por enfermedades transmisibles (infecciosas, parasitarias y del aparato respiratorio) y en el período perinatal, lo que ha dado paso a un predominio relativo de las defunciones por enfermedades crónicas y degenerativas (del aparato circulatorio y tumores malignos) y de las provocadas por causas externas (violencia, accidentes y traumatismos).

LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO

La migración internacional es uno de los rasgos distintivos de la inserción de los países de la región en la escena mundial; se trata, esencialmente, del predominio de una intensa emigración, que abarca a todos los países y obedece en gran medida a factores internos y externos. Entre las características de la emigración destaca la falta de redes de

Gráfico 11



Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Proyecto sobre población indígena y afrodescendiente a partir de los censos; y Censos de Población de Guatemala de 2002 y México 2000.

a/ Corresponde a niños indígenas, definidos de acuerdo a criterio de pertenencia, por zona de residencia de la madre.

apoyo que faciliten la vinculación de los migrantes con sus países de origen, mientras que entre sus consecuencias negativas se observa la pérdida de capital humano. Asimismo, el impacto macroeconómico y social de las remesas se ha dejado sentir con fuerza en los últimos cinco años pues, si bien siempre existieron, en la actualidad alcanzan un volumen varias veces mayor que otras fuentes de ingreso de divisas y contribuyen decisivamente al sustento económico de un número creciente de hogares en varios países.

Los múltiples riesgos para los migrantes de la región constituyen otra dimensión relevante de la migración contemporánea; aunque los factores que subyacen a estas situaciones son diversos, la irregularidad y la desprotección que sufren muchos migrantes obedecen a que los gobiernos no aceptan principios comunes para la gobernabilidad migratoria, por lo cual el fenómeno se sigue manejando en forma unilateral, como lo indica la selectividad de las políticas de admisión e integración de los inmigrantes que rigen en la mayoría de los países desarrollados.

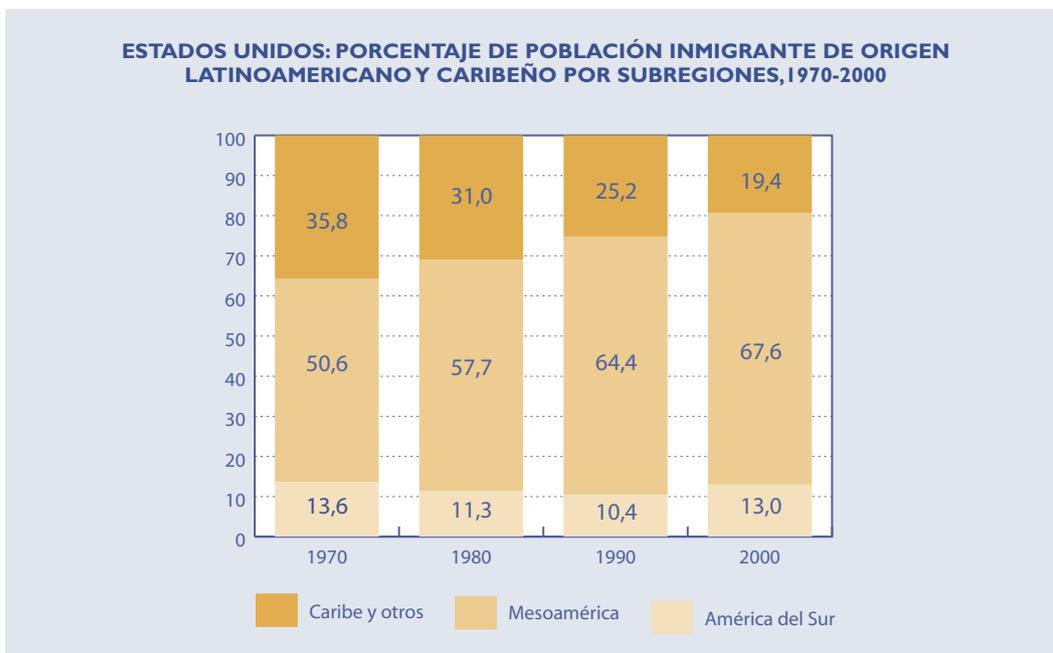
Si bien persisten los movimientos regionales, sobre todo fronterizos, y se registra una merma notoria de la inmigración ultramarina, la región ha ampliado paulatinamente los destinos de la emigración al exterior, que incorpora nuevos actores, en especial sectores de mediana y elevada calificación, con una significativa participación de las mujeres. Más de 20 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país de nacimiento, cifra inédita en la historia, que se alcanzó merced al gran aumento experimentado durante el decenio de 1990, en particular de la migración a los Estados Unidos, aunque también irrumpieron nuevos flujos, con una expansión sin precedentes, dirigidos a Europa y especialmente a España.

Respecto de la migración internacional latinoamericana y caribeña, Argentina, Costa Rica y Venezuela siguen siendo los países que registran el mayor número de inmigrantes provenientes de países de la propia región. En los Estados Unidos se estima que en el 2000 había 15 millones de inmigrantes de la región, lo cual equivale a poco más de la mitad del número total de inmigrantes recibidos por el país. Esa inmigración está compuesta en su mayoría por mexicanos y centroamericanos, representados principalmente por hombres (véanse los gráficos 12 y 13). La emigración a otros destinos asciende a un total cercano a los 3 millones de personas en el año 2000 y en algunos países se acrecentó, con el retorno de antiguos inmigrantes de ultramar y el de los que obtuvieron el reconocimiento de su ciudadanía en el país de origen de sus parientes y antepasados. En estos flujos se advierte un fuerte predominio de mujeres, lo que apunta a un fenómeno emergente.

El significativo aumento de la participación de las mujeres está acompañado de transformaciones cualitativas de los flujos migratorios, con especificidades que van desde las motivaciones laborales hasta razones de carácter familiar y otras más individuales. A su vez, el fenómeno de las remesas se está convirtiendo en una de las dimensiones objetivas más palpables de la migración internacional de latinoamericanos y caribeños. Hacia el año 2003 se estiman en más de 35.000 millones de dólares, siendo la región con la primera fracción del total de remesas en el mundo. En algunos países equivalen a más del 10% del PIB y más del 30% de las exportaciones. Los altos costos de transferencia de los fondos han sido una de las preocupaciones fundamentales para dar más transparencia al mercado de las remesas.

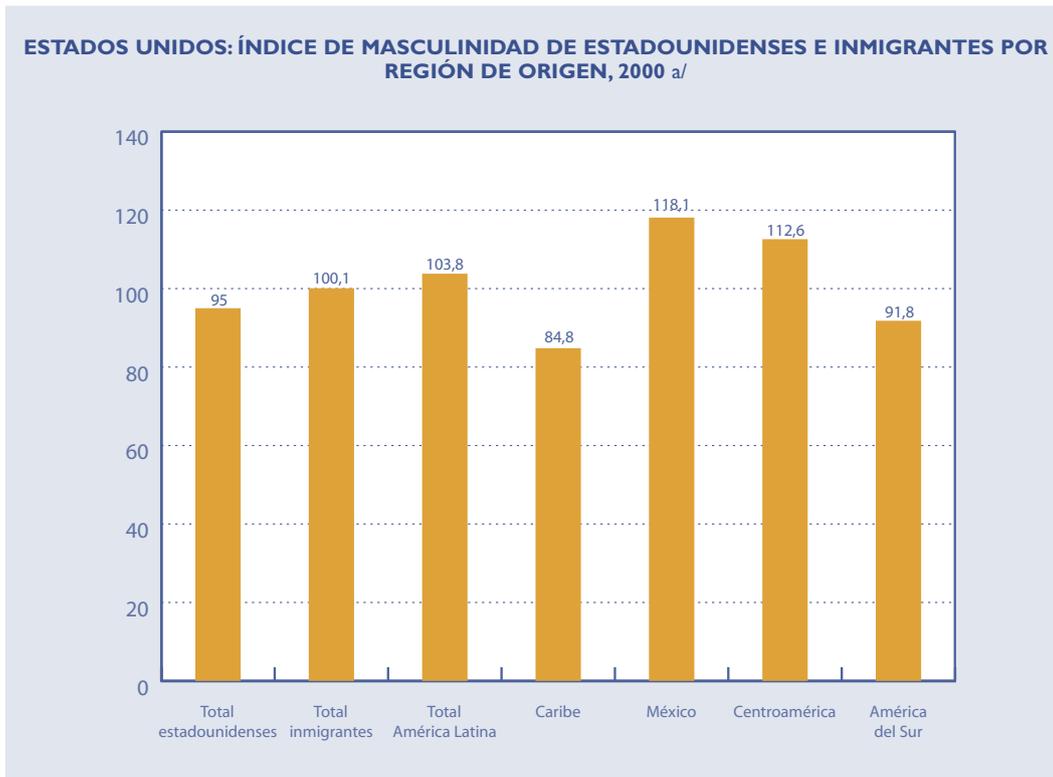
A lo anterior se agrega que casi dos tercios de los emigrantes envían remesas a sus familias, lo que representa para ellos menos de un 10% de sus ingresos, pero una proporción

Gráfico 12



Fuente: Miguel Villa y Jorge Martínez Pizarro, “La migración internacional de latinoamericanos y caribeños en las Américas”, serie *Seminarios y conferencias*, N° 33 (LC/L.2012-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2003. Para el año 2000 la información corresponde a la encuesta continua de población (*Current Population Survey*) del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Gráfico 13



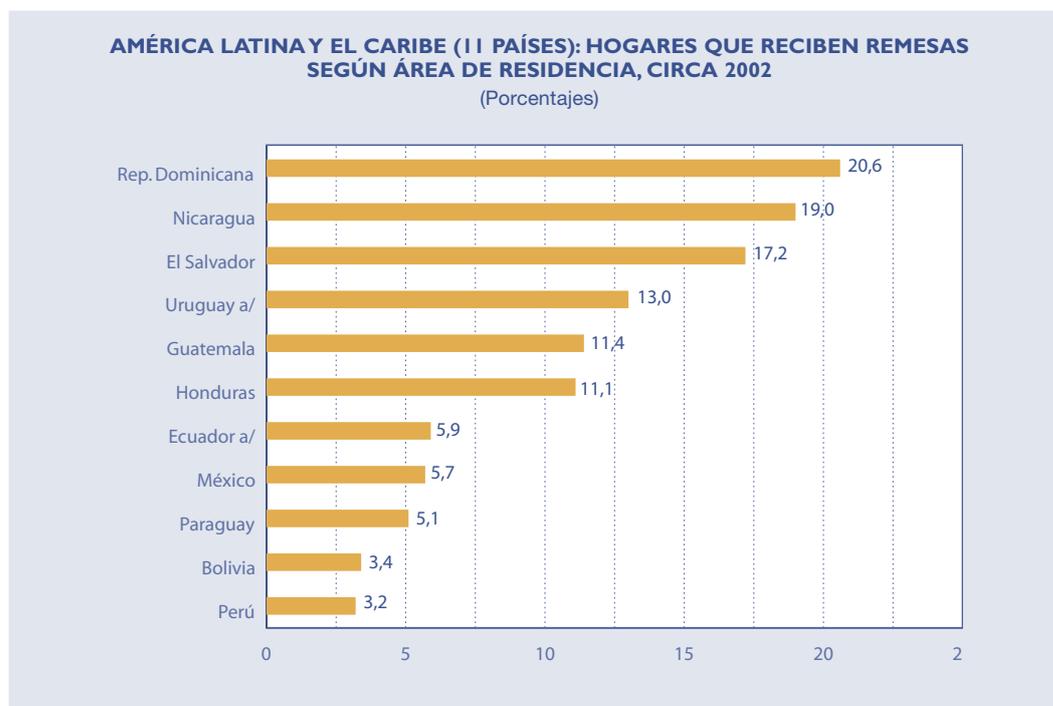
Fuente: A. Schmidley, “Profile of the foreign-born population in the United States: 2000”, *Current Population Reports*, N° P23-206, Washington, D.C., U.S. Census Bureau, 2001, según datos de la encuesta continua de población de 2000 (*Current Population Survey*).

a/ Índice de masculinidad = porcentaje de hombres por cada cien mujeres.

mucho mayor para los hogares receptores. En este sentido, los porcentajes de hogares que reciben remesas fluctúan entre un 3% (Bolivia, Perú) y cerca de un 20% (Nicaragua y República Dominicana) y también varían según el área de residencia dentro de cada país (véase el gráfico 14).

Junto con las remesas, la pérdida de capital humano y la desprotección de los migrantes en cuanto a la defensa de sus derechos humanos son preocupaciones insoslayables para la gobernabilidad migratoria. El principal desafío para los países de América Latina y el Caribe es aprovechar para su propio desarrollo las enormes potencialidades de la migración, para lo cual sería necesario establecer férreas demandas a los países desarrollados y comprometerse en la cuestión de la gobernabilidad migratoria, a fin de favorecer mayores cuotas de liberalización de la movilidad, mejorar la integración y la protección de los inmigrantes, aumentar el flujo e impacto de las remesas, facilitar la circulación de personal calificado y propiciar una menor asimetría en el orden internacional.

Gráfico 14



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Total urbano.

MIGRACIÓN INTERNA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, de cuya población un 75% reside en localidades urbanas, proporción que varía entre un 90% y menos de un 50%, según el país. Los sistemas urbanos de la región se estructuran en torno a ciudades de gran tamaño; de hecho, una de cada tres personas reside en una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Por su parte, la población rural se ha

mantenido constante, en torno a los 125 millones de habitantes, desde hace un par de décadas. La migración interna es moderada y mantiene un predominio interurbano, si bien presenta características de creciente complejidad. Los migrantes siguen un patrón de selectividad según la edad y la educación (los jóvenes y las personas con mayor educación tienden a migrar más) y se advierte un predominio de las mujeres, característica distintiva de América Latina y el Caribe.

Aunque los sistemas de ciudades de la región se siguen destacando por un alto grado de concentración de la población —en la mayoría de los países, la ciudad principal congrega a más de un cuarto de la población nacional y más de un tercio de la población urbana—, la migración interna ya no aumenta la población de las ciudades grandes. En efecto, en las últimas dos décadas varias áreas metropolitanas, en particular las más grandes de la región, han tenido una emigración neta. En contrapartida, se observa un renovado dinamismo y atractivo de numerosas ciudades intermedias y una reactivación económica en territorios especializados en producción primaria para la exportación. Con todo, algunas de estas regiones dinámicas en materia de inversión ya no atraen a potenciales migrantes, porque los trabajos que se crean son insuficientes o estacionales. Existe consenso en que, salvo circunstancias excepcionales, los cambios de residencia son decisiones libres y soberanas de las personas; el Estado debe, entonces, evitar las salidas forzosas, promover la información sobre lugares de destino y propiciar un entorno libre de discriminación en esos lugares. Las fuerzas del mercado son las más poderosas para incentivar la localización y el desplazamiento de la población; sin embargo, es preciso contar con políticas y programas públicos destinados a influir en el patrón de asentamiento territorial de la población, en particular para asegurar el respeto de los derechos ciudadanos en todo el territorio de los países, promover formas de localización favorables a la preservación del medio ambiente e impulsar un aprovechamiento integral de las oportunidades productivas derivadas de la geografía de cada país.

SITUACIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD EN AMÉRICA LATINA

La creciente preocupación por la situación de los y las jóvenes obedece al hecho de que los mecanismos que vinculan el tránsito etario con la integración social están cada vez menos definidos. Dicho de otro modo, los canales de tránsito de la educación al empleo, de la familia de origen a la constitución de un nuevo hogar y de la dependencia a la independencia material se vuelven difusos y afectan de maneras cada vez más diversas a los distintos grupos de jóvenes. No es casual que la conflictividad o apatía política, la deserción escolar, la postergación de la procreación, la crisis normativa o las conductas de riesgo pasen a ser parte del lenguaje que la sociedad usa para referirse a la juventud.

Desde la perspectiva del tipo de desafíos y conflictos que enfrentan los jóvenes, cabe destacar una serie de tensiones y paradojas que hoy les toca vivir. Mientras gozan de más acceso a la educación y a la información que los adultos, los jóvenes cuentan, en contraste, con menores oportunidades de empleo y de acceso al poder. Si bien abrigan más expectativas de autonomía que las generaciones anteriores, por efecto de la secularización de los valores y el cuestionamiento de las fuentes de autoridad, no tienen los canales productivos e institucionales para plasmarlas en el plano material. Cuentan con mejores sistemas de salud, pero carecen de servicios que se adecuen

específicamente a su morbilidad y tengan en cuenta las conductas de riesgo y la violencia social como factores clave. Aunque son vistos y exigidos como capital humano que debe formarse para el futuro, la sociedad de consumo les reclama el goce presente y la crisis de la sociedad del empleo les enturbia cada vez más el porvenir. Además, si por un lado tienen la ventaja de registrar hoy tasas de fecundidad más bajas que las de las generaciones precedentes, por el otro persiste el problema de la fecundidad adolescente, lo que constituye un mecanismo de reproducción intergeneracional de la pobreza y la exclusión.

No puede tomarse a la juventud como un grupo homogéneo, dado que en casi todos los indicadores sociales presenta una alta variación según el subgrupo etario, el sexo, la localización geográfica, la adscripción étnica y el estrato socioeconómico. Con todo, es común a los jóvenes el hecho de que viven un proceso de cambio en el que se suceden fases diferenciales en cuanto a las principales actividades que realizan (estudio o trabajo), su grado de independencia y autonomía (económica y afectiva) y el papel que desempeñan en la estructura familiar (hijo, jefe de hogar o cónyuge). Del mismo modo, no puede comprenderse el “ser joven” sin abordar dos dimensiones centrales de su condición de sujeto: la referente a las formas de apropiación de los objetos culturales, que marcan fuertes diferencias con el modo de aproximación de los adultos, y, las características que definen su participación social y el ejercicio ciudadano, aspectos clave de la inclusión de los jóvenes en la sociedad.

Respecto de las tendencias sociodemográficas de los jóvenes, cabe destacar que América Latina y el Caribe atraviesa actualmente su segunda fase de transición demográfica, en la que disminuye el ritmo de crecimiento de la población joven y la proporción de los jóvenes en la población total, dados el descenso de la fecundidad y el aumento de la expectativa de vida. Algunos países están prontos a ingresar a una tercera etapa, en la que se produce un descenso de la cantidad de jóvenes y se acentúa la caída del porcentaje correspondiente, cifra que a mediados del siglo XXI llegaría aproximadamente al 25%. Este “bono demográfico” plantea desafíos y también oportunidades para las políticas orientadas a los jóvenes.

Cuadro 2

¿CON QUIÉN VIVEN LOS JÓVENES? (Porcentajes)				
	Chile	Colombia	Bolivia	México
Familia de origen	87,7	84,0	68,8	80,0
Familia propia	12,3	13,0	24,3	20,0
Sin familia	...	3,0	6,9	...

Fuente: Encuestas nacionales de juventud.

En cuanto a la situación familiar, se observa el síntoma de la autonomía postergada, vale decir, la prolongación de la permanencia en la familia de origen, tanto por el aumento del número de años de educación formal como por las dificultades de los jóvenes para acceder a empleos estables. Esto explica el hecho de que los jóvenes que han constituido su propia familia representan una proporción relativamente baja del total (véase el cuadro 2). Si bien se ha producido un inicio más temprano de las relaciones

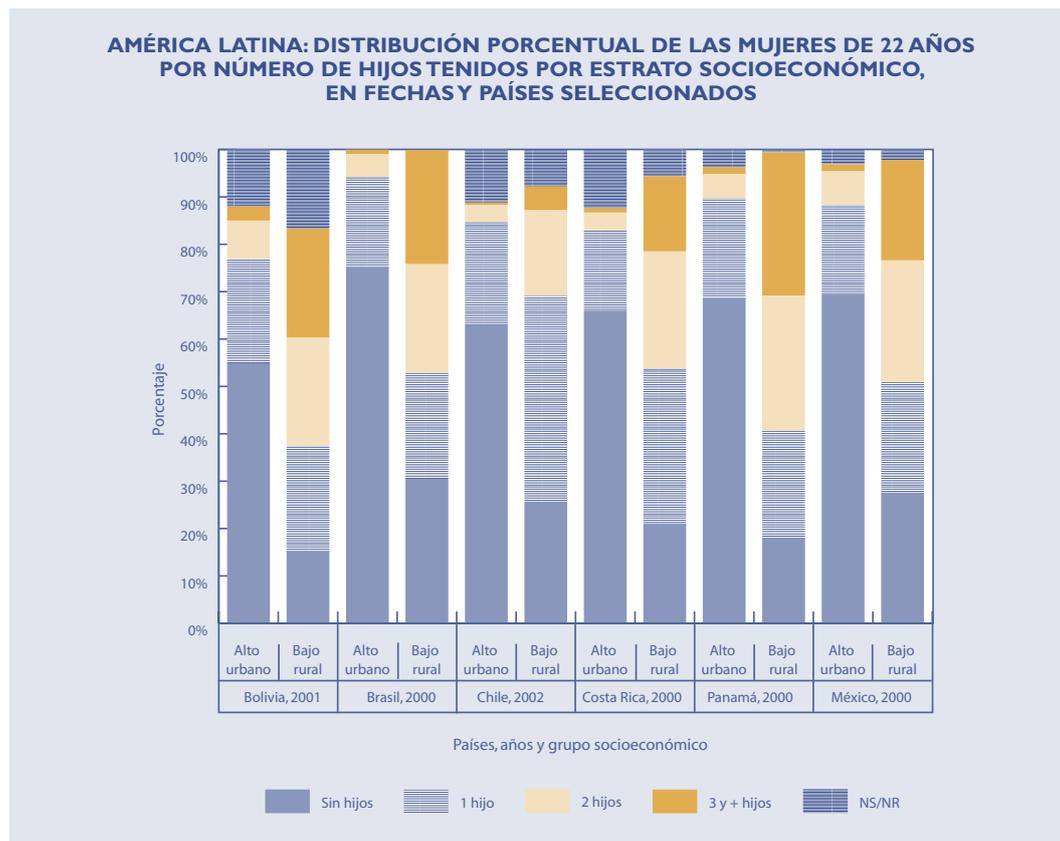
sexuales, se advierte una creciente postergación de la edad del casamiento, reflejada en el aumento de la proporción de solteros y solteras al finalizar la juventud en todos los países latinoamericanos.

Si bien alrededor de un sexto de los jóvenes han constituido sus propios hogares, entre ellos el 73% de los jefes hombres tienen familias nucleares, mientras en el caso de las mujeres esa cifra alcanza a algo más de la mitad (52%), lo que se traduce en mayores situaciones de vulnerabilidad para las jóvenes.

En el conjunto de América Latina, mientras a fines de la década de 1980 las mujeres tenían 2,2 hijos nacidos vivos al cumplir los 30 años, hoy el promedio ha bajado a 1,7 hijos nacidos vivos a la misma edad y las diferencias por países siguen siendo marcadas. Pese a estos descensos, que permiten mayores oportunidades de educación y trabajo, las jóvenes latinoamericanas siguen iniciando su reproducción a edades relativamente tempranas y más bien reducen el promedio total de hijos en sus trayectorias reproductivas. Gravísima es la alta y creciente incidencia de la fecundidad adolescente, sobre todo en las jóvenes de menores ingresos.

Además de lo anterior, hay poderosos motivos para preocuparse por la fecundidad adolescente, dado que su intensidad es mucho mayor en grupos pobres y con baja educación, reproduce la pobreza y la exclusión, la precariedad familiar del nacimiento y la crianza, y conlleva un mayor riesgo para la madre y para los hijos (véase el gráfico 15).

Gráfico 15



Fuente: Procesamiento especial de microdatos censales.

En materia de salud, la probabilidad de morir de los jóvenes latinoamericanos y caribeños a fines de la década de 1990 revelaba una reducción notable en países como Bolivia, Colombia, Perú y algunos centroamericanos, respecto del comienzo de la década de 1980. Actualmente la tasa de mortalidad de los jóvenes de 15 a 24 años, calculada en 134 por cada 100.000, es en promedio poco más de la mitad que la de los adultos de 25 a 44 años, el grupo de edad consecutivo que, en conjunto, tiene mayor actividad laboral.

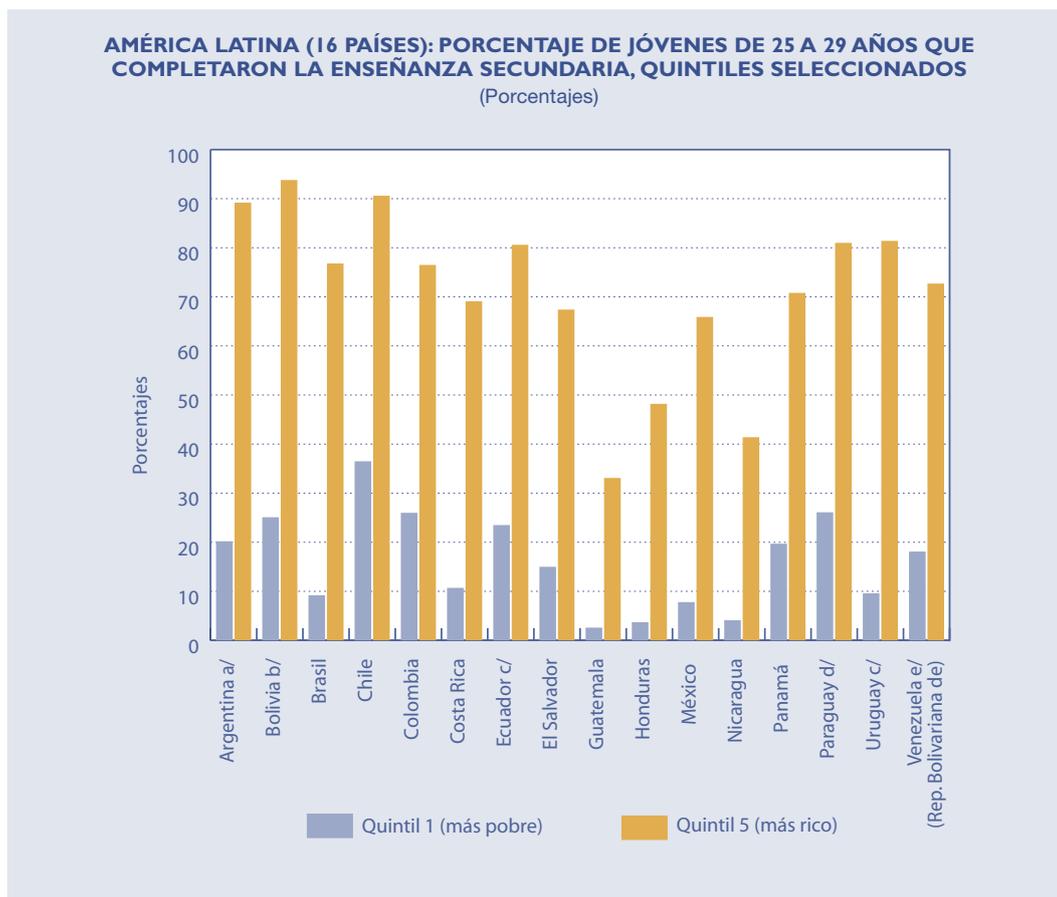
Las causas externas constituyen sin lugar a dudas el primer motivo de muerte, por importancia numérica y proyectiva, entre los jóvenes de ambos sexos de la región, aunque con mayor importancia relativa en los varones, ya que de 100 fallecimientos de hombres, 77 son atribuibles a causas violentas, en tanto, entre las mujeres, 38 de cada 100 defunciones son resultado de estas causas y 62 de causas mórbidas, si bien no existe un perfil único de mortalidad por causas en la región.

En materia de educación de los jóvenes, se observan nítidos avances respecto de las generaciones precedentes en todos los niveles de escolaridad. Entre los jóvenes de 15 a 29 años se advierte un mejor rendimiento de las mujeres que de los hombres en los niveles primario y secundario, tendencia que no se manifiesta en las personas de mayor edad. En la educación superior, las desigualdades de acceso por sexo a favor de los hombres tienden a disminuir radicalmente. Persisten brechas profundas de calidad y logros en educación cuando se consideran los distintos niveles socioeconómicos (véase el gráfico 16) y la localización espacial, en perjuicio de los jóvenes más pobres y los de las zonas rurales.

Son muchos los desafíos que se plantean en la educación, sobre todo si se trata de formar jóvenes para el empleo productivo, la ciudadanía activa y la participación en la sociedad del conocimiento. Es necesario superar los problemas de la excesiva repetición y deserción escolares, que impiden la consecución de los logros deseables; mitigar la desigualdad de oportunidades y logros educacionales para que no persistan las desigualdades entre una generación y la siguiente; superar problemas de calidad que redundan en bajos niveles de aprendizaje efectivos, lo que limita las trayectorias laborales y vitales de los jóvenes y restringe el capital humano de la sociedad; colmar vacíos en la formación para la sociedad del conocimiento y las democracias contemporáneas, y enfrentar las inadecuaciones de la educación como preparación para afrontar los nuevos desafíos en el mundo del trabajo.

En lo que respecta al empleo, la tasa de desocupación de los jóvenes duplica con creces la de los adultos (15,7% frente a 6,7% a inicios de la presente década) y la brecha entre jóvenes y adultos es similar para hombres y mujeres. Asimismo, la situación laboral de los jóvenes latinoamericanos sufre un deterioro que se refleja en el aumento del desempleo, su creciente concentración en los sectores de baja productividad y la caída de los ingresos laborales. Este deterioro obedece a tendencias generales en los mercados de trabajo de la región, sobre todo a partir de fines de los años noventa. Los jóvenes se beneficiaron de la expansión del empleo en el sector terciario, lo que abrió buenas oportunidades, sobre todo para las mujeres, pero resultaron negativamente afectados por la contracción relativa del empleo en la industria manufacturera, donde antes tenían una participación importante.

Entre los jóvenes, la tasa de desempleo de las mujeres supera a la de los hombres en casi un 50%, sin que se observen mayores cambios en el período reciente. Por último,



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Gran Buenos Aires.

b/ Ocho ciudades principales y El Alto.

c/ Total urbano.

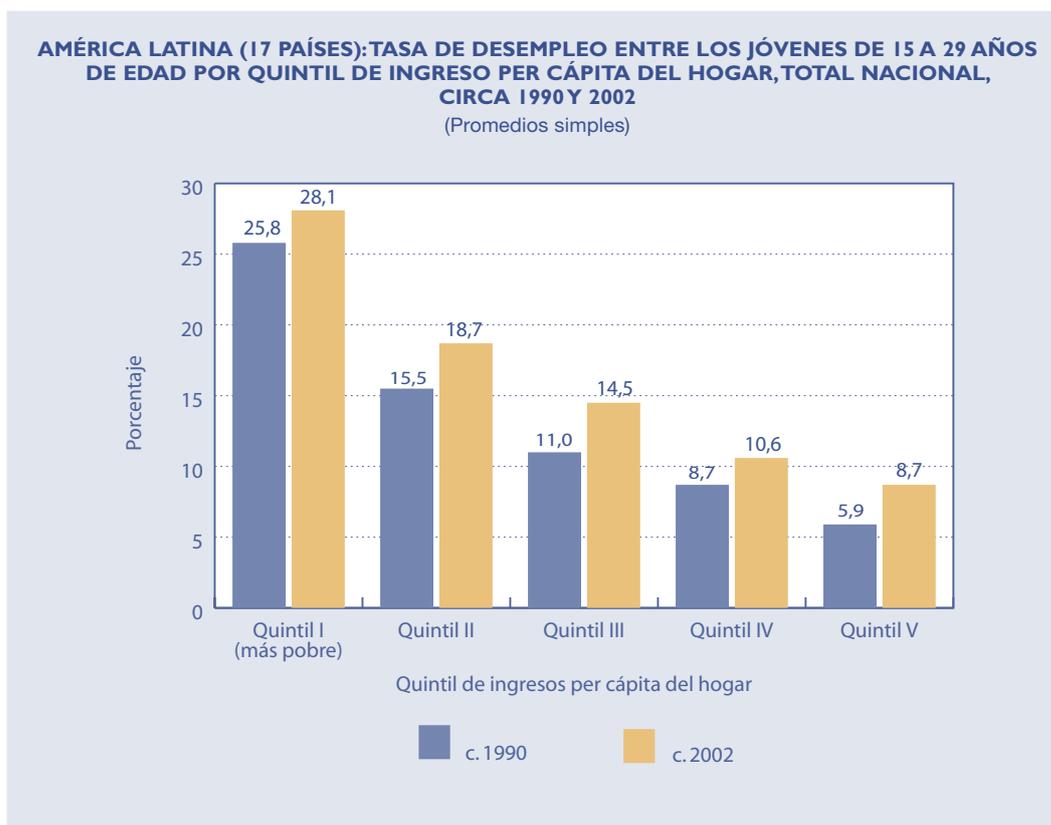
d/ Asunción y Departamento Central.

e/ Total nacional.

el desempleo que afecta a los jóvenes se encuentra claramente estratificado por niveles socioeconómicos (véase el gráfico 17).

La situación de pobreza de la juventud indica que, en 18 países latinoamericanos resultó afectado el 41% de los jóvenes en el año 2002, equivalente a alrededor de 58 millones, de los cuales 21,2 millones sufrían de pobreza extrema (véase el cuadro 3). Esto refleja una disminución de dos puntos porcentuales en relación con 1990. Sin embargo, en términos absolutos, en el 2002 había 7,6 millones más de jóvenes pobres que en 1990 y 800.000 más que sufrían de pobreza extrema. Hay menor incidencia de la pobreza entre los jóvenes que en la población total (salvo en Chile y Uruguay), pero disminuye a un ritmo más lento. En cuanto al corte urbano-rural, en el año 2002 la pobreza de los jóvenes rurales (promedio ponderado) alcanzaba el 54,8%, frente al 33,4% de los jóvenes urbanos. En el caso de la indigencia, estos índices eran del 27,9% y 8,9% respectivamente.

Gráfico 17



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

Cuadro 3

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): INCIDENCIAS DE POBREZA E INDIGENCIA, EN LOS JÓVENES Y EN LA POBLACIÓN TOTAL, CIRCA 1990 Y 2002
(Porcentajes)

	1990	2002	Variación
Pobreza			
Jóvenes	43 (50,4)	41 (58,0)	-4,7 (15,1)
Población total	48 (200,0)	44 (221,0)	-8,3 (10,5)
Indigencia			
Jóvenes	17 (20,4)	15 (21,2)	-11,8 (3,9)
Población total	23 (93,0)	19 (97,0)	-21,7 (4,3)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), procesamiento especial de datos provenientes de las encuestas de hogares, circa 1990 y 2002. Entre paréntesis se indica el número de personas en millones.

El análisis de los “consumos culturales”, para los cuales el tiempo libre es decisivo, permite penetrar en la cotidianidad e identidad de los jóvenes. Ver televisión, escuchar música, “chatear”, leer, ir al cine, bailar, hacer deportes y operar videojuegos son

las prácticas más frecuentes de consumo cultural. A su vez, la centralidad del consumo de medios está indicando que el hogar ha pasado a representar un espacio de intenso consumo simbólico y creciente convergencia de tecnologías de comunicación, con una diversificación de medios que incluye el consumo de TV por cable, videos, DVD, Internet y otros dispositivos. El vínculo de los jóvenes con las nuevas tecnologías de la comunicación marca una diferencia cognitiva y perceptiva con respecto al mundo de los adultos. Sin embargo, también en este ámbito aparecen las diferencias socioeconómicas: en los estratos de mayores ingresos, el acceso a la red se da principalmente a través de la propiedad del computador en el hogar, mientras que en los sectores pobres el acceso, mucho menos frecuente, se da principalmente en locales públicos.

En cuanto a la participación de la juventud, destacan un conjunto de cambios sustanciales ocurridos en la última década en la región, la mayoría de los cuales se manifiestan como tendencias, con diverso grado de importancia e implicancias en los países: i) el descrédito de las instituciones políticas y la redefinición de la idea del sistema democrático, no obstante la valoración de la participación como mecanismo de autorrealización y obtención de logros; ii) los elevados niveles de asociatividad que concentran las prácticas religiosas y deportivas; iii) la creciente importancia que adquieren nuevas modalidades asociativas informales; iv) la presencia de temas que han logrado tocar la sensibilidad de los jóvenes, como los derechos humanos, la paz, el feminismo, la ecología y las culturas de etnias o pueblos originarios, y v) la creciente incidencia de los medios de comunicación —en particular la televisión— en la generación de nuevas pautas de asociatividad juvenil.

Un corolario de esto último es la centralidad de la experiencia audiovisual, que pareciera implicar una “televisación” de la vida pública y la participación en esta a través de la pantalla. A la vez, se observa el uso creciente de redes virtuales como soporte de movilización juvenil. Por último, se advierte la tendencia a participar en grupos de voluntariado, lo que revela el anhelo de los jóvenes por aportar al bienestar social sin pasar por el sistema político.

Desde la perspectiva de la gestión pública, es preciso, por una parte, imprimir a las políticas juveniles un fuerte componente de participación de los destinatarios y, por otra, procurar la movilización de los jóvenes en políticas públicas que apunten a apoyar a otros grupos. También es importante involucrarlos en actividades destinadas a prevenir y mitigar los problemas que los afectan más directamente, como las campañas destinadas a prevenir el embarazo adolescente, el contagio de enfermedades de transmisión sexual, la adicción a estupefacientes y la violencia juvenil. Asimismo, los gestores e impulsores de políticas públicas dirigidas a grupos juveniles deben considerar también los cambios culturales que estos viven, la influencia de los medios de comunicación y de la industria cultural, sus aspiraciones de mayor autonomía, sus tensiones entre mayor formación y menor empleo y entre mayores expectativas y menos canales para satisfacerlas.

ESTRUCTURAS FAMILIARES, TRABAJO DOMÉSTICO Y BIENESTAR EN AMÉRICA LATINA

La familia sigue desempeñando una función estratégica de apoyo y protección en América Latina, como consecuencia de la limitada cobertura social que aún caracteriza a los países de la región, en especial frente al desempleo, la enfermedad, la

vejez y la migración. Al mismo tiempo, se asigna a la familia un papel cada vez más preponderante en los nuevos enfoques, transversales e integrales, crecientemente utilizados en el diseño de políticas sociales, sobre todo las destinadas a la superación de la pobreza. En estas circunstancias, es imperativo actualizar y profundizar el conocimiento de la estructura familiar así como de las funciones que desempeña.

Un rasgo de las familias latinoamericanas de las zonas urbanas es la creciente heterogeneidad de su estructura (en términos de tamaño y composición por tipo de miembros), como resultado de la diversidad de etapas de transición demográfica y del nivel de desarrollo alcanzado por los países de la región. Como se indica en el gráfico 18, ambos factores dan cuenta de la mayor o menor presencia de hogares unipersonales y de los compuestos por parejas mayores sin hijos.

Entre las transformaciones de las estructuras familiares observadas en algo más de una década, han aumentado notablemente los hogares unipersonales y los de jefatura femenina, y han disminuido las familias nucleares y biparentales. La tendencia más visible es el aumento de los hogares monoparentales femeninos, fenómeno ampliamente analizado en la región latinoamericana, que se relaciona con una diversidad de factores demográficos, culturales y socioeconómicos. Entre los primeros cabe mencionar el aumento de la esperanza de vida, sobre todo de las mujeres, el incremento de las migraciones y el mayor número de separaciones y divorcios. Entre los segundos, es evidente que, gracias a su creciente participación en el mercado laboral, las mujeres han logrado la independencia económica y la autonomía social necesarias para constituir o continuar viviendo en hogares sin pareja. El fenómeno del aumento de la monoparentalidad se aprecia tanto en las familias nucleares como en las extendidas: en el 2002, alrededor de un quinto de las nucleares y más de un tercio de las extendidas tenían jefatura femenina. La mayor proporción de las familias nucleares con jefatura femenina se encuentra en Bolivia, Costa Rica, Colombia, Honduras, Panamá y República Dominicana.

En relación con el modelo tradicional de familia nuclear con padre proveedor, madre ama de casa que no trabaja e hijos, puede afirmarse que, aunque sigue siendo el más frecuente, está claro que ya dejó de ser el modelo de familia predominante en América Latina, puesto que solo representa un 36% del total (véase el gráfico 19).

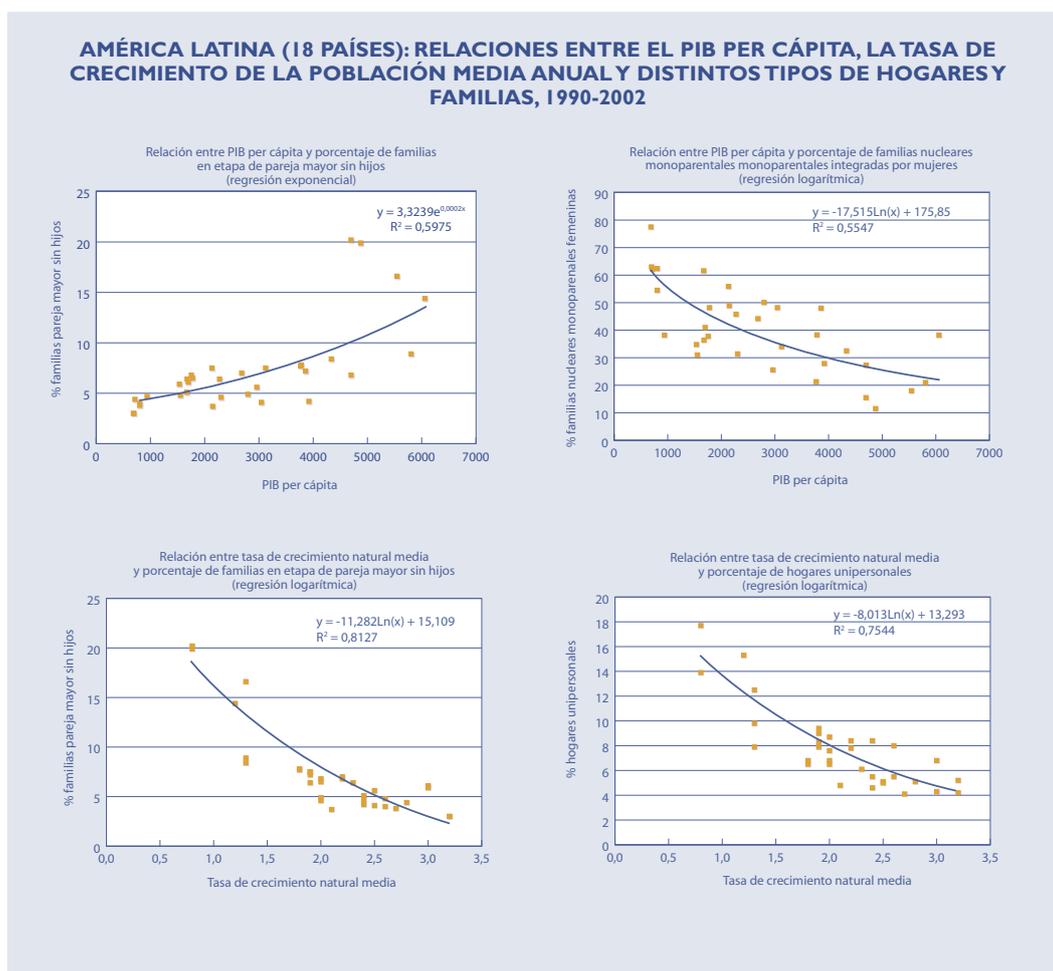
En términos generales, dado el aumento de las familias monoparentales, puede inferirse que, si bien la carga total del trabajo de socialización disminuyó al reducirse el número de niños por hogar, descendió al mismo tiempo el número de adultos que tienen a su cargo esa tarea, lo que es especialmente notorio en el caso de las mujeres, quienes en un número apreciable de familias tienen bajo su exclusiva responsabilidad las tareas productivas y reproductivas. A esto se suma una creciente complejidad de la tarea de socialización en sociedades cada vez más riesgosas y heterogéneas.

La configuración de los hogares y las familias latinoamericanas impone la aplicación de nuevas políticas dirigidas a hombres y mujeres, en su calidad de padres, y a instituciones sociales que deben apoyar a las familias en la cobertura de sus necesidades en una doble perspectiva: políticas tendientes a conciliar la familia y el trabajo, por un lado, y a dar el necesario apoyo para el cuidado de los hijos y de los adultos mayores, por el otro. Muchos de los cambios observados en torno a la familia obedecen a deseos y opciones individuales y no a patologías sociales. Por lo tanto, las políticas deben orientarse a

facilitar y no limitar las opciones individuales, proporcionando los recursos necesarios para el bienestar de todos sus miembros.

Por otra parte, la distribución de las familias latinoamericanas –en las seis etapas del ciclo de vida familiar distinguidas a partir de la información de las encuestas de hogares– revela que la mayoría de ellas se encuentran en la etapa de expansión y consolidación, es decir, cuando ya se deja de tener hijos. Se trata de una etapa con fuerte presión sobre los recursos familiares, puesto que la familia alcanza su mayor tamaño y los hijos tienen edades que los hacen económicamente dependientes. También se aprecia el crecimiento del número de familias en la etapa de independización de los hijos y en la de pareja mayor sin hijos.

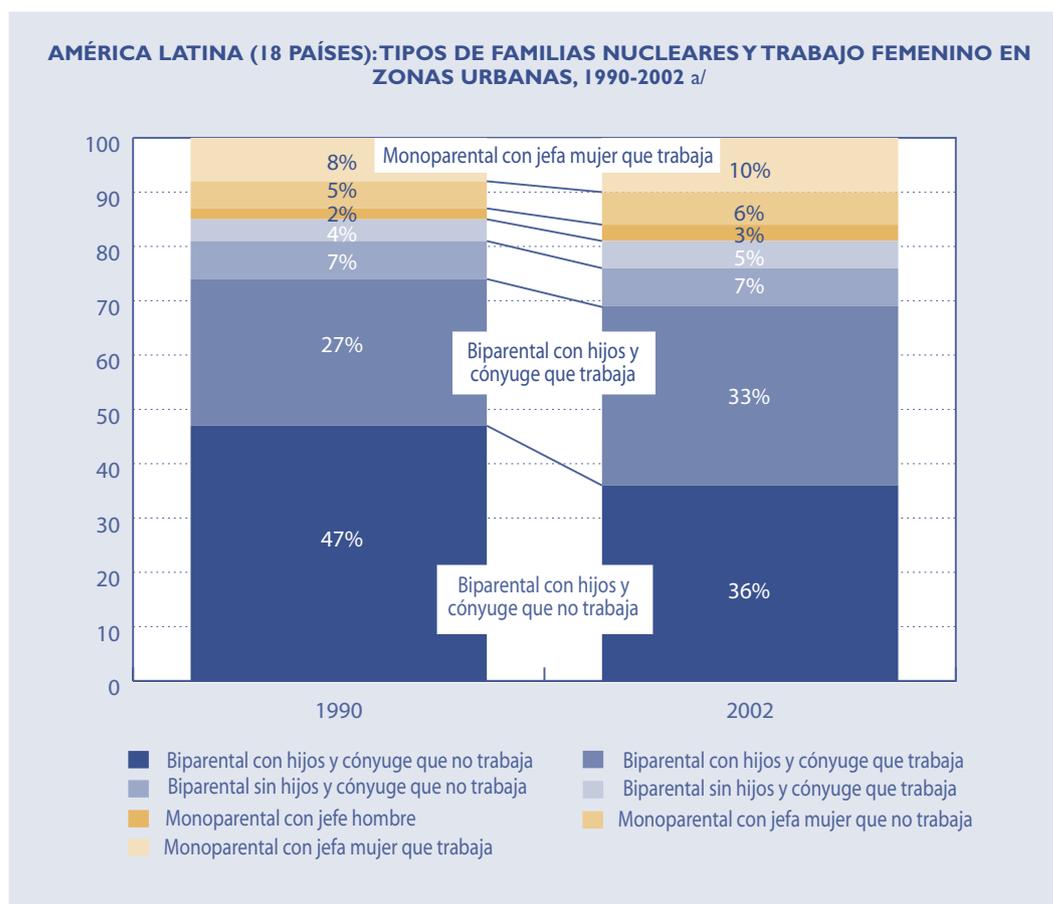
Gráfico 18



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países, cifras oficiales y estimaciones de la División de Población de la CEPAL.

La vinculación de la familia con los procesos de desigualdad social es de larga data. Se estima que la reproducción de las desigualdades sociales tiene lugar a través de dos canales principales. El primero se relaciona con el sistema de parentesco y con las condiciones de origen de las familias, que proporciona a las personas el acceso a los activos

Gráfico 19



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a/ Promedio simple.

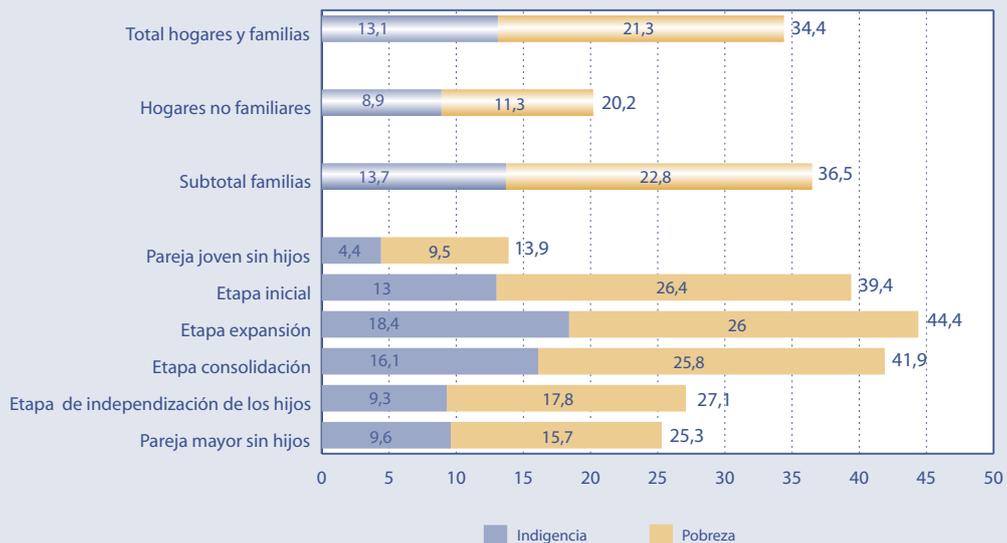
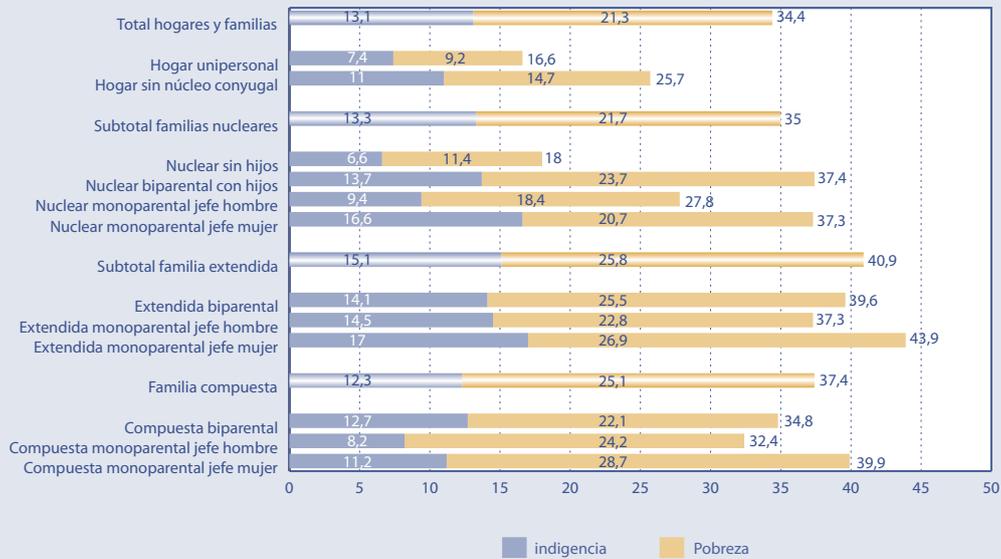
sociales, económicos y simbólicos, y el segundo se refiere al acceso y a la jerarquía de las ocupaciones.

La calidad de vida y el bienestar de las familias están ligados a la estructura de hogares y familias, así como a la etapa del ciclo de vida familiar en que se encuentran. Si se examina la incidencia de la pobreza y de la indigencia según el tipo de hogar, se confirma que las mayores cifras se registran entre las familias extendidas y compuestas y, dentro de ellas, entre los hogares monoparentales con jefa mujer. Asimismo, se observa una mayor incidencia de la pobreza entre las familias nucleares y dentro de ellas las biparentales con hijos y monoparentales con jefatura femenina (véase el gráfico 20).

Desde la perspectiva de la etapa del ciclo de vida familiar, la incidencia de la pobreza es menor en la etapa de la pareja joven sin hijos, en tanto se eleva en la etapa de expansión, cuando aumenta el número de hijos y estos son dependientes. En la región, alrededor del 63% de los hogares y las familias tienen dos o más familiares a cargo y el 46% de los hogares y las familias cuentan con dos o más aportantes de ingresos al hogar. Las familias nucleares biparentales con hijos, las extendidas y las compuestas tienen, por un lado, más aportantes de ingresos laborales, pero por otro, tienen dos o más familiares a cargo; esto último incide en su menor calidad de vida.

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA Y DE LA POBREZA POR TIPOS DE HOGARES Y FAMILIAS Y ZONAS URBANAS, 2002 a/ b/

(Porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a/ Promedio simple.

b/ La cifra presentada fuera de la barra corresponde a la incidencia de la pobreza total, incluida la indigencia.

En el 2002, los hogares y las familias con uno o más adultos mayores de 65 años alcanzaban un quinto de los hogares latinoamericanos. Los adultos mayores se concentran en los hogares sin núcleo conyugal, entre los unipersonales y entre las familias nucleares biparentales sin hijos.

La distribución del trabajo doméstico y del trabajo remunerado en las familias continúa siendo muy desigual entre hombres y mujeres. Aunque la información sobre la distribución del trabajo dentro del hogar es escasa, en todos los países la participación femenina es notablemente mayor que la masculina en el ámbito doméstico, independientemente del aumento de las tasas de actividad económica de las mujeres y del crecimiento de los hogares con dos o más proveedores.

Las profundas transformaciones tanto de la familia como de las condiciones laborales imponen nuevos enfoques de política que incentiven la redistribución de las tareas domésticas y el cuidado y la atención de la población infantil y de los adultos mayores. Tres son los conflictos principales entre trabajo y familia que enfrenta la población, especialmente la femenina: el tiempo, puesto que la exigencia de un tipo de trabajo impide el cumplimiento del otro; la tensión derivada de la obligación de cumplir bien ambos papeles, y las diferentes cualidades que reclaman uno y otro. Para hacer frente a estos problemas son importantes las medidas relacionadas con la organización del tiempo de trabajo, los servicios de asistencia para las labores domésticas y familiares, y el asesoramiento y apoyo laborales.

Se requiere con urgencia evaluar los modelos de protección y cuidado de los niños y de los adultos mayores y su compatibilidad con el mercado de trabajo, así como revisar la flexibilidad laboral, tanto en el uso de horarios como en los permisos de maternidad y paternidad, además de facilitar la flexibilidad de quienes tengan hijos menores y familiares mayores a cargo. Esta situación adquiere especial importancia en la actualidad. Por una parte, plantea desafíos a la previsión y la planificación de las políticas públicas en el gasto destinado a la creación y la ampliación de nuevos servicios de atención a los niños y las niñas y personas a cargo. Por otra parte, exige considerar que la socialización y el cuidado de los hijos no es solo un asunto privado de las familias, sino que atañe a toda la sociedad.

AGENDA SOCIAL: PROGRAMAS ORIENTADOS A LA JUVENTUD EN AMÉRICA LATINA

A partir de 1985 los países latinoamericanos han creado diversos organismos encargados de cuestiones relacionadas con la juventud. Pese al desarrollo de variadas fuentes de información –entre las que se destacan las encuestas nacionales de la juventud realizadas en 12 países–,³ aún no se ha precisado claramente la categoría de “juventud”, por lo que se ha optado por un criterio demográfico para su definición. Así, los rangos de edad que definen la categoría de “juventud” varían considerablemente de un país a otro y se observan dos tendencias: una reducción de la edad de inicio de este período y una ampliación del grupo con el fin de incluir edades más altas. En el

3 Se han realizado encuestas en Argentina (1993, 1997), Bolivia (1996, 2003), Colombia (1991, 2000), Chile (1994, 1997, 2000, 2004), Ecuador (1991), Guatemala (1999), México (2000), Paraguay (1998), Perú (1991), República Bolivariana de Venezuela, (1991) República Dominicana (1992, 1999) y Uruguay (1989, 1995).

primer caso, se asiste a una superposición etaria de la adolescencia y la juventud en las definiciones del sujeto joven. En el segundo caso, los jóvenes de más de 18 años no han estado visibles como sujetos específicos de políticas y tienden a estar subsumidos en los programas dirigidos a los adultos. Esta situación presenta una dualidad para los jóvenes, que se manifiesta en un desfase entre sus realidades sociales y jurídicas. La ambigüedad en el sujeto juvenil también se refleja en la ausencia de una discusión acabada sobre la relación joven-adulto en las representaciones sociales y cómo influye en el diseño de las políticas públicas orientadas a la juventud.

En las respuestas a la encuesta realizada por la CEPAL sobre programas orientados a la juventud dirigida a las instituciones encargadas de estos temas en América Latina, las principales preocupaciones que se advierten con respecto a los jóvenes son tres: el desempleo y la calidad del empleo, los problemas vinculados con el ámbito de la educación y el acceso a la salud y los riesgos relacionados (VIH/SIDA y embarazo adolescente). Estas áreas problemáticas redundan en la agudización de la pobreza de los jóvenes y en procesos de exclusión social.

En efecto, las autoridades gubernamentales identificaron un variado conjunto de causas vinculadas con los problemas de la juventud; la mayoría de esas causas están ligadas a las condiciones económicas y de empleo, la pobreza, la desigualdad, la baja calidad de vida y la exclusión social. En el ámbito específico de la educación y la salud, se indica la ausencia de capacitación y de formación técnico-profesional y el escaso acceso a los servicios de salud y de prevención. Por último, en algunos países, las autoridades destacaron la falta de participación y capacitación de los jóvenes en cuanto a sus derechos ciudadanos.

En la visión que tienen los jóvenes de sí mismos, se destacaron los temas de identidad y los relativos a las familias y a la afectividad, comprobándose un alto grado de coincidencia con las autoridades en la percepción de las dificultades para encontrar empleo, en la devaluación de la educación y en la falta de derechos ciudadanos.

Entre 1995 y 1999 aumentó el dinamismo de los procesos nacionales relativos a la articulación de las políticas destinadas a la juventud, pero a un ritmo disímil en los diferentes países de América Latina. En la actualidad existe gran heterogeneidad en esas políticas en los países, en razón de la diversidad de criterios: los paradigmas y los enfoques de la fase juvenil, sus fundamentos legislativos (ámbito jurídico-normativo), los niveles de la administración pública encargados de los temas de juventud y el tipo específico de gestión que realizan los organismos oficiales de juventud en cada país.

Existen cuatro enfoques típicos respecto de la fase juvenil: la juventud como fase preparatoria, la juventud como etapa problemática, el de la ciudadanía juvenil y el de la juventud como actor estratégico del desarrollo. A cada uno de estos enfoques corresponden políticas y programas específicos que se encuentran en diversas combinaciones en los países de la región. La perspectiva que se utiliza para diseñarlos permite distinguir entre políticas juveniles más tradicionales y políticas más modernas.

Los principales instrumentos jurídicos que rigen la situación de la juventud son: el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y los convenios 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT. La Convención Internacional sobre

los Derechos del Niño es el instrumento internacional que más directamente incide en el reconocimiento de los derechos del joven. Se avanza en el reconocimiento y la ratificación de la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud, cuya finalidad es consagrar jurídicamente –en el ámbito iberoamericano– el pleno reconocimiento de la especificidad de la condición juvenil y dar respuesta a los requerimientos de protección y garantía para el ejercicio de los derechos de los jóvenes.

Los avances en el ámbito de la institucionalidad pública en materia de juventud son variables. En la región latinoamericana existen ministerios, viceministerios, subsecretarías, institutos y direcciones de la juventud con diversos niveles de influencia y jerarquía política. Las funciones desarrolladas son de variada índole: rectoría, asesoría, supervisión y promoción de las actividades y servicios orientados a los jóvenes. Algunos países no cuentan con organismos oficiales a cargo de los sectores juveniles.

Sin embargo, todos los países cuentan con programas destinados a la juventud, tanto globales como sectoriales, y algunos específicos para la juventud, pero muchas veces subsumidos en programas para adolescentes y niños o con dificultades para responder a las necesidades heterogéneas de la población juvenil. Pocos países ofrecen atención exclusiva a jóvenes rurales (Bolivia, Colombia y México), jóvenes indígenas (Colombia y México), mujeres jóvenes o programas con enfoque de género (Colombia y México) y a jóvenes discapacitados (Colombia). La mayoría de los programas incluye estas categorías juveniles, pero no responde completamente a su especificidad. En Costa Rica, Colombia, México y Nicaragua se observa una oferta de programas y proyectos más variada y selectiva destinada a los jóvenes.

Cuadro 4

PARADIGMAS DE LA FASE JUVENIL EN LOS ENFOQUES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS		
Fases del paradigma	Políticas	Programas
Preparatoria <ul style="list-style-type: none"> • Transición a la adultez • Etapa de preparación 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientadas a la preparación para la adultez • Tendientes a ampliar la cobertura educativa • Tiempo libre sano y recreativo • Servicio militar 	<ul style="list-style-type: none"> • Universales • Indiferenciados • Aislados
Problemática <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo y transgresión • Etapa problema para la sociedad 	<ul style="list-style-type: none"> • Compensatorias • Sectoriales (predominantemente justicia y salud) • Focalizadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencialidad y control de problemas específicos • Prioridad otorgada a la juventud urbano - popular • Dispersión de las ofertas programáticas
De ciudadanía <ul style="list-style-type: none"> • Juventud ciudadana • Etapa de desarrollo social 	<ul style="list-style-type: none"> • Articuladas en políticas públicas • Intersectoriales • Inclusión de jóvenes como sujetos explícitos de derechos políticos, sociales, culturales y económicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrales • Participativos • Extensión de alianzas
De actor del desarrollo <ul style="list-style-type: none"> • Juventud: actor estratégico del desarrollo • Etapa de formación y aporte productivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Articuladas en políticas públicas • Intersectoriales • Orientadas a la incorporación de la juventud como capital humano y desarrollo de capital social 	<ul style="list-style-type: none"> • Equidad y transversalidad institucional • Enfrentamiento de la exclusión • Aporte juvenil a estrategias de desarrollo

Fuente: Dina Krauskopf, "La construcción de políticas de juventud en Centroamérica" Políticas públicas de juventud en América Latina: políticas nacionales; O. Dávila (ed.) Viña del Mar, Ediciones CIDPA, 2003.

Respecto de la diversificación de la oferta programática, cabe destacar los esfuerzos por poner en marcha programas de difusión de derechos y deberes de la población juvenil, así como de la ley de juventud (Argentina, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua). Con este tipo de iniciativas se contribuye al fortalecimiento de las organizaciones juveniles, la formación de los funcionarios públicos en materia de legislación vigente y el posicionamiento político del tema juvenil de manera sectorial.

Asimismo, los programas adolecen de problemas de focalización y cobertura, y presentan carencias en materia de evaluación, por lo que hay un amplio campo de acción para aplicar políticas orientadas a la juventud que ofrezcan una gama diversa de opciones tendientes a atender la heterogeneidad de intereses y condiciones de vida de los jóvenes latinoamericanos.



Pobreza y distribución del ingreso

A. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA

De acuerdo con la evolución prevista del producto por habitante, cabría esperar que en el 2004 aproximadamente cuatro millones de latinoamericanos salgan de la condición de pobreza en que se encontraban el año anterior. Sin embargo, esta mejora es insuficiente para contrarrestar el deterioro ocurrido en el período 2001-2003, por lo que los porcentajes de pobres e indigentes proyectados para el 2004 (cerca de un 42,9% y un 18,6% respectivamente), serían superiores a los registrados en el 2000. Por otra parte, los países de la región han mostrado una evolución dispar en los índices de pobreza, con predominio de las situaciones de aumento o estancamiento durante el período 2001-2003.

1. EVOLUCIÓN ECONÓMICA

Desde el comienzo de la presente década, el crecimiento del PIB de América Latina, condición necesaria aunque no suficiente para la reducción de la pobreza, no ha alcanzado el ritmo necesario para compensar el crecimiento de la población. Aun cuando en el 2000 la tasa de crecimiento alcanzó el 3,7%, en los años posteriores su evolución fue menos auspiciosa. Tras una expansión de un 0,4% en el 2001, el PIB descendió un 0,6% en el 2002, elevándose nuevamente un 1,6% en el 2003. Por consiguiente, el producto por habitante de la región, expresado en términos reales, sigue siendo inferior al registrado a fines de los años noventa y presenta una variación equivalente al -0,2% anual (véase el cuadro I.1).

En el 2003, el PIB por habitante de los países de la región mostró variadas tendencias. Después

de cuatro años consecutivos de tasas de variación negativas, el producto por habitante de Argentina presentó la mayor tasa de crecimiento en la región (7,7%), mientras la República Bolivariana de Venezuela —que había sufrido una importante retracción en el 2002— acusó la contracción más fuerte (-11,3%). También se registró una baja del producto por habitante en Brasil (-1,8%), Guatemala (-0,5%), México (-0,2%) y, después de más de una década de crecimiento continuo, República Dominicana (-2,0%). A su vez, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay mostraron un buen desempeño, reflejado en tasas de crecimiento del producto por habitante de un 2% o más (véase el cuadro 1 del anexo estadístico).

Gracias a un contexto internacional favorable, a políticas económicas internas orientadas a un mayor control monetario y fiscal, y a tipos de cambios competitivos, se estima que en el 2004 la

situación será más propicia; concretamente, se prevé un incremento del PIB de alrededor del 5,3%, lo que equivale a una expansión de un 3,7% del producto por habitante.

Por otra parte, la incipiente recuperación económica en América Latina tuvo en el 2003 algunos efectos positivos en los mercados laborales, que se manifestaron sobre todo en la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, las alentadoras señales no

Cuadro I.1

AMÉRICA LATINA (20 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS, 1990-2003											
País	Año	PIB per cápita (Tasa promedio anual de variación) a/	Desempleo urbano	Remuneración media real c/	Salario mínimo urbano	País	Año	PIB per cápita (Tasa promedio anual de variación) a/	Desempleo urbano	Remuneración media real c/	Salario mínimo urbano
Argentina	1990-1999	2,7	11,9	0,9	0,8	Honduras	1990-1999	-0,2	6,1	-	0,6
	2000-2003	-3,0	16,8	-3,7	-4,1		2000-2003	0,9	6,5	-	4,0
Bolivia	1990-1999	1,6	5,3	3,0	7,4	México	1990-1999	1,5	3,6	1,0	-4,7
	2000-2003	-0,1	8,6	2,6	4,7		2000-2003	0,6	2,7	3,9	0,3
Brasil	1990-1999	0,0	5,6	-1,0	-0,4	Nicaragua	1990-1999	0,3	14,0	8,0	-0,2
	2000-2003	0,1	9,3	-4,3	3,9		2000-2003	0,6	10,5	3,2	-3,6
Chile	1990-1999	4,1	7,6	3,5	5,9	Panamá	1990-1999	3,4	16,7	-	1,5
	2000-2003	2,1	9,0	1,5	3,8		2000-2003	0,9	16,1	-	2,5
Colombia	1990-1999	0,8	11,6	2,2	-0,4	Paraguay	1990-1999	-0,8	6,3	0,3	-1,6
	2000-2003	0,9	17,4	1,6	0,6		2000-2003	-1,3	11,7	-1,5	2,5
Costa Rica	1990-1999	2,6	5,4	2,2	1,1	Perú	1990-1999	1,3	8,5	-0,8	1,4
	2000-2003	0,9	6,2	1,6	-0,3		2000-2003	1,3	9,2	1,1	3,2
Cuba	1990-1999	-3,2	6,9	-	-	Rep. Dominicana	1990-1999	2,8	16,9	-	2,6
	2000-2003	2,8	3,8	-	-		2000-2003	2,2	15,5	-	-1,3
Ecuador	1990-1999	0,5	9,4	5,3	0,9	Uruguay	1990-1999	2,4	9,9	0,5	-6,0
	2000-2003	1,6	10,7	-	3,6		2000-2003	-4,7	15,7	-6,4	-6,5
El Salvador	1990-1999	2,6	7,8	-	-0,6	Venezuela (Rep. Bolivariana de)	1990-1999	0,2	10,3	-4,0	-3,0
	2000-2003	0,1	6,5	-	-1,4		2000-2003	-4,8	15,3	-6,1	-3,1
Guatemala	1990-1999	1,5	4,0	5,4	-9,8						
	2000-2003	0,1	3,3	1,1	5,2						
Haití	1990-1999	-2,8	-	-	-8,3	América Latina	1990-1999	0,9	7,7	-	-
	2000-2003	-1,4	-	-	-1,4		2000-2003	-0,2	10,2	-	-

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

a/ A partir del valor del PIB per cápita en dólares, a precios constantes de 1995. La cifra correspondiente a 2003 es una estimación preliminar.

b/ En Chile, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela (Rep. Bolivariana de) se refiere al desempleo total nacional. Además, en reemplazo del período 1990-1999 se consideró el espacio de tiempo entre 1991 y 1999 para Cuba.

c/ Por lo general, la cobertura de este índice es muy parcial. En la mayoría de los países se refiere solo a los trabajadores formales del sector industrial. La cifra correspondiente al 2003 es una estimación preliminar. El año final para Bolivia y Guatemala corresponde al 2002.

d/ El año inicial del período para Nicaragua es 1992.

solo estimularon la demanda de trabajo sino también la incorporación de nuevos integrantes a la fuerza laboral, muchos de los cuales no consiguieron empleo y pasaron a engrosar la ya elevada tasa de desocupación (10,5%) (CEPAL, 2004a). En seis países de la región (Argentina, Colombia, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay), la tasa de desempleo urbano del período 2000-2003 superó el 15% y en 11 de 19 países el desempleo sufrió un deterioro en comparación con la década de 1990 (véase el cuadro I.1). Al mismo tiempo, la informalización del empleo y la precarización laboral han mantenido su tendencia expansiva; desde 1990, el 66% de los nuevos ocupados se ha integrado al sector informal y apenas el 44% cuenta con los beneficios de la seguridad social (OIT, 2003).

El control de la inflación, factor clave para proteger el poder adquisitivo de los pobres, dio buenos resultados en el 2003, ya que el ritmo de crecimiento de los precios se redujo en casi cuatro puntos porcentuales respecto del año anterior (de 12,1% a 8,5%). Las variaciones medias mensuales del índice de precios al consumidor fueron inferiores al 1% en todos los países, con la excepción de la República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana (véase el cuadro 1 del anexo estadístico). En el mismo año, los salarios medios reales disminuyeron un 4,4% en promedio ponderado, debido a los aumentos moderados en al-

gunos países y las acentuadas bajas en otros, sobre todo en Argentina, Brasil, la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay. La evolución de este indicador reflejó el estancamiento o la caída del nivel de actividad económica en varios países de la región durante el período analizado (véase el cuadro I.1). Por último, cabe mencionar que en el 2003 los salarios mínimos se mantuvieron estables y mostraron una leve expansión en términos reales en la mayoría de los países; en cambio, en República Dominicana (-9,6%), Uruguay (-12,4%) y la República Bolivariana de Venezuela (-11,8%) sufrieron un marcado descenso. En el período 2000-2003, el poder adquisitivo de los salarios mínimos urbanos se redujo también en Argentina, Costa Rica, El Salvador, Haití y Nicaragua.

2. PERSPECTIVAS DE LA POBREZA EN LA REGIÓN

En el contexto económico descrito, la pobreza sigue representando un desafío de enorme magnitud para los países de América Latina. En el 2002, el 44,0% de la población, es decir 221 millones de personas, vivían en condiciones de pobreza, en tanto que 97 millones, cifra correspondiente al 19,4% de los habitantes de la región, vivían en la pobreza extrema o la indigencia (véanse los cuadros I.2 y I.3 y el gráfico I.1).

Cuadro I.2

AMÉRICA LATINA: INCIDENCIA DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA, 1980 - 2002 a/						
	Porcentaje de personas					
	Total	Pobres b/		Total	Indigentes c/	
		Urbana	Rural		Urbana	Rural
1980	40,5	29,8	59,9	18,6	10,6	32,7
1990	48,3	41,4	65,4	22,5	15,3	40,4
1997	43,5	36,5	63,0	19,0	12,3	37,6
1999	43,8	37,1	63,7	18,5	11,9	38,3
2000	42,5	35,9	62,5	18,1	11,7	37,8
2001	43,2	37,0	62,3	18,5	12,2	38,0
2002	44,0	38,4	61,8	19,4	13,5	37,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Estimación correspondiente a 18 países de la región más Haití.

b/ Porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Incluye a las personas que se encuentran en situación de indigencia.

c/ Porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de indigencia.

Cuadro I.3

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN POBRE E INDIGENTE, 1980 - 2002 a/						
	Millones de personas					
	Pobres b/			Indigentes c/		
	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
1980	135,9	62,9	73,0	62,4	22,5	39,9
1990	200,2	121,7	78,5	93,4	45,0	48,4
1997	203,8	125,7	78,2	88,8	42,2	46,6
1999	211,4	134,2	77,2	89,4	43,0	46,4
2000	207,1	131,8	75,3	88,4	42,8	45,6
2001	213,9	138,7	75,2	91,7	45,8	45,9
2002	221,4	146,7	74,8	97,4	51,6	45,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Estimación correspondiente a 18 países de la región más Haití.

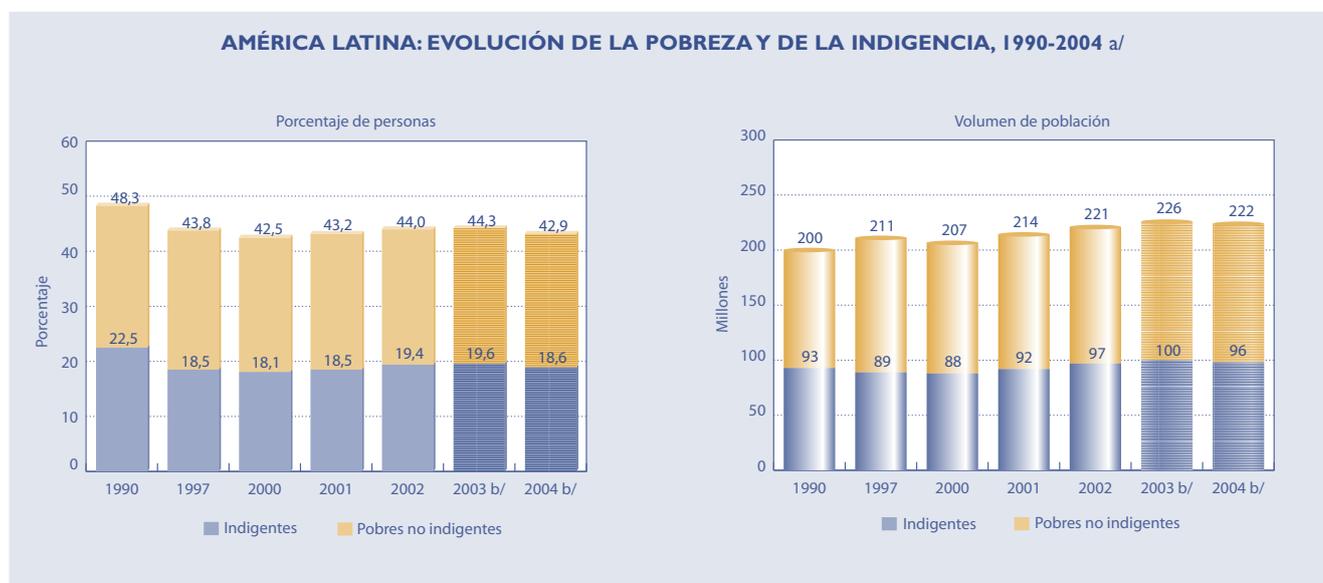
b/ Personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Incluye a las personas que se encuentran en situación de indigencia.

c/ Personas con ingresos inferiores a la línea de indigencia.

Entre 1999 y 2002, el proceso de superación de la pobreza no mostró avances significativos. De hecho, en ese período la tasa de pobreza aumentó 0,2 puntos porcentuales, mientras la indigencia registraba un alza de 0,9 puntos. En términos absolutos, el número de pobres se vio incrementado en cerca de 10 millones de personas, de las cuales 8 millones correspondieron a personas en condiciones de extrema pobreza.

La comparación de las cifras del 2002 y de 1990 permite constatar una disminución de la incidencia de la pobreza, del 48,3% al 44,0%, y de la indigencia, del 22,5% al 19,4%. Esta reducción en términos porcentuales no fue suficiente para compensar el crecimiento de la población, de manera que en términos absolutos en el 2002 había 21 millones más de personas pobres que en 1990, de los cuales 4 millones eran indigentes.

Gráfico I.1



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Estimación correspondiente a 18 países de la región más Haití. Las cifras colocadas sobre las secciones naranja de las barras representan el número total de personas pobres (indigentes más pobres no indigentes).

b/ Proyecciones.

Por otra parte, la incidencia de la pobreza y la indigencia en las áreas rurales de América Latina sigue siendo más alta que en las áreas urbanas. En efecto, mientras en estas últimas la pobreza afectaba al 38,4% de la población, en las áreas rurales este valor aumentaba al 61,8%. Asimismo, la incidencia de la pobreza extrema en las áreas rurales superaba en más de 24 puntos porcentuales a la urbana. Sin embargo, dado el notable grado de urbanización que

caracteriza a la región (alrededor del 75% de la población vive en ciudades), dos tercios de los pobres vivían en el año 2002 en áreas urbanas, a la vez que más de la mitad (53%) de los indigentes de la región vivía en áreas urbanas (véase el gráfico I.2).¹

En lo que respecta a la distribución geográfica de la población pobre, casi la mitad se concentra en tan solo dos países: Brasil (30%) y México (17%).

Recuadro I.1

MÉTODO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA

El enfoque utilizado en la elaboración de este informe para estimar la pobreza consiste en clasificar como “pobre” a una persona cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la “línea de pobreza” o monto mínimo necesario que le permitiría satisfacer sus necesidades esenciales. Las líneas de pobreza, expresadas en la moneda de cada país, se determinan a partir del costo de una canasta de bienes y servicios, empleando el método del “costo de las necesidades básicas”.

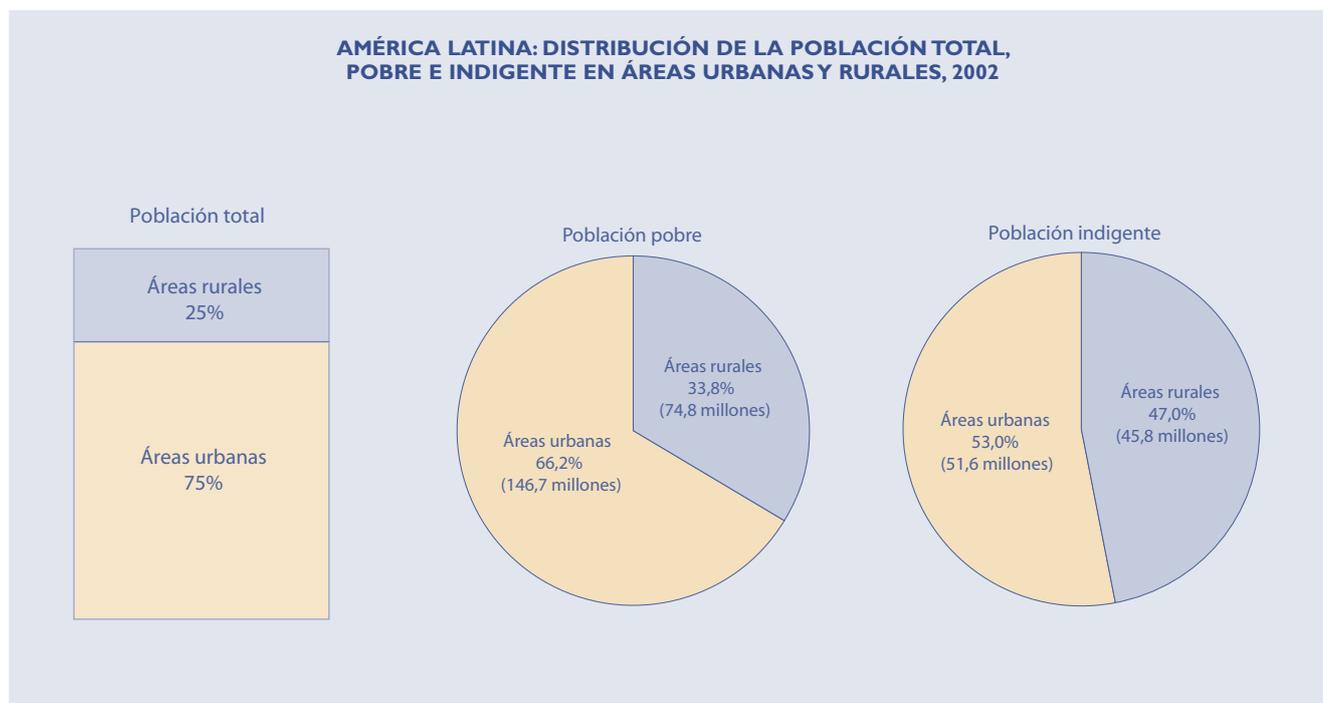
En todo los casos en que se dispuso de los antecedentes necesarios, se estimó el costo de la canasta básica de alimentos correspondiente a cada país y cada zona geográfica; dicha canasta abarca los bienes necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de la población, tomando en consideración los hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos, sus precios relativos y las diferencias de precios entre áreas metropolitanas, demás zonas urbanas y zonas rurales. A este valor, la “línea de indigencia”, se agregó el monto requerido por los hogares para satisfacer las necesidades básicas no alimentarias, a fin de calcular el valor total de la línea de pobreza. Para ello, se multiplicó la línea de indigencia por un factor constante, 2 para las zonas urbanas y 1,75 para las rurales. a/ En 2001-2003, el equivalente mensual en dólares de las líneas de pobreza varía entre 32 y 45 dólares, respectivamente, en las áreas rurales y urbanas de Bolivia, y entre 94 y 150 dólares en ambas áreas en el caso de México. b/ El valor de las líneas de indigencia fluctúa entre 18 dólares en las zonas rurales, o 21 en las zonas urbanas, en Brasil, y 53 a 75 dólares, en ambas, nuevamente en México (véase el cuadro 16 del anexo).

En la mayoría de los casos, la información sobre de la estructura del consumo de los hogares, tanto de alimentos como de otros bienes y servicios, proviene de las encuestas sobre presupuestos familiares que se llevan a cabo en los países. c/ Dado que estas encuestas se realizaron en años anteriores a los de las estimaciones de pobreza, se ha actualizado el valor de las líneas de pobreza de acuerdo con la variación acumulada del índice de precios al consumidor.

La información sobre el ingreso de las familias proviene de las encuestas de hogares realizadas por los respectivos países, en los años correspondientes a las estimaciones de pobreza presentadas en esta edición. Como es habitual, se hicieron correcciones a los datos debido a la falta de respuesta a algunas preguntas sobre ingresos por parte de los asalariados, los trabajadores independientes y los jubilados, así como los probables sesgos por subdeclaración. Esta última operación se llevó a cabo mediante la comparación de las partidas de ingreso de la encuesta con las resultantes de una estimación de la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), elaborada para este propósito a partir de información oficial. Las cifras utilizadas sobre ingreso corresponden al concepto de ingreso corriente total, es decir, al ingreso por concepto de trabajo asalariado, monetario y en especie; de trabajo independiente, incluidos el autoconsumo y el valor del consumo de productos producidos por el hogar; rentas de la propiedad, jubilaciones y pensiones y otras transferencias recibidas por los hogares. En la mayoría de los países, el ingreso de los hogares incluye, además, un valor imputado por concepto de arriendo de las viviendas habitadas por sus propietarios.

- a/ Las únicas excepciones a este criterio general son Brasil y Perú. En Brasil, se utilizaron las nuevas líneas de indigencia estimadas para cada zona del país, en el marco de un trabajo conjunto del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y la CEPAL. En Perú, en tanto, se emplearon las líneas de indigencia y de pobreza estimadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el marco del “Programa para el mejoramiento de las encuestas y la medición de las condiciones de vida en América Latina y el Caribe” implementado en ese país.
- b/ La tasa de cambio aplicada es la que corresponde al promedio del mes de referencia con respecto al cual se recopiló información sobre ingresos por medio de las encuestas de hogares.
- c/ Cuando no se disponía de datos derivados del procesamiento de una encuesta reciente de este tipo, se utilizaron otros antecedentes pertinentes sobre consumo familiar.

1 Cabe señalar que los conceptos de “urbano” y “rural” varían en muchos casos de un país a otro y a lo largo del tiempo.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

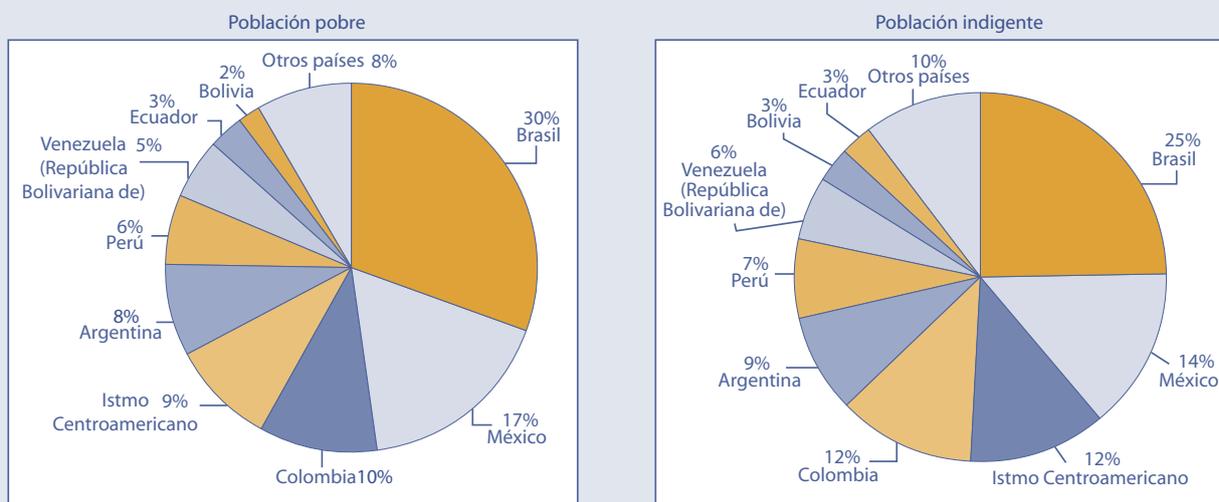
Tanto en Colombia como en el Istmo Centroamericano la población pobre representa alrededor de un 10% del total regional. En el caso de la indigencia, los porcentajes de Brasil y México son algo menores (25% y 14%, respectivamente), pero aumentan en los casos de Colombia (12%), el Istmo Centroamericano (12%) y otros países (10%), en esta última categoría sobre todo por la inclusión de Haití. Otros países en los que se encuentra una alta proporción de pobres e indigentes son Argentina (8% y 9%, respectivamente), Perú (6% y 7%) y la República Bolivariana de Venezuela (5% y 6%) (véase el gráfico I.3).

Por último, el estancamiento del producto por habitante de la región registrado en el 2003 hace suponer que la pobreza y la indigencia probablemente hayan crecido en términos marginales ese año, puesto que habrían ascendido al 44,3% y al 19,6% respectivamente. Aun cuando en términos porcen-

tuales estos incrementos sean exiguos, se traducirían en un aumento de aproximadamente 5 millones de personas pobres, lo que elevaría la pobreza a 226 millones de personas, incluidos 100 millones que viven en condiciones de extrema pobreza (véase el gráfico I.1).

Las mejores perspectivas de crecimiento para el año 2004 hacen prever una disminución de la tasa de pobreza de alrededor de 1,4 puntos porcentuales, caso en el cual el porcentaje de pobres se situaría alrededor de un 42,9%, en tanto que la indigencia abarcaría un 18,6% de la población. Una variación de este tipo sería algo superior al crecimiento de la población durante el período, por lo que el número de pobres e indigentes podría disminuir levemente. De acuerdo con las proyecciones efectuadas, ambos grupos podrían registrar una reducción de aproximadamente cuatro millones de personas.

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE E INDIGENTE POR PAÍS, 2002



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

3. TENDENCIAS DE LA POBREZA

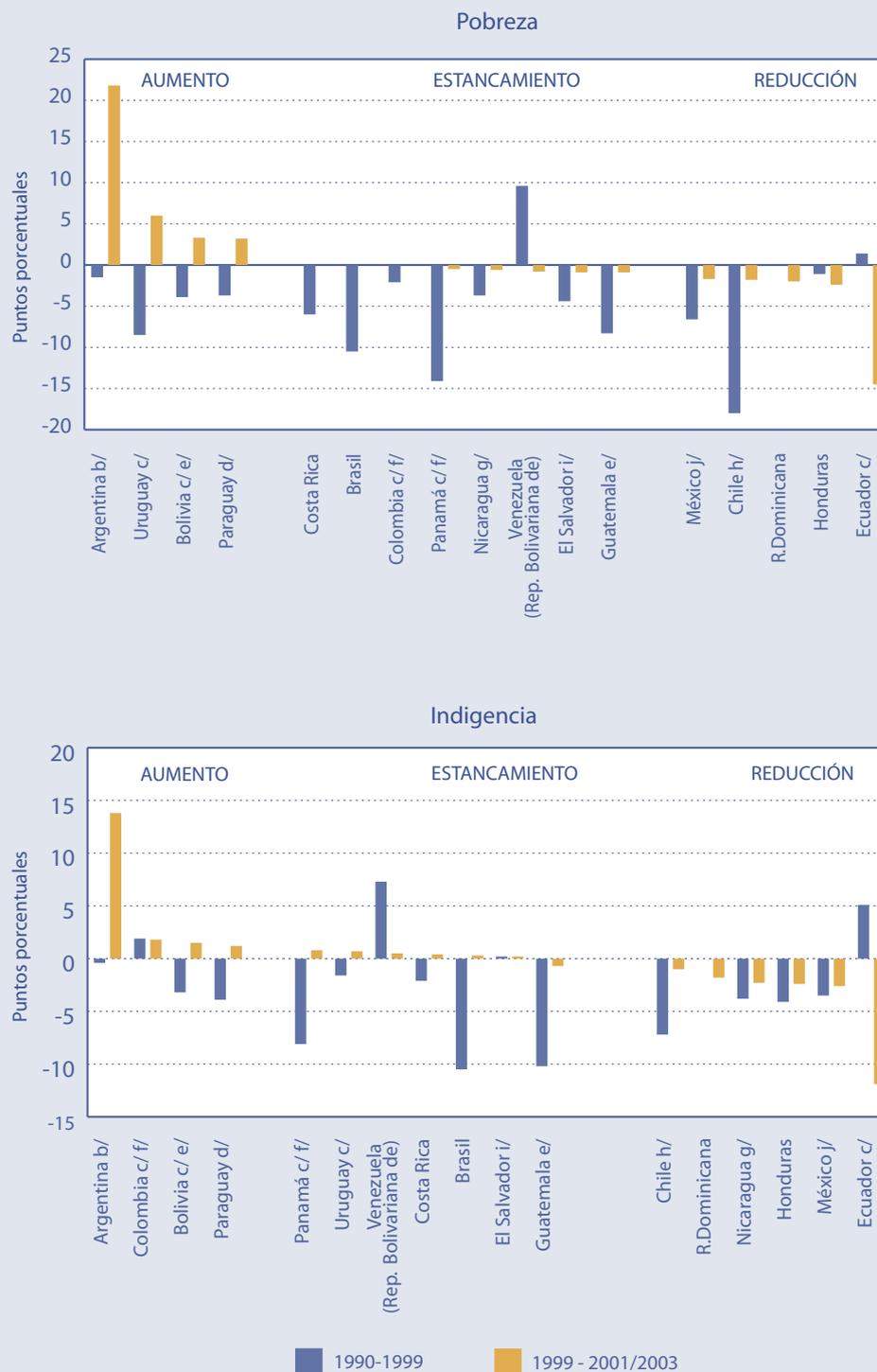
En el ámbito regional, la evolución de la pobreza y la indigencia entre 1999 y 2001-2003 fue heterogénea. Mientras algunos países lograron importantes avances en la reducción de estos fenómenos, otros sufrieron marcados retrocesos. En este último grupo destacan Argentina y Uruguay, que a comienzos de la presente década fueron afectados por una severa crisis económica. En efecto, en Argentina (datos sólo del Gran Buenos Aires), la pobreza descendió de un 21,2% en 1990 a un 19,7% en 1999, para luego duplicarse, hasta llegar a un 41,5%, en el 2002. La tendencia de la indigencia fue aún más regresiva, ya que se triplicó con creces, pasando del 4,8% en 1999 al 18,6% en el 2002. A su vez, tras haber disminuido del 17,9% al 9,4% en los años noventa, la incidencia de la pobreza en Uruguay aumentó seis puntos porcentuales en el 2002; pese a ello, tanto la pobreza (15,4%) como la indigencia (2,5%) siguen siendo las más bajas de la región. En los últimos años, las áreas urbanas de Bolivia y el área metropolitana de Paraguay también registraron un aumento

de la pobreza, de alrededor de 3 puntos porcentuales y, aunque menos pronunciado, también de la indigencia, en una inversión de la tendencia a la baja del período 1990-1999 (véanse el cuadro I.4 y el gráfico I.4).

En Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, la República Bolivariana de Venezuela y las áreas urbanas de Colombia y Panamá se observó un estancamiento en el proceso de superación de la pobreza, que afectó a toda la región. Estos países y regiones presentaron variaciones inferiores a un punto porcentual de la tasa de pobreza, evolución que contrasta notablemente con los adelantos logrados en algunos de estos en el período 1990-1999, sobre todo en Brasil y Panamá, cuyas tasas de pobreza disminuyeron diez o más puntos porcentuales. Por el contrario, la República Bolivariana de Venezuela es el único país del grupo que había presentado un fuerte deterioro en el período 1990-1999, por lo que la leve reducción de 0,8 puntos porcentuales entre 1999 y 2002 supuso un cambio de tendencia.

Gráfico I.4

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA POR PAÍS, 1990-1999, 1999-2001/2003 a/



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Países ordenados según la evolución en el período 1999/2001-2003. Se considera "estancamiento" toda variación positiva o negativa inferior a un punto porcentual en el valor indicado.

b/ Gran Buenos Aires; c/ Áreas urbanas; d/ Área metropolitana de Asunción; e/ 1989-1999; f/ 1991-1999; g/ 1993-1998; h/ 1990-2000 y 2000-2003; i/ 1995-1999; j/ 1989-2000.

Por último, en Chile, Ecuador, Honduras, México y República Dominicana la disminución de la incidencia de la pobreza fue superior a un punto porcentual en el período 1999-2001/2003.² En este ámbito, cabe destacar lo sucedido en las áreas urbanas de Ecuador, en las que el descenso de los índices de pobreza e indigencia llegó a 14,5 y 11,9 puntos porcentuales respectivamente, dando cuenta de una importante recuperación luego de la recesión de fines de la década de 1990. También cabe resaltar la situación de Chile, país en el que la reducción de la tasa de pobreza entre el 2000 y el 2003 no excedió los dos puntos porcentuales, pese a lo cual es el único de América Latina en el que se observaron avances claros y sostenidos en materia de alivio de la pobreza desde 1990. En efecto, las nuevas cifras disponibles sobre Chile revelan que la pobreza bajó del 38,6% en 1990 al 18,8% en 2003, mientras la indigencia descendía de un 12,9% a un 4,7% en el mismo período (véase el recuadro I.3).

Sobre la base de la evolución esperada del producto por habitante de los países, no cabe esperar variaciones muy significativas de la incidencia de la pobreza y la indigencia en el 2003 y el 2004. Las mayores reducciones proyectadas corresponden a Argentina y Uruguay, que seguirían mostrando una tendencia a la recuperación, especialmente en el 2004. Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú podrían mostrar una reducción de la tasa de pobreza cercana a los 2 puntos porcentuales. Por otra parte, en caso de que no atenuarse los efectos negativos que han tenido para la población más vulnerable las fluctuaciones macroeconómicas adversas que han afectado a la República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana, la situación social de estos países podría llegar a deteriorarse.

Desde otra perspectiva, el análisis de la magnitud y las tendencias de la pobreza en los países basado en

la tasa de pobreza (o el índice de recuento) pueden complementarse adecuadamente con los índices de brecha de pobreza (PG, poverty gap) y de severidad de la pobreza, o FGT_2 (Foster, Greer y Thorbecke), que aportan información sobre el nivel de pobreza de la población pobre y del grado de dispersión de su ingresos (véase el recuadro I.2). Como se observa en el gráfico I.5, aunque existe una relación lineal entre el índice de recuento, de brecha y de severidad de la pobreza, la relación no es perfecta.

Bolivia, Paraguay y Guatemala, países con índices de pobreza muy similares en 2001-2002, de alrededor de un 60%, mostraban valores muy distintos de la brecha de la pobreza, lo que apunta a un más alto déficit relativo del ingreso de los pobres con respecto al valor de la línea de pobreza en Bolivia (34,4) que en Paraguay (30,3) y Guatemala (27,0). Brasil presentaba un índice de pobreza de un 37,5, inferior al de Perú (54,8), pero debido a sus graves problemas de distribución del ingreso, tenía un índice de severidad de la pobreza (FGT_2) muy similar, cercano al 11.

En cuanto a las tendencias de los índices PG y FGT_2 entre 1999 y 2001-2003, los casos de Argentina y Ecuador permiten ilustrar dos escenarios contrapuestos. En el Gran Buenos Aires, el índice de recuento de la pobreza se multiplicó por 2,1, mientras la brecha prácticamente se triplicaba y su severidad se multiplicaba por 3,5. Esto revela que, además del aumento de la proporción de personas pobres, se acentuó el deterioro del ingreso medio y de su distribución entre los pobres. En cambio, en las áreas urbanas de Ecuador, los índices PG y FGT_2 decrecieron en proporción mayor que la incidencia de la pobreza, lo que da cuenta de una considerable mejora de la situación de los pobres.

2 Es digno de mención el hecho de que, en varios países, los cambios introducidos en las encuestas de hogares pueden poner en riesgo la posibilidad de comparación de los datos recopilados en años anteriores. A eso se debe que en el gráfico I.4 no se presenten cifras de Perú ni de República Dominicana antes del 2000, puesto que en ambos países el marco muestral y el diseño y tamaño de la muestra de las encuestas utilizadas se modificaron en varios sentidos. Además, la comparabilidad de las cifras puede haberse visto afectada por el perfeccionamiento de las encuestas de hogares en Colombia, Guatemala, Panamá y México. En CEPAL (2003a), en los recuadros I.3 y I.4, se presenta información más detallada sobre este tema.

Cuadro I.4

AMERICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE POBREZA E INDIGENCIA, 1990-2001/2003 a/									
(En porcentajes)									
País	Año	Hogares y población bajo la:							
		Línea de pobreza b/				Línea de indigencia			
		H		PG	FGT ₂	H		PG	FGT ₂
		Hogares	Población			Hogares	Población		
Argentina c/	1990	16,2	21,2	7,2	3,4	3,5	5,2	1,6	0,8
	1997	13,1	17,8	6,2	3,1	3,3	4,8	1,5	0,7
	1999	13,1	19,7	6,8	3,3	3,1	4,8	1,4	0,7
	2002	31,6	41,5	19,1	11,5	12,0	18,6	7,5	4,1
Bolivia	1989 d/	48,9	52,6	24,5	15,0	21,9	23,0	9,7	6,1
	1997	56,7	62,1	33,6	22,8	32,7	37,2	18,6	12,1
	1999	54,7	60,6	33,9	24,1	32,1	36,4	20,3	14,7
	2002	55,5	62,4	34,4	23,8	31,7	37,1	19,5	13,5
Brasil	1990	41,4	48,0	23,5	14,7	18,3	23,4	9,7	5,5
	1996	28,6	35,8	16,7	10,4	10,5	13,9	6,2	4,0
	1999	29,9	37,5	17,0	10,2	9,6	12,9	5,3	3,3
	2001	29,9	37,5	17,3	10,7	10,0	13,2	5,8	3,8
Chile	1990	33,3	38,6	14,8	7,9	10,6	12,9	4,3	2,3
	1996	19,7	23,2	7,8	3,8	4,9	5,7	1,9	1,1
	2000	16,6	20,6	7,1	3,7	4,6	5,7	2,1	1,2
	2003	15,4	18,8	6,3	3,2	3,9	4,7	1,7	1,0
Colombia	1994	47,3	52,5	26,6	17,5	25,0	28,5	13,8	9,1
	1997	44,9	50,9	22,9	13,8	20,1	23,5	9,7	5,8
	1999	48,7	54,9	25,6	15,7	23,2	26,8	11,2	6,9
	2002 e/	44,6	50,6	24,1	15,0	20,7	23,7	10,0	6,3
Costa Rica	1990	23,6	26,3	10,7	6,5	9,8	9,9	4,8	3,4
	1997	20,2	22,5	8,5	4,9	7,4	7,8	3,5	2,3
	1999	18,2	20,3	8,1	4,8	7,5	7,8	3,5	2,3
	2002	18,6	20,3	8,4	5,2	7,7	8,2	3,9	2,7
Ecuador e/	1990	55,8	62,1	27,6	15,8	22,6	26,2	9,2	4,9
	1997	49,8	56,2	23,9	13,5	18,6	22,2	7,7	4,1
	1999	58,0	63,5	30,1	18,2	27,2	31,3	11,5	6,3
	2002	42,6	49,0	20,8	11,8	16,3	19,4	6,9	3,7
El Salvador	1995	47,6	54,2	24,0	14,3	18,2	21,7	9,1	5,6
	1997	48,0	55,5	24,4	13,9	18,5	23,3	8,3	4,0
	1999	43,5	49,8	22,9	14,0	18,3	21,9	9,4	5,8
	2001	42,9	48,9	22,7	14,0	18,3	22,1	9,5	5,7
Guatemala	1989	63,0	69,1	35,9	23,1	36,7	41,8	18,5	11,2
	1998	53,5	61,1	27,3	15,4	26,1	31,6	10,7	5,1
	2002	52,8	60,2	27,0	15,4	26,9	30,9	10,7	5,5
Honduras	1990	75,2	80,8	50,2	35,9	53,9	60,9	31,5	20,2
	1997	73,8	79,1	45,6	30,8	48,3	54,4	25,4	15,4
	1999	74,3	79,7	47,4	32,9	50,6	56,8	27,9	17,5
	2002	70,9	77,3	45,3	31,2	47,1	54,4	26,6	16,2
México	1989	39,0	47,7	18,7	9,9	14,0	18,7	5,9	2,7
	1996	43,4	52,9	21,8	11,7	15,6	22,0	7,1	3,3
	2000	33,3	41,1	15,8	8,1	10,7	15,2	4,7	2,1
	2002	31,8	39,4	13,9	6,7	9,1	12,6	3,5	1,4
Nicaragua	1993	68,1	73,6	41,9	29,3	43,2	48,4	24,3	16,2
	1998	65,1	69,9	39,4	27,3	40,1	44,6	22,6	15,1
	2001	62,9	69,4	36,9	24,3	36,3	42,4	19,0	11,7

(continúa)

AMERICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE POBREZA E INDIGENCIA, 1990-2001/2003 a/									
(En porcentajes)									
País	Año	Hogares y población bajo la:							
		Línea de pobreza b/				Línea de indigencia			
		H		PG	FGT ₂	H		PG	FGT ₂
		Hogares	Población			Hogares	Población		
Panamá e/	1991	33,6	39,9	17,9	10,9	13,9	16,2	7,3	4,7
	1997	24,6	29,7	12,1	6,9	8,6	10,7	4,3	2,5
	1999	20,8	25,7	9,9	5,4	6,6	8,1	3,1	1,8
	2002	21,4	25,3	10,0	5,6	8,0	8,9	3,3	1,8
Paraguay	1990 f/	36,8	43,2	16,1	8,0	10,4	13,1	3,6	1,5
	1996 e/	39,6	46,3	18,5	9,8	13,0	16,3	5,0	2,4
	1999	51,7	60,6	30,2	19,0	26,0	33,8	14,5	8,5
	2001	52,0	61,0	30,3	19,5	26,5	33,2	15,4	9,6
Perú	1997	40,5	47,6	20,8	12,0	20,4	25,1	10,1	5,7
	1999	42,3	48,6	20,6	11,7	18,7	22,4	9,2	5,1
	2001 g/	46,8	54,8	-	-	20,1	24,4	-	-
República Dominicana	2000	43,0	46,9	22,1	13,9	20,6	22,1	10,1	6,7
	2002	40,9	44,9	20,5	12,9	18,6	20,3	9,3	6,3
Uruguay e/	1990	11,8	17,9	5,3	2,4	2,0	3,4	0,9	0,4
	1997	5,7	9,5	2,8	1,2	0,9	1,7	0,5	0,2
	1999	5,6	9,4	2,7	1,2	0,9	1,8	0,4	0,2
	2002	9,3	15,4	4,5	1,9	1,3	2,5	0,6	0,2
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	34,2	39,8	15,7	8,5	11,8	14,4	5,0	2,4
	1997	42,3	48,0	21,0	12,0	17,1	20,5	7,4	3,8
	1999	44,0	49,4	22,6	13,7	19,4	21,7	9,0	5,5
	2002	43,3	48,6	22,1	13,4	19,7	22,2	9,3	5,7
América Latina h/	1990	41,0	48,3	-	-	17,7	22,5	-	-
	1997	35,4	43,5	-	-	14,4	19,0	-	-
	1999	35,4	43,9	-	-	14,1	18,7	-	-
	2000	34,5	42,5	-	-	13,8	18,1	-	-
	2001	35,0	43,2	-	-	13,9	18,5	-	-
	2002	36,1	44,0	-	-	14,6	19,4	-	-

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Nota: H=índice de recuento; PG= brecha de pobreza (*poverty gap*); FGT₂= índice de Foster, Greer y Thorbecke.

a/ Para la definición de cada indicador, véase el recuadro I.2. Los índices PG y FGT₂ están calculados con base en la distribución de la población pobre.

b/ Incluye hogares (personas) en situación de indigencia o en extrema pobreza.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Ocho capitales departamentales más la ciudad de El Alto.

e/ Área urbana.

f/ Área metropolitana de Asunción.

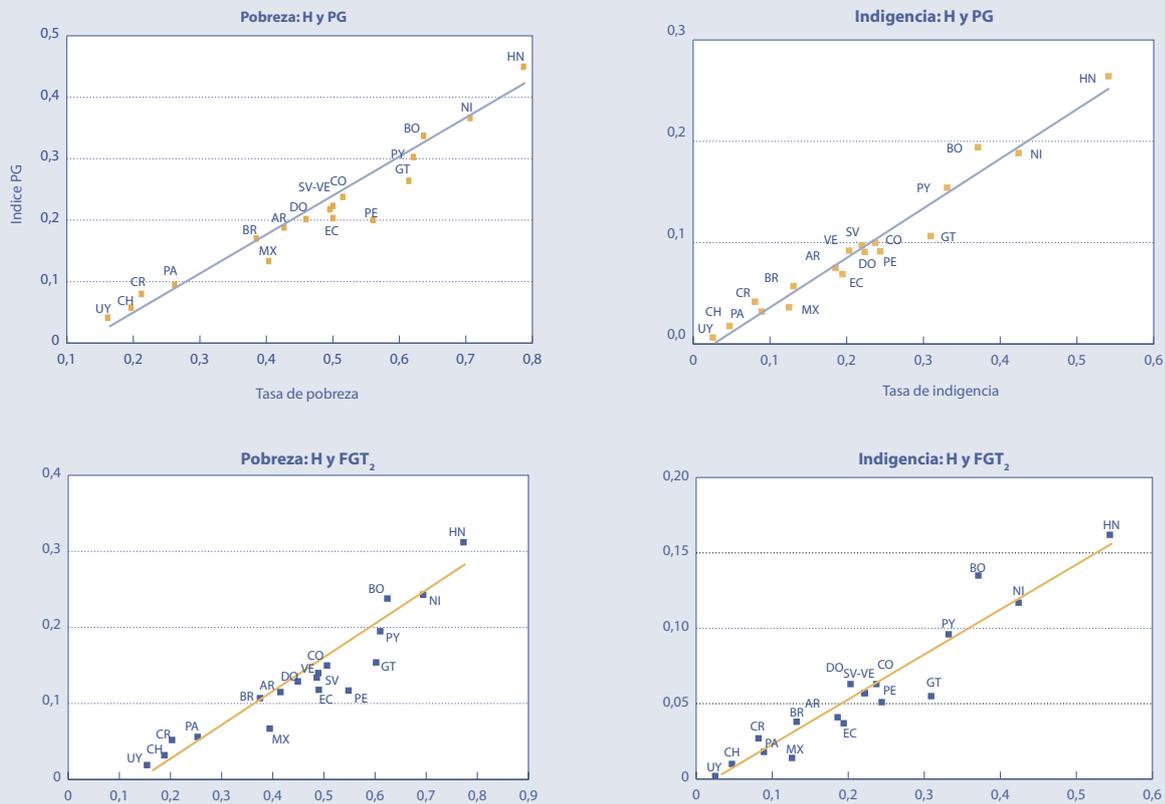
g/ Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. Estos valores no son comparables con los de años anteriores debido al cambio del marco muestral de la encuesta de hogares. De acuerdo con el INEI, las nuevas cifras presentan una sobreestimación relativa, respecto a la metodología anterior, de 25% en la pobreza y de 10% en la indigencia.

h/ Estimación para 18 países de la región más Haití.

Por último, cabe destacar que, a pesar del estancamiento del proceso de reducción de la pobreza monetaria en la región, una amplia variedad de indicadores sociales —entre otros, la esperanza de vida al nacer, las tasas de mortalidad infantil y de los

menores de 5 años y el analfabetismo— han seguido mejorando en los últimos años, prolongando así la tendencia de las décadas anteriores (véase el cuadro 2 del anexo estadístico). En general, estos indicadores presentan una cierta correspondencia con los

Gráfico I.5

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): ÍNDICES DE INCIDENCIA DE POBREZA, 2001-2003 (BRECHA DE POBREZA Y FGT₂)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

niveles de pobreza relativos de los países. En efecto, los países con índices de pobreza más bajos —como Chile, Costa Rica y Uruguay— muestran casi sin excepción mejores indicadores que los demás; asimismo, Bolivia, Paraguay y Guatemala, países que se caracterizan por altos niveles de pobreza e indigencia, presentan los niveles más altos de carencias sociales.

Por otra parte, es importante recalcar que, más allá de los promedios, los indicadores sociales varían considerablemente según el nivel de ingreso y el lugar de residencia.³ Por ejemplo, en las áreas urbanas la asistencia escolar de los jóvenes provenientes de

los hogares más pobres es notablemente inferior a la del quintil más rico, sobre todo en los grupos de 13 a 19 y de 20 a 24 años. Asimismo, el porcentaje de personas con menos de cinco años de instrucción es mucho más alto en las zonas rurales que en las urbanas, y el promedio de años de instrucción es sistemáticamente más bajo en las primeras (véanse los cuadros 28 a 34 del anexo estadístico). Esto demuestra que en el largo camino que debe recorrer la región en términos de reducción de la pobreza no pueden descuidarse las consideraciones sobre equidad si se aspira a corregir las marcadas disparidades que subsisten entre los grupos socioeconómicos.

3 En América Latina, las disparidades responden también al género y el origen étnico o racial, pero el análisis de estas dimensiones de la inequidad escapa a los propósitos del presente capítulo.

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA

En el proceso de medición de la pobreza suelen reconocerse al menos dos etapas: i) la **identificación** de las personas pobres y ii) la **agregación** de la pobreza en una medida sintética. El primer proceso, descrito en detalle en el recuadro I.1, consiste en distinguir a la población cuyo ingreso por habitante es inferior al costo de una canasta de satisfactores de las necesidades básicas. El segundo proceso consiste en la medición de la pobreza mediante indicadores que sintetizan los datos pertinentes en una sola cifra.

Las medidas de pobreza utilizadas en este documento corresponden a la categoría de índices paramétricos propuestos por Foster, Greer y Thorbecke, a/ que se obtienen a partir de la siguiente expresión:

$$FGT_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha} \quad (1)$$

en este caso n representa el tamaño de la población, q equivale al número de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza o indigencia (z) y el parámetro $\alpha > 0$ asigna distintos grados de relevancia a la diferencia en términos de ingresos (y) entre cada persona pobre o indigente y la línea de pobreza o indigencia.

Cuando $\alpha = 0$, la expresión (1) corresponde al **índice de recuento (H)**, que contabiliza la proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza o indigencia:

$$H = q/n \quad (2)$$

Debido a su facilidad de cálculo e interpretación, este indicador es el más utilizado en los estudios sobre pobreza. En cambio, el índice de recuento brinda una visión muy limitada de la pobreza, puesto que no proporciona información sobre el nivel de pobreza de los pobres, ni toma en consideración la distribución de sus ingresos.

Por otra parte, cuando $\alpha = 1$, ofrece un indicador del déficit relativo de ingresos de los pobres con respecto al valor de la línea de pobreza o indigencia, que se conoce como **brecha de la pobreza (PG)** o de indigencia:

$$PG = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right] \quad (3)$$

El índice de brecha de la pobreza o indigencia se considera más completo que el índice de recuento, porque no solo toma en cuenta la proporción de personas pobres o indigentes, sino también la diferencia entre sus ingresos y la línea de pobreza o indigencia, lo que significa que añade información sobre el grado de pobreza o indigencia.

Por último, cuando $\alpha = 2$ ofrece un índice en el que también se considera el grado de disparidad en la distribución del ingreso entre los pobres o indigentes. Este indicador también mide la distancia entre la línea de pobreza o indigencia y el ingreso individual, pero eleva al cuadrado dicha distancia para dar un mayor peso relativo en el resultado final a quienes están más lejos de superar la pobreza o indigencia:

$$FGT_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^2 \quad (4)$$

Los valores del índice FGT_2 no son tan sencillos de interpretar como los de los índices **H** y **PG**, pero por el hecho de ser más completo es preferible utilizarlo para la formulación y evaluación de políticas, como también para hacer comparaciones de pobreza entre unidades geográficas o grupos sociales.

Los tres indicadores mencionados tienen una propiedad en común: la "descomposición aditiva", según la cual el índice de pobreza de una población es equivalente a la suma ponderada de los índices de cada uno de los subgrupos que la conforman. Tomando en cuenta ese factor, para el cálculo de los índices nacionales de pobreza e indigencia presentados en esta publicación se han promediado los índices correspondientes a cada área geográfica, ponderados por el porcentaje de la población que la habita.

a/ James Foster; Joel Greer y Erik Thorbecke, "A class of decomposable poverty measures", *Econometrica*, vol. 52, 1984.

CHILE: IMPORTANTES AVANCES EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Desde hace varios años, Chile ha sido destacado como uno de los ejemplos más notables de reducción de la pobreza en América Latina. Entre 1990 y 2000, su tasa de pobreza disminuyó 18 puntos porcentuales, de un 38,6% a un 20,6%, mientras la indigencia se reducía cerca de 7 puntos porcentuales, del 12,9% al 5,7%.

Las nuevas cifras disponibles, correspondientes al año 2003, confirman esta tendencia. Tras una nueva disminución, la incidencia de la pobreza y la indigencia ascendieron al 18,8% y el 4,7% respectivamente, lo que no solo sitúa a Chile como el país de la región con el segundo porcentaje más bajo de población pobre, después de Uruguay, sino que lo convierte en la única nación latinoamericana que ya redujo sus niveles de pobreza extrema y pobreza total a la mitad, superando la primera meta propuesta en los objetivos de desarrollo del Milenio.

Sin duda, los satisfactorios resultados conseguidos en materia de superación de la pobreza se deben en gran medida al apreciable desarrollo económico que ha caracterizado a Chile en estos años. Entre 1990 y 2003, el aumento acumulado del producto interno bruto por habitante fue de un 62% en términos reales, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual del 3,8%, tres puntos porcentuales más de lo que registró la región en su conjunto.

Sin embargo, la traducción del crecimiento del producto en un mejoramiento tangible de las condiciones de vida de la población difícilmente se habría logrado sin el aumento de la inversión social y la puesta en marcha de programas orientados a la superación de la pobreza. El gasto público social mostró un importante aumento, como porcentaje del PIB (del 11,7% en 1990-1991 al 16,0% en 2000-2001) y en relación con el gasto público total (de un 60,8% a un 69,7% en el mismo período) (CEPAL, 2003a, cap. IV).

Por lo tanto, en Chile la situación de los hogares pobres es más favorable que la de las familias de escasos recursos en los demás países. En el ámbito demográfico, los hogares pobres chilenos tienen el promedio más bajo de hijos de la región (1,7 junto con Argentina, Costa Rica y República Dominicana) y la más baja tasa de dependencia demográfica (0,84), en tanto que el promedio de años de estudio de los jefes de hogares pobres y sus cónyuges, de 7,7 y 7,9 años respectivamente, son los más altos junto con los de las áreas urbanas de Argentina. Chile también presenta uno de los niveles más elevados de escolaridad de la población de 6 a 15 años en hogares pobres, cuyo promedio es de 3,8 años de estudio. Asimismo, en Chile se observan los porcentajes más bajos de hogares pobres con dos o más necesidades insatisfechas en materia de vivienda y acceso a servicios básicos (véanse los cuadros I.5, I.7 y I.9).

A pesar del vigoroso crecimiento económico y el significativo aumento del gasto social, Chile registra uno de los índices de concentración del ingreso más altos. Esta situación plantea la necesidad de fortalecer el desarrollo social con políticas que permitan una distribución más equitativa del excedente económico entre los segmentos de la sociedad y que, además de atender las necesidades básicas de las familias pobres, se orienten a mejorar las condiciones laborales y salariales de los estratos menos favorecidos de la fuerza de trabajo.

B. PERSPECTIVAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA⁴

Las posibilidades futuras de cumplimiento de la meta de reducción de la pobreza extrema a la mitad representan un desafío mayor de lo que se preveía el año pasado, aun cuando al parecer es factible en el caso de muchos países de la región. En efecto, el porcentaje de avance proyectado hasta el 2004 para toda la región es de apenas un 34,2%, pese a haber transcurrido poco más de la mitad del período establecido en la Declaración del Milenio. En este contexto, y en el supuesto de que la distribución del ingreso se mantuviera en torno a los niveles actuales, el producto por habitante tendría que incrementarse en un promedio del 2,9% anual durante los próximos 11 años para la consecución del objetivo mencionado. Por ello, la adopción de políticas redistributivas, como las destinadas a elevar la inversión social y ampliar los programas asistenciales que complementen el fomento del desarrollo productivo, es imprescindible para que la mayoría de países responda al reto planteado en materia de reducción de la pobreza.

Una de las metas de desarrollo que ha concitado más atención desde que se adoptara la Declaración del Milenio es la de reducir a la mitad el porcentaje de personas que viven en condiciones de extrema pobreza o indigencia en el período comprendido entre 1990 y el año 2015.⁵ En vista del creciente interés por conocer en qué medida ha respondido América Latina a este desafío y las posibilidades de hacerlo oportunamente, en este capítulo

se ofrece una actualización de los estudios sobre el tema dados a conocer en ediciones anteriores del *Panorama social de América Latina*.

Cabe destacar que la CEPAL ha venido planteando desde hace algunos años la conveniencia de dar seguimiento a la primera meta del Milenio a partir de mediciones de extrema pobreza específicas para cada país. La meta, formulada originalmente como

4 Con el fin de establecer una base de comparación similar para todos los países, las cifras sobre indigencia y pobreza de esta sección corresponden a las proyecciones nacionales del año 2004 (la metodología se detalla en el recuadro I.4). Por lo tanto, las tendencias reportadas pueden no corresponder exactamente a las que se describieron en la sección anterior, en la que se utilizan las mediciones más recientes disponibles, casi todas referidas a los años 2001 o 2002, y en muchos casos correspondientes a coberturas subnacionales.

5 Véase CEPAL (2002a), recuadro I.3.

reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día, subestima la magnitud de las carencias sociales en un gran número de países de la región (CEPAL, 2002a).

Según nuevas proyecciones de la situación de pobreza en el 2004, con base en extrapolaciones de las mediciones hechas en el 2002 a partir del crecimiento económico observado en cada país en el último año, América Latina no ha logrado avanzar significativamente en la senda que lleva a la reducción de la pobreza extrema. Conviene recordar que en el año 2000 la región registraba un grado de cumplimiento cercano al 40%, muy acorde con el plazo transcurrido hasta entonces para el cumplimiento de la meta. Debido a la crisis económica que afectó a varios países en los años siguientes, en el 2002 este porcentaje se redujo a un 27,6%. De cumplirse las proyecciones conjeturales para el año 2004, este indicador se situaría en torno al 34,2%, lo que si bien constituye un adelanto importante, es considerablemente inferior al avance esperado, de un 56% (véase el gráfico I.6).

Ya en el año 2000, Chile era el único país de la región que había cumplido la meta de reducción de la pobreza extrema. Las cifras más recientes para ese país, correspondientes al 2004, confirman esa situación, puesto que revelan una nueva disminución de la indigencia. Si se toma como referencia el comportamiento macroeconómico de los países en el 2004, cabría esperar que, fuera de Chile, solo en Brasil, Ecuador, México, Panamá y Uruguay los porcentajes de avance sean iguales o superiores al 56%. Entretanto, Argentina y la República Bolivariana de Venezuela seguirían presentando un nivel de indigencia superior al de 1990.

A su vez, la reducción de la pobreza total a la mitad hasta el año 2015, respecto de los niveles observados en 1990 es una meta en cuya consecución América Latina ha avanzado apenas un 22%. De manera similar a lo sucedido en el caso de la

pobreza extrema, este porcentaje es algo superior al registrado en el 2002.

También en este caso, Chile es el primer país de la región que ha cumplido la meta más exigente de reducir la tasa de pobreza a la mitad. Las proyecciones efectuadas revelan que Costa Rica, Panamá y Uruguay estarían manteniendo un ritmo adecuado de reducción de la pobreza, ya que en ambos casos el porcentaje de avance es ligeramente superior a lo que correspondería por el de tiempo transcurrido. Brasil, Ecuador y México habrían alcanzado un porcentaje de avance del 40% o más.

Los datos sobre el avance insuficiente en el cumplimiento de la primera meta del Milenio, sumada a la reducción del tiempo disponible para su consecución, afecta directamente la tasa de crecimiento económico que la región debería alcanzar en el período 2004-2015 para este fin. En efecto, las simulaciones efectuadas a partir de las encuestas de hogares más recientes de los países de la región indican que el producto por habitante de América Latina tendría que aumentar al 2,9% anual en los próximos 11 años para que fuera posible reducir la pobreza extrema a la mitad, en el supuesto de que la distribución del ingreso no tenga mayores fluctuaciones en ese período (véase el gráfico I.7).⁶

El incremento del producto varía de un país a otro, según sus niveles de pobreza extrema. En el grupo de países en los que este indicador presenta un valor más bajo (Chile, Costa Rica y Uruguay), el producto por persona tendría que expandirse a no más de un 0,4% anual. Esto se ilustra con claridad en los casos de Chile y Uruguay, que necesitan un alza del producto total apenas similar al crecimiento de la población.

Entre los países con un nivel medio de indigencia se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y la República Bolivariana de Venezuela, para los cuales la reducción a la mitad de la pobreza extrema exige un crecimiento

6 Véase el recuadro I.4, en el que se presenta una descripción detallada de la metodología aplicada.

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PORCENTAJES DE AVANCE EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA POBREZA TOTAL ENTRE 1990 Y 2004 a/

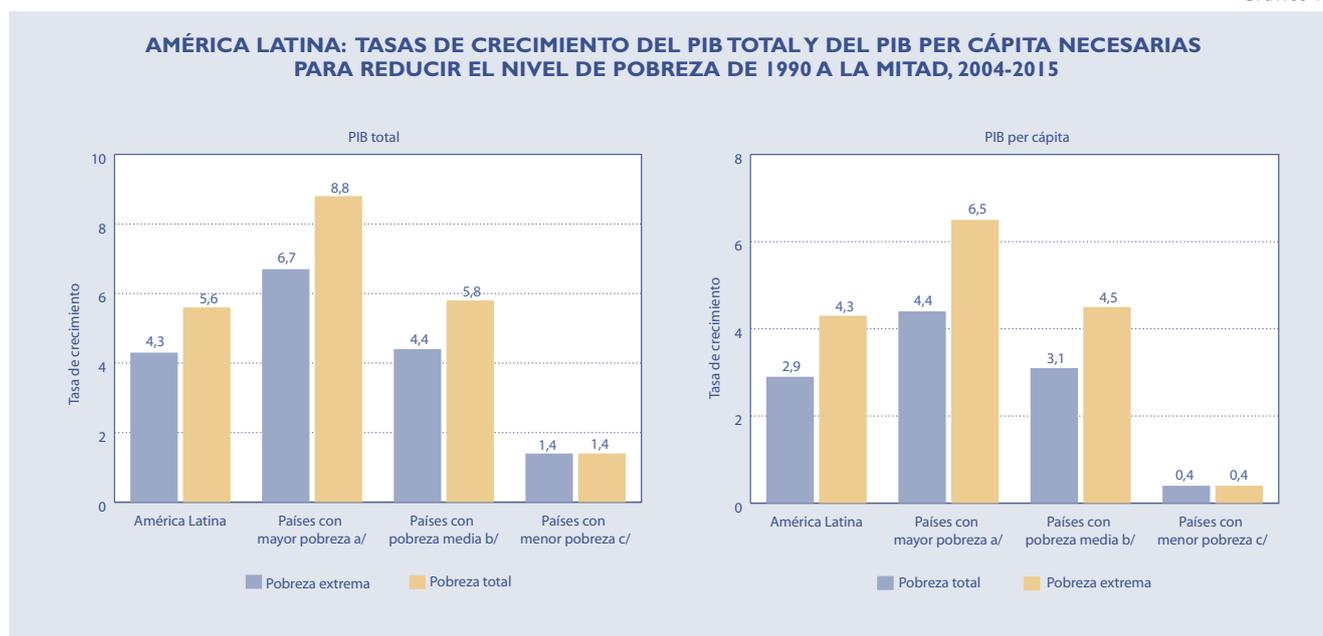


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ El porcentaje de avance se calcula dividiendo la reducción (o aumento) de la pobreza (o indigencia) en puntos porcentuales observada en el período por la mitad de la tasa de pobreza (o indigencia) de 1990. Las líneas punteadas representan el porcentaje de avance esperado al 2000 (40%, línea izquierda) y al 2004 (56%, línea derecha).

b/ Área urbana.

Gráfico I.7



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay.

b/ Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y República Bolivariana de Venezuela.

c/ Chile, Costa Rica y Uruguay.

promedio por habitante del orden del 3,1% anual. Este valor medio depende en gran medida de la situación de Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, que en los últimos años han sufrido retrocesos en materia de lucha contra la pobreza, lo que se refleja en la necesidad de crecer a un ritmo muy elevado, en el supuesto de que no se produzcan cambios en la distribución actual del ingreso.

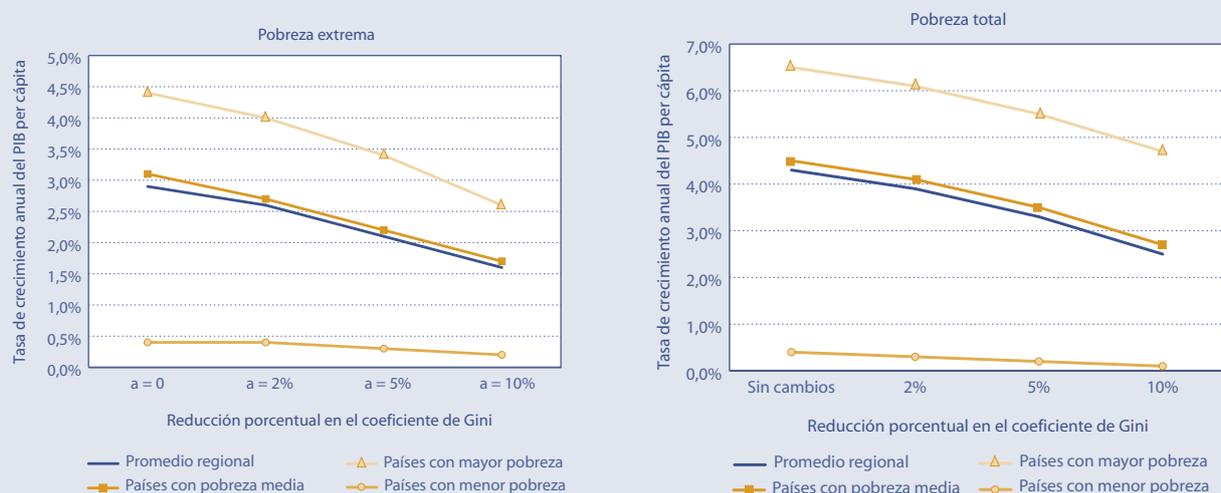
En Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay, países con niveles de indigencia superiores al 30%, el PIB por habitante debería incrementarse al 4,4% anual en los próximos doce años, lo que conduciría a una expansión del 6,7% por año del producto total. En este grupo de países también se observa una dispersión considerable, ya que sus tasas de crecimiento anual fluctúan entre el 2,1% de Guatemala y el 6,7% de Bolivia.

En relación con el reto que plantea el reducir la pobreza a la mitad, la CEPAL ha insistido en que una mejor distribución del ingreso puede potenciar el efecto del crecimiento económico. En efecto, como se observa en el gráfico I.8, la tasa de crecimiento

regional proyectada para alcanzar la meta de pobreza extrema podría reducirse en aproximadamente 0,2 puntos porcentuales por cada punto porcentual de disminución del coeficiente de Gini. Por lo tanto, en caso de que ese indicador descendiera un 5%, porcentaje que equivale a alrededor de 0,025 puntos de su valor, el producto regional por habitante debería crecer al 2,1% anual, en lugar del 2,9% mencionado anteriormente (véase el gráfico I.8). No debe perderse de vista que esta mejora de la distribución del ingreso sería insuficiente para que la región deje de ser una de las más inequitativas del mundo, tema que se analiza con detalle en la sección D de este capítulo.

Lo anterior corrobora la importancia de la redistribución del ingreso como un factor muy importante que podría facilitar a la región el cumplimiento de las metas de reducción de la pobreza, sobre todo en aquellos casos en que las tasas de crecimiento requeridas son de difícil consecución. En este sentido, el aumento de la inversión social y de los programas asistenciales, así como la mayor integración de las personas de bajos recursos al aparato productivo, son fundamentales para avanzar en la dirección propuesta.

AMÉRICA LATINA: CAMBIO EN LAS TASAS DE CRECIMIENTO REQUERIDAS PARA REDUCIR LA POBREZA A LA MITAD SEGÚN EL GRADO DE CAMBIO DISTRIBUTIVO, 2004-2015



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Recuadro I.4

METODOLOGÍA EMPLEADA EN LAS PROYECCIONES

Determinar la relación que existe entre la evolución de la pobreza y el crecimiento del producto de un país es una tarea compleja, pero dada la importancia que tiene la evaluación de las posibilidades de mejorar las condiciones de vida en la región en los años venideros, se ha considerado conveniente realizar algunas proyecciones de la pobreza que, aunque muy generales, permiten una primera aproximación a las tasas de expansión que necesitarían los países de América Latina para reducir la pobreza extrema a la mitad hasta el 2015.

La metodología empleada consiste en simular una distribución del ingreso (y^*) aplicando determinadas tasas de crecimiento (β) y de cambio distributivo (α) a los ingresos por habitante de los hogares (y) de cada país, determinados mediante las encuestas de hogares. Para ello se utilizan las siguientes ecuaciones:^a

$$\text{Si } y \geq \mu: y^* = (1 + \beta) [(1 - \alpha) y_i + \alpha \mu]$$

$$\text{Si } y < \mu: y^* = (1 + \beta) [\theta y_i], \text{ donde } \theta \text{ se calcula de manera que } \mu^* = (1 + \beta)\mu.$$

(donde μ representa la media de la distribución de ingresos)

El procedimiento consiste en incrementar los ingresos inferiores a la media a una tasa fija y los ingresos superiores a la media a una tasa proporcional a la diferencia entre cada nivel de ingreso y el valor de la media. La aplicación de una tasa de variación constante a los ingresos inferiores a la media refleja mejor la situación regional en este ámbito, caracterizada por el hecho de que la participación de los deciles más pobres tiende a variar moderadamente ante una reducción de la concentración del ingreso.

Cabe advertir que, pese a ser útil en el contexto de esta publicación, la fórmula descrita es menos general que la original, ya que modifica la estructura interna de la distribución y puede no producir los resultados deseados para valores elevados de α .

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

a/ Esta metodología plantea un leve cambio con respecto de la utilizada en CEPAL, *Panorama social de América Latina 2001-2002* (LC/G.2183-P), Santiago de Chile, 2002. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.02.II.G.65, que a su vez correspondía a la desarrollada en "Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza en América Latina y el Caribe", serie *Libros de la CEPAL*, N° 70 (LC/G.2188-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), febrero del 2003. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.02.II.G.125.

C. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA POBREZA

Entre los rasgos más representativos de los hogares pobres destacan su elevado tamaño medio y la mayor presencia de niños, la baja dotación de capital educativo de los adultos y la inserción laboral precaria de los ocupados. Estas características se manifiestan de manera más marcada en los países con niveles más elevados de pobreza, donde además un alto porcentaje de la población continúa sin tener acceso a viviendas adecuadas y a servicios sociales básicos como el agua potable y el saneamiento. Aun cuando se han dado algunos avances en términos de reducción de la dependencia demográfica o el aumento de los niveles educativos respecto de los años noventa, los factores vinculados a la pobreza siguen prácticamente iguales a los de entonces. El logro de adelantos sustentables en materia de alivio de la pobreza plantea el desafío de formular políticas que, atendiendo a las particularidades propias de cada país, conjuguen las dimensiones demográficas, educacionales y ocupacionales, y otorguen especial importancia a la protección social y la provisión de servicios básicos.

El estudio de las condiciones de vida de los pobres en América Latina, identificadas como tales en función de la insuficiencia de sus recursos monetarios, es un requisito esencial para comprender mejor el fenómeno de la pobreza y formular políticas orientadas a superarla. Con el interés de hacer un aporte a este objetivo, en la presente sección se ofrece un análisis de los elementos más comunes en los hogares pobres y que permiten diferenciarlos de los demás. Esos rasgos abarcan ámbitos tan variados como el tamaño y la composición del hogar, la dotación de capital humano, la posibilidad de participar

adecuadamente en el mercado laboral, y el acceso a la vivienda y servicios básicos.

Es importante señalar que en esta sección no se pretende identificar una relación de causalidad con la pobreza, sino evidenciar algunos factores que están íntimamente vinculados con la insuficiencia de ingresos. Para determinar si los rasgos expuestos son causas o consecuencias de la pobreza será necesario tomar en cuenta la evolución de cada país y, en particular, la perspectiva temporal que se haya adoptado en el análisis. A manera de ejemplo, a corto plazo

el hecho de que los niños de hogares pobres deban abandonar sus estudios para colaborar en la generación de ingresos para el hogar es consecuencia de la pobreza; no obstante, la insuficiente formación de capital educativo de esos niños sin duda limitará considerablemente sus posibilidades de escapar de la pobreza más adelante, por lo que constituye una de las causas de la transmisión intergeneracional de este fenómeno.

En lo que respecta al tamaño del hogar, se confirma que los hogares pobres se caracterizan por tener

un gran número de miembros, la mayor parte de los cuales suelen ser niños, situación que a su vez da lugar a altas tasas de dependencia demográfica. En 14 países de la región, el número de niños y adultos mayores que viven en hogares pobres es igual o superior al número de personas en edad de trabajar, por lo que la tasa de dependencia demográfica iguala o excede la unidad y se traduce en una alta carga para los miembros responsables de mantener a la familia (véase el cuadro I.5).

Cuadro I.5

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): RASGOS SELECCIONADOS DE LOS HOGARES POBRES, 1999-2003											
País	Año	Tasa de pobreza (hogares)	Tamaño del hogar			Educación	Capacidad de generación de ingresos				Vivienda y servicios básicos
			Tamaño medio	Número promedio de niños	Tasa de dependencia demográfica b/		Promedio de años de estudio de los adultos	Tasa de participación c/	Tasa de desocupación d/	Densidad ocupacional e/	
Uruguay a/	2002	9,3	5,1	2,2	1,05	6,7	0,70	0,28	0,27	1,45	8,4
Chile	2003	15,4	4,6	1,7	0,84	7,8	0,51	0,24	0,21	2,03	2,5
Costa Rica	2002	18,6	4,3	1,7	1,05	5,0	0,52	0,16	0,21	2,07	9,2
Panamá	2002	21,4	4,9	2,1	1,03	5,9	0,69	0,24	0,29	1,45	...
Brasil	2001	29,9	4,5	1,9	0,91	3,8	0,73	0,14	0,35	1,15	21,1
Argentina a/	2002	31,6	4,5	1,7	0,87	7,9	0,64	0,26	0,25	1,57	1,7
México	2002	31,8	5,1	2,1	1,02	...	0,65	0,03	0,35	1,33	30,1
Rep. Dominicana	2002	40,9	4,3	1,7	1,05	5,5	0,62	0,24	0,23	1,91	19,6
Perú	1999	42,3	5,4	2,3	1,08	5,4	0,79	0,05	0,40	3,23	58,3
Ecuador a/	2002	42,6	4,7	1,9	0,99	...	0,70	0,08	0,34	1,57	20,8
El Salvador	2001	42,9	5,0	2,1	1,13	3,6	0,69	0,11	0,31	2,20	68,7
Venezuela (Rep. Bolivariana de)	2002	43,3	5,0	2,1	0,98	6,2	0,71	0,23	0,29	1,64	16,6
Colombia	1999	48,7	4,7	1,8	0,90	5,1	0,71	0,20	0,31	1,54	10,3
Paraguay	2001	52,0	5,5	2,5	1,15	4,9	0,79	0,10	0,37	1,10	31,0
Guatemala	2002	52,3	5,7	3,0	1,49	2,4	0,86	0,04	0,37	1,18	42,0
Bolivia	2002	55,5	4,9	2,2	1,09	4,9	0,95	0,04	0,49	0,87	52,9
Nicaragua	2001	62,9	5,9	2,6	1,11	3,7	0,78	0,12	0,34	1,27	78,2
Honduras	2002	70,9	5,5	2,5	1,18	3,5	0,69	0,04	0,34	1,05	53,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Áreas urbanas.

b/ Número de personas de 0 a 14 años y de 65 o más años dividido por el número de personas en edad de trabajar (15 a 64 años de edad).

c/ Población económicamente activa (ocupados y desocupados) dividida por la población en edad de trabajar.

d/ Número de desocupados dividido por la población económicamente activa. Cabe advertir que este dato no es estrictamente comparable con las tasas de desocupación reportadas en otras publicaciones de la CEPAL, por provenir de fuentes de información distintas.

e/ Número de ocupados dividido por el número de personas del hogar.

f/ Ingreso medio de los ocupados expresado como fracción del valor de la línea de pobreza.

g/ Las variables consideradas se especifican en el cuadro I.9.

La posibilidad de generar ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de consumo de los integrantes del hogar se ve mermada tanto por la baja tasa de ocupación de estos en el hogar como por la reducida capacidad de percibir ingresos de los que tienen trabajo. Por una parte, la baja tasa de densidad ocupacional —cociente calculado mediante la división del total de miembros del hogar con trabajo por su número de integrantes— responde tanto a la escasa participación de los miembros de los hogares pobres como a las dificultades para conseguir empleo que enfrentan los que buscan trabajo activamente. Este fenómeno se hace mucho más evidente en países como Chile, Costa Rica o República Dominicana, entre otros, donde solo uno de cada cuatro miembros del hogar tiene una ocupación. Por otra parte, en los hogares con una gran proporción de integrantes ocupados, la pobreza obedece fundamentalmente a los bajos ingresos. Uno de los ejemplos más notables de esta situación es lo ocurre en Bolivia, donde la mitad de los miembros de los hogares pobres tienen trabajo, pero su ingreso ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades básicas de los propios perceptores.

Uno de los elementos más determinantes del nivel de ingresos laborales y la calidad del empleo es la dotación de capital humano de los integrantes de la fuerza laboral. En muchos países de la región, el nivel promedio de estudios de los miembros adultos de hogares pobres corresponde a educación primaria incompleta y, en algunos casos, inferior a tres años de estudio.

En consecuencia, es muy probable que el empleo a que accedan sea en sectores de baja productividad y con bajos salarios, muy inestable y que no ofrezca prestaciones sociales de salud y jubilación. De hecho, en la mayoría de los países el ingreso individual de los ocupados provenientes de hogares pobres es suficiente para cubrir sus propias necesidades básicas, pero deja un margen muy reducido para atender las de cualquier otro miembro del hogar; como se indicó anteriormente, Bolivia es el ejemplo más dramático de este fenómeno en América Latina.

El inadecuado saneamiento y la falta de los servicios más básicos son una clara manifestación de la baja calidad de vida de los hogares de escasos recursos, sobre todo en países con altas tasas de pobreza. En efecto, entre los países con tasas de pobreza inferiores al 20% la coexistencia de dos o más situaciones de carencia afecta a menos de la décima parte de los hogares pobres; en cambio, el porcentaje supera el 50% en Bolivia, Nicaragua y Honduras. En varios países con tasas de pobreza superiores al 40% el hacinamiento (gran número de personas por dormitorio), y la falta de agua potable y de servicios sanitarios y de luz eléctrica en la vivienda también afectan a un alto porcentaje de la población no identificada como pobre.

La interacción de los factores mencionados configura un complejo entramado que limita el desarrollo de las capacidades personales, y menoscaba las oportunidades de las familias pobres de percibir los ingresos necesarios y superar la condición de pobreza a partir de su propio esfuerzo. El carácter estructural de este fenómeno queda aun más en evidencia cuando se observa que, pese a haber transcurrido más de una década, los factores relacionados con la pobreza siguen siendo prácticamente los mismos que en los años noventa. Para romper esta rígida configuración que perpetúa la pobreza a través de su transmisión intergeneracional se requieren políticas públicas coordinadas que influyan simultáneamente en todos los ámbitos analizados.

1. FACTORES DEMOGRÁFICOS

A pesar de la importante reducción de las tasas de natalidad que ha caracterizado a la región en las últimas décadas, el alto número de habitantes por hogar sigue siendo un factor estrechamente relacionado con la escasez de recursos, tanto en la comparación entre grupos de hogares pobres y demás hogares como en el cotejo de la situación de países con distintas incidencias de pobreza.

En general, los países con menores tasas de pobreza también se caracterizan por tener hogares

integrados por menos personas, lo que demuestran que se encuentran en una etapa más avanzada de la transición demográfica.⁷ En Chile, Costa Rica y Uruguay, países con las tasas de pobreza más bajas de la región, el tamaño medio de los hogares es inferior a cuatro personas, situación similar a la que se presenta en Argentina y República Dominicana, economías que aun cuando actualmente presentan incidencias de pobreza de nivel medio, lograron reducir este indicador en el pasado. En contraste, en algunos de los países con mayor incidencia de pobreza —entre otros, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay—, el tamaño medio de los hogares es de aproximadamente seis personas (véase el cuadro I.5).

En el plano nacional, la relación entre pobreza y tamaño de la familia se hace particularmente evidente al comparar la situación de los hogares pobres con la de los demás. El número medio de miembros de los primeros supera en alrededor de 1,2 personas el de los segundos, aunque en los casos más extremos la diferencia puede llegar a 2,3 personas.

El tamaño de los hogares pobres obedece en gran medida al gran número de niños de 0 a 14 años que los integran. Entre un 70% y un 90% de los hogares pobres de América Latina albergan por lo menos a un niño o una niña; en cambio, en los demás hogares el porcentaje es considerablemente inferior. Uno de los ejemplos más notables del vínculo entre niñez y pobreza del hogar se da en Uruguay, país en el que el porcentaje de hogares de escasos recursos entre cuyos miembros hay niños duplica con creces el que se observa en los demás hogares.⁸

La presencia de tres o más niños en el hogar es una característica muy distintiva de los grupos de escasos recursos, aun en los países con bajas tasas de fecundidad. En Argentina, Chile y Costa Rica,

entre un 24% y un 28% de los hogares pobres tiene más de dos niños, y este porcentaje asciende a más del 40% en Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. En numerosos países latinoamericanos, esta característica es por sí sola una importante variable predictiva de la probabilidad de que el hogar tenga ingresos insuficientes. En efecto, se comprueba que al menos en once casos, las tres cuartas partes de los hogares con tres o más niños se encuentran en condiciones de pobreza, incluso en un país como Argentina, en el que la incidencia de este fenómeno en todos los hogares es de alrededor del 30% (véase el cuadro I.6).

La elevada concentración de niños en los hogares pobres pone en evidencia la urgente necesidad de invertir en este segmento de la población como condición esencial para asegurar que gocen de un mayor bienestar y evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Las cifras mencionadas, unidas al hecho de que un alto porcentaje de hogares pobres carece de servicios de agua potable y saneamiento, revelan la existencia de un gran número de niños que están expuestos a la desnutrición y a una serie de enfermedades graves, que pueden provocar trastornos irreversibles en su crecimiento e incluso ser mortales. Por consiguiente, es esencial atender a este importante segmento de la población para no poner en riesgo su futuro y, por lo tanto, la viabilidad económica y social de los países.

Sin duda, las personas adultas mayores están cada vez más expuestas a la desprotección social, por lo que son más vulnerables a la pobreza. No obstante, este hecho no es aparente en el perfil simple de los hogares pobres, puesto que, a diferencia de lo que sucede en el caso de los niños, dichos hogares no se caracterizan necesariamente por una mayor presencia de ancianos.⁹ En todo caso, el análisis de las estructuras familiares en las que el vínculo entre

7 En la sección sobre fecundidad del capítulo IV se presenta información similar y se establece un estrecho vínculo entre el nivel de fecundidad y el grado de desarrollo socioeconómico de los países.

8 Debido a que Uruguay es una de las naciones con niveles de pobreza más bajos, llama la atención que algunas de las características de su población pobre sean similares a las de países de menor desarrollo social. En particular, el tamaño promedio de los hogares pobres uruguayos es superior a cinco personas (5,1) y casi un 40% de ellos tiene tres o más niños, cifras comparables a las que se observan en los países centroamericanos.

9 El capítulo IV provee mayores antecedentes sobre el tema del envejecimiento y los problemas que afectan la seguridad económica de las personas adultas mayores en la región.

Cuadro I.6

**AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
DE LOS HOGARES POBRES Y NO POBRES, 1999-2003 a/**
(Porcentaje de hogares)

		Porcentaje de hogares según presencia de niños						Incidencia de pobreza según número de niños en el hogar			
		Hogares no pobres			Hogares pobres			Hogares con 1 a 2 niños		Hogares con 3 o más niños	
		Sin niños	1 a 2 niños	3 o más niños	Sin niños	1 a 2 niños	3 o más niños	Pobres	No pobres	Pobres	No pobres
Uruguay a/ (2002)	Total	66,7	29,1	4,1	15,0	46,9	38,1	14,2	85,8	48,5	51,5
	Jefa mujer	37,8	22,6	20,5	28,1	30,4	24,1	18,1	81,9	52,5	47,5
	Niños 0 a 4 años	...	34,5	64,4	...	42,5	77,7	16,9	83,1	53,2	46,8
Chile (2003)	Total	48,7	45,2	6,1	18,4	57,7	23,9	18,8	81,2	41,5	58,5
	Jefa mujer	32,6	20,0	16,7	34,8	26,4	25,0	23,5	76,5	51,6	48,4
	Niños 0 a 4 años	...	37,1	66,9	...	42,4	71,6	20,9	79,1	43,1	56,9
Costa Rica (2002)	Total	41,6	47,0	11,4	30,2	41,9	27,9	16,9	83,1	35,9	64,1
	Jefa mujer	28,6	20,1	16,4	39,3	31,9	27,3	24,5	75,5	48,3	51,7
	Niños 0 a 4 años	...	40,7	66,5	...	40,1	70,5	16,8	83,2	37,3	62,7
Panamá (2002)	Total	47,1	42,1	10,9	25,1	38,6	36,3	26,7	73,3	57,0	43,0
	Jefa mujer	26,0	21,9	18,5	30,9	29,8	19,4	33,1	66,9	58,2	41,8
	Niños 0 a 4 años	...	45,0	71,4	...	48,1	78,6	28,0	72,0	59,3	40,7
Brasil (2001)	Total	55,6	40,4	4,0	16,7	54,8	28,5	36,6	63,4	75,5	24,5
	Jefa mujer	31,1	18,8	15,0	28,3	21,7	18,6	39,9	60,1	79,2	20,8
	Niños 0 a 4 años	...	38,5	60,4	...	47,1	68,7	41,5	58,5	77,8	22,2
Argentina a/ (2002)	Total	68,0	28,6	3,4	30,3	43,8	25,9	45,1	54,9	80,2	19,8
	Jefa mujer	35,4	17,3	12,4	34,9	26,0	19,3	55,2	44,8	86,4	13,6
	Niños 0 a 4 años	...	39,4	63,2	...	45,1	74,5	48,5	51,5	82,7	17,3
México (2002)	Total	46,4	43,6	10,0	17,1	45,4	37,5	32,7	67,3	63,6	36,4
	Jefa mujer	28,7	15,8	10,0	24,0	17,5	14,5	35,0	65,0	71,7	28,3
	Niños 0 a 4 años	...	40,6	68,3	...	42,6	66,0	33,8	66,2	62,8	37,2
República Dominicana (2002)	Total	47,6	40,6	11,8	26,2	44,6	29,1	43,2	56,8	63,0	37,0
	Jefa mujer	27,1	23,4	16,7	47,7	40,4	29,6	56,8	43,2	75,2	24,8
	Niños 0 a 4 años	...	40,4	58,8	...	38,5	63,0	42,1	57,9	64,6	35,4
Perú (1999)	Total	40,5	47,1	12,4	15,3	41,1	43,6	39,0	61,0	72,0	28,0
	Jefa mujer	28,6	15,1	14,9	26,7	22,0	12,1	48,2	51,8	67,6	32,4
	Niños 0 a 4 años	...	40,3	62,6	...	38,9	72,5	38,2	61,8	74,8	25,2
Ecuador a/ (2002)	Total	46,4	45,4	8,1	19,3	50,9	29,8	45,4	54,6	73,1	26,9
	Jefa mujer	25,7	15,6	13,9	31,4	21,5	20,8	53,3	46,7	80,3	19,7
	Niños 0 a 4 años	...	43,3	65,5	...	49,8	75,2	48,9	51,1	75,7	24,3
El Salvador (2001)	Total	42,8	45,2	12,0	21,8	41,7	36,5	41,0	59,0	69,6	30,4
	Jefa mujer	35,7	31,0	25,6	38,1	31,9	29,3	41,6	58,4	72,4	27,6
	Niños 0 a 4 años	...	44,3	65,0	...	44,9	72,9	41,3	58,7	72,0	28,0
Venezuela (República Bolivariana de) (2002)	Total	41,6	47,6	10,8	19,2	46,2	34,6	42,6	57,4	71,0	29,0
	Jefa mujer	29,9	24,2	21,8	39,8	31,6	28,2	49,2	50,8	76,0	24,0
	Niños 0 a 4 años	...	39,8	66,7	...	44,5	72,7	45,3	54,7	72,8	27,2
Colombia (1999)	Total	48,5	44,6	6,9	21,7	50,3	28,0	51,7	48,3	79,4	20,6
	Jefa mujer	31,6	20,8	14,2	33,7	23,7	19,1	55,0	45,0	83,9	16,1
	Niños 0 a 4 años	...	39,6	62,9	...	43,7	71,4	54,1	45,9	81,4	18,6
Paraguay (2001)	Total	43,4	44,3	12,3	16,2	39,6	44,2	49,2	50,8	79,5	20,5
	Jefa mujer	31,0	21,9	22,6	30,0	26,6	21,0	54,1	45,9	78,3	21,7
	Niños 0 a 4 años	...	47,3	65,5	...	45,7	77,2	48,4	51,6	82,1	17,9
Guatemala (2002)	Total	34,0	42,8	23,2	9,8	30,7	59,5	44,6	55,4	74,2	25,8
	Jefa mujer	23,5	22,9	10,2	25,8	22,3	16,8	43,9	56,1	82,6	17,4
	Niños 0 a 4 años
Bolivia (2002)	Total	42,8	42,7	14,5	20,5	39,1	40,3	53,3	46,7	77,6	22,4
	Jefa mujer	31,0	19,9	11,9	27,7	17,9	10,4	50,6	49,4	75,2	24,8
	Niños 0 a 4 años	...	42,6	68,3	...	44,0	78,6	54,2	45,8	80,0	20,0

(continúa)

Cuadro 1.6 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS HOGARES POBRES Y NO POBRES, 1999-2003 a/ (Porcentaje de hogares)											
		Porcentaje de hogares según presencia de niños						Incidencia de pobreza según número de niños en el hogar			
		Hogares no pobres			Hogares pobres			Hogares con 1 a 2 niños		Hogares con 3 o más niños	
		Sin niños	1 a 2 niños	3 o más niños	Sin niños	1 a 2 niños	3 o más niños	Pobres	No pobres	Pobres	No pobres
Nicaragua (2001)	Total	35,3	47,9	16,8	13,3	41,1	45,6	59,3	40,7	82,2	17,8
	Jefa mujer	31,5	24,8	26,1	41,3	30,7	23,4	64,4	35,6	80,5	19,5
	Niños 0 a 4 años	...	43,2	64,2	...	46,9	73,7	61,3	38,7	84,1	15,9
Honduras (2002)	Total	37,8	48,1	14,2	13,6	40,7	45,7	67,5	32,5	88,7	11,3
	Jefa mujer	32,2	27,9	23,4	32,2	24,8	20,1	64,9	35,1	87,1	12,9
	Niños 0 a 4 años	...	46,0	66,5	...	49,2	76,9	68,9	31,1	90,1	9,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Áreas urbanas.

vejez e insuficiencia de recursos se hace más evidente exige un análisis más extenso que escapa del propósito de este capítulo.

Por otra parte, el hecho de que el hogar esté encabezado por una mujer acentúa las posibilidades de caer en la pobreza, sobre todo en hogares con niños. Las diferencias entre los grupos pobres y los demás en lo que respecta a la influencia de la jefatura femenina en hogares con niños es bastante alta en Costa Rica y República Dominicana, seguidos por Argentina, Chile, Ecuador, la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay. Las únicas excepciones son Bolivia y Honduras (véase el cuadro I.6).¹⁰

2. FACTORES EDUCATIVOS

La inversión en capital educativo es un factor esencial para la reducción de la pobreza y la desigualdad, sobre todo por su capacidad de contribuir a la movilidad social y a la ruptura de la transmisión intergeneracional de la privación. La educación ejerce una importante influencia en el nivel de vida de las personas, no solo por su vinculación

con la posterior inserción laboral, sino también por sus consecuencias en ámbitos tan variados como la atención de la salud, el desarrollo de capital social y el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Aunque en América Latina se han logrado notables adelantos en los niveles educativos de la población en términos generales, subsisten diferencias importantes entre los grupos socioeconómicos (véase el cuadro 29 del anexo estadístico). Sin desconocer que las características y habilidades de cada individuo son relevantes en la determinación de su rendimiento educacional, es evidente que la desigualdad en el acceso a las oportunidades de formación son un factor preponderante.

En promedio, poco más de la mitad de los hogares pobres de América Latina está encabezado por una persona que no completó los seis años de educación primaria y solo un 8% de los jefes de hogares pobres tiene 12 años de estudio cursados.¹¹ El porcentaje de jefes de hogar con menos de seis años de estudio alcanza o supera el 50% en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana (véase el cuadro I.7).

¹⁰ En CEPAL (2003a) se presenta un análisis más detallado de la pobreza desde una perspectiva de género.

¹¹ En la mayoría de los países de América Latina toda la formación correspondiente a la educación primaria se imparte en los primeros seis años de estudio, de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de Educación de 1997 de la UNESCO. Solo Brasil y Colombia tienen ciclos de enseñanza básica más cortos, de cuatro y cinco años respectivamente.

Cabe destacar que el promedio de años de estudio del jefe del hogar está estrechamente relacionado con el nivel educativo del resto de los adultos que componen el hogar. Más aún, es común observar mejores niveles de escolaridad en los cónyuges de los jefes de hogar —mayoritariamente mujeres— respecto a su pareja, particularmente en los países con menores tasas de pobreza. No obstante, esta situación, que es mucho más generalizada en las familias no clasificadas como pobres, no significa que las mujeres de familias pobres hayan podido incorporarse en condiciones más favorables al mercado de trabajo o que puedan aspirar a mejores remuneraciones.

Las cifras recopiladas en los últimos años revelan que el nivel educativo de los hogares pobres continúa siendo considerablemente inferior al que se observa en los demás. En efecto, en más de la mitad de los países analizados, el nivel promedio de estudios de los jefes de hogares no clasificados como pobres excede en tres o más años al de los hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza y algo similar sucede con el nivel educacional de los cónyuges.

Es inquietante que las diferencias mencionadas entre los grupos pobres y los demás también se manifiesten entre los niños de seis a quince años, pues ello constituye un indicio de un mayor rezago y deserción escolar en la educación primaria en los hogares de bajos recursos, lo que a su vez reduce las posibilidades de que estos niños alcancen niveles educativos adecuados. Argentina, Chile y Costa Rica son los únicos casos en los que la diferencia entre los dos grupos no supera el medio año de estudio, mientras que en Brasil, Honduras, Nicaragua y Uruguay es de un año completo.

En el estudio del vínculo entre la pobreza y la educación es muy importante analizar la transmisión de las desigualdades educacionales, es decir en qué medida el nivel de educación de los padres condiciona el de los hijos. En este contexto, es muy

útil el indicador que muestra las diferencias entre los años de estudio cursados por los hijos mayores de 25 años y por el jefe del hogar. En el caso de los hogares pobres en los que el jefe ha cursado entre 0 y 5 años de estudios, se observan diferencias que fluctúan entre los dos años, en Guatemala, hasta más de cinco, en Argentina, Chile, Perú y Uruguay.

Por consiguiente, si bien se observa que la nueva generación supera con creces el capital educativo de sus padres, solo en Argentina y Chile esto les ha permitido superar el umbral de los doce años, mínimo necesario para que se reduzcan notablemente las posibilidades de caer en la pobreza.¹² Por otra parte, cuando se incluyen en el análisis los hogares encabezados por una persona con seis o más años de educación, las diferencias disminuyen considerablemente e incluso son negativas en algunos países. Esto indicaría que el incremento del capital educativo de los pobres ha obedecido más a la ampliación del grado de escolaridad mínima que al aumento de los años de estudio en los niveles educativos medio y superior.

La información disponible pone de manifiesto la urgencia de que los gobiernos intensifiquen los esfuerzos para dar más y mejor educación a las familias menos aventajadas. Para ello, es indispensable que se reconozca la disyuntiva permanente a la que se enfrentan niños y jóvenes, sobre todo los pobres, entre estudiar o colaborar en la contribución de ingresos al hogar. En la mayoría de los casos, los países han optado por hacer transferencias monetarias a los padres para retardar la incorporación de los alumnos al mercado de trabajo y facilitar la continuación de sus estudios. Si bien estos programas suelen centrarse en el nivel básico y la primera parte del ciclo secundario, como sucede sobre todo en Brasil y México, no cabe duda de la pertinencia de extender este tipo de prestaciones a todo el nivel secundario y también a todo el país, cuando los programas se limitan exclusivamente a un área geográfica.

12 “Mantener buenas posibilidades de acceder al bienestar implica como mínimo completar el ciclo secundario, o sea alcanzar 12 o más años de estudio en casi todos los casos” (CEPAL, 1994, capítulo VI).

Por último, cabe señalar que la brecha educativa entre los hogares pobres y los demás, analizada con base en los años de estudio promedio de ambos grupos, seguramente se agravaría si se tomara en consideración la calidad de la educación, ya que de hecho algunos estudios muestran diferencias importantes entre el rendimiento escolar de los alumnos de escuelas públicas y los de las privadas (UNESCO, 2003). Si se desea que la educación ofrezca efectivamente una base sólida para la superación de la pobreza, el perfeccionamiento de su calidad debe recibir particular atención en la formulación de políticas públicas.

3. MERCADO DE TRABAJO

Sin duda, las características del mercado de trabajo y la forma en que las personas se incorporan y se desenvuelven en él son fundamentales para entender los mecanismos que conducen a la pobreza y formular políticas orientadas a su superación. Entre otras, se trata de políticas de generación de empleo, de incremento de la productividad y el ingreso laboral, de capacitación y adiestramiento, y de ampliación del acceso a los servicios de protección social.

Cuadro I.7

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DE LOS HOGARES POBRES Y NO POBRES, 1999 - 2003																	
	Promedio de años de estudio						Porcentaje de hogares según años de estudio del jefe						Dif. años de estudio entre hijos y jefes de hogar, según educ. del jefe c/		Incidencia de pobreza según años de educación del jefe		
	Hogares no pobres			Hogares pobres			Hogares no pobres			Hogares pobres			Hogares pobres				
	Jefes	Cónyuges	Niños b/	Jefes	Cónyuges	Niños b/	0 a 5 años	6 a 11 años	12 o más años	0 a 5 años	6 a 11 años	12 o más años	0 a 5 años	6 o más años	0 a 5 años	6 a 11 años	12 o más años
	(años)						(porcentajes)						(años)		(porcentajes)		
Uruguay a/	8,6	9,2	4,2	6,6	6,9	3,3	18,4	55,2	26,4	23,8	70,7	5,5	5,1	1,2	11,7	11,6	2,1
Chile	9,9	10,0	4,1	7,7	7,9	3,8	18,2	34,9	46,9	27,4	50,0	22,6	5,3	1,9	21,4	20,6	8,0
Costa Rica	8,1	8,2	3,5	5,0	5,4	3,1	21,5	56,2	22,3	46,4	50,1	3,4	3,5	-0,6	33,2	17,0	3,4
Panamá	9,4	9,8	3,9	6,0	5,9	3,3	15,9	43,7	40,4	36,6	51,6	11,8	4,4	1,5	47,6	31,9	10,4
Brasil	6,6	7,1	3,4	3,7	4,1	2,3	49,9	37,0	13,1	74,8	24,4	0,8	3,5	-0,5	39,0	21,9	2,5
Argentina a/	10,6	11,0	4,4	7,7	8,0	3,9	9,7	39,3	51,0	19,1	63,2	17,8	5,3	1,9	51,4	46,3	15,8
México	28,2	43,5	28,3	51,5	42,1	6,4	46,0	31,1	9,6
Rep. Dominicana	7,7	8,4	4,1	5,4	5,3	3,3	37,8	33,9	28,3	54,2	33,5	12,3	4,7	0,9	49,8	40,6	23,1
Perú	9,1	8,1	4,0	5,2	4,7	3,2	32,9	38,4	28,6	61,0	33,6	5,4	5,7	-1,2	57,2	38,7	11,9
Ecuador a/	65,1	51,8	22,8
El Salvador	7,0	7,1	3,2	3,5	3,4	2,3	40,9	31,1	28,0	70,4	23,5	6,1	3,6	2,5	56,4	36,3	14,0
Venezuela (Rep. Bolivariana de)	8,8	9,3	4,3	6,1	6,4	3,7	18,1	58,9	23,0	34,5	60,3	5,2	4,8	2,1	59,3	43,9	14,7
Colombia	8,0	8,1	3,8	4,9	5,2	3,1	44,1	35,5	20,4	68,1	29,5	2,4	3,7	0,2	59,5	44,2	10,2
Paraguay	8,2	8,3	3,9	4,9	4,7	3,1	31,3	37,4	31,4	55,9	38,1	6,0	3,8	1,8	66,0	52,6	17,1
Guatemala	6,0	4,8	...	2,8	1,9	...	48,9	32,7	18,4	75,9	22,0	2,0	2,1	0,6	63,5	43,0	11,0
Bolivia	9,4	8,3	4,3	5,5	4,1	3,6	30,1	27,2	42,7	59,0	28,9	12,0	4,7	1,7	71,0	57,0	26,0
Nicaragua	6,4	6,7	3,8	3,5	3,3	2,8	44,4	39,1	16,5	71,1	26,2	2,8	4,0	1,0	73,0	53,1	22,0
Honduras	7,8	8,0	3,5	3,4	3,6	2,4	30,6	37,1	32,3	67,8	27,9	4,2	3,2	1,1	84,4	64,8	24,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Áreas urbanas.

b/ Personas de entre 6 y 15 años de edad.

c/ Diferencia de años de estudio entre los hijos de 25 o más años de edad y el jefe del hogar, según años de estudio del jefe.

Es habitual que entre las políticas laborales concebidas para superar la pobreza se dé prioridad a la creación de empleo, por reconocerse que las familias pobres suelen verse afectadas por una elevada desocupación. Si bien es cierto que en todos los países las tasas de desempleo de los grupos pobres son considerablemente superiores a las de los demás, la situación varía notablemente de un país a otro,¹³ lo que impone la necesidad de adoptar estrategias de políticas distintas para hacer frente al fenómeno.

Por estos motivos, cuando la pobreza está estrechamente vinculada al desempleo, la reactivación del aparato productivo, la dinamización del mercado de trabajo y la facilitación de la creación de empleos de calidad, sin descuidar la provisión de prestaciones sociales, dan excelentes resultados. Estas estrategias son particularmente eficaces en aquellos casos en los que la pobreza se vincula de manera más clara con el nivel de desocupación. Por el contrario, cuando la incidencia del desempleo en los hogares pobres no es alta, sus miembros suelen desempeñar trabajos de baja productividad, como ocurre con los trabajadores por cuenta propia y los remunerados de muy baja calificación, las labores domésticas y la ocupación en microempresas, por lo que resulta prioritario tomar medidas destinadas a la capacitación de recursos humanos y a la generación de empleos formales en sectores que hagan uso intensivo de mano de obra y que atraigan a quienes se encuentran trabajando sin una protección social adecuada.

Como se indica en el cuadro I.5, las tasas de desocupación más elevadas entre los pobres se encuentran en Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay, en las que oscilan entre el 20% y el 28%. Cabe destacar que en estos países también se registran los porcentajes más altos de hogares con al menos dos desocupados, así como las proporciones más bajas de familias con al menos dos ocupados (véase el cuadro I.8). Un factor

que contribuye a explicar el alto desempleo en los hogares pobres de este grupo de países es que todos ellos presentan un acervo educativo más sólido, ya que las mayores expectativas laborales que este despertar podría traducirse en períodos más largos de búsqueda de empleo. A su vez, en algunos de los países con más alta incidencia de pobreza (entre otros, Bolivia, Guatemala, Honduras y Perú), la tasa de desocupación de los hogares pobres es inferior al 5% y el porcentaje de hogares con al menos dos ocupados suele ser superior al 50%. No obstante, como se indica más adelante, ello no supone una mayor capacidad de generación de ingresos, debido a que la inserción laboral se da en actividades de muy baja productividad.

Evidentemente, la densidad ocupacional de los hogares pobres, correspondiente al número de ocupados dividido por el número de miembros del hogar, también varía de un país a otro, pero siempre manteniendo cierta proporción con la tasa de pobreza. En efecto, mientras en Chile y Costa Rica el indicador mencionado es de apenas un 0,21 (equivalente a un ocupado por cada cinco miembros del hogar), en Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú excede del 0,35 (un ocupado por cada tres miembros). Por otra parte, la densidad ocupacional también es un indicador que varía dentro de un mismo país, entre los grupos pobres y los demás. De hecho, en dieciséis países la densidad ocupacional de los hogares no pobres supera en 0,15 puntos o más el valor observado en los hogares de escasos recursos.

La principal característica de la inserción de los integrantes de hogares pobres en el mercado laboral es su concentración en sectores de baja productividad. En trece países de la región, el 70% o más de los ocupados en hogares pobres trabaja en establecimientos de hasta cinco personas, son empleados domésticos o son trabajadores por cuenta propia sin calificación profesional o técnica (véase el cuadro I.8). Esta situación también se extiende a numerosos trabajadores de hogares no identificados como po-

¹³ Con base en la tabulación de encuestas de hogares, se observan diferencias en las tasas de desocupación entre hogares pobres y no pobres que fluctúan entre menos de 3 puntos porcentuales (Bolivia, Guatemala, Honduras y Perú) y más de 15 puntos porcentuales (Chile, República Dominicana, la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay).

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LOS HOGARES POBRES Y NO POBRES, 1999 - 2003

	Porcentaje de hogares según condición de actividad de sus miembros												Incidencia de pobreza según condición de actividad de los miembros del hogar					
	Hogares no pobres						Hogares pobres											
	al menos 1 ocupado	al menos 2 ocupados	al menos 1 desocupado	al menos 2 desocupados	jefe inactivo	Ocup. sectores baja productividad b/	al menos 1 ocupado	al menos 2 ocupados	al menos 1 desocupado	al menos 2 desocupados	jefe inactivo	Ocup. sectores baja productividad b/	al menos 1 ocupado	al menos 2 ocupados	al menos 1 desocupado	al menos 2 desocupados	jefe inactivo	Ocup. sectores baja productividad b/
	(porcentajes)												(porcentajes)					
Uruguay <i>a/</i>	72,5	36,2	18,0	2,5	37,9	42,3	85,0	33,3	44,6	13,7	17,2	74,9	10,7	8,6	20,3	35,7	4,4	16,5
Chile	88,0	47,2	10,3	1,2	23,9	34,0	74,7	17,6	29,1	6,7	26,2	42,5	13,3	6,3	34,0	50,8	16,6	12,6
Costa Rica	94,5	51,9	7,7	0,7	17,2	44,0	68,0	18,6	17,0	2,8	38,0	79,6	14,1	7,6	33,6	49,1	33,6	18,6
Panamá	90,5	49,3	22,1	3,8	19,1	41,3	81,2	28,7	33,0	8,4	16,0	81,9	26,2	18,7	37,2	46,7	24,9	38,6
Brasil	87,1	52,3	10,5	1,3	24,1	44,8	87,2	41,0	21,8	4,7	15,5	65,5	30,0	25,1	47,1	60,6	21,5	37,1
Argentina <i>a/</i>	76,9	39,2	14,2	1,2	30,7	39,8	76,6	25,5	35,7	9,2	23,3	47,3	34,9	25,9	57,4	80,8	29,0	35,3
México	92,1	51,9	3,9	0,7	16,2	51,3	93,1	46,5	5,3	0,9	13,9	69,5	32,0	29,5	38,7	39,0	28,4	38,6
República Dominicana	95,7	50,7	16,9	2,3	15,5	52,1	72,6	21,0	30,8	5,6	33,4	61,9	34,4	22,3	55,8	62,6	59,8	32,9
Perú	94,1	65,2	10,2	0,8	17,2	60,8	95,2	63,2	9,4	1,7	9,1	87,0	42,6	41,6	40,4	60,8	27,7	51,1
Ecuador <i>a/</i>	94,2	57,1	6,3	0,7	12,6	66,3	89,9	40,7	12,9	1,6	15,0	78,7	41,5	34,6	60,6	61,2	46,8	47,0
El Salvador	91,7	56,4	7,1	0,4	21,6	52,8	86,2	39,2	16,3	2,2	25,1	78,2	41,4	34,3	63,2	81,8	46,7	48,4
Venezuela (República Bolivariana de)	97,1	64,2	18,3	3,0	13,6	68,6	84,4	35,7	36,6	9,3	20,2	70,7	39,9	29,8	60,4	70,6	53,3	35,4
Colombia	91,6	56,9	16,8	2,8	20,3	...	87,6	37,1	32,0	8,6	16,8	...	47,6	38,2	64,4	74,3	44,1	...
Paraguay	94,0	60,6	9,8	1,2	15,5	60,6	91,1	54,4	16,5	3,2	17,6	85,9	51,2	49,3	64,6	73,8	55,1	61,3
Guatemala	96,0	59,3	4,6	0,2	8,8	64,4	92,9	55,1	6,0	0,7	10,3	78,2	52,0	51,0	59,6	79,4	56,7	55,3
Bolivia	93,2	57,5	6,9	0,8	13,3	63,3	94,7	62,2	7,8	1,2	8,1	88,8	55,9	57,5	58,7	64,8	43,1	67,8
Nicaragua	97,4	66,5	13,6	2,1	12,5	55,8	93,3	55,2	22,6	6,3	17,5	75,6	61,9	58,5	73,8	83,4	70,3	68,0
Honduras	92,0	55,4	5,8	0,4	16,7	48,1	93,3	49,0	6,4	0,9	16,3	80,5	71,3	68,4	73,0	83,3	70,5	80,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Áreas urbanas.

b/ Patrones y asalariados en establecimientos de hasta cinco personas, empleados domésticos y trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

bres, lo que da cuenta de una generalización regional de la inserción laboral en condiciones precarias. De hecho, aun en los países con menores niveles de pobreza, con la excepción de Chile, es común que un 40% de los ocupados no pobres trabajen en el sector informal, porcentaje que supera el 60% en varios de los países con mayor incidencia de pobreza.

Como es obvio, la escasa educación y la precaria inserción laboral de los trabajadores pobres se refleja en su nivel de ingresos, cuyo valor promedio en la mayoría de casos resulta insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de otra persona además del

perceptor (véase el cuadro I.5). Esta situación es mucho más marcada en los países con un mayor índice de pobreza, caracterizados a la vez por las tasas más bajas de desocupación, los menores niveles educativos de los adultos, los elevados porcentajes de ocupados en actividades de baja productividad y, por consiguiente, un ingreso medio por trabajador que apenas supera el valor de la línea de pobreza. En cambio, son pocos los países en los que el ingreso de los trabajadores duplica el valor de la línea de pobreza o supera ese umbral. Entre ellos, figuran dos de los países con menores tasas de pobreza —Chile y Costa Rica—, pero también otros con incidencias medias

de pobreza, como El Salvador, Perú y República Dominicana, lo que atenúa la asociación inversa entre nivel de pobreza e ingreso laboral medio que se manifiesta en los demás casos.

A manera de síntesis, se identifican dos grupos de países en lo que respecta al perfil laboral de los habitantes pobres. El primero se caracteriza por altas tasas de desocupación en este segmento de la población, que superan el 20%, y se vinculan a una baja densidad ocupacional y un mayor número de desocupados por hogar. El segundo está integrado por los países con las tasas de pobreza más pronunciadas, en los que se observan bajas tasas de desempleo y altos niveles de densidad laboral, lo que supone la existencia de mayor número de personas que trabajan en actividades de baja productividad. Sin embargo, todos los países comparten algunos rasgos comunes, entre los que se destaca la inserción laboral precaria de una elevada proporción de ocupados pobres. Sea cual fuere la situación predominante, sin duda es necesario que las políticas de generación de puestos de trabajo se conjuguen con estrategias para incrementar la productividad y el ingreso laboral, y en las que no se descuide el acceso de los trabajadores a las prestaciones sociales básicas.

4. FACTORES DE ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y A LA TENENCIA DE ACTIVOS

Las privaciones en lo que respecta a la calidad de la vivienda y el acceso a ciertos servicios básicos suelen ser la cara más visible de la pobreza. En los casos de graves carencias que afecten a un segmento numeroso de la población, la consolidación de todo avance en materia de salud, alimentación y nutrición que pudiera haber sido alcanzado mediante acciones públicas de superación de la pobreza se ve seriamente comprometido a largo plazo. Entre otras cosas, esto refleja el hecho de que las condiciones de vida asociadas a la noción de pobreza difieren notablemente de un país a otro, e incluso entre zonas urbanas y rurales.

Cuando las viviendas y las áreas habitadas son insalubres, la salud de los miembros del hogar se ve directamente afectada por esta situación, sobre todo en el caso de los lactantes y niños que padecen infecciones y episodios de diarrea. Estas patologías se vinculan estrechamente con el inadecuado acceso a agua potable y la falta de sistemas apropiados de eliminación de excretas, lo que se agrava aun más cuando en los mismos hogares no se adoptan prácticas de higiene básicas que eviten la acumulación de basura y la presencia de agua estancada en la vivienda y sus alrededores. Además, es indispensable que la vivienda proteja a sus habitantes de los factores adversos que existan en su entorno, y les ofrezca un cierto grado de intimidad y aislamiento. Los pisos de tierra y los dormitorios compartidos por muchas personas, entre otros, son elementos indicativos de que la vivienda no cumple los requisitos mínimos de habitabilidad.

Cabe esperar que, en los países en los que una alta proporción de personas no cuenta con los ingresos necesarios para costear una canasta básica, la satisfacción de otras necesidades elementales también sea muy limitada. De hecho, los países que tradicionalmente han tenido un bajo índice de pobreza, como Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay, presentan una menor incidencia de insatisfacción de las necesidades básicas consideradas en el cuadro I.9. En cambio, los países con tasas de pobreza más altas presentan también los porcentajes más elevados de hogares pobres con necesidades básicas insatisfechas. Perú es una excepción en este sentido, porque su tasa de pobreza lo ubica en un rango intermedio, pero un alto porcentaje de su población pobre está expuesto a las deficiencias mencionadas. Concretamente, Perú tiene el número más alto de viviendas con piso de tierra y, junto con Nicaragua y Bolivia, figura entre los únicos casos en los que esta situación afecta por lo menos a la mitad de los hogares pobres. En estos países hasta un 27% de la población no identificada como pobre también vive en viviendas con piso de tierra (véase el cuadro I.9).

El porcentaje de hogares pobres que no cuenta con agua potable, o de pozo en las áreas rurales, su-

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LOS HOGARES POBRES Y NO POBRES, 1999 - 2003

	Porcentaje de hogares según características de la vivienda												Incidencia de pobreza según características de la vivienda					
	Hogares no pobres						Hogares pobres											
	Piso de tierra	Sin agua de red pública	Sin servicio sanitario	Sin electricidad	Más de tres personas por cuarto	No poseen televisor	Piso de tierra	Sin agua de red pública	Sin servicio sanitario	Sin electricidad	Más de tres personas por cuarto	No poseen televisor	Piso de tierra	Sin agua de red pública	Sin servicio sanitario	Sin electricidad	Más de tres personas por cuarto	No poseen televisor
	(porcentajes)												(porcentajes)					
Uruguay ^{a/}	...	1,4	0,3	...	1,0	6,0	...	3,1	2,6	...	16,4	17,8	...	18,4	44,6	...	63,3	23,3
Chile	1,0	3,1	2,0	1,2	0,0	...	2,2	5,2	7,1	2,8	0,0	...	28,3	23,1	38,8	30,0
Costa Rica	0,7	3,6	0,5	0,9	7,3	7,2	5,7	8,0	1,2	4,2	19,6	22,2	65,7	33,9	37,2	53,3	38,0	41,4
Panamá
Brasil	3,8	2,2	9,0	10,7	16,6	8,2	33,9	31,7	65,0	61,9	61,6	55,7
Argentina ^{a/}	1,1	0,3	5,0	0,7	70,8	59,6
México	4,1	...	3,7	1,1	18,5	12,4	21,8	...	13,2	4,6	53,7	37,0	70,9	...	62,5	67,0	57,5	58,1
República Dominicana	3,1	...	3,3	...	14,5	13,4	6,8	...	5,9	...	32,3	19,8	60,2	...	55,4	...	60,6	50,2
Perú	27,2	19,1	9,1	13,1	0,0	...	66,9	41,3	33,4	43,4	0,0	...	64,5	61,4	72,8	70,9
Ecuador ^{a/}	2,1	9,2	0,9	0,2	16,5	...	7,1	22,9	3,8	0,9	50,6	...	71,6	64,8	74,7	75,2	69,5	...
El Salvador	12,3	15,8	3,9	5,3	35,4	13,8	39,6	33,0	12,6	23,0	71,2	37,9	70,7	61,1	70,7	76,4	60,2	67,3
Venezuela (República Bolivariana de)	2,6	6,3	5,2	1,0	16,4	6,4	7,5	12,3	13,7	2,0	39,5	13,1	68,8	59,8	66,9	62,0	64,7	61,0
Colombia	5,2	4,2	5,4	4,0	0,0	17,5	11,8	8,0	11,3	7,3	0,0	35,2	68,2	64,4	66,7	63,5
Paraguay	5,3	14,0	0,6	3,2	14,9	14,3	30,7	15,6	1,3	14,3	47,1	33,0	86,3	54,7	70,4	82,7	77,4	71,4
Guatemala	13,6	41,4	33,6	76,9	73,5	67,5	...
Bolivia	15,7	12,9	16,9	20,8	31,1	25,3	49,6	28,9	46,8	48,2	66,0	56,6	79,7	73,6	77,5	74,3	72,6	73,6
Nicaragua	27,3	9,4	6,5	13,1	42,4	42,8	52,9	25,2	18,2	36,4	74,4	76,0	76,7	82,0	82,7	82,6	74,9	75,1
Honduras	6,6	6,8	5,7	10,7	25,0	...	37,8	23,1	24,4	46,1	69,0	...	93,3	89,2	91,2	91,3	87,1	...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^{a/} Áreas urbanas.

pera el 30% en El Salvador y Perú, mientras en Bolivia, Ecuador (área urbana), Honduras y Nicaragua es mayor del 20%. A su vez, la falta absoluta de una conexión sanitaria se presenta como un problema prácticamente superado en los hogares pobres de Argentina (área urbana), Costa Rica, Ecuador (área urbana) y Uruguay (área urbana), pues menos del 6% de ellos se encuentra en esa situación. En varios otros países esta carencia no afecta a más de la sexta parte de los hogares pobres. Pese a ello, en Bolivia y Perú el porcentaje de hogares de bajos recursos sin servicios sanitarios asciende a un 47% y un 33%, respectivamente.

Por otra parte, los pobres que residen en áreas urbanas muestran una proporción más alta de satisfacción de algunas de sus necesidades de vivienda y servicios básicos que los de áreas rurales. De hecho, los porcentajes de hogares pobres que residen en viviendas con piso de tierra y de hogares que no tienen energía eléctrica son superiores en las áreas rurales, sin ninguna excepción. Cabe destacar que las diferencias entre las zonas urbanas y rurales pueden llegar a ser muy pronunciadas. En las áreas urbanas de El Salvador, Guatemala y Honduras, por ejemplo, la falta de electricidad afecta a menos del 10% de los hogares pobres, mientras en las rurales el porcentaje

oscila entre un 40% y un 73%. Esta situación se repite incluso en los países donde los hogares presentan una baja proporción de necesidades básicas insatisfechas. A manera de ilustración, en Chile un 25% de los hogares pobres rurales no cuenta con agua de red pública o pozo, lo que se compara con un 2% en las áreas urbanas.

Aun cuando la insatisfacción de las necesidades básicas pareciera ser una característica intrínseca de los hogares pobres, no son pocos los países en los que este tipo de situaciones se extiende a las familias que no presentan problemas de insuficiencia de ingresos, lo que ocurre especialmente en los países con mayores tasas de pobreza. De hecho, mientras en Chile, Costa Rica y Uruguay el porcentaje de hogares no pobres con alguna necesidad básica insatisfecha suele ser inferior al 4%, en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú este valor puede superar el 20% e incluso alcanzar el 30%.

Cabe destacar que, en la mayoría de los países, las variables seleccionadas de calidad de la vivienda y falta de acceso a los servicios básicos resultan a su vez buenos indicadores de la situación de pobreza de los hogares. De manera general, no menos del 60% de los hogares que posee alguna de estas características son pobres, y en algunos casos la cifra llega a ser considerablemente más alta (véase la sección derecha del cuadro I.9). Existen algunas excepciones, entre las cuales Chile es la más evidente, puesto que apenas un 30% o menos de los hogares que tienen piso de tierra, carecen de agua de red pública o no cuentan con electricidad son pobres. No obstante, estos resultados obedecen principalmente al hecho de que un conjunto importante de hogares sin acceso a algunos servicios tiene ingresos bajos pero algo superiores al valor de la línea de pobreza, por lo que a grandes rasgos se verifica también en estos casos el vínculo entre carencias e insuficiencia de recursos.

Desde una perspectiva distinta, resulta interesante analizar algunos de los bienes durables que poseen los hogares pobres. Entre los artículos con-

siderados, los menos frecuentes son las lavadoras y los computadores, que difícilmente podrían ser considerados esenciales, así como los vehículos, cuyo costo es muy alto en relación con los recursos de estos hogares. Algo más comunes son los refrigeradores, sobre todo en Brasil, Chile, Costa Rica, la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay, países en los que un 70% o más de los hogares de bajos recursos disponen de uno. Sin duda, los miembros de hogares pobres privilegian la adquisición de un televisor. De hecho, en nueve de los once países que cuentan con información al respecto, más de la mitad de los hogares pobres tienen un televisor y en cuatro el porcentaje supera el 75% (véase el cuadro I.9).

5. CAMBIOS EN EL PERFIL DE LA POBREZA DESDE 1990

Los rasgos característicos de la pobreza no han variado mayormente entre 1990 y el 2002. A comienzos del decenio pasado, las familias de bajos recursos también se caracterizaban por estar integradas por un mayor número de personas con menos años de estudio que el resto de la población, altas tasas de dependencia demográfica y más dificultades para acceder a servicios básicos. La evolución de la incidencia de estos elementos no solo muestra que a lo largo de la década se produjeron algunos cambios positivos, sino que también pone en evidencia la dificultad de desvincular la pobreza de los factores estructurales que la condicionan (véase el cuadro I.10).

Uno de los cambios más notables en el período considerado es la reducción del tamaño medio de los hogares pobres, atribuible sobre todo a la disminución del número de niños por familia.¹⁴ Efectivamente, en todos los países aumentó la proporción de hogares con uno o dos niños, en tanto que el porcentaje de hogares con tres o más niños se redujo en forma marcada. La única excepción a esta tendencia es Uruguay, país en el que la disminución

14 Este fenómeno es parte de la tendencia regional a la reducción de la fecundidad, analizada en el capítulo IV.

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): RASGOS SELECCIONADOS DE LOS HOGARES POBRES 1989 - 1991

País	Año	Tasa de pobreza hogares	Tamaño medio del hogar	Porcentaje de hogares con 1 a 2 niños b/	Porcentaje de hogares con 3 o más niños b/	Años de estudio promedio			Tasa de participación d/	Densidad ocupacional e/	Ingreso del trabajo medio por ocupado	al menos 1 desocupado	Sin agua de red pública	Sin servicio sanitario	Sin electricidad	3 o más personas por dormitorio
						Adultos c/	Jefes	Cónyuges								
Uruguay a/	1990	11,8	4,93	49,0	34,9	5,5	5,3	5,9	0,61	0,26	1,7	25,2	18,0	3,0	10,1	40,3
Chile	1990	33,3	4,70	57,1	26,0	7,0	7,0	7,1	0,49	0,23	1,9	18,0	16,3	3,2	10,0	...
Costa Rica	1990	23,6	4,91	35,6	41,3	4,5	4,4	4,8	0,52	0,21	2,3	12,0
Panamá	1990	36,3	5,09	39,5	38,2	5,7	5,5	5,5	0,57	0,24	1,8	27,3
Brasil	1990	41,4	4,74	43,6	34,5	2,7	2,6	2,9	0,70	0,35	1,2	8,6	22,2	24,7	21,8	33,7
Argentina a/	1990	16,2	4,51	32,4	36,1	0,47	0,16	2,5	20,7	...	25,9	1,1	...
México	1989	39,0	6,03	34,4	53,5	0,58	0,29	1,6	4,5	24,0	38,6	15,0	69,3
Ecuador a/	1990	55,8	5,18	46,8	36,5	0,64	0,32	1,7	12,5
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	34,2	5,82	34,5	51,5	5,4	5,3	5,3	0,49	0,19	2,5	23,3	...	18,3	3,4	35,8
Colombia a/	1990	34,6	5,02	52,8	33,7	5,6	5,6	5,6	0,83	0,29	1,7	52,1	3,2	1,8	1,1	41,1
Guatemala	1989	63,0	5,89	1,5	1,8	1,2	0,64	0,29	1,5	3,1	26,8	38,8	62,3	83,7
Bolivia a/	1989	49,4	5,00	38,4	41,9	6,9	7,3	5,8	0,62	0,25	1,9	19,2	34,2	42,6	7,4	67,9
Honduras	1990	75,2	5,83	34,0	55,2	2,8	2,8	2,8	0,66	0,31	1,2	7,2	28,4	36,2	61,7	80,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Áreas urbanas.

b/ Niños de 0 a 14 años de edad.

c/ Personas de 25 o más años de edad.

d/ Población económicamente activa (ocupados y desocupados) entre la población en edad de trabajar.

e/ Número de ocupados entre el número de personas del hogar.

del tamaño de los hogares se manifiesta en todos los segmentos de la población.

Sin duda, otra de las tendencias más destacadas en este ámbito es el aumento de los años de estudio de la población adulta, fenómeno generalizado que abarca tanto a los jefes de hogar como a sus cónyuges y otros miembros de la familia mayores de 25 años. No obstante, en varios países se registró un leve deterioro de la brecha educativa entre los hogares pobres y los demás hogares.¹⁵ Específicamente, el promedio de años de estudio de los adultos de hogares no considerados pobres aumentó en mayor proporción en Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá y la República Bolivariana de Venezuela, mientras en Brasil, Guatemala y Uruguay se registraba la situación inversa.

En cuanto a la integración al mercado laboral de los miembros de hogares pobres, durante la década de 1990 se registró un alza generalizada de la tasa de participación. Una alta proporción de los nuevos integrantes de la fuerza laboral pasó a engrosar las filas de los desocupados, que aumentaron en los hogares pobres de la mayoría de los países. Esta situación queda aún más en evidencia cuando se observa el porcentaje de hogares con al menos un desocupado, que creció más de diez puntos porcentuales en Argentina, Brasil, Chile, la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay, y al menos cinco puntos en Costa Rica y Panamá.

De acuerdo con los datos sobre la materia, la insuficiente captación de ingresos de los hogares

15 Téngase presente que al menos una parte del aumento de la brecha educativa entre pobres y no pobres puede deberse a la salida de la condición de pobreza de grupos cuyos niveles educativos aumentaron, lo cual tiende a reducir el promedio de años de estudio de los pobres.

pobres responde cada vez más a las bajas remuneraciones laborales, mientras disminuye la importancia relativa del bajo número de ocupados por hogar. En efecto, la disminución del ingreso medio por ocupado es una constante en casi todos los países analizados, en tanto que el porcentaje de ocupados por cada miembro del hogar se incrementó.

En los pocos casos en los que se cuenta con información comparable sobre los dos años de referencia, se observa una tendencia generalizada a la mejora de las condiciones de vida de los pobres. A manera de ejemplo, el porcentaje de hogares pobres que no contaban con servicio sanitario se redujo entre un 5% y un 25% en Argentina, Brasil,

Recuadro I.5

PROBABILIDADES DE POBREZA

Como complemento al análisis del perfil de pobreza a partir de los rasgos sintetizados en los cuadros I.5 al I.9, es útil realizar una comprobación estadística del grado en que estos se vinculan efectivamente con la pobreza, así como estimar los efectos de su variación sobre la probabilidad de que el hogar no cuente con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. Aun cuando el tipo de análisis que aquí se presenta suele denominarse “determinantes de la pobreza”, es preciso aclarar que sus resultados no permiten establecer una relación de causalidad de estos factores con la pobreza, sino tan solo poner en evidencia su estrecha vinculación con la insuficiencia de ingresos, que pueden ser tanto causas como consecuencias de la pobreza.

Una metodología tradicionalmente utilizada para el análisis de los factores vinculados con la pobreza es la regresión logística (“logit”), que utiliza como variable dependiente el logaritmo natural del cociente de probabilidades (CP) de pobreza (es decir, la probabilidad de ser pobre sobre la probabilidad de no serlo), conforme a la siguiente expresión:

$$\ln (CP) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

donde,

$$CP = \frac{\text{Prob(pobre)}}{\text{Prob(no pobre)}} = \frac{e^{\beta X}}{1 + e^{\beta X}} \times \frac{1 + e^{\beta X}}{1} = e^{\beta X},$$

y β es el vector de coeficientes β_1, \dots, β_n asociados a cada vector X de factores explicativos X_1, \dots, X_n .

Cabe señalar que los coeficientes β son lineales respecto del “cociente de probabilidades” de pobreza y, por lo tanto, no lo son respecto de la probabilidad de pobreza. Por ello, para calcular el efecto de los cambios de las variables independientes en la probabilidad de que un hogar sea pobre, es necesario definir valores de base para estas.^a

La aplicación de esta metodología, basada en información proveniente de las encuestas de hogares que corresponde a las áreas urbanas de los países, confirma las conclusiones mencionadas en la presente sección, como se indica a continuación:^b

- La existencia de un niño más por familia implica en casi todos los países un incremento de la probabilidad de pobreza de 10 a 19 puntos porcentuales; las únicas excepciones son Honduras, donde el efecto marginal es de 7 puntos porcentuales, y Brasil y Argentina, en los que asciende a 23 puntos porcentuales. Esta variación tiene menores efectos en los países con mayor incidencia de pobreza, con la excepción de Costa Rica.
- Los hogares encabezados por mujeres tienen más probabilidades de verse afectados por la pobreza en seis países, mientras en dos esta probabilidad es menor. Sin embargo, esta conclusión, así como también el hecho de que esta característica no sea significativa en los demás casos, responde en parte a la definición del modelo, es decir al número de variables consideradas. Asimismo, cabe aclarar que en la regresión se incluyen todos los hogares, por lo que se no reflejan las configuraciones familiares específicas en las que se manifiesta con mayor intensidad el vínculo entre la pobreza y la jefatura femenina del hogar.
- En todos los países analizados se observa una correlación negativa entre los años de estudio de la población adulta y la pobreza. Cada año de estudios reduce la probabilidad de caer en la pobreza de 4 a 7 puntos porcentuales.
- El desempleo del jefe del hogar es uno de los factores más determinantes de la pobreza. En la mayoría de países, el aumento del riesgo de pobreza asociado a esta circunstancia supera los 25 puntos porcentuales, lo que confirma la importancia de la creación de fuentes de trabajo para la superación de la pobreza.

a/ Los valores de base para el cálculo de los efectos marginales en este ejercicio son el promedio observado en los hogares pobres en el caso de las variables continuas (número de niños, número de ancianos y años de educación) y cero en el caso de las variables discretas (jefatura femenina, jefe inactivo y jefe desempleado).

b/ Aunque los resultados no se muestran aquí por razones de espacio, cabe mencionar que el vínculo entre las variables analizadas y la pobreza es similar en las áreas rurales.

(continúa)

Recuadro 1.5 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CAMBIOS EN LA PROBABILIDAD DE POBREZA SEGÚN RASGOS SELECCIONADOS DE LOS HOGARES POBRES, ÁREAS URBANAS 2001/2002 a/ b/
(Variación en puntos porcentuales)

	Probabilidad de pobreza	Número de niños	Número de ancianos	Jefa mujer	Años de educación de los adultos	Jefe inactivo	Jefe desempleado
Argentina	51,4	+ 23,1	...	+ 8,1	- 6,9	+ 11,4	+ 36,1
Bolivia	67,7	+ 11,8	- 8,9	...	- 4,6	+ 7,2	+ 23,9
Brasil	53,1	+ 22,7	- 26,7	+ 5,0	- 7,2	+ 2,4	+ 37,8
Chile	21,7	+ 13,3	- 14,2	...	- 4,3	+ 16,9	+ 48,5
Colombia	70,7	+ 15,0	- 5,1	+ 3,7	- 6,2	- 3,8	+ 21,6
Costa Rica	22,1	+ 11,0	- 3,5	...	- 4,5	+ 28,8	+ 49,6
Ecuador	57,0	+ 17,3	- 5,6	+ 13,9	+ 26,2
El Salvador	56,3	+ 14,6	- 5,9	+ 12,9	+ 33,3
Guatemala	72,0	+ 11,7	- 4,8	+ 16,5	+ 23,2
Honduras	88,1	+ 6,7	- 3,4	+ 1,9	+ 7,6
México	35,3	+ 16,9	+ 9,6	+ 6,7	...	+ 7,0	+ 31,5
Nicaragua	74,9	+ 10,2	- 4,3	+ 11,9	+ 18,4
Panamá	37,6	+ 14,7	- 16,6	+ 10,2	- 6,0	+ 10,9	+ 42,4
Paraguay	74,4	+ 12,9	- 6,2	+ 7,3	+ 21,5
Perú	57,6	+ 15,6	- 8,5	...	- 5,6	+ 10,9	+ 29,9
Rep. Dominicana	38,8	+ 14,2	...	+ 10,3	- 4,1	+ 32,0	+ 47,9
Uruguay	28,4	+ 18,8	- 13,8	+ 5,9	- 6,5	...	+ 28,6
Venezuela (Rep. Bolivariana de)	49,5	+ 14,9	- 8,0	+ 5,0	- 5,4	+ 21,8	+ 39,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Solo se presentan los efectos marginales de las variables que hayan resultado estadísticamente significativas con una probabilidad de al menos 95%.

b/ Los efectos marginales se ilustran a partir de un hogar de referencia que refleja las incidencias promedio de cada característica en los hogares pobres del país.

Honduras, México y la República Bolivariana de Venezuela; solo en Chile y Uruguay no se produjeron avances al respecto. No debe olvidarse, sin embargo, que la falta de infraestructura comunitaria y

de servicios básicos en las viviendas es un problema que aún está lejos de resolverse en parte importante de la región.

D. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO: CONVERGENCIA HACIA UNA MAYOR INEQUIDAD

La evolución de los índices de desigualdad en los últimos trece años da cuenta de la tendencia convergente de los países hacia una acentuación de la inequidad en la distribución del ingreso. Esta tendencia se manifiesta incluso en las economías que históricamente habían mostrado los niveles más bajos de desigualdad de la región, que han ido perdiendo paulatinamente las conquistas logradas en este terreno. Por consiguiente, en la actualidad una alta proporción de países se ubica en los estratos alto y muy alto de desigualdad de la distribución del ingreso. Los elevados niveles de concentración se deben en gran medida al abultado porcentaje de recursos concentrados en el 10% más alto de la escala distributiva, característica que distingue la distribución del ingreso de América Latina de la observada en el resto del mundo.

Uno de los rasgos más sobresalientes de la situación social de América Latina es la marcada concentración del ingreso que prevalece en la mayoría de los países. De hecho, este rasgo ha hecho que la región sea considerada la más rezagada del mundo en este aspecto, incluso en comparación con regiones de menor desarrollo social y con niveles de pobreza más elevados.¹⁶

Una primera aproximación al análisis de este fenómeno es la evaluación de la estructura distributiva de los países de la región a partir del porcentaje del ingreso total que reciben los hogares, clasificados en forma ascendente según su ingreso

por habitante. Comenzando por el extremo inferior, se observa que, en promedio, la participación de los cuatro primeros deciles de hogares, correspondientes al 40% más pobre, se ubica en torno al 13,6% del ingreso total. El grupo integrado por los hogares de los deciles quinto, sexto y séptimo (zona media de la distribución) recibe un 23,0% de los recursos del país, en tanto que los deciles octavo y noveno captan el 27,3%. Por último, el decil más rico recibe en promedio el 36,1% del ingreso de los hogares en los países de América Latina, aunque en algunos de ellos, como ocurre en Brasil, este porcentaje supera el 45% (véase el cuadro 25 del anexo estadístico).

¹⁶ Conforme a las cifras del Banco Mundial (2003), el índice de Gini promedio de América Latina en los años noventa superó al de todas las demás regiones, incluida el África subsahariana.

Las cifras precedentes muestran una peculiaridad de la distribución del ingreso en América Latina: el elevado porcentaje de recursos que concentra el 10% de los hogares ubicados en la parte superior de la escala distributiva. Este hecho queda en evidencia cuando se observa la enorme distancia existente entre el ingreso medio por habitante de los hogares del decil más rico y los de los cuatro deciles más pobres. En el 2002, la diferencia más baja entre estos dos grupos se registró en Uruguay, país cuyo décimo decil, que captó el 27,3% de los recursos nacionales, tuvo un ingreso medio 9,5 veces superior al de los cuatro primeros. En el otro extremo del espectro, los datos sobre la situación en Brasil en el 2001 muestran que mientras el 40% más bajo de la distribución percibía apenas el 10,2% del total del ingreso, el decil más rico recibía cerca de la mitad (46,8%), lo que se tradujo en un cociente de rentas medias de ambos grupos de 32,2 veces. Además de este caso, en siete países el ingreso medio del decil más alto fue 20 o más veces superior al de los cuatro deciles más bajos. Estas cifras revelan una grave disparidad dentro de los países, que limita las posibilidades de amplios segmentos de la población de gozar de un bienestar aceptable (véase el gráfico I.9).

La elevada participación del decil más rico en la distribución de ingresos es, a la vez, una característica que distingue a América Latina en el contexto internacional. Si se toman como referencia los datos de otras fuentes sobre la concentración de ingresos en los países más desarrollados, se observa que en ellos la participación del 10% más rico de los hogares se encuentra en torno al 25%, valor inferior al que se registra en cualquier economía latinoamericana.¹⁷

Se puede aplicar un enfoque complementario al anterior para estudiar la distribución de ingresos, consistente en analizar varios indicadores sintéticos que resumen la situación general a partir de los ingresos de toda la población y no solo de un grupo específico. Los numerosos indicadores disponibles en esta categoría difieren, entre otras cosas, en la importancia relativa que asignan a los hogares de ingresos más bajos respecto de los ingresos más altos. El índice de Gini, pese a ser el más conocido y utilizado en la práctica de la medición de la desigualdad, privilegia el estudio de las modificaciones que se producen en la parte media de la distribución y no asigna una ponderación mayor a su parte más baja.¹⁸ La capacidad para incrementar la ponderación de la parte inferior se considera deseable desde el punto de vista teórico, y sí está presente en índices como el de Atkinson, entre otros. Además, la formulación del índice de Atkinson permite ajustar la importancia relativa que se asigna a los ingresos más bajos por medio de un parámetro denominado “coeficiente de aversión a la desigualdad”.¹⁹

1. ÍNDICE DE GINI

Otra forma de comprobar la alta participación del décimo decil en el total de ingresos respecto de lo que se observa en otras regiones es mediante un indicador sintético como el índice de Gini. En particular, el cálculo de los valores de este indicador considerando únicamente el 90% restante de los hogares genera, en los países de América Latina, una reducción de entre 0,115 (Uruguay) y 0,192 puntos (Brasil) respecto del valor que se obtiene para el total de la población.²⁰ En contraste, la reducción del coeficiente de Gini que se produce al excluir el

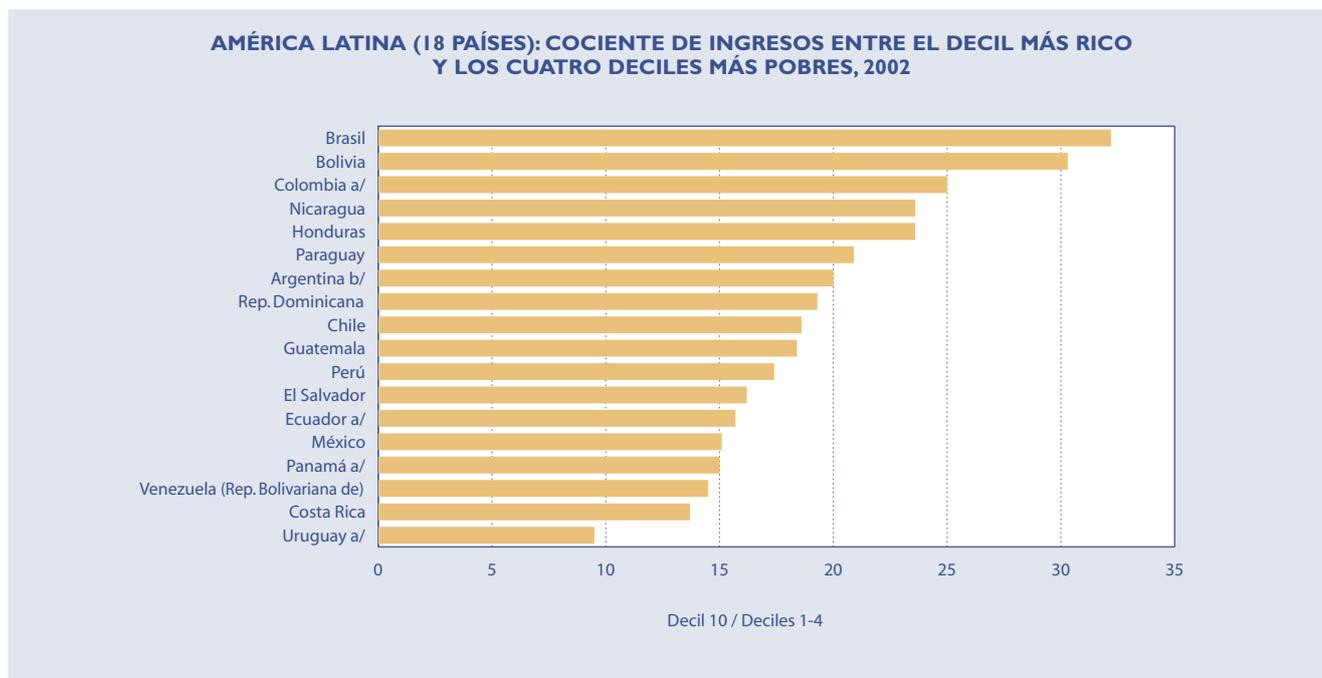
17 Promedio simple de 18 países de la OCDE durante el período 1995-2000, con base en información de la base de datos World Development Indicators [en línea] del Banco Mundial.

18 El índice de Gini, cuyo valor corresponde gráficamente al área comprendida entre la curva de Lorenz y la línea de equidistribución, es el más popular en el análisis de la distribución de ingresos, pese a que no cuenta con todas las propiedades deseables de este tipo de herramientas analíticas. Este índice toma valores entre 0 (equidad absoluta) y 1 (inequidad absoluta).

19 Índice propuesto en Atkinson, “On the measurement of income inequality”, *Journal of Economic Theory*, vol. 2, 1970. En el recuadro I.7 del Panorama social 2002-2003 se presenta información adicional acerca de las propiedades deseables de los índices de desigualdad, así como sobre la forma funcional que asume el índice de Atkinson.

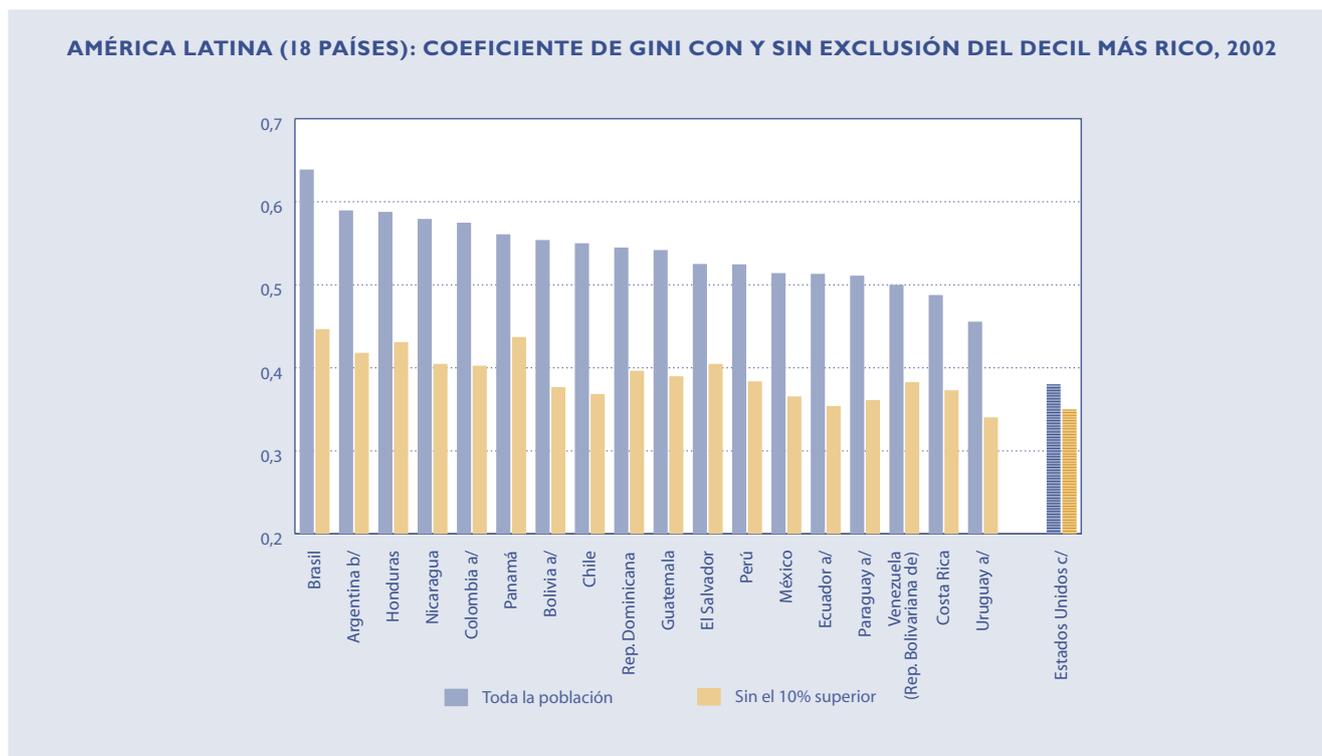
20 Este ejercicio se efectuó con el solo propósito de ilustrar lo que sucedería si no se consideraran en el análisis de los datos correspondientes al 10% de las familias más ricas. No obstante, se tiene presente que para corroborar la validez de este hallazgo, se debería modificar la ponderación del 90% de las observaciones restantes, con el propósito de que expandan al total de la población del país, teniendo en consideración el diseño estadístico que dio origen a la muestra observada.

Gráfico I.9



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ Áreas urbanas.
b/ Gran Buenos Aires.

Gráfico I.10



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ Áreas urbanas.
b/ Gran Buenos Aires.
c/ Cifra para Estados Unidos tomada de BID (1998); puede no ser estrictamente comparable con los demás datos reportados.

decil más rico en un país como Estados Unidos no superaría los 0,040 puntos (véase el gráfico I.10).²¹

Por otra parte, la heterogeneidad de la desigualdad en América Latina queda en evidencia al estratificar los países en cuatro categorías derivadas del coeficiente de Gini (véase el recuadro I.6). Cabe destacar, eso sí, que aun cuando los niveles de desigualdad de las naciones pueden diferir notablemente, la mayoría de ellas tiende a situarse en los estratos de alta y muy alta concentración del ingreso. Según los datos más recientes, en el estrato de baja

desigualdad se ubica solo Uruguay, cuyo indicador es inferior al 0,470. El estrato medio está integrado por Costa Rica, Ecuador (área urbana), México, Paraguay (área urbana) y la República Bolivariana de Venezuela, con coeficientes de Gini que oscilan entre el 0,488 y el 0,514. El estrato de alta desigualdad es el más numeroso, pues contiene nueve países con índices de concentración entre el 0,525 y el 0,579. Finalmente, Brasil, Argentina (Gran Buenos Aires)²² y Honduras, en ese orden, figuran en el estrato de muy alta inequidad, ya que el valor de sus índices es superior al 0,580 (véase el cuadro I.11).

Cuadro I.11

ESTRATIFICACIÓN DE PAÍSES SEGÚN EL COEFICIENTE DE GINI DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, 1990-2002 a/

Nivel de desigualdad	1990		1994		1997		1999		2002	
Muy alto 0,5800 - I	Brasil Honduras Guatemala	0,627 0,615 0,582	Brasil Nicaragua	0,621 0,582	Brasil Nicaragua	0,638 0,584	Brasil	0,640	Brasil Argentina c/ Honduras	0,639 0,590 0,588
Alto 0,5200 - 0,5799	Chile Panamá b/ Bolivia d/ México Colombia b/	0,554 0,545 0,538 0,536 0,531	Colombia b/ Honduras Chile Panamá b/ México	0,579 0,560 0,553 0,548 0,539	Colombia b/ Guatemala Chile Honduras Panamá b/ México Perú Bolivia b/ Argentina c/	0,577 0,560 0,560 0,558 0,552 0,539 0,532 0,531 0,530	Honduras Colombia b/ Chile Rep. Dominicana Perú México Argentina c/ Panamá b/ Ecuador b/	0,564 0,564 0,559 0,554 0,545 0,542 0,542 0,533 0,521	Nicaragua Colombia b/ Bolivia b/ Chile Rep. Dominicana Guatemala El Salvador Perú	0,579 0,575 0,554 0,550 0,544 0,543 0,525 0,525
Medio 0,4700 - 0,5199	Argentina c/ Uruguay b/ Venezuela (Rep. Bolivariana de)	0,501 0,492 0,471	Bolivia b/ Paraguay b/ Argentina c/ El Salvador Venezuela (Rep. Bolivariana de) Ecuador b/	0,514 0,511 0,508 0,507 0,486 0,479	El Salvador Venezuela (Rep. Bolivariana de) Paraguay b/	0,510 0,507 0,493	El Salvador Bolivia b/ Venezuela (Rep. Bolivariana de) Paraguay b/ Costa Rica	0,518 0,504 0,498 0,497 0,473	Panamá b/ México Ecuador b/ Paraguay b/ Venezuela (Rep. Bolivariana de) Costa Rica	0,515 0,514 0,513 0,511 0,500 0,488
Bajo 0 - 0,4699	Ecuador b/ Costa Rica	0,461 0,438	Costa Rica Uruguay b/	0,461 0,423	Ecuador b/ Costa Rica Uruguay b/	0,469 0,450 0,430	Uruguay b/	0,440	Uruguay b/	0,455

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a/ Incluye ingresos iguales a cero.

b/ Área urbana.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Ocho ciudades principales más El Alto.

21 Los resultados referidos a Estados Unidos corresponden a BID (1998).

22 Se utilizan los datos correspondientes al Gran Buenos Aires para preservar la comparabilidad con el año 1990. No obstante, los datos para áreas urbanas del 2002 situarían a Argentina entre Honduras y Nicaragua en el ordenamiento de países, sin que se altere su clasificación en el estrato de muy alta desigualdad.

Si se compara la clasificación descrita, elaborada con datos del año 2002, con la correspondiente a 1990, se puede constatar que los países han ido convergiendo hacia una mayor concentración del ingreso.²³ En primer lugar, se observa que los valores extremos entre los que fluctúan los coeficientes de Gini han aumentado. Mientras en 1990 los límites inferior y superior de este indicador alcanzaban 0,438 (Costa Rica) y 0,627 (Brasil) respectivamente, en el 2002 se habían desplazado hasta 0,456 (Uruguay) y 0,639 (Brasil). Por otra parte, varios países han mostrado un deterioro perceptible en materia distributiva (Argentina, Costa Rica, Ecuador y Colombia, entre otros), y solo tres (Guatemala, México y Panamá) experimentaron una mejoría apreciable.

Entre los países que se ubicaron en el grupo de muy alta desigualdad en el 2002 cabe destacar a Brasil, ya que durante los trece años que abarca este

estudio ha registrado los niveles más altos del coeficiente de Gini, entre el 0,627 y el 0,640. Asimismo, merece una mención el caso de Argentina (datos solo del Gran Buenos Aires), cuyo índice de Gini ha aumentado constantemente y casi un 18% entre 1990 y el 2002, por lo que ha pasado del estrato medio al de muy alta concentración. No obstante, la situación del año 2002 es resultado de la severa crisis económica acaecida en ese país, por lo que este dato de coyuntura no debería considerarse representativo de la tendencia distributiva de más largo plazo.

El deterioro regional en la distribución del ingreso es particularmente evidente en los países que tradicionalmente han constituido ejemplos de mayor equidad en la región. En efecto, tanto Uruguay como Costa Rica, que desde mediados de los noventa han encabezado la lista de países con menores niveles de inequidad, han sufrido procesos

Recuadro I.6

ESTRATIFICACIÓN DE PAÍSES SEGÚN EL COEFICIENTE DE GINI

Con el objetivo de dar una mirada sintética a la heterogeneidad que presenta la desigualdad entre los países de la región, se llevó a cabo una clasificación con base en el algoritmo de estratificación estadística de las k-medias. El objetivo de esta opción metodológica es generar estratos que sean homogéneos en su interior pero a la vez presenten la máxima variabilidad posible entre ellos.

En cualquier ejercicio de esta naturaleza, resulta crucial determinar cuál es el número óptimo de grupos. La estratificación propuesta en cuatro categorías se consideró la más adecuada, pues da cuenta de más del 95% de la varianza total de los valores del índice de Gini observados alrededor del año de referencia del ejercicio (1990).

A continuación se presenta la información relevante de cada estrato.

Estrato	Número de países	Coeficiente de Gini promedio	Desviación estándar	Límites	
				Inferior	Superior
Bajo	3	0,4458	0,0113	0	0,4699
Medio	3	0,4818	0,0163	0,4700	0,5199
Alto	5	0,5435	0,0123	0,5200	0,5799
Muy alto	3	0,6099	0,0204	0,5800	1

La mayor dispersión —medida a partir de la desviación estándar— se observó en el estrato formado por Guatemala, Honduras y Brasil, correspondiente a los registros de mayor desigualdad con un coeficiente de Gini promedio de 0,610. Por su parte, el estrato de baja inequidad es el que presenta la menor dispersión. El valor mínimo del coeficiente de Gini observado en este ejercicio corresponde a Costa Rica (0,438), país con la concentración del ingreso más baja de la región en 1990.

Cabe señalar que la estratificación basada en el índice de Atkinson, presentada en el cuadro I.13, se elaboró con un procedimiento estadístico similar al descrito.

23 Habida cuenta de los márgenes de error de los indicadores de desigualdad. Al respecto, véase el recuadro I.7.

concentradores que se manifestaron en aumentos significativos del coeficiente de Gini. En el 2002, Uruguay registró el valor más bajo (0,456) y fue el único que clasificó en el estrato bajo. Sin embargo, desde 1994 ha retrocedido en materia distributiva, con un incremento acumulado de 0,032 puntos en el valor del índice respecto al observado en aquel año. Por su parte, el índice de Costa Rica ha venido aumentando en forma constante desde 1990 y ha pasado del 0,438 en ese año a 0,488 en el 2002, lo que le ha valido abandonar el estrato de inequidad baja y clasificar en el de inequidad media (a partir de 1999).

Es necesario destacar que en unos pocos países se han reducido los niveles de desigualdad con respecto a 1990. No obstante, en varios de ellos los avances se produjeron en la primera mitad de la década pasada y más tarde se invirtió la tendencia. Entre los casos que mejoraron tanto en la comparación entre el inicio y el final del período como en años recientes solo figuran Guatemala, México y Panamá (área urbana). No obstante, dado que los mejoramientos mencionados se han manifestado solo en pocos años, queda en duda si estos corresponden a avances consolidados en materia distributiva u obedecen a una situación coyuntural que no necesariamente marca una tendencia hacia patrones de mayor equidad.²⁴

2. ÍNDICE DE ATKINSON Y OTROS

Los complejos cambios ocurridos en el perfil distributivo de una sociedad difícilmente pueden ser captados por un solo indicador. Más aún, como ya se señaló, el coeficiente de Gini no permite evaluar en forma adecuada la situación de los hogares de ingresos más bajos en la distribución total. Por lo tanto, para saber lo que ha sucedido con los grupos más pobres durante estos trece años, conviene incorporar al análisis indicadores complementarios que enfatizan las variaciones ocurridas en la parte baja de la distribución del ingreso. Atendiendo a estas con-

sideraciones, se efectuó una estratificación de países adicional a la del coeficiente de Gini empleando el índice de Atkinson (véase el cuadro I.12).

Un primer aspecto destacable es que el índice de Atkinson genera cambios significativos en la posición relativa de los países respecto de la obtenida a partir del índice de Gini, dado que otorga una ponderación mayor a las observaciones correspondientes a los grupos de recursos más bajos. Por ejemplo, si se ordenan los países en forma descendente según los datos del año 2002, naciones como Costa Rica y El Salvador se sitúan en una peor posición relativa de la que presentaban de acuerdo con el coeficiente de Gini, mientras que Guatemala muestra niveles de desigualdad algo menores.

No obstante este cambio en el orden relativo, la evolución entre 1990 y el 2002 de la clasificación de países en los estratos de desigualdad tiende a confirmar la convergencia hacia la concentración observada a partir de análisis del coeficiente de Gini. En 1990, el número de países que ocupaban el estrato de desigualdad media era similar al de los que se ubicaban en los estratos alto y muy alto. No obstante, en el 2002 solo había tres países en el grupo de desigualdad media, y el resto (excepto Uruguay) se clasificaba en los niveles alto y muy alto.

La verificación de las variaciones observadas en la desigualdad entre 1990 y el 2002 a partir de otros indicadores complementarios (el índice generalizado de entropía con parámetros -1 y 2, el índice de Theil y la varianza de los logaritmos, entre otros) permite afirmar que en seis países (Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela) se produjo un deterioro distributivo. En contraste, solo en Guatemala, Honduras y México los indicadores coincidieron en señalar una reducción de la inequidad. Sin embargo, no debe perderse de vista que en Honduras la desigualdad ha venido aumentando desde 1999, y que en México el resultado es producto exclusivamente del último trienio, por lo que sus

24 Considérese además que en varios países los cambios introducidos en las encuestas pueden dificultar la comparación de los resultados con años anteriores. Véase CEPAL (2003a), recuadros I.3 y I.4, para más información.

Cuadro I.12

ESTRATIFICACIÓN DE PAÍSES SEGÚN EL ÍNDICE DE ATKINSON ($\alpha=2$) DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, 1990-2002 a/ b/					
Nivel de desigualdad	1990	1994	1997	1999	2002
Muy alto 0,720 - 1	Bolivia e/ Brasil Honduras	Venezuela (Rep. Bolivariana de) Nicaragua Brasil Colombia c/	Nicaragua Venezuela (Rep. Bolivariana de) Brasil	El Salvador Brasil Honduras	El Salvador Nicaragua Brasil Panamá c/
Alto 0,600 - 0,719	Guatemala Panamá c/ Chile Colombia c/	Honduras El Salvador Panamá c/ Chile	Honduras Panamá c/ Perú Chile Bolivia c/ Guatemala México Argentina d/ Colombia c/	Bolivia c/ Perú Colombia c/ Chile Venezuela (Rep. Bolivariana de) Rep. Dominicana Argentina d/ México Panamá c/	Colombia c/ Honduras Argentina d/ Bolivia c/ Costa Rica Chile Rep. Dominicana Paraguay c/ Perú Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Medio 0,550 - 0,599	México Ecuador c/ Argentina d/	México Paraguay c/ Argentina d/ Bolivia c/	El Salvador	Ecuador c/ Paraguay c/ Costa Rica	Guatemala Ecuador c/ México
Bajo 0 - 0,549	Venezuela (Rep. Bolivariana de) Costa Rica Uruguay c/	Costa Rica Ecuador c/ Uruguay c/	Paraguay c/ Costa Rica Ecuador c/ Uruguay c/	Uruguay c/	Uruguay c/

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a/ No incluye ingresos iguales a cero.

b/ A partir de datos agrupados en 10.000 conjuntos de igual tamaño poblacional. Por tanto, esta estratificación no se corresponde exactamente con la que surgiría del uso de datos no agrupados, cuyos valores se presentan en el cuadro 25 del anexo estadístico.

c/ Área urbana.

d/ Gran Buenos Aires.

e/ Ocho ciudades principales más El Alto.

respectivos avances no pueden interpretarse como una tendencia sostenida hacia el más largo plazo.

En suma, los datos expuestos en esta sección confirman que América Latina continúa siendo una región con altos niveles de concentración del ingreso y, lo que es más importante, que entre 1990 y el 2002 hubo una convergencia de los países de la región hacia índices más altos de desigualdad. En unos pocos casos se observaron mejoras de la distribución del ingreso durante este período, mientras que en varios otros se confirmó un deterioro de este indicador, y entre ellos se encontraban los países que tradicionalmente se han considerado más equitativos. Un elemento que contribuye a explicar los altos valores de los indicadores de desigualdad es la elevada participación del 10% de hogares más ricos en los ingresos totales del país, característica que además resulta distintiva de la región en el contexto internacional.

Mejorar la distribución del ingreso es un imperativo ético que, además, permitiría incrementar la tasa de crecimiento. La mala distribución del ingreso y, sobre todo, la mala distribución de la riqueza tienen consecuencias negativas en el crecimiento que se multiplican en la región debido al funcionamiento inadecuado de los mercados, lo cual dificulta el acceso al crédito y al conocimiento. Por otra parte, las mejoras en el ámbito distributivo aumentarán el efecto positivo del crecimiento en la reducción de la pobreza.

Para avanzar hacia una distribución del ingreso más equitativa es necesario diseñar políticas públicas que incidan en varios ámbitos: i) facilitar el acceso a los activos como la tierra, el capital, el conocimiento y la tecnología; ii) lograr un desarrollo productivo que cuente con una alta participación de pequeñas y medianas empresas, así como un desarrollo territorial equilibrado; iii) desarrollar iniciativas

sociales con base en los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, para lo que se requerirán recursos suficientes (pacto fiscal) y una asignación más eficiente de esos recursos.

En síntesis, lo que se requiere es instituir la equidad como centro y fundamento de la política de desarrollo.

Recuadro I.7

¿CÓMO MEDIR LOS CAMBIOS DEL NIVEL DE DESIGUALDAD?

Para evaluar los efectos de las políticas públicas en las condiciones de vida de la población es necesario determinar si las variaciones observadas en los índices de bienestar son significativas desde la óptica estadística o si obedecen únicamente a su naturaleza aleatoria. El margen de error asociado a los índices de pobreza y desigualdad, al igual que al resto de indicadores generados con datos de encuestas, se establece a partir de su coeficiente de variación (CV), para cuyo cálculo se deben tener en cuenta las especificaciones establecidas por el diseño muestral de la fuente de información utilizada. En la medida en que el coeficiente de variación presente valores bajos (generalmente inferiores al 10%), se asume que los estimadores son confiables y útiles para extrapolar el comportamiento de la muestra a la población.

Por su parte, cuando se desea saber si entre dos fechas se han producido cambios significativos en el índice de desigualdad de Gini, es necesario efectuar una prueba de hipótesis. Una aplicación concreta consiste en evaluar en qué medida los cambios observados en este índice entre 1990 y el 2002 fueron significativos. Para ello se estableció como hipótesis nula que no se registraran cambios en el período ($G_{90}=G_{02}$), con la hipótesis alternativa de que las mediciones en ambos años fueran distintas. Cuando el valor asumido por el estadístico de prueba (z) es mayor que el correspondiente a un 99% de confiabilidad, se rechaza la hipótesis nula, por no existir evidencia estadística suficiente para asumir lo contrario.

$$Z = \frac{G_{02} - G_{90}}{\sqrt{S^2_{G_{02}} + S^2_{G_{90}}}},$$

donde z tiene una distribución normal estandarizada, G_x es el valor del índice de Gini para el año x , y $S^2_{G_x}$ es el cuadrado del error estándar de dicho indicador.

País	Año	Gini	Límites de Confianza		Error estándar	Estadístico de prueba (z)
			Inferior	Superior		
Brasil	1990	0,6273	0,6237	0,6314	0,0015	3,59*
	2001	0,6388	0,6349	0,6434	0,0017	
Chile	1990	0,5533	0,5468	0,5580	0,0023	-0,57
	2003	0,5500	0,5427	0,5584	0,0034	
Nicaragua	1993	0,5822	0,5717	0,5943	0,0052	-0,17
	2001	0,5793	0,5503	0,6015	0,0116	
Perú	1997	0,5317	0,5201	0,5435	0,0048	0,13
	2001	0,5246	0,5160	0,5313	0,0030	
Rep. Dominicana	2000	0,5540	0,5308	0,5500	0,0042	-1,18
	2002	0,5449	0,5348	0,5517	0,0036	

Nota: El asterisco (*) denota que el valor es estadísticamente significativo al 99%.

A su vez, para aproximar el error estándar se aplicó la técnica de "bootstrap", fijando los límites de los intervalos al 99% de confianza. A partir de este ejercicio, queda en evidencia que los valores estimados del coeficiente de Gini no debieran asumirse como absolutos, puesto que corresponden a uno de los muchos valores posibles contenidos en el intervalo de confianza. En el 2001, por ejemplo, el coeficiente de la República Dominicana se ubicó entre el 0,5348 y el 0,5517, por lo que cualquier valor comprendido entre esos límites sería igualmente válido para expresar el grado de concentración del ingreso de ese país.

Por otra parte, se confirma que en Brasil se registró un aumento estadísticamente significativo de la concentración de la riqueza entre 1990 y 2001, mientras que los datos no permiten llegar a esta misma conclusión en los demás casos. Por tanto, habría que ser prudente, tal como se indicó en el texto, al afirmar que entre 1990 y el 2003 se redujo la desigualdad distributiva en Chile, Perú o la República Dominicana, o que esta aumentó en Nicaragua, en atención a que los coeficientes de Gini de esos países no siempre resultan distintos entre ambos períodos desde la perspectiva de la significación estadística.



Transformaciones demográficas en América Latina y el Caribe y consecuencias para las políticas públicas

INTRODUCCIÓN

Las transformaciones demográficas son parte del proceso de cambio social y económico que ha experimentado la región a lo largo de las últimas décadas y dan curso a estructuras por edades completamente distintas de las que prevalecían hasta mediados del siglo pasado. Estos cambios han ido ocurriendo de forma tal que, si bien su predicción no siempre ha sido acertada, al menos se han enmarcado en las grandes líneas que definen el proceso de transición demográfica. Lo que nuestras sociedades ya empiezan a ver como pautas normales (familias pequeñas, expectativas de vida crecientes), solo existía en algunas sociedades y en los sectores más favorecidos de algunos países. Sin duda, estas transformaciones implican cambios cualitativos en las modalidades en que se organizan las sociedades y al mismo tiempo sirven de marco a los cambios culturales y económicos que han acompañado a este proceso.

Los desafíos que plantean estas transformaciones no siempre se identifican a tiempo ni se consideran adecuadamente, a pesar de que suelen ser bastante predecibles, al menos en sus grandes tendencias. En el presente capítulo se examinan los principales cambios demográficos de los países de América Latina y el Caribe y se pone especial atención en las exigencias que ellos representan para las políticas públicas, la equidad social y el ejercicio de los derechos humanos. Se abordan cinco grandes temas: las tendencias de la población y, en particular, del envejecimiento; la fecundidad; la mortalidad; la migración internacional y la migración interna, y la redistribución espacial de la población. La información empleada se origina en los censos y las encuestas nacionales de hogares y demográficas. También se utilizan datos de las proyecciones de población de los países.

A. LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Y LAS TENDENCIAS DEL ENVEJECIMIENTO

Los países de América Latina y el Caribe han experimentado profundas transformaciones demográficas, cuyas expresiones distintivas son la disminución del crecimiento de la población (del 2,7% anual en el período 1950-1955 al 1,5% en la actualidad) y el creciente envejecimiento de las estructuras por edad. Detrás de esta evolución, sobresale la acelerada caída de la fecundidad, especialmente desde mediados de la década de 1960, que fue precedida por la reducción sostenida de la mortalidad desde finales de la primera mitad del siglo XX, lo que hoy se refleja en una esperanza de vida al nacer de 72 años, es decir, 8 años más alta que la del conjunto de las regiones en desarrollo.

La transición demográfica ha sido acelerada, pero mantiene rasgos de heterogeneidad entre y dentro de los países; no obstante, a nivel regional ha conllevado dos grandes cambios: la disminución de la dependencia demográfica y el envejecimiento de las poblaciones. Mientras que la primera contribuye a una holgura demográfica en el mediano plazo, el segundo es, definitivamente, motivo de enormes desafíos para las sociedades, pues la proporción y el número absoluto de personas de 60 años y más se incrementarán sostenidamente en los próximos decenios y la velocidad de cambio de esta población será entre tres y cinco veces mayor que la de la población total en los períodos 2000-2025 y 2025-2050, respectivamente. La proporción de personas mayores de 60 años se triplicará entre los años 2000 y 2050 y uno de cada cuatro latinoamericanos será un adulto mayor.

1. DESCENSO SOSTENIDO DE LA FECUNDIDAD Y LA MORTALIDAD

Los países de América Latina y el Caribe han experimentado profundas transformaciones demográficas, que han derivado en la disminución del crecimiento de la población y un progresivo envejecimiento de las estructuras por edad (véanse los recuadros II.1 y II.2). Entre los factores más decisivos se encuentra la evolución de la fecundidad, cuyo acelerado cambio es uno de los más relevantes de la historia demográfica latinoamericana y caribeña reciente: en solo 40 años la región ha pasado de tener índices reproductivos elevados, entre los más altos del mundo, a alcanzar niveles inferiores a la media mundial (véase el gráfico II.1).

La baja de la fecundidad fue precedida por la reducción sostenida de la mortalidad, que ya era manifiesta hacia finales de la primera mitad del siglo XX. Este desfase motivó el acelerado crecimiento experimentado por la población regional, especialmente entre 1950 y 1970. En los últimos 50 años, la población de América Latina habría ganado 20 años en el promedio de vida, lo que significa una esperanza de vida al nacer de 72 años para ambos sexos en promedio en el quinquenio 2000-2005

(véase el gráfico II.2). Esta esperanza de vida es 8 años mayor que la del total de las regiones en desarrollo y la segunda más alta entre las grandes regiones del mundo. Pese a ello, el nivel de la mortalidad en la región es similar al que ya tenían los países más desarrollados hace 35 años, lo que indica que aún se puede y se debe avanzar significativamente en su reducción, ya que, además, hay experiencia acumulada sobre la manera de hacerlo.

Recuadro II.1

EL MODELO DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

El proceso de “transición demográfica” se caracteriza, en una etapa inicial, por el descenso sostenido de la mortalidad y posteriormente de la fecundidad, para luego dar comienzo a una nueva fase con niveles bajos en ambas variables.

En el siguiente esquema se ilustra bien este proceso, pues en él se advierte que, con anterioridad a la transición demográfica, las tasas de crecimiento de la población fueron relativamente bajas, por efecto de las tasas de mortalidad y natalidad elevadas y similares. En una segunda etapa, la disminución de la mortalidad y un aumento de la fecundidad ocasionan un aumento de las tasas de crecimiento de la población. Luego, se produce una caída de la fecundidad y, como consecuencia, una reducción de la tasa de crecimiento de la población. Por último, se tiende a un equilibrio, en que las bajas tasas de mortalidad y natalidad observadas dan origen a un escaso crecimiento poblacional.

En consecuencia, las etapas que se identifican en este proceso son cuatro:

- i) etapa pretransicional: natalidad y mortalidad elevadas y relativamente estables; crecimiento poblacional bajo;
- ii) etapa transicional inicial: la mortalidad disminuye en tanto que la natalidad se mantiene estable o aumenta como consecuencia de las mejores condiciones de vida; crecimiento poblacional elevado;
- iii) etapa transicional: la natalidad desciende en tanto que la mortalidad se estabiliza; crecimiento poblacional más bajo;
- iv) etapa postransicional: se alcanzan bajos niveles en ambas variables y el crecimiento poblacional es escaso o nulo.

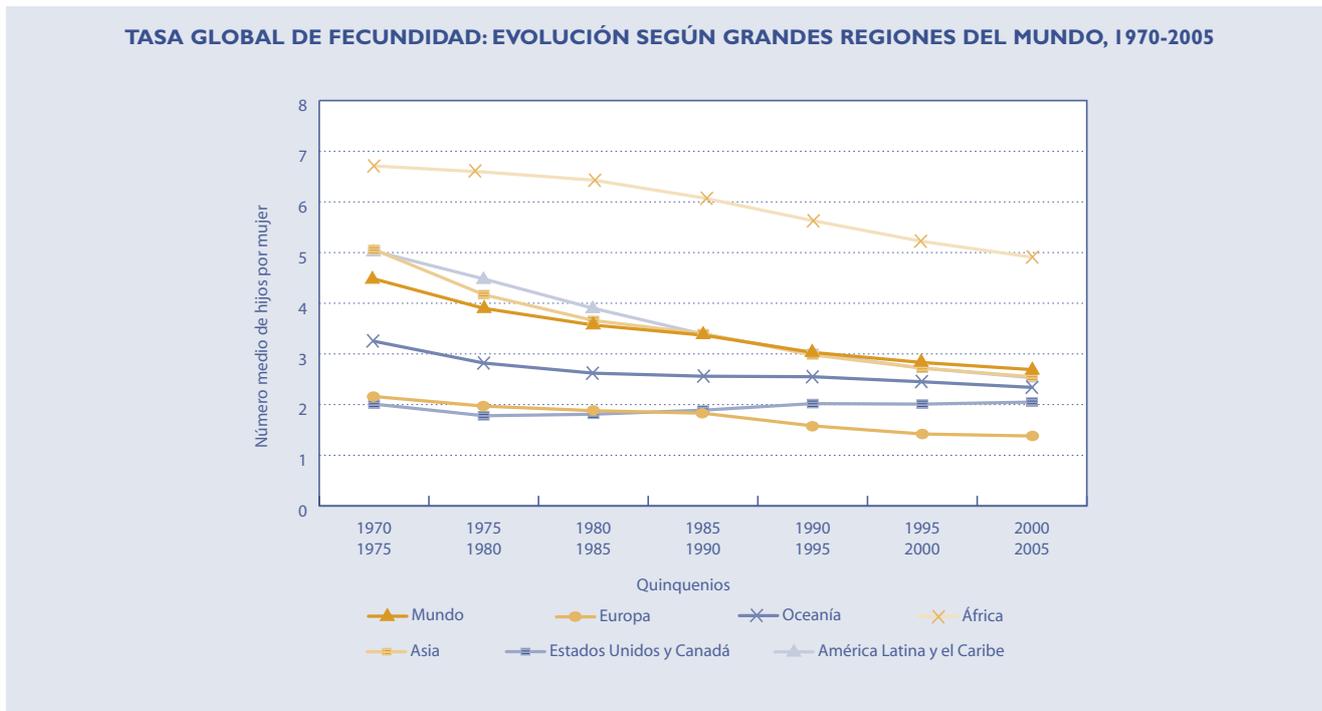
Aunque se pueden encontrar excepciones en la continuidad del proceso descrito anteriormente, es un modelo útil para el análisis de las tendencias demográficas recientes de los países de América Latina y el Caribe.

ETAPAS DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA



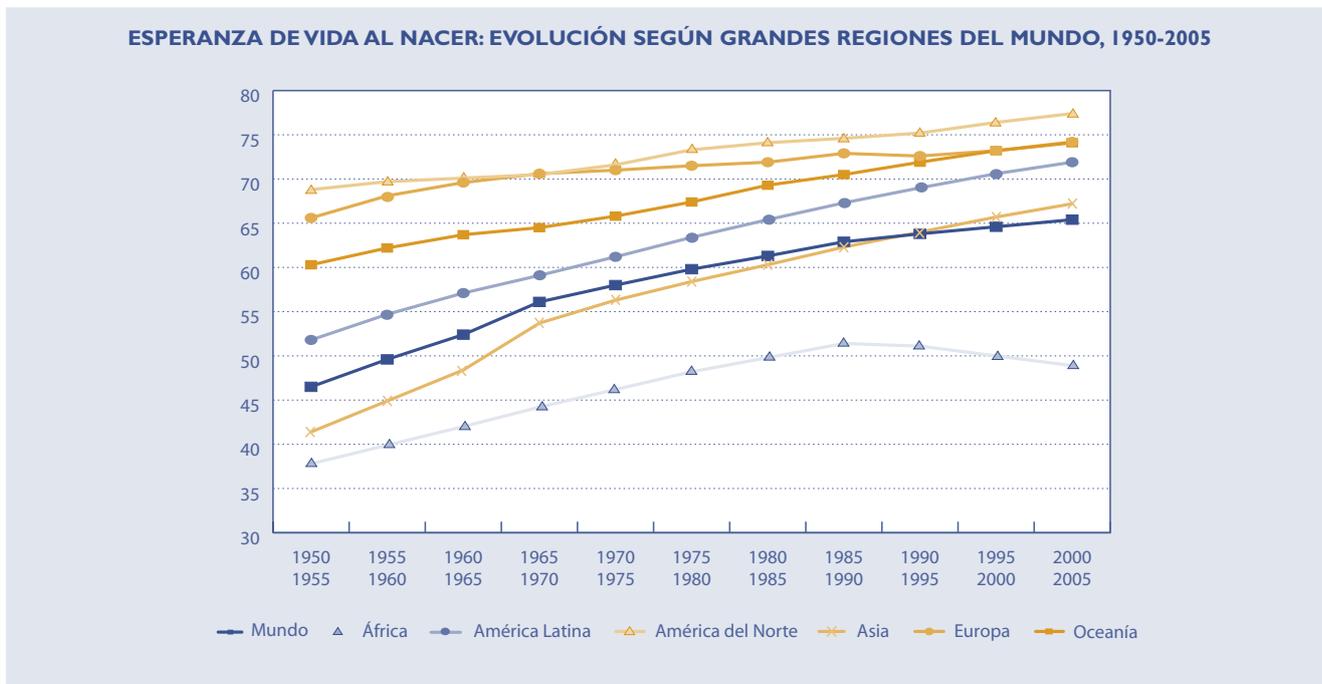
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2004.

Gráfico II.1



Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision (ST/ESA/SER.A/222)*, vol. I, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2003 y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "América Latina y Caribe: estimaciones y proyecciones de población. 1950-2050", *Boletín demográfico*, N° 73 (LC/G.2225-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, enero del 2004.

Gráfico II.2



Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision (ST/ESA/SER.A/222)*, vol. I, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2003 y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "América Latina y Caribe: estimaciones y proyecciones de población. 1950-2050", *Boletín demográfico*, N° 73 (LC/G.2225-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, enero del 2004.

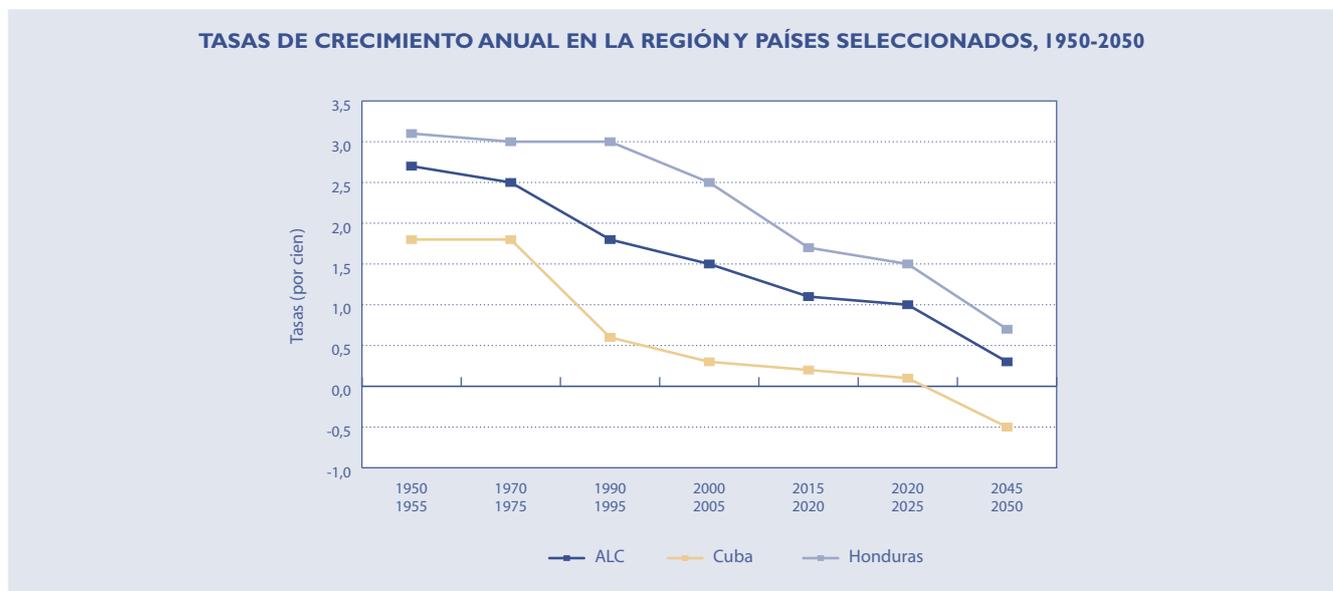
2. DISMINUCIÓN DEL CRECIMIENTO Y REMODELACIÓN ETARIA DE LA POBLACIÓN

A mediados del siglo XX, la tasa de crecimiento anual de la población de América Latina y el Caribe era de 2,7%, mientras que en la actualidad es de 1,5%. Debido a la elevada expansión relativa en las primeras décadas, la población regional se triplicó con creces entre 1950 y 2000, pasando de 161 millones de habitantes en 1950 a 512 millones en el año 2000. De acuerdo con las proyecciones, dicha población ascenderá a 695 millones en 2025 y a 794 millones en 2050. En consecuencia, mientras que en 1950 la población de la región representaba menos del 7% de la población mundial, dicha proporción se eleva en la actualidad a cerca del 9%. Dada la heterogeneidad de la transición, hay países que se distancian del promedio de crecimiento actual, llegando a los extremos de tasas anuales de crecimiento de 0,3% en Cuba, y de 2,5% en Honduras (véase el gráfico II.3). En estos países, de crecimiento demográfico pronunciado, las exigencias que aún mantienen tales tasas en

términos de inversiones sociales básicas repercuten en sus capacidades para cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio, especialmente en aquellos componentes relacionados con la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Ahora bien, el ritmo de crecimiento de la población varía marcadamente entre los distintos grupos de edad (véanse los gráficos II.4 y II.5). Los niños, que experimentaban el mayor aumento a mediados del siglo XX, tendrán a disminuir hacia fines de la primera mitad del siglo XXI. Más aún, en la década de 2040, todos los grupos quinquenales menores de 40 años experimentarán una merma absoluta de sus efectivos. En la actualidad, el mayor crecimiento absoluto corresponde a la población en edades centrales, pero tal condición se irá desplazando progresivamente hacia las personas de 60 años y más en torno del año 2050. Los cambios que se advierten en la composición por edad de las poblaciones representan los desafíos más importantes desde el punto de vista social y económico. La relación de dependencia demográfica y los indicadores del envejecimiento demográfico resumen estas mutaciones.¹

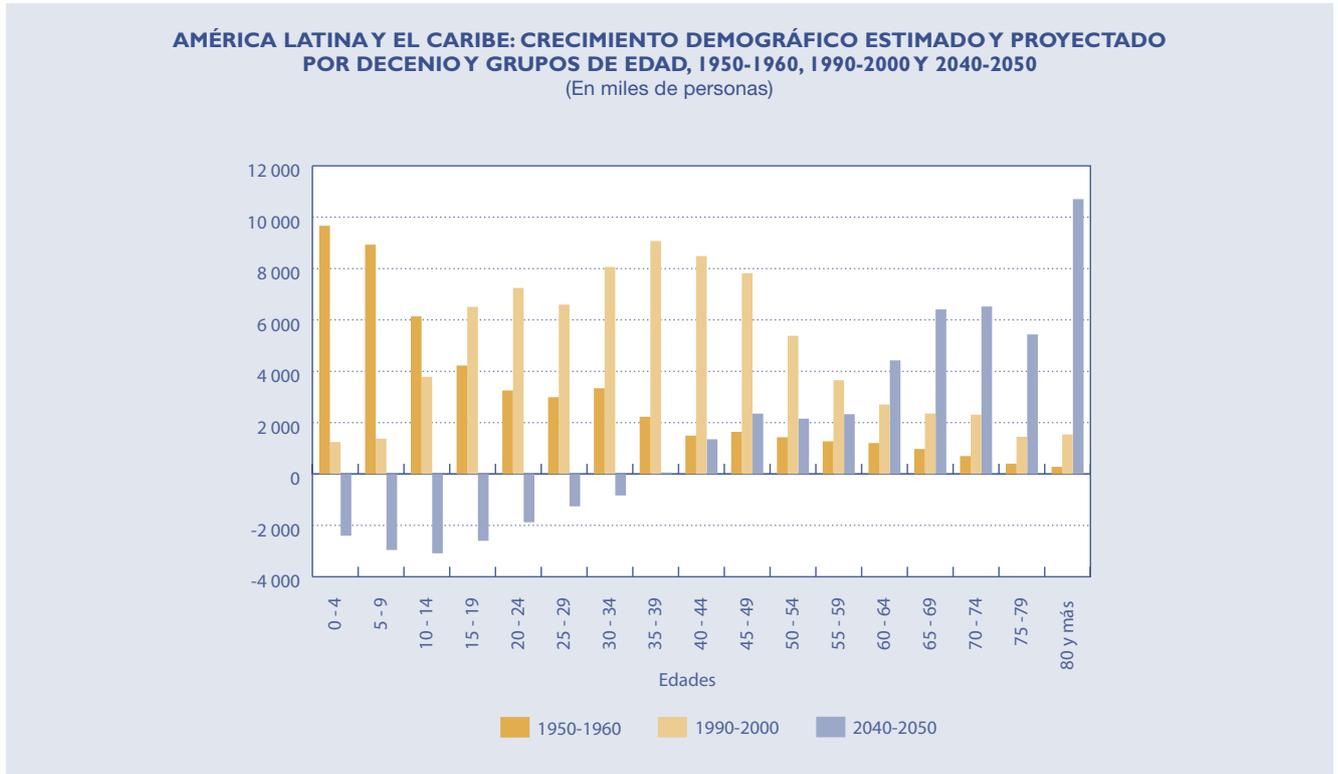
Gráfico II.3



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estimaciones y proyecciones de población vigentes. ALC: América Latina y el Caribe.

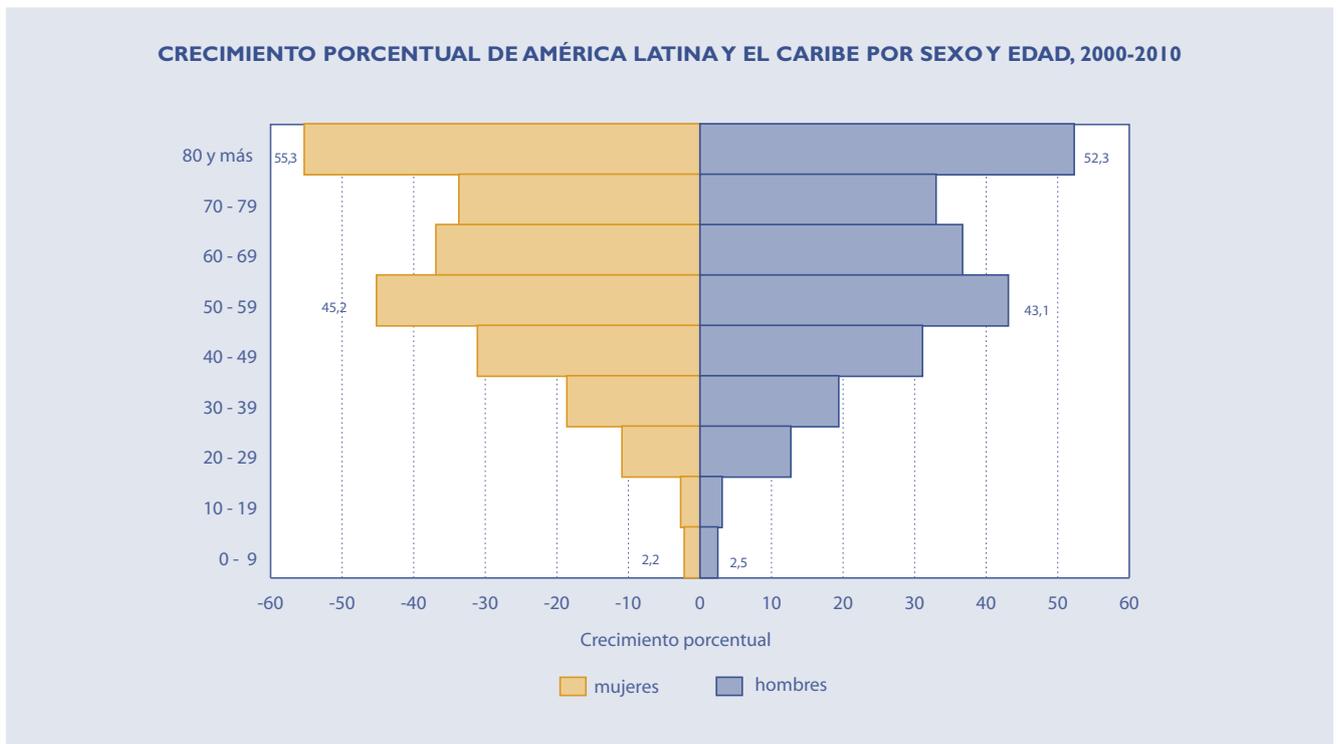
¹ Cociente entre la población en edades de 0 a 14 años, más la población de 60 años y más con respecto a la población potencialmente activa (15-59 años).

Gráfico II.4



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base estimaciones y proyecciones de población vigentes.

Gráfico II.5



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estimaciones y proyecciones de población vigentes.

3. LA DISMINUCIÓN DE LA TASA DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA: EL BONO DEMOGRÁFICO Y SU APROVECHAMIENTO

La disminución que experimenta la tasa de dependencia demográfica ha dado pie a la idea del bono demográfico, una situación favorable al desarrollo en que la carga potencial de las personas en edad activa es baja. En los inicios de la transición demográfica la relación de dependencia fue elevada debido al alto porcentaje de niños, lo que planteó enormes exigencias a los sistemas de salud, especialmente de salud materna e infantil, y de educación. En una segunda etapa, gracias a la baja de la fecundidad, se redujo la relación de dependencia a valores inferiores a 60 personas en edades extremas (menores de 15 años y mayores de 60 años) por cada 100 personas de 15 a 59 años, lo que fue más notorio en países cuya transición estaba más avanzada. De esta forma, la menor presión de las demandas de la población infantil, que en una primera etapa se produce sin que aún aumente notablemente el grupo de personas mayores, sustenta hasta ahora el bono demográfico, y da pie a la posibilidad de generar inversiones productivas o de incrementar la inversión social en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento de la educación y la reforma de la salud. Ello ayudaría, además, a anticipar inversiones ante el incremento de la población adulta mayor cuyas demandas serán más costosas.

Mediante el concepto de “ventana de oportunidades”, como también se conoce al bono demográfico, se procuró captar la transición del primer efecto de la caída de la fecundidad, en la que se registran las condiciones más favorables de la estructura etaria de la población debido a la baja tasa de dependencia: la proporción de niños y adolescentes se reduce, sin que crezca significativamente la dependencia de las edades mayores (Filgueira y Peri, 2004).

El “bono” está acotado temporalmente, como revela el gráfico II.6, ya que la menor fecundidad y los incrementos de la longevidad acrecientan el peso de las personas mayores y, en consecuencia, la relación de dependencia se eleva nuevamente, esta vez generando otras demandas de atención de salud y seguridad económica. El momento en que se produce el aumento de la relación de dependencia marca el fin del bono demográfico (puede observarse que este desaparecerá en la próxima década en ocho países).² Al mismo tiempo, una parte de los dividendos de dicho bono no está garantizada, pues depende de la capacidad de las economías de la región para generar empleo en el período en que este ocurre. Así, para aprovechar el escenario del bono demográfico se requerirá atender a la oferta laboral de una población activa creciente y, simultáneamente, disminuir la inseguridad, la precariedad y la informalidad típicas de los mercados laborales de la región. De lo contrario, el bono se convierte en una carga adicional de los países, expresada en una fuerte presión de la población que busca empleo en un contexto restrictivo del incremento de las posibilidades de trabajo.

4. EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y LOS DESAFÍOS QUE PLANTEA

Debido al avance de la transición demográfica, la población de América Latina y el Caribe está envejeciendo paulatina, pero inexorablemente. En todos los países de la región, la proporción y el número absoluto de personas de 60 años y más se incrementarán sostenidamente en los próximos decenios (véase el cuadro II.1 y el recuadro II.3). En términos absolutos, entre los años 2000 y 2025, 57 millones de personas mayores se sumarán a los 41 millones existentes, y entre 2025 y 2050 ese aumento será de 86 millones de personas.³ Se trata de una población

2 En las poblaciones de los países desarrollados, como los de Europa, se observa que el bono demográfico desaparece a contar de la segunda mitad del siglo XX, lo que es notable y marca una tendencia sistemática en los países, que acompaña al envejecimiento demográfico (Naciones Unidas, 2003a).

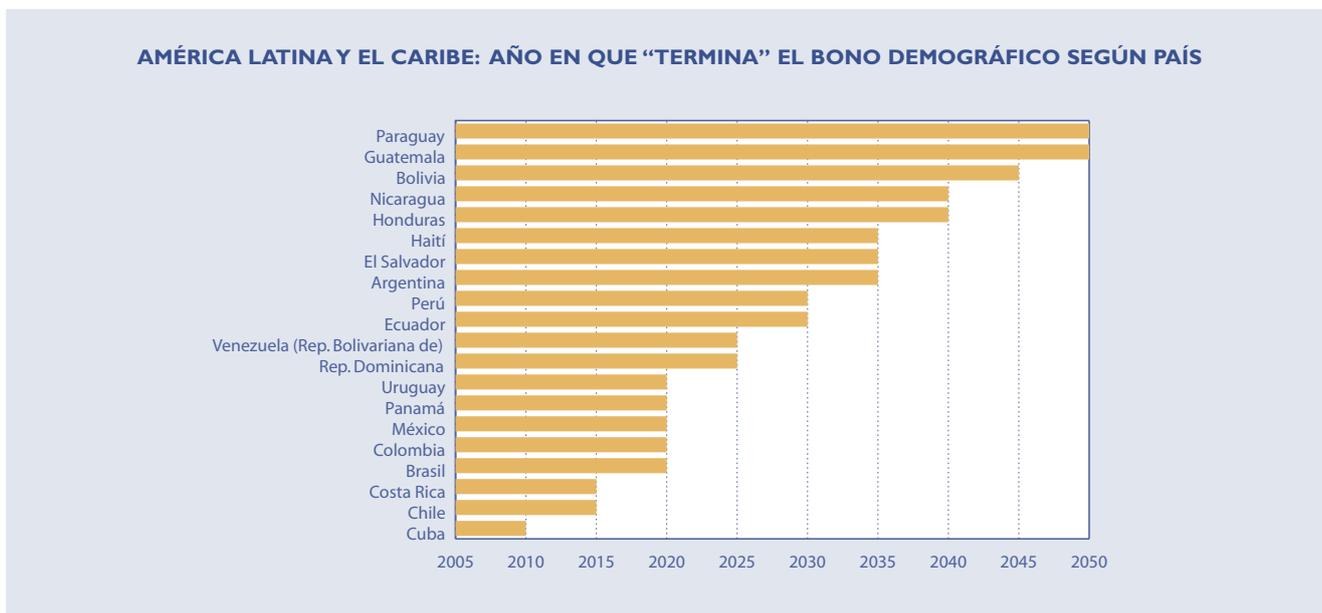
3 Los datos presentados se basan en proyecciones que, por su propio carácter, tienen un cierto nivel de incertidumbre. Sin embargo, sugieren grandes tendencias demográficas que difícilmente se modificarán, porque las personas mayores de los próximos 60 años ya nacieron.

que crece rápidamente (3,5%) y con un ímpetu mayor que la población de edades más jóvenes. La velocidad de cambio de esta población será entre tres y cinco veces mayor que la de la población total en los períodos 2000-2025 y 2025-2050, respectivamente. Fruto de esta dinámica, la proporción de personas mayores de 60 años se triplicará entre el año 2000 y el 2050; de ese modo, para esta última fecha, uno de cada cuatro latinoamericanos será una persona adulta mayor. Cuando se considera la situación de las poblaciones europeas, se observa que en 1950 las personas de 60 años y más constituían, en

promedio, un 12% del total, mientras que en el año 2000 representaban el 20% y, de acuerdo con las proyecciones, serán el 35% hacia el año 2050, valor que en solo algunos países del Caribe se alcanzará en esa fecha (notablemente, el caso de Cuba; Naciones Unidas, 2003a).

Ahora bien, debido al aumento de la longevidad, el peso de las personas más viejas entre los mayores también se incrementará; la población mayor de 75 años pasará de un 2% a un 8% entre el año 2000 y el 2050.

Gráfico II.6



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estimaciones y proyecciones de población vigentes.

Cuadro II.1

INDICADORES DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2000, 2025 Y 2050

Indicadores	2000	2025	2050
Población de 60 años y más (en miles)	41 284,7	98 234,8	184 070,7
Porcentaje de personas de 60 años y más	8,0	14,1	23,4
Tasa de crecimiento anual (2000-2025 y 2025-2050)	3,5	2,5	...
Porcentaje de personas de 75 años y más	1,9	3,5	7,9
Edad mediana de la población	24,6	32,5	39,4
Índice de envejecimiento a/	25,2	60,7	128,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estimaciones y proyecciones de población vigentes.
a/ Población de 60 años/población menor de 15 años, multiplicado por 100.

PAÍSES SEGÚN ETAPAS EN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

En la región se advierte una marcada heterogeneidad. Para captarla se puede clasificar a los países, según la etapa en que se encuentran en su proceso de envejecimiento, en cuatro categorías:

- **Envejecimiento incipiente:** países con porcentajes de personas de 60 años y más que oscilan entre el 5% y el 7% en el año 2000 y que alcanzarían valores de entre 15% y 18% en 2050. Incluye a países como Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Este proceso podría acelerarse si en estos países se consolida e incrementa la baja de la fecundidad.
- **Envejecimiento moderado:** países con porcentajes de 6% a 8% de personas de 60 años y más, que en torno del año 2050 superarán el 20%. En este grupo se sitúan Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, México, Perú, República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela.
- **Envejecimiento moderado avanzado:** países que presentan en la actualidad porcentajes de personas mayores entre 8% y 10%, y que experimentarán un aumento rápido de este porcentaje hasta alcanzar cifras entre 25% y 30% de personas mayores en 2050. Entre estos países están Bahamas, Brasil, Chile, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tabago.
- **Envejecimiento avanzado:** países pioneros en el envejecimiento en América Latina, como Argentina, Cuba, Uruguay y varios países del Caribe: Antillas Neerlandesas, Barbados, Guadalupe, Martinica y Puerto Rico, con porcentajes actuales de personas mayores superiores al 10%.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2004.

El envejecimiento de la población no es un proceso homogéneo y las diferencias se deben a que los cambios demográficos son consecuencia de transformaciones sociales, económicas y culturales que guardan especificidades subnacionales. En América Latina, las áreas rurales muestran un grado levemente superior de envejecimiento respecto de las urbanas, a pesar de su mayor fecundidad y su menor esperanza de vida. En 11 países latinoamericanos, la proporción de adultos mayores en el área rural es mayor que en el área urbana; sin embargo, el índice de envejecimiento rural es más bajo que el urbano. Esto obedece a que en las áreas rurales la población tiende a concentrarse principalmente en dos generaciones: los menores de 15 años y los mayores de 60 años. El envejecimiento rural, por lo tanto, obedece a los cambios en la estructura de edades, como resultado de los flujos migratorios campo-ciudad de la población joven, pero también, en algunas zonas, del retorno al lugar de origen en la vejez. Los adultos mayores de las áreas rurales constituyen un grupo demográfico que requiere especial atención —sobre todo en aquellos países en que la proporción de población rural es elevada, como Guatemala, Haití y Honduras, donde más de la mitad de los adultos mayores residen en áreas rurales—, ya que estas zonas se han caracterizado históricamente por su

menor cobertura de servicios y un mayor deterioro económico.

En el caso de las sociedades indígenas, su evolución demográfica suele diferir de las poblaciones con que viven dentro de las fronteras nacionales. Y en el aspecto específico del envejecimiento, suelen presentar notables diferencias con respecto al conjunto de la población. Cuando se utiliza la información disponible alrededor del año 2000, se observa una situación muy heterogénea. Solo en Bolivia y México, el porcentaje de adultos mayores es más elevado en las poblaciones indígenas que en las no indígenas (el índice de envejecimiento es similar en el caso de México), si bien hay algunos distingos según la zona de residencia. En las áreas rurales, la población indígena tiende a estar más envejecida que en las áreas urbanas, característica que no se repite en las poblaciones no indígenas rurales. Estos comportamientos podrían explicarse en virtud de fenómenos que pueden conjugarse de formas distintas en los países: i) la mortalidad más elevada que persiste en las poblaciones de las zonas rurales e indígenas y que reduce el indicador de envejecimiento, y ii) los efectos de la emigración desde esas zonas de personas jóvenes que aumentan dicho indicador.

5. ESCENARIOS POSIBLES Y PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LAS POLÍTICAS

El envejecimiento demográfico plantea importantes retos para los gobiernos, las familias y las mismas personas mayores. Existe consenso en que para garantizar la seguridad económica (véase el recuadro II.4) es preciso incrementar la cobertura de los sistemas de seguridad social de la fuerza de trabajo actual, frenando las tendencias a su estancamiento o a su franco descenso observado en los últimos años en varios países, y ampliando la cobertura de las personas que hoy son adultas mayores, incluida la opción a pensiones no contributivas o asistenciales. Lamentablemente, solo en un tercio de los países con reformas estructurales se otorgan

pensiones asistenciales. Se requiere el financiamiento solidario como forma de afianzar la función de seguro de estos sistemas con la garantía de acceso a una pensión. Se trata en cada caso de decisiones políticas que deberían tomarse con la participación no solo del gobierno y el sector privado, sino también de la sociedad en su conjunto. En suma, los sistemas de seguridad social deben perseverar en mantener y acrecentar la capacidad de los regímenes de pensiones, a fin de cumplir con sus objetivos sociales, garantizar su viabilidad financiera, mejorar su capacidad de respuesta ante los cambios de la sociedad y de las personas que serán mayores en el futuro, y asimismo, asegurar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en materia de empleo y protección social, y la cobertura de la población rural, entre otras cosas.

Recuadro II.4

LA SEGURIDAD ECONÓMICA DE LAS PERSONAS MAYORES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

En el documento base de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento: hacia una Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento, realizada en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, en noviembre del 2003, se indica lo siguiente en relación con el bienestar de las personas mayores:

Seguridad económica en la vejez: las condiciones de seguridad económica en América Latina y el Caribe son deficientes, desiguales y poco equitativas. Tanto en las áreas urbanas como en las rurales, más de un tercio de las personas de 65 años y más no disponen de ingresos de pensiones o jubilaciones, ni de un trabajo remunerado. En el área urbana, solo dos de cada cinco personas mayores disponen de ingresos provenientes de la seguridad social y en las zonas rurales apenas una de cada cinco. De este modo, es evidente que en la mayoría de los países, una proporción significativa (más del 80%) no dispone de una pensión o jubilación. La situación se agrava por el hecho de que aun en países con mayor cobertura, al contrario de las expectativas, la proporción de la fuerza de trabajo actual que está contribuyendo a la seguridad social ha disminuido con los procesos de reforma de los sistemas. La participación en la actividad económica en la vejez se relaciona directamente con la cobertura de la seguridad social, decreciendo a medida que aumenta la proporción de población que accede a una pensión.

En este contexto, la alta participación de los adultos mayores en la fuerza laboral no respondería tanto a una opción voluntaria, sino más bien a la necesidad de garantizar un mínimo de recursos económicos necesarios para sobrevivir. Lamentablemente, en el caso de los países de menor desarrollo relativo, las personas mayores se insertan en empleos informales que no permiten eliminar su vulnerabilidad socioeconómica, aunque pueden en algunos casos mitigar los efectos más negativos de su situación de pobreza.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Las personas mayores en América Latina y el Caribe: diagnóstico sobre la situación y las políticas* (LC/L.1973), Santiago de Chile, 2003.

En términos de la atención de salud, existe el desafío de redefinir el rol y las características de la atención de salud en la vejez (Guzmán, 2004). Primero, se debe cambiar la visión fatalista de la vejez, que se traduce en discriminación en la atención, e

incorporar el nuevo paradigma de salud en la vejez, centrado en la necesidad de mantener al máximo la funcionalidad, postergando la discapacidad. Segundo, se requiere efectuar una reingeniería de los sistemas de salud, lo que demanda, entre otras acciones,

un plan de formación de recursos humanos que cree personal calificado para una atención integral de las personas mayores. Tercero, es preciso generar y aplicar cambios en el enfoque de la atención, dando relevancia a las acciones de prevención y promoción de la salud no solo en la vejez, sino también en todas las otras etapas del ciclo vital. Finalmente, es necesario capacitar, establecer normas y fiscalizar a los organismos a cargo del cuidado de largo plazo, pero al mismo tiempo impulsar acciones que impidan su institucionalización excesiva. En consecuencia, los sistemas sanitarios deben abordar el proceso de transformación de las prestaciones sanitarias, incorporando la atención en salud de las personas mayores —con especial acento en la disminución de las brechas de salud en la vejez—, incluyendo el personal de salud especializado, adaptando la infraestructura instalada y la cultura biomédica y procurando potenciar los mecanismos preventivos que ayudarían a reducir los costos de la salud en condiciones de envejecimiento progresivo de la población.

Por último, la atención y cuidado de las personas mayores ejercerán una fuerte presión en las familias, tradicionalmente encargadas de brindar asistencia

y cuidado en la vejez, pero cuya transformación en curso demandará la creación de mecanismos de apoyo para poder seguir cumpliendo con esta función. Dentro de las familias son las mujeres las principales encargadas del cuidado tanto de los niños como de los adultos mayores. Pero no solo la familia requiere fortalecimiento. El apoyo a las redes comunitarias es fundamental para que a nivel local sea posible ofrecer parte de la ayuda que requerirán las personas mayores y estas puedan desarrollar sus vidas en un ambiente propicio y favorable al ejercicio de sus derechos y potencialidades. En este contexto, merece especial atención la mayor longevidad femenina, cuyos efectos habrá que considerar en términos de las políticas. Lo anterior no necesariamente supone un panorama negativo. El mayor envejecimiento de la población es un logro de la humanidad; en efecto, las personas mayores son actualmente y deben seguir siendo un factor importante en el desarrollo de nuestras sociedades, y convertirse, en los casos en que no lo son, en ciudadanos activos en pleno ejercicio de sus derechos y deberes. Pero al igual que cualquier otro grupo poblacional, los adultos mayores requieren de intervenciones específicas que les garanticen, sobre todo a los más vulnerables, una vida con dignidad y seguridad.

B. TENDENCIAS Y CAMBIOS DE LA FECUNDIDAD

La baja de la fecundidad en los últimos 30 años es uno de los hechos más relevantes de la evolución de la población de la región y ha seguido una trayectoria relativamente independiente de los ciclos económicos y sociales. En la actualidad, la fecundidad varía desde índices inferiores al reemplazo en Cuba y otros Estados insulares del Caribe hasta aquellos sobre 4 hijos por mujer en Guatemala y Haití. Estas disparidades se explican porque en estos últimos países hay una menor prevalencia del uso de anticonceptivos modernos y una mayor demanda insatisfecha de planificación familiar, lo que es sugerente para el proceso de elaboración de políticas.

Dentro de los países, la fecundidad y la demanda insatisfecha de planificación familiar son más elevadas en los grupos pobres, lo que dificulta su salida de la pobreza y revela impedimentos para el ejercicio de sus derechos reproductivos. Hay naciones donde las disparidades son tan abultadas que la fecundidad de los grupos carenciados triplica a la de los grupos acomodados. Entre los pueblos indígenas, por su parte, la fecundidad alta continúa siendo un rasgo distintivo, independientemente del estadio de la transición demográfica en que se encuentra el país.

La baja de la fecundidad total contrasta con la evolución de la fecundidad adolescente cuya intensidad habría aumentado en los últimos años en la mayoría de los países, en particular entre las menores de 18 años. Este fenómeno —mucho más frecuente en los grupos pobres— se asocia con la deserción escolar y con dificultades para llevar a

cabo la crianza. Además, se ha vuelto más complejo porque ocurre cada vez con más frecuencia al margen del matrimonio o de una unión estable.

1. LA BAJA DE LA FECUNDIDAD Y SUS DISPARIDADES ENTRE Y DENTRO DE LOS PAÍSES

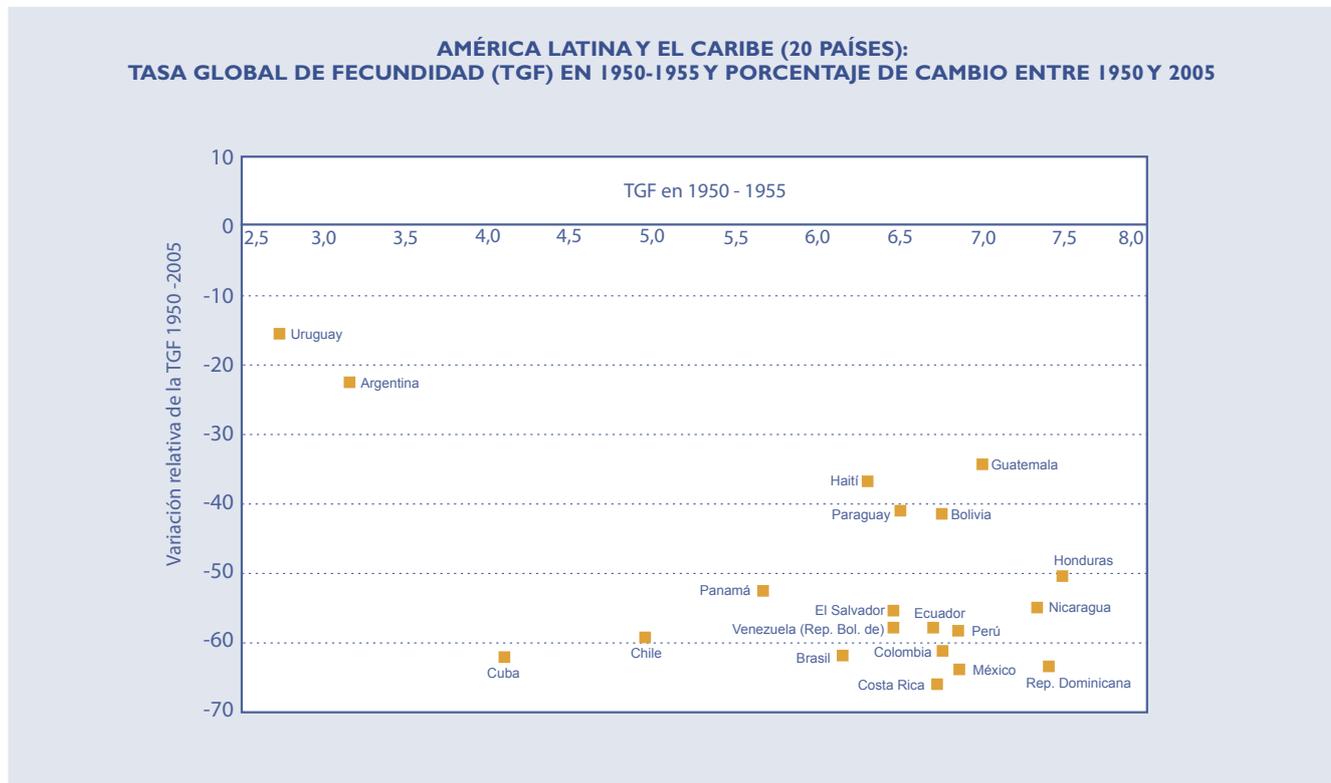
En todos los países de la región ha ocurrido un descenso de la fecundidad. En las últimas cuatro décadas del siglo pasado, las parejas latinoamericanas y caribeñas modificaron sus pautas reproductivas, al pasar de un patrón bastante generalizado de familias numerosas a un nuevo modelo de fecundidad baja, en que el número de hijos tiende a aproximarse a 2 por mujer. Sin embargo, aún se mantienen diferencias importantes, y la tasa global de fecundidad (TGF) —número medio de hijos que tendrían las mujeres en ausencia de mortalidad y de cambios

en el patrón de fecundidad por edad— varía desde niveles inferiores al nivel de reemplazo (es decir, inferiores a 2,1 hijos por mujer) en Cuba y otros Estados insulares del Caribe, hasta valores sobre los 4 hijos por mujer en Guatemala y Haití.⁴

En Argentina y Uruguay, en concomitancia con un desarrollo económico y social significativo en la primera mitad del siglo XX y bajo la influencia de la inmigración europea, se avanzó mucho más tempranamente que el resto de la región en materia de descenso de la fecundidad y, de hecho, ya en 1950 ambos países tenían una tasa global de fecundidad (TGF) en torno de 3 hijos por mujer; por esto no es extraño

que sean los países que han experimentado el menor descenso de la fecundidad entre 1950 y 2005 (menos de 25%; véase el gráfico II.7). Los demás países de la región presentaban en 1950 índices de fecundidad superiores a 4 hijos por mujer, llegando en ciertos casos a niveles superiores a 7 hijos por mujer; en todos ellos, el descenso de la fecundidad ha sido superior al 30% en los últimos 50 años y alcanza en algunos a reducciones del orden del 70%. Los países con mayor nivel de fecundidad en la actualidad —Guatemala, Haití, Bolivia y Paraguay— destacan porque, luego de tener una fecundidad alta o muy alta en 1950, la han reducido a menos del 45% de su valor inicial en los últimos 50 años (véase el gráfico II.7).

Gráfico II.7



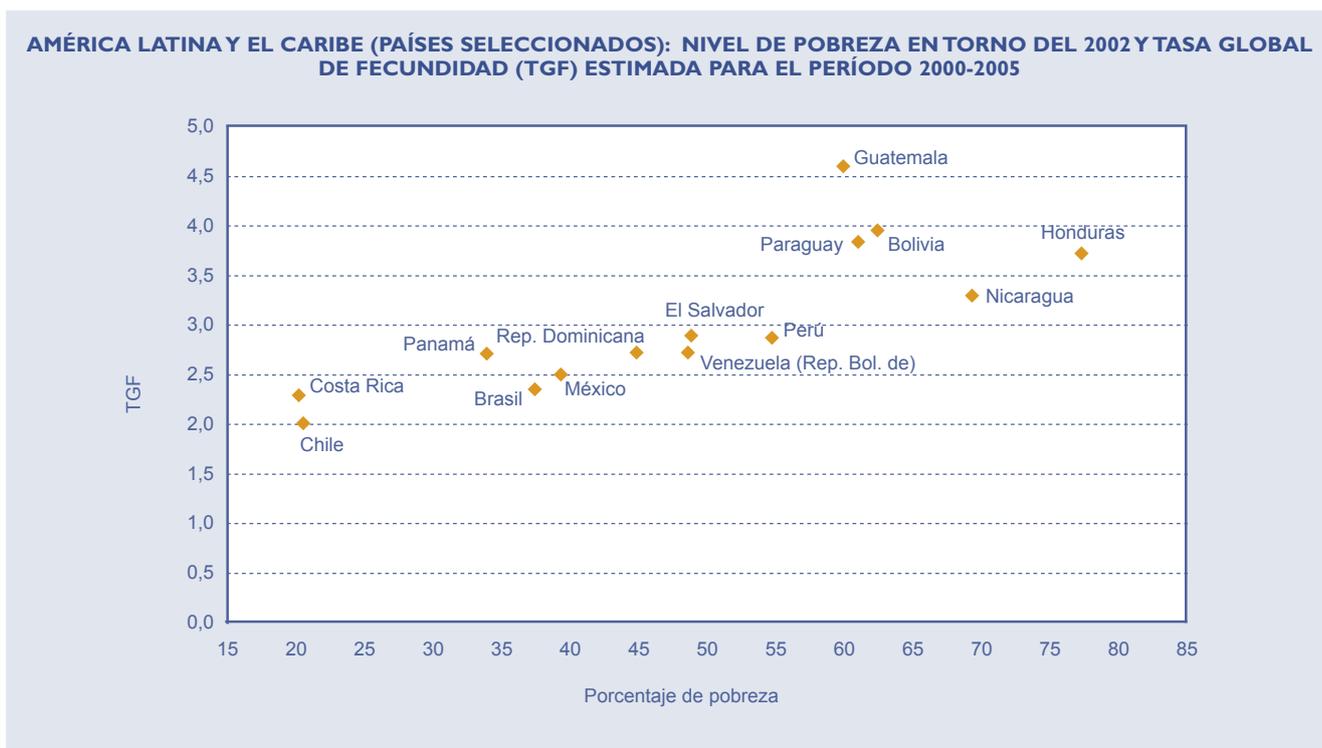
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estimaciones y proyecciones de población vigentes.

4 Véase: www.cepal.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm.

Diversos estudios indican que el nivel de la fecundidad de los países depende en buena medida de su grado de desarrollo económico y social (CEPAL /CELADE, 2004; Bulatao y Casterline, 2001; BID, 2000; Naciones Unidas, 1987; Banco Mundial, 1984). Por medio de diversos canales bien descritos en la literatura especializada (Naciones Unidas, 2002b; CEPAL, 1998a), la elevación de las condiciones de vida, el incremento del nivel educativo para hombres y mujeres, la urbanización y el mejoramiento de la situación de la mujer —incli-

da su incorporación al mercado de trabajo— aumentan el costo social y económico de los hijos y favorecen decisiones sobre fecundidad que anteponen los proyectos individuales —cada vez menos compatibles con altos niveles de fecundidad— a otras influencias como la tradición o la religión. Por ello, una fracción significativa del descenso de la fecundidad en América Latina y el Caribe se ha atribuido a avances en esas dimensiones del desarrollo (Guzmán y otros (eds.), 1996).

Gráfico II.8



Fuente: Para la TGF, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estimaciones y proyecciones de población vigentes, y para el porcentaje de pobreza a escala nacional, *Panorama social de América Latina, 2002-2003* (LC/G.2209-P/E), Santiago de Chile, 2003. Publicación de Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.185.

En general, las correlaciones simples entre indicadores seleccionados de desarrollo económico y social —producto per cápita, nivel de escolaridad, proporción de analfabetismo, exposición a medios de comunicación de masas, niveles de pobreza— se dan en el sentido esperado (mayor desarrollo se asocia con menor fecundidad) y son elevadas. De manera ilustrativa, en el gráfico II.8 se desplie-

gan la proporción de población pobre y la TGF. Los resultados son elocuentes, pues la relación es positiva y el coeficiente de correlación alcanza a un valor de 0,8. Las cifras también sugieren un patrón de acumulación de desafíos en los países pobres de la región, los que, además de sus mayores necesidades económicas y sociales, enfrentan un crecimiento más rápido de la población total e in-

fantil como resultado de sus índices reproductivos más elevados.

Ahora bien, cuando se efectúan análisis multivariados que condicionan la fecundidad actual por varios indicadores de desarrollo económico y social —porcentaje de pobreza, producto per cápita, niveles de escolaridad y alfabetismo, grado de urbanización, índices de exposición a medios de comunicación, y otros—, y se incluye también un indicador estándar de uso de anticonceptivos (prevalencia de métodos modernos entre mujeres unidas), se verifica que esta última variable captura el grueso de la variación de la fecundidad entre países y que la mayor parte de las restantes variables pierde significación estadística. Un modelo simple, que condiciona la fecundidad actual por la prevalencia de anticonceptivos modernos y el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (<http://hdr.undp.org/>), arroja que ambas variables son altamente significativas y que en conjunto capturan el 88% de la variación de la TGF entre países.

A escala nacional, el uso de anticonceptivos se relaciona positivamente con el nivel de desarrollo económico y social. De hecho, existe consenso entre los especialistas en que este último favorece la regulación de la natalidad precisamente mediante el uso de anticonceptivos modernos y no de otras variables intermedias de la fecundidad, como la nupcialidad, la abstinencia sexual o la lactancia (CEPAL/CELADE, 2004). No obstante, análisis multivariados sugieren que esta relación entre desarrollo económico y social y prevalencia de anticonceptivos modernos no es tan fuerte, lo que revela que los programas de planificación familiar pueden tener éxito en países con niveles de desarrollo económico y social más bien rezagado. En América Latina y el Caribe, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana son claros exponentes de esta posibilidad.

Las disparidades entre países se verifican con mayor fuerza en su interior, pues la fecundidad es más alta entre los grupos pobres, es decir, los con menor educación y aquellos que pertenecen a pueblos in-

dígenas históricamente postergados, como revelan el cuadro II.1, II.2 y el gráfico II.9. La investigación acumulada en la región permite deducir que entre estos factores el más relevante es la educación, al punto que en algunos países, al controlar esta variable, las disparidades según zona de residencia tienden a desaparecer (Chackiel y Schkolnick, 2003; CEPAL, 1998a). Cabe advertir que investigaciones recientes denotan que la reducción neta de la fecundidad derivada de un año adicional de educación es, actualmente, escasa cuando se trata del nivel primario, pero que sigue siendo significativa respecto del nivel secundario (Rodríguez, 2004; Lindstrom y Brambila, 2002; Naciones Unidas, 2002b), lo que refuerza la necesidad de que las jóvenes permanezcan en la escuela hasta completar el ciclo escolar.

En algunos países, las mujeres sin educación triplican la fecundidad de aquellas con educación secundaria o superior; es el caso de países como Bolivia, Guatemala y Honduras, donde importantes segmentos de la población aún están ajenos a la práctica del control de la reproducción mediante métodos modernos y seguros. En otros países, en cambio, los contrastes son menores y las cifras de tendencia señalan un proceso de convergencia de la fecundidad entre grupos socioeconómicos; es el caso de Brasil, Colombia y México (véase el cuadro II.2, en particular el cotejo de las cifras de reducción porcentual de la fecundidad por grupos sociales).

En suma, la evidencia acumulada ratifica la persistencia de inequidades en materia reproductiva cuya expresión más elocuente son los índices de fecundidad no deseada, significativamente más altos entre las mujeres pobres (CEPAL/CELADE, 2004; CEPAL, 2002b y 1998a). Sin embargo, los datos también indican que las condiciones de pobreza, así como de desigualdad económica, no son una barrera infranqueable para la expansión del control del proceso reproductivo a todos los grupos socioeconómicos. El desafío estriba, entonces, en cómo aprovechar las holguras que genera el descenso de la fecundidad para mejorar las condiciones de vida de la población y el desempeño económico y social de los países.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES Y AÑOS SELECCIONADOS): EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF) SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA Y NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA MADRE						
País y año de la encuesta	Tasa global de fecundidad (TGF) según zona de residencia y nivel de educación					Total
	Zona de residencia		Mayor nivel educacional alcanzado			
	Urbana	Rural	Sin educación	Primaria	Secundaria o más	
Belice, 1991	3,9	5,8	6	4,5	3,2	4,5
Belice, 1999	3,1	4,2	5,1	3,6	2,7	3,7
Cambio porcentual	-20,5	-27,6	-15	-20	-15,6	-17,8
Bolivia, 1989	4	6,6	6,4	6	3,3	5
Bolivia, 1998	3,3	6,4	7,1	5,7	2,9	4,2
Cambio porcentual	-17,5	-3	10,9	-	-12,1	-16
Brasil, 1986	2,8	5,1	6,2	3,6	2	3,4
Brasil, 1996	2,3	3,5	4,9	3,3	2,1	2,5
Cambio porcentual	-17,9	-31,4	-21	-8,3	5	-26,5
Colombia, 1986	2,6	4,7	5,2	3,9	2,4	3,2
Colombia, 2000	2,3	3,8	4	3,6	2,2	2,6
Cambio porcentual	-11,5	-19,1	-23,1	-7,7	-8,3	-18,8
Ecuador, 1987	-	-	6,4	5,2	3	4,3
Ecuador, 2001	-	-	5,6	4,2	2,4	3,3
Cambio porcentual	-	-	-12,5	-19,2	-20	-23,3
Guatemala, 1987	4	6,4	6,8	5,1	2,7	5,5
Guatemala, 2002	3,4	5,2	6,4	4,72	2,1	4,4
Cambio porcentual	-15	-18,8	-5,9	-7,5	-22,2	-20
Haití, 1994/95	3,3	5,9	6,1	4,8	2,5	4,8
Haití, 2000	3,4	5,8	6,1	5,3	2,7	4,7
Cambio porcentual	3	-1,7	0	10,4	8	-2,1
Honduras, 1983	-	-	8	6,2	3,3	6,3
Honduras, 2001	3,3	5,6	6,5	5,2	2,7	4,4
Cambio porcentual	-	-	-18,8	-16,1	-18,2	-30,2
México, 1982	-	-	7,2	4,8	3	4,7
México, 1997	-	-	4,7	3,3	2,2	2,7
Cambio porcentual	-	-	-34,7	-31,3	-26,7	-42,6
República Dominicana, 1986	3,1	4,8	5,2	4,2	2,7	3,7
República Dominicana, 2002	2,8	3,3	4,7	3,6	2,4	3
Cambio porcentual	-9,7	-31,3	-9,6	-14,3	-11,1	-18,9
Perú, 1986	3,1	6,3	6,6	5	2,9	4,1
Perú, 2000	2,2	4,3	5,1	4,1	2,2	2,8
Cambio porcentual	-29	-31,7	-22,7	-18	-24,1	-31,7

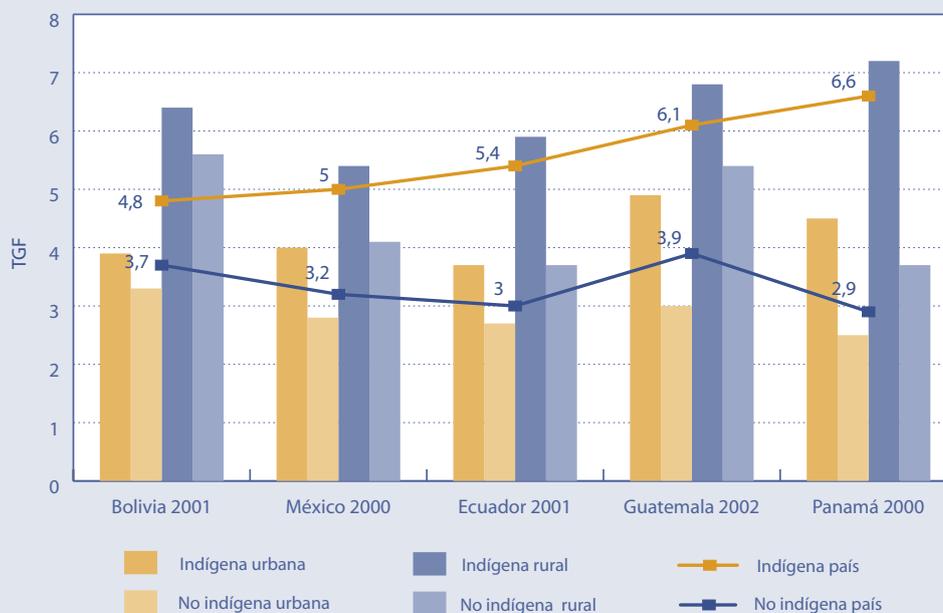
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de *Demographic and Health Surveys* [en línea] <http://www.measuredhs.com>; Juan Chackiel y Susana Schkolnik, "América Latina: los sectores rezagados en la transición de la fecundidad", *serie Población y desarrollo*, N° 42 (LC/L.1952-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2003. Publicación de Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.120; para Guatemala, *Encuesta nacional de salud materno infantil 2002. Informe resumido*, 2002.

Nota 1: La TGF tiene como período de referencia los tres años previos a la encuesta.

Nota 2: El cambio porcentual fue calculado como: $\frac{TGF_{final} - TGF_{inicial}}{TGF_{inicial}} * 100$. Su signo negativo, que aparece en la mayoría de los casos, obedece a la

trayectoria de descenso de la fecundidad. Por tener cada país un intervalo temporal distinto, los resultados del cuadro sobre el cambio porcentual de la fecundidad no son directamente comparables entre países.

AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF) PARA MUJERES INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS (CRITERIO DE AUTOPERTEENENCIA), POR ZONA DE RESIDENCIA, CENSOS DEL 2000



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del proyecto “Los pueblos indígenas y la población afrodescendiente en los censos” (ATN/SF-8043-RG), Santiago de Chile.

Respecto de las diferencias de la fecundidad entre grupos étnicos, los datos censales de la ronda del año 2000 permiten constatar que la fecundidad alta continúa siendo un rasgo distintivo de la población indígena. El gráfico II.9 muestra, por ejemplo, que la fecundidad entre las indígenas de Bolivia y Panamá supera claramente la media de sus países. Lo anterior se relaciona con las desventajas socioeconómicas que sufren estos grupos, como la pobreza extrema y los bajos niveles de instrucción formal, pero también con pautas culturales que se reflejan en el comportamiento reproductivo. Es así como en el interior de los países el panorama también es diverso por pueblos indígenas y grupos étnicos. A modo ilustrativo, en Panamá, la fecundidad de las mujeres *kunas* es de 4,7 hijos en comparación con 7,5 hijos en las *Ngöbe-Buglé*. Por otra parte, un estudio sobre fecundidad alta realizado por CEPAL/CELADE (2004) demuestra que el efecto del origen étnico persiste aun cuando se controlen factores económicos y educativos. Sin embargo, también se han detectado casos en que es-

te efecto opera en un sentido inverso al usual, como ocurre con las mujeres *aymara* de Bolivia que, a igual condición socioeconómica, registran una trayectoria reproductiva más tardía y menos intensa que las no indígenas (CEPAL/CELADE, 2004).

2. FECUNDIDAD POR EDADES Y MATERNIDAD ADOLESCENTE

Con el descenso de la fecundidad, las tasas por edades han bajado enormemente en todas las edades, salvo aquella que acontece antes de los 20 años (fecundidad adolescente), lo que se evidencia en una correlación más débil entre esta fecundidad y la total, en particular en América Latina (véase el cuadro II.3). Dicho de otro modo, el cambio en las pautas reproductivas no parece haber alterado sobremanera las pautas de inicio de la maternidad, que están ligadas estrechamente con las pautas de inicio de las uniones.

CORRELACIONES SIMPLES ENTRE LAS TASAS ESPECÍFICAS DE FECUNDIDAD Y LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF) MUNDIAL ^{a/} Y DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ^{b/}			
Tasa específica del grupo de edad (en años)	Total mundial	América Latina y el Caribe	América Latina y el Caribe ^{c/}
15-19	0,700	0,330	0,480
20-24	0,837	0,837	0,960
25-29	0,959	0,980	0,992
30-34	0,953	0,928	0,952
35-39	0,934	0,900	0,892
40-44	0,907	0,889	0,863
45-49	0,863	0,688	0,571

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de *Demographic and Health Surveys* [en línea] <http://www.measuredhs.com>.

a/ Cincuenta y un países, incluidos 8 latinoamericanos, con datos de encuestas levantadas con posterioridad a 1995.

b/ Bolivia, 1998; Brasil, 1996; Colombia, 2000; Guatemala, 1998/1999; Haití, 2000; Nicaragua, 1997/1998; Perú, 2000 y República Dominicana, 2002.

c/ Excluye a Haití.

La evidencia reciente proporcionada por censos y encuestas especializadas (www.measuredhs.com) sugiere que la fecundidad adolescente aumentó en los últimos años en la mayoría de los países, en particular entre las menores de 18 años (véase el gráfico II.10; CEPAL/CELADE, 2004; Flórez y Núñez, 2003). Esta es una tendencia preocupante, porque la maternidad adolescente reviste adversidades bien documentadas para progenitores (y sus familias, en particular los padres de las adolescentes) e hijos (Flórez y Núñez, 2003; CEPAL, 2002b). Aunque hay debate sobre la relevancia de estas adversidades (Rodríguez, 2004), es un hecho que la sociedad, los gobiernos y los padres consideran la maternidad adolescente como un problema (Guzmán y otros, 2001). Además, la persistencia de la iniciación reproductiva temprana puede reducir las holguras derivadas de la baja de la fecundidad; en especial, se pueden bloquear opciones, sobre todo para las mujeres.

En estudios recientes (CEPAL/OIJ, 2004; CEPAL/CELADE, 2004; CEPAL, 2003a; Flórez y Núñez, 2003; CEPAL, 2002b y 2000c; Guzmán y otros, 2001) se ha profundizado el análisis de la fecundidad adolescente en la región, encontrando que:

i) la reproducción entre las adolescentes ocurre cada vez más al margen del matrimonio e incluso al margen de la unión; de hecho, en algunos países

de la región la mayoría de las madres adolescentes no tienen una pareja estable;

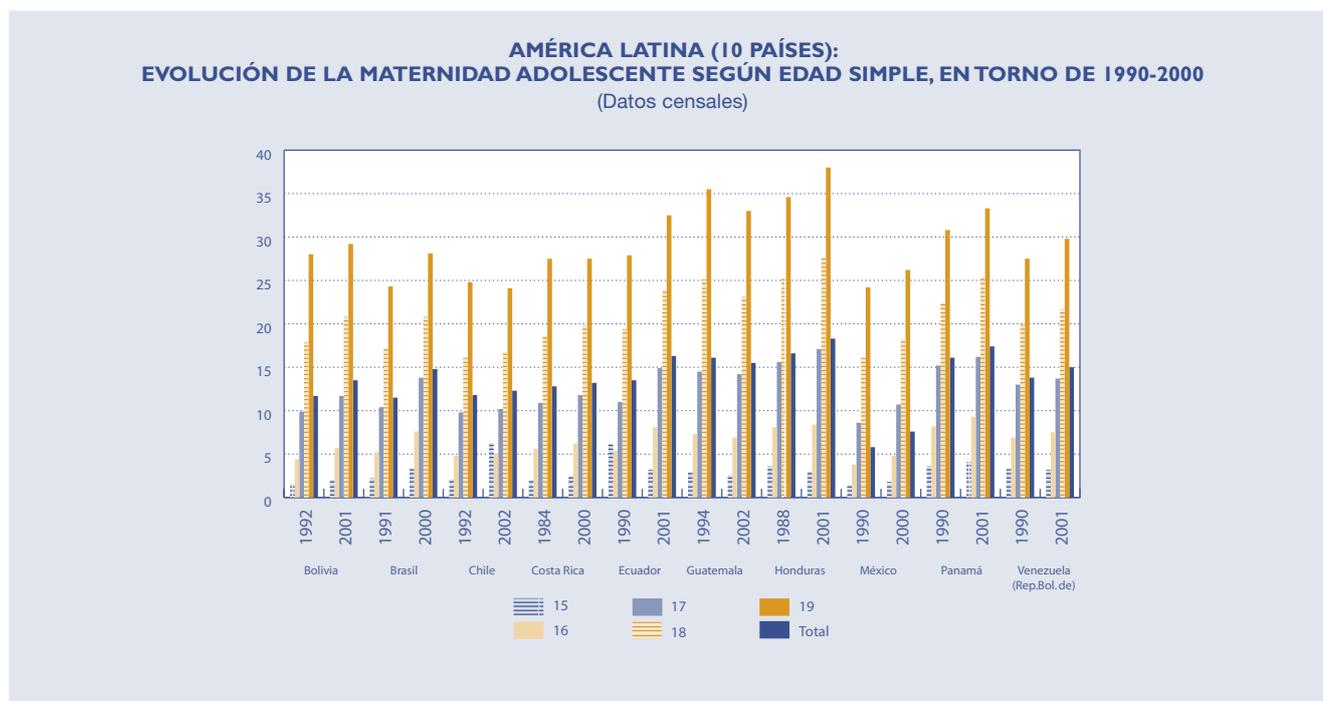
ii) no hay signos de que la reproducción temprana provoque de manera generalizada procesos de emancipación, pues la mayoría de las madres adolescentes viven con sus padres o suegros;

iii) la reproducción temprana se asocia con deserción escolar —aunque esto no significa que la principal causa de salida precoz del sistema escolar es la maternidad, pues en la mayor parte de los casos la deserción es previa al embarazo—, sin que favorezca el ingreso de las muchachas al mercado de trabajo, ya que la gran mayoría de las madres adolescentes se dedican a actividades domésticas (véase el gráfico II.11; CEPAL/CELADE, 2004; CEPAL/OIJ, 2003);

iv) en ocasiones, el embarazo parece ser una estrategia deliberada de las muchachas para ganar reconocimiento social o enfrentar un futuro que se presenta esquivo; en otros casos, puede formar parte de un patrón cultural relativamente aceptado;

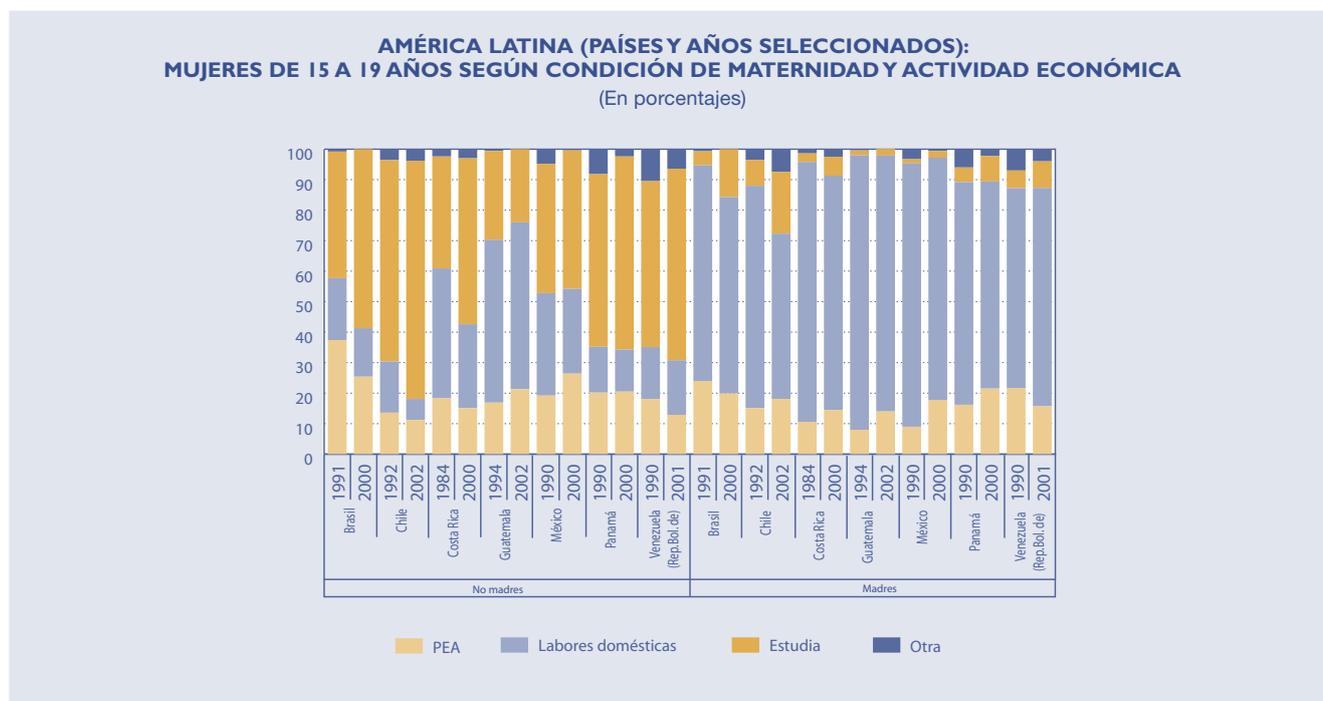
v) finalmente, y tal vez lo más relevante, la fecundidad adolescente es mucho más alta entre los grupos postergados de la sociedad, y sus efectos adversos en materia de movilidad social se dejan

Gráfico II.10



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de procesamiento especial de bases de microdatos censales y *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, julio del 2004.

Gráfico II.11



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de procesamiento especial de bases de microdatos censales y *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, julio del 2004.

PEA: Población económicamente activa.

sentir tanto sobre los adolescentes como sobre sus hijos (y también sobre los progenitores de los adolescentes); los datos disponibles indican que, en general y con variaciones nacionales, las probabilidades de ser madre durante la adolescencia son al menos cinco veces más elevadas entre las muchachas de estrato bajo (respecto a las muchachas de estrato alto).

3. PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS Y ANTICONCEPCIÓN

En todos los países, el descenso de la fecundidad se debió a la expansión de la preferencia por familias más pequeñas. Ya en 1960, las Encuestas de Prevalencia del Uso de Anticonceptivos (EPA) detectaban que el número de hijos deseado era inferior al observado, en particular en zonas urbanas (CEPAL, 1972). En el decenio de 1970, fue mediante la Encuesta Mundial de Fecundidad —que se aplicó en 13 países de América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, 1987)— que se encontró una TGF de 4,7, mientras que el promedio deseado de hijos era de 4,2; esta disparidad se reflejaba en índices elevados de fecundidad no deseada. En los decenios de 1980 y 1990, el número medio de hijos deseado ha seguido descendiendo, como revelan las encuestas de demografía y salud.⁵ Esta mutación valórica deriva del proceso de modernización social y económica que experimentó la región, y que mediante diversos mecanismos hizo desventajoso tener una prole numerosa. También se debe a la actuación de distintos canales simbólicos, en particular, la escuela y los medios de comunicación masivos, que diseminaron ideales tendientes a una reproducción acotada, ya vigente por entonces en países desarrollados. Junto con lo anterior, la apertura y el aprovechamiento de espacios educativos, laborales y de opinión para las mujeres, asociada a la modernización productiva y cultural, ensanchó las opciones vitales femeninas, reduciendo para muchas mujeres y parejas el interés o la posibilidad de tener proles numerosas.

Así, el descenso de la fecundidad ha ocurrido como consecuencia de cambios en las conductas de las personas en un marco de crecientes, aunque aún insuficientes, capacidades para el ejercicio de los derechos reproductivos básicos, en particular el de tener los hijos que se aspira.

Esta preferencia por familias más pequeñas pudo materializarse merced a una “revolución anticonceptiva”, cuyos pilares fueron i) biotecnológicos: gran aumento de la producción, eficiencia y calidad de los métodos anticonceptivos; ii) políticos: vigorosos programas públicos de planificación familiar en muchos países; y iii) culturales: erosión de las barreras valóricas para el uso de medios modernos. Estos pilares se combinaron de distintas maneras en los países, lo que explica las diferencias en el uso de anticonceptivos, tanto en la prevalencia como en el tipo de métodos.

Durante la década de 1990, en todos los países de la región (véase el gráfico II.12) continuó en aumento la prevalencia anticonceptiva, y en general el incremento relativo fue mayor en países que partieron con un uso anticonceptivo más bajo.⁶ Hacia el año 2000, las disparidades entre países persistían, con un rango que iba de un 28% en Haití a un 84% en Cuba. No obstante, en 10 de los 15 países examinados, más de un 60% de las mujeres en unión usaban algún método anticonceptivo. En general, los países con menores niveles de prevalencia anticonceptiva son los que registran mayores índices de demanda insatisfecha de planificación familiar (véase gráfico II.13). Como ya se indicó, hay una estrecha correlación entre los indicadores nacionales de prevalencia de uso de anticonceptivos y el nivel de fecundidad; sin embargo, esta concomitancia pierde fuerza en el caso de la fecundidad adolescente. De hecho, el incremento del uso de anticonceptivos en este grupo no ha logrado reducir su fecundidad. Las causas de esta aparente paradoja parecen encontrarse en prácticas de uso inadecuadas (no se usan correctamente o no se usan

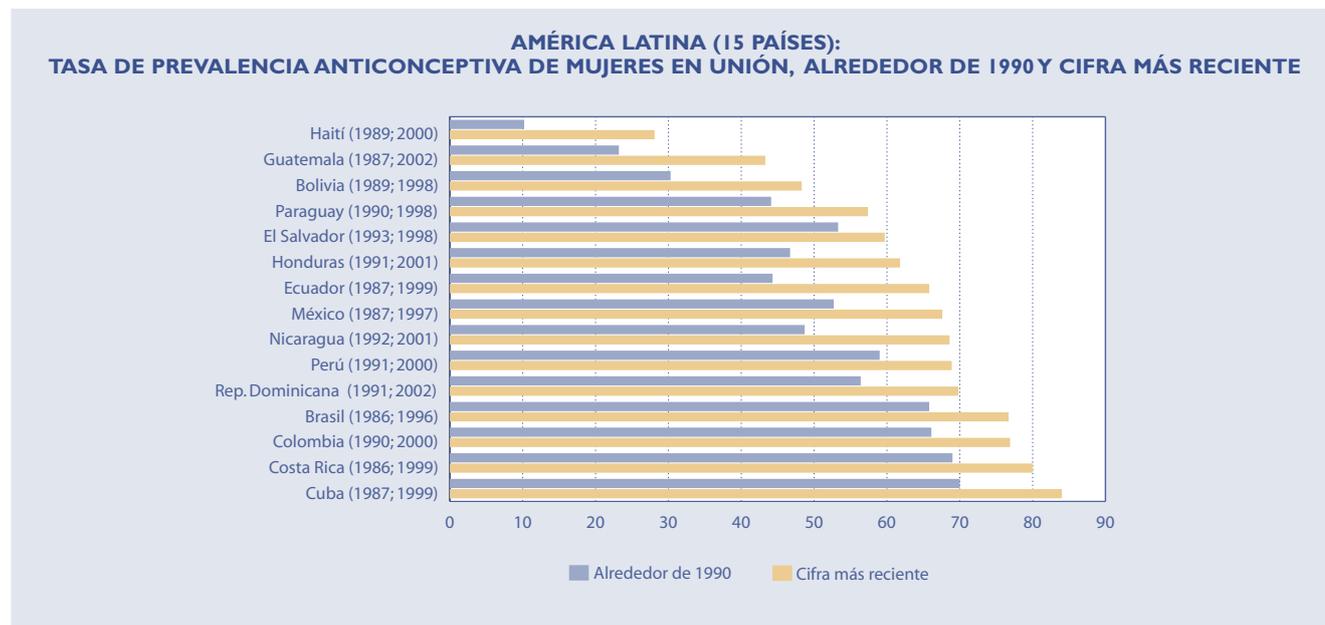
5 Véase CEPAL, 2002b y 1998a, así como en: www.measuredhs.com.

6 Se mide como el porcentaje de mujeres actualmente en unión legal o consensual que están usando al momento de la encuesta algún método anticonceptivo con miras a prevenir el embarazo.

de manera sistemática) y en sesgos de la oferta (por ejemplo, exclusión de adolescentes de los servicios de salud sexual y reproductiva o su aceptación en

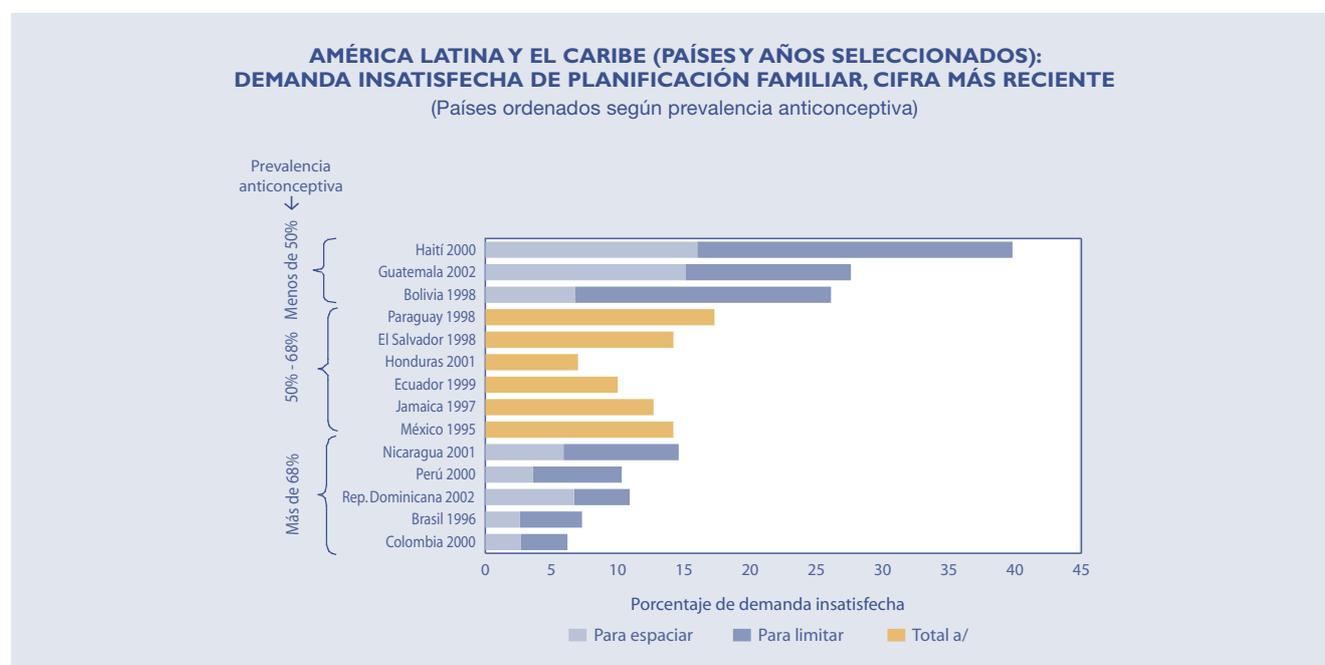
los programas de planificación familiar solo después de tener el primer hijo).

Gráfico II.12



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de “Sistema de Indicadores para el seguimiento de Conferencias Internacionales en América Latina y el Caribe” [en línea] <http://www.eclac.cl/celade/indicadores/default.htm>.

Gráfico II.13



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de “Sistema de Indicadores para el seguimiento de Conferencias Internacionales en América Latina y el Caribe” [en línea] <http://www.eclac.cl/celade/indicadores/default.htm>.
a/ Para estos países no se dispone de la desagregación entre demanda para espaciar y demanda para limitar.

Si bien varios países latinoamericanos presentan una prevalencia de uso similar a la de países desarrollados (Naciones Unidas, 2003b), existen sustanciales diferencias en el tipo de método utilizado y, en general, es más frecuente el uso de métodos tradicionales. La esterilización femenina alcanza magnitudes poco vistas en otras regiones del mundo; en 8 de los 13 países con información reciente, la esterilización constituye el principal método anticonceptivo usado por las mujeres.

Finalmente, por medio del modelo de Bongaarts (véase el recuadro II.5), que considera, además de la anticoncepción, otros determinantes próximos como la nupcialidad, el aborto inducido y la infertilidad posparto, se pudo inferir que el determinante próximo más influyente en la reducción de la fecundidad ha sido la anticoncepción. Hacia fines de la década de 1990, este factor había incrementado inclusive su importancia relativa

en comparación con los otros determinantes. De acuerdo con las cifras correspondientes a las encuestas del año 2000 (o próximas a este), el modelo indica que, manteniendo constantes el resto de los determinantes, la anticoncepción es responsable de reducir entre un 55% y un 70% el valor de la fecundidad total (Bay, del Popolo y Ferrando, 2003). Según el modelo, el segundo lugar de importancia lo ocupa la nupcialidad, que actúa a través de la propensión a vivir en unión en las diferentes edades, siendo su impacto sensiblemente menor que el de la anticoncepción. Este hecho es coherente con lo que muestran diversos estudios (CEPAL/OIJ, 2004; Guzmán y otros (eds.), 1996) en cuanto a que el comportamiento de las uniones conyugales en la región no presenta cambios significativos en las últimas décadas, tanto en relación con la edad en la que se produce la unión como con la proporción de mujeres que se mantienen célibes.

Recuadro II.5

DETERMINANTES PRÓXIMOS DE LA FECUNDIDAD: EL MODELO DE BONGAARTS

Conocidos también como variables intermedias, los determinantes próximos de la fecundidad son factores biológicos y de conducta a través de los cuales las variables económicas, culturales y ambientales influyen sobre la trayectoria reproductiva. Su rasgo distintivo es que actúan directamente sobre la fecundidad, pues en su conjunto definen la exposición al riesgo de embarazarse y de alumbrar un niño vivo. Bongaarts (1978 y 1982), ha demostrado que las diferencias de la fecundidad entre las poblaciones se deben a variaciones de los determinantes próximos, en particular cuatro de ellos: nupcialidad, uso de anticonceptivos, infertilidad posparto, y aborto inducido. Bongaarts formalizó la relación entre el promedio de hijos por mujer (TGF) estimado en una población cualquiera, por una parte, y la fecundidad teórica (TF) y los índices asociados a los determinantes próximos (que deflactan la fecundidad teórica hasta llegar a la fecundidad real), por otra parte, mediante la siguiente ecuación:

$$TGF = FT \times C_m \times C_a \times C_c \times C_i$$

Donde,

TGF es la tasa global de fecundidad estimada en determinado momento

FT es la fecundidad teórica

C_m es el índice de matrimonio

C_c es el índice de anticoncepción

C_a es el índice de aborto inducido

C_i es el índice de infertilidad posparto

La acción de las cuatro variables intermedias en la fecundidad es medida en el modelo por índices empíricos cuyos valores fluctúan entre 0 y 1 dependiendo, respectivamente, si el efecto deflactor es total (en cuyo caso el índice es 0 y la fecundidad observada es nula) o está ausente (en cuyo caso el índice es uno y ese determinante próximo no hace contribución alguna para que la fecundidad baje de su nivel potencial). Una descripción y aplicación reciente de la metodología puede verse en Bay, Del Popolo y Ferrando (2003). El modelo ha sido usado con varios objetivos, entre ellos: medir la importancia de cada variable en la reducción de la fecundidad, en países y en subpoblaciones específicas; establecer escenarios futuros del comportamiento de la fecundidad a partir de hipótesis de cambio en las variables intermedias; obtener estimaciones de la tasa de aborto, una vez que se remueve el efecto de los otros determinantes.

(continúa)

DETERMINANTES PRÓXIMOS DE LA FECUNDIDAD: EL MODELO DE BONGAARTS*Breve descripción de los índices y ejemplo de aplicación*

El índice de contracepción intenta medir el efecto del uso de métodos anticonceptivos en la inhibición de la fecundidad. Para su cálculo se requiere conocer la proporción de mujeres que utilizan anticonceptivos por tipo de métodos, así como el grado de efectividad para cada método.

El índice de matrimonio expresa el efecto que tiene el celibato (la mantención de la soltería), de las mujeres en edad reproductiva sobre la fecundidad total. En realidad, las mujeres expuestas al riesgo de embarazo son aquellas fértiles sexualmente activas y esto no necesariamente depende de la situación conyugal (no todas las mujeres casadas son sexualmente activas ni todas las solteras inactivas), sin embargo los datos básicos para medir directamente esta exposición al riesgo no siempre están disponibles y, en ese caso la unión resulta ser la mejor aproximación. Para su cálculo se necesita conocer las tasas específicas de fecundidad por edad y la proporción de mujeres casadas o unidas, para esas mismas edades.

El cálculo del índice de infecundidad posparto se basa en la duración media de la amenorrea y la abstinencia posparto. Si una estimación directa de la infecundidad posparto no está disponible, entonces se puede obtener un valor aproximado en función de la duración de la lactancia, mediante una función empírica que las relaciona.

El índice de aborto inducido requiere para su cálculo conocer la tasa de aborto. Dado que esta información, o bien está ausente o es de dudosa calidad, en la mayoría de los países de la región este efecto se estima indirectamente, en base a los índices previos y a un valor teórico de fecundidad total.

A modo de ejemplo, utilizando los datos provenientes de la Encuesta de Demografía y Salud de Perú (www.measuredhs.com) se obtiene lo siguiente:

	TGF (estimado indirectamente)	Cc (anticoncepción)	Cm (matrimonio)	Ci (infección posparto)	Ca (aborto inducido)
Perú 1992:	3,5	0,57	0,51	0,67	0,85
Perú 2000:	2,8	0,47	0,52	0,63	0,88

En 1992 la nupcialidad era el factor que más impactaba en la reducción de la fecundidad total, disminuyéndola a casi la mitad, manteniendo el resto de los determinantes constantes. La anticoncepción estaba en segundo lugar de importancia, seguido por la infecundidad posparto y el aborto inducido. En el año 2000 se produce un cambio respecto a la importancia de los determinantes, pasando a ser el uso de anticonceptivos el factor principal, hecho que puede ser generalizado al resto de los países de la región que cuentan con esta información. Lo anterior es coherente con los cambios ocurridos en la década, mientras que en 1992 un 59,0% de las mujeres peruanas unidas usaban algún método para evitar el embarazo, en el 2000 la prevalencia alcanzaba al 68,9% de las mismas. En contrapartida y para el mismo período se constata que la proporción de uniones, ya sean conyugales o consensuales, prácticamente se mantuvieron, sufriendo un leve ascenso de 55,1% a 56,1%.

Fuente: G. Bay, F. Del Popolo y D. Ferrando, "Determinantes próximos de la fecundidad. Una aplicación a países latinoamericanos", serie *Población y desarrollo*, N° 43 (LC/L.1953-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), septiembre del 2003. Publicación de las Naciones Unidas, No de venta: S.03.II.G.121.

4. IMPLICACIONES SOCIALES Y DE POLÍTICA

La reducción de la fecundidad tiene en el corto y mediano plazo efectos agregados positivos, sobre todo debido a la estabilización de la población objetivo de la atención de salud materno infantil y del sistema escolar. Tanto o más importante que lo anterior es que dicha reducción disminuye las exigencias cuantitativas de crianza, lo que permite una

mayor inversión en el cuidado y formación de los hijos y ofrece más opciones a los padres, en especial a las mujeres de todos los grupos socioeconómicos que ven facilitado el "salir de la casa" para entrar a trabajar (CEPAL/CELADE, 2004). Sin embargo, el menor número de hijos se verifica en condiciones de aumento de los costos directos y de oportunidad de la crianza, así como bajo indicios de creciente inestabilidad familiar. En tal sentido, las familias —en sus diferentes modalidades— siguen requiriendo de

apoyo en su función de formar a las nuevas generaciones. Esta atención puede brindarse mediante expedientes, como la provisión de servicios públicos de calidad en materia de cuidado de los bebés y educación de los niños. También puede prestarse por medio de instrumentos en uso en otras regiones del mundo, tales como las políticas familiares, que a grandes rasgos se definen como la aportación de recursos a personas con responsabilidades familiares para su mejor desempeño. Asimismo, una serie de ajustes legales e institucionales parecen necesarios para compatibilizar los requerimientos de la vida moderna (entre ellos, el trabajo femenino) con la reproducción y crianza en el seno familiar.

Resulta preocupante la persistente asociación entre bajo nivel de desarrollo y fecundidad alta en algunos países. Esto significa que las naciones con menos recursos y presupuestos públicos más estrechos son precisamente las que deben encarar los mayores desafíos y presiones en materia de atención y cuidado materno infantil, así como de formación escolar. Se trata de programas que generan recursos humanos y ciudadanos capaces, fundamentos de un desarrollo sostenible, por lo que pueden considerarse como inversiones. Sin embargo, parte importante de sus retornos sociales tardan en materializarse, por lo que esta orientación de los recursos hacia la población infantil desplaza a proyectos alternativos dirigidos a otros grupos de la población. Por su parte, la pertinaz asociación entre pobreza y un elevado número de niños en el hogar genera una nueva situación paradójica: las familias con menos recursos para el cuidado y formación deben soportar la mayor carga de crianza, diluyéndose su escaso presupuesto actual y dificultándose la acumulación intrafamiliar para la salida de la pobreza. Si a lo anterior se añade que los pobres muestran los mayores índices de fecundidad no deseada, la conclusión de política es directa: redoblar los esfuerzos tendientes a ampliar entre los pobres la capacidad de ajustar deseos y

conducta reproductiva, contribuyendo simultáneamente al ejercicio de un derecho y a la ampliación de opciones para la acumulación y uso productivo de sus recursos.

Por otra parte, la baja sostenida de la fecundidad en modo alguno resta importancia a la oferta anticonceptiva, cuyo ofrecimiento mediante programas públicos se justifica ampliamente porque contribuye a garantizar el ejercicio de un derecho. La aspiración a una familia pequeña está consolidada, al igual que la idea de evitar la fecundidad no deseada, por lo que se demandarán más y mejores servicios de salud sexual y reproductiva. En este plano aún hay deudas que saldar, sobre todo con las mujeres y parejas pobres y con las y los adolescentes. En relación con estos dos últimos grupos, es crucial ampliar, acercar, mejorar y especializar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva, como parte de la atención integral de la salud de las personas. Pero también es decisivo proporcionar más capacidad y poder a estos grupos para que ejerzan libremente sus derechos. El gran desafío será luego el aprovechamiento del tiempo y los recursos que se liberan con una prole menos numerosa y una iniciación reproductiva más tardía. La creación de puestos de trabajo para una creciente oferta laboral femenina —compatibles con la maternidad y la crianza— y alternativas educativas para las jóvenes son las respuestas idóneas, aunque con frecuencia esquivas.

Finalmente, la promoción de la equidad de género adquiere connotaciones de política donde “todos ganan”, pues el involucramiento masculino es un componente fundamental en el proceso de crianza y un factor facilitador de la participación laboral femenina, lo que a largo plazo puede contribuir a que la fecundidad no se desplome bajo el nivel de reemplazo. Además, es una inversión para los hombres porque constituye un activo importante para la vejez.

C. TENDENCIAS Y CAMBIOS DE LA MORTALIDAD

Los cambios en las condiciones de vida, el progreso de la medicina y el conocimiento progresivo de la etiología de las enfermedades han dado curso a una reducción notable de la mortalidad, especialmente durante las edades tempranas, lo que se reflejó en un aumento del número de años de vida de la población latinoamericana y caribeña. A contar de 1950, la población obtuvo una ganancia de 20 años en el promedio de vida, alcanzando valores superiores a los 70 años en el quinquenio 2000-2005. Si bien persisten desigualdades importantes entre países, se trata de un proceso generalizado que solo se ha detenido en algunos países del Caribe debido a la aparición del VIH/SIDA, que ha mermado su capacidad de seguir avanzando en esa dirección. Por su parte, el descenso de la mortalidad en la infancia se ha producido en cierto grado independientemente de la evolución de los indicadores que obedecen a la situación socioeconómica de los hogares. Asimismo, persisten importantes diferencias en los riesgos de muerte infantil entre países y dentro de ellos; los menos favorecidos son los grupos de las áreas rurales y aquellos donde las madres tienen menor educación. Es decir, la mortalidad infantil sigue siendo mayor en las poblaciones más rezagadas, lo que indica que la lucha contra la mortalidad temprana no está completamente ganada en la región.

1. MORTALIDAD GENERAL

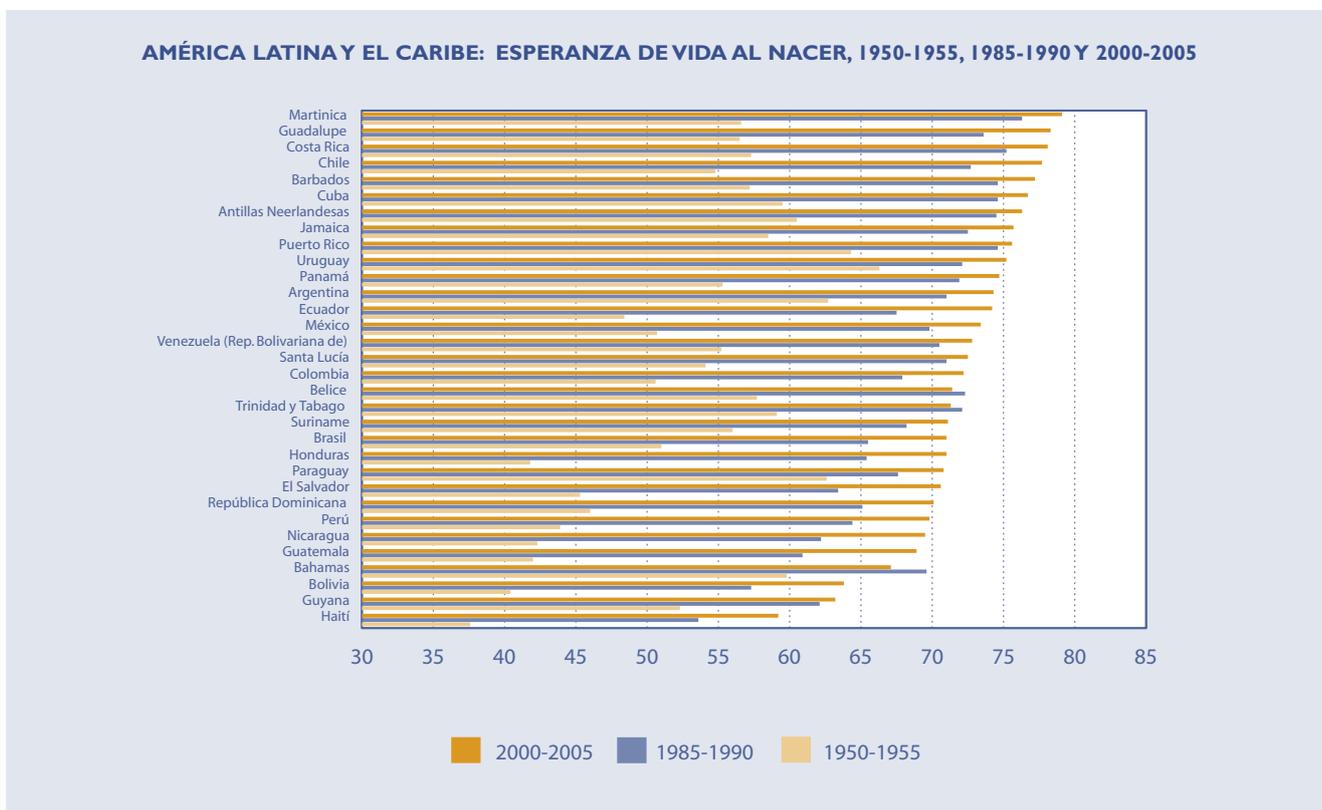
El descenso de la mortalidad regional dio inicio al proceso de transición demográfica. El mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de la población en el contexto de los procesos de urbanización, los adelantos en la medicina y la

institucionalización de los sistemas nacionales de salud (sobre todo su mayor cobertura), son algunos factores que condujeron a este importante logro. En América Latina y el Caribe estos cambios comienzan en la primera mitad del siglo XX, precediendo, por lo tanto, a los cambios en la fecundidad.

En los últimos 50 años, la población de América Latina habría ganado 20 años en el promedio de vida, alcanzando este a 71,9 años en el quinquenio 2000-2005. Este cambio ha sido generalizado y para el 2005 varios países de la región tienen esperanzas de vida al nacer que tienden a acercarse a los 80 años para ambos sexos (Martinica, Guadalupe, Costa Rica y Chile). Aunque existe una tendencia

a disminuir las diferencias de esperanza de vida al nacer entre países, aún persisten desigualdades importantes (véase el gráfico II.14). En el quinquenio 1950-1955, la diferencia máxima estaba dada por las esperanzas de vida en Uruguay (66,3 años) y Haití (37,6 años), mientras que en el del 2000-2005 la diferencia máxima corresponde a Martinica (79,1 años) y Haití (59,2 años).

Gráfico II.14



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, julio del 2004 y Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision (ST/ESA/SER.A/198)*, vol. I, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2003.

En todos los países de América Latina la mortalidad femenina es inferior a la masculina, lo que se expresa en una esperanza de vida al nacer superior en las mujeres. Esta diferencia, que tiende a reproducirse en todas las sociedades, se asocia a la prevalencia diferencial por sexo de las enfermedades o circunstancias que causan las muertes y a la posibilidad de encararlas. Además de las diferencias biológicas entre los sexos, existen enfermedades

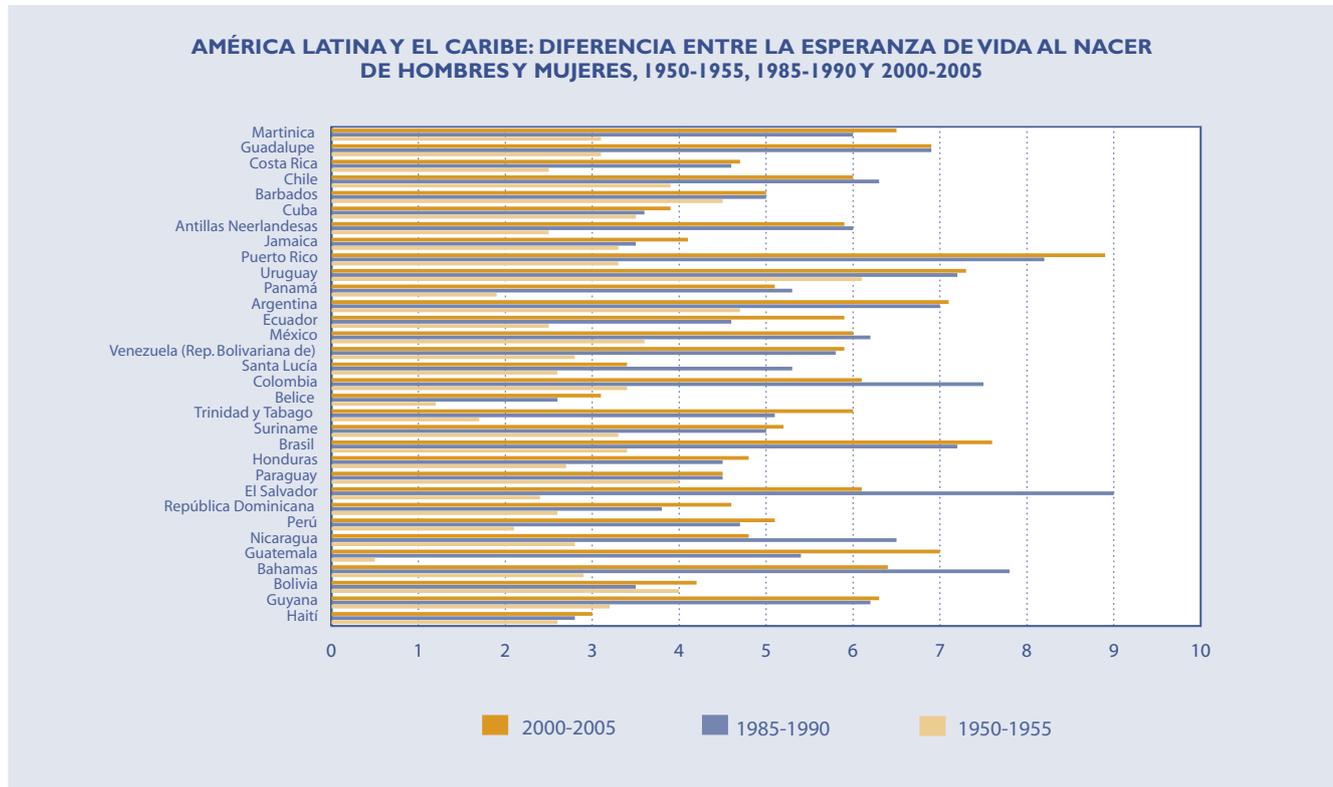
propias de la mujer, como son las complicaciones del embarazo y el parto, que han sido combatidas con un éxito superior respecto de las que afectan mayormente a los hombres, tales como las ligadas a enfermedades cardiovasculares, a causas externas, a violencia y a ciertos tipos de tumores malignos. De esta manera, la diferencia en la esperanza de vida al nacer no solo es favorable a la mujer, sino que presenta generalmente una tendencia a incrementarse

(véase el gráfico II.15). Esta circunstancia conlleva numerosas consecuencias para la vida de las mujeres, quienes verán extenderse mucho más marcadamente su longevidad y requerirán, en consecuencia, de apoyos familiares e institucionales específicos.

En la región, como promedio, la diferencia en la esperanza de vida al nacer por sexo evolucionó de

3,5 años en favor de las mujeres a mitad del siglo XX, a aproximadamente 6,5 años a finales de este. La comparación entre países arroja resultados muy variables y, en algunos de ellos, no se registra la relación esperada de una diferencia más ostensible a medida que se considera una mayor esperanza de vida al nacer. En el gráfico II.15 se ilustran estas diferencias.

Gráfico II.15



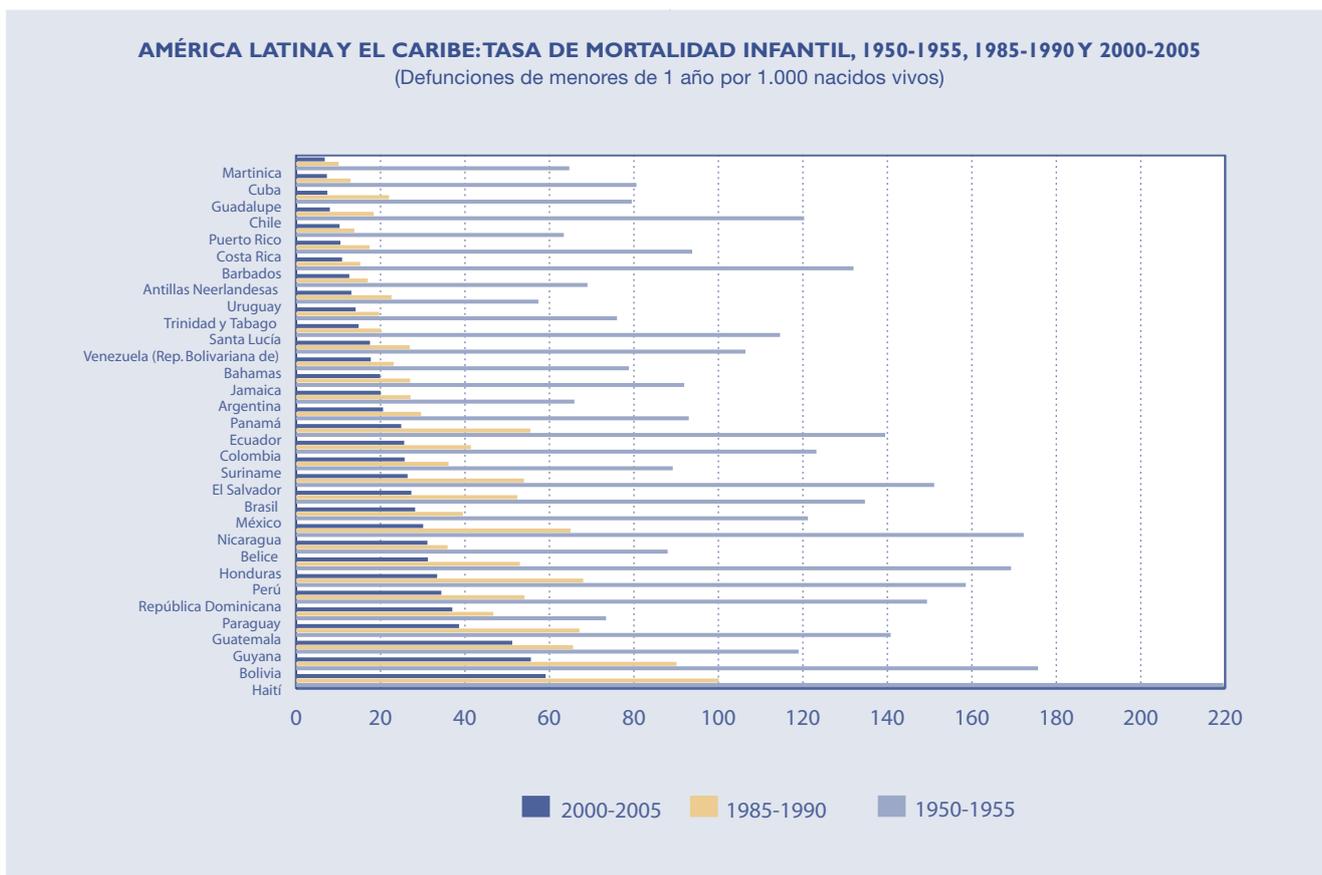
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, julio del 2004 y Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision (ST/ESA/SER.A/198)*, vol. I, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2003.

2. LA MORTALIDAD INFANTIL

El aumento de la esperanza de vida al nacer se inició fundamentalmente debido al descenso de la mortalidad en la infancia. En buena medida, tal tendencia se originó en el control de las causas de muerte infecciosas, parasitarias y del aparato respiratorio, que se logró, por ejemplo, gracias a la aplicación y persistencia de programas de vacunación masiva, rehidratación oral

y control del niño sano y del aparato respiratorio.

La mortalidad infantil en América Latina se ha reducido de un valor promedio de 128 defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos, a un valor de 28 defunciones entre 1950-1955 y 2000-2005. En el gráfico II.16 se observa el ritmo de descenso según países y la tendencia a la convergencia en los niveles.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, julio del 2004 y Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision (ST/ESA/SER.A/198)*, vol. I, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2003.

Resulta llamativo que la mortalidad infantil haya descendido generalizadamente durante todo el período, lo que refleja una cierta autonomía de la evolución de los indicadores sociales y económicos. Esto básicamente se explicaría por las inversiones relativamente pequeñas que representa la ejecución de los programas más decisivos destinados a asegurar la sobrevivencia de los niños. La sostenida implementación de los programas, junto con otros factores tales como la mayor cobertura de infraestructura sanitaria, el aumento de la escolaridad y el descenso de la fecundidad, dan cuenta de por qué no se aprecian retrocesos en los momentos de crisis económica, como en la década de 1980. El recuadro II.6 ilustra los avances de los países en alcanzar la meta establecida

en la Declaración del Milenio para la mortalidad en la infancia.

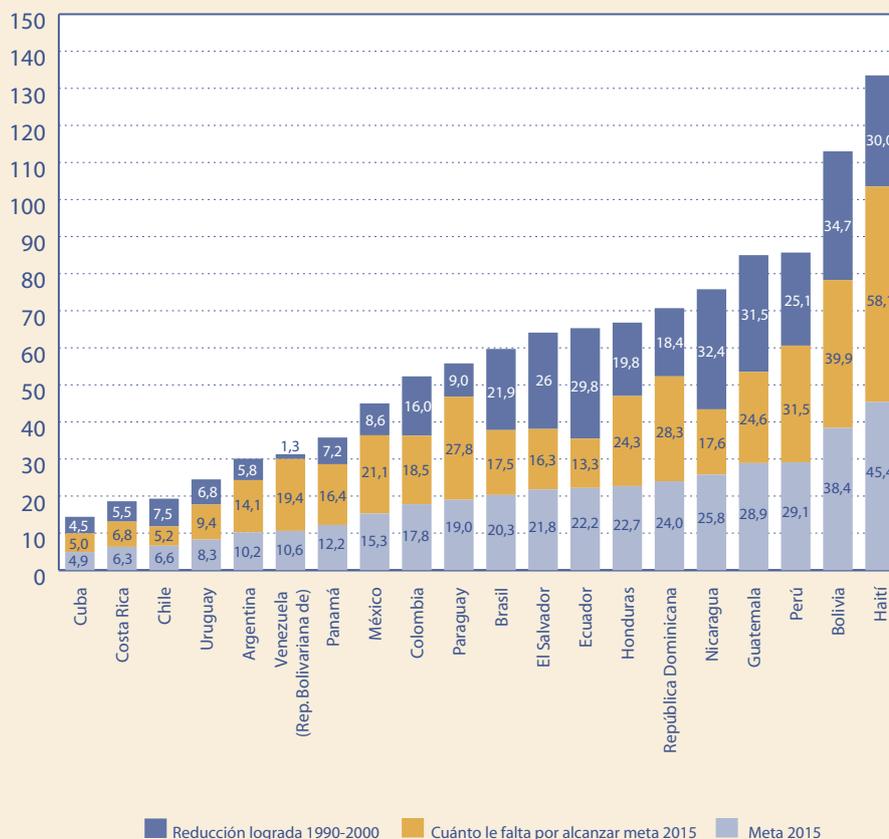
El continuado descenso de la mortalidad infantil a nivel nacional es un aspecto muy destacado en la región; no obstante, resulta preocupante la persistencia de importantes diferencias en los riesgos de muerte infantil dentro de cada país. Sistemáticamente, se observa una mortalidad infantil más elevada en las áreas rurales y, sobre todo, en los grupos sociales cuyas madres tienen menor grado de instrucción. En este último caso, las diferencias se agudizan, pues la tasa correspondiente a los hijos de las madres sin instrucción en algunos casos casi triplica a la tasa de quienes poseen instrucción secundaria y más (véase el cuadro II.4).

LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

El objetivo 4 de la Declaración del Milenio (Reducir la tasa de mortalidad infantil) tiene como meta reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de 5 años entre 1990 y 2015. Al respecto, ¿cuál es la situación en la región?

A pesar de los grandes logros en la reducción de la mortalidad en menores de 1 año (infantil), en la mayoría de los países de la región se debería mantener o incluso aumentar el ritmo de descenso de la mortalidad en menores de 5 años para alcanzar la meta establecida en la Cumbre del Milenio. No obstante, para países como Chile, Costa Rica y Cuba, que presentan niveles bajos de mortalidad en menores de 5 años, la meta no se aplicaría. También se pueden destacar los casos de Brasil, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Guatemala que, de mantener el ritmo de descenso de la mortalidad en menores de 5 años, estarían alcanzando la meta fijada para el año 2015.

AMÉRICA LATINA: MORTALIDAD EN LA NIÑEZ. ¿CUÁNTO SE HA LOGRADO Y CUÁNTO RESTA PARA LLEGAR A LA META DEL AÑO 2015?



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, julio del 2004 y Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision (ST/ESA/SER.A/198)*, vol. I, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2003.

Empero, la evolución en el tiempo indica que la baja de la mortalidad infantil es generalizada, incluidas las áreas rurales y los grupos en que las madres no tienen instrucción alguna. El problema es que no se aprecia una tendencia clara a aminorar

las diferencias relativas entre áreas de residencia y estratos educacionales, sino que, por el contrario, se asiste en algunos casos a un crecimiento de las inequidades.

**AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA MADRE**
(Defunciones de menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos)

País	Fecha de la encuesta	Total	Área de residencia			Nivel más alto de educación			
			Urbana	Rural	Relación rural / urbana	Ninguno	Primaria	Secundaria y más	Relación ninguno/ secundaria y más
Bolivia	1994 a/	86,6	68,8	105,8	1,5	122,2	99,5	48,2	2,5
	1998 a/	73,5	53	99,9	1,9	112,5	86,6	41,3	2,7
Brasil	1986 b/	84	72,9	106	1,5	113,2	89,1	23,1	4,9
	1996 a/	48,1	42,4	65,3	1,5	93,2	58,1	32	2,9
Colombia	1990 b/	27	28,9	23,4	0,8	60,5	27,3	20,4	3
	2000 b/	24,4	21,3	31,1	1,5	42,3	28,2	19,6	2,2
Ecuador*	1989 b/	40	34	58	1,7	-	51	24	-
	1999 b/	35,3	26,1	40	1,5	67,7	39,9	23,6	2,9
El Salvador*	1993 a/	41	36,4	44	1,2	38	46,4	33,5	1,1
	1998 a/	35	27	41	1,5	41	39,8	25	1,6
Guatemala	1995 b/	57	45	63	1,4	70	54	26	2,7
	2002 b/	44	35	48	1,4	57	40	17	3,4
Haití	1995 a/	87,1	83,2	88,9	1,1	95,2	78,4	75,6	1,3
	2000 a/	89,4	87	90,5	1	90,9	97,5	55,9	1,6
Honduras*	1996 a/	36	33	37	1,1	43	36,2	24	1,8
	2001 a/	34	29	38	1,3	63	32,8	18	3,5
México	1987	-	41,6	79,2	1,9	27,6	-	83,9	0,3
Nicaragua	1992/1993* b/	60	51	68	1,3	71,1	44,9	29	2,5
	2001 a/	35	28	43	1,5	54	34,5	21	2,6
Paraguay	1990 b/	35,9	32,6	38,7	1,2	52,2	39,1	22,9	2,3
Perú	1992 b/	63,7	47,5	89,9	1,9	100	83,2	33,9	2,9
	2000 b/	43,2	28,4	60,3	2,1	73,4	53,5	27,4	2,7
República Dominicana	1991 b/	44,4	37,2	54,4	1,5	46,8	54,1	25,9	1,8
	1999 b/	36,8	35,3	39,1	1,1	34,7	50,6	17,9	1,9

Fuente: Macro International Inc., "Encuesta de demografía y salud (EDS)"; para los países y períodos señalados con* corresponden a Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil".

a/ Las estimaciones se refieren a los nacimientos ocurridos en el período de 5 años precedentes a la encuesta.

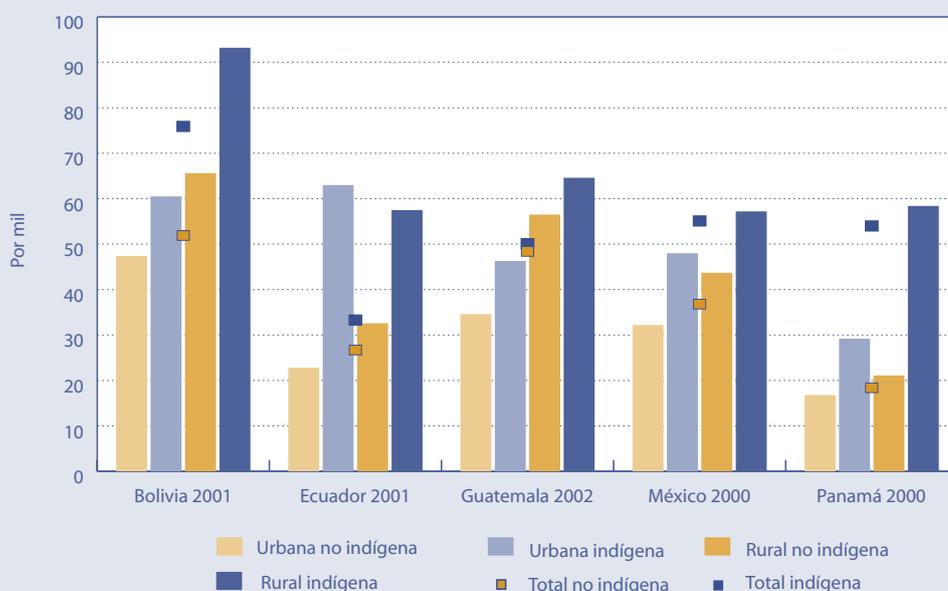
b/ Las estimaciones se refieren a los nacimientos ocurridos en el período de 10 años precedentes a la encuesta.

De la misma manera, al analizar el gráfico II.17, que ilustra la mortalidad infantil para la población indígena y no indígena de algunos países de la región, las diferencias se mantienen tanto en las áreas urbanas como rurales. La mortalidad infantil de la población indígena es mayor en todos los casos, independientemente del nivel de mortalidad general de cada país, lo que deja en evidencia que al considerar políticas de reducción de la mortalidad infantil, la condición étnica es una variable insoslayable.

Más allá de los factores de oferta de salud, puede señalarse que, en general, la baja educación mater-

na se vincula estrechamente a una mayor mortalidad infantil, y ello es producto de una constelación de variables, tales como el conocimiento sobre el cuidado del niño sano y enfermo, las decisiones familiares acerca de la asignación de los recursos del hogar (por ejemplo, la distribución del alimento entre sus miembros), y la decisión y oportunidad de consultas médicas, entre otras. Así, la sobremortalidad en las etapas incipientes de la transición demográfica obedece fundamentalmente a causas evitables originadas en procesos infecciosos (Paz y otros, 2004).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA (CRITERIO DE AUTOPERTENENCIA), POR ZONA DE RESIDENCIA DE LA MADRE
(Defunciones de menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del proyecto “Los pueblos indígenas y la población afrodescendiente en los censos” (ATN/SF-8043-RG), Santiago de Chile.

3. MORTALIDAD POR EDAD Y CAUSAS

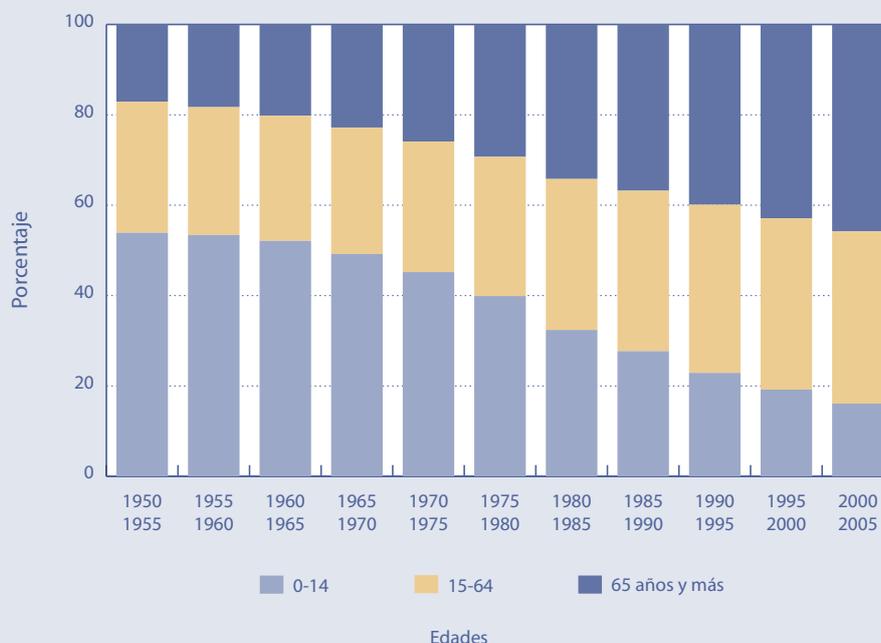
En estrecha relación con la transición demográfica, en el campo de la salud se asistió a una transición epidemiológica, esto es, a un cambio del perfil de la morbilidad y la mortalidad según causas, y de la distribución de las defunciones según la edad. Esta transición se expresa en la disminución porcentual de las muertes por enfermedades transmisibles (infecciosas, parasitarias y del aparato respiratorio) y las del período perinatal, dando paso a un predominio relativo de las defunciones por enfermedades crónicas y degenerativas (del aparato circulatorio y tumores malignos), así como de las causas externas (provocadas por violencia, accidentes y traumatismos). En ello inciden tanto la mayor baja de la mortalidad por el primer grupo de causas, que afectan principalmente a los niños, así como el cambio en la estructura por edades de la población, que conduce a un incremento de las defunciones de adultos mayores.

Los países que han mostrado un descenso pronunciado de la mortalidad en las décadas recientes ilustran la profundidad del cambio epidemiológico. Un ejemplo de ello es el caso de México, que en 35 años pasa de 55% a 15% de defunciones por enfermedades transmisibles y del período perinatal. Lo contrario ocurre con las defunciones causadas por enfermedades crónicas, degenerativas y externas, que pasan de 22% a aproximadamente 50% (Chacziel, 2004).

Un cambio importante se observa también en la estructura por edades de las defunciones, ya que las causas de muerte mencionadas se asocian con la mortalidad por edades. Las muertes provocadas por enfermedades transmisibles y de la primera infancia tienen su mayor incidencia en las edades tempranas, mientras que las crónicas y degenerativas predominan en las edades superiores. El gráfico II.18 ilustra los cambios en la mortalidad por edad observados en los últimos 50 años en América Latina.

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, 1950-2005

(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "América Latina y el Caribe: estimaciones y proyecciones de población, 1950-2050", *Boletín demográfico*, N° 73 (LC/G.2225-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, enero del 2004.

Otro hecho importante es que en la mortalidad masculina adulta joven no se ha observado un descenso en los últimos 10 años e incluso se aprecia, en algunos países, un aumento de las tasas de mortalidad en edades jóvenes. Esto se podría atribuir a un incremento de la mortalidad por causas externas, en especial asociadas a la violencia (véase CEPAL, 2004b).

Si bien los países de la región viven cambios profundos en el patrón de mortalidad por causas, esta evolución no se presenta linealmente, sino que es el resultado de avances y retrocesos en el combate a enfermedades que aparentemente están superadas. Así, por ejemplo, en la década de 1990, en varios países se ha vivido el resurgimiento de epidemias por enfermedades transmisibles, tales como el cólera, el hantavirus, la malaria, el mal de Chagas, la tuberculosis y el dengue. También en varias áreas metropolitanas y ciudades se presentan complicaciones para el sector de la salud debido al aumento

en la prevalencia de enfermedades del aparato respiratorio producidas por la contaminación del aire.

La persistencia o rebrote de enfermedades que se creían superadas estarían relacionados con la permanencia de una incidencia elevada de pobreza, en especial con el hecho de que grandes sectores de la población no se benefician de las mejoras en el saneamiento ambiental y viven en condiciones de hacinamiento. De todas maneras, por su naturaleza, estos rebotes y situaciones no se han expresado en una alta letalidad, principalmente gracias a la oportuna vigilancia epidemiológica.

El caso más preocupante es el del VIH/SIDA, aunque su incidencia tiene menos fuerza que en otras regiones del mundo; de todas formas, es relevante en algunos países de América Latina (OPS/OMS/ONUSIDA, 2001). La región, con aproximadamente un 8% de la población mundial, tenía a

fines del año 2002 un millón y medio de personas infectadas con el VIH o SIDA (210.000 contrajeron la enfermedad en el año 2002), lo que representa el 3,6% de los 42 millones de casos mundiales (ONUSIDA/OMS, 2002).

La morbilidad y mortalidad maternas han sido consideradas entre los problemas de salud pública más importantes para los países en desarrollo. Aunque las muertes relacionadas con el embarazo y el parto no constituyen un número tan cuantioso, no es aceptable que puedan ocurrir defunciones que en la mayoría de los casos son fácilmente evitables. De acuerdo con las estimaciones disponibles, en 1995, en el mundo morían por esta causa poco más de medio millón de mujeres (515.000). En América Latina y el Caribe, las muertes maternas de ese mismo año eran aproximadamente 22.000, alrededor de un 4% del total mundial (OPS/OMS/ONUSIDA, 2001).

Las amplias desigualdades en torno de la incidencia de la mortalidad materna y el carácter evitable de estas muertes condujeron a un consenso acerca de que su reducción es una prioridad internacional, lo que se ha expresado en los diversos foros a nivel mundial. Así, en la Conferencia Internacional sobre la Maternidad sin Riesgo (1987), la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz (1995) se fijó como meta reducir para el año 2000 un 50% la tasa de mortalidad materna (OPS/OMS, 2003).⁷ Más recientemente, en la Cumbre del Milenio del 2000 se recomendó reducir para el año 2015 tres cuartas partes de la mortalidad materna respecto de sus tasas actuales.

⁷ En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 se establecieron, además, metas para el año 2005 de tasas menores de 100 y 125 por 100.000, para países con mortalidad intermedia y con mortalidad alta, respectivamente. Para el año 2015, se aprobó una meta general del 50% de la tasa del año 2000 e inferior al 60% y al 75% para países con mortalidad intermedia y alta, respectivamente.

D. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO

La migración internacional, como elemento de la dinámica demográfica y fenómeno social multifacético, es uno de los rasgos distintivos de la inserción de los países de la región en la escena internacional y seguirá teniendo efectos significativos en los procesos de desarrollo nacionales.

El carácter positivo de la migración se confunde con sus aspectos problemáticos, ante la ausencia de principios comunes para una gobernabilidad migratoria que permita aprovechar las ventajas de la movilidad humana, y de allí las contradicciones que se observan. Así, existe una erosión del capital humano, pues hay una alta selectividad y una escasa circulación y vinculación de los emigrados más calificados con sus países de origen; al mismo tiempo, existe un gran impacto macroeconómico de las remesas, que representan en muchos casos una cuantía varias veces mayor que otras fuentes de ingreso de divisas. No obstante, se detectan numerosos riesgos para los migrantes, debido a la selectividad de las políticas de admisión e integración, que determinan la irregularidad y la desprotección en función de su carácter restrictivo. Si bien persisten los movimientos entre países de la región, especialmente fronterizos, se han ampliado con nuevos actores los destinos de la emigración al exterior, en especial de mujeres. Más de 20 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país de nacimiento, cifra inédita merced al gran aumento experimentado durante el decenio de 1990 en la migración a los Estados Unidos; además, emergieron nuevos flujos con una expansión sin precedentes dirigidos a Europa, y en particular a España. En la migración internacional latinoamericana, Argentina, Costa Rica y la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela siguen registrando el mayor número de inmigrantes de países de la propia región. Apoyar creativamente el flujo de las remesas y enfrentar la pérdida de capital humano y la desprotección de los migrantes -con las especificidades de género- son preocupaciones insoslayables para la gobernabilidad migratoria que deben ser consideradas, de manera de aprovechar las ventajas que una progresiva libertad de movimientos traería para el desarrollo.

1. PRESENCIA DE LA MIGRACIÓN EN EL DESARROLLO

La migración internacional es un componente que está muy presente en el proceso de cambio demográfico experimentado en nuestra región. No solo ha moldeado en muchos países los cambios de intensidad del crecimiento poblacional, sino que su especificidad de género, etaria y socioeconómica ha generado fuertes repercusiones en las estructuras sociales y familiares.

Visto desde un punto de vista más amplio, el fenómeno de la migración entre países es multifacético y se instaló rápidamente en las agendas nacionales del desarrollo. De ahí que resulte artificial separar

sus dimensiones sociales de las económicas, políticas y culturales, tal como, por ejemplo, lo ilustran las remesas. Es necesario entonces adoptar una mirada más integral de este proceso que, pese a formar parte de la historia de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, tiende a percibirse como enteramente novedoso, tal vez debido a su magnitud.

Hasta mediados del siglo XX, la región fue escenario de una intensa inmigración de ultramar, especialmente desde Europa (más de 11 millones de personas arribaron desde inicios del siglo XIX, en su mayoría italianos, españoles y portugueses), que se combinaba con los intercambios intrarregionales. Varios países se beneficiaron de la inmigración transatlántica y muchos inmigrantes consolidaron sus proyectos de vida. La migración dentro de la región pasaba virtualmente inadvertida, no tanto por su menor volumen sino debido a la más vigorosa presencia de la movilidad rural urbana. Desde entonces, junto con las vicisitudes socioeconómicas y sociopolíticas que han enfrentado los países y en respuesta a las fuerzas de la globalización contemporánea, se han gestado profundos cambios que han alterado visiblemente el mapa migratorio. Uno de los rasgos distintivos de la inserción de los países de la región en la escena internacional es, precisamente, la intensa emigración hacia el exterior que se observa y que abarca a todos los países, lo que constituye un motivo de preocupación sobre el aprovechamiento de las oportunidades para el desarrollo que entraña la migración y los obstáculos que se interponen para su consecución en las economías abiertas.

Los análisis de los factores de la migración indican que, en el contexto internacional actual, coexisten restricciones con un ambiente muy proclive al aumento de la movilidad de las personas: las dificultades de absorción laboral de los nuevos contingentes que ingresan a la fuerza de trabajo y el deterioro de los niveles de vida en muchos países de la región, los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) respecto de oportunidades distantes, las mayores facilidades para el transporte y la existencia de comunidades de migrantes están incentivando la migración (CE-

PAL, 2002c). Los países receptores, regidos por criterios de restricciones y selectividad en sus políticas migratorias, cuentan con enormes brechas salariales en su favor y siguen demandando trabajadores para apoyar sus procesos productivos, llenando de este modo vacíos que sus poblaciones locales suelen despreciar, o bien para incorporarlos en sectores de tecnología de punta donde aprovechan sus habilidades (Martínez y Villa, 2004). Estos factores difícilmente se modificarán en el corto y mediano plazo, contribuyendo a la migración irregular. Los aspectos positivos de la migración para el desarrollo se ven entonces minimizados en ausencia de criterios comunes para su gobernabilidad.

Entre las más generalizadas consecuencias de la migración de latinoamericanos y caribeños, se destacan al menos tres.

En primer lugar, la emigración de capital humano sigue siendo un problema a escala agregada, pues las características individuales de los migrantes (alta selectividad) y sus rasgos de movilidad (escasa circulación y vinculación con sus países de origen) tienden a restringir las disponibilidades nacionales necesarias para el aumento de la competitividad, además de afectar las desigualdades internacionales de ingreso según la calificación.

En segundo lugar, el impacto macroeconómico de las remesas es excepcional en la región, ya que alcanzaron una magnitud estimada en el 2003 en más de 30 mil millones de dólares, lo que representa una cuantía varias veces mayor que otras fuentes de ingreso de divisas y demuestra que las estrategias individuales de los trabajadores migrantes tienen un potencial simbólico de vinculación y representan un sustrato material de apoyos a la economía nacional que desafía a las políticas públicas.

En tercer lugar, la migración plantea muchos riesgos para los migrantes debido a que las políticas de admisión e integración de los inmigrantes son altamente selectivas, pues procuran captar recursos calificados y retener a los estudiantes más aventajados. Al mismo tiempo, son esencialmente

restrictivas, pues la selectividad se establece junto con rígidas cuotas para trabajadores extranjeros. La admisión temporal está sometida a restricciones cuantitativas y exigencias adicionales de los países desarrollados, como lo muestra el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (Martínez y Villa, 2004; CEPAL, 2002c).

Estas contradicciones realzan los riesgos para los migrantes, que han aumentado, y dan lugar a las facetas más conocidas de la migración contemporánea: la irregularidad a que deben someterse algunos y la desprotección que afecta a los trabajadores migrantes regulares, quienes acceden a mecanismos de integración muy débiles, sufren de discriminación —en especial, las mujeres— y suelen ser objeto de brotes de xenofobia.

Los aspectos positivos de la migración para los países involucrados, los migrantes y sus comunidades no son cabalmente aprovechados en un contexto como el descrito. A nivel individual, existen evidencias de mejoría en los desempeños sociales, de mayores cuotas de poder a nivel doméstico y público, además de mejoramientos salariales sustantivos, que pudieran redundar en el desarrollo y la equidad. Pero esto no parece ser lo más frecuente. De allí la necesidad de que más Estados ratifiquen la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y se fortalezcan el diálogo y la cooperación entre los Estados en los próximos años.⁸

2. LOS PATRONES Y TENDENCIAS: TRANSFORMACIONES EN MARCHA

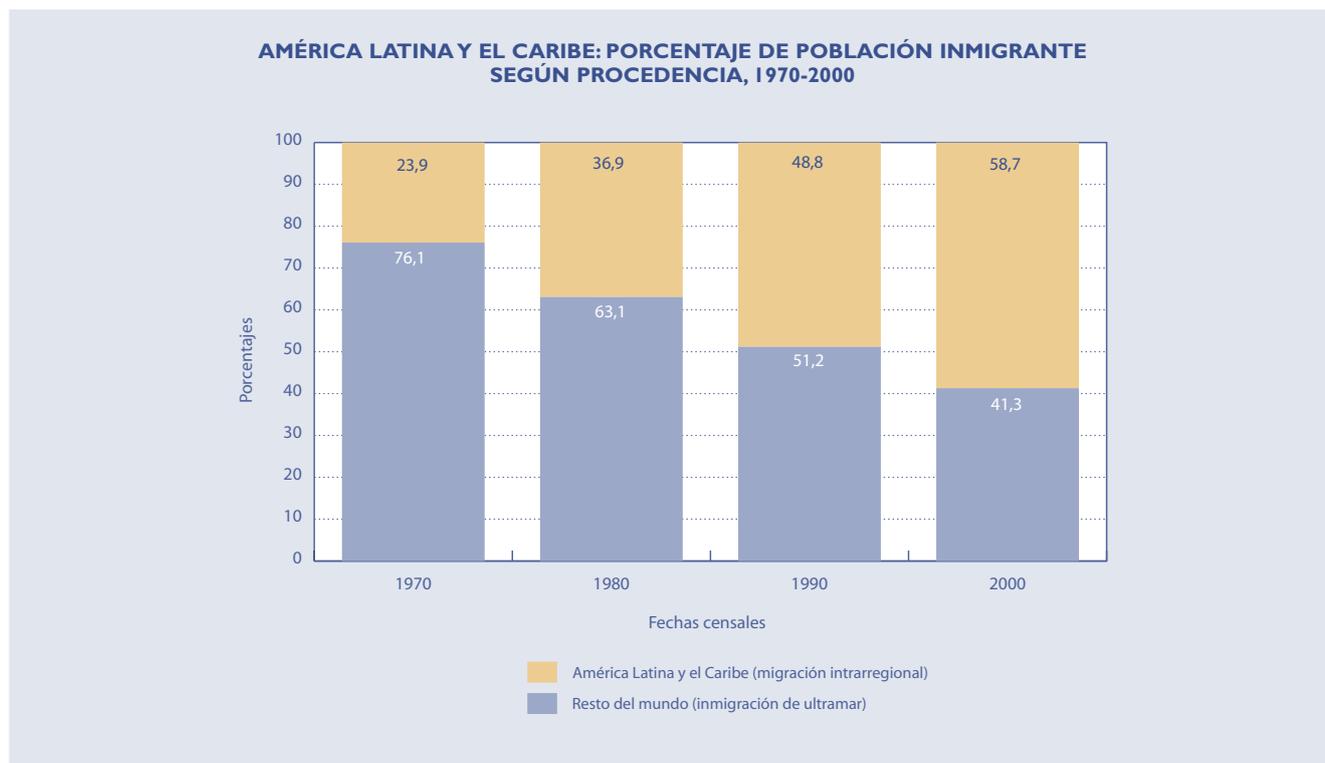
Una mirada al panorama regional muestra la persistencia de los movimientos entre países de la

región, especialmente fronterizos, como parte de un patrón profundamente anclado en la historia, previo a la instalación de fronteras, y que existe una merma notoria en la inmigración ultramarina. En el primer caso, la continuidad cultural, algunas raíces históricas comunes y la complementariedad de los mercados laborales están en la base de los intercambios migratorios. En el segundo, la recuperación económica europea desde la posguerra y la pérdida del atractivo de hacerse la América motivaron un cese de la migración transatlántica. Así, la inmigración en el conjunto de países pasó a ser predominantemente de origen regional (véase el gráfico II.19).

Lo distintivo es que la región es fuente de emigración, con una geografía de destinos que se ha ampliado de manera progresiva y que va acompañada de la incorporación de nuevos actores, sobre todo de sectores de mediana y elevada calificación y de una significativa participación de las mujeres. Los países presentan un aumento en el número de sus emigrantes y se estima que más de 20 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país de nacimiento, cifra inédita en la historia y que se alcanzó merced al gran incremento experimentado durante el decenio de 1990, en especial en la migración a los Estados Unidos, si bien emergieron nuevos flujos con una expansión sin precedentes dirigidos a Europa, y en particular a España. Estados Unidos aglutina a tres cuartas partes de los migrantes (véase el gráfico II.20), lo que convierte a este país en el eje de los debates que alimentan las diversas preocupaciones por la migración contemporánea y sus consecuencias sobre el desarrollo. España es el segundo destino de la emigración regional, superando a Canadá, lo que introduce una plataforma de negociaciones en los asuntos migratorios en el seno de la Unión Europea (Martínez y Villa, 2004; Pellegrino, 2004c).

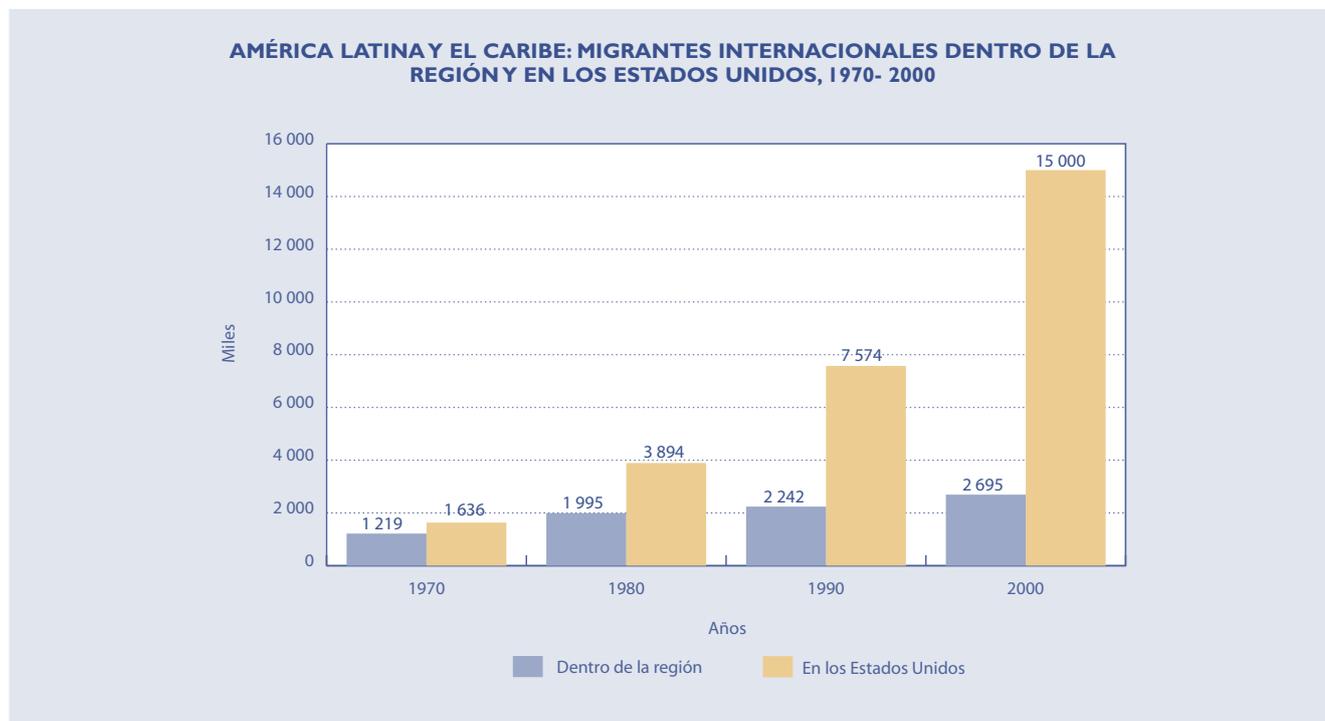
8 Hay numerosas iniciativas en favor de la cooperación para una gobernabilidad migratoria compartida. Entre las más relevantes, puede señalarse a la Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales, establecida en 2003 por el Secretario General de las Naciones Unidas. La Comisión inició sus funciones el 1 de enero del 2004 y su objetivo es tripartito: i) colocar el tema de la migración internacional en la agenda mundial; ii) analizar los actuales enfoques de la migración y sus relaciones con otras áreas; y iii) presentar recomendaciones al Secretario General de las Naciones Unidas y otras personalidades para fortalecer la gobernabilidad de la migración internacional (CEPAL, 2004c).

Gráfico II.19



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Migración internacional en Latino América (IMILA)” [banco de datos] [en línea] <http://www.eclac.cl/celade/migracion/>.

Gráfico II.20



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Migración internacional en Latino América (IMILA)” [banco de datos] [en línea] <http://www.eclac.cl/celade/migracion/>.

3. RASGOS DISTINTIVOS DE LA MIGRACIÓN: COMPLEJIDAD EN AUMENTO

Entre algunos aspectos distintivos de los patrones y tendencias de la migración internacional latinoamericana y caribeña, cabe subrayar los siguientes:

- a) En la escala intrarregional, no obstante los cambios del contexto socioeconómico y político, y con arreglo a las especificidades subregionales, los orígenes y destinos de las corrientes migratorias no se alteraron mayormente entre 1970 y 2000, lo que refleja una consolidación del mapa migratorio regional. De acuerdo con las más recientes evidencias, en la década de 1990 hubo un moderado incremento del *stock*

de inmigrantes intrarregionales, que alcanzó a 2 millones 700 mil personas en el año 2000 (véase el cuadro II.5). En los principales flujos se verifica un predominio de mujeres (véase el gráfico II.21). Argentina, Costa Rica y la República Bolivariana de Venezuela siguen siendo los países que registran el mayor número de inmigrantes provenientes de países de la propia región, siendo estos proporcionalmente superiores en la mayoría de los países (véase el gráfico II.21). En el Caribe, la migración muestra una intensa modalidad de circulación, si bien hay importantes excepciones, como la corriente migratoria de haitianos a República Dominicana, que configura un tipo de desplazamiento que, más allá de vaivenes coyunturales, tiene una peculiar raigambre histórica.⁹

Cuadro II.5

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN INMIGRANTE SEGÚN ORIGEN, RONDAS CENSALES DE 1970-2000 a/

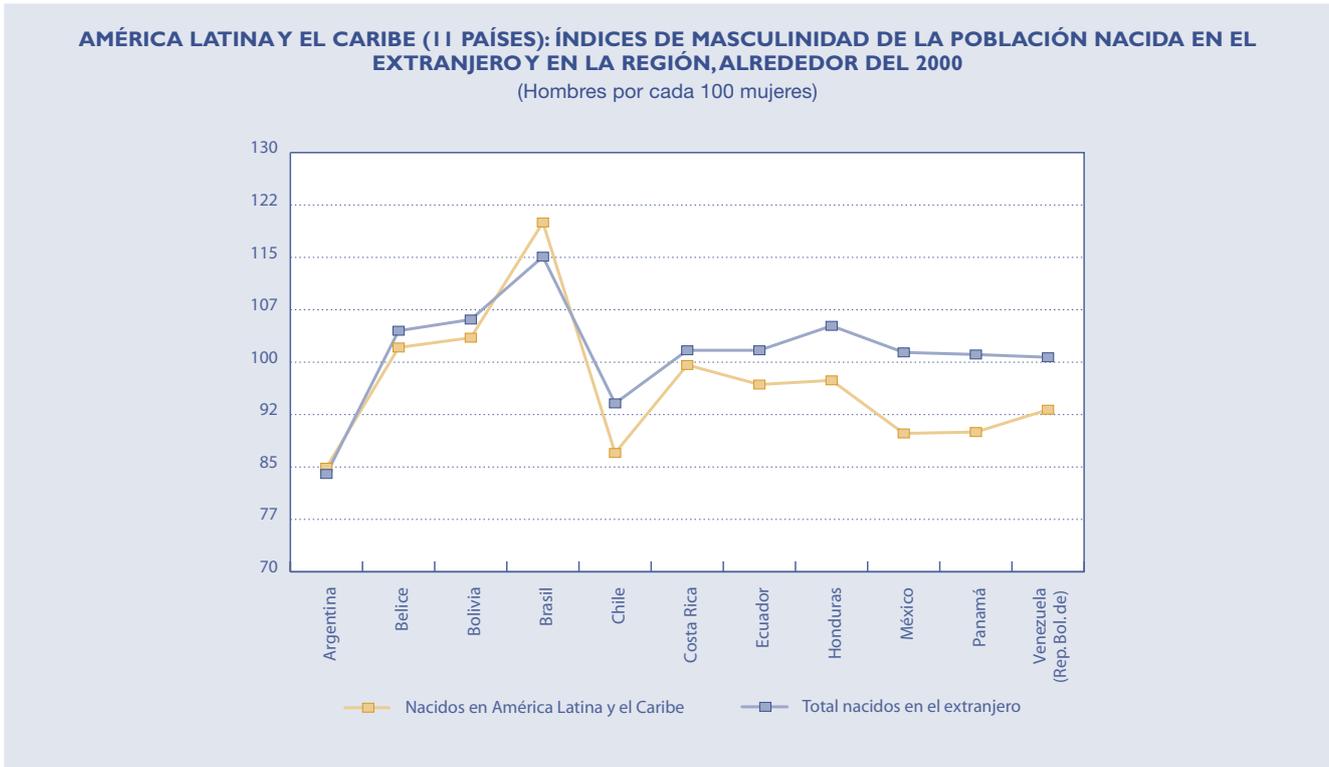
Origen	Rondas censales				Tasas de crecimiento anual		
	1970	1980	1990	2000	1970-1980	1980-1990	1990-2000
Ultramar	3 873 420	3 411 426	2 350 441	1 895 075	-1,3	-3,7	-2,1
Porcentaje	76,1	63,1	51,2	41,3			
Migración intrarregional	1 218 990	1 995 149	2 242 268	2 694 603	4,8	1,2	1,8
Porcentaje	23,9	36,9	48,8	58,7			
Total	5 092 410	5 406 575	4 592 709	4 589 678	0,6	-1,6	0
Porcentaje	100	100	100	100			

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Migración internacional en Latino América (IMILA)" [banco de datos] [en línea] <http://www.eclac.cl/celade/migracion/>.

a/ Para 1970 se incluyen 16 países; para 1980, 1990 y 2000, los números son 14, 13 y 11, respectivamente.

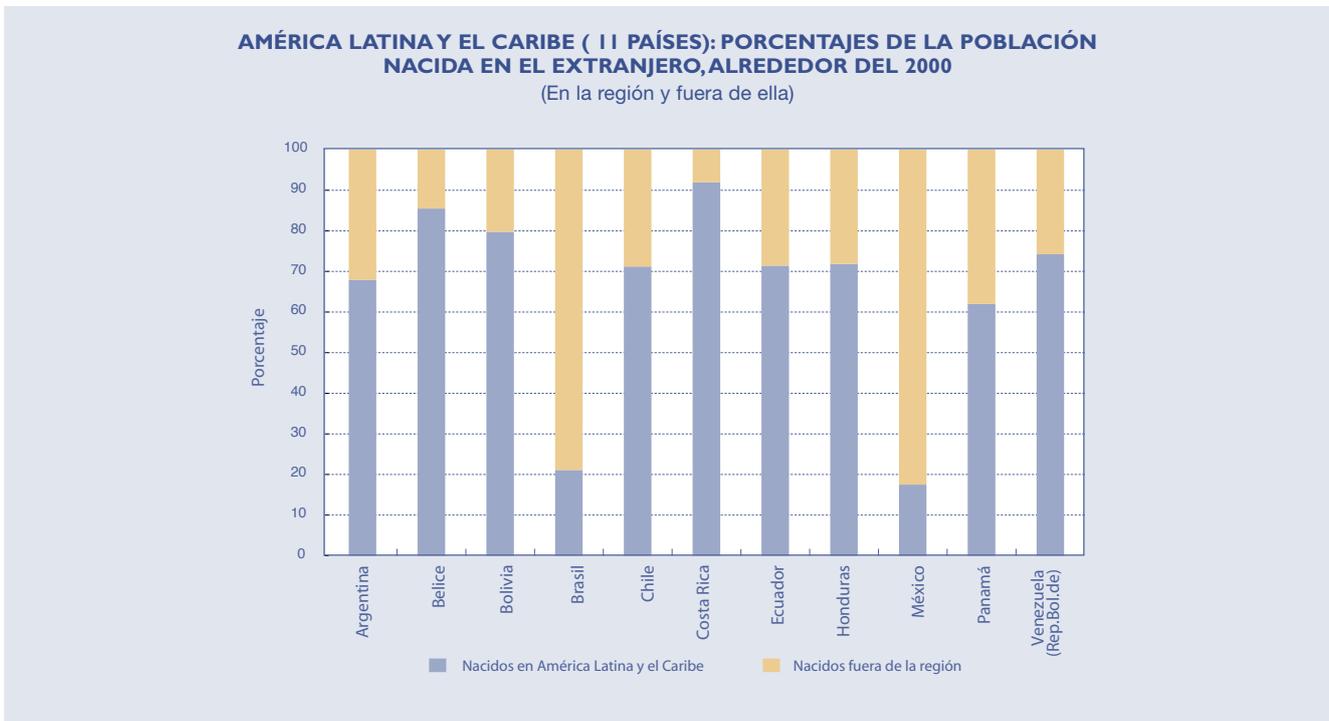
9 Los flujos recientes se distinguen por la alta incidencia de indocumentación de los migrantes, modalidades informales de inserción laboral, una marcada selectividad educativa con respecto a las poblaciones de origen y una creciente participación de mujeres (Silié, Segura y Dore, 2002).

Gráfico II.21



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Migración internacional en Latino América (IMILA)” [banco de datos] [en línea] <http://www.eclac.cl/celade/migracion/>.

Gráfico II.22



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Migración internacional en Latino América (IMILA)” [banco de datos] [en línea] <http://www.eclac.cl/celade/migracion/>.

b) En los Estados Unidos se estima, como mínimo, que hay un total de 15 millones de inmigrantes de la región en el año 2000, cifra que equivale a poco más de la mitad del stock total de inmigrantes en ese país y es producto de un crecimiento del orden de un 73% entre 1990 y 2000 (Villa y Martínez, 2002). Los mexicanos representan el 54% de los inmigrantes regionales, seguidos de los cubanos, dominicanos y salvadoreños. Entre 1970 y 2000, casi se decuplicó el número de inmigrantes de la región (véase el cuadro II.6), en un proceso que se desenvuelve entre constantes revisiones y enmiendas de las normativas y políticas migratorias. Tradicionalmente alimentada por mexicanos y caribeños, hoy la migración incluye, con creciente fuerza, a centroamericanos y sudamericanos (véase el gráfico II.23). El fenómeno migratorio tiene un componente apreciable de irregularidad en el ingreso y permanencia. Una estimación oficial del número de migrantes indocumentados en los Estados Unidos arroja una cifra de 7 millones de personas en el año 2000, cerca de un 70% de ellas de origen mexicano y un 32% concentradas en California (véase www.census.gov). La movilidad parece satisfacer expectativas individuales de los inmigrantes, acarrea la formación de comunida-

des transnacionales de migrantes y da origen al grueso de las remesas que reciben los países de la región (alrededor del 80%) (Martínez y Villa, 2004; Pellegrino, 2004).

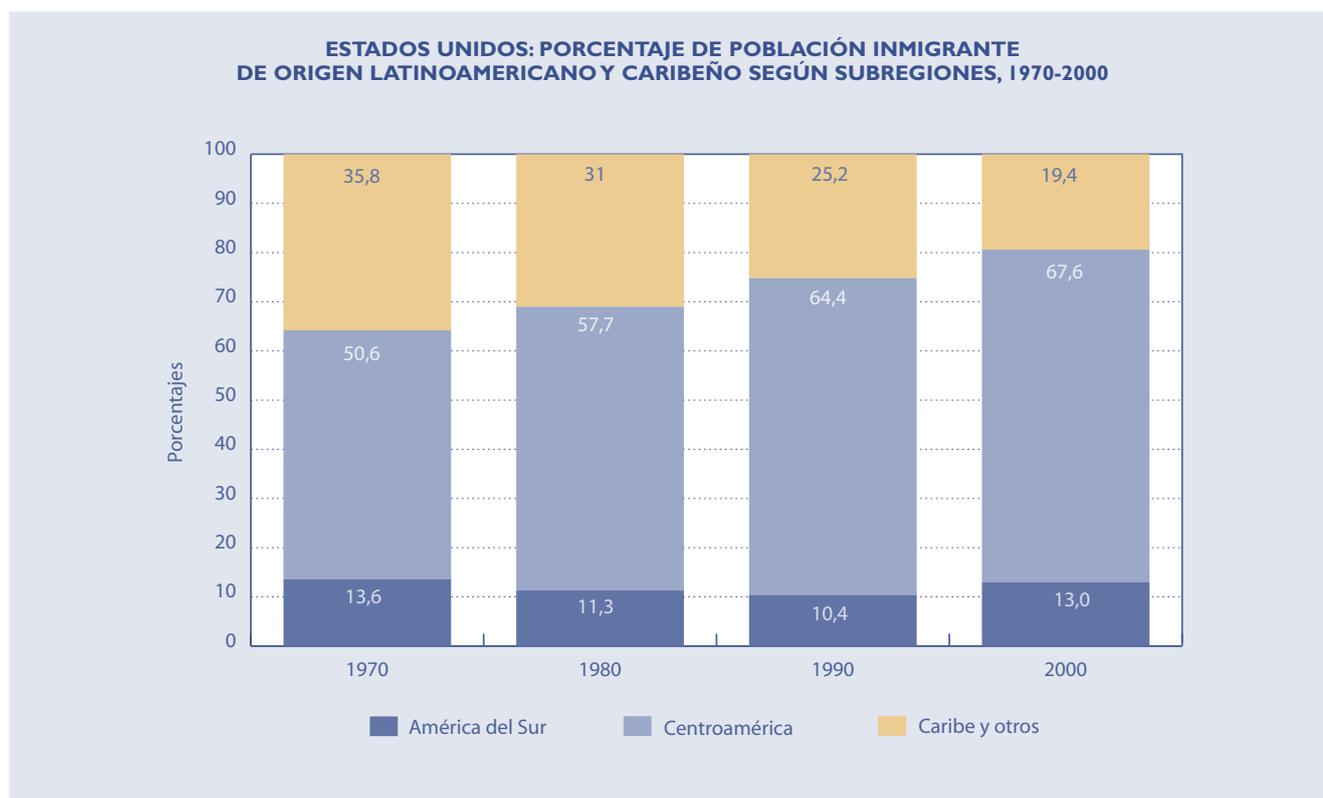
La participación de mujeres y hombres es variada: caribeños y sudamericanos registran una muy elevada participación femenina (véase el gráfico II.24). Los centroamericanos tienen una mayor concentración de población en edades activas y sus perfiles de escolaridad son ostensiblemente más bajos que los de caribeños y sudamericanos; a su vez, la participación laboral de las mujeres es notoriamente más elevada entre las caribeñas y sudamericanas —aunque en todos los grupos alcanza una intensidad mayor que en los países de origen; por último, las ocupaciones profesionales abarcan proporciones significativamente más altas entre los oriundos del Caribe y América del Sur. Los inmigrantes indocumentados, de menor escolaridad relativa y que trabajan en actividades que requieren baja calificación, están más propensos a vulnerabilidad y exclusión. Empero, los inmigrantes tienen, en promedio, un nivel educativo mayor que el de sus poblaciones de origen, dejando en claro la selectividad del proceso migratorio.

Cuadro II.6

ESTADOS UNIDOS: STOCKS DE POBLACIÓN INMIGRANTE DE ORIGEN LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO, 1970, 1980, 1990 Y 2000							
Procedencia	Fechas censales a/				Tasas de crecimiento anual		
	1970	1980	1990	2000	1970-1980	1980-1990	1990-2000
América del Sur	234 233	493 950	871 678	1 876 000			
Porcentaje	13,6	11,3	10,4	13,0	7,5	5,7	7,7
Centroamérica	873 624	2 530 440	5 391 943	9 789 000			
Porcentaje	50,6	57,7	64,4	67,6	10,6	7,6	6,0
El Caribe y otros	617 551	1 358 610	2 107 181	2 813 000			
Porcentaje	35,8	31,0	25,2	19,4	7,9	4,4	2,9
Total	1 725 408	4 383 000	8 370 802	14 478 000			
Porcentaje	100	100	100	100	9,3	6,5	5,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Migración internacional en Latino América (IMILA)" [banco de datos] [en línea] <http://www.eclac.cl/celade/migracion/>.

a/ 2000 corresponde a la Encuesta Continua de Población.



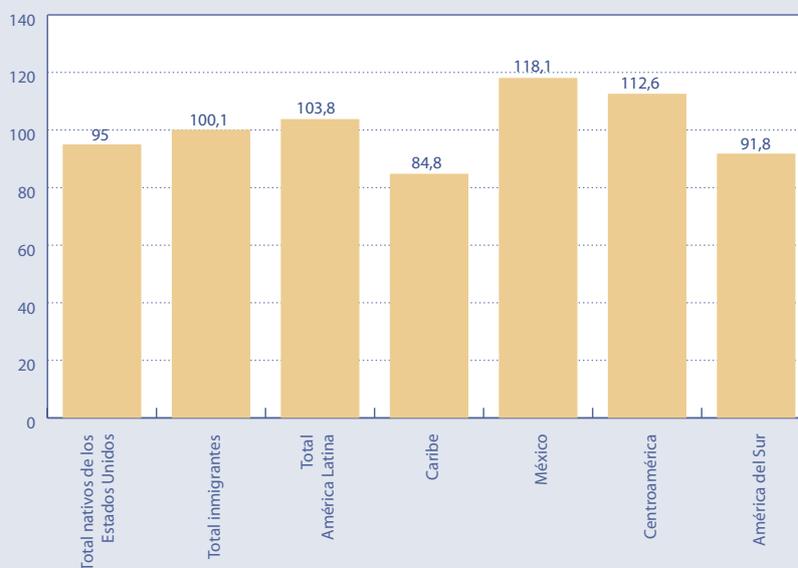
Fuente: Miguel Villa y Jorge Martínez, "Rasgos sociodemográficos y económicos de la migración internacional en América Latina y el Caribe", *Capítulos del SELA*, N° 65, mayo-agosto, 2002 y Oficina del Censo de los Estados Unidos, *Encuesta continua de población*, Washington, D.C.

Diversas evidencias permiten concluir que los inmigrantes contribuyen a la flexibilización laboral estadounidense (Canales, 2000).¹⁰ Esto ha conducido a una tensión evidente y no resuelta entre normas restrictivas a la migración, en que las preocupaciones por la seguridad han reforzado el control sobre la demanda de mano de obra barata o especializada, dispuesta a realizar trabajos que los estadounidenses desechan, o en plena edad de aprendizaje de habilidades, que se inserta en sectores estratégicos de la economía y contribuye a la prosperidad y competitividad de los Estados Unidos (Martínez y Villa, 2004).

c) La emigración a otros destinos involucra un total cercano a los 3 millones de personas en el año 2000. Canadá, algunos países de Europa (especialmente España y el Reino Unido), Japón, Israel y Australia representan los destinos más importantes (véase el cuadro II.7). En algunos de ellos, la presencia de latinoamericanos y caribeños se acrecentó con el retorno de antiguos inmigrantes de ultramar y el de los que obtuvieron el reconocimiento de su ciudadanía en el país de origen de sus parientes y antepasados. El predominio de la participación de mujeres en muchas de esas nuevas orientaciones acompaña a la diversificación de los destinos.

¹⁰ Canales señala que la combinación de estrategias de flexibilidad laboral generaron una creciente polarización y segmentación de los mercados de trabajo en los Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS: ÍNDICE DE MASCULINIDAD DE LA POBLACIÓN NATIVA Y DE INMIGRANTES SEGÚN REGIÓN DE ORIGEN, AÑO 2000
(hombres por cada cien mujeres)



Fuente: A. Schmidley, "Profile of the foreign-born population in the United States: 2000", *Current Population Report series*, Washington, D.C., Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2001.

Cuadro II.7

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS EN EUROPA Y OTROS PAÍSES CON INFORMACIÓN DISPONIBLE, ALREDEDOR DEL 2000

País de presencia	Total
Alemania	87 614
Austria a/	2 308
Bélgica	4 962
Dinamarca	865
España	840 104
Francia a/	41 714
Holanda	157 745
Italia	116 084
Noruega	14 937
Portugal	25 531
Reino Unido b/	500 000
Suecia	19 930
Total Europa	1 811 794
Australia	74 649
Canadá	575 955
Israel	78 259
Japón	284 691
Total países con información	2 825 348

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Migración internacional en Latino América (IMILA)" [banco de datos] [en línea] <http://www.eclac.cl/celade/migracion/>.

a/ Corresponde a 1990.

b/ E. Thomas-Hope, "Trends and patterns of migration to and from the Caribbean countries", San José, septiembre del 2000, inédito.

En Canadá se mantiene una admisión permanente de inmigrantes, basada en puntajes que favorecen la incorporación de personas con capacidades de integrarse a la economía y sociedad canadienses. En el Reino Unido se dio preferencias a los inmigrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM), aunque desde hace décadas se suprimió la política de libre admisión. España se ha convertido, recientemente, en el segundo destino de la emigración regional: en 2001 se registraron 840.000 inmigrantes originados en la región, principalmente sudamericanos (véase el cuadro II.8). El notable predominio de mujeres indica que ellas han sido pioneras en la instalación de esta corriente. En general, la cercanía cultural relativa ha hecho que esta inmigración goce de mayor aceptación entre los españoles, como se deduce de las opiniones de la ciudadanía española, además de que desempeñan un papel fundamental en la provisión de cuidados a las personas mayores y de servicios domésticos. Las redes migratorias han facilitado el acceso de nuevos contingentes en un marco legislativo cambiante (incluida la reagrupación familiar). Varios estudios coinciden en que la calificación de las y

los sudamericanos en España es elevada; si bien su inserción laboral es segmentada y entraña riesgos de exclusión social (Domingo, 2004; Pellegrino, 2004), la experiencia de trabajo y los vínculos con las redes

sociales y familiares permiten que muchas de estas personas registren una rápida movilidad sociocupacional (Martínez, 2003; Martínez y Villa, 2004).

Cuadro II.8

ESPAÑA: STOCKS DE LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS RESIDENTES POR PAÍS DE NACIMIENTO Y SEXO, 1991 Y 2001								
País de nacimiento	Ambos sexos		Hombres		Mujeres		IM a/	
	1991	2001	1991	2001	1991	2001	1991	2001
Centroamérica	49 960	131 383	20 875	50 467	29 085	80 916	71,8	62,4
Cuba	24 059	50 753	10 659	22 185	13 400	28 568	79,5	77,7
El Salvador	...	2 754	...	1 014	...	1 740		58,3
Honduras	...	3 498	...	1 212	...	2 286		53,0
México	11 776	20 943	4 980	8 899	6 796	12 044	73,3	73,9
República Dominicana	7 080	44 088	2 331	13 264	4 749	30 824	49,1	43,0
Otros	7 045	9 347	2 905	3 893	4 140	5 454	70,2	71,4
América del Sur	160 499	708 721	75 185	324 943	85 314	383 778	88,1	84,7
Argentina	53 837	103 831	25 486	51 690	28 351	52 141	89,9	99,1
Bolivia	...	13 184	...	5 987	...	7 197		83,2
Brasil	13 673	33 196	6 048	12 224	7 625	20 972	79,3	58,3
Colombia	...	174 405	...	73 099	...	101 306		72,2
Chile	...	18 083	...	8 468	...	9 615		88,1
Ecuador	...	218 351	...	106 601	...	111 750		95,4
Paraguay	...	2 113	...	822	...	1 291		63,7
Perú	...	53 621	...	22 164	...	31 457		70,5
Venezuela (Rep. Bolivariana de)	42 344	67 150	20 116	31 526	22 228	35 624	90,5	88,5
Uruguay	...	24 626	...	12 291	...	12 335		99,6
Otros	50 645	161	23 535	71	27 110	90	86,8	78,9
Total región	210 459	840 104	96 060	375 410	114 399	464 694	84,0	80,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Instituto Nacional de Estadística de España (INE).
a/ IM: Índice de masculinidad.

En Japón, la inmigración compuesta principalmente por brasileños y peruanos se vio favorecida por disposiciones adoptadas en los años noventa, que facilitaron el visado de ingreso y permanencia temporal a los descendientes sanguíneos de japoneses instalados desde las primeras décadas del siglo en Brasil y Perú. En el año 2000, más de 300.000 no nativos residentes en ese país eran latinoamericanos (los brasileños constituían más del 80% del total; véase el cuadro II.9). Estos inmigrantes son en su mayoría hombres, empleados en los sectores manufactureros, aunque se registra

un progresivo aumento de la participación de las mujeres. Uno de los factores de la inmigración de mujeres parece ser la trata de personas, pues se conoce que el mercado internacional tiene a Japón como uno de los centros de articulación de redes europeas y asiáticas, que poseen sus puntos de operación y reclutamiento principalmente en Brasil y otros países de la región. Información oficial consigna una cifra de entre 3.000 y 5.000 brasileñas dedicadas al comercio sexual, una fracción elevada de quienes se dedican a los servicios y que supera a varios rubros de actividad.

JAPÓN: POBLACIÓN RESIDENTE NACIDA EN BRASIL SEGÚN SEXO, 1994-1997

Año	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	IM a/
1994	159 619	92 173	67 446	136,7
1995	176 440	101 684	74 756	136,0
1996	201 795	115 035	86 760	132,6
1997	233 254	131 108	102 146	128,4

Fuente: E. Sasaki, "Estrangeiros residentes no Japão: dados do Ministério da Justiça do Japão (1994 a 1997)", documento presentado en el segundo Encuentro nacional sobre migración (Ouro Preto, noviembre de 1999), 2000.

a/ IM: Índice de masculinidad.

d) Las tendencias de la participación de mujeres sugieren una feminización cuantitativa, lo que es un rasgo distintivo de la migración latinoamericana y caribeña en comparación con otras regiones del mundo. La composición de las corrientes según el género guarda estrecha relación con el grado de complementariedad entre los mercados de trabajo de los países, la demanda laboral en actividades de servicios y los efectos de la reunificación familiar. La migración de mujeres tiene especificidades que deben ser consideradas, pues responden ya sea a motivaciones laborales, de carácter familiar, o a otras de carácter más individual. Esto conduce a la necesidad de abordar el significado de la migración de y para las mujeres, más allá de percepciones simplistas acerca de su excesiva victimización o inevitable empoderamiento. Lo que resalta es que la imagen de la mujer migrante como acompañante, en calidad de actor pasivo, ya no se sustenta (Martínez, 2003).

Se requiere crear políticas que protejan a las migrantes, en el entendido que no se trata de una migración asociativa, ni que todas las migrantes son potenciales víctimas pasivas; es también preciso evaluar si efectivamente se produce un mayor empoderamiento de las mujeres migrantes, en especial si el proceso migratorio las conduce a replicar inequidades de género en los países de destino y no las exime de las vicisitudes por que atraviesan muchos hombres migrantes.

e) La desprotección de las personas migrantes representa una preocupación insoslayable. La existencia de una población inmigrante en situación indocumentada —de magnitud estimada en más de 7 millones de personas, concentradas en los Estados Unidos—, las restricciones a la inmigración por parte de los países desarrollados, cuyo resultado es la vulnerabilidad de muchos inmigrantes, atizada por la indocumentación y la operación de organizaciones dedicadas a la trata de personas, son situaciones que les impiden el ejercicio de sus derechos en forma plena, aspectos preocupantes para los países de la región y que desafían a la gobernabilidad migratoria.

Todo lo anterior ha puesto a la migración internacional en las agendas nacionales de desarrollo en la región. El desafío para los países consiste en aprovechar las enormes potencialidades de la migración para el desarrollo, a cuyo efecto podrán establecer férreas demandas a los países desarrollados y comprometer su interés en la gobernabilidad migratoria, de manera de favorecer mayores cuotas de liberalización de la movilidad, mejorar la integración y protección de los inmigrantes, aumentar el flujo y los efectos de las remesas con políticas activas, facilitar la circulación de personal calificado y propender a una menor asimetría en el orden internacional.

LOS IMPACTOS DE LAS REMESAS A NIVEL DE LOS HOGARES QUE LAS RECIBEN

Las remesas están entre los rasgos más salientes de la migración internacional de latinoamericanos y caribeños. Durante los años noventa registraron un espectacular dinamismo en la región, cuando su monto se cuadruplicó hasta llegar a casi 20 mil millones de dólares anuales. Hacia el año 2003 el BID (2004) estima la cifra en más de 35 mil millones de dólares, siendo la región con la primera fracción del total de remesas en el mundo. En algunos países de la región equivalen a más del 10% del PIB y más del 30% de las exportaciones. Las consecuencias de las remesas sobre las balanzas de pago son manifiestas y llegan a representar flujos mayores a la asistencia para el desarrollo y otras fuentes de divisas. En tal sentido, los altos costos de transferencia de los dineros (una parte del salario) han sido una de las preocupaciones centrales para dar más transparencia al mercado de las remesas.

Con todo, las repercusiones no son solo macroeconómicas: según el BID, casi dos tercios de los emigrantes envían remesas a sus familias, lo que representa para ellos menos de un 10 por ciento de sus ingresos, pero una proporción mucho mayor para los hogares receptores. A escala microsocia se identifican diversas iniciativas, dadas la potencialidad que ofrecen las remesas familiares para aliviar situaciones de pobreza en los hogares, para generar ahorros dirigidos a costear la salud y educación de los niños, para la adquisición de bienes y para el establecimiento de pequeños negocios. Considerando estos hechos, las remesas parecen constituir una política social autocreada, un símbolo y una materialización de vínculos transnacionales con enormes potencialidades, particularmente sobre la pobreza. Desde el lado de los hogares receptores de remesas, ¿qué hay detrás de esta afirmación?

De acuerdo a los datos de las encuestas de hogares de comienzos del decenio del 2000, en países seleccionados, se observan diversas tendencias. En primer lugar, los porcentajes de hogares que reciben remesas son fluctuantes, entre un 3% (Bolivia, Perú) y cerca de un 20% (Nicaragua y República Dominicana). En segundo lugar, tales porcentajes son también fluctuantes según áreas de residencia en cada caso nacional. Por ejemplo, en México, el porcentaje de hogares receptores en las áreas rurales es tres veces el porcentaje que en las áreas urbanas, mientras en Nicaragua el porcentaje de hogares receptores en las áreas urbanas duplica con creces el de las áreas rurales. En tercer lugar, los hogares no pobres tienden a registrar proporciones mayores en la recepción de remesas, si bien hay países que escapan a esta tendencia (República Dominicana, Uruguay y, en menor medida, México). En cualquier caso, es muy probable que los montos recibidos representen una fracción fundamental de los ingresos de los hogares pobres. Sin embargo, las remesas no llegarían esencialmente a los pobres, puesto que los miembros de los hogares más pobres no suelen migrar y, por lo tanto, quedan excluidos del beneficio directo de las remesas. Esto no impide que puedan beneficiarse indirectamente en el mediano y largo plazo, si se cumplen condiciones que favorezcan el ahorro, consumo e inversión en las comunidades receptoras de remesas.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECIBEN REMESAS, SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA, POR ÁREA DE RESIDENCIA, ALREDEDOR DEL 2002

País y área	Condición de pobreza		Total	País y área	Condición de pobreza		Total
	Pobre	No pobre			Pobre	No pobre	
Bolivia				México			
Urbana	2,5	5,0	3,9	Urbana	3,8	2,9	3,1
Rural	2,6	2,9	2,6	Rural	9,1	10,9	10,1
Total país	2,5	4,5	3,4	Total país	6,3	5,4	5,7
Ecuador				Nicaragua			
Urbana	4,0	7,2	5,9	Urbana	21,7	29,3	24,9
Rural	Rural	8,8	12,0	9,7
Total país	4,0	7,2	5,9	Total país	16,1	24,1	19,0
El Salvador				Paraguay			
Urbana	14,1	17,4	16,2	Urbana	1,0	5,5	3,9
Rural	13,2	26,5	18,9	Rural	4,8	7,7	5,9
Total país	13,6	19,9	17,2	Total país	3,8	6,4	5,1
Guatemala				Perú			
Urbana	8,9	12,2	10,9	Urbana	2,1	5,9	4,6
Rural	10,4	14,1	11,8	Rural	0,1	1,4	0,5
Total país	9,9	13,1	11,4	Total país	1,1	5,0	3,2
Honduras				Rep. Dominicana			
Urbana	10,6	18,1	13,6	Urbana	26,2	17,0	20,6
Rural	5,6	22,4	8,8	Rural	25,2	16,9	20,7
Total país	7,7	19,5	11,1	Total país	25,8	17,0	20,6
				Uruguay			
				Urbana	21,6	12,1	13,0
				Rural
				Total país	21,6	12,1	13,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de encuestas nacionales de hogares.

E. MIGRACIÓN INTERNA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Tres de cada cuatro latinoamericanos y caribeños residen en localidades urbanas, el índice más elevado del mundo en desarrollo. Los sistemas de ciudades de la región se estructuran, en la mayoría de los países, en torno de urbes de gran tamaño; de hecho, una de cada tres personas de la región reside en una ciudad con 1 millón o más de habitantes. Además, los sistemas de ciudades tienden a ser primados, pues en la mayoría de los países la ciudad principal representa más de un cuarto de la población nacional y más de un tercio de la población urbana.

La migración interna, por su parte, ha pro-
Lapendido a diversificarse y es un componente importante del cambio demográfico a escalas subnacionales. Ocurre principalmente entre ciudades y es selectiva, puesto que los migrantes tienden a ser mujeres y jóvenes. En general, la probabilidad de migrar aumenta con la educación. En los últimos decenios se observan tendencias desconcentradoras en el sistema urbano, merced a la emigración neta en varias metrópolis, un renovado dinamismo y atractivo de numerosas ciudades intermedias, y la reactivación de ámbitos especializados en producción primaria para la exportación o con ventajas comerciales (por ejemplo, zonas fronterizas). Cabe destacar, en todo caso, que según los datos de los censos de la ronda del 2000, la emigración neta desde las ciudades de mayor tamaño no se acentuó y en algunos casos los flujos desde ellas se dirigieron a localidades relativamente cercanas, reforzando los vínculos entre la gran ciudad y su área de influencia. Las políticas destinadas a influir en la distribución y movilidad de la población son necesarias para

promover el desarrollo regional, proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones de vida a través del territorio. En su diseño e implementación deben considerarse las señales y dinámicas de varios mercados relevantes (laboral, educacional, de suelo, inmobiliario) que desempeñan un papel crucial en las decisiones migratorias de las personas.

1. UNA REGIÓN URBANA CON UNA DEUDA HISTÓRICA CON EL ÁMBITO RURAL

América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, pues un 75% de su población reside en localidades urbanas (véase el cuadro II.10). Aunque la población urbana aumentó de 69 millones en 1950 a 391 millones en el año 2000, su ritmo de crecimiento cayó del 4% medio anual a principios de la década de 1970 al 2% en la actualidad, como resultado del avance de la transición demográfica y la reducción del efecto de la

migración desde el campo. Si bien el alto grado de urbanización de la región se basa en infraestructura e instituciones urbanas, menos consolidadas que en sus símiles de los países desarrollados, no es una ficción estadística, pues un 60% de su población reside en ciudades de 20.000 o más habitantes (Rodríguez, 2002), cifra más alta que la de Europa occidental. El ámbito rural, en cambio, está estancado en torno de

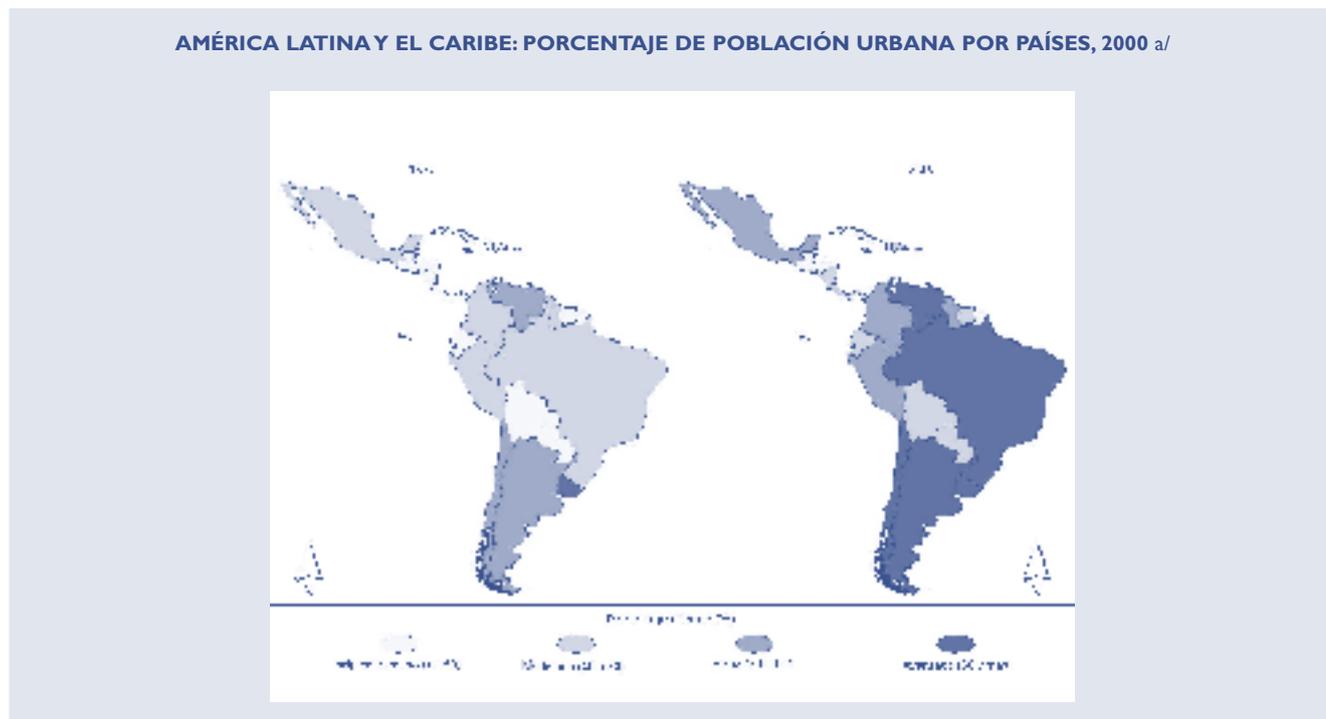
125 millones de personas desde hace un par de décadas. El mapa II.1 muestra la elevada urbanización de la región, pero también revela las distinciones entre países, ya que la proporción de población urbana en torno del año 2000 varía desde el 90% a cifras inferiores al 50%; por ello los países se han clasificado según el avance de la transición urbana, usando el porcentaje de urbanización (Rodríguez, 2002).

Cuadro II.10

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PORCENTAJES Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL, 1950-2000						
América Latina y el Caribe	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Porcentaje Urbano	41,9	49,3	57,4	64,9	71,1	75,5
Porcentaje Rural	58,1	50,7	42,6	35,1	28,9	24,5
	1950-1955	1960-1965	1970-1975	1980-1985	1990-1995	2000-2005
Tasa de crecimiento población urbana	4,34	4,32	3,75	3,07	2,33	1,95
Tasa de crecimiento población rural	1,34	1,09	0,55	0,19	0,11	-0,34

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estimaciones y proyecciones de población vigentes.

Mapa II.1



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la base de datos Distribución Espacial y Urbanización de la Población en América Latina y el Caribe (DEPUALC).

^{a/} Las denominaciones empleadas en este mapa y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

Los sistemas de ciudades de la región tienen dos características sobresalientes: estructuración en torno de ciudades de gran tamaño y, en asociación con esto, tendencia a ser altamente primados. La región tiene 7 ciudades con más de 5 millones de habitantes, donde reside el 15% de la población (véase el cuadro II.11) y 50 ciudades de 1 millón o más habitantes, en las que vive 1 de cada 3 latinoamericanos y caribeños (Naciones Unidas, 2002a). Por otra parte, en la mayoría de los países de la región la ciudad principal alberga a más de un cuarto de la población nacional, a más de un tercio de la pobla-

ción urbana y detenta un peso económico y político sobresaliente (Cuervo y González, 1997). No es extraño, entonces, que los índices de primacía sean mayoritariamente superiores a 2, un valor más bien inusual en el resto del mundo (véase el cuadro II.12 y Naciones Unidas, 2002a).¹¹ Como contrapartida, salvo zonas específicas de alta densidad rural —en Centroamérica, la meseta central mexicana, las grandes islas del Caribe y el altiplano andino—, la población del campo se dispersa en una miríada de poblados escasamente dotados de infraestructura y con históricos problemas de conectividad.

Cuadro II. 11

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: METRÓPOLIS (5 MILLONES O MÁS DE HABITANTES) EN EL AÑO 2000						
Indicador	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Número de ciudades	1	4	4	4	6	7
Población (en millones)	5,0	12,2	32,6	45,1	61,9	78,3
Porcentaje de la población total	3,0	5,6	11,4	12,5	14,0	15,1
Porcentaje de la población urbana	7,3	11,3	19,9	19,2	19,8	20,0

Fuente: Naciones Unidas, World Urbanization Prospects [en línea] <http://www.un.org/esa/population/unpop.htm>.

Cuadro II.12

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRIMACÍA, 1950-2000							
Etapas de la transición urbana	País	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Avanzada	Argentina	4,0	4,0	4,0	3,9	3,7	
	Chile	2,4	2,6	2,7	2,9	3	3,0
	Uruguay	-	8,3	7,3	7,0	6,4	
	Venezuela (Rep. Bolivariana de)	1,3	1,5	1,4	1,1	0,9	0,7
	Brasil	0,9	0,8	0,8	0,9	1	0,9
Plena	Colombia	0,7	0,8	0,9	0,9	1	
	México	3,0	2,8	2,7	2,7	2,3	2,1
	Perú	3,5	5,1	4,5	4,3	4,3	
Moderada	Ecuador	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
	Panamá	2,3	3,1	3,7	4	3,9	3,5
	Paraguay	6,1	7,9	9,2	7,1	4,8	4,5
	República Dominicana	2,0	2,8	2,8	2,9	2,6	2,4
Incipiente	Guatemala	7,0	8,0	9,3	9,7	9,4	8,5
	Bolivia	1,7	-	1,3	-	0,9	0,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la base de datos Distribución Espacial y Urbanización de la Población en América Latina y el Caribe (DEPUALC).

11 Cociente entre la población de la ciudad principal y la suma de la población de las tres que le siguen en tamaño.

2. MIGRACIÓN Y MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN DENTRO DE LOS PAÍSES

Estudios recientes (Rodríguez, 2004), basados en las rondas censales de 1990 y 2000, permiten trazar un panorama de la migración interna actual, que se caracteriza por:

- i) una intensidad moderada, con índices inferiores a los de los países desarrollados con alta movilidad, como los Estados Unidos;
- ii) predominio de los desplazamientos entre zonas urbanas;
- iii) persistente emigración neta del campo, que continúa siendo muy relevante para el ámbito rural, pues explica su estabilización demográfica y su envejecimiento más acentuado que el que cabría esperar a la luz del avance de su transición demográfica;
- iv) declinante inmigración neta de las zonas urbanas, que sin embargo sigue siendo el factor que explica la urbanización y en algunos países continúa constituyéndose en una fuente muy importante del crecimiento de la población urbana (véase el cuadro II.13);
- v) persistencia del desplazamiento forzado, producto de conflictos internos en varios países de la región;
- vi) continuación de la sangría migratoria de los aglomerados metropolitanos de mayor tamaño —aunque con variaciones temporales y especificidades nacionales (véase el cuadro II.14)—, cuyos migrantes se dirigen a ciudades más dinámicas o con mejor calidad de vida, algunas de ellas de su entorno;
- vii) persistencia de un gran atractivo migratorio de algunas capitales de países pequeños con sistemas urbanos altamente primados;
- viii) combinación de áreas “duras” de atracción y expulsión con áreas “blandas” que modifican su signo según coyunturas económicas y sociales;
- ix) aumento de la relevancia cuantitativa y cualitativa de la migración intrametropolitana, cuyos determinantes difieren de los relevantes para la migración clásica (que es entre regiones y con propósitos laborales);
- x) polarización de los traslados intrametropolitanos, ya que al histórico movimiento de pobres a la periferia se ha sumado el de familias acomodadas a zonas rurales próximas a la metrópolis y con servicios e infraestructura urbanos, desde las que viajan diariamente a la metrópolis a trabajar y estudiar (“rururbanización”); y
- xi) recuperación de zonas centrales de algunas ciudades, merced a programas explícitos de repoblamiento.

Cuadro II.13

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): ESTIMACIONES INDIRECTAS DEL PESO DE LA MIGRACIÓN NETA CAMPO-CIUDAD EN EL CRECIMIENTO URBANO, 1980-2000

(En porcentajes)

País	Importancia relativa de la migración rural urbana en el crecimiento urbano			
	1980-1990		1990-2000	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Bolivia	62,8	65,3	27,7	30,4
Brasil	37,0	42,8	34,7	35,9
Chile	8,3	11,9	19,7	19,8
Costa Rica	44,2	46,8	46,9	47,4
Ecuador	47,5	49,1	37,7	38,8
Guatemala	41,8	44,0	60,0	59,1
México	33,7	32,4	31,7	32,1
Panamá	36,4	41,3	53,8	54,4

Fuente: Jorge Rodríguez, “Migración interna en América Latina y el Caribe: estudio regional del período 1980-2000”, *serie Población y desarrollo*, N° 50 (LC/L.2059-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2004. Publicación de Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.3.

ESTIMACIONES DE LA CUANTÍA DE LA MIGRACIÓN HACIA, DESDE Y DENTRO DE AGLOMERADOS METROPOLITANOS Y ESCOLARIDAD MEDIA DE LOS INMIGRANTES, EMIGRANTES Y NO MIGRANTES
(Aglomerados metropolitanos y fechas seleccionadas)

Aglomerado metropolitano	Inmigrantes desde municipios fuera del área metropolitana	Emigrantes hacia municipios fuera del área metropolitana	Migrantes intra-metropolitanos	Migración neta	Escaridad (años de estudio promedio)		
					Inmigrantes	Emigrantes	No migrantes
México, D.F. (1995-2000)	426 062	490 274	1 408 570	-64 212	7,3	7,8	7,6
Rio de Janeiro (1995-2000)	304 999	322 620	313 257	-17 621	6,5	7,5	6,8
São Paulo (1995-2000)	830 141	1 013 200	584 638	-183 059	6,0	6,3	6,8
Santiago de Chile (1997-2002)	227 648	277 022	779 642	-49 374	10,2	9,3	9,0
Quito (1996-2001)	129 895	66 452	38 456	63 443	-	-	-
Managua (1990-1995)	43 082	13 197	2 578	29 885	5,2	5,6	5,8
Panamá (1995-2000)	107 154	21 105	88 087	86 049			
San José de Costa Rica (1995-2000)	42 866	58 147	78 302	-15 281	7,5	7,5	7,6

Fuente: Jorge Rodríguez, "Migración interna en América Latina y el Caribe: estudio regional del período 1980-2000", *serie Población y desarrollo*, N° 50 (LC/L.2059-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2004. Publicación de Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.3.

En lo que atañe a los migrantes, en estos estudios se muestra la existencia de selectividad según edad (véase el gráfico II.25) y educación (superior al promedio), persistencia -aunque en declinación- del histórico sesgo femenino de la migración interna, y niveles de desocupación más altos entre los migrantes recientes, pero niveles de ingreso de los migrantes equivalentes o superiores a los de los no migrantes (controlando variables claves como la edad, la educación y la responsabilidad familiar).

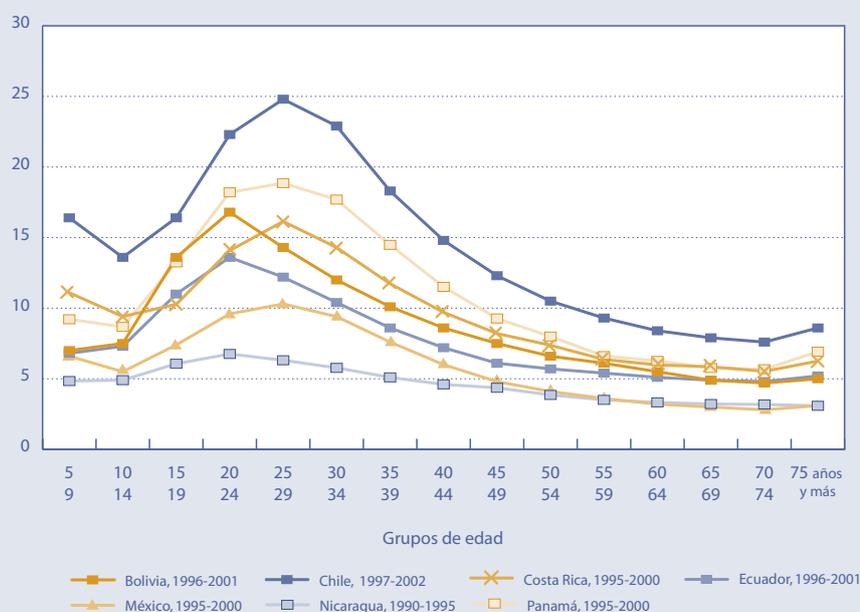
3. REDISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN Y MIGRACIÓN INTERNA: DETERMINANTES, EFECTOS Y POLÍTICAS

En la base del proceso de urbanización regional están la industrialización sustitutiva y la extensión y consolidación estatal del período 1930-1980, que promovieron la concentración de actividades, recursos, servicios y puestos de trabajos en ciudades.

Por su parte, el atraso del campo y la expansión de las explotaciones comerciales para la exportación se conjugaron para promover el éxodo rural. La acción de estas fuerzas ensanchó la brecha de condiciones y oportunidades de vida entre zonas urbanas y rurales, ampliamente favorable a las primeras (Montgomery y otros, 2004).

En la mayoría de los países, hasta el decenio de 1960 los flujos de migrantes tuvieron como destino mayoritario un elenco acotado de ciudades. Las razones de esta relativa falta de diversificación de los flujos radican en una concentración de los atractivos en dichas ciudades, las que, por diferentes factores —complejos y variables entre países—, lograron captar una fracción importante de las inversiones privadas y públicas. Esto facilitó que tuviesen desempeños sobresalientes en materia de empleo, infraestructura y oportunidades en general y fuesen, así, alternativas atractivas para los migrantes. Ya en el decenio de 1960, pero sobre todo en el de 1970, los flujos comenzaron a diversificarse. Ciudades

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): PROBABILIDAD DE HABER SIDO MIGRANTE ENTRE DIVISIONES ADMINISTRATIVAS MENORES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, POR GRUPOS DE EDAD, RONDA DE CENSOS DEL 2000
(En porcentajes)



Fuente: Jorge Rodríguez, "Migración interna en América Latina y el Caribe: estudio regional del período 1980-2000", *serie Población y desarrollo*, N° 50 (LC/L.2059-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2004. Publicación de Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.3.

intermedias articuladoras de espacios regionales, y otras con ventajas comparativas para servir como centro exportador o turístico, comenzaron a acaparar una fracción creciente de los migrantes, siendo ilustrativas al respecto las ciudades de la frontera norte de México. Otras ciudades intermedias que ganaron atractivo fueron las que sustituyeron o complementaron a las grandes ciudades en ciertas líneas de producción industrial y de ofrecimiento de servicios; con frecuencia estas ciudades eran cercanas a las grandes metrópolis, lo que a la postre tendió a extender el radio de influencia de estas últimas. En cualquier caso, hasta el decenio de 1970, las grandes ciudades siguieron siendo de inmigración neta, aunque en magnitudes cada vez menores, en parte debido a la mayor visibilidad de sus problemas y los signos de deseconomías crecientes. En esas décadas, en varios países se llevaron a cabo grandes programas de colonización, en virtud de los cuales la diversificación de los flujos

migratorios también incluyó ámbitos con escasa población. Tales programas contribuyeron a remodelar, aunque no necesariamente con la intensidad y sostenibilidad previstas, la distribución territorial de la población en países como Bolivia, Brasil, Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela (CELADE, 1984).

En el decenio de 1980, las ciudades de mayor tamaño experimentaron por primera vez en el siglo XX emigración neta, destacando los casos de México, D.F. y São Paulo (Rodríguez y Villa, 1996). Algunos especialistas atribuyeron esta inflexión a la apertura y liberalización económica —que favoreció a las actividades de exportación, principalmente primaria, en desmedro de las sustitutivas de importaciones que se concentraban en las ciudades más grandes— y a la reducción del empleo público, altamente concentrado en las ciudades de mayor tamaño (Montgomery y otros, 2004; Pinto da Cun-

ha, 2002; Rodríguez, 2002; Rodríguez y Villa, 1996; Daher, 1994). Sin embargo, los datos que proporcionan los censos de la ronda del 2000 sugieren que esa lectura fue algo apresurada. La profundización y generalización de la apertura y liberalización económica en ese decenio no se asociaron con una intensificación de la pérdida de atractivo de las ciudades más grandes. Por cierto, casi todas ellas experimentaron emigración neta, pero su magnitud fue más moderada que la observada en la década de 1980. Además, se han observado procesos de renovación urbana y recuperación económica en algunas de ellas, demostrando versatilidad para la competencia global y abriendo una interrogante respecto de su futuro demográfico. Por último, ha persistido la tendencia a que una fracción no menor de sus emigrantes se muden a ámbitos cercanos, unidos con la gran ciudad por medio de vías de comunicación y transporte que permiten traslados diarios, lo que contribuye a conformar enormes metrópolis extendidas (Rodríguez, 2002; Ingram, 1997; Rodríguez y Villa, 1996).

Las corrientes y decisiones migratorias, con la excepción de aquellas forzadas, responden a expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida. La evidencia sugiere que el traslado efectivamente ha beneficiado a muchos migrantes —como lo indican los mayores ingresos que en promedio estos tienen después de controlar otros factores—, pero que una buena parte de ellos experimentan un complejo proceso de inserción en el lugar de destino —como lo revelan los mayores índices de desocupación de los migrantes recientes— y algunos no logran mejoramiento alguno en relación con su situación previa (Rodríguez, 2004). Las disparidades socioeconómicas entre los diferentes territorios dentro de los países son la principal fuerza que promueve la migración a escala agregada; dado que estas disparidades no están atenuándose en la región (Cuervo, 2003; Silva, 2003; Aroca, Hewings y Paredes, 2001), cabe esperar que la migración se mantenga como un componente relevante de la dinámica demográfica a escala subnacional.

Existen visiones encontradas con respecto a las consecuencias de la migración para las zonas de origen y destino (Rodríguez, 2004; Greenwood, 1997). Algunos autores plantean que los traslados desde zonas aletargadas a zonas dinámicas (los desplazamientos más probables, en teoría) tienden a favorecer a todos los ámbitos. En cambio, otras perspectivas subrayan que la migración puede saturar las zonas de destino y erosionar el capital humano de las de origen, sobre todo si quienes migran son jóvenes relativamente calificados. La evidencia disponible no permite una conclusión precisa al respecto. Si bien algunos trabajos recientes muestran que la migración intensifica las disparidades de ingreso entre regiones, también se ha descrito que reduce ligeramente las diferencias de capital humano entre ellas (Paz y otros, 2004). Por otra parte, exámenes recientes de la migración intrametropolitana advierten que si bien esta ha implicado la recuperación de zonas históricamente pobres —algunas de ellas aún rurales, pero bien conectadas con la metrópolis—, su efecto neto es incrementar el nivel educativo de las zonas más acomodadas (Rodríguez, 2004).

En materia de intervención sobre la migración, existe un amplio consenso sobre el impacto de las fuerzas del mercado para asignar recursos territorialmente y, por esa vía, incentivar la localización y desplazamiento de población. Por ello, la consideración de las tendencias de los mercados relevantes (¿hacia dónde se dirigen las inversiones privadas?, ¿dónde hay demanda de mano de obra?, ¿dónde hay rentabilidades superiores?), así como el uso de mecanismos de mercado (precios en su amplia gama, incentivos monetarios y tributarios, crédito y transferencia tecnológica a productores) son ineludibles. Empero, las políticas y programas públicos destinados a influir sobre el patrón de asentamiento territorial de la población son necesarios, sobre todo para promover formas de localización compatibles con el medio ambiente e impulsar un aprovechamiento integral de las oportunidades productivas que ofrecen las geografías nacionales. Por principio, estas intervenciones no deben ser coactivas ni socavar el derecho a la libre

movilidad en el territorio nacional. Ciertamente, pueden hacer uso de regulaciones relativas al uso del espacio, en especial por razones ecológicas, pero el grueso de su acción debe concentrarse en incentivos que promuevan los desplazamientos funcionales a la visión estratégica vigente. Una tarea crucial y compleja es la de articular las diferentes intervenciones públicas que tienen efectos

territoriales —muchas de las cuales no persiguen objetivos de redistribución espacial de la población reconocidos— para evitar, al menos, que sus resultados vayan en una dirección contraria a la promovida por las políticas y programas que tienen objetivos explícitos en materia de localización de la población y migración.



Situación social de la juventud: tensiones y paradojas

INTRODUCCIÓN

La juventud adquiere su especificidad cuando la sociedad le otorga un tiempo prolongado de “moratoria de roles”, es decir, una suspensión temporal de obligaciones que favorece la preparación para enfrentar nuevas situaciones. En otras palabras, el joven no es niño ni adulto, y su principal función es prepararse para construir un hogar propio e insertarse en mercados de trabajo que exigen cada vez mayores conocimientos y destrezas. Esto significa que el tránsito de la infancia a la madurez implica un período en que se producen importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales: “se inicia con la capacidad del individuo para reproducir a la especie humana y termina cuando adquiere la capacidad para reproducir a la sociedad” (Brito, 1997, p. 29).

Según Bourdieu la juventud “no sería más que una palabra”: creación social para definir un período etario que debería cumplir, en nuestra época, con ciertas expectativas, pero que no siempre ha sido tratado como un actor social en sí mismo (Bourdieu, 1990). Lo cierto es que la juventud aparece como un concepto poco claro en la medida que engloba bajo un mismo rótulo a un conjunto social muy heterogéneo. La situación de los jóvenes urbanos y rurales es muy distinta, como también es diferente la situación de los jóvenes de grupos socioeconómicos carenciados respecto de los que viven en hogares de mayores ingresos, de los jóvenes de distintos subgrupos de edad, y los con poca y mucha educación formal, y de las mujeres jóvenes en relación con los hombres jóvenes.

Si en la perspectiva del capitalismo moderno la juventud aparece como un actor que se está preparando para incorporarse al sistema productivo, esa juventud ocupa hoy, al calor de la crisis del empleo y el cambio acelerado de las formas de vida, un lugar más problemático. En efecto, actualmente las perspectivas de integración social de los jóvenes son menos claras. Por una parte, el tránsito de la educación al empleo se vuelve más difuso en la medida en que los mercados laborales no garantizan ocupaciones estables o promisorias para una gran cantidad de jóvenes, con excepción de los más formados, reservando para el resto, sobre todo en América Latina, una profusa pero precaria gama de trabajos informales, con bajos ingresos y ninguna estabilidad. El paso de la dependencia a la autonomía material también se torna difuso, debido tanto a la mayor dificultad de los jóvenes para percibir ingresos (dada la restricción de entrada al empleo), como a la necesidad de permanecer más tiempo en la etapa formativa (y en el hogar del padre, la madre o de ambos) para optar a mejores ocupaciones. Finalmente, el proceso de “relevo valórico”, en que los jóvenes interiorizan las normas y criterios de los adultos, se hace muy confuso o conflictivo, porque el cambio acelerado de los valores y las formas de vida se traduce en el cuestionamiento o rechazo del tradicional rol “ejemplarizante” o disciplinario de los padres ante los jóvenes.

Por consiguiente, el proceso que debería movilizar a los jóvenes desde la fase formativa a la productiva plantea hoy muchas interrogantes. No es casual que la apatía política, la deserción escolar, la crisis normativa o las conductas de riesgo o conflictivas pasen a formar parte del lenguaje con que la sociedad tipifica y define a los jóvenes. Todo esto incide en que la juventud latinoamericana viva hoy, con mayor dramatismo que el resto de la población, una serie de tensiones que expresan sus dificultades de integración social y que se examinan en el presente capítulo.

A. LOS JÓVENES TIENEN MÁS EDUCACIÓN PERO MENOS EMPLEO

Una primera tensión surge del hecho de que la juventud tiene más educación, pero menos empleo. En efecto, los jóvenes de hoy cuentan con más años de escolaridad formal que las generaciones precedentes, pero al mismo tiempo duplican o triplican su índice de desempleo y perciben menores ingresos con iguales o mayores calificaciones educacionales por desempeñar los mismos empleos. En otras palabras, están más incorporados, respecto de sus mayores, en los procesos consagrados de adquisición de conocimientos y formación de capital humano, pero más excluidos de los espacios en que dicho capital puede realizarse, a saber, el mundo laboral como fuente de ingresos.

Durante la última década, los países de América Latina han avanzado en todos los niveles de la educación, si bien la situación educacional varía mucho entre ellos. En el caso de los jóvenes de 15 a 29 años, el egreso de primaria aumentó de 62,6% a 66,7% (véase el gráfico III.1). En el nivel secundario, a comienzos de la presente década hay una mejoría significativa con respecto a la anterior en el tramo de 20 a 24 años de edad, en que la tasa de egreso subió de 25,8% a 34,8%. En el segmento de 25 a 29 años, el incremento fue de 27,7% a 32,6% (véase el gráfico III.2). En cuanto a la cobertura de la educación terciaria, entre 1990 y 2002, el porcentaje de los jóvenes de 25 a 29 años

que completó el nivel se extendió de un 4,4% a un 6,5% (véase el gráfico III.3).¹

En la mitad de los países considerados, más del 80% de los jóvenes menores de 30 años han cursado estudios de primaria (la mediana es superior al 80%), lo que contrasta con la situación de los adultos cuya mediana en primaria fue de 70% en el grupo de 30 a 44 años, e inferior al 50% en los mayores de 45 años. Cabe preguntarse, además, qué implicancias tienen estas diferencias en las relaciones entre jóvenes y adultos, sobre todo si uno de los principios de autoridad es la transmisión de conocimientos de padres a hijos.

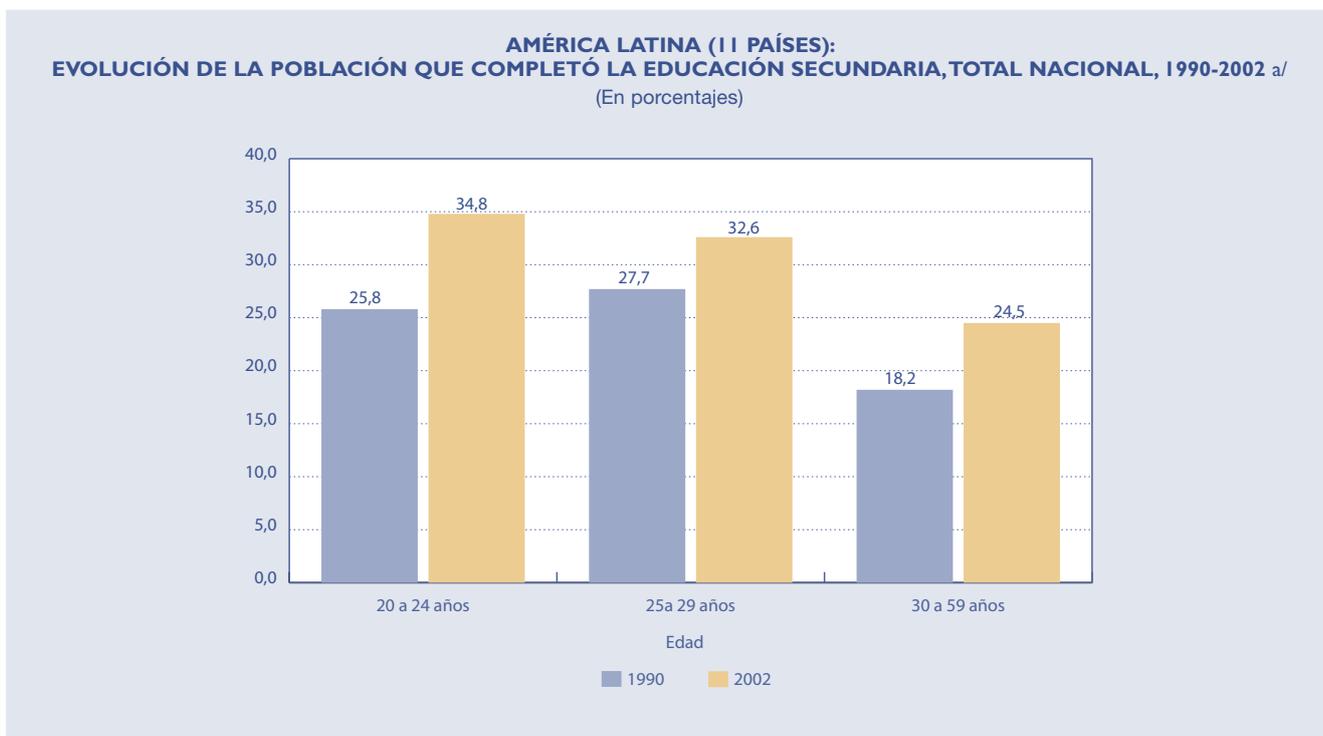
¹ Sin embargo, es necesario avanzar sustancialmente en el acceso a este nivel, dada su creciente importancia para el aumento de la productividad interna, competitividad externa y desarrollo de la sociedad del conocimiento.

Gráfico III.1

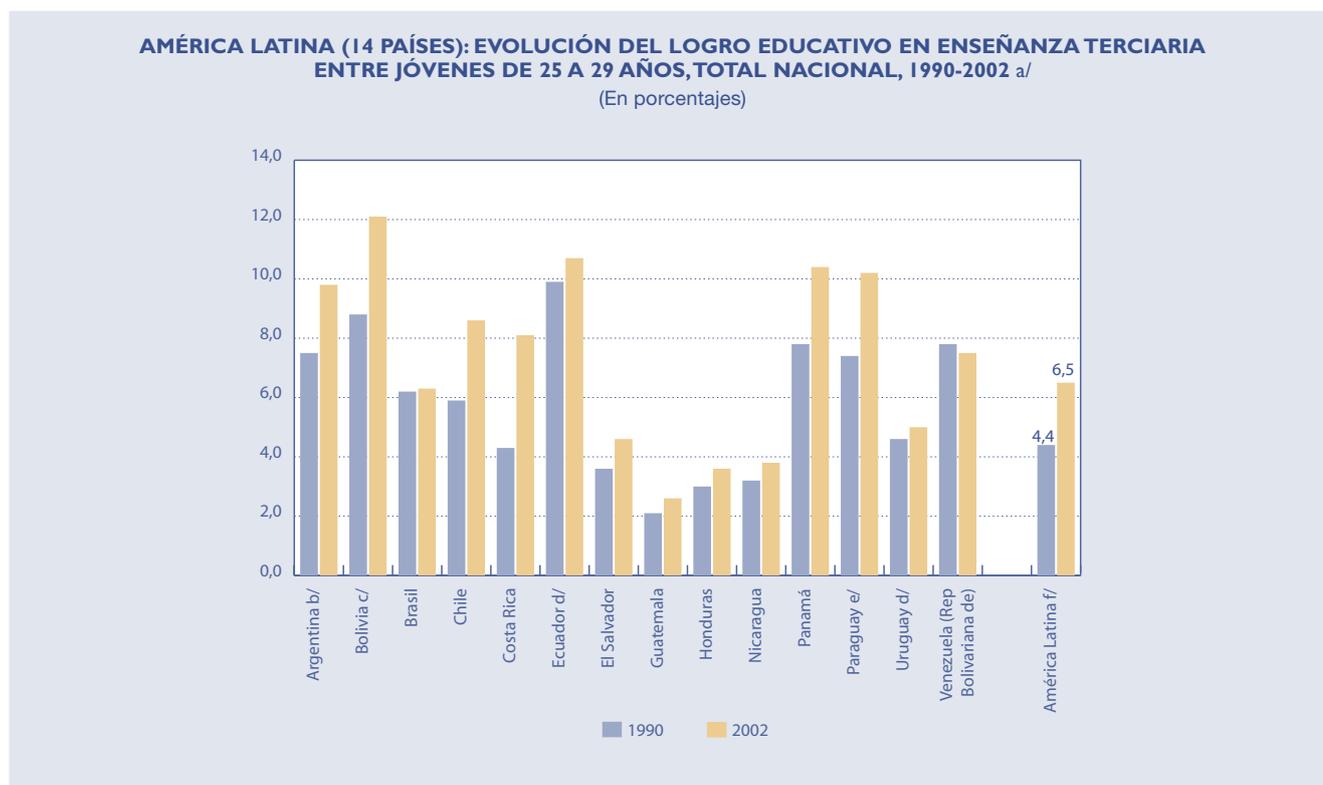


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ Promedio simple.

Gráfico III.2



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ Promedio simple.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Población que completó un ciclo educativo superior de cinco años, con excepción de Brasil, para los cuales se consideraron cuatro años.

b/ Gran Buenos Aires.

c/ Ocho ciudades principales y El Alto.

d/ Total urbano.

e/ Asunción y Departamento Central.

f/ Promedio simple de 11 países.

Si bien el incremento en materia de logros educativos ha conducido a igualarlos entre hombres y mujeres, no ha reducido las disparidades entre jóvenes por grupos de ingresos y localización geográfica. En efecto, pese a la importante expansión educacional registrada en la región, en los últimos 15 años se mantuvieron las acentuadas desigualdades entre las opciones de los jóvenes de diferentes estratos sociales de completar el ciclo secundario. Actualmente, solo alrededor del 20% de los jóvenes, cuyos padres no completaron la educación primaria, logran terminar dicho ciclo; en cambio, ese porcentaje supera el 60% entre los hijos de padres que cursaron al menos 10 años de estudio. Esto se traduce en un alto grado de rigidez de la estructura social, debido a que el escaso nivel de educación alcanzado por muchos jóvenes bloquea su principal canal de movilidad e inclusión social.

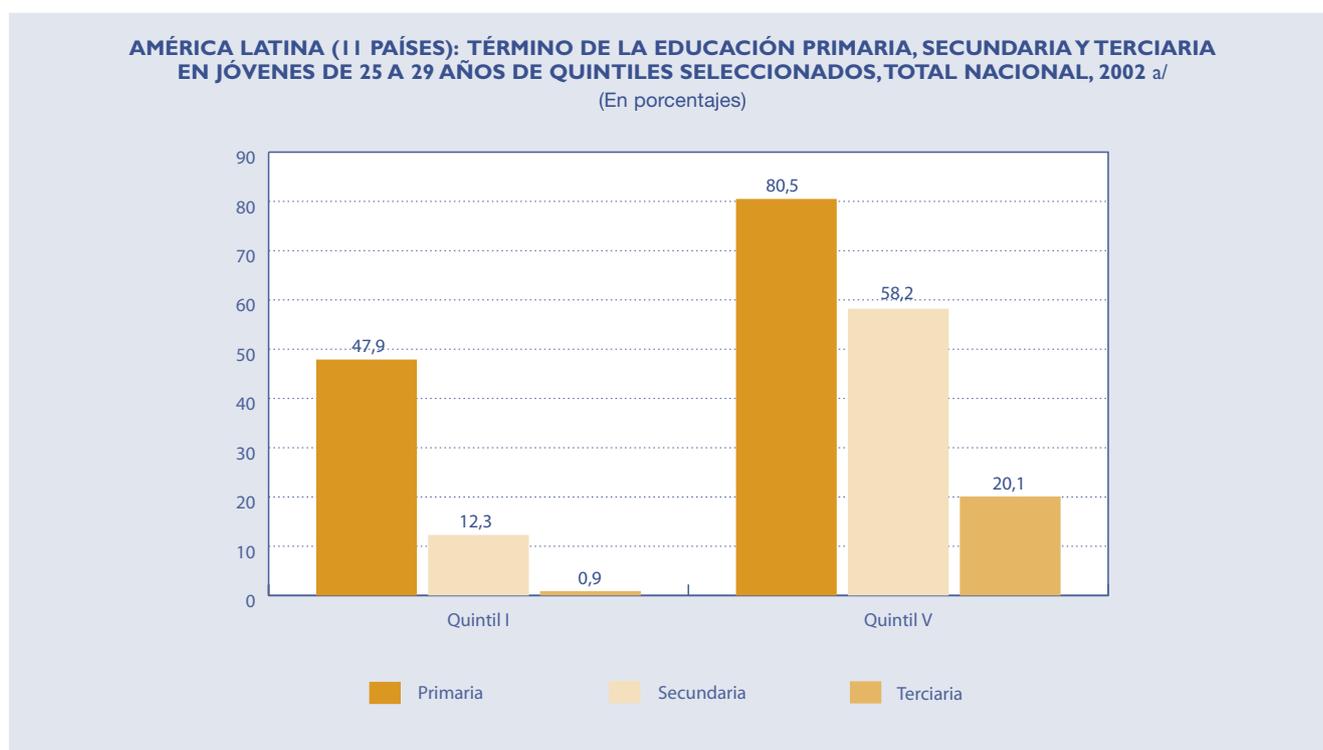
Lo anterior es ratificado por una estrecha relación entre el nivel de ingresos de los hogares y el logro educativo. En el gráfico III.4 se muestran los contrastes en materia de logros de educación primaria, secundaria y terciaria mediante la comparación entre el primero y el quinto quintil de ingreso per cápita de los hogares. En la mitad de los países de la región, más de una cuarta parte de los jóvenes de 25 a 29 años del primer quintil de ingresos no han completado este nivel de estudios. Esta situación es mucho más aguda en secundaria, dado que solo el 12,3% del estrato más pobre de este grupo etario de los países de América Latina alcanza a completar el ciclo.

La dispersión de estas cifras a nivel de países es importante. Mientras el 47,9% de los jóvenes de 25 a 29 años completaban la enseñanza básica en el año 2002, en algunos países de mejores logros generales,

los jóvenes más pobres rebasan la media de América Latina; en tanto que en todos los países los jóvenes de los hogares de altos ingresos superan dicha media (la riqueza es más homogénea que la pobreza en la región). Las excepciones son El Salvador y Guatemala, donde se observa que aun entre los jóvenes del quinto quintil hay escaso logro educacional (menos del 80%) (véase el gráfico III.5). En países como Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela, los jóvenes pobres se hallan por debajo de la media de logro educativo en enseñanza primaria de los jóvenes de América Latina.

En el caso de la educación secundaria, mientras la media de conclusión de dicho nivel en América Latina es de solo 32,6% en el caso de los jóvenes de 25 a 29 años, la diferenciación por niveles socioeconómicos es aún más marcada. En casi todos los países, con excepción de Chile y México, menos del 30% de los jóvenes del quintil más pobre completan la educación secundaria. Hay países donde incluso esta cifra no alcanza al 10%. Además, durante la década pasada estas diferencias por grupos socioeconómicos se mantuvieron muy rígidas en el caso de la educación primaria y solo registraron una leve mejoría en la secundaria.

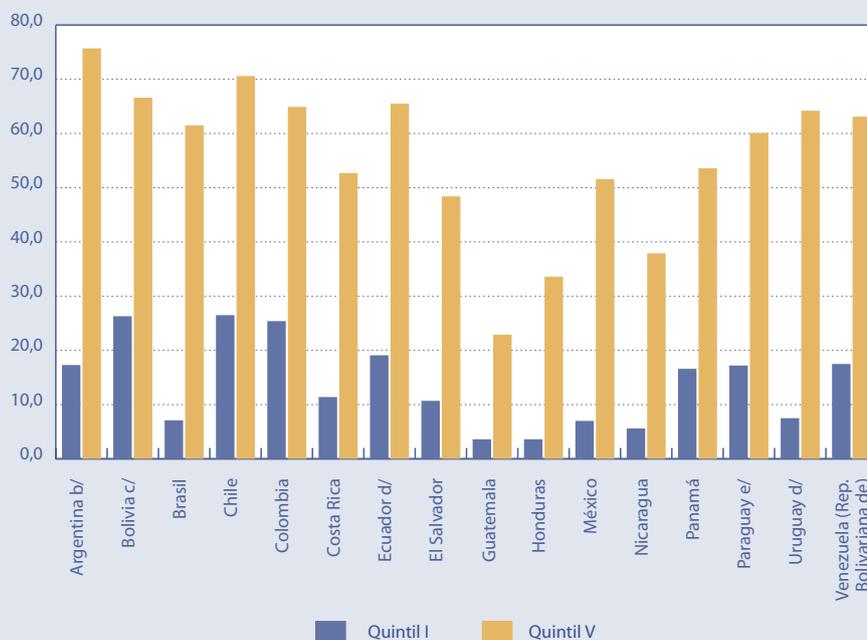
Gráfico III.4



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Promedio simple. Jóvenes pertenecientes al primer y quinto quintil de ingresos per cápita de los hogares.

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): TÉRMINO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN QUINTILES SELECCIONADOS, EN JÓVENES DE 25 A 29 AÑOS, TOTAL NACIONAL, 2002 a/
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Jóvenes pertenecientes al primer y quinto quintil de ingresos per cápita de los hogares.

b/ Gran Buenos Aires.

c/ Ocho ciudades principales y El Alto.

d/ Total urbano.

e/ Asunción y Departamento Central.

Más marcadas son las diferencias entre el campo y la ciudad. En educación primaria, se observa que el logro educativo (conclusión del ciclo primario) en las zonas urbanas es considerablemente más alto que en las rurales. Entre los grupos de jóvenes de 15 a 29 años, el logro en primaria en zonas urbanas llega al 86,2% y en zonas rurales solo asciende al 56,6%. Pese a ello, es claro el mejoramiento de esta situación en las últimas décadas, ya que en las zonas rurales solo el 34,9% de la población de más de 30 años ha terminado la enseñanza primaria.

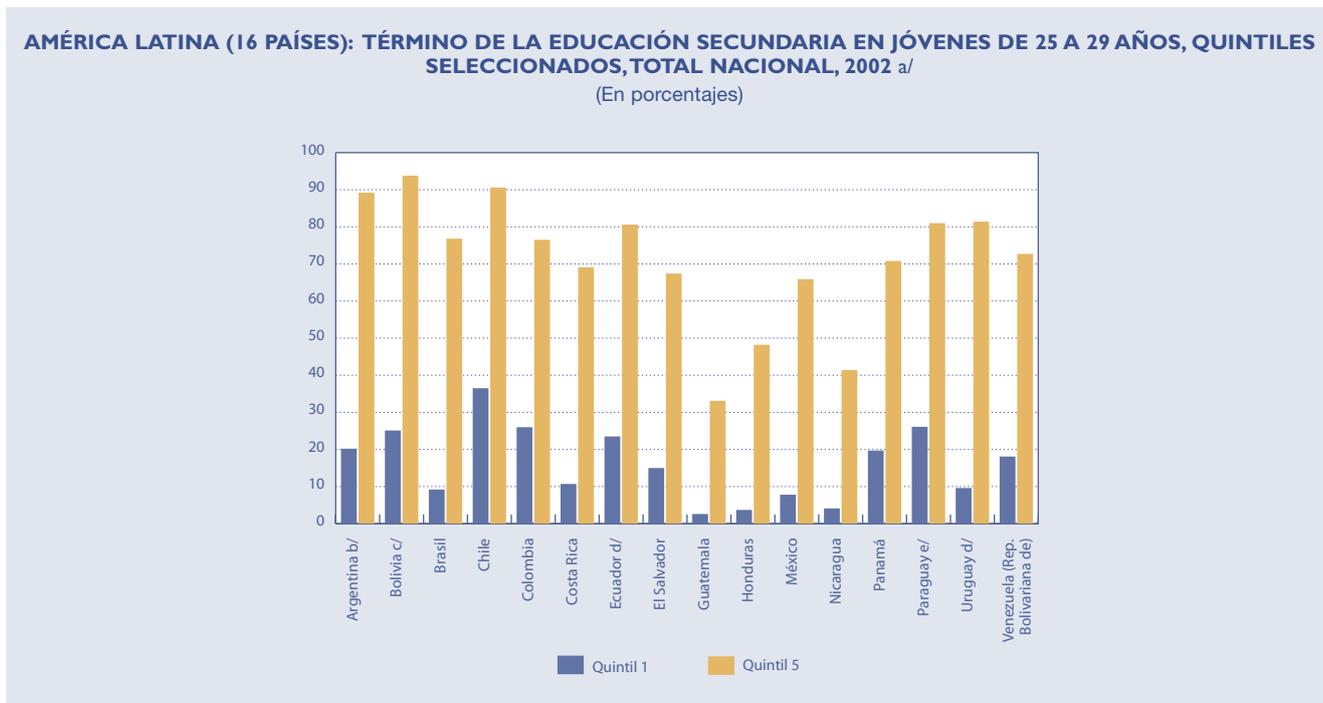
En secundaria persisten las diferencias, con el agravante de que el logro educativo es muy bajo en las zonas rurales, pues apenas supera el 11,8% en los jóvenes y el 8,5% en los mayores de 30 años.

Mientras esta brecha persista, es muy probable que los jóvenes rurales sigan depositando sus expectativas de mayor integración social en la migración a la ciudad.

En síntesis, entre 1990 y 2002 se observa un aumento general del nivel educativo de los jóvenes, que coexiste con la segmentación de logros educacionales por ingresos y localización geográfica.

Con respecto al empleo, en los análisis de la inserción laboral de los jóvenes generalmente se subraya el alto nivel de desempleo y subempleo, y la ostensible precariedad de quienes logran ocuparse, expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social, entre otras cosas (Rodríguez y Dabezies (comps.), 1991).

Gráfico III.6



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Jóvenes pertenecientes al primer y quinto quintil de ingresos per cápita de los hogares.

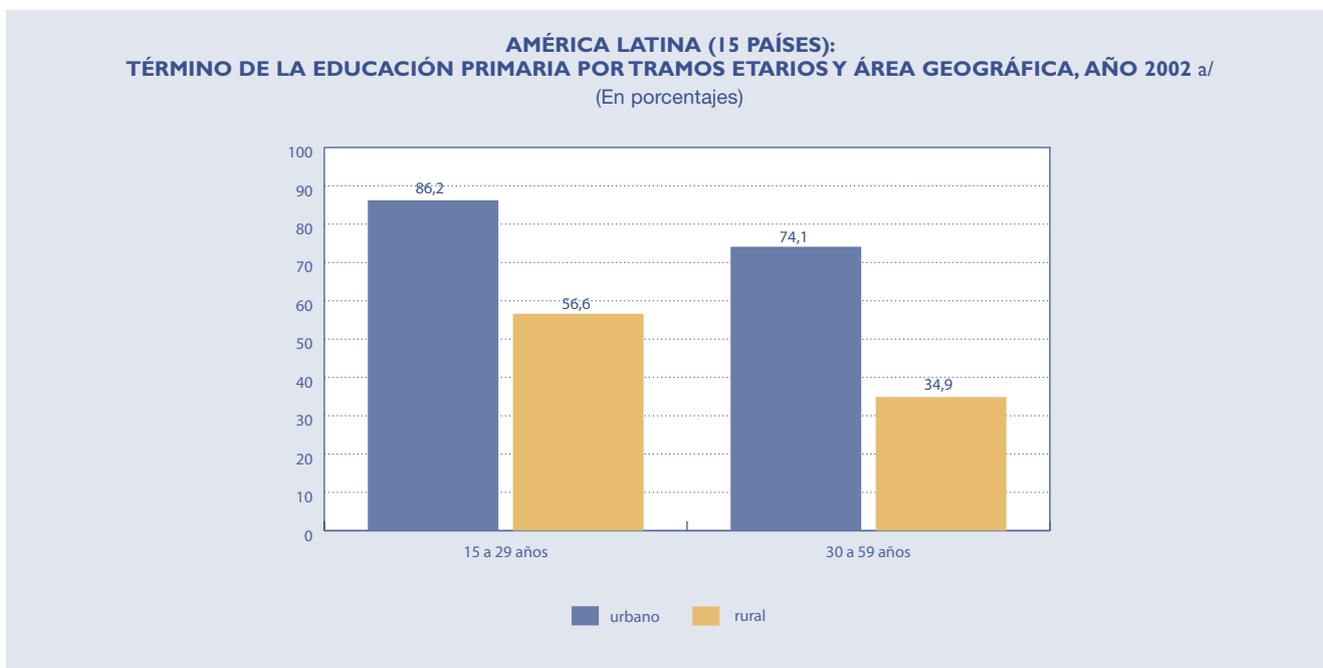
b/ Gran Buenos Aires.

c/ Ocho ciudades principales y El Alto.

d/ Total urbano.

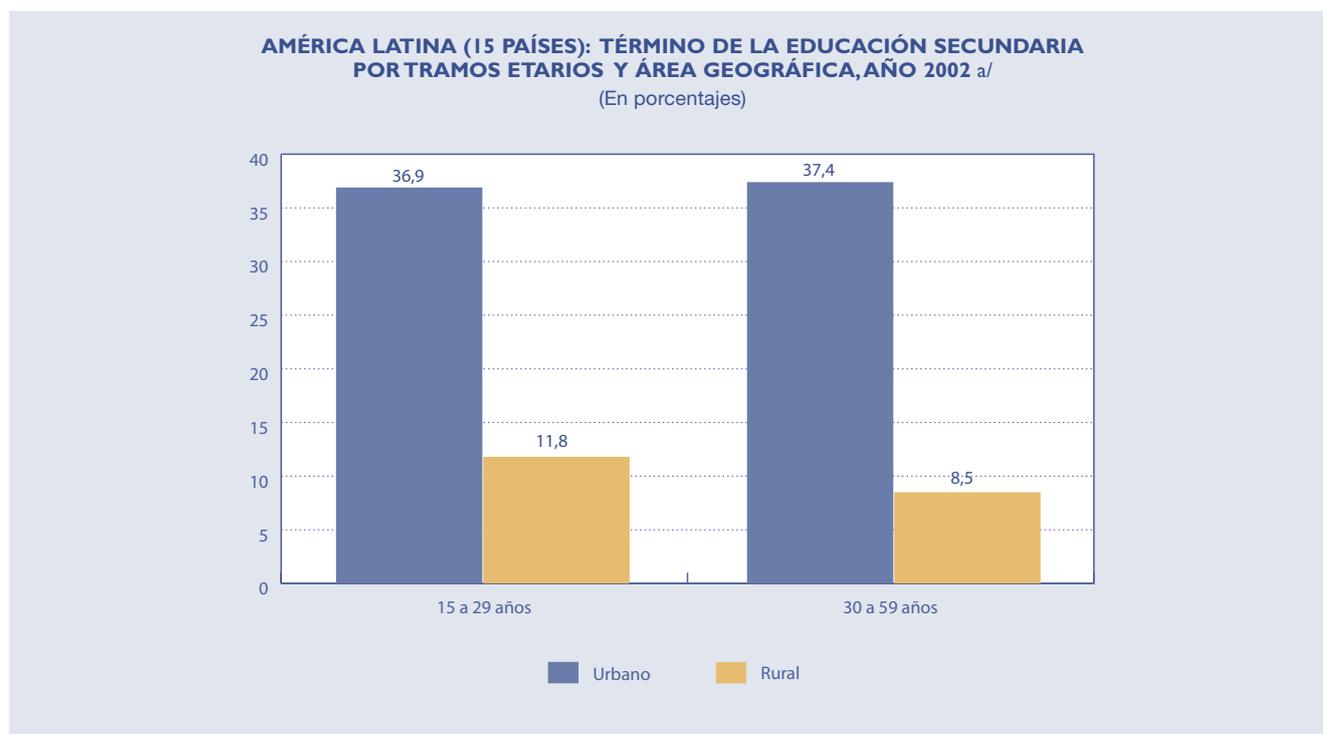
e/ Asunción y Departamento Central.

Gráfico III.7



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Promedio simple de 15 y 10 países, en las zonas urbanas y rurales, respectivamente.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Promedio simple de 15 y 10 países, en las zonas urbanas y rurales respectivamente.

Al mismo tiempo, en el estudio de los cambios recientes en la demanda laboral se ha hecho hincapié en que existiría un sesgo en favor de la mano de obra más calificada, como consecuencia del cambio tecnológico y la creciente competencia en los mercados, fomentada sobre todo por la apertura comercial. En este contexto, jugarían un papel importante las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), a las que las nuevas generaciones se adaptarían mejor debido a que crecen con ellas. Otro factor que favorecería a los jóvenes sería su mayor flexibilidad, más acorde con las nuevas pautas de la demanda laboral, mientras muchos adultos aspiran a empleos con estabilidad en virtud de expectativas desarrolladas en el pasado, y en atención a los altos costos de mantener una familia.

Por otra parte, la reestructuración sectorial tendería al menos parcialmente a favorecer el empleo juvenil, ya que en algunas de las actividades que generan un mayor número de empleos existe una elevada participación de jóvenes. Finalmente, tanto

en las actividades que requieren altos niveles de calificación como en aquellas de calificación intermedia hay una considerable presencia de mujeres, lo que facilitaría su mayor inserción laboral, sobre todo de las jóvenes. Dado lo anterior, cabría suponer que los cambios tecnológicos, organizacionales y sectoriales favorecerían a los jóvenes.

Sin embargo, en América Latina, entre inicios de los años noventa y comienzos de la década siguiente, el aumento de la tasa de ocupación se concentró en los adultos, mientras la tasa correspondiente a los jóvenes se mantuvo en el mismo nivel. Esto como resultado de la caída de la tasa de ocupación de los hombres jóvenes y de su incremento en el caso de las mujeres.

A su vez, en el período reciente, el peso de los sectores de baja productividad en la estructura ocupacional registró un aumento generalizado, lo que refleja la debilidad de la demanda laboral de los sectores más productivos en un contexto de bajo

crecimiento económico. Tampoco la situación relativa de los diferentes grupos etarios experimentó

mayores cambios, ya que todos ellos mostraron un deterioro similar (véase el cuadro III.1).

Cuadro III.1

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO, TOTAL NACIONAL, 1990-2002
(En promedios simples)

Grupo de edad	Sexo	Año		Variación porcentual
		1990	2002	1990-2002
15 a 19 años	Ambos sexos	63,3	69,1	9,2
	Hombre	59,7	67,3	12,8
	Mujer	68,6	72,0	5,1
20 a 24 años	Ambos sexos	46,8	49,4	5,5
	Hombre	45,3	48,5	6,9
	Mujer	48,6	50,5	4,0
25 a 29 años	Ambos sexos	42,7	45,1	5,7
	Hombre	41,2	43,7	5,9
	Mujer	44,1	46,9	6,2
30 a 64 años	Ambos sexos	48,9	51,7	5,7
	Hombre	45,2	48,2	6,7
	Mujer	54,9	56,6	3,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

Donde es más clara la situación desventajosa de los jóvenes es en los niveles de desempleo. Se sabe que la tasa de desempleo de los jóvenes es mayor que la de los adultos, principalmente debido a que entre aquellos se concentran las personas que buscan empleo por primera vez, a los problemas de acceso de estos buscadores y a la mayor rotación entre el empleo y el desempleo o a la mayor inactividad laboral que caracteriza a los jóvenes en comparación con los adultos (Weller, 2003). En América Latina, la tasa de desempleo de los jóvenes duplica ampliamente a la de los adultos (15,7% comparado con 6,7% a inicios de la presente década), y la brecha entre jóvenes y adultos es parecida para hombres y mujeres. En el período reciente el desempleo aumentó en todos los grupos, pero más entre los adultos, de manera que la brecha entre ellos y los jóvenes disminuyó levemente.² Entre los jóvenes, la tasa de desempleo de las

mujeres superó a la de los hombres en casi la mitad, sin que se observaran mayores cambios en el período reciente, como se verá en el próximo acápite.

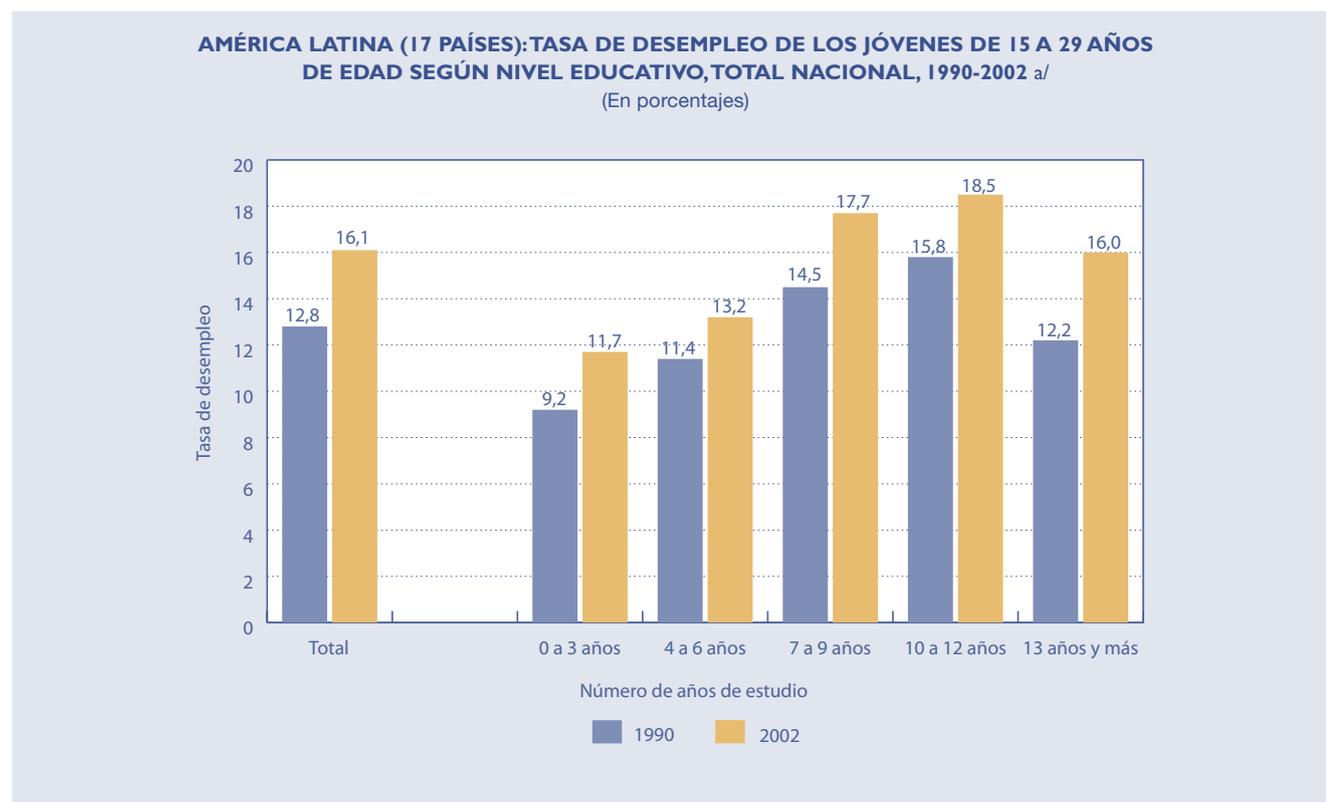
La curva típica del desempleo para diferentes grupos educativos es la “U invertida”, en que los grupos que presentan los niveles más bajos y los niveles más altos de educación tienen menores tasas de desempleo que aquellos con niveles intermedios de educación (véase el gráfico III.9). La explicación consistiría en que los jóvenes con menores niveles educativos generalmente no disponen de muchas alternativas laborales y, por lo tanto, tampoco abrigan mayores expectativas más allá de ciertas ocupaciones de baja productividad y bajos ingresos, mientras que sí tienen urgente necesidad de generar ingresos laborales a causa de su contexto familiar. En el otro extremo, la mejor educación facilita el acceso al em-

² Para el grupo de 17 países con datos comparables respecto del período reciente, el desempleo aumentó de 12,8% a 16,1% en los jóvenes, y de 4,8% a 7,0% en los adultos, con lo que la tasa de los jóvenes superaba a la de los adultos en 170% a inicios de los años noventa, y en 130% diez años después.

pleo, mientras que los jóvenes con niveles educativos intermedios —de 7 a 9 años y de 10 a 12 años de educación formal— suelen esperar que sus esfuerzos de estudio les permitan el acceso a mejores empleos.

Esto, en circunstancias de que el nivel educativo general ha aumentado, lo que intensifica la competencia por los puestos de trabajo disponibles.

Gráfico III.9



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Promedio simple de 15 y 10 países, en las zonas urbanas y rurales, respectivamente.

Por cierto, existen claras desigualdades entre jóvenes de distintos grupos. Hacia el año 2002, el desempleo en el quinto quintil era, como promedio regional, del 8,7%, y entre los jóvenes del primer quintil subía a 28,1% (véase el gráfico III.10). De manera que si, por una parte, salta a la vista que los jóvenes tienen más educación pero menos empleo que los adultos, también es evidente que entre ellos se produce una fuerte segmentación en la relación entre ingresos familiares y opciones laborales, en claro detrimento de los jóvenes de menores ingresos. Con ello se refuerza, respecto de los jóvenes de bajos ingresos, la idea de que están condenados a reproducir la pobreza de una generación a la siguiente.

Como era de esperar, hay una clara correlación positiva entre el peso de los sectores de baja productividad en el empleo juvenil y el nivel de ingresos del hogar. Esta correlación se reforzó en el período reciente, ya que el quintil más alto fue el único donde la proporción de los sectores de baja productividad cayó entre los jóvenes, con lo que la brecha entre el primero y el último quintil se amplió a 32 puntos porcentuales. Aparentemente, fueron los jóvenes de los hogares más acomodados quienes se beneficiaron de los procesos de modernización de parte de la estructura productiva y de empleo ocurridos en América Latina durante los años noventa (véase el gráfico III.11).

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO ENTRE LOS JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD SEGÚN QUINTILES SELECCIONADOS, TOTAL NACIONAL, 1990-2002 a/ b/
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a/ Promedio simple.

b/ Jóvenes pertenecientes al primer y quinto quintil de ingresos per cápita de los hogares.

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): PORCENTAJE DE JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD EN EMPLEOS DE BAJA PRODUCTIVIDAD, SEGÚN QUINTILES SELECCIONADOS, 1990-2002 a/ b/
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a/ Promedio simple.

b/ Jóvenes pertenecientes al primer y quinto quintil de ingresos per cápita de los hogares.

Finalmente, y en contrapartida con lo anterior, la brecha salarial entre jóvenes y adultos ha tendido a crecer con el nivel educacional. Esto se debe en parte a que la experiencia, considerada como el segundo elemento importante de la definición de los salarios relativos, ocupa un papel más relevante en el caso de la mano de obra calificada, que ofrece mayor espacio para el desarrollo de habilidades adicionales que las ocupaciones más sencillas. En este contexto, sorprende que en el período reciente las brechas salariales entre jóvenes y adultos tendieran a reducirse en el caso de los niveles educativos bajo y medio, mientras que se ensancharon en el nivel educativo más alto, como se puede observar tanto en el caso de los hombres como de las mujeres jóvenes. Esta constatación llama la atención, porque

contradice la hipótesis ampliamente compartida de que los profundos cambios tecnológicos recientes han dado ventajas competitivas a muchos jóvenes que tienen habilidades en estos nuevos campos, las que son más difíciles de adquirir para los adultos formados en el contexto de otros paradigmas tecnológicos, hoy en día parcialmente obsoletos.

En síntesis, si bien existe dentro de la población joven una alta heterogeneidad en la relación educación-empleo por sexo, nivel de ingresos del hogar y localización geográfica, también se da, en términos agregados, la paradoja entre mayor nivel educacional y menor acceso a empleo que los adultos. Esto se observa tanto respecto del nivel de desempleo como de la retribución salarial.

B. LAS MUJERES JÓVENES TIENEN MÁS EDUCACIÓN QUE LOS HOMBRES JÓVENES, PERO MENOS ACCESO AL EMPLEO Y EN PEORES CONDICIONES

Una segunda paradoja es que si bien las mujeres jóvenes han alcanzado mayores logros educativos que sus pares hombres en prácticamente todos los niveles (primaria, secundaria, terciaria) y aumentado su participación en el mercado de trabajo, tienen mayores dificultades para encontrar empleos. Además, sus retribuciones salariales son menores respecto de los hombres jóvenes, especialmente en lo que atañe a su experiencia laboral. A ello se agrega la persistencia de los roles familiares femeninos y, por ende, la asignación de las actividades de reproducción doméstica, lo que representa una asincronía en relación con sus actuales capacidades productivas, dificulta su ejercicio y promueve inserciones laborales más precarias.

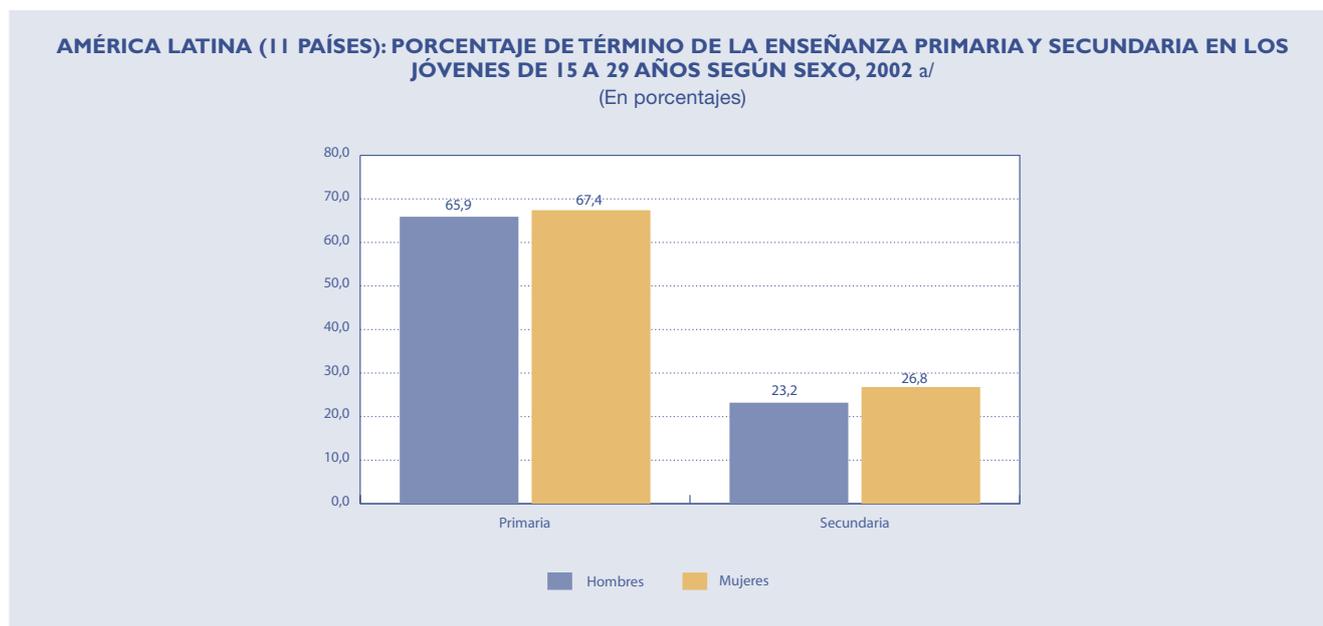
Salvo en poblaciones específicas en zonas rurales, la tendencia es que las mujeres superen a los hombres en logros educativos por nivel, tanto primario como secundario (véase el gráfico III.12). En el caso de la educación terciaria, aunque varía la relación por sexo, se observa una tendencia ascendente de las mujeres, que hace que estas superen los logros de los hombres en muchos países latinoamericanos (véase el gráfico III.13).

Sin embargo, en el ámbito del empleo no se produce la misma correlación. Por una parte, y gracias al persistente incremento de la tasa de participación femenina juvenil en el mercado de trabajo, cabe reconocer que durante la década pasada aumentó cla-

ramente la tasa de ocupación femenina en relación con su contraparte masculina en casi todos los niveles de educación de la población económicamente activa juvenil.³ Con excepción de aquellos niveles con 13 años y más de educación formal, donde se mantuvieron invariables tanto la tasa de ocupación masculina como femenina (en torno al 60,2% y 51,5% respectivamente entre 1990 y 2002), en los niveles educativos inferiores a 13 años la tasa femenina tendió a aumentar y la masculina disminuyó ostensiblemente (véase el cuadro III.2). Esto deja ver que la dinámica se mantiene rígida en el caso de las mujeres con mayor educación en lo relativo a sus opciones de ocuparse productivamente.

3 Un análisis más exhaustivo de este tema puede encontrarse en CEPAL/OIJ (2004).

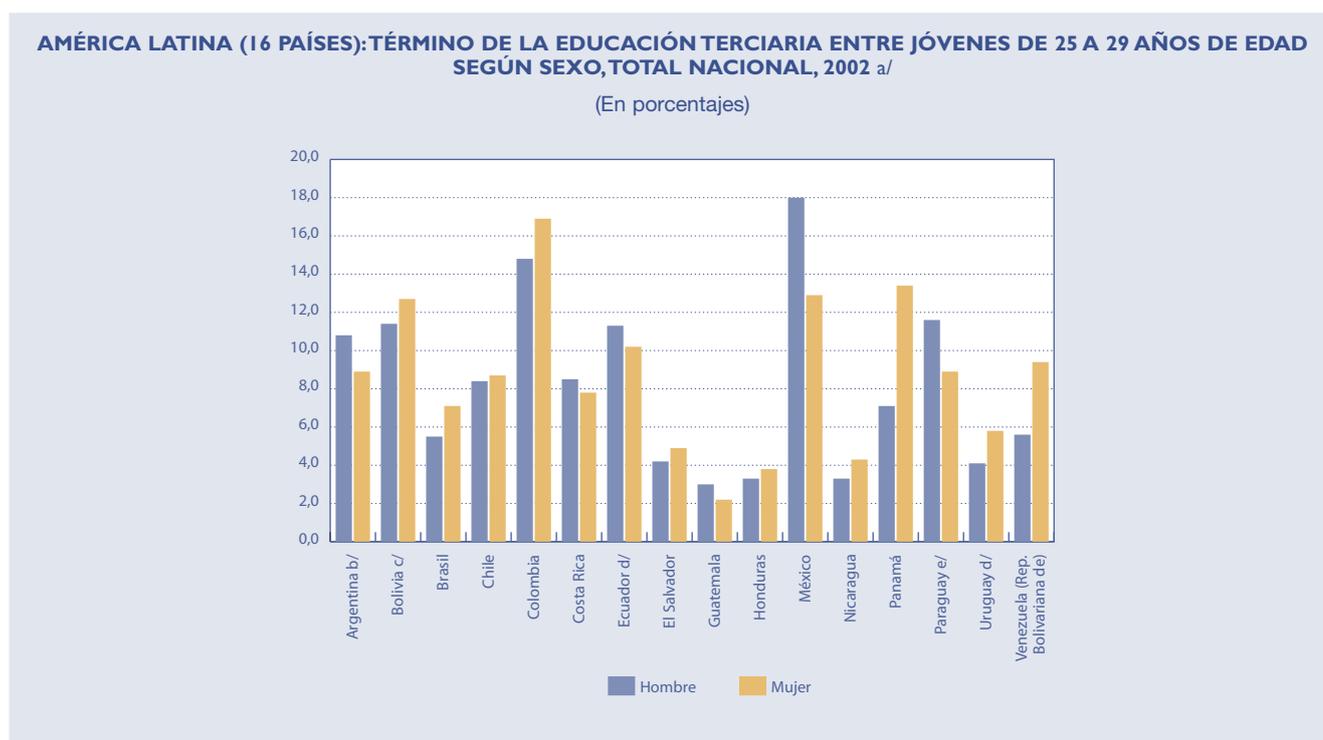
Gráfico III.12



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Promedio simple.

Gráfico III.13



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Población que completó un ciclo educativo superior de cinco años, con excepción de Brasil, para los cuales se consideraron cuatro años.

b/ Gran Buenos Aires.

c/ Ocho ciudades principales y El Alto.

d/ Total urbano.

e/ Asunción y Departamento Central.

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL Y SEXO, TOTAL NACIONAL, 1990-2002 a/
(En porcentajes y tasas de variación)

Número de años de estudio	Año						Variación porcentual		
	1990			2002			1990-2002		
	Ambos sexos	Hombre	Mujer	Ambos sexos	Hombre	Mujer	Ambos sexos	Hombre	Mujer
0 a 3 años	52,6	76,5	29,4	54,4	76,2	30,5	3,5	-0,3	3,5
4 a 6 años	55,9	77,2	34,4	56,8	76,8	35,1	1,6	-0,6	1,9
7 a 9 años	41,5	56,4	27,1	42,5	55,8	28,5	2,5	-0,9	5,2
10 a 12 años	48,2	59,9	38,2	47,5	57,8	38,4	-1,5	-3,4	0,5
13 y más años	55,6	60,2	51,6	55,4	60,2	51,5	-0,3	0,1	-0,3
Total	49,5	66,6	33,5	50,4	64,7	36,4	1,8	-2,9	8,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

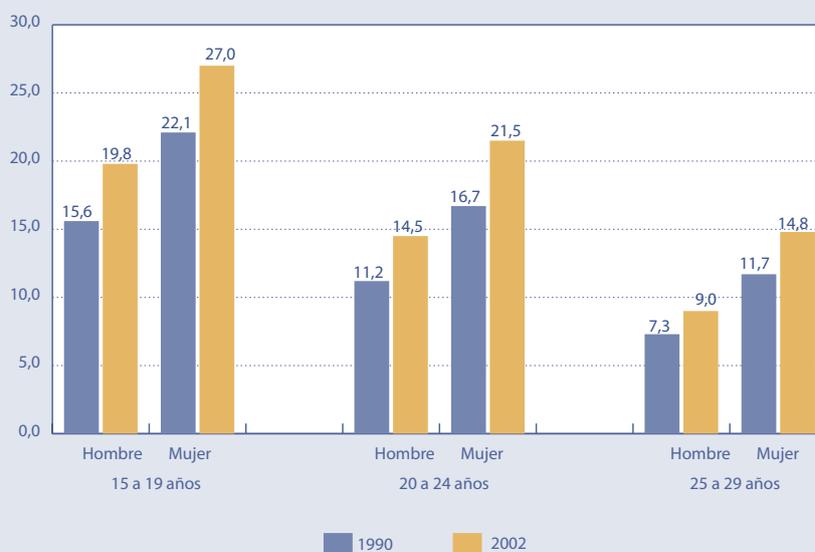
a/ Promedio simple.

Empero, junto con el aumento de la tasa de ocupación de las mujeres, se ha registrado un importante incremento de la desocupación juvenil de estas, y el desempleo femenino rebasa al masculino tanto entre jóvenes como en adultos. Esto contrasta con lo sucedido respecto del aumento general del desempleo, que al afectar mayormente a la población adul-

ta permitió reducir las brechas de desempleo entre esta y la población juvenil. Pese a ello, en el caso de las mujeres jóvenes, la tasa de desocupación se elevó a mayor velocidad que entre los hombres jóvenes, acrecentando aún más la brecha de desocupación, como se aprecia en el gráfico III.14.

Gráfico III.14

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, TOTAL NACIONAL, 1990-2002 a/
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), procesamiento especial de las bases de microdatos censales.

a/ Promedio simple.

Por otra parte, junto con la existencia de una marcada brecha entre los ingresos de los jóvenes y de los adultos, en el período reciente los ingresos de las jóvenes con respecto a las mujeres adultas cayeron pronunciadamente (en oposición a lo ocurrido en el caso de los hombres y en el total de ambos sexos). Esto puede deberse al importante aumento de la inserción laboral de las mujeres jóvenes, vale decir, a una depreciación relativa del costo de la mano de obra juvenil femenina por un brusco aumento de su oferta; o bien, puesto que la inserción laboral de las mujeres adultas creció aún más, a un mayor premio a la experiencia laboral de estas últimas, a su mayor continuidad en los mercados laborales o a la reducción de la discriminación salarial por sexo.

Existen importantes brechas de ingresos entre hombres y mujeres jóvenes, tanto en su conjunto como respecto de grupos educativos específicos. Esta brecha se ensancha a medida que aumenta la edad, ya que, en general, en el año 2002, el ingreso de las mujeres alcanza al 87% del ingreso promedio en el grupo de 15 a 19 años, al 81% en el grupo de 20 a 24 años y al 76% en el grupo de 25 a 29 años. Por lo tanto, se observa nuevamente cómo la mayor experiencia, en el caso de las mujeres, no se premia en la misma magnitud que en el caso de los hombres.

Una observación interesante es que, mientras la literatura (por ejemplo, CEPAL, 2001) muestra que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en general es mayor en los niveles educativos altos que en los bajos e intermedios, no ocurre lo mismo en el caso de los jóvenes. En efecto, la brecha de ingresos para las jóvenes con más alto nivel de educación con respecto a los otros grupos educativos, es la más baja en los tres subgrupos etarios juveniles. Esto podría significar que los ingresos relativos de este grupo de mujeres sufren el mayor retroceso posterior, cuando los hombres de alto nivel educativo perciben elevados premios por su experiencia, mientras que los premios a la experiencia de las mujeres, debido a la interrupción de su carrera (maternidad) y la discriminación salarial, crecerían en menor magnitud.

Se puede plantear también, alternativa o complementariamente, la hipótesis de que existe una tendencia de menor discriminación respecto de las mujeres jóvenes más educadas, quienes crecientemente lograrían defender sus derechos a un pago igual al de los hombres de similar capacidad. Esta última hipótesis se vería confirmada por el hecho de que las jóvenes de mejor nivel educativo, de 20 a 29 años, pudieron reducir la brecha de ingreso en relación con sus pares masculinos, mientras la pauta predominante entre los otros grupos educativos fue, por el contrario, una ampliación de las brechas, lo que indicaría que no se da ninguna tendencia generalizada de menor discriminación.

La información disponible para América Latina en 2002, en relación con las actividades económicas de los jóvenes y su repercusión en el ámbito del hogar, señala que la mayor diferencia por sexo entre los jóvenes se refiere a los quehaceres domésticos. Alrededor de un cuarto de las jóvenes de 15 a 29 años se dedican a quehaceres domésticos (25,6%), en tanto que en los hombres esa proporción no llega al 2%. Así, un grupo importante de mujeres jóvenes realizan trabajo doméstico, esencial para el funcionamiento de sus hogares, sean propios o de sus familias de origen. Ese trabajo –efectuado dentro de la familia– limita las posibilidades laborales de las jóvenes, ya que en comparación con los jóvenes, una proporción menor de mujeres del mismo grupo etario trabaja y estudia o solo trabaja.

Asimismo, hay que destacar que en un período muy breve, de 1999 a 2002, el porcentaje de mujeres jóvenes dedicadas exclusivamente a quehaceres domésticos bajó considerablemente (véase el cuadro III.3). En síntesis, si por una parte hay mayor inclusión laboral y educacional de las mujeres, por otra, se mantiene cierta rigidez en la distribución del trabajo doméstico. Esto sugiere una asincronía, en que el rol de la mujer cambia más rápido respecto de su acceso a conocimientos y capital humano que respecto de sus roles familiares y productivos.

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): ACTIVIDAD DEL TOTAL DE JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS Y DE LOS JÓVENES JEFES DE HOGAR, SEGÚN SEXO, TOTAL NACIONAL, 1999-2002 a/
(En porcentajes)

		Actividad					Total
		Trabaja y estudia	Solo trabaja	Solo estudia	No estudia ni trabaja	Quehaceres domésticos	
Total	1999	40,2	7,7	22,8	11,7	17,6	100
	2002	40,5	9,3	23,2	13,2	13,8	100
Hombres	1999	53,8	9,2	21,6	12,1	3,3	100
	2002	52,7	10,9	22,2	12,3	1,9	100
Mujeres	1999	27,0	6,3	24,1	11,3	31,4	100
	2002	28,3	7,8	24,3	14,1	25,6	100
Total jefes	1999	78,4	5,7	3,7	5,3	6,9	100
	2002	79,7	6,6	3,6	6,6	3,5	100
Jefes hombres	1999	84,4	5,1	2,5	4,5	3,6	100
	2002	85,9	5,9	2,2	5,6	0,3	100
Jefas	1999	51,2	8,3	9,0	9,1	22,5	100
	2002	53,5	9,4	9,3	10,9	16,9	100

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogar de los respectivos países.

a/ Promedio simple.

C. LOS JÓVENES TIENEN MEJOR SALUD QUE EL RESTO DE LOS GRUPOS ETARIOS, AUNQUE ESTÁN MENOS ATENDIDOS EN SU MORBIMORTALIDAD ESPECÍFICA

Durante los últimos 50 años, la mortalidad juvenil ha descendido sensiblemente en concordancia con el avance de la ciencia médica y la ampliación de los servicios básicos y sanitarios, y actualmente en la región se sitúa en 134 por cada 100.000 habitantes. Hoy en día las causas externas son el primer motivo de muerte juvenil, destacándose en particular los homicidios, que afectan principalmente a los varones. Sin embargo, como este tipo de causas no corresponden a una morfología reconocida como problema de salud, no son consideradas en el ámbito de la política preventiva de salud hacia la juventud, de manera que los jóvenes no encuentran una respuesta institucional en relación con sus riesgos específicos.

Es sabido que en el ciclo de la juventud son muy bajas las probabilidades de enfermar gravemente o morir por causas endógenas. Actualmente, la tasa de mortalidad para los jóvenes latinoamericanos de 15 a 24 años de edad, calculada en 134 por cada 100.000, representa en promedio poco más de la mitad de la del grupo de 25 a 44 años de edad (véase el cuadro III.4). Además, la mortalidad entre los jóvenes de la región ha descendido notablemente en los últimos 50 años, en concomitancia con la baja generalizada de la mortalidad. A ello contribuyen el avance de la ciencia médica, la ampliación de la cobertura de servicios básicos y sanitarios, y el incremento de la capacidad individual para prevenir y enfrentar las enfermedades (CEPAL, 2000c).

Las cifras de evolución de la probabilidad de morir de la población entre 10 y 29 años de edad su-

gieren una situación de relativa seguridad vital durante la juventud en América Latina. Las bajas tasas de mortalidad juvenil tienen un sustrato fisiológico poderoso, pues en aquella etapa es poco probable desarrollar patologías endógenas graves y el organismo está apto para responder a agentes microbianos exógenos. Esto quiere decir que prácticamente toda la mortalidad que se produce es evitable.

Por consiguiente, la proporción de jóvenes que mueren por causas externas es mucho mayor, y en algunos países la violencia eleva sustancialmente la mortalidad juvenil. En Colombia, la proporción de defunciones de jóvenes de ambos sexos es muy cercana a la de los adultos de 25 a 44 años, mientras en el resto de los países la brecha de mortalidad entre jóvenes y este grupo de adultos es mayor; esto se explica por la alta mortalidad de los jóvenes varones debido a la violencia y el conflicto armado que afec-

ta a amplias zonas del país. También en Brasil, El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela el registro de mortalidad juvenil sobrepasa los 150 por

cada 100.000 habitantes, en buena medida debido a la influencia de causas externas de muerte.

Cuadro III.4

AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): TASAS GLOBALES DE MORTALIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, ALREDEDOR DEL 2000

(Tasas estimadas por cada 100.000 habitantes)

País	Población juvenil de 15 a 24 años			Población adulta de 25 a 44 años			Población adulta de 25 años y más		
	Ambos sexos	Femenino	Masculino	Ambos sexos	Femenino	Masculino	Ambos sexos	Femenino	Masculino
Argentina (1997)	73	48	97	169	124	216	1 320	1 163	1 494
Brasil (1998)	153	76	230	321	188	458	1 080	889	1 284
Chile (1999)	74	36	111	156	93	218	935	858	1 018
Colombia (1998)	212	83	338	285	146	433	908	776	1 051
Costa Rica (2001)	66	34	97	128	78	176	691	612	771
Ecuador (2000)	119	97	141	239	181	298	851	757	948
El Salvador (1999)	164	122	206	348	250	458	1 047	914	1 198
México (2000)	101	53	149	210	120	306	793	674	923
Nicaragua (2000)	148	100	197	283	203	367	788	701	883
Panamá (2000)	87	53	119	155	114	196	815	704	928
Perú (2000)	112	78	145	228	178	280	903	811	1 002
República Dominicana (1998)	104	82	125	210	173	245	787	697	874
Uruguay (2000)	85	44	124	154	107	202	1 464	1 284	1 670
Venezuela (Rep. Bolivariana de) (2000)	171	59	280	230	120	339	748	612	887
América Latina y el Caribe a/	134	68	198	259	155	365	977	830	1 135

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), "Estadísticas de Salud de las Américas. Edición 2003" [en línea].

a/ Aunque la OPS tiene información sobre más países de la región, se consideraron solo 14 de ellos cuya población en el año 2003 superaba los 500.000 habitantes.

Las causas externas constituyen sin lugar a dudas la primera causa de muerte, por importancia numérica y proyectiva, entre los jóvenes de ambos sexos en la región, aunque con peso relativo para los varones, ya que de 100 fallecimientos masculinos, 77 son atribuibles a causas violentas. En tanto, entre las mujeres, 38 de cada 100 defunciones responden a estas causas violentas, y 62 a causas mórbidas, si bien en la región no se detecta un perfil único en causas prevalentes de mortalidad. En países como

Brasil, Colombia, El Salvador, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela, la mortalidad por causas externas rebasa la media latinoamericana, y además representa entre el 71% y el 90% de las causas de muerte en los varones jóvenes (véase el cuadro III.5). En Colombia, el 62,5% de los hombres de 15 a 24 años fallecidos mueren asesinados, cifra que asciende al 38,3% en la República Bolivariana de Venezuela, al 46,1% en El Salvador y al 42,0% en Brasil.

Cuadro III.5

AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS ENTRE JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS, SEGÚN SEXO, ALREDEDOR DEL 2000

(En porcentajes respecto del total de defunciones)

País	Sexo	Todas las causas a/	Enfermedades transmisibles		Enfermedades genético-degenerativas		Otras de causas internas	Causas externas		
			Todas las transmisibles b/	VIH-SIDA	Tumores c/	Sistema circulatorio d/	Embarazo, parto y puerperio	Todas las causas externas e/	Homicidios	Suicidios
Argentina (1997)	Fem.	100,0	12,8	4,0	13,2	8,8	4,8	41,0	2,7	6,9
	Masc.	100,0	6,9	3,2	7,0	5,3	-	72,0	10,2	6,5
Brasil (1998)	Fem.	100,0	14,6	3,7	8,9	10,6	7,9	37,7	11,2	3,7
	Masc.	100,0	6,4	1,9	4,0	4,4	-	78,3	42,0	3,1
Chile (1999)	Fem.	100,0	9,1	0,5	18,4	5,5	3,3	39,8	1,9	8,0
	Masc.	100,0	4,2	1,4	9,6	2,1	-	73,6	6,9	11,3
Colombia (1998)	Fem.	100,0	9,1	1,4	8,2	7,4	10,0	51,1	20,9	9,5
	Masc.	100,0	3,0	0,8	3,0	2,1	-	89,5	62,5	4,2
Costa Rica (2001)	Fem.	100,0	5,5	0,0	20,6	9,9	3,2	28,8	9,3	7,0
	Masc.	100,0	2,4	0,5	9,7	3,2	-	73,0	12,7	8,5
Ecuador (2000)	Fem.	100,0	16,9	0,6	9,8	11,1	8,7	30,0	4,8	7,7
	Masc.	100,0	11,8	1,5	4,9	7,6	-	64,6	24,8	5,8
El Salvador (1999)	Fem.	100,0	10,9	1,6	8,3	8,9	2,1	43,5	10,6	20,0
	Masc.	100,0	7,7	2,4	2,7	3,3	-	75,5	46,1	7,1
México (2000)	Fem.	100,0	10,0	1,9	12,1	7,2	8,9	31,9	5,8	4,7
	Masc.	100,0	6,2	2,5	7,2	3,6	-	69,5	18,1	7,0
Nicaragua (2000)	Fem.	100,0	11,5	1,1	6,6	5,6	12,8	41,4	5,5	22,9
	Masc.	100,0	5,6	0,5	7,6	3,6	-	71,2	17,9	16,8
Panamá (2000)	Fem.	100,0	24,0	12,0	12,0	1,7	8,8	29,8	2,8	5,6
	Masc.	100,0	10,0	5,8	5,7	2,1	-	69,8	26,8	6,6
Perú (2000)	Fem.	100,0	21,5	2,1	9,4	8,1	6,4	28,8	1,2	3,3
	Masc.	100,0	18,8	3,8	9,6	5,8	-	45,6	3,2	1,9
República Dominicana (1998)	Fem.	100,0	25,7	14,9	7,3	12,8	6,6	27,4	3,8	2,6
	Masc.	100,0	10,7	3,1	3,1	7,0	-	69,7	17,0	2,1
Uruguay (2000)	Fem.	100,0	7,2	3,2	15,6	10,4	12,2	42,5	7,2	11,5
	Masc.	100,0	5,4	2,0	6,8	3,4	-	73,9	9,8	19,0
Venezuela (Rep. Bolivariana de) (2000)	Fem.	100,0	8,5	1,5	11,3	8,2	7,8	43,5	10,1	4,4
	Masc.	100,0	3,3	1,4	3,3	2,0	-	85,8	38,3	3,9
América Latina y el Caribe (14 países) f/	Fem.	100,0	13,3	2,9	9,9	9,1	7,9	37,6	9,4	5,7
	Masc.	100,0	6,3	1,9	4,9	3,8	-	76,8	36,3	4,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), "Estadísticas de Salud de las Américas. Edición 2003" [en línea].

a/ La suma de las enfermedades y grupos de enfermedades no coincide con el 100% de las defunciones, ya que no se incluyeron algunas menos significativas para este grupo de edad, como enfermedades del sistema nervioso y del sistema digestivo entre otras.

b/ Incluye enfermedades infecciosas intestinales, tuberculosis, septicemia (excepto neonatal), meningitis, síndrome del VIH/SIDA e infecciones respiratorias agudas.

c/ Incluye neoplasias malignas de estómago, colon, recto y ano; de la tráquea, bronquios y pulmones; de seno, útero y placenta en mujeres, y de próstata en varones; sistema hematopoyético y linfático.

d/ Incluye enfermedad hipertensiva e isquémica del corazón, de circulación pulmonar y otras cardíacas.

e/ Incluye, además de las especificadas, eventos de intención no determinada, ahogamientos y accidentes que obstruyen la respiración, entre otras causas de muerte violenta.

f/ Aunque la OPS tiene información de más países de la región, se consideraron sólo 14 de ellos cuya población en el año 2003 superaba los 500.000 habitantes.

Al analizar la composición de la mortalidad juvenil por sexo, se advierte un apabullante predominio de los varones en el caso de las muertes violentas, pues representan casi el 86% de un total cercano a los 78.700 jóvenes fallecidos (en torno al año 2000). Entre las causas internas de muerte de los jóvenes latinoamericanos, las enfermedades transmisibles y las genético-degenerativas tienden a distribuirse entre poco más del 40% respecto de las mujeres y poco menos del 60% de los hombres. En cuanto a las primeras, en el caso particular del VIH/SIDA en 14 países de América Latina, los fallecimientos masculinos casi duplican los femeninos (873 jóvenes muertas) con 1.675 muertes atribuidas a esta causa a fines de los años noventa. Todo lo anterior contribuye a reforzar la evidencia de que la mortalidad juvenil femenina es claramente inferior a la masculina.

La incidencia del VIH/SIDA en la mortalidad de los jóvenes latinoamericanos (2,9 por cada 100.000), aunque inferior a la de los adultos de 25 años a 44 años (16,9 por cada 100.000), no deja de ser alarmante, por tratarse de jóvenes que se inician en la vida sexual y reproductiva, más aún si se tiene en cuenta que por cada enfermo declarado se estima que existen entre 5 y 7 portadores seropositivos. Cabe subrayar que en República Dominicana y Panamá las tasas de mortalidad por esta causa duplican ampliamente el promedio (7,9 y 6,6 respectivamente). Esto refleja la urgente necesidad de reforzar las campañas de prevención y difusión en el uso de preservativos, y todas las medidas que predisponen al sexo seguro, lo que en este caso específico puede cumplir la doble función de mitigar la propagación del VIH/SIDA e impedir los embarazos adolescentes, dos aspectos críticos para los y las jóvenes. Se impone entonces redoblar las campañas a través de diferentes medios, pues tal como muestra la Encuesta Demográfica de Salud que monitorea los cambios de comportamiento ante el VIH/SIDA, si bien un promedio de 70% a 73% de la población tiene información sobre el virus y su forma de transmisión, un porcentaje mucho menor adopta medidas efectivas para su prevención.⁴

Una paradoja recurrente en relación con la salud de los jóvenes es que, dada su escasa probabilidad de enfermar o fallecer por causas endógenas (enfermedades), se presta poca atención a su morbimortalidad específica, vinculada sobre todo a causas externas. Causas de morbilidad o mortalidad juvenil atribuibles a conductas de riesgo, que podrían tener cabida en un marco de mayor control preventivo —como las lesiones por imprudencia, violencia accidental o intencional, o las enfermedades de transmisión sexual—, al no corresponder a una morfología reconocida como problema de salud, no son consideradas como tema permanente de la política de salud dirigida a la juventud.

En general, las políticas de salud orientadas a los jóvenes son más eficaces en el campo de la prevención, dado que los problemas de salud juvenil se relacionan con conductas de riesgo en el campo de la sexualidad (embarazos y contagios por transmisión sexual), del consumo de estupefacientes y de sucesos traumáticos (accidentes o hechos de violencia). Para prevenir es necesario movilizar y sensibilizar a la opinión pública. Al respecto, se cuenta con experiencias exitosas en América Latina. En esta materia, han sido importantes las campañas de sensibilización y toma de conciencia en las que los propios jóvenes se hacen presentes, lo que también permite potenciar aún más su participación (Rodríguez, E., 2002). Especial reconocimiento merece la participación juvenil en campañas de prevención del SIDA, tanto en la difusión de información oportuna como en educación y sensibilización, con resultados positivos y significativos.

Muy saludables por dentro y muy expuestos por fuera, los jóvenes no encuentran en los servicios de salud ni en la salud preventiva una respuesta a sus riesgos específicos y viven el contraste entre buena salud y riesgos sanitarios poco cubiertos. Entre accidentes, hechos violentos, transgresiones a la legislación de estupefacientes, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, sus problemas sanitarios van acompañados de estigmas negativos en la sociedad, que hacen que el sistema de salud no los acoja debidamente.

4 Demographic Health Survey (DHS por su sigla en inglés).

D. LAS TASAS DE FECUNDIDAD DE LAS JÓVENES SE REDUCEN OSTENSIBLEMENTE, PERO AÚN PERSISTE LA MATERNIDAD A EDADES RELATIVAMENTE TEMPRANAS

Actualmente, la fecundidad durante la juventud es mucho más baja, en concordancia con el descenso sostenido que han experimentado los índices reproductivos en la región. Las estimaciones y proyecciones de población vigentes para América Latina y el Caribe dejan ver que en los últimos 15 años la fecundidad total y la juvenil han seguido disminuyendo, con excepción de la fecundidad adolescente, que ha aumentado.⁵

Respecto del conjunto de América Latina, el régimen de fecundidad imperante en torno de 1987 conducía a que en promedio las mujeres tuviesen 2,2 hijos nacidos vivos al cumplir los 30 años; el régimen vigente en la actualidad se traduce en un promedio de 1,7 hijos nacidos vivos a dicha edad. Prácticamente en todos los países, el número medio de hijos antes de enterar los 30 años descendió, y en algunos casos notablemente. Por cierto, persisten disparidades importantes entre países, pues mientras en los más pobres y de mayor fecundidad —Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua— las mujeres terminan su juventud con un promedio de 2,5 hijos o más, en los más avanzados en materia económica y social (Chile, Uruguay) la cifra es de 1,5 hijos o menos.

Sin embargo, la situación es paradójica: por una parte, los jóvenes tienen, en promedio, menos hi-

jos que antes; pero por otra, del total de niños que nacen, un porcentaje mayor tienen padres jóvenes. Ello obedece a que la fecundidad a edades adultas cayó más acentuadamente que a edades jóvenes, de allí la simultaneidad de menor fecundidad juvenil y mayor concentración de la reproducción en la juventud (véase el cuadro III.6).

Cuando se desglosa por estrato socioeconómico, se observan marcadas diferencias. No es casual que se hable de “dinámica demográfica de la pobreza”, síndrome en que destacan la mortalidad y la fecundidad más elevadas, la reproducción más temprana y el menor acceso a anticonceptivos. En el caso de los jóvenes, los censos de la ronda de 2000 permiten una primera aproximación a las manifestaciones reproductivas de esta dinámica demográfica de la pobreza.⁶ Se ratifican las disparidades reproductivas entre grupos socioeconómicos, pues las mucha-

5 Véase el capítulo II para información complementaria en esta materia.

6 Con tal propósito, se procedió a elaborar un índice socioeconómico basado en el equipamiento existente en los hogares. El índice fue construido como una suma ponderada de bienes seleccionados. Sus resultados permitieron clasificar terciles. Los cálculos se efectuaron separadamente para

chas de condición socioeconómica inferior tienen una maternidad más temprana y una trayectoria reproductiva más intensa. Si bien las disparidades no parecen tan notables cuando se considera a la totalidad de la población femenina joven (véase el gráfico III.15), un examen más minucioso muestra que estas operan en ambos extremos: mientras las

jóvenes de nivel socioeconómico superior tienden a presentar índices de nuliparidad mucho mayores y cuando son madres tienen mayoritariamente un hijo, entre las jóvenes de estrato socioeconómico inferior la nuliparidad es menos frecuente y entre las madres la mayoría tienen tres hijos o más.

Cuadro III.6

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA FECUNDIDAD EN LA JUVENTUD POR PAÍSES, TOTAL NACIONAL, 1987 Y 2003			
País	Concentración de la fecundidad en la juventud (15-29)		Cambio porcentual de la concentración reproductiva en la juventud
	1987	2003	1987-2003
Argentina	65,4	66,9	1,5
Bolivia	55,9	58,9	3,0
Brasil	68,6	73,2	4,6
Chile	68,1	71,7	3,6
Colombia	64,4	68,9	4,5
Costa Rica	65,9	69,7	3,8
Cuba	80,7	79,5	-1,2
Ecuador	59,5	61,5	2,0
El Salvador	65,3	66,5	1,2
Guatemala	59,2	62,1	2,9
Honduras	59,6	63,1	3,5
México	64,2	67,2	3,0
Nicaragua	65,8	67,2	1,4
Panamá	69,3	71,0	1,7
Paraguay	55,8	60,0	4,2
Perú	56,1	59,2	3,1
República Dominicana	69,4	77,2	7,8
Uruguay	65,2	69,3	4,1
Venezuela (República Bolivariana de)	65,6	70,1	4,5
América Latina	65,1	69,2	4,1

Fuente: Cálculos propios basados en estimaciones y proyecciones vigentes de la División de Población de la CEPAL (CELADE) y la División de Población de las Naciones Unidas (www.eclac.cl/celade; <http://esa.un.org/unpp/>).

El cuadro se complejiza en el examen según edad, en que los factores socioeconómicos presentan una estrecha relación con la probabilidad de haber sido madre a los 17 años. Tal probabilidad es de 4 a 10 veces superior entre las muchachas

de estrato bajo rural respecto de las de estrato alto urbano.⁷ Esto significa que en los grupos socioeconómicos superiores, menos del 5% de las muchachas han sido madres a los 17 años, mientras en los grupos socioeconómicos desaventajados la incidencia

zona urbana, rural y total nacional, lo que originó tres grupos socioeconómicos en cada zona y el total nacional. Con variaciones pequeñas, cada grupo representa aproximadamente a un tercio de la población juvenil de su ámbito territorial.

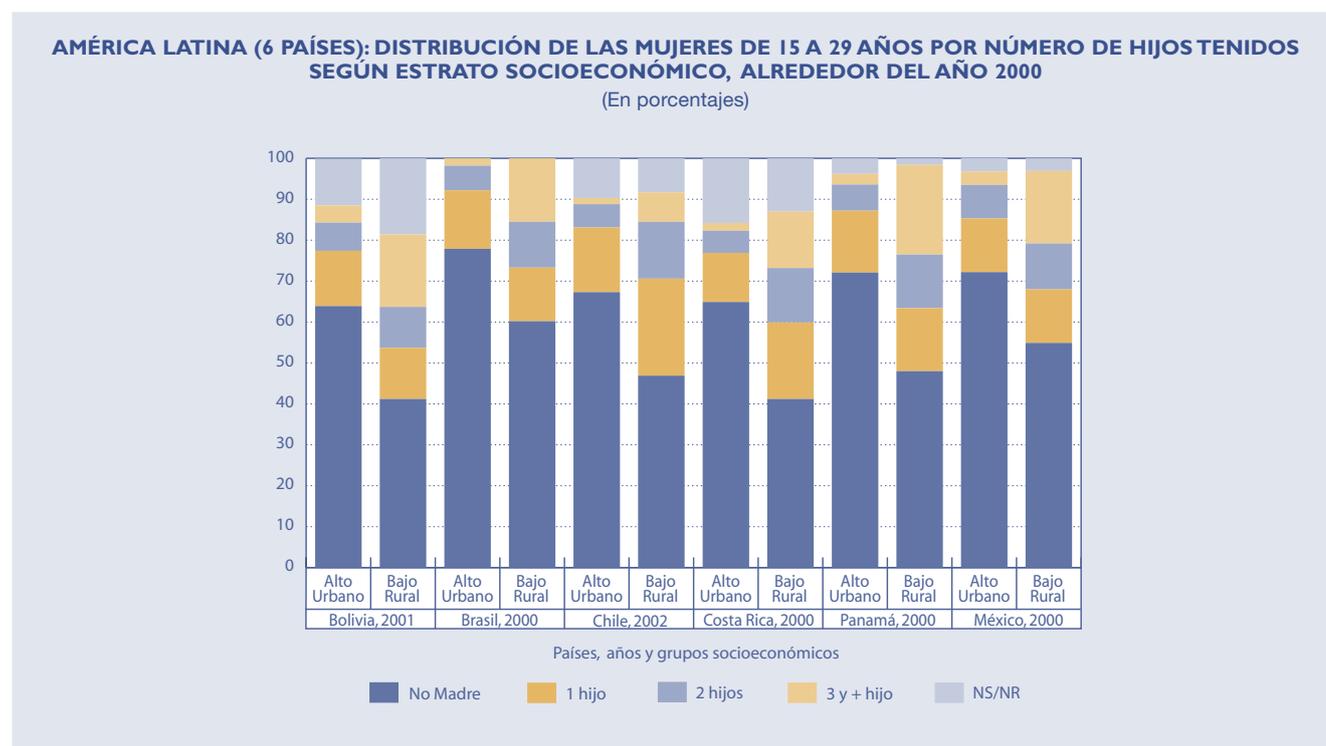
7 Aunque se trate de terciles urbanos y rurales la comparación directa entre países es impropia, pues los bienes usados para construir el índice variaron en cada uno de ellos. El porcentaje de madres fue calculado considerando la no respuesta como nuliparidad.

alcanza a entre un 20% y un 35% de las muchachas, dependiendo del país (véase el gráfico III.15). Esto deriva en la reproducción de la pobreza, por cuanto una fracción importante de las muchachas pobres tienen su primer hijo a una edad en que recién deberían estar terminando la secundaria, truncando con ello su progresión educativa.

Los factores socioeconómicos también tienen una clara relación con el patrón reproductivo en

otras fases de la vida juvenil. Pero el foco pasa de la condición de maternidad a la paridez acumulada, sobre todo a medida que la condición de madre se generaliza. A los 22 años todavía hay una diferencia significativa en el indicador de nuliparidad: la proporción de madres varía entre el 20% y el 35% en el estrato superior urbano, mientras entre las muchachas de estrato inferior rural supera el 60%, llegando en algunos casos al 80% (véase el gráfico III.16).

Gráfico III.15



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), procesamiento especial de las bases de microdatos censales.

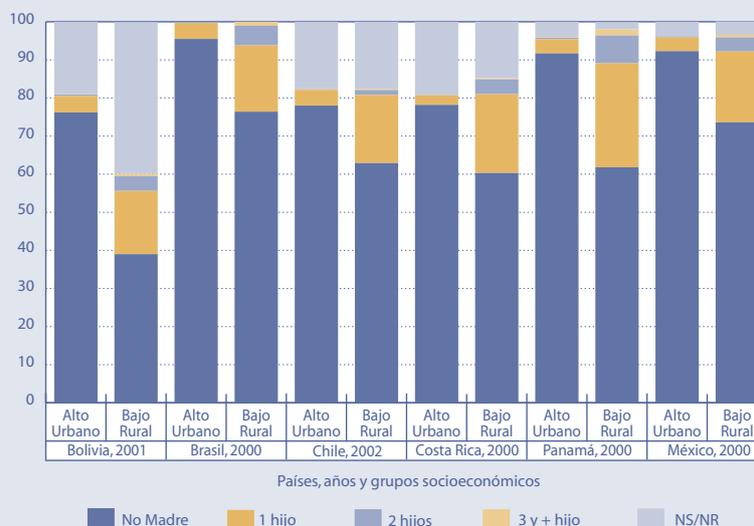
En las estimaciones empíricas se observa también la resistencia al descenso de la fecundidad adolescente. En efecto, en ellas se reconoce un aumento de la tasa específica de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad, de 82 a 84 por 1.000 a comienzos del decenio de 1990. Sin embargo, en las estimaciones y proyecciones se asume que la fe-

cundidad adolescente a escala regional habría caído desde 1995 en adelante y que seguiría bajando hasta llegar a niveles de 60 por 1.000 en el año 2025. En el cuadro III.7 se emplea un indicador diferente a la tasa específica de fecundidad, pero que ha sido ampliamente usado en el último tiempo. Se trata del porcentaje de muchachas madres por edad simple.⁸

⁸ El indicador total para el grupo de 15 a 19 años no debe ser interpretado como la probabilidad de ser madre durante la adolescencia, porque

AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES DE 17 AÑOS POR NÚMERO DE HIJOS TENIDOS SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, ALREDEDOR DEL AÑO 2000

(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), procesamiento especial de las bases de microdatos censales. NS/NR: No sabe/ no responde.

De acuerdo con el cuadro anterior, desde la perspectiva demográfica existen al menos dos poderosas razones que llaman a prestar atención a la reproducción durante la adolescencia en América Latina. La primera radica en que es comparativamente alta, como promedio regional, y la segunda en que su trayectoria o bien desciende mucho menos que en las otras edades, y por ende aumenta su participación dentro de la fecundidad total, o se incrementa en términos absolutos.

Además de lo mencionado, hay fuertes motivos sociales para preocuparse por la fecundidad adolescente. En primer lugar, porque afecta más intensamente a los grupos pobres; al respecto, en el cuadro III.8 se ilustra esta tendencia usando como proxy de pobreza el nivel de escolaridad de las mujeres. En segundo lugar, porque se relaciona con adversidades que pueden ser mitigadas solo en

parte, debido a la situación socioeconómica de los adolescentes.

Esta persistencia de riesgos demográficos se explica por una combinación compleja de comportamientos tradicionales (unión y embarazo temprano en el caso de la fecundidad adolescente en los grupos pobres) con fenómenos clásicos de exclusión y de patrones culturales, a saber: carencia de información sexual, falta de acceso a medios anticonceptivos en el caso de la fecundidad no planificada (CEPAL, 2001), sesgos culturales en las relaciones sexuales, y otros factores vinculados a la cultura juvenil. En general, en los países de la región ha mejorado el acceso a anticonceptivos modernos a lo largo de la trayectoria reproductiva, pero todavía es muy magro el porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos modernos en el inicio de su actividad sexual (véase el gráfico III.17).

existe truncamiento de datos; de hecho, ninguna muchacha de dicho grupo ha cumplido los 20 años, por lo que todavía no terminan su período de "exposición al riesgo" de fecundidad adolescente. La probabilidad de haber sido madre durante la adolescencia debe ser estimada con muchachas que ya cumplieron los 20 años (normalmente con consultas retrospectivas sobre su historia reproductiva) o con métodos de imputación de diferente naturaleza (Li y Wu (2003), Rosero-Bixby en CEPAL/CELADE, 2004), aunque hay poca experiencia en el uso de tales métodos para anticipar fecundidad al cumplir 20 años de edad.

Cuadro III.7

AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE MADRES EN MUJERES DE 15 A 19 AÑOS, POR EDADES SIMPLES, TOTAL NACIONAL, ALREDEDOR DE 1990 Y DEL 2001 (En porcentajes)							
País	Año	Años de edad					Total
		15	16	17	18	19	
Bolivia	1992	1,6	4,4	9,9	17,9	28,0	11,7
Brasil	2001	2,0	5,7	11,7	20,8	29,2	13,5
	1991	2,2	5,2	10,4	17,2	24,3	11,5
Chile	2000	3,3	7,6	13,8	20,8	28,1	14,8
	1992	2,1	4,8	9,8	16,1	24,8	11,8
Costa Rica	2002	6,3	5,1	10,2	16,7	24,1	12,3
	1984	2,0	5,6	10,9	18,6	27,5	12,8
Ecuador	2000	2,5	6,2	11,8	19,8	27,5	13,2
	1990	6,2	5,4	11,0	19,4	27,9	13,5
Guatemala	2001	3,2	8,1	14,9	23,9	32,5	16,3
	1994	2,9	7,3	14,5	25,1	35,5	16,1
Honduras	2002	2,6	6,9	14,2	23,1	33,0	15,5
	1988	3,6	8,1	15,6	25,2	34,6	16,6
México	2001	3,0	8,4	17,1	27,6	38,0	18,3
	1990	1,4	3,8	8,6	16,1	24,2	5,8
Panamá	2000	1,8	4,8	10,7	18,2	26,2	7,6
	1990	3,6	8,2	15,2	22,4	30,8	16,1
Uruguay	2001	4,1	9,3	16,2	25,4	33,3	17,4
	1985	1,2	3,4	7,2	12,4	19,3	8,4
Venezuela (República Bolivariana de)	1996	5,0	7,7	12,8	18,4	24,6	13,9
	1990	3,3	6,9	13,0	19,9	27,5	13,8
	2001	3,2	7,5	13,7	21,7	29,8	15,0

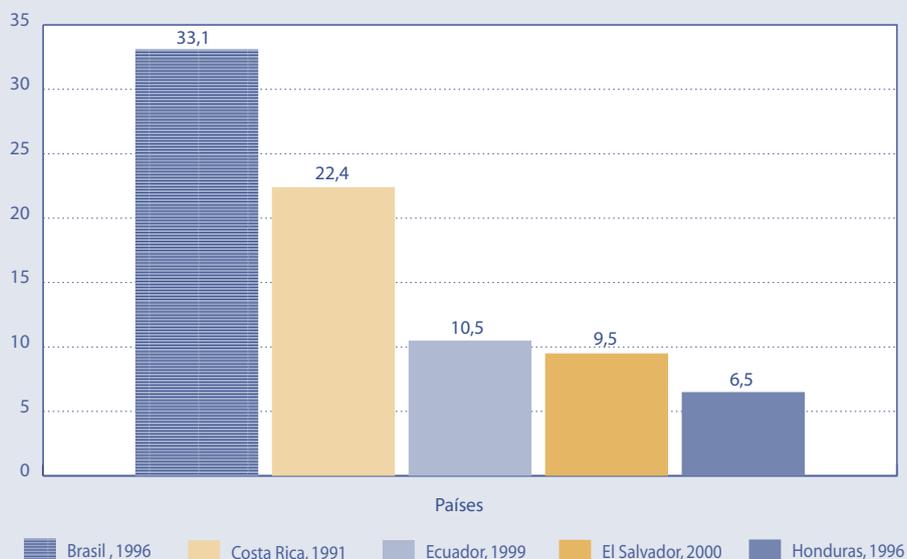
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), procesamiento especial de las bases de microdatos censales.

Cuadro III.8

AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE MADRES O EMBARAZADAS POR PRIMERA VEZ (EPV) EN MUJERES DE 15 A 19 AÑOS, POR NIVEL EDUCATIVO, TOTAL NACIONAL, MEDIADOS DE LOS OCHENTA Y MEDIADOS DE LOS NOVENTA (En porcentajes)										
País	Año	Sin educación			Primaria			Secundaria o más		
		Madres	Embarazadas por primera vez	Madres o actualmente embarazadas	Madres	Embarazadas por primera vez	Madres o actualmente embarazadas	Madres	Embarazadas por primera vez	Madres o actualmente embarazadas
Bolivia	1989	25,7	0,6	263	24,6	4,1	28,7	7,7	1,7	9,4
	1998	40,1	11,4	51,5	23,9	5,0	28,9	7,4	1,4	8,8
Brasil	1986	14,4	6,6	20,0	13,1	3,4	16,6	3,2	1,1	4,3
	1996	50,7	3,7	54,4	23,6	4,7	28,3	10,7	3,4	14,1
Colombia	1986	19,3	6,8	26,2	16,9	5,4	22,3	5,7	1,3	6,9
	2000	45,5	0,0	45,5	28,3	5,4	33,7	11,3	3,7	15,0
Guatemala	1987	33,8	5,3	39,1	19,8	3,2	23,0	4,4	0,4	4,8
	1998/99	31,9	8,6	40,5	20,6	5,0	25,6	7,3	1,8	9,2
Haití	1994/95	19,9	5,7	25,6	11,5	3,6	15,1	5,1	2,7	7,8
	2000	41,4	3,2	44,6	13,9	4,9	18,8	7,1	3,6	10,7
Perú	1986	18,5	7,4	25,9	18,9	3,4	22,3	6,4	1,0	7,4
	2000	36,9	0,0	36,9	22,9	3,6	26,4	7,2	2,0	9,2
República Dominicana	1986	45,4	1,7	47,1	17,2	3,9	21,2	5,2	2,9	8,1
	2002	58,4	5,8	64,3	28,2	5,8	34,0	14,2	4,2	18,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Encuestas de demografía y salud [en línea] [http:// www.measuredhs.com/](http://www.measuredhs.com/). Estas cifras provenientes de encuestas especializadas (DHS, www.measuredhs.com) y de las levantadas con el apoyo de los CDC), que incluyen tanto a las mujeres que ya habían tenido hijos en el momento de la encuesta como a las que eran nulíparas embarazadas.

AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): MUJERES QUE USARON ANTICONCEPTIVOS MODERNOS EN SU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL, TOTAL NACIONAL, MEDIADOS DE LOS AÑOS NOVENTA
(En porcentajes)



Fuente: Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP), *Encuesta nacional de salud materno infantil, 1998*, Asunción, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)/Centro para el Control de Enfermedades (CDC), 1999.

A la luz de las cifras y razonamientos previos, es claro que reducir la fecundidad adolescente y, en general, promover una iniciación nupcial y reproductiva más tardía son objetivos pertinentes de las políticas de juventud. Para que estas intervenciones tengan éxito, se ha de considerar la amplia gama de fuerzas que promueven la reproducción temprana. Y dentro de estas cabe subrayar la falta de oportunidades y de opciones que afecta a una fracción significativa de los jóvenes latinoamericanos. De este modo, la reproducción temprana no solo es causa, sino también consecuencia de la exclusión. Inversamente, la postergación de la maternidad y paternidad es una de las consecuencias de las buenas opciones educacionales y laborales. De este modo, la ampliación de espacios para el desarrollo de proyectos personales —que permita extender el período de acumulación de activos educativos y formativos—, y una mayor probabilidad de acceso a empleos decentes, constituyen la principal estrategia para modificar este patrón de iniciación reproductiva temprana. Esta estrategia, sin embargo,

opera a largo plazo y el problema debe ser enfrentado con premura.

En lo atinente a las adversidades que entraña la fecundidad adolescente, una parte se vincula a la salud del binomio madre-hijo, pues embarazos a edades tempranas acarrear mayores complejidades. Otro tipo de adversidades cuyo impacto social es más difundido, se relacionan con el desempeño social y económico de tres generaciones: progenitores adolescentes, sus hijos y los padres de los y las adolescentes. Para los progenitores adolescentes, las opciones de seguir acumulando activos, sobre todo educativos, se restringen debido a las exigencias de tiempo, dedicación y recursos que demanda la crianza de un hijo, a lo que se añaden mecanismos de discriminación y exclusión de las estudiantes embarazadas.

El descenso de la fecundidad juvenil es una oportunidad para que los jóvenes puedan destinar más tiempo a su formación, maduración o adquisición de experiencia en diferentes ámbitos vitales. La

maternidad/paternidad entraña múltiples obligaciones, incluido un cambio de estatus social, ya que culturalmente suele definir la condición de adultez. Tales obligaciones tienden a competir con opciones alternativas, como son la permanencia en el sistema escolar, la inserción laboral (sobre todo en el caso de las mujeres), la acumulación de activos o simplemente la maduración psicosocial. Por consiguiente, el retraso de la iniciación reproductiva pareciera tener claras ventajas (aun cuando lo anterior no asegura una trayectoria adulta satisfactoria o exitosa), si se tienen en cuenta la importancia creciente que reviste la acumulación de conocimientos y de experiencia práctica para una inserción y un desempeño laboral satisfactorios, y la preocupación de los padres por ofrecer a sus hijos las mejores opciones de desarrollo futuro.

Los datos recién presentados confirman que el descenso en las tasas de fecundidad entre las mujeres jóvenes no va acompañado de una merma en la fecundidad adolescente, y a la vez muestran que, pese a dicho descenso general, sigue siendo alta la concentración de la fecundidad en edades relativamente tempranas, sobre todo en los quintiles de ingresos más bajos. Por ende, si bien el retroceso de la fecundidad puede representar mejores ingresos por miembro de la familia (suponiendo el mismo ingreso para un menor número de personas), la persistencia de la fecundidad temprana sigue limitando los procesos formativos y de autonomía de las mujeres jóvenes.

E. AUN CUANDO EL CONSUMO SIMBÓLICO SE EXPANDE ENTRE LOS JÓVENES A UN RITMO ACELERADO, ESTOS ENCUENTRAN SEVERAS RESTRICCIONES PARA INCREMENTAR SU CONSUMO MATERIAL

Una tensión que afecta a todos los grupos de edad, pero con mayor intensidad a los jóvenes, es la creciente desproporción entre consumo simbólico y consumo material. Por una parte, en las últimas décadas el aumento en el acceso a símbolos, mensajes, imágenes, información y conocimiento ha sido vertiginoso para los jóvenes, debido tanto a la expansión de la cobertura escolar, como sobre todo al incremento del consumo audiovisual y de conexión a redes virtuales. Por otra parte, la situación de pobreza de sus familias de origen, las dificultades de acceso al empleo y la inserción en ocupaciones de baja productividad y bajos ingresos limitan severamente el acceso de los jóvenes a los bienes materiales y a la propia autonomía.

La conectividad a redes virtuales alcanza una intensidad y cobertura mayor entre los jóvenes que en la población adulta. La expansión del acceso juvenil a Internet prosigue a un ritmo exponencial, puesto que los jóvenes tienen más ductilidad para asimilar nuevos lenguajes y más facilidad para “aprender usando” que los adultos, sobre todo cuando se trata de ingresar al mundo virtual de la computadora. También hay que tener presente que un alto porcentaje de jóvenes usuarios de Internet, y otras fuentes informatizadas de conocimientos, acceden a la red por medio de las cabinas públicas o de la infraestructura en las escuelas.

En Brasil, hacia el año 2000, el 15,8% de los jóvenes de 14 a 19 años de edad ha usado Internet, comparado con un 11,3% en la población de 20 a 35

años, 5,6 % en usuarios de 36 a 45 años y 3% en mayores de 45 años; y en el caso de los computadores personales estos índices etarios eran del 27%, 19%, 13,7% y 6,3%, respectivamente (Hilbert, 2001). En México, el 30% de los menores de 20 años, y el 36% de la población de 20 a 29 años eran usuarios de Internet hacia el año 2002, porcentaje que descendía a 18% en los de 30 a 39 años, a 9% en los de 40 a 59 años, y a 4% en la población de 60 años y más de edad (Hilbert, 2003). Por su parte y de acuerdo con las encuestas disponibles, en Colombia, en el año 2002, el 47,6% de los jóvenes de 18 a 24 años usaban Internet, en contraste con el 13,5% en la población de 45 a 54 años y el 2,2% en los de 55 años y más de edad. Los datos para Argentina y Chile muestran contrastes etarios similares (véase el cuadro III.9).

Cuadro III.9

ARGENTINA, CHILE Y COLOMBIA: EDAD DE LOS USUARIOS DE INTERNET, TOTAL NACIONAL, ALREDEDOR DEL 2002 (En porcentajes)					
Argentina		Chile		Colombia	
Grupo etario	Porcentaje	Grupo etario	Porcentaje	Grupo etario	Porcentaje
Hasta 24	30	6-11	27	12-17	48,1
25-34	32	12-18	35	18-24	47,6
35-44	17	19-29	21	25-34	24,9
45-54	14	30-44	14	35-44	17,4
55 años y más	7	45-59	13	45-54	13,5
		60 años y más	5	55 años y más	2,2

Fuente: Argentina: Irol D'Alessio, *La audiencia de Internet*, Buenos Aires, International Research Online-Argentina/Brasil, 2003; Colombia: *Encuesta Nacional de la Cultura*, 2002; Chile: "Encuesta de caracterización socioeconómica", datos citados en Fernando Soto, Carlos Espejo e Isabel Matute, *Los jóvenes y el uso de computadores e internet*, Santiago de Chile, Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), 2002.

En definitiva, a diferencia de la televisión que implica un consumo transgeneracional –aunque varíen los gustos entre generaciones–, el acceso a la cultura virtual representa un consumo marcado por la brecha generacional. Es evidente, por otra parte, que existen diferencias en el acceso y consumo de las nuevas tecnologías entre los jóvenes de distintos sectores sociales. Pero esto no contradice el hecho de que, en general, se ensancha la brecha entre jóvenes y adultos, dada la mayor ductilidad de los primeros en el uso de las nuevas tecnologías. El vínculo de los jóvenes con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones sería así un elemento fundamental de su separación y diferenciación cognitiva y perceptiva respecto del mundo de los adultos. Brecha generacional que podría ser mucho más radical que en generaciones precedentes, dado que el uso de nuevas tecnologías de comunicación supone el desarrollo de “mapas cognitivos” inéditos.

Por otra parte, los jóvenes, al igual que el resto de la población, han incrementado de manera intensiva su acceso a la industria audiovisual. Según datos de la UNESCO, entre 1980 y 1997 el número de televisores por cada 1.000 habitantes en América Latina y el Caribe aumentó de 98 a 205, y el de radios se incrementó de 259 en 1980 a 413 en 1996, siendo la región en desarrollo que, por mucho, cuenta con la mayor densidad televisiva y

radial. Es probable que durante la última década esta densidad televisiva y radial haya aumentado considerablemente, debido al abaratamiento relativo de los aparatos de televisión y la expansión del crédito de consumo.⁹ Por la misma razón, también la industria discográfica, de videos y videojuegos se expandió durante las últimas dos décadas, siendo los jóvenes sus consumidores privilegiados. A esto hay que agregar el crecimiento sostenido de la televisión por cable, la multiplicación de canales abiertos y la extensión de los horarios televisivos.

Se puede apreciar que, en el marco de la centralidad de los consumos culturales, los medios están entre las actividades más destacadas por los jóvenes. “Ver televisión” y “escuchar música” son actividades mencionadas por los jóvenes de los tres países considerados en el cuadro III.10.

La centralidad del consumo de medios de los jóvenes indica que el hogar ha pasado a representar un espacio de intenso consumo simbólico y creciente convergencia de tecnologías de la información y las comunicaciones. No son solo la televisión o la radio en su sentido tradicional, sino un nuevo concepto de “selección a la carta” en el consumo de televisión por cable, videos, DVDs, Internet y otros dispositivos. El peso relativo del consumo de medios dentro de la construcción de identidad en el

9 En Chile, el consumo diario de televisión de los jóvenes es de más o menos tres horas.

hogar aumenta a medida que se diversifican los canales de acceso a contenidos que también tienden a ser más variados.

Todos estos datos denotan una expansión veloz del consumo simbólico. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el consumo material de los jóvenes. La evolución en la situación de la pobreza y el empleo de la juventud pone de manifiesto que el acceso a

bienes materiales sigue un ritmo mucho más lento que el acceso a bienes simbólicos.

Los datos muestran que si bien la incidencia de la pobreza entre los jóvenes es algo menor que en el resto de la población, en la última década tiende a decrecer con más lentitud y por otra parte, se engrosa el número total de jóvenes en condición de pobreza (véase el cuadro III.11).

Cuadro III.10

CHILE, COLOMBIA Y MÉXICO: ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD DURANTE EL TIEMPO LIBRE, TOTAL NACIONAL, ALREDEDOR DEL 2002					
(En porcentajes)					
Chile		Colombia		México	
Escuchar radio o música	58,4%	Hacer deporte	38%	Estar con la familia	21%
Estar con la familia	41,7%	Oír música	37%	Convivir con la pareja	13%
Estar con la pareja	31,8%	Ver televisión o videos	33%	Ver televisión	11%
Salir o conversar con amigos	36,1%	Leer	24%	Escuchar música	10%
Ver televisión o videos	17,1%	Salir con amigos/as	17%	Estar con los amigos	10%
Salir de paseo	15,3%	Ir a bares/discotecas	6%	Estudiar en casa	9%
Deportes	25,4%	Dedicarse a las artes	5%	Practicar algún deporte	8%
Ir a fiestas o a bailar	23,7%	Ir al cine/conciertos	4%	Videojuegos	8%
Leer diarios, libros o revistas	8,5%				

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de encuestas de juventud de cada país. No incluye uso de computadoras.

Cuadro III.11

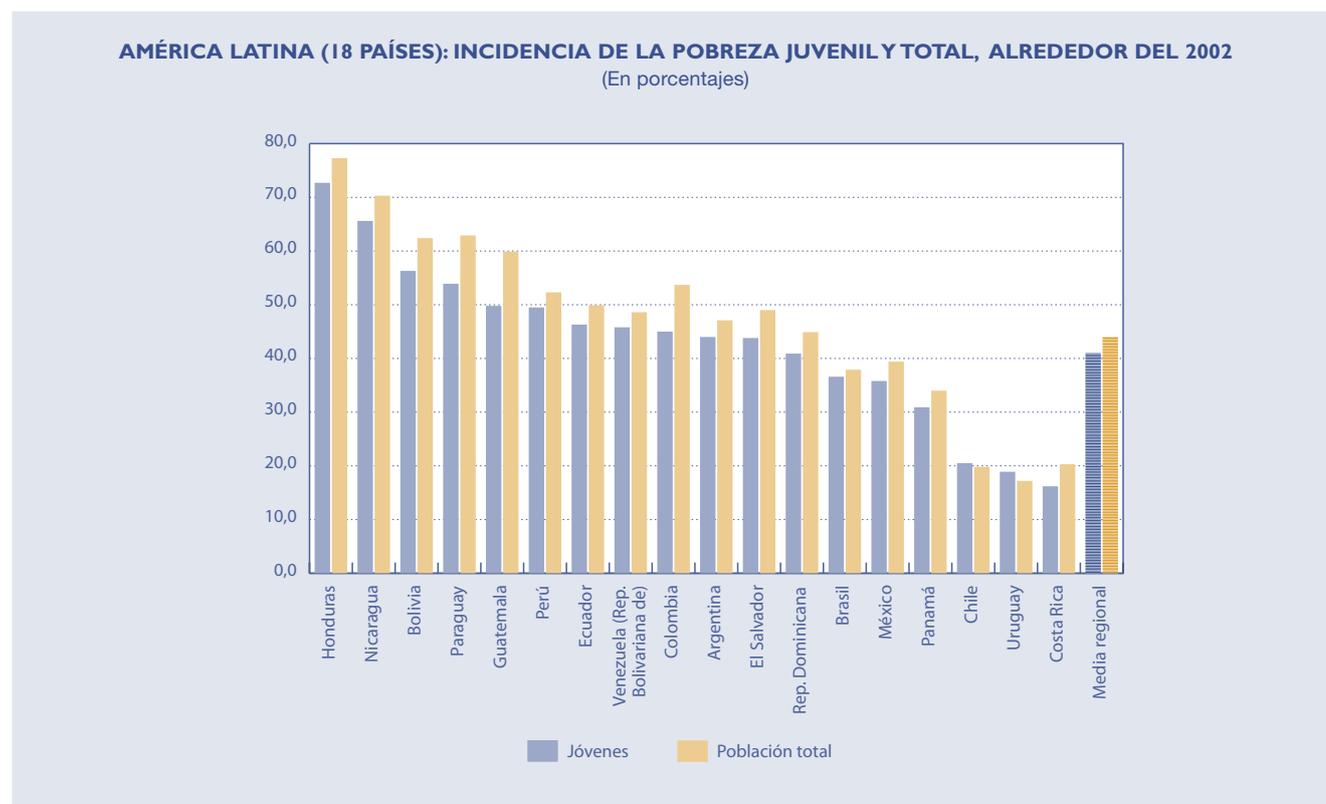
AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): INCIDENCIAS DE POBREZA E INDIGENCIA, 1990 Y 2002					
		1990	2002	Variación porcentual	
Pobreza					
Jóvenes	Porcentaje	43	41	-4,7	
	Millones	(50,4)	(58)	(15,1)	
Población total	Porcentaje	48	44	-8,3	
	Millones	(200)	(221)	(10,5)	
Extrema pobreza					
Jóvenes	Porcentaje	17	15	-11,8	
	Millones	(20,4)	(21,2)	(3,9)	
Población total	Porcentaje	23	19	-21,7	
	Millones	(93)	(97)	(4,3)	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de procesamientos especiales de las encuestas de hogares.

Como se observa en el cuadro anterior, si bien en promedio hay una mayor incidencia de pobreza y extrema pobreza en el total de la población que en la población joven, la tendencia en la última década es que el porcentaje de pobres y pobres extremos se reduzca más aceleradamente en el total que entre los jóvenes o, inversamente, el aumento del total (no de la incidencia) de pobres, entre 1990 y el 2002, es más intenso entre los jóvenes que en el conjunto de la población. Al analizar la situación en términos absolutos, en 2002 habrían existido en América Latina alrededor de 58 millones de jóvenes pobres (7,6 millones más que en 1990), de los que 21,2 millones eran pobres extremos o indigentes (con un incremento de 800.000 en el período).

Estos indicadores generales probablemente no captan diferencias cualitativas entre los pobres de unos y otros países. Sin embargo, permiten ordenamientos analíticos que al menos evidencian ciertas similitudes. Como se aprecia en el gráfico III.18, los países que registran mayor incidencia de pobreza en los jóvenes (en torno de 50% o más) son Honduras, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Guatemala y Perú. Con valores entre 30% y 50% se encuentran Ecuador, la República Bolivariana de Venezuela, Colombia, Argentina, El Salvador, República Dominicana, Brasil, México y Panamá. Finalmente, Chile, Uruguay y Costa Rica presentan la menor incidencia (en torno de 20% o menos).

Gráfico III.18

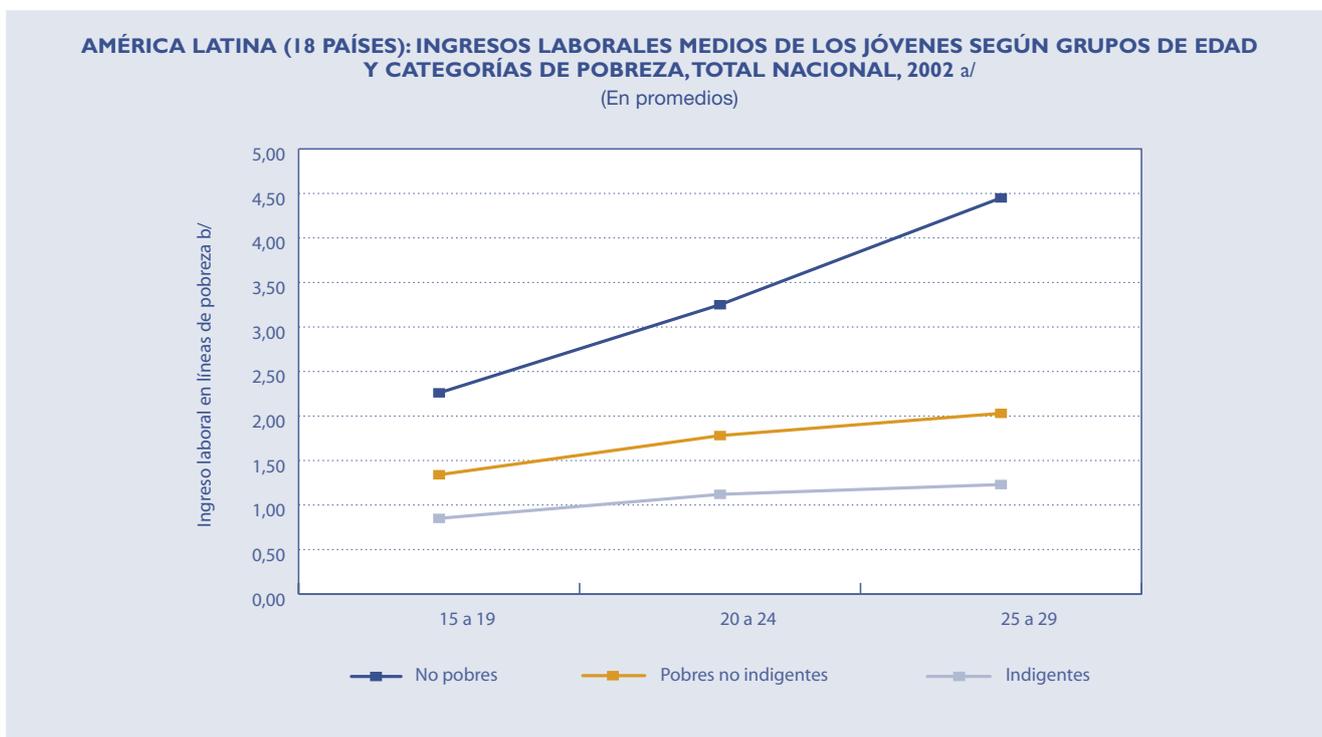


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de procesamientos especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

En América Latina, los jóvenes pobres tienen menor probabilidad de recibir ingresos que los no pobres, y los indigentes menos que los pobres. Dentro de los que trabajan, los ingresos laborales y su incremento por grupos de edad son sustancialmente mayores entre los no pobres: el máximo ingreso promedio de los indigentes no alcanza al mínimo

de los pobres (no indigentes), y sucede igual cosa entre estos y los no pobres (véase el gráfico III.19). Evidentemente, esto se relaciona con la menor capacidad de los jóvenes pobres de acceder al mercado laboral con respecto a sus pares no pobres, y se vincula a su vez con el nivel educativo y capital social diferencial de los tres grupos de jóvenes.

Gráfico III.19



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de procesamientos especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Promedio ponderado de los países.

b/ Ingreso laboral expresado en múltiplos de la línea de pobreza urbana de cada país.

Pero por otra parte, el acceso al consumo de la industria audiovisual, sobre todo de radio y televisión, alcanza al conjunto de la población. Por lo tanto, se puede pensar que todavía mayor es la asimetría entre opciones de consumo simbólico y consumo material en los jóvenes pobres que en los no pobres. Los primeros tienen acceso a las imágenes, los íconos, la música y los mensajes modernos, pero no pueden traducir este acceso en movilidad social o en un incremento complementario de ingresos y capacidad de consumo material (de bienes

y servicios). De la misma manera, se produce también una configuración específica por localización geográfica, ya que la incidencia de la pobreza es tanto más fuerte entre los jóvenes rurales que entre los urbanos.

Respecto de la proporción de indigentes dentro del total de pobres, se observa que ella alcanza a uno de cada cuatro pobres a nivel urbano, mientras asciende a la mitad a nivel rural. Así, los jóvenes pobres rurales no solo son proporcionalmente más,

sino que la severidad de su pobreza es significativamente mayor (véase el cuadro III.12). No obstante, la brecha entre consumo simbólico y consumo material probablemente es más contrastante entre los jóvenes urbanos de bajos ingresos, cuyo acceso a la

educación y otros bienes simbólicos es muy superior y más diversificado que el de sus pares rurales. No es casual que el mayor nivel de violencia juvenil se registre en las zonas urbanas donde se concentran los jóvenes con menores recursos.

Cuadro III.12

AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): INCIDENCIA DE POBREZA E INDIGENCIA URBANA Y RURAL, 2002				
(En porcentajes)				
Pobreza	Población joven		Población total	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural
Promedio ponderado	33,4	54,8	34,9	57,9
Promedio simple	37,3	55,6	40,7	59,9
Indigencia				
Promedio ponderado	8,9	27,9	10,7	33,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

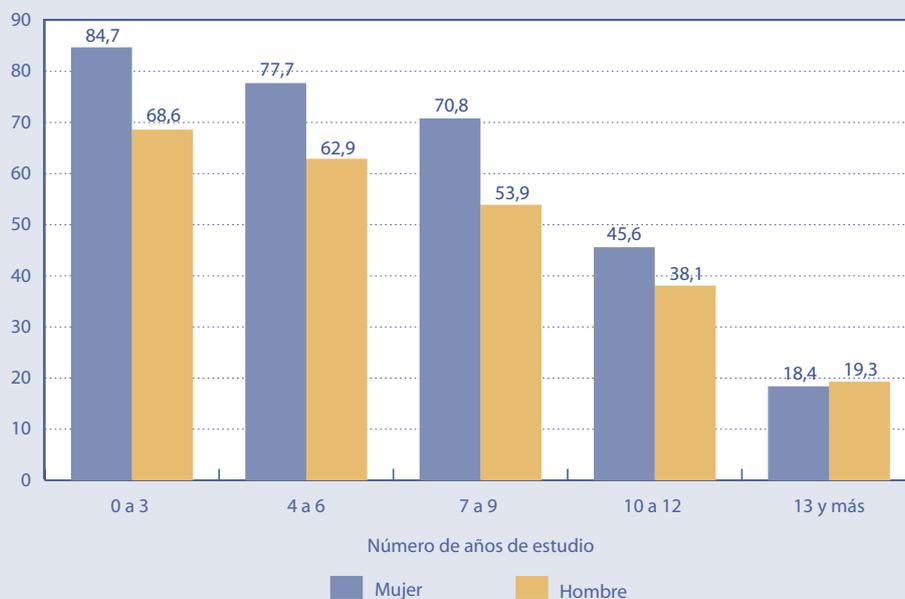
En lo relativo al empleo –habida cuenta de que es la principal fuente de ingresos y, por tanto, de acceso a bienes materiales–, el primer elemento que llama la atención es el incremento sostenido en el nivel de desempleo de los jóvenes; no solo la brecha con respecto al desempleo adulto, sino el aumento del desempleo juvenil propiamente tal. El gráfico III.10 de la sección A. del presente capítulo muestra que, entre 1990 y el año 2002, la tasa de desempleo creció para los jóvenes de los cinco quintiles de ingreso. Sintomáticamente, esto tuvo lugar en un lapso en que el consumo simbólico se expandió tanto por parte de la industria audiovisual como de la conectividad a redes y del nivel educacional de los jóvenes.

También conviene destacar la alta proporción de jóvenes ocupados en empleos de baja productividad y con bajos ingresos (véase nuevamente el gráfico III.11). Otra marcada correlación negativa existe entre el peso de los sectores de baja productividad y del nivel educativo de los jóvenes (véase el gráfico III.20). En efecto, la proporción de estos sectores en los niveles educativos más bajos triplica con creces la proporción correspondiente al nivel educativo más alto. Sin embargo, durante el período más reciente el peso de los sectores de baja productividad aumentó en mayor grado —en términos porcentuales— en los

grupos educativos altos, lo que indicaría que en el contexto de un bajo dinamismo de las economías de la región, y dado el incremento del nivel educativo de los jóvenes que entran al mercado de trabajo, un número creciente de estos jóvenes con buena educación no encuentra un empleo acorde con su formación.

Un último aspecto digno de subrayar en relación con el empleo juvenil es la baja estructuración entre las expectativas de los jóvenes con respecto al nivel de estudios realizados y los puestos en que se desenvuelven, según se observa en las encuestas nacionales de juventud. En ello puede verse una crítica directa al mercado de trabajo y a las instituciones educativas, especialmente de parte de aquellos jóvenes que han realizado inversiones más prolongadas en formación profesional y cuya sobreeducación es más alta (Cachón, 2000). Por este motivo, es relevante examinar el perfil del empleo que las encuestas de juventud identifican para los jóvenes latinoamericanos. Los datos que aportan las encuestas de Chile y México señalan que, si bien los jóvenes en general valoran positivamente sus ocupaciones, también se muestran críticos de las bajas remuneraciones que perciben, las inestables condiciones de trabajo y la situación contractual en que se desempeñan.

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD EN EMPLEOS DE BAJA PRODUCTIVIDAD, SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL, TOTAL NACIONAL, ALREDEDOR DEL 2002 a/
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a/ Promedio simple.

Todo lo anterior amplía la brecha entre consumo simbólico y consumo material, o bien entre acceso a imágenes, información, íconos, música y mensajes, por una parte, y acceso a ingresos oportunos y continuos, por otra. Esto parece agudizarse más en el caso de las mujeres, si se considera que, a igual nivel de escolaridad, estas tienen mayores probabilidades de ocuparse en empleos de menor productividad. El gráfico anterior muestra que más de la mitad de los jóvenes ocupados se desempeñan en trabajos poco productivos y de bajos ingresos —pues se hallan bajo la media de logros educativos para la región—, en contraste con su acceso a bienes simbólicos. Y aun cuando los jóvenes con menos educación se ven más perjudicados, también hay que destacar que entre los años 1990 y 2002 se incrementó la incidencia de empleos de baja productividad, incluso entre los jóvenes con 13 años y más de estudios. Por consiguiente, la brecha entre consumo simbólico y consumo material también puede expandirse hacia los grupos de jóvenes de mayores ingresos.

Otro elemento que acentúa en los jóvenes el contraste entre consumo simbólico y consumo material es la brecha entre sus ingresos y los de los adultos, dado que los últimos reciben un “premio a la experiencia”. Lógicamente, la brecha se reduce con el aumento de la edad (y de la experiencia) de los jóvenes. Mientras los más jóvenes (15 a 19 años, con un ingreso cercano a 1,5 veces la línea de la pobreza) ganan en promedio un tercio de los ingresos medios de los adultos, los de 20 a 24 años ganan más de la mitad (2,6 veces la línea de la pobreza), y los jóvenes de 25 a 29 años más de las tres cuartas partes (3,5 veces la línea de la pobreza) de lo que ganan los adultos, quienes en promedio tienen un ingreso que corresponde a 4,6 veces la línea de la pobreza. Durante el período reciente, estas brechas se han mantenido sorprendentemente estables, con una muy ligera pérdida de los más jóvenes, y ganancias igualmente leves para los otros dos grupos de jóvenes.

Ante los datos recién expuestos podría contraargumentarse que de todas maneras hoy los jóvenes consumen más bienes y servicios que hace una década. Pero este ritmo de expansión es muy inferior a la expansión del consumo simbólico. A su vez, un mayor consumo simbólico genera más expectativas de consumo material cuyo efecto es una mayor frustración de expectativas, que convierte a los jóvenes en candidatos a la desazón o la disrupción. Ya la sociología clásica planteaba como situación problemática la asimetría entre las expectativas derivadas del acceso al imaginario moderno y las posibilidades efectivas de realizarlas. Más aún si se considera que la tendencia a la concentración de los ingresos se mantuvo durante los años noventa, lo que redundó en que también tiende a aumentar la diferencia en consumo material entre los jóvenes de hogares ricos y el resto de sus pares.

Las asimetrías entre la expansión del consumo simbólico y el consumo material rompen la imagen

consagrada del progreso y el desarrollo, según la cual se preveía una expansión sincrónica y armónica entre ambos. Bienestar material y acceso a códigos de modernidad, expansión educativa y opción a empleos más productivos, acceso a información y movilidad social, constituían las dos caras de una misma moneda en la cabeza de muchos jóvenes latinoamericanos. Esta ecuación se quebró, y la idea secular de que ambas caras formaban parte de un círculo virtuoso se ve debilitada por los datos recién presentados. Países como Brasil, Colombia, México y la República Bolivariana de Venezuela registraron un aumento exorbitante de su industria mediática, así como en cobertura y logros educacionales, y una evolución muy distinta en reducción de la pobreza urbana o mejoramiento de la calidad de vida de los pobres. Y sintomáticamente, la década de 1980 y los comienzos de los años noventa marcan un salto significativo en los niveles de violencia de las ciudades latinoamericanas, donde muchos jóvenes urbanos pobres son víctimas y protagonistas.

F. A MODO DE COROLARIO: ENTRE LA PRECOCIDAD Y LA POSTERGACIÓN

Los jóvenes cuentan con capacidades que los adultos no tienen para insertarse en los nuevos desafíos de la sociedad de la comunicación, tales como más años de escolaridad, un uso más familiarizado de la comunicación interactiva a distancia, y aptitudes que hoy gozan de mayor prestigio en la competencia laboral, como son la flexibilidad y capacidad de adaptación. Al mismo tiempo, ellos han interiorizado las expectativas de autonomía propias de la sociedad moderna y postmoderna, sobre todo mediante su acceso a la comunicación a distancia y la asimilación de los valores de sociedades más secularizadas. Estas expectativas son aún mayores que las de generaciones precedentes, que crecieron bajo patrones más tradicionales. Hoy los jóvenes cuestionan más precozmente la legitimidad de la autoridad parental, en parte debido a los contramodelos televisivos y en parte porque sienten que manejan más información y cuentan con más educación que muchos adultos.

Todo esto confluye en el “síndrome de autonomía moral precoz”, vale decir, que los jóvenes consideran que pueden decidir sobre el destino y orientación de sus comportamientos a edades más tempranas que las generaciones anteriores. En buena medida, la crisis de la autoridad parental y docente respecto de los adolescentes se relaciona con este fenómeno.

Sin embargo, a este síndrome se opone el “síndrome de la autonomía material postergada”, según el cual los jóvenes constituyen hogares propios más tardíamente. Los datos apuntan a un fenómeno de

prolongación de su permanencia en la familia de origen, relacionado con mayores dificultades para pasar del ámbito educativo al laboral, y con la demanda de mayor formación impuesta por una fuerte competitividad en el empleo. Esto tiende a retrasar la edad en que los jóvenes se independizan tanto económica como habitacionalmente respecto de sus padres. Esto genera tensión entre la mayor expectativa de autonomía, propia de la actual fase de modernidad, y menores opciones para materializarla en términos de recursos y de espacios, o al menos del tiempo requerido para obtener un empleo que permita dicha autonomía.

Se produce, entonces, una asincronía novedosa entre una precoz expectativa de autonomía moral y una larga postergación de la autonomía material. Muy tempranamente los jóvenes cuestionan la legitimidad de la autoridad parental y esperan ordenar sus vidas conforme a sus propias decisiones, y por consiguiente, durante un período muy largo permanecen asumiendo una libertad moral de adultos, pero perpetuando la heteronomía material de los niños. Se rompe así la imagen de autonomía moral

y material como dos caras de una misma moneda, o bien dos conquistas complementarias y simultáneas en el tiempo. Esta ruptura marca de modo incierto pero profundo la vida en los hogares. Individuación temprana con inserción tardía hacen que durante un largo período juvenil se prolongue esta disociación entre lo moral y lo material, entre lo afectivo y lo productivo. Padres confundidos con hijos enigmáticos forman parte de la relación cotidiana en las familias.



Estructuras familiares, trabajo doméstico y bienestar en América Latina

INTRODUCCIÓN

La familia no es una institución aislada. Los hogares y las organizaciones familiares están ligados al mercado de trabajo y a la organización de redes sociales, por lo que las tasas de fecundidad y de divorcio o los procesos de envejecimiento son parte de procesos sociales, económicos y culturales más amplios, que están también sujetos a las políticas públicas. Como institución social básica, la familia no puede estar ajena a los valores culturales y a los procesos políticos de cada momento o período histórico (Jelin, 2004).

En América Latina las familias sirven de apoyo social y de protección frente a las crisis económicas, el desempleo, la enfermedad y la muerte de alguno de sus miembros. La familia, como capital social, es un recurso estratégico de gran valor, puesto que la limitada cobertura social en algunos países de la región, respecto del trabajo, la salud y la seguridad social, transforma a la familia en la única institución de protección social frente al desempleo, la enfermedad, la migración y otros eventos traumáticos.

Por otra parte, los nuevos enfoques relacionados con políticas sociales transversales e integrales y los programas de superación de la pobreza se centran en las familias. Debido a esta nueva perspectiva, es imprescindible conocer de manera más actualizada las nuevas estructuras y la diversidad de situaciones en el ámbito familiar que hacen necesarios puntos de vista diferenciados en lo relativo a las políticas públicas.

En el décimo aniversario de la proclamación del Año Internacional de la Familia de Naciones Unidas, se presenta en este capítulo un diagnóstico de la situación de las familias en la región latinoamericana que toma en cuenta los cambios ocurridos a partir de los años noventa. Sobre la base de la información comparada proveniente de las encuestas de hogares de las zonas urbanas de 16 países, realizadas en el período 1990-2002, se actualiza el diagnóstico de la situación de las familias en la región latinoamericana en cuanto a su estructura y su relación con el bienestar.

En la primera sección se analizan las relaciones que vinculan a algunos tipos de hogares y familias con las dimensiones demográficas y económicas, y se examinan las estructuras familiares por tipo y etapas del ciclo de vida familiar. Se muestran los cambios ocurridos en las familias durante el período comprendido entre 1990 y 2002, y se hace hincapié en los cambios de las familias nucleares, que son predominantes en la región latinoamericana. En la segunda sección se analiza el bienestar de las familias, y se toma en cuenta la incidencia de la pobreza y la indigencia, la distribución de los hogares en los quintiles de ingreso seleccionados, el número de aportantes económicos al hogar, la cantidad de adultos mayores y dependientes en los hogares. En la tercera sección se analizan especialmente las relaciones entre el trabajo doméstico y el trabajo en el mercado laboral y su distribución por género, sobre la base de la información de encuestas de uso de tiempo en algunos países de la región. En la última sección, considerando los cambios en las familias por la incorporación creciente de las mujeres al mercado laboral, se sugieren algunas políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar, diseñadas para equilibrar el trabajo doméstico y el trabajo remunerado fuera del hogar realizado por la población femenina y masculina.

A. EVOLUCIÓN DE LAS DIVERSAS ESTRUCTURAS FAMILIARES POR TIPO DE HOGAR Y ETAPA DEL CICLO DE VIDA FAMILIAR

Las familias latinoamericanas urbanas muestran una creciente heterogeneidad que se relaciona con la diversidad en las etapas de transición demográfica y con los distintos niveles de desarrollo en que se encuentran los países. En algo más de una década han aumentado notablemente los hogares unipersonales y los de jefatura femenina, y han disminuido las familias nucleares y las biparentales. Puede afirmarse que aun cuando la familia nuclear es la predominante, el modelo tradicional de familia con padre proveedor, madre ama de casa e hijos ya no corresponde a la mayoría de los hogares y familias en América Latina, puesto que sólo se encuentra en un 36% de los hogares. Asimismo, se observa un aumento en la cantidad de familias en la etapa del ciclo de vida familiar de salida de los hijos del hogar y de las familias mayores sin hijos. Hacia el 2002, las familias se concentraban en las etapas de expansión y consolidación, es decir, cuando ya no se tienen más hijos y los mayores permanecen en el hogar.

1. RELACIONES ENTRE LOS TIPOS DE HOGARES Y LAS DIMENSIONES ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS

Se estima que la organización de la familia responde principalmente a las dimensiones económicas y demográficas de los países. En esta sección se examinan someramente algunas posibles relaciones entre los tipos de hogares, las etapas del ciclo de vida familiar, la transición demográfica y el nivel de producto económico de los países.

Se supone que en países en etapa de transición demográfica avanzada se encontrará una mayor

proporción de familias nucleares constituidas por parejas mayores sin hijos, y que habrá un mayor número de hogares unipersonales, correspondientes a personas de mayor edad y a jóvenes con autonomía económica, en tanto que en los países en etapa de transición demográfica incipiente predominarán las familias con hijos pequeños.

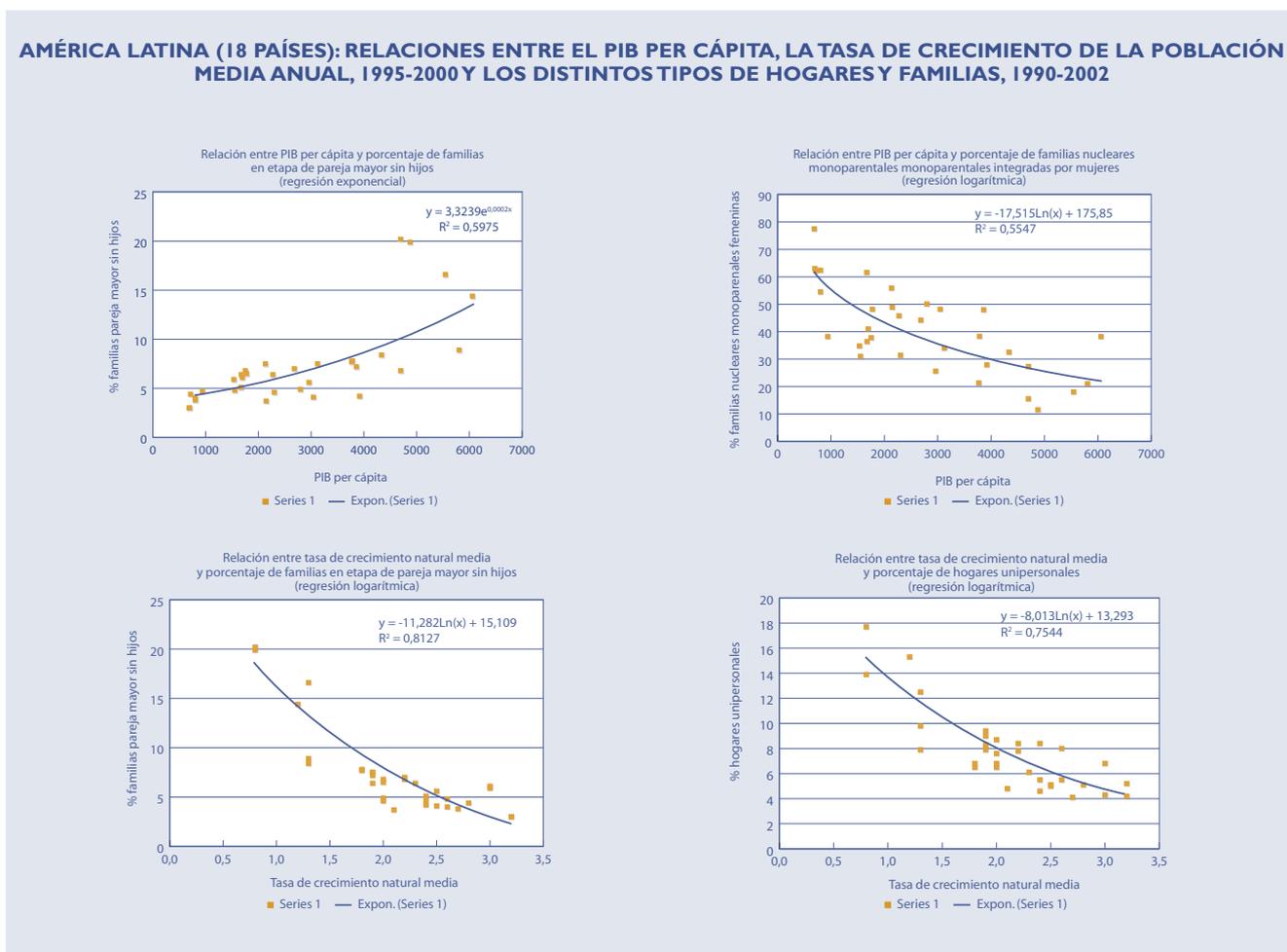
Asimismo, se estima que en países con menor nivel de desarrollo económico aumenta la proporción de familias nucleares monoparentales, y de familias extensas y compuestas, ligadas a procesos de abandono y empobrecimiento, si bien los procesos que estructuran a las familias no son lineales y obedecen

a una multiplicidad de factores, no sólo de tipo económico y demográfico, sino también cultural e institucional. A ello se suman las políticas existentes que afectan la conformación de las familias.

En los gráficos que se presentan a continuación, se muestran algunas estrechas regresiones entre procesos demográficos medidos como tasa de crecimiento media de la población y tipos de familias que reflejan procesos de mayor modernidad, parejas mayores sin hijos y hogares unipersonales. De manera que los países en etapas de transición de-

mográfica más avanzadas, es decir, con tasas medias de crecimiento menores de la población, muestran una mayor proporción de hogares unipersonales y de familias de parejas mayores sin hijos (véase el gráfico IV.1). Las relaciones halladas entre tipo de familia y nivel del PIB per cápita de los países son menos estrechas, sin embargo, existe una relación inversa entre familias monoparentales de jefatura femenina y nivel del producto per cápita y una relación directa entre producto per cápita y porcentaje de familias mayores sin hijos (véase el gráfico IV.1).

Gráfico IV.1



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países, cifras oficiales y estimaciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.

Nota: La tasa de crecimiento natural media de la población entre 1995 y 2000 es una aproximación a las etapas de transición demográfica de los países. De esta forma, las tasas menores representan etapas de la transición demográfica más avanzadas.

2. EVOLUCIÓN DE LAS FAMILIAS SEGÚN LOS TIPOS DE HOGARES

La región latinoamericana presenta una diversidad de situaciones en relación con el tipo de hogares y familias existentes (véase el recuadro IV.1). La distribución de hogares según la estructura de las relaciones de parentesco muestra, además, cambios en el período comprendido entre 1990 y 2002. En ese lapso las familias nucleares continuaron siendo predominantes, pero su porcentaje se redujo del 63,1% al 61,9%, debido principalmente al aumento de los hogares no familiares y, dentro de ellos, de los hogares unipersonales, que en promedio aumentaron en la región del 6,4% al 8,4%.¹ En el año 2002 las familias nucleares variaban entre el 53% de hogares y familias en Nicaragua y el 71% en México y Bolivia (véanse el gráfico IV.2 y el cuadro IV.1). Asimismo, la disminución observada en las familias nucleares biparentales con hijos se explica, en parte, por su transformación en familias monoparentales con hijos, de jefatura masculina, pero, principalmente, de jefatura femenina. Las familias extendidas mantienen su proporción en el período, con gran variabilidad entre países. Hacia el 2002 ascendían al 13,5% en Argentina y al 36% en Nicaragua. Las familias compuestas constituían en el 2002 una pequeña proporción de las familias y variaban entre el 3,9% en República Dominicana y el 0,4% en Argentina.

La tendencia más notable es el aumento de los hogares monoparentales femeninos, un fenómeno ampliamente analizado en la región latinoamericana (CEPAL, 1995, 2003a), que se relaciona, desde

una perspectiva demográfica, con el aumento de la soltería, de las separaciones y divorcios, de las migraciones y de la esperanza de vida. Desde una perspectiva socioeconómica y cultural, obedece a la creciente participación económica de las mujeres, lo que les permite obtener la independencia económica y la autonomía social para constituir o continuar en hogares sin parejas. El aumento de la monoparentalidad se aprecia tanto en las familias nucleares como en las extendidas. En el 2002, alrededor de un quinto de las familias nucleares y más de un tercio de las familias extendidas eran de jefatura femenina. La mayor cantidad de familias nucleares con jefatura femenina se encuentra en Bolivia, Costa Rica, Colombia, Honduras, Panamá y República Dominicana (véanse el gráfico IV.2 y el cuadro IV.1).

El aumento de los hogares no familiares en el período se explica por el aumento de casi dos puntos porcentuales, casi el doble en términos absolutos, de los hogares unipersonales y da cuenta de un nuevo fenómeno en la región, el aumento de las personas que viven solas y que son adultos mayores o jóvenes con recursos económicos que deciden postergar sus uniones. Los hogares unipersonales comprenden alrededor de 7 millones y medio de personas en las zonas urbanas de América Latina. Argentina y Uruguay, muestran la proporción más alta de hogares unipersonales, con cifras de alrededor del 13% y 14%, respectivamente, acorde con el mayor envejecimiento de su población. Los jóvenes que viven solos podrían corresponder a una expresión moderna, individualista y afluente de un modo de vida propio de la modernidad tardía.

¹ Los promedios para América Latina utilizados corresponden en todos los casos al promedio simple de 16 países en 1990 y de 18 países en el 2002.

TIPOS DE HOGARES Y FAMILIAS CONSTRUIDOS A PARTIR DE ENCUESTAS DE HOGARES

A partir de la información registrada en las encuestas de hogares y según la estructura de parentesco de sus miembros y de quién se declara jefe del hogar, los tipos de hogar que se distinguen en este capítulo son los siguientes:

- *Hogares unipersonales*: una sola persona
- *Hogares sin núcleo*: no existe un núcleo conyugal —una relación padre/madre e hijo/hija—, aunque puede haber otros lazos familiares.

Entre los tipos de familias se distinguen los siguientes:

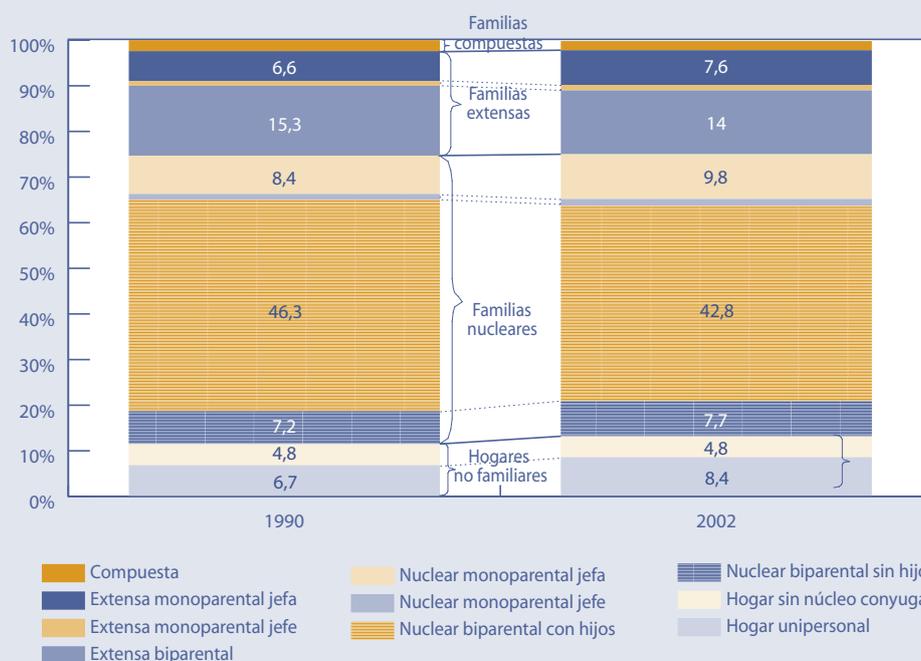
- *Familias nucleares*: padre o madre o ambos, con o sin hijos
- *Familias extendidas*: padre o madre o ambos, con o sin hijos y otros parientes
- *Familias compuestas*: padre o madre o ambos, con o sin hijos, con o sin otros parientes u otras personas no parientes —sin incluir el servicio doméstico que vive con la familia ni sus familiares.

A su vez, las familias pueden ser *biparentales* —pareja con o sin hijos— o *monoparentales* —sólo con un padre, habitualmente la madre, e hijos.

La construcción de los hogares y de las familias a partir de la fuente de información utilizada no permite caracterizar adecuadamente estructuras familiares donde alguno de sus miembros ha migrado para enviar remesas de dinero de actividades laborales alejadas del lugar de residencia, como ocurre en familias monoparentales que en rigor son biparentales u hogares no familiares que sí lo son, entre otros. En este sentido, es importante destacar las tres dimensiones y unidades para el estudio de las familias, a saber: la dimensión teórica con unidades de análisis, la metodológica con unidades de observación y la empírica con unidades de cuenta (Torrado, 1981).

Gráfico IV.2

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): CAMBIOS EN LOS TIPOS DE HOGARES Y EN LAS FAMILIAS, ZONAS URBANAS, 1990-2002 a/
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a/ Promedio simple.

3. LA DIVERSIDAD DE LAS FAMILIAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA

Durante largo tiempo, la familia nuclear, con ambos padres e hijos, fue considerada, y aún lo es, el paradigma de familia ideal y el modelo de familia sobre el cual se planifican las políticas públicas. Sin embargo, la familia nuclear esconde una gran diversidad de situaciones que pueden examinarse a partir de la información proveniente de las encuestas de hogares.²

El análisis más detallado de la información revela que existe una proporción importante de familias nucleares monoparentales, de familias sin hijos o en las que ambos padres trabajan remuneradamente. Los principales cambios en el período comprendido entre 1990 y 2002 ocurren en relación con el trabajo femenino, puesto que una proporción creciente de mujeres se ha incorporado al trabajo remunerado. En América Latina, entre 1990 y 2002, la tasa de participación laboral femenina en las zonas urbanas aumentó del 37,9% al 49,7% (CEPAL, 2003a).

En el conjunto de las zonas urbanas de los 18 países de América Latina, con respecto a las que se cuenta con información hacia el año 2002, tan sólo un 36% de las familias se ajusta al modelo tradicional de la familia nuclear, con ambos padres e hijos, y en las que la cónyuge realiza las actividades domésticas dentro del hogar; en Uruguay sólo el 28% de las familias se ajusta a este modelo de familia nuclear (véase el cuadro IV.2). En las áreas urbanas de la región, un 19% de las familias nucleares son monoparentales y, de ellas, un 84% tiene jefatura femenina y un 16% jefatura masculina. Un 12% de familias nucleares están constituidas por parejas sin hijos, y en el 5% de ellas ambos miembros de la pareja trabajan (véase el gráfico IV.3). El examen de la información de la última década muestra que desde principios de los años noventa, con las únicas excepciones de Chile y México, ese modelo de familia nuclear tradicional ya no era el mayoritario en la región latinoamericana.

Entre los cambios más notorios del período que abarca de 1990 a 2002 se observa la disminución del tipo de familia nuclear tradicional y el aumento del 27% al 33% de las familias biparentales con hijos en las que ambos padres desarrollan actividades remuneradas. La mayor proporción de familias nucleares con dos proveedores económicos e hijos se encuentra en Bolivia (45%) y en Perú (42%) (véase el cuadro IV.2).

Asimismo, aumenta la proporción de familias nucleares monoparentales del 15% a alrededor del 19%, al igual que las familias nucleares con jefas que trabajan y las de jefatura masculina (véanse el gráfico IV.3 y el cuadro IV.2). La mayor proporción de familias con jefas que trabajan remuneradamente se encuentra en Nicaragua, con alrededor del 14% de los hogares nucleares. Cabe destacar que el mayor porcentaje de familias nucleares monoparentales con jefatura masculina en 2002 se encuentra en Ecuador y Perú (casi el 4% de los hogares nucleares), lo que coincide con el aumento de las migraciones femeninas en ambos países (véase el cuadro IV.2).

En términos generales, dado el aumento de las familias monoparentales, puede inferirse que si bien la carga total del trabajo de socialización disminuyó al reducirse el número de niños por hogar, también descendió el número de adultos que tenían a su cargo esa socialización, lo que es especialmente notorio en el caso de las mujeres, que en una cantidad apreciable de familias tienen bajo su exclusiva responsabilidad las tareas productivas y reproductivas. A ello se suma una creciente complejidad de las tareas de socialización en sociedades cada vez más heterogéneas y con más riesgos.

Con respecto al modelo tradicional de familia, Jelin (2004) sostiene que entre los hogares con mujeres cónyuges de entre 20 y 60 años en el área metropolitana de Buenos Aires, el modelo del proveedor masculino bajó del 74,5% al 54,7% entre 1980 y el 2000, mientras que el modelo de hogar con

2 La información proveniente de las encuestas de hogares no permite distinguir a las familias nucleares complejas o reconstituidas, es decir, las formadas a partir de parejas que se divorcian o se separan y constituyen nuevas uniones; por lo tanto, aun cuando no correspondan a la primera unión, son todas consideradas como familias nucleares biparentales (véase el recuadro IV.1). Tampoco es posible distinguir a las familias en las que alguno de sus miembros es un emigrante temporal o permanente, y que pueden aparecer como familias monoparentales.

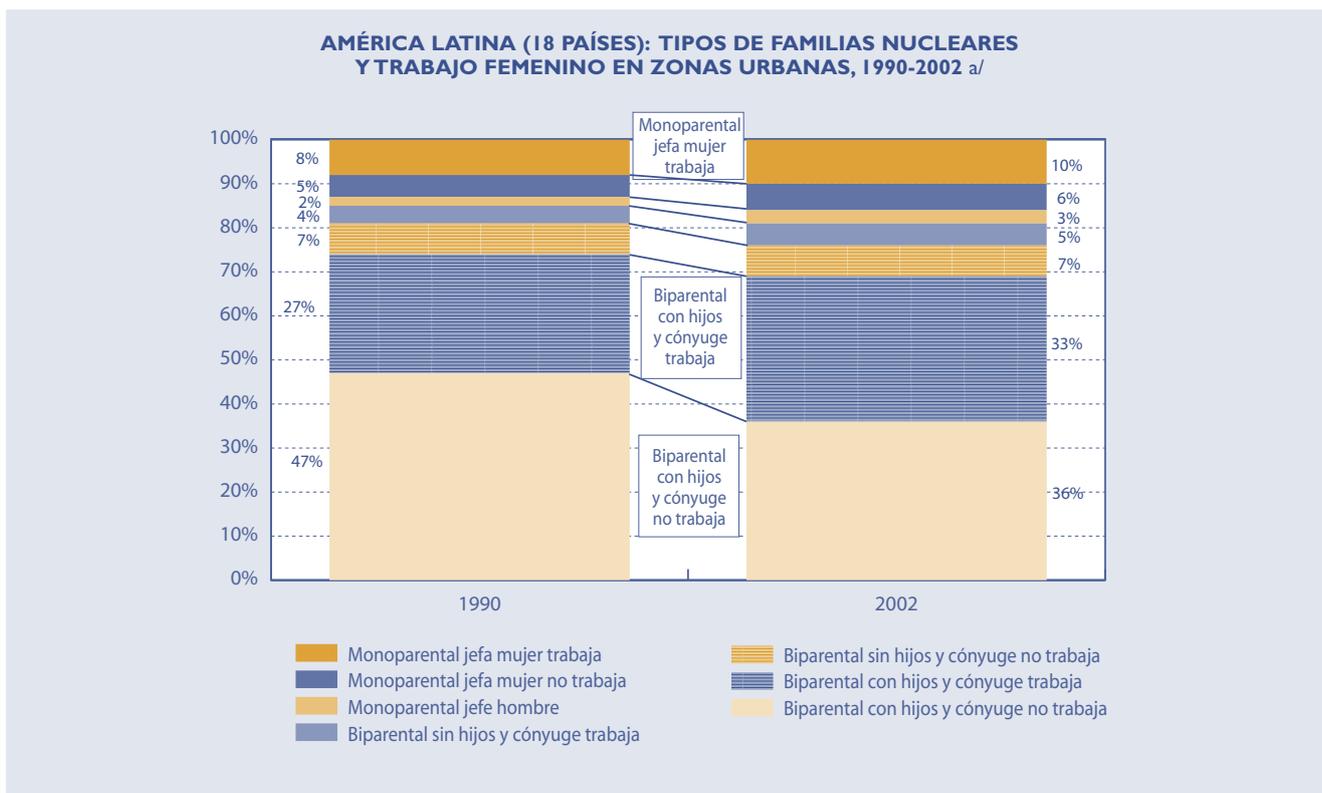
dos proveedores aumentó del 25,5% al 45,3%. Este cambio ocurrió en familias con o sin niños pequeños, aunque es más común en hogares con un solo hijo residente que en otros hogares con más niños y, como podía esperarse, es más común entre mujeres con niveles altos de educación. Además, es más común en los estratos socioeconómicos más altos y en los más bajos, que en las capas medias (Wainerman, 2003).

Tradicionalmente, la mayoría de las políticas gubernamentales se han construido a partir de un concepto de familia “funcional” donde hay un padre y una madre vinculados por el matrimonio con perspectiva de convivencia de larga duración, hijos e hijas propios y en donde los roles de género están perfectamente definidos: las mujeres se encargan de los trabajos domésticos y los hombres de los extradomésticos. Este tipo de familia presupone derechos y obligaciones tácitamente definidos y una interacción constante entre los miembros del grupo fami-

liar, y en él subyace un modelo de responsabilidades asimétricas y con relaciones poco democráticas (Jusidman, 2003).

La nueva configuración de los hogares y las familias latinoamericanas señala la necesidad de elaborar nuevas políticas dirigidas tanto a hombres como a mujeres, como padres, y a las instituciones sociales que deben apoyar a las familias en la cobertura de sus necesidades. Estas políticas deben tener en cuenta una doble perspectiva: la conciliación de la familia y el trabajo, y el apoyo necesario para el cuidado de los hijos y de los adultos mayores. Muchos de los cambios observados en torno a la familia son el resultado de deseos y opciones individuales y no son fruto de patologías sociales. Por lo tanto, mediante las políticas deben facilitarse y no limitarse las opciones individuales por medio del otorgamiento de los recursos necesarios para el bienestar de todos sus miembros (Esping-Andersen, 2003).

Gráfico IV.3



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ Promedio simple.

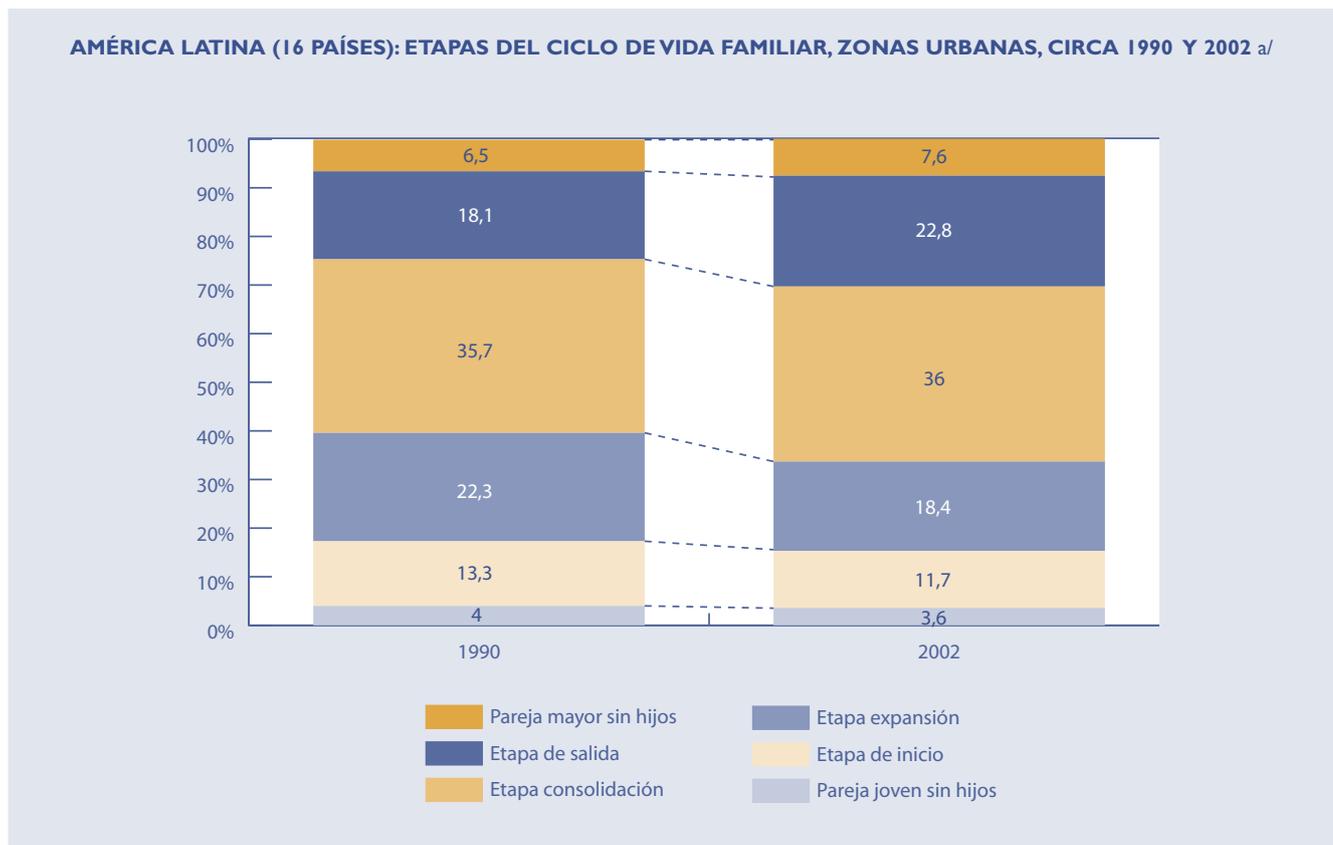
4. EVOLUCIÓN DE LAS FAMILIAS SEGÚN LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

El tránsito de los hogares de tipo familiar a lo largo del tiempo ha dado origen al concepto de etapas del ciclo de vida familiar, que se refiere a las diversas fases por las que estos pueden pasar. Se hacen, al respecto, distinciones entre la etapa de inicio de la familia, en la que empiezan a nacer los hijos; la de expansión, en la que aumenta el número de hijos; la de consolidación, en la que dejan de nacer los hijos; y la de salida, en la que los hijos pasan a constituir hogares distintos (véanse el recuadro IV.2 y el gráfico IV.4).

La distribución de las familias en las seis etapas del ciclo de vida familiar construidas sobre la base

de la información de las encuestas de hogares revela que la mayoría de las familias latinoamericanas se encuentra en la etapa del ciclo de vida familiar de expansión y consolidación. Corresponde a la etapa del ciclo de vida familiar en la que existe una fuerte presión sobre los recursos familiares, ya que el tamaño de la familia es el mayor y la edad de los hijos, tanto mayores como menores, los hace económicamente dependientes. La variación entre países, en términos del ciclo de vida familiar, se relaciona con las distintas etapas de transición demográfica en que se encuentran. De esta forma, en países como Bolivia, que se encuentra en la etapa de transición demográfica moderada, se observa una proporción mayor de familias, alrededor del 16%, en la etapa inicial con hijos menores, al igual que en Honduras, que se ubica entre los países de transición plena, con una cifra del 18%.

Gráfico IV.4



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Promedio simple.

TIPOLOGÍA DEL CICLO DE VIDA FAMILIAR CONSTRUIDA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES

En esta tipología, exclusiva para hogares con núcleo conyugal, biparental o monoparental, las variables de referencia son la edad del hijo mayor, la edad del hijo menor y la edad de la madre. Especial relevancia tiene la edad del hijo menor, pues permite inferir la existencia de una mayor carga de trabajo doméstico en los hogares, lo que condiciona las actividades domésticas y las necesidades prioritarias vinculadas a la vida familiar.

- Pareja joven sin hijos: es la pareja que no ha tenido hijos y en la que la mujer tiene menos de 40 años.
- Etapa de inicio de la familia: corresponde a las familias que sólo tienen uno o más hijos de 5 años o menos.
- Etapa de expansión: corresponde a las familias cuyos hijos mayores tienen entre 6 y 12 años, independientemente de la edad del hijo menor.
- Etapa de consolidación: corresponde a las familias cuyos hijos tienen entre 13 y 18 años de edad, o a aquellas en que la diferencia de edad entre los hijos mayores y menores es generalmente de 12 a 15 años. Es probable que en esta etapa del ciclo de vida familiar se concentre también la mayor proporción de familias reconstituidas, ya que las grandes diferencias de edad entre los hijos mayores y menores podrían deberse, en algunos casos, a la existencia de nuevas uniones con hijos pequeños.
- Etapa de salida: corresponde a las familias cuyos hijos menores tienen 19 años o más.
- Pareja mayor sin hijos: es la pareja sin hijos en la que la mujer tiene más de 40 años.

Es preciso destacar que el concepto de ciclo de vida familiar es temporal y longitudinal para una misma familia y que esta tipología corresponde a un corte en un momento del tiempo. Sin embargo, permite una aproximación respecto de las etapas en que se encuentran distintas familias en un momento dado.

Diversos estudios recientes en la región latinoamericana muestran que las parejas tienden a unirse con el nacimiento del primer hijo, lo que podría explicar la disminución observada en la proporción de parejas jóvenes sin hijos (Guzmán y otros, 2001). Las dificultades que enfrentan los jóvenes de ambos sexos para encontrar trabajo y, en algunos países, para encontrar vivienda, también podrían contribuir a explicar esta disminución.

Existe un aumento de la proporción de familias en la etapa de salida, es decir, cuando los hijos ya tienen más de 18 años, y de las parejas mayores que no tienen hijos o cuyos hijos constituyeron nuevas familias. Este aumento en la cantidad de familias en etapas del ciclo de vida más tardío se explica por el aumento en el número de países que

se encuentran en las etapas de transición demográfica avanzada y el consecuente envejecimiento de la población. Argentina y Uruguay presentan la mayor proporción de familias en la etapa de salida de los hijos, 25% y 27% respectivamente, y de pareja mayor sin hijos, 14% y 20% respectivamente (véase el cuadro IV.3).

La etapa del ciclo de vida familiar en la que se encuentran define necesidades diversas para las familias y, en especial, para las familias pobres. Por tanto, resulta interesante mostrar un estudio sobre las familias en la extrema pobreza incorporadas en el Programa Puente de Chile, orientado a disminuir la extrema pobreza, que muestra demandas diferenciadas según tipo y etapa del ciclo de vida familiar (véase el recuadro IV.3).

CHILE: DEMANDAS DE LAS FAMILIAS SEGÚN TIPO Y CICLO DE VIDA AL PROGRAMA PUENTE

El Programa Puente fue diseñado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) - Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) durante el 2001, para poner en marcha la “Estrategia de Intervención Integral a Favor de Familias en Extrema Pobreza”. Esta Estrategia fue elaborada a partir del perfil de los hogares pobres e indigentes construido sobre la base de la información de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).

A partir de este perfil de hogares y familias, se proponen modelos de intervención para brindar un apoyo integral a familias que viven en condiciones de extrema pobreza, de manera que logren satisfacer sus necesidades básicas gracias a la generación de ingresos económicos superiores a la línea de indigencia, y activen las habilidades necesarias para su integración a las redes locales disponibles.

Desde su inicio en el 2002 y hasta el 2004, los apoyos familiares han incorporado 123.955 familias al programa. Mediante el trabajo de los apoyos familiares con cada familia, se ha logrado acumular un valioso conocimiento respecto de cómo son las familias que viven en situación de extrema pobreza. La caracterización de las familias que participan en el Programa Puente incluye la tipología de ciclos de vida familiar que ha elaborado la CEPAL en la realización de los análisis sociodemográficos (CEPAL, 2001), con la información disponible de un total de 31.114 familias que representaban el 42,2% del universo definido.

Respecto de la distribución de las familias, el 47,1% se encuentra en el ciclo de expansión o crecimiento, mientras que el 33,6% se encuentra en el de consolidación y salida. Se observa que las familias nucleares biparentales están principalmente en etapa de expansión, mientras que las familias extensas biparentales se ubican predominantemente en la fase de consolidación y, en un segundo lugar, en la de expansión.

Las condiciones mínimas de calidad de vida, tal como las considera el Programa se relacionan con la identificación, la salud, la educación, la dinámica familiar, la habitabilidad, el trabajo y los ingresos. Al centrar el análisis en los perfiles de estos ciclos, es posible observar que el porcentaje de familias que plantean demandas varía en función de la etapa del ciclo de vida en la que se encuentran. En todas las etapas del ciclo las familias de jefatura femenina son las que más demandan al programa y la principal demanda en el conjunto de familias, independientemente del ciclo, es la de habitabilidad. Sin embargo, en el ciclo de inicio y en el de crecimiento o expansión, la demanda que sigue a la de habitabilidad es la de ingresos, en tanto en las familias de parejas mayores sin hijos la principal demanda se relaciona con la salud.

Fuente: Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) - Programa Puente, “¿Cómo son las familias que construyen el Puente?”, serie *Reflexiones desde el Puente: cuadernillo de trabajo*, N° 2, Santiago de Chile, agosto del 2004.

B. EVOLUCIÓN DE LAS DIVERSAS ESTRUCTURAS FAMILIARES EN RELACIÓN CON EL BIENESTAR

La calidad de vida y el bienestar de las familias se relacionan con la estructura de los hogares y las familias, así como con la etapa del ciclo de vida familiar en el que se encuentren. En la región latinoamericana los hogares de menor tamaño, es decir, unipersonales, las familias nucleares sin hijos, y las familias monoparentales con jefe hombre, se concentran en el quintil superior de ingresos. Por el contrario, las familias de mayor tamaño, es decir, las nucleares biparentales con hijos, extendidas y compuestas, y las monoparentales con jefa, se ubican en el veinte por ciento de hogares más pobres.

En cuanto a la incidencia de pobreza según la etapa del ciclo de vida familiar, se encuentra una menor pobreza en la etapa de la pareja joven sin hijos, en tanto la mayor incidencia de pobreza ocurre en la etapa de expansión, cuando aumenta el número de hijos y éstos son dependientes. Alrededor del 63% de los hogares y familias en la región latinoamericana tiene dos o más dependientes económicos, y un 46% de los hogares y familias cuentan con dos o más aportantes económicos al hogar. Las familias nucleares biparentales con hijos, las extendidas y las compuestas, además de tener más aportantes económicos, tienen dos o más dependientes a cargo, lo que incide en su menor calidad de vida.

1. ESTRUCTURA FAMILIAR Y BIENESTAR

La vinculación de la familia con los procesos de desigualdad social es de larga data. Se estima

que la reproducción de las desigualdades sociales se concreta principalmente por dos medios. El primero se relaciona con el sistema de parentesco y con las condiciones de origen de las familias, que proporcionan a las personas el acceso a los activos sociales, económicos y simbólicos; el segundo se refiere al acceso y a la jerarquía de las ocupaciones.

El tipo de familia al que pertenece condiciona las posibilidades de bienestar de las personas. La distribución de los tipos de hogares en los diferentes quintiles de ingreso muestra que hay una tendencia a la concentración de determinados tipos de hogares entre los más pobres, incluidos en el quintil 1, o entre los más ricos, incluidos en el quintil 5. En el 2002, las personas con recursos, es decir las que se hallaban en el 20% superior de ingresos, eran las que podían constituir hogares unipersonales, de hecho, un 41,6% de estos hogares se ubican en el quintil 5 (véase el gráfico IV.5). De la misma forma, los hogares nucleares sin hijos y los de jefatura masculina también tienen mayor capacidad económica,

ubicándose en una mayor proporción en el quintil de familias con más recursos. A su vez, las familias nucleares monoparentales con jefas se concentran en proporción mayor en el 20% de hogares con ingresos más bajos.

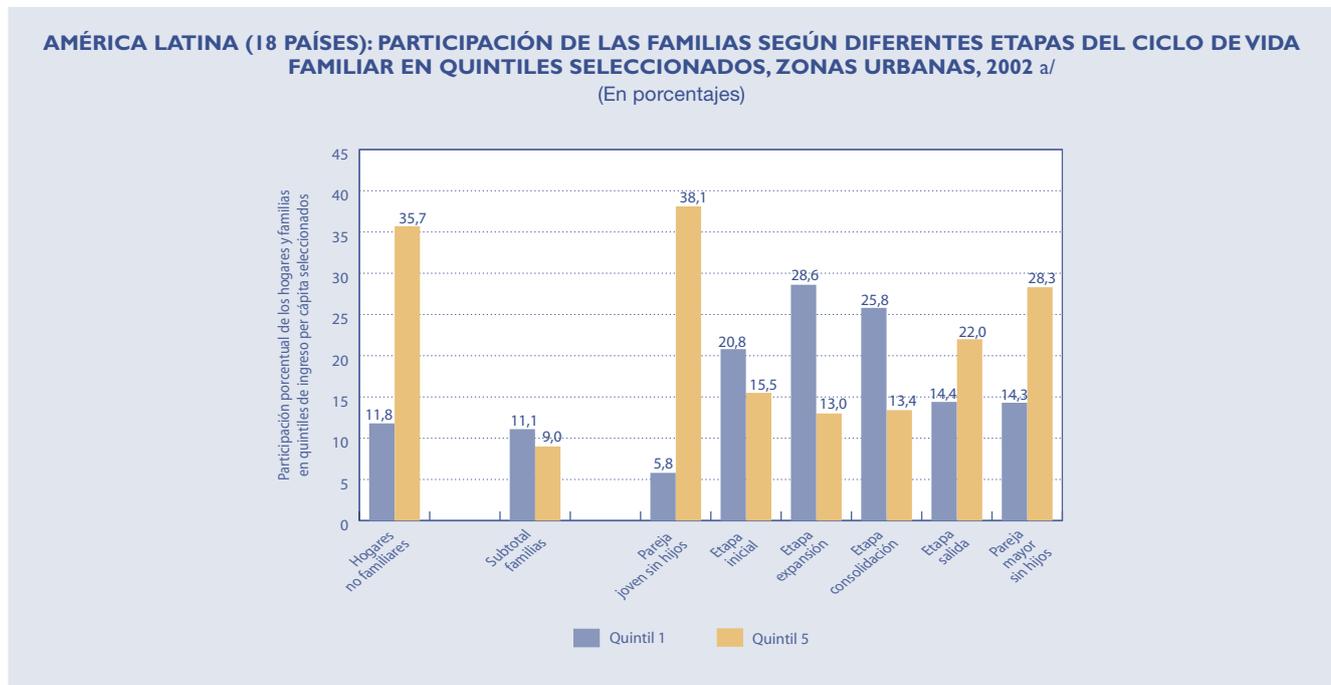
Si se examina la incidencia de la pobreza y de la indigencia según el tipo de hogar se confirma que la mayor incidencia de la pobreza se encuentra entre las familias extendidas y compuestas y, entre ellas, en los hogares monoparentales con jefa. Asimismo, se observa una mayor incidencia de la pobreza en las familias nucleares y, entre ellas, las nucleares biparentales con hijos y las monoparentales con jefatura femenina (véanse el gráfico IV.6 y el cuadro IV.4). La menor incidencia de pobreza y de la indigencia ocurre en los hogares unipersonales y en los nucleares sin hijos, que corresponden a parejas que recién inician el ciclo de vida familiar y a las parejas mayores cuyos hijos han constituido sus propios hogares.

Sin duda que la magnitud total de la pobreza en cada país definirá la pobreza existente en cada tipo

de hogar o familia. Sin embargo, es posible reconocer variaciones en la incidencia de la pobreza según los tipos de hogar, incluso en los países con mayor pobreza, como Honduras y Nicaragua, en cuyos hogares y familias la pobreza incide en diferente medida. En estos países la pobreza es menor en los hogares unipersonales donde alcanza a menos de la mitad de la pobreza total y es mayor en el caso de las familias extensas, las nucleares monoparentales con jefas y las nucleares biparentales con hijos (véase el cuadro IV.4).

El examen de la pobreza y la indigencia en relación con las etapas del ciclo de vida familiar confirma la menor incidencia de pobreza en los hogares de parejas sin hijos, aunque es levemente superior en los hogares de parejas mayores sin hijos que de parejas jóvenes (véase el gráfico IV.7). Las familias con hijos que se encuentran en las etapas de inicio, expansión y consolidación son las que tienen una mayor incidencia de la pobreza e indigencia, apreciándose una mayor pobreza en las etapas de expansión de las familias por su mayor carga de hijos.

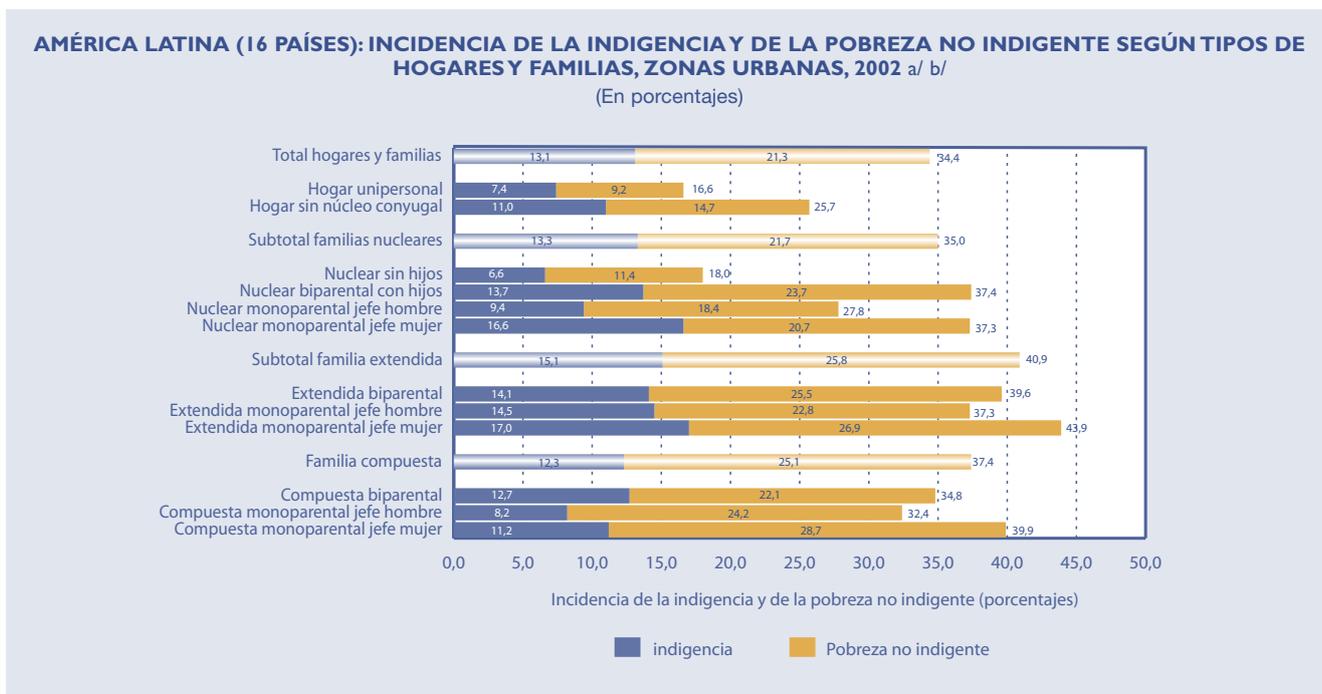
Gráfico IV.5



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a/ Promedio simple.

Gráfico IV.6

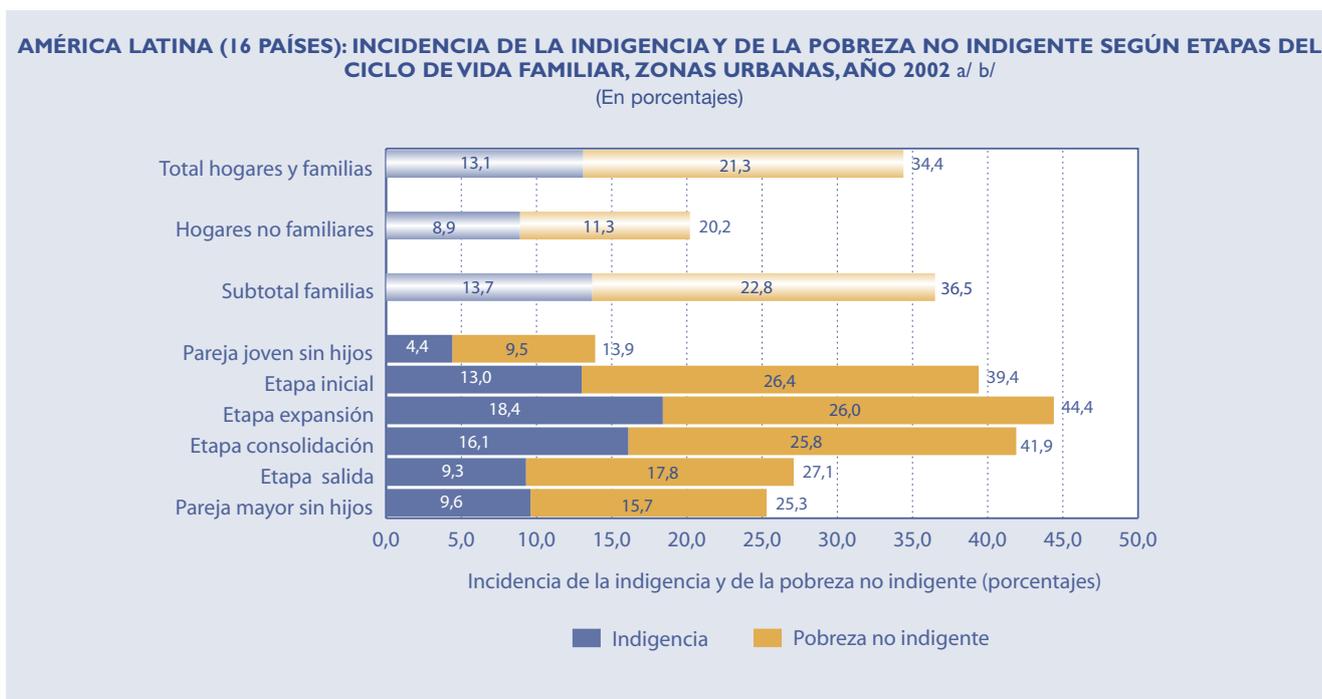


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a/ Promedio simple.

b/ La cifra presentada fuera de la barra corresponde a la incidencia de la pobreza total, incluida la indigencia.

Gráfico IV.7



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a/ Promedio simple.

b/ La cifra presentada fuera de la barra corresponde a la incidencia de la pobreza total, incluida la indigencia.

2. FAMILIAS E INGRESOS FAMILIARES

Una de las principales funciones de las familias es proveer de los recursos económicos a sus miembros para asegurar su bienestar. En la región latinoamericana la situación de las familias en cuanto a dependientes y aportantes económicos al hogar varía en función del tipo de familia del que se trate.

En la región no todos los hogares y las familias reciben ingresos laborales. De hecho, la mayor proporción de hogares que no reciben ingresos laborales se encuentra entre los hogares unipersonales, a pesar de que la constitución de esos hogares requiere de recursos económicos. Esta aparente contradicción se explica al observar que estos hogares están constituidos principalmente por adultos mayores, que reciben ingresos de pensiones y jubilaciones, y por jóvenes, que pueden recibir recursos económicos de sus padres.

Otros hogares y familias analizados son los que tienen dos o más aportantes. Por sus características, los hogares nucleares monoparentales tienen una menor probabilidad de contar con más de un aportante, ya que el segundo aportante —al no existir una pareja— sólo puede ser un hijo o hija. Por tanto, no resulta sorprendente que más de la mitad de las familias nucleares biparentales tengan dos o más aportantes al hogar, y que haya un mayor número de aportantes económicos en las familias nucleares biparentales con hijos que en las que no tienen hijos. Esto último puede parecer extraño si suponemos que los hijos son un impedimento para el ingreso laboral de las cónyuges. La explicación residiría en que las familias con hijos son familias en etapas más tempranas del ciclo de vida familiar y

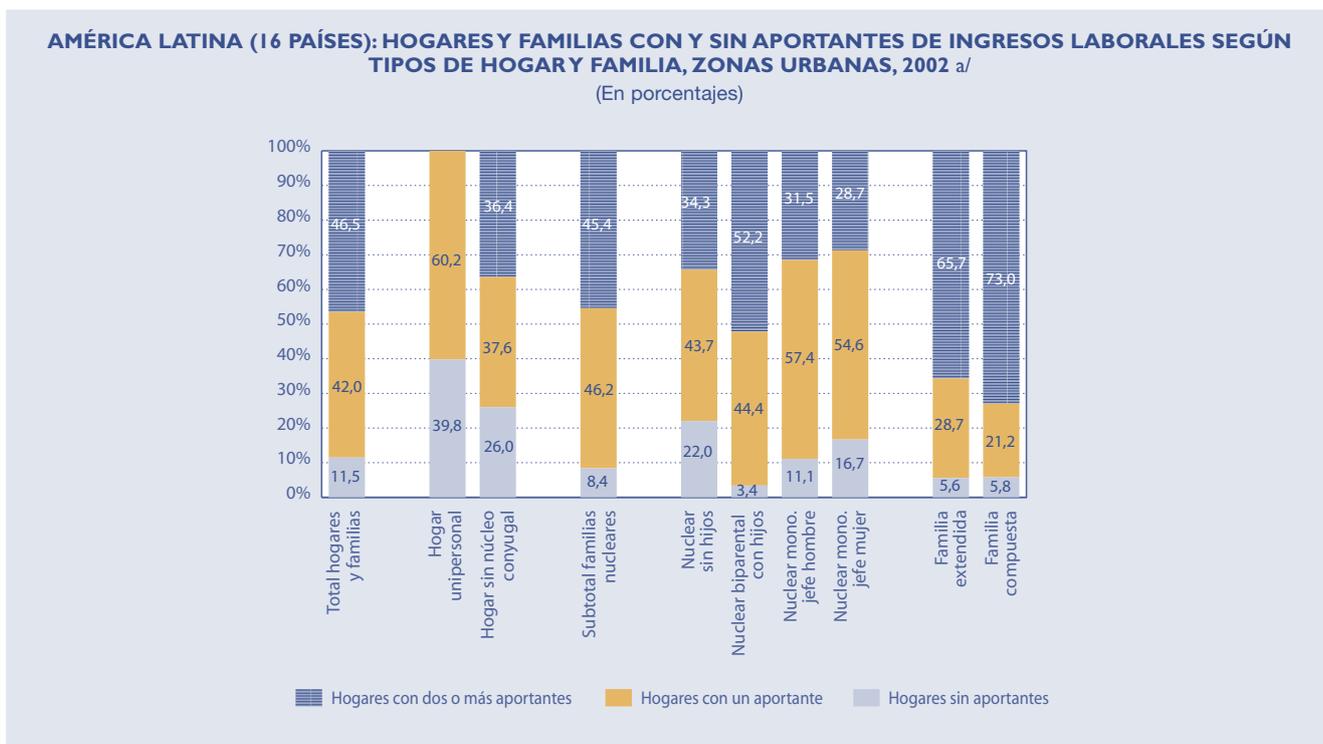
personal, y por tanto las cónyuges son más jóvenes y más educadas, lo que les da más posibilidades de ser activas económicamente.

Asimismo, la información para el conjunto de la región confirma que la constitución de familias extendidas y compuestas es un mecanismo adecuado para aunar recursos económicos y constituye una estrategia de supervivencia familiar. Al respecto, resulta ilustrativo que más del 65% de esas familias cuenten con dos o más aportantes económicos (véase el gráfico IV.8).

Además, en la región latinoamericana, las familias con dos o más dependientes constituyen el 68% del total de hogares y familias. El mayor porcentaje de hogares y familias con dos o más dependientes se encuentra en las familias nucleares biparentales con hijos, y en las extendidas y compuestas. La mayor proporción de hogares sin dependientes se encuentra entre los unipersonales y los nucleares sin hijos. Solo un 11% de los hogares no tiene ningún dependiente a cargo y el 20,7% tiene un solo dependiente.

Se prevé que entre los períodos 1985-1990 y 2000-2005 la esperanza de vida de la población de América Latina aumente de 67,3 a 71,9 años (CEPAL, 2004d). Según ello, la cantidad de hogares y familias en los que residen adultos mayores también se incrementará. En 2002, los hogares y familias con uno o más adultos mayores de 65 años constituían un quinto de los hogares latinoamericanos. Los adultos mayores se concentran en los hogares sin núcleo conyugal, los unipersonales y entre las familias nucleares biparentales sin hijos (véase el gráfico IV.10).

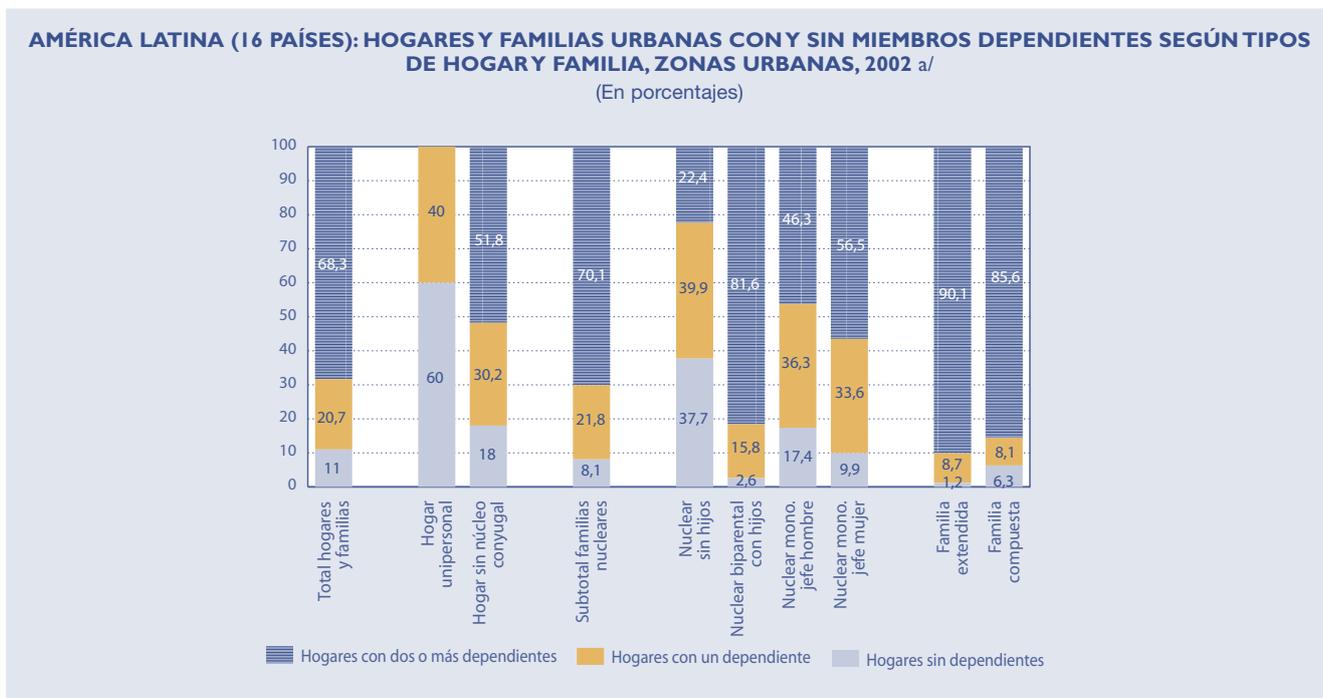
Gráfico IV.8



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a/ Promedio simple.

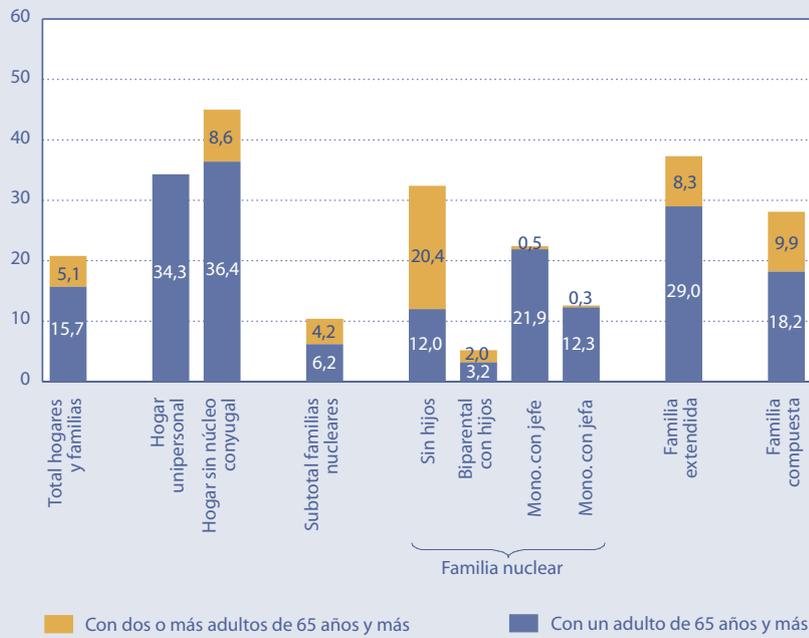
Gráfico IV.9



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a/ Promedio simple.

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): HOGARES Y FAMILIAS URBANAS CON ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS, 2002 a/
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a/ Promedio simple.

C. LAS FAMILIAS Y LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

La distribución del trabajo doméstico y del trabajo remunerado continúa siendo muy desigual entre hombres y mujeres. Aun cuando la información sobre distribución del trabajo dentro del hogar es escasa, en todos los países la participación femenina es notablemente mayor que la masculina en el ámbito doméstico, independientemente del aumento de las tasas de actividad económica de las mujeres y de los hogares con dos o más proveedores.

1. LA DIVISIÓN DEL TRABAJO POR GÉNERO DENTRO Y FUERA DEL HOGAR

Uno de los conceptos clave en el análisis de las interrelaciones entre trabajo y familia ha sido la noción de división sexual del trabajo. Este concepto permite vincular analíticamente ambas esferas y destacar sus mecanismos de relación e interdependencia con la reproducción social, que refiere al cuidado diario, generacional y social de la población. Ha resultado claro en muchos estudios la participación desigual de hombres y mujeres en el trabajo y la familia. La inserción diferencial en el mercado de trabajo contribuye a que la participación de la mano de obra familiar tenga un efecto distinto en la homogeneidad o la heterogeneidad ocupacional de los hogares y en su calidad de vida. En la medida en que la creciente incursión de las mujeres en el trabajo remunerado no ha estado acompañada de una participación equivalente de los varones en la reproducción doméstica, se ha multiplicado la carga de trabajo que pesa sobre ellas (Ariza y de Oliveira, 2004).

La producción de bienes y servicios que tiene lugar en la esfera familiar se encauza a través del trabajo no remunerado, no tiene visibilidad pública ni aparece en los registros laborales, por lo cual ha tendido a considerarse como no trabajo, según la clásica asociación entre trabajo y empleo remunerado (Carrasco, 2003). Asimismo, la división por sexo del trabajo, consolidada desde la industrialización, asocia (más en el imaginario colectivo que en la realidad) la actividad masculina con la producción mercantil y la femenina con la actividad familiar doméstica. Esta rígida distribución de tareas ha llevado a ocultar la contribución al bienestar familiar y social de una parte importante del trabajo realizado por las mujeres.

Es importante trabajar con indicadores de las actividades realizadas en la esfera doméstico-familiar en interrelación con los referidos a otros ámbitos económicos y sociales. La ausencia de investigaciones y de políticas orientadas a los nuevos tipos de familias impide analizar el cambio en las funciones. Sin embargo, algunos estudios de caso informan acerca de la modificación en los patrones paternos

y maternos en diversos grupos etarios, así como de cambios en las estructuras familiares, que incluyen familias complejas, con hijos de diversas uniones. Al respecto, se sugiere distinguir entre conceptos como paternidad o maternidad social y biológica o papel paterno o materno y paternidad o maternidad biológica. Una revisión de estudios sobre la participación de los hombres, como padres, señala la necesidad de diseñar políticas y programas orientados a la participación activa de los hombres en el cuidado de los hijos, y destaca que la presencia de un padre que ejerce su papel de tal y que no es violento, sea biológico o no, es positiva para los niños, para el ingreso familiar, para las mujeres y para ellos mismos (Barker, 2003).

La falta de valoración monetaria del trabajo doméstico no remunerado impide evaluar el aporte económico real de las mujeres, tanto al desarrollo como a la reducción de la pobreza (CEPAL, 2004e). La elaboración de encuestas sobre el uso del tiempo se torna esencial para comprender los cambios y reestructuraciones que se producen respecto de la inserción de la mujer en el mercado laboral, y constituyen un aporte cuantitativo básico para conocer la estructura del trabajo doméstico, determinado fundamentalmente por el estrato socioeconómico de la familia, la etapa del ciclo en la que se encuentran sus miembros y el lugar de residencia.

El uso del tiempo en general y la realización de actividades domésticas no remuneradas presentan diferencias significativas entre varones y mujeres, pues el modelo a partir del cual se estructuran nuestras sociedades relega a la mujer al espacio privado, al lugar de la casa y a la realización de las labores reproductivas. El hombre, en cambio, se asocia a lo público y a la realización de las funciones productivas. Otro factor de incidencia en las variaciones del tiempo asignado al trabajo reproductivo en el interior del hogar es la etapa del

ciclo de vida en la que se encuentran los miembros. Resulta diferente la distribución de tiempo dedicado al trabajo doméstico según la edad de la mujer, su estado civil, el número de hijos o hijas que viven en el hogar y la edad de estos. La composición y las funciones del trabajo doméstico cambian considerablemente si la mujer es joven, soltera y tiene un hijo o hija, con respecto a una mujer casada con más de dos hijos o hijas. El examen del trabajo doméstico en el grupo familiar no puede excluir como eje de análisis la etapa del ciclo de vida del grupo familiar, lo que enriquece el conocimiento del trabajo doméstico y su funcionamiento en las diversas estructuras familiares.

2. RESULTADOS DE DOS ENCUESTAS DE USO DE TIEMPO EN MÉXICO Y URUGUAY

Los cambios en los patrones de trabajo relacionados con el género no fueron acompañados por modificaciones significativas en la esfera doméstica. No se observan mayores transformaciones en el reparto del trabajo doméstico que supongan responsabilidades domésticas compartidas. Si bien la información existente en el nivel regional, sobre la base de encuestas de uso de tiempo, es escasa y no comparable entre sí (véanse el recuadro IV.4 y CEPAL, 2003a), todos los estudios realizados muestran que, tanto en países desarrollados como en desarrollo, las mujeres ejecutan la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado (Araya, 2003, Carrasco, 2003, García, 2003, Aguirre, 2003). Esta situación se mantiene incluso cuando las mujeres trabajan en forma remunerada y a tiempo completo. Algunas investigaciones recientes cuantifican la sobrecarga de las mujeres mexicanas de 12 años y más que realizan trabajo doméstico y que trabajan en el mercado laboral, y muestran que su jornada semanal excede en promedio 9,3 horas a la de los varones (Ariza y de Oliveira, 2004).

LA MEDICIÓN DEL TRABAJO EN LAS ENCUESTAS DE USO DE TIEMPO

A partir de los últimos años se han desarrollado nuevas herramientas capaces de informar sobre el trabajo no remunerado y, en particular, sobre el trabajo doméstico. Este tipo de instrumentos, sobre todo las encuestas de uso del tiempo, ha hecho posible contar con importantes bancos de datos que muestran la multiplicidad de tareas que componen el trabajo del hogar, el tiempo que ocupa cada una de las actividades y el reparto desigual del trabajo familiar doméstico entre mujeres y hombres. No obstante, a pesar de la disponibilidad de datos sobre empleo y trabajo familiar doméstico, para llevar a cabo una aproximación al trabajo desde una perspectiva sistémica, no es habitual que se considere la interrelación entre ambos trabajos.

El conflicto se produce, en parte, por el hecho de que las cifras obtenidas de las diversas fuentes existentes, sobre empleo y trabajo familiar doméstico, no siempre resultan compatibles entre sí. Suelen referirse a poblaciones y a períodos distintos, utilizan metodologías diferentes o ambas cosas a la vez. A esta dificultad debe agregarse que los datos sobre trabajo remunerado y sobre actividades familiares se recogen en estadísticas separadas y se interpretan en dos planos analíticos diferentes, por una parte, el mundo del empleo, y por otra, el mundo familiar.

Sin embargo, el examen separado de los datos de empleo y de trabajo doméstico impide observar la marcada interrelación entre empleo y trabajo familiar, lo que crea una realidad ficticia de trabajadoras y trabajadores que participan en el mercado del trabajo en condiciones económicas similares y expulsa al terreno de lo no económico las “restricciones familiares” y la división por sexo del trabajo (Carrasco, 2003).

De esta forma, las estadísticas tradicionales se muestran poco útiles para analizar el trabajo y el empleo femenino, pues no permiten analizar las diferencias por sexo respecto del trabajo o del empleo, ni estudiar los mecanismos que regulan la reproducción económica y social.

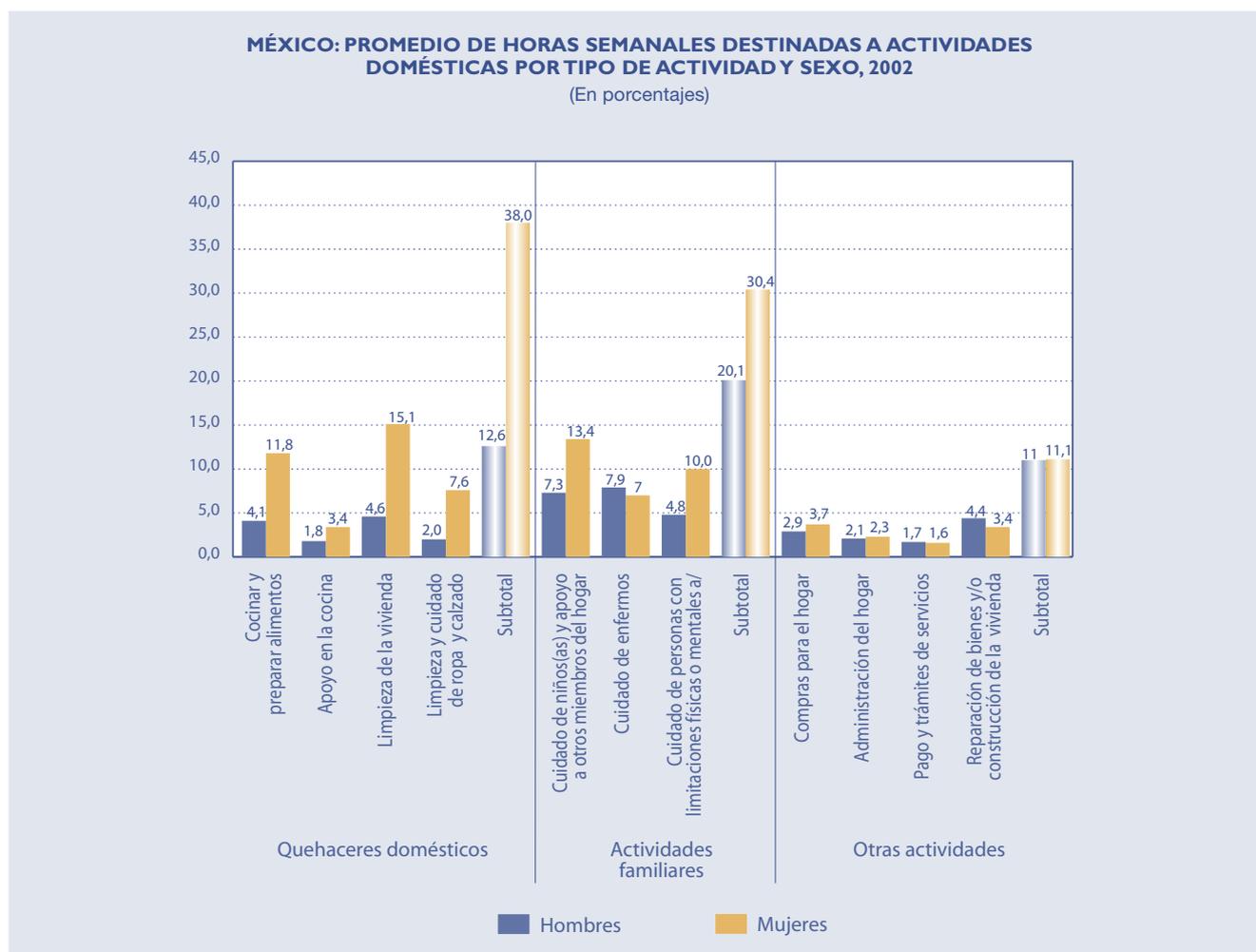
Fuente: Cristina Carrasco, “Los tiempos de trabajo: entre la casa y el mercado. Nuevas aproximaciones de análisis de resultados”, documento presentado a la Reunión de expertos: Encuestas sobre uso del tiempo, Santiago de Chile, 11 y 12 de diciembre del 2003; María José Araya, “Un acercamiento a las encuestas sobre el uso del tiempo con orientación de género”, *serie Mujer y desarrollo*, N° 50 (LC/L.2022-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre del 2003. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.184.

Los resultados preliminares obtenidos en la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, realizada en México en el 2002, muestran que las mujeres aportan un 85% del tiempo total al trabajo doméstico y los hombres un 15%. Entre quienes efectúan actividades domésticas, el reparto de horas es el siguiente: las mujeres destinan un promedio de 13 horas a la semana exclusivamente al cuidado de niños y otros miembros del hogar, los varones contribuyen con aproximadamente la mitad de horas, las mujeres dedican aproximadamente 38 horas semanales a cocinar y limpiar el hogar, los varones 12,5 horas, es decir, menos de un tercio de ese tiempo (véase el gráfico IV.11).

En México las familias en las que ambos cónyuges trabajan para el mercado laboral alcanzan a 4,8 millones y las mujeres laboran en promedio 15 horas más que los hombres en trabajo remunerado y doméstico conjuntamente. El tiempo se distribuye de la siguiente manera: los esposos trabajan 52 ho-

ras en su actividad económica y las esposas 37 horas como promedio semanal; ellos destinan 4 horas a la limpieza de la vivienda y ellas 15 horas; ellos 7 horas a cocinar y ellas 15 horas y media; ellos casi 8 horas al cuidado de niños y ellas 12 horas; ellos una hora y media al aseo y cuidado de la ropa y ellas poco más de 8 horas.

Cuando se considera el total de la población mayor de 12 años que destina tiempo a las actividades domésticas, la distribución por sexo es la siguiente: el 82% de las mujeres y el 18% de los hombres realiza el trabajo de cocinar, el 64% de las mujeres y el 36% de los hombres cuida de los hijos, el 65% de las mujeres y el 35% de los hombres realiza la limpieza y las compras del hogar, solo la reparación de bienes o la construcción de la vivienda son actividades que efectúan mayoritariamente los varones, en un porcentaje del 70% (INEGI, 2004, véase el gráfico IV.12).

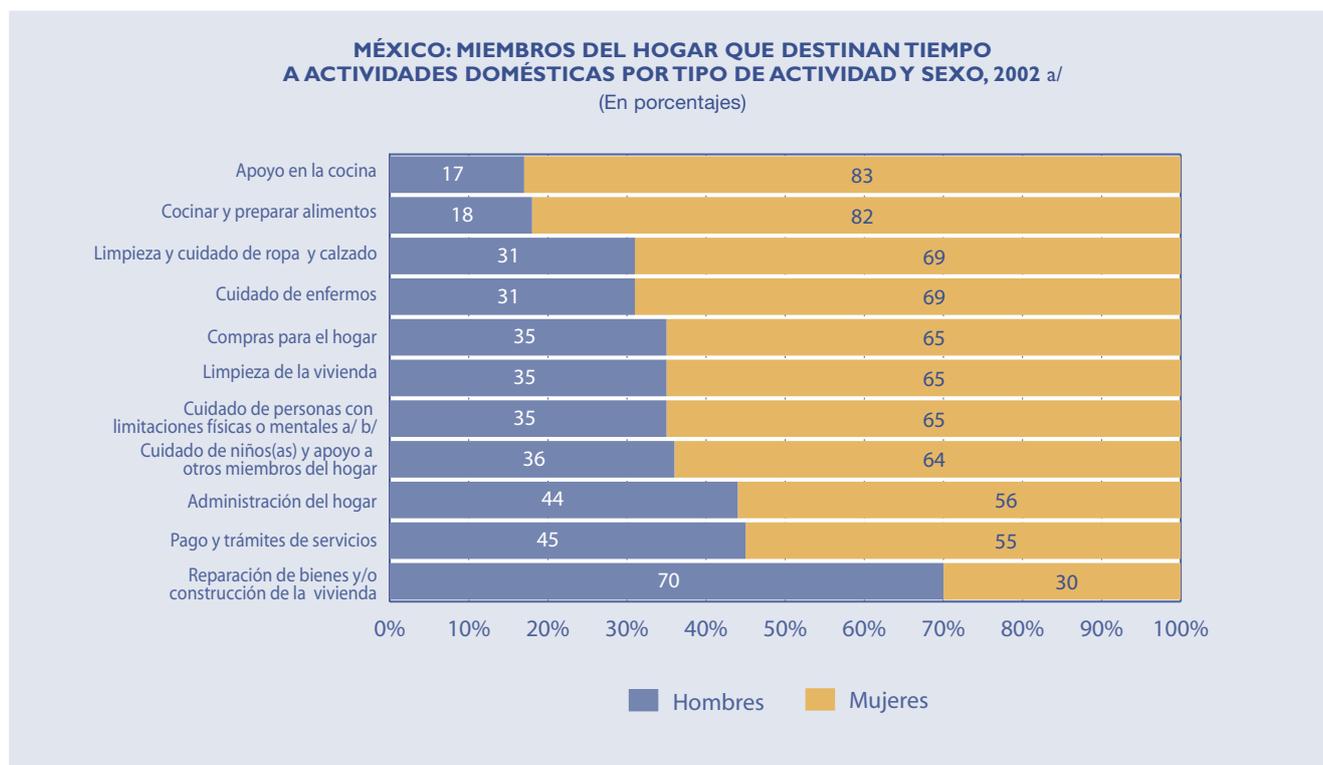


Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Encuesta de uso de tiempo 2002, México, D.F., 2004. Este cuadro refleja las horas promedio destinadas a las actividades domésticas por quienes las efectúan, y corresponde a un 15% de hombres y a un 85% de mujeres.
a/ Actividades consideradas simultáneas porque se pueden realizar junto con otras.

De acuerdo con la encuesta realizada en la ciudad de Montevideo en el 2003, la dedicación horaria al trabajo no remunerado varía enormemente según el sexo del responsable. Los varones dedican 10 horas semanales menos a los quehaceres domésticos que las mujeres; en promedio, para el total de las actividades domésticas, hombres y mujeres destinan 13 y 32 horas semanales, respectivamente (véase el gráfi-

co IV.13). Los hombres dedican un tiempo similar al cuidado de niños, compras y gestiones, y un tiempo levemente mayor al cuidado de ancianos.³ En los hogares constituidos por parejas con al menos un hijo menor de 18 años el mayor peso del trabajo no remunerado en el hogar está a cargo de las mujeres, con un promedio de 62,5 horas semanales; en los hogares monoparentales el promedio es de 56,6 horas y

3 La autora plantea algunas interrogantes con respecto al mayor cuidado de ancianos por parte de los varones. Indica que se trata de un conjunto reducido de observaciones, lo que cuestiona su representatividad, ya que es una actividad que se cumple en un bajo porcentaje de hogares. Por otra parte, podría estar incidiendo la falta de reconocimiento del trabajo de cuidado por parte de las mujeres cuando ellas lo realizan, ya que actúan siguiendo el mandato de género con respecto al comportamiento esperado de atención a las necesidades de los miembros de su familia, en cambio, cuando los hombres realizan esta actividad pueden identificarla más fácilmente con una actividad con características de trabajo y que, eventualmente, podría ser realizada por otros miembros de la familia o por terceros.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), *Encuesta de uso de tiempo 2002*, México, D.F., 2004.

a/ Corresponde a la población de 12 años y más.

b/ No incluye la realización de otras actividades.

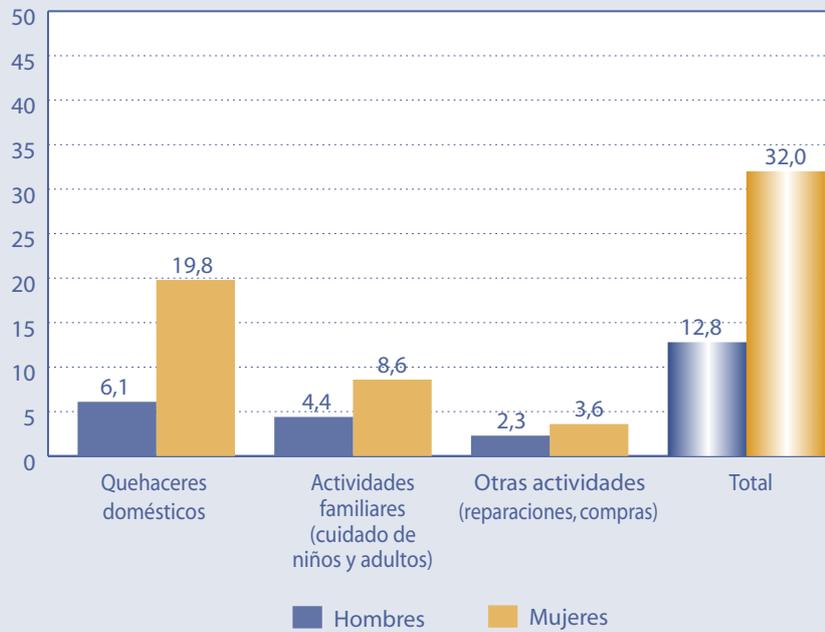
en los hogares con tres generaciones es de 56,2. Los datos de los hogares biparentales indican que en la media total es de 13,6 horas semanales en el caso de los hombres cónyuges y 54,2 horas semanales en el caso de las mujeres responsables del hogar.

Cuando viven solos, el trabajo que realizan los hombres no presenta diferencias significativas con respecto al tiempo que dedican al hogar las mujeres solas. Los hombres que viven en pareja realizan menos de la mitad del trabajo no remunerado que realizan los hombres solos, y las 26,4 horas semanales de trabajo que se ahorran recaen en las mujeres. Las mujeres que viven en pareja registran un incremento del trabajo no remunerado de 26,2 horas con relación a las que viven solas. Se observa, además,

que la existencia de un hijo supone un incremento de 16 horas en el trabajo no remunerado semanal cuando la mujer trabaja y de 22,7 horas cuando esta no tiene un trabajo remunerado. Estos datos sugieren que la sobrecarga de trabajo no remunerado no depende solo de la presencia de hijos o hijas, sino que hay una fuerte incidencia de la división sexual del trabajo en el hogar, independientemente de la presencia de hijos (Aguirre, 2004).

En síntesis, las encuestas de uso de tiempo más actuales en la región latinoamericana confirman la distribución desigual de tareas en el interior del hogar entre hombres y mujeres, y la necesidad de desarrollar políticas de apoyo para las mujeres que trabajan y para el cuidado de niños y ancianos.

MONTEVIDEO: PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DESTINADAS A ACTIVIDADES DOMÉSTICAS AGRUPADAS POR TIPO DE ACTIVIDAD Y SEXO, 2003
(En porcentajes)



Fuente: Rosario Aguirre, "Trabajo no remunerado y uso del tiempo. Fundamentos conceptuales y avances empíricos. La encuesta Montevideo 2003", Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2004, inédito.

D. POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN ENTRE VIDA LABORAL Y VIDA FAMILIAR

Las importantes transformaciones tanto de la familia como de las condiciones laborales hacen necesarios nuevos enfoques en las políticas, que redistribuyan las tareas domésticas y de cuidado y atención de la población infantil y de los adultos mayores. Los conflictos principales entre trabajo y familia que enfrenta la población, especialmente la femenina, son tres, a saber: el tiempo, puesto que la demanda de un tipo de trabajo impide el cumplimiento del otro; la tensión derivada de la obligación de cumplir bien ambos papeles; y las cualidades diferentes que uno y otro requieren. Para enfrentar estos problemas, son importantes las medidas relacionadas con la organización del tiempo de trabajo, los servicios de asistencia en labores domésticas y familiares, y las medidas de asesoramiento y apoyo laboral.

En las últimas décadas se produjeron transformaciones significativas en el paradigma de producción que caracterizó al capitalismo industrial, y que transformaron los patrones del empleo. Paralelamente, las mujeres emergieron en el escenario público, incorporándose masivamente al mercado de trabajo con dobles jornadas, en el hogar y en el mundo laboral. En el mismo sentido, surgen los movimientos feministas que continúan reclamando un cambio estructural mediante el cual se logre un nuevo contrato social en el que el juego de roles en la esfera pública y privada sea más equilibrado, y que permita conquistar posiciones de igualdad en los espacios económicos, sociales y políticos.

En una sociedad que ha asignado a las mujeres en forma exclusiva las tareas domésticas y de cui-

dado familiar, y el trabajo reproductivo en la esfera privada, y donde el hombre ha de ser el proveedor económico, estos procesos han generado profundas tensiones en las formas de conciliar el trabajo y la familia que se habían consolidado durante el siglo pasado.

Ese modelo está cambiando. Si antes la familia debía ser el soporte del sistema productivo mediante la división de roles y funciones, hoy esta división se presenta como un obstáculo y una carga para las exigencias de producción individual para el mercado. Esto produce una fuerte tensión entre vida familiar y la vida laboral. Por otra parte, la creciente competitividad de las empresas en mercados cada vez más exigentes ejerce fuertes presiones sobre los empleados que deben contribuir al trabajo y a la

vida familiar. Esto también torna más complejo el indispensable desarrollo afectivo de las personas lo que, en gran medida, ocurre en la familia.

El núcleo familiar primario continúa siendo un soporte básico en las relaciones afectivas, en la construcción de la identidad subjetiva, y en la socialización como garantía de los procesos de maduración y desarrollo. La familia suele convertirse en refugio y ser depositaria de la identidad individual y social. Sobre ella se imponen múltiples exigencias adaptativas, y la restricción de las posibilidades de ingreso y permanencia en el mercado laboral formal e informal incide en ella en gran medida.

Los fuertes cambios en las relaciones sociales, familiares y laborales plantean a los empresarios, trabajadores y trabajadoras y gobiernos, la necesidad de construir entornos laborales más humanos y justos, más productivos y competitivos. Actualmente es necesario diseñar políticas públicas que favorezcan la conciliación entre el trabajo y la familia, entre el espacio público y el privado, entre el mundo doméstico y el mundo social, que no reproduzcan la discriminación laboral, las desigualdades de género y que posibiliten la vida familiar. Es indispensable entender la complejidad en la que se van construyendo los vínculos familiares en una sociedad diversificada y desigual.

Los recursos institucionales que proveen de bienestar a las personas son, principalmente, el Estado, el mercado, las propias familias y el tercer sector o la comunidad. Es evidente que la intervención pública afecta a las decisiones de las familias y, a su vez, las decisiones y la forma de vida de estas inciden de manera significativa sobre las políticas públicas. Una u otra forma de organizar, entre otros aspectos, la política educativa o la política de vivienda afecta a las decisiones de consumo e inversión de las familias.

Existen fuertes interrelaciones entre las decisiones que se toman en las familias y la propia sociedad. Al Estado no le es indiferente que las familias decidan tener menos hijos y que las mujeres decidan acceder al mercado de trabajo, y dividir su tiempo

entre el cuidado de sus hijos y de sus mayores y su actividad profesional. Estas y otras decisiones, así como las pautas de comportamiento de las familias, pueden suponer cambios en la demanda de los bienes y servicios públicos, y pueden modificar las políticas públicas en un sentido o en otro. Hay algunos ámbitos especialmente significativos en esta interrelación entre familia y política pública.

En primer lugar, existe consenso sobre la necesidad de políticas familiares cuyo propósito sea ayudar a la conciliación entre la vida familiar y laboral, pues no sólo la igualdad de trato y el derecho de la mujer de acceder al mercado de trabajo son perfectamente legítimos, sino también el derecho de los hijos a ser educados por sus padres y poder compartir con ellos el mayor tiempo posible de su infancia. No existe una instancia que dirima sobre el equilibrio entre el tiempo reservado al trabajo y el consagrado a la educación de los hijos y a la atención de la familia. Se produce una clara concentración temporal del trabajo durante lo que puede denominarse la edad central de trabajo, 25 a 45 años, que coincide con el período más importante para fundar una familia y educar a los hijos.

En segundo lugar, cuando se trata de familia y de políticas de conciliación, no solo se piensa en los hijos sino también en la existencia de personas dependientes en el seno de la familia, sobre todo los ancianos. La población dependiente, según las pirámides poblacionales y el aumento de la esperanza de vida, tiende a crecer. La modificación del equilibrio entre personas jóvenes dependientes y personas mayores dependientes pone de manifiesto la necesidad de una revisión de los apoyos de las políticas públicas destinadas a ayudar a aquellas familias con personas dependientes a cargo, e igualmente, a hacer posible en dichos casos la combinación de familia y trabajo.

En tercer lugar, la dificultad de compatibilizar el desarrollo de la vida profesional con las responsabilidades ha llevado a las familias a la toma de decisiones importantes como retrasar el matrimonio, disminuir la tasa de natalidad, ampliar los años de

instrucción y, por lo tanto, retrasar el ingreso a la población activa. En lo que respecta a este último aspecto, en algunos casos la maternidad es uno de los condicionantes por los que la mujer se ve obligada a abandonar la actividad remunerada, sobre todo cuando se acompaña de otros factores como la subsidiariedad del salario femenino, es decir, cuando su ingreso no es el principal en la familia y cuando el empleo femenino es precario e informal. Sin embargo, como se mostró en las secciones precedentes, en la actualidad hay familias biparentales con hijos, que tienen dos o más aportantes económicos al hogar, y ha aumentado la cantidad de hogares monoparentales con jefas, por lo que entran y permanecen en el mercado de trabajo muchas mujeres con hijos e hijas menores, lo que advierte sobre la dificultad de muchas familias para compatibilizar las responsabilidades familiares con las laborales. Las guarderías, los centros de educación infantil y los colegios deberían ser uno de los recursos principales para ayudar a compatibilizar familia y trabajo. Asimismo, las mujeres se ven obligadas a buscar estrategias individuales basadas en la red familiar, que recibe una sobrecarga de responsabilidades.

El conflicto trabajo-familia se da cuando las presiones del medio hacen que trabajo y familia no sean compatibles en algún aspecto (Greenhaus y Beutell, 1985). Existen al menos tres tipos de conflicto al respecto. El primero se da cuando el tiempo utilizado en una de las dos funciones impide destinar tiempo a la otra. El segundo ocurre cuando se dan altos niveles de tensión en el cumplimiento de uno de los roles, lo que a su vez afecta el desempeño en la otra función. Y el último tiene relación con las conductas requeridas por ambos roles, en situaciones en que existen incompatibilidades entre los comportamientos deseables en los dos ámbitos (Yang y otros, 2000).

También se han estudiado las consecuencias negativas de estos conflictos trabajo-familia. Entre ellas es posible mencionar los mayores riesgos de deterioro de la salud de los padres que trabajan, un mal desempeño en la función parental, la tensión psicológica, la ansiedad, la irritación frecuente, la

depresión, el estrés laboral y los diversos problemas psicosomáticos (Frone, Russell y Cooper, 1997). La dificultad derivada de la ejecución de múltiples roles no sólo afecta a las personas, sino también a las empresas. La insatisfacción con el trabajo, el menor desempeño y compromiso con la organización, junto con mayores niveles de ausentismo y rotación, pueden ser efectos derivados de las tensiones provocadas por desempeño simultáneo de los roles laboral y familiar (Greenhaus y Beutell, 1985).

La flexibilidad laboral, promovida en muchos países, que se expresa en la oferta de trabajos a tiempo parcial y temporal, ha sido en la práctica un incentivo para el ingreso o retorno de las mujeres al mercado de trabajo, por cuanto permite combinar las tareas domésticas, en particular el cuidado infantil, con el trabajo remunerado. Representa sin duda un instrumento importante porque permite continuar en contacto con el mercado y las actividades remuneradas. Sin embargo, es necesario cautelar que dicha flexibilidad no agudice desigualdades laborales y domésticas de hombres y mujeres al aumentar las brechas salariales entre este tipo de empleo y los de tiempo completo, ni constituya una forma de precarizar el empleo en general. Por otra parte, la incidencia mayor de este tipo de empleo en las mujeres, evidencia la persistencia de patrones sexistas en relación con las responsabilidades domésticas (Mires, 2004).

Es necesario evaluar con urgencia los modelos de protección y cuidado de la infancia y su compatibilidad con el mercado laboral, así como revisar la flexibilidad laboral, tanto en el uso de horarios como en los permisos de maternidad y paternidad, además de facilitar la flexibilidad cuando se tengan hijos menores. Esta situación adquiere especial importancia en la actualidad. Por un lado plantea desafíos a la previsión y planificación de las políticas públicas respecto del gasto destinado a la creación y ampliación de nuevos servicios de atención a los niños y niñas y personas dependientes. Por otra parte, requiere considerar que la socialización y el cuidado de los hijos no es sólo un tema privado de las familias sino que atañe a toda la sociedad.

Lo anterior permite inferir que existen campos de intervención orientados a la definición e implementación de políticas de conciliación trabajo-familia, a saber: medidas relacionadas con la organización del tiempo de trabajo, entre otras, la flexibilización de horarios y la regulación de la extensión y duración de la jornada, la regulación del trabajo domiciliario y del teletrabajo; servicios de asistencia en labores domésticas, como el apoyo a las necesidades familiares y domésticas, la amplia-

ción de la cobertura a los niños en edad escolar y preescolar mediante centros abiertos, salas cuna y guarderías, la seguridad social y la asistencia domiciliaria para el cuidado de personas dependientes; medidas de asesoramiento y apoyo profesional, como los permisos parentales cuando nacen o hay hijos enfermos, entre otras medidas destinadas a crear las condiciones para que hombres y mujeres puedan cumplir en forma óptima con sus responsabilidades laborales y familiares.

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN TIPO, ZONAS URBANAS, 1990-2002
(En porcentajes)

País	Año	Total hogares	Tipos de hogar								
			Hogares no familiares		Subtotal familias nucleares	Familias nucleares				Otros tipos de familia	
			Hogar unipersonal	Hogar sin núcleo conyugal		Nuclear sin hijos	Nuclear biparental con hijos	Nuclear mono-parental jefe hombre	Nuclear mono-parental jefe mujer	Extendida	Compuesta
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	100,0	12,5	4,2	69,9	15,5	46,8	1,2	6,4	12,8	0,7
	2002	100,0	15,3	3,9	66,7	14,1	41,7	2,4	8,5	13,5	0,5
Total urbano	2002	100,0	14,8	5,1	65,3	12,5	41,0	2,2	9,5	14,4	0,4
Bolivia (8 ciudades principales y El Alto)	1989	100,0	5,5	3,0	72,4	4,2	58,8	1,7	7,7	17,4	1,7
	2002	100,0	8,4	3,9	71,1	5,2	53,2	1,7	11,0	15,8	0,7
Total urbano	2002	100,0	8,7	4,2	69,4	5,1	52,0	1,8	10,5	16,9	0,8
Brasil	1990	100,0	7,9	3,9	71,1	10,0	51,6	1,2	8,4	16,0	1,1
	2002	100,0	9,8	4,0	68,7	10,7	46,5	1,3	10,2	16,7	0,8
Chile	1990	100,0	6,5	4,3	64,4	7,8	47,8	1,2	7,7	23,1	1,7
	2000	100,0	7,9	4,2	64,1	8,4	47,2	1,3	7,3	22,7	1,0
Colombia	1991	100,0	4,8	5,5	64,6	5,3	48,8	1,0	9,6	22,9	2,2
	2002	100,0	8,3	5,3	59,1	6,7	40,1	1,5	10,7	24,8	2,4
Costa Rica	1990	100,0	5,0	5,1	68,5	6,6	51,3	1,0	9,5	19,3	2,2
	2002	100,0	6,8	4,3	68,7	8,5	47,5	1,1	11,7	18,1	2,0
Ecuador	1990	100,0	5,5	4,5	64,1	5,5	50,2	1,5	6,9	23,0	2,8
	2002	100,0	8,7	4,9	61,5	6,2	44,2	2,5	8,5	21,3	3,6
El Salvador	1995	100,0	6,1	6,2	55,0	5,5	38,1	1,2	10,2	30,3	2,4
	2001	100,0	7,8	6,4	54,9	5,7	36,2	1,4	11,6	29,8	1,0
Guatemala	1998	100,0	4,3	4,1	63,3	5,6	46,0	1,3	10,4	26,6	1,8
Honduras	1990	100,0	4,2	5,9	57,0	4,5	41,8	1,2	9,6	27,8	5,0
	2002	100,0	5,1	5,8	55,4	4,3	38,9	1,5	10,7	24,7	8,9
México	1989	100,0	4,6	4,1	71,6	6,3	57,6	1,2	6,4	19,2	0,5
	2002	100,0	6,5	3,2	70,8	8,3	51,7	1,5	9,4	19,0	0,4
Nicaragua	1993	100,0	5,2	4,2	54,5	3,5	40,0	1,4	9,5	34,2	2,0
	2001	100,0	4,1	4,3	53,3	3,7	37,7	1,1	10,8	36,1	2,2
Panamá	1991	100,0	8,4	5,6	60,3	7,0	41,8	1,8	9,7	23,5	2,2
	2002	100,0	9,0	5,6	58,6	8,0	38,6	1,5	10,5	25,6	1,3
Paraguay (Asunción y Departamento Central)	1990	100,0	6,8	3,8	54,6	5,4	42,4	1,3	5,5	26,2	8,6
	2000	100,0	8,0	6,4	55,1	5,8	40,1	1,7	7,6	27,4	3,1
Total urbano	2000	100,0	8,4	5,6	57,0	6,0	41,0	1,4	8,6	25,8	3,2
Perú	2001	100,0	7,6	4,8	58,0	3,8	44,1	2,1	8,0	26,2	3,4
República Dominicana	2002	100,0	9,4	6,8	56,6	7,4	36,4	1,5	11,3	23,3	3,9
Uruguay	1990	100,0	13,9	5,6	64,3	17,0	38,9	1,3	7,2	14,9	1,3
	2002	100,0	17,7	5,4	61,3	16,3	34,8	1,6	8,6	14,7	0,9
Venezuela (Rep. Bolivariana de) a/	1990	100,0	5,1	5,2	57,0	4,3	43,9	1,3	7,6	30,3	2,4
	2002	100,0	6,8	5,1	56,9	5,2	41,0	1,3	9,4	28,5	2,7
América Latina b/	1990	100,0	6,7	4,8	63,1	7,2	46,3	1,3	8,4	23,0	2,4
	2002	100,0	8,4	4,8	61,9	7,7	42,8	1,5	9,8	22,8	2,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Total nacional.

b/ Promedio simple de 16 países.

Cuadro IV.2

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TIPOS DE FAMILIAS NUCLEARES Y TRABAJO FEMENINO EN ZONAS URBANAS, 1990-2002
 (En porcentajes)

País	Año	Nuclear biparental				Nuclear monoparental			Total
		Sin hijos		Con hijos		Jefatura femenina		Jefatura masculina	
		Cónyuge trabaja	Cónyuge no trabaja	Cónyuge trabaja	Cónyuge no trabaja	Jefa trabaja	Jefa no trabaja		
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	6,4	15,8	23,5	43,4	5,4	3,8	1,7	100,0
	2002	7,5	13,6	26,9	35,5	7,0	5,8	3,6	100,0
Bolivia (8 ciudades principales)	1989	1,9	3,9	36,2	45,0	7,7	2,9	2,4	100,0
	2002	4,5	2,8	44,7	30,1	12,0	3,4	2,5	100,0
Brasil	1990	5,3	8,7	27,2	45,3	6,4	5,3	1,7	100,0
	2001	7,0	8,5	32,3	35,4	8,5	6,4	1,9	100,0
Chile	1990	3,3	8,8	20,5	53,6	5,5	6,4	1,8	100,0
	2000	4,5	8,5	28,0	45,5	6,7	4,7	2,0	100,0
Colombia	1991	3,4	4,8	28,4	47,0	8,9	6,0	1,6	100,0
	2002	5,2	6,2	32,8	35,1	11,4	6,7	2,5	100,0
Costa Rica	1990	2,8	6,8	22,8	52,2	7,6	6,3	1,5	100,0
	2002	4,7	7,8	29,4	39,6	11,0	6,0	1,5	100,0
Ecuador	1990	3,2	5,4	29,8	48,5	7,1	3,7	2,4	100,0
	2002	4,6	6,0	33,3	38,3	10,0	3,7	4,1	100,0
El Salvador	1995	4,7	5,3	34,7	34,5	12,6	5,9	2,2	100,0
	2001	4,5	5,9	35,2	30,7	13,9	7,3	2,5	100,0
Guatemala	1998	3,8	5,1	39,4	33,3	10,6	5,8	2,1	100,0
Honduras	1990	2,6	5,3	25,7	47,6	11,0	5,7	2,0	100,0
	2002	3,5	4,4	30,3	39,8	12,8	6,4	2,7	100,0
México	1989	2,4	6,4	20,7	59,8	5,3	3,6	1,7	100,0
	2002	4,8	6,9	28,9	44,0	9,0	4,3	2,1	100,0
Nicaragua	1993	3,2	3,3	31,0	42,4	12,3	5,1	2,6	100,0
	2001	4,4	2,6	35,2	35,6	14,5	5,6	2,1	100,0
Panamá	1991	3,1	8,6	23,3	45,9	8,5	7,5	3,0	100,0
	2002	5,5	8,1	30,0	35,8	10,3	7,6	2,6	100,0
Paraguay (Asunción y Departamento Central)	1990	3,4	6,3	32,6	45,1	5,6	4,6	2,4	100,0
	2000	6,8	3,7	37,6	35,0	8,5	5,4	3,0	100,0
Perú	2001	3,0	3,5	42,1	33,9	9,5	4,3	3,6	100,0
República Dominicana	2002	5,6	7,4	27,9	36,3	11,1	8,9	2,6	100,0
Uruguay	1990	7,7	18,8	27,4	32,9	5,6	5,6	2,0	100,0
	2002	8,3	18,4	28,6	28,2	7,5	6,5	2,6	100,0
Venezuela (Rep. Bolivariana de) a/	1990	2,5	5,1	24,5	52,4	7,2	6,0	2,2	100,0
	2002	4,3	4,9	34,5	37,5	10,7	5,8	2,3	100,0
América Latina b/	1990	3,8	7,5	27,0	46,2	8,0	5,4	2,1	100,0
	2002	5,3	7,1	32,9	36,2	10,3	5,7	2,5	100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Total nacional.

b/ Promedio simple de 16 países.

**AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS
SEGÚN LA ETAPA DEL CICLO VITAL FAMILIAR, ZONAS URBANAS, 1990-2002**
(En porcentajes)

País	Año	Total hogares	Hogares no familiares	Subtotal familias		Etapa del ciclo de vida familiar					
						Pareja joven sin hijos	Etapa inicial	Etapa de expansión	Etapa de consolidación	Etapa de salida	Pareja mayor sin hijos
(Porcentaje del total de hogares)						(Porcentaje del total de familias)					
Argentina	1990	100,0	16,6	83,4	100,0	4,3	11,7	17,4	29,0	21,0	16,6
(Gran Buenos Aires)	2002	100,0	19,3	80,7	100,0	5,2	10,8	14,6	29,9	25,1	14,4
Total urbano	2002	100,0	19,9	80,1	100,0	4,4	10,6	15,1	31,5	25,3	13,0
Bolivia (8 ciudades principales y El Alto)	1989	100,0	8,5	91,5	100,0	2,2	15,3	25,5	40,2	12,7	4,0
	2002	100,0	12,3	87,7	100,0	2,4	15,5	22,3	41,2	14,0	4,7
Total urbano	2002	100,0	12,9	87,1	100,0	2,3	15,1	22,7	41,2	13,9	4,7
Brasil	1990	100,0	11,8	88,3	100,0	5,9	15,9	21,8	33,5	15,8	7,2
	2002	100,0	13,8	86,2	100,0	6,0	13,5	19,0	32,5	20,5	8,4
Chile	1990	100,0	10,9	89,1	100,0	2,8	13,0	18,0	33,5	24,9	7,8
	2000	100,0	12,1	87,9	100,0	2,9	9,1	18,7	34,8	25,7	8,9
Colombia	1991	100,0	10,2	89,8	100,0	4,0	15,4	21,3	35,5	20,1	3,7
	2002	100,0	13,6	86,4	100,0	4,0	11,3	18,7	34,0	25,7	6,4
Costa Rica	1990	100,0	10,1	89,9	100,0	3,8	14,2	20,6	35,9	19,9	5,6
	2002	100,0	11,1	88,8	100,0	3,9	10,0	17,4	38,7	22,3	7,7
Ecuador	1990	100,0	10,1	89,9	100,0	3,9	14,9	22,7	37,9	15,5	5,1
	2002	100,0	13,6	86,4	100,0	3,8	13,2	20,3	37,0	19,2	6,5
El Salvador	1995	100,0	12,2	87,8	100,0	3,9	13,1	17,8	37,0	21,9	6,4
	2001	100,0	14,3	85,7	100,0	3,1	11,4	17,0	32,5	29,2	6,8
Guatemala	1998	100,0	8,3	91,7	100,0	2,1	10,1	20,7	40,9	20,4	5,9
Honduras	1990	100,0	10,2	89,8	100,0	3,9	16,1	22,9	41,4	12,7	3,0
	2002	100,0	10,9	89,1	100,0	3,4	18,0	20,3	37,4	16,5	4,4
México	1989	100,0	8,7	91,3	100,0	4,2	14,8	21,4	41,7	13,8	4,2
	2002	100,0	9,8	90,2	100,0	3,4	11,7	19,1	35,9	23,1	6,8
Nicaragua	1993	100,0	9,4	90,6	100,0	3,2	13,0	22,6	39,8	18,4	3,0
	2001	100,0	8,4	91,6	100,0	2,5	9,3	18,7	43,8	22,0	3,8
Panamá	1991	100,0	14,0	86,0	100,0	3,5	10,4	18,5	38,1	22,5	7,0
	2002	100,0	14,5	85,5	100,0	4,3	11,7	17,5	32,3	26,5	7,5
Paraguay (Asunción y Departamento Central)	1990	100,0	10,6	89,4	100,0	4,7	12,4	18,5	36,0	22,2	6,1
	2000	100,0	14,4	85,6	100,0	3,0	12,5	16,4	39,5	23,6	4,8
Total urbano	2000	100,0	14,0	85,9	100,0	3,6	13,1	19,4	39,5	18,8	5,6
Perú	2001	100,0	12,4	87,6	100,0	1,6	10,9	18,6	40,0	24,4	4,6
Rep. Dominicana	2002	100,0	16,2	83,8	100,0	4,9	14,5	19,5	29,2	24,3	7,5
Uruguay	1990	100,0	19,5	80,5	100,0	4,0	8,1	15,3	28,8	23,6	20,2
	2002	100,0	23,1	76,9	100,0	4,0	7,5	13,7	27,7	27,2	19,9
Venezuela (Rep. Bolivariana de) a/	1990	100,0	10,3	89,7	100,0	2,8	12,2	21,3	41,2	18,4	4,1
	2002	100,0	11,8	88,2	100,0	3,3	11,1	20,0	37,8	23,0	4,9
América Latina b/	1990	100,0	11,5	88,5	100,0	4,1	13,3	22,3	35,7	18,1	6,5
	2002	100,0	13,2	86,8	100,0	3,6	11,7	18,4	36,0	22,8	7,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Total nacional.

b/ Promedio simple de 16 países.

Cuadro IV.4

**AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA POBREZA ENTRE
LOS HOGARES SEGÚN TIPO, ZONAS URBANAS, 1990-2002**

(En porcentajes)

País	Año	Total hogares	Tipos de hogar									
			Hogares no familiares		Familias						Otros tipos de familia	
			Hogar unipersonal	Hogar sin núcleo conyugal	Subtotal familias nucleares	Familias nucleares				Extendida	Compuesta	
						Nuclear sin hijos	Nuclear biparental con hijos	Nuclear monoparental jefe hombre	Nuclear monoparental jefe mujer			
Argentina	1990	16,2	1,6	11,7	18,2	17,0	18,9	8,1	18,0	20,3	23,8	
(Gran Buenos Aires)	2002	31,6	10,8	16,6	33,5	16,0	38,9	26,5	38,2	49,3	48,9	
Total urbano	2002	34,9	11,0	25,0	37,1	17,6	41,9	27,6	44,5	52,8	51,3	
Bolivia (8 ciudades principales y El Alto)	1989	49,4	39,0	46,6	50,3	46,5	50,0	52,1	54,5	51,6	24,3	
	2002	42,5	18,0	30,4	46,4	14,6	51,2	45,6	38,2	41,9	27,0	
Total urbano	2002	44,9	20,1	31,4	48,7	17,3	53,3	42,6	42,2	45,8	30,2	
Brasil	1990	37,5	31,6	32,3	37,1	23,3	38,1	33,6	48,0	43,6	33,3	
	2002	27,4	8,6	17,1	29,1	10,2	32,9	22,5	32,5	33,7	30,9	
Chile	1990	33,3	12,1	22,6	34,8	11,4	38,4	19,6	38,3	37,4	28,0	
	2000	16,2	4,0	7,8	16,9	3,8	18,9	8,0	21,0	19,6	19,6	
Colombia	1991	47,1	23,3	32,8	48,4	23,4	51,5	26,4	48,9	51,5	50,4	
	2002	44,6	28,1	31,0	45,6	26,0	49,5	28,6	45,8	50,1	50,3	
Costa Rica	1990	22,2	25,4	15,3	21,1	17,2	20,7	22,1	25,6	27,9	15,1	
	2002	15,9	18,4	20,1	14,3	11,2	13,3	7,1	21,3	20,1	13,8	
Ecuador	1990	55,8	24,8	45,0	56,6	33,3	58,9	43,2	61,6	63,3	55,5	
	2002	42,7	20,6	35,5	41,7	23,8	43,8	28,4	48,2	54,9	49,7	
El Salvador	1995	40,0	24,6	39,3	38,0	22,8	40,6	37,6	36,4	46,5	47,3	
	2001	34,7	21,7	33,5	34,2	23,9	34,7	34,8	37,8	39,2	39,4	
Guatemala	1998	41,2	15,7	21,2	40,3	19,2	44,4	30,7	34,8	51,0	36,8	
Honduras	1990	64,5	23,0	64,4	65,9	40,1	66,1	61,4	77,5	69,7	55,8	
	2002	60,4	29,2	47,8	61,8	41,3	64,2	54,0	62,2	67,6	58,5	
México	1989	34,0	6,1	21,2	33,5	12,7	36,6	23,0	27,9	45,6	38,0	
	2002	26,0	5,3	21,5	25,5	11,1	28,0	5,4	27,3	35,8	33,2	
Nicaragua	1993	60,3	35,4	56,3	59,7	40,7	60,3	66,5	63,0	66,1	48,5	
	2001	57,8	35,0	47,3	55,8	25,0	57,2	48,5	62,4	63,9	71,2	
Panamá	1991	33,6	21,8	23,8	34,6	14,9	35,8	31,3	44,2	37,8	34,2	
	2002	21,4	13,5	15,2	23,1	10,4	22,9	17,9	34,0	22,2	16,1	
Paraguay (Asunción y Departamento Central)	1990	36,8	23,6	32,5	37,9	25,9	40,0	7,8	41,0	37,5	39,7	
	2000	35,0	8,6	22,0	36,3	25,8	38,5	43,5	31,0	42,8	39,1	
Total urbano	2000	42,4	16,5	26,2	44,1	27,9	46,4	42,8	44,9	50,4	44,9	
Perú	2001	34,0	7,2	23,4	34,6	16,9	37,5	18,9	31,4	42,2	36,1	
República Dominicana	2002	38,4	27,0	45,3	37,3	19,8	35,1	37,6	55,9	43,5	39,8	
Uruguay	1990	11,8	1,9	8,9	12,4	2,0	16,5	9,1	15,5	18,9	20,1	
	2002	9,3	0,4	4,9	10,4	1,7	14,4	7,2	11,5	16,0	24,3	
Venezuela (Rep. Bolivariana de) a/	1990	34,2	5,8	36,8	34,6	21,2	33,9	22,3	48,2	38,0	30,4	
	2002	43,3	27,5	39,6	44,3	23,8	45,8	35,3	50,1	46,2	39,6	
América Latina b/	1990	38,9	20,1	32,7	39,5	23,7	41,1	31,4	43,8	44,0	35,6	
	2002	34,4	16,6	25,7	35,0	18,0	37,4	27,8	37,3	40,9	37,4	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Total nacional.

b/ Promedio simple de 16 países.



Agenda social

Programas nacionales para la juventud en América Latina

INTRODUCCIÓN

A partir del Año Internacional de la Juventud de 1985 se ha intensificado la gestión pública orientada hacia el mundo juvenil. Este esfuerzo se manifiesta en la existencia de organismos oficiales de juventud en todos los países latinoamericanos y en el interés por incorporar los mandatos internacionales en materia de juventud a los marcos constitucionales. Algunos países han logrado aprobar leyes de juventud y avanzar hacia la consolidación de políticas nacionales que permiten individualizar jurídica y socialmente al joven como sujeto de derechos. Sin embargo, persiste una gran dispersión en los avances existentes, sobre todo cuando se intenta definir la situación global de la juventud en América Latina. La precaria y dispar institucionalidad de este segmento de la población en los países latinoamericanos y la falta de participación juvenil dificultan el diseño de estrategias de más largo plazo para incorporar este tema en las agendas gubernamentales.

En este capítulo se realiza un análisis de los principales resultados de las encuestas sobre los programas nacionales orientados hacia la juventud llevadas a cabo por la CEPAL en los países de América Latina. Se sintetizan las respuestas recibidas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. En el anexo se presenta el formulario de la encuesta y la lista de países, instituciones y personas que respondieron a las preguntas formuladas (véanse el anexo V.1 y V.2).

La encuesta tuvo por objeto analizar, desde la perspectiva institucional de los organismos oficiales de juventud, las directrices normativas, institucionales y programáticas de las políticas en ese campo en dichos países y examinar la percepción de las autoridades nacionales sobre la realidad y los problemas específicos de los jóvenes.

En los resultados de las encuestas se advierte la similitud de los problemas que aquejan a la juventud de América Latina, pese a las diferencias culturales y al carácter multilingüe y multiétnico de las sociedades latinoamericanas. La pobreza, el deterioro de las condiciones de vida y la falta de acceso a oportunidades educativas y laborales parecen afectar a la gran mayoría de los jóvenes; e incluso, en los sectores más empobrecidos estas necesidades insatisfechas redundan en una mayor exclusión social y una falta de participación.

De la información recogida en las encuestas surge un panorama bastante heterogéneo en cuanto a la capacidad de respuesta de los gobiernos frente a los problemas de la juventud. Las medidas programáticas en los diferentes países dejan entrever distintos paradigmas de la fase juvenil, a veces superpuestos, y una búsqueda desarticulada de los mecanismos institucionales necesarios para orientar la formulación de políticas específicas para este grupo demográfico.

Finalmente, como es habitual, en la agenda social internacional se reseñan las reuniones internacionales en que se abordaron temas sociales. En esta oportunidad se destaca el trigésimo período de sesiones de la CEPAL, realizado en Puerto Rico entre el 28 de junio y el 2 de julio del 2004, y la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en la ciudad de México, entre el 10 y el 12 de junio del 2004.

A. LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD EN AMÉRICA LATINA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DE JUVENTUD Y DE LOS PROPIOS JÓVENES

A raíz de la conmemoración del Año Internacional de la Juventud en 1985, se elaboraron una diversidad de estudios y propuestas de política pública para los jóvenes. Este impulso permitió que algunos gobiernos latinoamericanos crearan organismos de juventud y que en la década de 1990 se realizaran encuestas sobre la materia. Uruguay fue pionero con su encuesta de 1989 y luego muchos países de la región siguieron su ejemplo.¹

Pese al desarrollo de tales fuentes de información y a su paulatina incorporación a las políticas de juventud, todavía resulta complejo delimitar una categoría que permita establecer los límites de esta etapa de la vida y visualizar sus particularidades sociales e históricas, es decir, aquellos rasgos inherentes a las relaciones intergeneracionales que se dan en cada sociedad. Los autores que han abordado el tema de la identidad juvenil suelen plantear la imposibilidad de definir su significado de manera concreta y estable. Cada época y sociedad impone a esta etapa de la vida fronteras culturales y sociales que asignan determinadas tareas y limitaciones a este segmento de la población (Levi y Schmitt, 1996).

Debido a la necesidad de contar con una definición operacional, la edad es el criterio demográfico aceptado para distinguir a los jóvenes y tradicionalmente utilizado como referente para las políticas de

juventud. Desde 1985 las Naciones Unidas adoptaron como criterio normativo la cohorte de edad que se encuentra entre los 15 y 24 años, aunque este rango de edad puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo, según las exigencias que impongan los contextos particulares a los jóvenes. Más allá de lo arbitrario de toda definición estadística, con este enfoque se ponen de relieve algunos procesos relevantes: en la cota inferior se considera la edad en que ya están desarrolladas las funciones sexuales y reproductivas y la cota superior coincide generalmente con el cierre del proceso educativo formal, el ingreso al mercado de trabajo y la formación del hogar (Rodríguez, 2001).

Actualmente, según estimaciones para el 2004 del CELADE - División de Población de la CEPAL, en América Latina viven alrededor de 149,5 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años de edad y 103,1 millones de entre 15 y 24 años, que representan

1 Se han realizado encuestas en la República Bolivariana de Venezuela (1991), Colombia (1991, 2000), Ecuador (1991), Perú (1991), Chile (1994, 1997, 2000, 2004), República Dominicana (1992, 1999), Argentina (1993, 1997), Uruguay (1989, 1995), Bolivia (1996 y 2003), Guatemala (1999), Paraguay (1998) y México (2000) (OIJ, 2004a).

respectivamente 27% y 19% de la población total (CEPAL, 2004d). Esta situación configura un escenario demográfico y sociológico propio, que impone desafíos académicos, gubernamentales y culturales que convergen hacia una mejor comprensión de la situación juvenil y de los mecanismos más eficaces para satisfacer sus necesidades.

1. LA EDAD COMO REFERENTE EN LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD Y LA AMBIGÜEDAD DEL SUJETO JUVENIL

Los rangos de edad que definen a la juventud varían ampliamente en los países de América Latina y se observan dos tendencias: la extensión hacia edades más tempranas o bien hacia edades más altas. En el primer caso, se asiste a una superposición etaria de la adolescencia y la juventud en las definiciones del sujeto joven. En el segundo, los jóvenes que ya han cumplido los 18 años no están visibles como sujetos específicos de las políticas y tienden a estar subsumidos en la programación adulta. Esta situación presenta una dualidad en el sujeto juvenil relacionada con el desfase entre sus realidades sociales y legales. La ambigüedad en el sujeto juvenil también obedece a la falta de un adecuado debate sobre la relación joven-adulto en las representaciones sociales y la forma en que estas debieran traducirse en el diseño de las políticas públicas orientadas a la juventud.

En los países encuestados se observa una gran diferencia en los rangos de edad con los cuales se define la juventud: de 7 a 18 años (El Salvador); de 12 a 26 años (Colombia); de 12 a 35 años (Costa Rica, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 2002); de 12 a 29 años (México); de 14 a 30 años (Argentina); de 15 a 24 años (Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana); de 15 a 25 años (Guatemala); de 15 a 29 años (Chile, Cuba, Panamá, Paraguay); de 18 a 30 años (Nicaragua) (Dávila, 2003, OIJ, 2001). En Honduras, la población joven corresponde al grupo menor de 25 años.

Las diferencias en el rango de edades que define a la juventud en los distintos países revelan al me-

nos dos tendencias. La primera es que la extensión de la juventud hacia edades más tempranas (El Salvador, Colombia, Costa Rica y México, entre otros países) y hacia edades más altas (Argentina, Chile, Cuba, Panamá, Paraguay y Nicaragua) puede expresar que el ser joven es una condición que se está expandiendo, no sólo en edad sino en la representación que esta tiene en la sociedad (OIJ, 2001). Ello puede deberse al aumento de la esperanza de vida, que para América Latina es de alrededor de 70 años, lo que implicaría un movimiento en las identidades juveniles, ampliando la proporción de la juventud en la población. No obstante, estas identidades también estarían determinadas por aspectos sociales propios de la mayor demanda de educación y capacitación para el trabajo y la prolongación de las trayectorias educativas (Rodríguez, 2001, p. 30).

La segunda tendencia observada es la superposición etaria de la adolescencia y la juventud en las definiciones del sujeto joven. Este fenómeno incide no solo en la formulación de las políticas de juventud sino también en la delimitación y el carácter de la oferta programática que pueden brindar los países a estos sectores. Por una parte, el discurso sobre el sujeto joven parece considerar que la juventud engloba a la adolescencia, aunque en la práctica deja fuera períodos cruciales de la experiencia juvenil. Por otra parte, el segmento de la juventud que se localiza entre los 18 y 30 años ha adquirido el estatus de ciudadanía, ya que a partir de los 18 años las personas son juzgadas como adultas y pueden ejercer su derecho a voto (Krauskopf, 2003).

Así pues, se plantean varias contradicciones. En el plano general aparece una dualidad en el sujeto juvenil, relacionada con el desfase entre sus realidades sociales y legales. Por otra parte, la existencia de programas de adolescencia, aunque contribuyen al desarrollo juvenil, no cubren el período respectivo a cabalidad (Krauskopf y Mora, 2000). Algunos países intentan superar tal situación creando instrumentos legales derivados de la Convención sobre los Derechos del Niño, como la ley penal juvenil (Costa

Rica) y los códigos de los derechos de la niñez y adolescencia (Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, República Dominicana y Uruguay).

Otro problema por superar consiste en la creación de programas específicos de adolescencia y en la necesidad pendiente de resolver los desfases que dificultan la integración entre las políticas públicas de juventud y aquellas dirigidas a la adolescencia. Los rangos etarios de la Convención sobre los Derechos del Niño no diferencian entre niños y adolescentes, pese a que incluyen a la población hasta los 18 años, lo cual contribuye a la indefinición al formular políticas conjuntas (Krauskopf, 2003).

Esta ambigüedad del sujeto juvenil alude a un problema no resuelto en varios países: la falta de una discusión acabada sobre la relación joven-adulto en las representaciones sociales y la forma en que estas debieran traducirse en el diseño de las políticas públicas orientadas a la juventud. En consecuencia, los jóvenes que ya han cumplido los 18 años no son visibles como sujetos específicos de políticas y tienden a estar subsumidos en la programación adulta (Krauskopf, 2003).

2. LA PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA JUVENTUD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES

Tres son las principales preocupaciones que expresan las autoridades con respecto a la juventud: el desempleo y la calidad del empleo; los problemas vinculados al ámbito de la educación y, en tercer lugar, el acceso a la salud y los riesgos afines. Las deficiencias existentes en estas áreas problemáticas redundan en la agudización de la pobreza juvenil y en procesos de exclusión social.

El desempleo derivado de las crisis económicas, de la mayor oferta y menor demanda de mano de obra y de la creciente desarticulación entre el sistema educativo y el mercado laboral constituye uno de los principales obstáculos para la integración social de la juventud en Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay (véase el cuadro V.1). Esta tendencia parece ser tan aguda que, en varios otros países, la desocupación aparece como un segundo desafío por superar (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica).

Cuadro V.1

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (15 PAÍSES): PRINCIPALES PROBLEMAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA			
Países	Problemas de la juventud		
	Primero en importancia	Segundo en importancia	Tercero en importancia
Argentina	Pobreza	Desocupación	Exclusión social
Bolivia	Exclusión	Desempleo	Falta de participación
Chile	Embarazo adolescente y riesgo de ETS	Desarticulación, estudios y mercado de trabajo	Brechas en acceso a educación media y superior
Colombia	Baja participación en el desarrollo y control de recursos públicos	Bajos niveles de participación juvenil en programas y proyectos sociales	Exclusión y conflicto armado
Costa Rica	Alta deserción en educación secundaria	Desempleo, especialmente en mujeres jóvenes	Falta de espacios de participación
Cuba	Poder adquisitivo de los ingresos	Satisfacción de sus necesidades de vivienda	Recreación
Ecuador	Desempleo	Deserción escolar	Drogadicción, alcoholismo y pandillaje
El Salvador	Desempleo	Inseguridad	Pobreza
Guatemala	Desempleo	Educación	Seguridad
México	Desempleo y subempleo	Deserción escolar y baja calidad educativa	Falta de acceso a salud y educación
Nicaragua	Desempleo y débil calidad del empleo	Falta de educación pertinente para las competencias de los jóvenes	Baja cobertura y calidad de los servicios de salud
Panamá	Pobreza y desempleo	Embarazo precoz	Aumento del VIH
Perú	Desempleo y subempleo	Baja participación en formulación de políticas públicas y en toma de decisiones en el nivel local, regional y nacional	Pobreza
República Dominicana	Salud	Educación	Trabajo
Uruguay	Inserción laboral	Deserción escolar	Exclusión social

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las respuestas de los países a la encuesta sobre programas nacionales para la juventud, 2004.

En términos de importancia, las autoridades de algunos países mencionan en segundo lugar temas relativos a la educación en general (Guatemala, República Dominicana), como por ejemplo la deserción escolar (Ecuador, Uruguay), la baja calidad educativa (México) y la falta de educación pertinente para las competencias de los jóvenes (Nicaragua).

En tercer lugar se reconocen dificultades en el área de la salud, de tipo institucional, en cuanto a baja cobertura y calidad de los servicios (Nicaragua), y en cuanto a riesgos afines, particularmente problemas de alcoholismo y drogadicción (Ecuador), y el aumento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) (Panamá). En esta misma área, algunos países otorgan prioridad al embarazo adolescente y al riesgo de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) (Chile).

Otras preocupaciones relevantes, aunque no consideradas mayoritariamente como principales, son la escasa participación de la juventud tanto en programas y proyectos como en el control de los recursos públicos (Bolivia, Colombia, Perú, Costa Rica) y la inseguridad (El Salvador) y el conflicto armado (Colombia).

Todos estos problemas configuran un panorama de pobreza y exclusión social que se acepta al mismo tiempo como causa y resultado de la situación juvenil. Una visión más desglosada de las causales atribuidas a las necesidades de la juventud denota esta ambigüedad, lo que podría reflejar no solo la complejidad y multicausalidad de la situación juvenil en la región sino también una incorporación parcial o incompleta de los estudios de juventud en

los diagnósticos de los organismos encargados de la materia.

3. LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE LA JUVENTUD

Las autoridades gubernamentales identifican un variado conjunto de causas de los problemas de la juventud, la mayoría relacionada con las condiciones económicas y de empleo, otras conectadas con la pobreza, la desigualdad, la baja calidad de vida y la exclusión social. En el ámbito específico de la educación y la salud se indica la ausencia de capacitación y formación técnico-profesional y el escaso acceso a servicios de salud y prevención. Por último, algunos países destacan la falta de participación y capacitación en materia de derechos ciudadanos entre los propios jóvenes.

Entre las causas de los principales problemas de la juventud, las autoridades indicaron varios conjuntos. El primero está constituido por causas relativas a las condiciones económicas y al empleo, donde un grupo de países señalaron tendencias de carácter global, como las crisis económicas y las políticas de ajuste (Argentina, Bolivia, Cuba, Guatemala, México y Uruguay). En lo referente al empleo, se destaca la precariedad, la falta de oportunidades y la flexibilización laboral (Argentina, Chile, Costa Rica, México, Nicaragua y Perú) y el alto desempleo (Ecuador, El Salvador, México, Perú y República Dominicana), así como la desarticulación entre el sistema educativo y el mercado de trabajo (Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua y Perú) (véase el cuadro V.2).

Cuadro V.2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (15 PAÍSES): CAUSAS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA JUVENTUD															
Temas	Argentina	Bolivia	Chile	Colombia	Costa Rica	Cuba	Ecuador	El Salvador	Guatemala	México	Nicaragua	Panamá	Perú	República Dominicana	Uruguay
Condiciones económicas y empleo															
Crisis económica y/o políticas de ajuste	X	X				X			X	X					X
Precariedad, falta de oportunidades y flexibilización laboral	X		X		X					X	X		X		
Alto desempleo							X	X		X			X	X	
Desarticulación entre el sistema educativo y el mercado de trabajo					X		X			X	X		X		
Débiles políticas de empleo orientadas a la juventud							X		X			X			
Escaso acceso y apoyo a proyectos productivos							X				X				
Pobreza, desigualdad, baja calidad de vida y exclusión social															
Desigualdad socioeconómica, discriminación y exclusión			X				X					X			X
Pobreza						X		X			X				X
Terrorismo y violencia social				X				X							
Mala calidad de vida (violencia intrafamiliar, abandono, etc.)							X								
Educación, capacitación y formación															
Falta de capacitación técnico-vocacional			X	X			X			X			X	X	
Falta de programas preventivos de educación							X		X		X	X			
Escasas oportunidades de desarrollo educativo			X						X		X				
Insuficiente presupuesto y apoyo en educación														X	X
Insuficientes servicios de información y orientación vocacional							X				X				
Deserción escolar por necesidades de ingreso familiar									X				X		
Falta de innovación del personal y material docente										X				X	
Salud															
Falta de prevención en salud			X						X	X	X				
Limitado acceso a servicios de salud										X	X	X		X	
Malas condiciones de saneamiento													X		
Ciudadanía y participación															
Falta de formación en materia de derechos de la juventud					X								X		
Falta de participación juvenil				X									X		
Desconocimiento de la problemática juvenil													X		
Escasa vida comunitaria	X												X		
Organizaciones juveniles frágiles													X		
Otros		X				X	X								

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las respuestas de los países a la encuesta sobre programas nacionales hacia la juventud, 2004.

Un segundo conjunto de factores se relaciona con la pobreza, la desigualdad, la baja calidad de vida y la exclusión social (en Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay), indicándose la pobreza en el caso de Cuba, El Salvador y Nicaragua. El terrorismo y la violencia social se destacan en Colombia y en El Salvador y la violencia doméstica en el caso de Ecuador.

Otras tendencias específicas se observan en el ámbito de la educación, la capacitación y la formación. En este sentido, se resalta la falta de capacitación técnico-vocacional (Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y República Dominicana) y de programas preventivos en la educación (Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Panamá). Asimismo, se señalan vacíos en el sistema educativo relativos a las escasas oportunidades de desarrollo educativo y al insuficiente presupuesto y apoyo a la educación, la carencia de servicios de información y orientación vocacional, así como la falta de personal y material docente (Ecuador, México y República Dominicana).

En la salud, dos son los temas que más se destacan: la falta de prevención (Chile, Guatemala, México y Nicaragua) y el limitado acceso a los servicios de salud (México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana).

Finalmente, en relación con aspectos relativos a la ciudadanía y la participación de los jóvenes, se señala la falta de formación en materia de derechos (Costa Rica y Perú), junto con la ausencia de participación de los propios jóvenes y la debilidad de sus organizaciones.

4. LA PERSPECTIVA DE LOS JÓVENES

En la perspectiva de los jóvenes destacan los temas de identidad y los relativos a la familia y la afectividad. Existe coincidencia con las autoridades en la percepción de las dificultades para encontrar empleo, en la devaluación de la educación y en las carencias de derechos ciudadanos.

En esta sección se resumen los resultados de las encuestas nacionales de jóvenes realizadas entre 1997 y 2000 en cuatro países: Chile, Colombia, Guatemala y México, en que se abordaron seis temas: identidad, relaciones afectivas, tiempo libre, participación y vida ciudadana, educación y trabajo. Si bien las encuestas no son comparables, arrojan interesantes resultados en cuanto a temas que habitualmente no captan las encuestas continuas de hogares y que tienen relación con la subjetividad de los jóvenes. A pesar de que las encuestas se llevaron a cabo en distintos tiempos y las preguntas tuvieron un bajo nivel de comparación, fue factible bosquejar algunas de las opiniones de los jóvenes de fin de siglo (OIJ, 2004a).

En relación con la identidad de los jóvenes, en las encuestas se puede encontrar un vínculo entre imaginarios y realidad: la sociedad los define como sujetos en transición para la vida y por tanto gozan de un tiempo de espera, de un ciclo de iniciación; las encuestas confirman que este imaginario está reforzado por los propios jóvenes. Al mismo tiempo, la sociedad les exige e impone trabajar a edades tempranas para ayudarse o ayudar a sus familias. Así, las identidades juveniles conjugan la preparación, el disfrute, el gozo y la compatibilidad de roles y responsabilidades propias de los adultos, especialmente en la esfera del trabajo. En todo ello se vislumbran valores afirmativos y una participación más igualitaria de las mujeres. Por otra parte, hay indicios de que se está dando una estandarización de identidades a partir de lenguajes, necesidades, críticas, gustos y rituales: la música, la moda, el deporte y las imágenes televisivas están conformando (con sus diferencias sociales y de países) una juventud globalizada y entrelazada.

En lo que respecta a las afectividades de los jóvenes, se aprecia la importancia de la familia, el noviazgo, las relaciones sexuales y la amistad como un espacio cargado de subjetividades. La familia es el ámbito donde expresaron su más alto aprecio y confianza, un lugar de negociación —no exento de reglas— para encontrar cariño, comprensión y apoyo. En relación con las prácticas, apuntaron a la

presencia generalizada de las relaciones sexuales, la precocidad y el uso relativamente restringido de anticonceptivos. Por tanto, en el ejercicio de la sexualidad mostraron situaciones de riesgo (por ejemplo, la ausencia de uso de anticonceptivos y el riesgo de paternidad temprana y embarazo adolescente), que se transforman en un factor de quiebre en sus trayectorias escolares y laborales.

Cabe destacar la relevancia que tienen para ellos los orígenes sociales de las familias: la situación socioeconómica familiar determina en buena medida sus logros y fracasos, como un reflejo de la propia forma en la que están organizadas las sociedades. Los jóvenes de orígenes menos privilegiados son los que más carencias y obstáculos encuentran en sus trayectorias y los que más problemas deben enfrentar en la escuela, el trabajo y la realización de la autonomía personal, siendo las mujeres quienes tienen las desventajas más claras, particularmente en el mundo del trabajo.

En relación con las concepciones y prácticas de los jóvenes en la vida ciudadana, indican que tienen conciencia de los límites de la democracia y participan activamente en sus procesos, al tiempo que tienen una opinión crítica de los actores políticos, pues en estas sociedades el juego democrático privilegia la actuación de los partidos y el proceso electoral. No parecen demasiado preocupados por participar en las organizaciones corporativas y tradicionales con las que se vincularon sus padres; prefieren establecer nexos grupales con los amigos y pertenecer a organizaciones menos rígidas y contaminadas del proceso burocrático-político, como las deportivas, eclesiales y culturales, lo cual apunta a una reivindicación de la libertad frente a la tradición, así como mayores exigencias a los actores políticos. Esta reivindicación del individualismo y los espacios sociales de seguridad y afecto parecen reforzar

o brindar elementos para la estabilidad social y la convivencia ciudadana. Además, deben destacarse las restricciones que tuvieron las encuestas para captar la forma en que se mide la participación política juvenil, pues pareciera que la evolución de dichos instrumentos no es sincrónica con las prácticas y condiciones del contexto actual: el análisis de las orientaciones políticas tradicionales de izquierda, centro y derecha no parece de gran utilidad para conocer sus valoraciones al respecto.

La educación para estos jóvenes tiene un alto valor social: se aprecia positivamente por encima de otras instancias públicas y se reconoce como generadora de oportunidades en la vida adulta y como espacio de sociabilidad y convivencia. No obstante, la educación está despertando, al mismo tiempo, grandes expectativas que no logran cumplirse en el campo laboral. La prolongación de los estudios y la importancia que adquieren los niveles universitarios, en la minoría que los alcanza, responde a las mayores exigencias de escolarización y diversificación de credenciales, al tiempo que se incrementan las dificultades de inserción en el mercado de trabajo y se restringen las oportunidades para los jóvenes de menor calificación.

Por su parte, el mundo del trabajo revela contrastes, pues al tiempo que se presenta un panorama de condiciones laborales precarias y de baja calidad, las encuestas indican que los jóvenes tienen una valoración relativamente positiva de sus empleos, particularmente de los aspectos de convivencia. La falta de oportunidades de trabajo es el asunto que los jóvenes identifican como prioritario. Para los que están desempleados, las respuestas de los gobiernos a través de los programas de capacitación han sido fragmentadas y las más de las veces profundizan las desigualdades.

B. LAS POLÍTICAS NACIONALES DE JUVENTUD EN AMÉRICA LATINA

Durante el período comprendido entre 1995 y 1999 aumentó el dinamismo de los procesos nacionales para la articulación de las políticas de juventud, aunque a un ritmo desigual entre los diferentes países de América Latina. En la actualidad, existe gran heterogeneidad en las políticas de juventud de los países encuestados, que pueden entenderse a la luz de diversos criterios: los paradigmas y enfoques de la fase juvenil, sus fundamentos legislativos (ámbito jurídico-normativo), los niveles de la administración pública encargados de tomar las medidas para la juventud y el tipo específico de gestión que realizan los organismos oficiales en cada país.

1. PARADIGMAS Y ENFOQUES DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD EN AMÉRICA LATINA

Existen cuatro enfoques típicos respecto de la fase juvenil: la juventud como período preparatorio, como etapa problemática, desde el punto de vista de la ciudadanía juvenil y como actor estratégico del desarrollo. Cada uno de estos enfoques supone políticas y programas específicos, que se encuentran en diversas combinaciones en los países de la región. La perspectiva desde donde se diseñan permite distinguir entre políticas juveniles más tradicionales o más modernas.

Existen cuatro visiones de las características de la fase juvenil: la juventud como período prepara-

torio, según la cual esta etapa se define a partir de las crisis; la juventud como etapa problemática, con una visión negativa restringida a temas como la delincuencia, las drogas, la violencia, la deserción escolar y otros; la ciudadanía juvenil, con una perspectiva integral en que se prioriza la plenitud de los derechos de los jóvenes a participar en políticas y programas de juventud, y la visión del joven como actor estratégico del desarrollo, orientada a la formación de capital humano y social, como destrezas y capacidades en la conducción de su desarrollo y en el campo productivo (véase el cuadro V.3). Los dos últimos enfoques suponen a las juventudes como actores sociales. De cada uno de estos enfoques se desprenden opciones en cuanto al diseño de las políticas y el carácter de los programas orientados a la juventud (Krauskopf, 2003).

Cuadro V.3

PARADIGMAS DE LA FASE JUVENIL EN LOS ENFOQUES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS		
Fases del paradigma	Políticas	Programas
Preparatoria <ul style="list-style-type: none"> • Transición a la adultez • Etapa de preparación 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientadas a la preparación para la adultez • Tendientes a ampliar la cobertura educativa • Tiempo libre sano y recreativo • Servicio militar 	<ul style="list-style-type: none"> • Universales • Indiferenciados • Aislados
Problemática <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo y transgresión • Etapa problema para la sociedad 	<ul style="list-style-type: none"> • Compensatorias • Sectoriales (predominantemente justicia y salud) • Focalizadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencialidad y control de problemas específicos • Prioridad para la juventud urbano-popular • Dispersión de las ofertas programáticas
De ciudadanía <ul style="list-style-type: none"> • Juventud ciudadana • Etapa de desarrollo social 	<ul style="list-style-type: none"> • Articuladas en políticas públicas • Intersectoriales • Inclusión de jóvenes como sujetos explícitos de derechos políticos, sociales, culturales y económicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrales • Participativos • Extensión de alianzas
De actor del desarrollo <ul style="list-style-type: none"> • Juventud: actor estratégico del desarrollo • Etapa de formación y aporte productivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Articuladas en políticas públicas • Intersectoriales • Orientadas a la incorporación de la juventud como capital humano y desarrollo de capital social 	<ul style="list-style-type: none"> • Equidad y transversalidad institucional • Enfrentamiento de la exclusión • Aporte juvenil a estrategias de desarrollo

Fuente: Dina Krauskopf, "La construcción de políticas de juventud en Centroamérica", *Políticas públicas de juventud en América Latina: políticas nacionales*, O. Dávila (ed.), Viña del Mar, Chile, CIDPA Ediciones, 2003.

De las encuestas realizadas se desprende que coexisten y compiten diversos enfoques vinculados al rol y las necesidades del sujeto joven, visibles tanto en los lineamientos generales de las políticas como en las programaciones de juventud implementadas.

Un primer aspecto que se constata es que la mayoría de los gobiernos sufre una carencia relativa de políticas explícitas de juventud orientadas exclusivamente al grupo juvenil. Los países encuestados informan en general de medidas inmersas en una oferta programática de tipo focalizada y universal, pocas veces específicamente dirigidas a la población juvenil. En algunos casos, como ya se mencionó, tanto en la legislación como en la oferta programática se incluye a los jóvenes en grupos de población de mayor o menor edad.

Por otra parte, las políticas de juventud existentes suelen contemplar programas específicos que restringen el sujeto joven a la categoría de "estudiante", como protagonista de prácticas específicas (consumo de drogas) o como objeto de la prevalencia de la morbilidad (como las ETS o el VIH) (OIJ, 2001).

En consecuencia, se observa una política transversal de juventud, principalmente desarrollada por organismos públicos sectoriales que, dentro de sus áreas de incumbencia, tocan temas relevantes para la población juvenil. Se trata de una política para la juventud en sentido amplio, cuyas acciones son de largo alcance, como las políticas educativas, de salud y de empleo. No obstante, si bien incluyen acciones dirigidas a los jóvenes, tienen el sesgo de las competencias sectoriales, es decir, están pensadas desde el sector y no desde el sujeto de las políticas (Balardini, 2003).

Sin embargo, algunos países destacan esfuerzos por considerar un enfoque de política con y desde la juventud. Tal posicionamiento se aproxima a una propuesta consensuada entre diferentes actores, incluidos los jóvenes, en procesos participativos y de generación de conciencia ciudadana. Es el caso de Costa Rica, que en el 2002 inicia la elaboración de una política pública de la persona joven, que cuenta con procesos de consulta y validación de las juventudes del país, en los sectores estatales y en la sociedad civil, además de una serie de estudios institucionales para analizar las capacidades

de la red de instituciones que se encargan directa o indirectamente de las materias de juventud. Asimismo, en Argentina actualmente se discute el paradigma normativo desde el cual deben abordarse las acciones orientadas hacia los jóvenes. Se busca pasar de una atención a la infancia y adolescencia de tipo asistencialista y tutelar a otra basada en la ciudadanía y los derechos. Se observan esfuerzos similares en Panamá, que en 1999 decreta el Pacto nacional por la juventud, donde se establece que quienes ejerzan la presidencia en el período 1999-2004 elaborarán, junto a los jóvenes, un Plan de Acción de Juventud, y en República Dominicana, donde la oferta programática al respecto se inserta

en la Política Integral de Adolescencia y Juventud, que ha desencadenado un proceso participativo de construcción de política de juventud, cuyos resultados no son aún conocidos.

Esta transición hacia el enfoque de ciudadanía deriva en parte del reconocimiento de la falta de participación de la población juvenil en las políticas de juventud de América Latina. Los resultados de la encuesta realizada alertan sobre la escasa información de que disponen tanto los jóvenes como los organismos de juventud con respecto a las responsabilidades y deberes ciudadanos de este sector de la población.

Recuadro V.1

DISTINTOS ENFOQUES EN LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD

Una primera aproximación a las políticas públicas de la juventud apunta a toda acción articulada que se orienta al logro y realización de valores y objetivos sociales relevantes en el período vital juvenil. Son acciones orientadas a influir en los procesos de socialización que se desarrollan en esa etapa, trátense tanto de políticas reparatorias o compensatorias como de promoción y construcción de ciudadanía. En esta definición se incluyen tanto los valores e intereses de los jóvenes como los de la población en general. Planteada desde un punto de vista participativo, se propone el objetivo de generar las condiciones propicias para que los jóvenes puedan realizarse y, al mismo tiempo, participar en la configuración de la sociedad en que viven.

Las políticas para la juventud, comúnmente asistencialistas, ubican a la juventud en lugares periféricos del cuerpo social activo, adolecen de cierto proteccionismo —los jóvenes son vistos como seres vulnerables y sin experiencia— y operan en función de un fuerte control social. Comparten una extrema confianza en los resultados de los procesos de enseñanza, inequívocamente orientados por los adultos. Se trata de un dirigismo social generalizado, ejercido por la tutela omnipresente y omniprovidente de los adultos, que estimulan en los jóvenes conductas pasivas y conformistas.

Las políticas por la juventud se desarrollan utilizando a los jóvenes. Sus características principales son: llamados a la movilización, adoctrinamiento, retórica heroica, dinamización del mundo juvenil, instrumentalización del idealismo juvenil. Estas políticas, pasivas por parte de los jóvenes, se imponen desde arriba. No sirven a los jóvenes, se sirven de ellos. Propias de los regímenes totalitarios y autoritarios, necesitan de los jóvenes para tener continuidad.

Las políticas con la juventud son las más modernas e innovadoras. Su principio base es la solidaridad y en esencia son participativas, no sólo en el espacio ejecutivo sino en aquellos aspectos que se refieren al análisis y la toma de decisiones. Son activas desde los jóvenes e interactivas en la dialéctica juventud-sociedad. No se imponen desde arriba sino que son creativas, abiertas y sujetas al debate crítico.

Las políticas desde la juventud se refieren a las actividades e iniciativas imaginadas, diseñadas y realizadas por los mismos jóvenes, en condición autogestionaria. Incorporan las tendencias post-estatistas, que confieren un rol relevante a la sociedad civil en la gestión de proyectos sociales y culturales. Se trata de iniciativas autónomas de grupos juveniles más o menos formales, que pueden encontrarse en las Casas de la Juventud, que cuentan con subsidios del Estado y otras fuentes.

Puede advertirse que los gobiernos más conservadores tienden a efectuar políticas para la juventud, mientras los autoritarios o disciplinarios desarrollan políticas por la juventud. Los regímenes que buscan realmente afirmar valores democráticos desarrollan iniciativas con y desde la juventud.

Fuente: Oscar Dávila (ed.), *Políticas públicas de juventud en América Latina. Políticas nacionales*, Viña del Mar, Chile, CIDPA ediciones, 2003.

El enfoque de ciudadanía permite abrir la discusión sobre los rangos etarios dentro de los cuales debe entenderse lo juvenil, ya que otorga flexibilidad para que tal definición sea considerada en función de cada realidad particular. Por este motivo, muchos países han realizado importantes cambios legislativos que se orientan en esta dirección y que se examinan más adelante. A diferencia de la presencia en la normativa internacional del enfoque del joven como sujeto de derechos, las encuestas revelan que tal categoría no ha sido integrada al discurso de los organismos y funcionarios gubernamentales de juventud.

En general, la información proveniente de las encuestas sobre programas nacionales de juventud no permite realizar una clasificación exhaustiva de las políticas de los países latinoamericanos en estos términos, ya que el grado de consolidación legal e institucional que ampara dichas iniciativas en los diferentes países es muy variable. Además, no existen mecanismos de monitoreo y evaluación de las acciones realizadas que permitan reorientar las políticas, y en las encuestas no se expresan con claridad los fundamentos éticos y políticos que las sustentan.

2. EL MARCO NORMATIVO-JURÍDICO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE JUVENTUD

Los principales instrumentos jurídicos que contemplan la situación de la juventud son el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. La Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento internacional que más directamente incide en el reconocimiento de los derechos del joven. Se avanza en el reconocimiento y ratificación de la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud.

La difusión del enfoque de derechos humanos en la conciencia internacional ha permitido el desarrollo paulatino de instrumentos en contra de la discriminación de la mujer y de mecanismos de

protección para los niños y adolescentes. Sin embargo, a diferencia de esos segmentos poblacionales, que han logrado ser reconocidos como sujetos de derechos (trabajadores, mujeres, niños), todavía no existe una convención o tratado que se refiera específicamente al joven y este aún permanece como una categoría indefinida en los marcos constitucionales de los países. Su tratamiento legislativo proviene de la regulación sectorial de derechos: prima una concepción de atención de servicios desde una perspectiva sectorial, en la que no aparece el joven como titular de derechos ni como protagonista del desarrollo (Bernaes, 2001).

Durante la última década en América Latina se advierte la tendencia a configurar a la juventud como categoría jurídica, expresada en el interés por aprobar leyes de juventud y reorganizar su dispersión legislativa (OIJ, 2001). En este proceso destaca la acción desempeñada por la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), como organismo internacional de carácter multilateral creado para promover el diálogo, la concertación y la cooperación en materia de juventud entre los países iberoamericanos.

a) El marco internacional

El marco internacional en torno a los derechos humanos ha resultado favorable para introducir modificaciones en el derecho interno de los países a favor de los jóvenes. El desafío pendiente es la aplicación cabal de los principios y derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, dado que todos sus artículos tienen una relación directa con las aspiraciones de los jóvenes. Un avance fundamental en esta materia está dado por la acogida de tal Declaración en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigentes desde 1976, que han sido ratificados por la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas (Bernaes, 2001).

En lo que a la juventud se refiere, destaca especialmente la introducción de la Carta Iberoameri-

cana de Derechos de la Juventud y la realización de Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Juventud, en que se reúne a los ministros de juventud para diseñar medidas de cooperación en materia de políticas públicas dirigidas al sector juvenil. Desde sus inicios en 1987, las conferencias se han orientado a la reactivación y establecimiento de las instituciones oficiales responsables del tema de la juventud en América Latina.

La iniciativa de elaborar una Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud corresponde a un mandato de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal, en 1998, cuya finalidad es consagrar jurídicamente —en el ámbito iberoamericano— el pleno reconocimiento a la especificidad de la condición juvenil y dar respuesta a los requerimientos de protección y garantía para el ejercicio de los derechos de los jóvenes. En dicho instrumento se reconoce a los jóvenes como sujetos de derechos, actores estra-

tégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades.

Por otra parte, la OIJ, como entidad encargada de la ejecución del Plan Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina (PRADJAL), ha promovido diversas actividades desde las cumbres de alto nivel gubernamental. En el período comprendido entre 1996 y 1999 la OIJ ha impulsado el Plan, orientado en tres direcciones: aumento del conocimiento sobre la juventud, fortalecimiento de la institucionalidad de la juventud en la región y sensibilización de actores sociales y políticos. Entre los productos más importantes se encuentra la denominada Convención Internacional de la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud. Este texto debe ser aprobado por la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, que se celebrará en México, en noviembre del 2004 (véase el recuadro V.2).

Recuadro V.2

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LA CARTA IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LA JUVENTUD

En Santo Domingo, República Dominicana, los días 1° y 2 de abril del 2004 se reunieron las delegaciones oficiales de los países iberoamericanos, organismos internacionales y agencias de cooperación, con el fin de incorporar al proyecto de texto de la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud algunas precisiones y ajustes técnicos, de conformidad con otros tratados internacionales de protección de derechos existentes en el ámbito internacional y con las legislaciones nacionales.

Los delegados acordaron, además, proponer un cambio en la denominación del texto, que pasaría de llamarse Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud a Convención Internacional de la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud.

Así las cosas, la propuesta de texto de la Convención deberá aprobarse en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, que se celebrará en México, Guadalajara, Jalisco, en noviembre del 2004. Una vez aprobada la nueva propuesta, se abrirá el proceso de discusión, negociación y adopción del texto definitivo.

En la propuesta de texto de la Convención se destacan los derechos más significativos. Se trata de los derechos:

- a la igualdad de género
- a la paz
- a la identidad
- al honor, a la intimidad personal y familiar
- a formar parte activa de una familia
- a la libre elección de la pareja
- a la participación social y política
- a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
- a la libertad de opinión, expresión, reunión e información
- a la educación
- a la libre creación y expresión artística
- a la salud integral y de calidad

(continúa)

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LA CARTA IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LA JUVENTUD

- al trabajo
- a la igualdad de oportunidades
- a la protección social
- al acceso no discriminatorio a la formación profesional y técnica inicial
- a una vivienda digna
- al desarrollo económico, social y político
- a vivir en un ambiente sano y equilibrado
- a la recreación y el tiempo libre
- a la educación física y a la práctica de los deportes
- a formular objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio
- a la justicia

Algunas de las aspiraciones de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes:

- Ningún joven iberoamericano menor de 18 años será involucrado en hostilidades militares
- Ningún joven iberoamericano será sometido a la pena de muerte
- Ningún joven iberoamericano será discriminado por su raza, color, origen nacional, pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural.
- Ningún joven iberoamericano será discriminado por su sexo, orientación sexual, lengua, religión.
- Ningún joven iberoamericano será discriminado por sus opiniones, su condición social, aptitudes físicas, lugar donde vive, por sus recursos económicos.

Fuente: Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), El estado de la juventud en Iberoamérica, 2004, <http://www.oij.org/pdf/JuventudIberoamericana.pdf> [fecha de consulta: marzo del 2004].

Dado que en la legislación el sujeto joven tiende a compartir una condición sociojurídica con la población menor de 18 años, entre los instrumentos jurídicos suscritos por los gobiernos a partir de convenios internacionales es necesario considerar también aquellos relativos a la niñez y adolescencia.

Al respecto, se destaca el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (véase el cuadro V.4). La Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento internacional que más directamente incide en el reconocimiento de los derechos del joven. Sin embargo, se refiere explícitamente a los adolescentes y a los menores de entre 15 y 18 años, por lo que el tramo comprendido entre los 19 y 24 años queda sin norma internacional que legisle en su favor (Bernaes, 2001).

En relación con la Convención, se destacan tres situaciones: Estados que, habiendo ratificado

la Convención, aún mantienen vigentes las antiguas leyes de menores; Estados que han comenzado un proceso destinado a introducir reformas tendientes a la plena protección de los derechos del niño, pero que no lo han completado y mantienen parcialmente enfoques legislativos anteriores a la Convención y, por último, Estados que han adecuado sustancialmente su legislación a la Convención y que aplican complejos procesos de transformación institucional de nuevas políticas y programas (CEPAL, 1998b).

La mayoría de los países ha ratificado los convenios relativos al trabajo infantil. Sin embargo, la normativa legal vigente en la región sobre la edad mínima para trabajar muestra ciertas contradicciones con respecto a las normas internacionales y una gran diversidad entre países y dentro de ellos. En algunos, esa edad se fija en 18 años (Bolivia, Colombia), en otro (Cuba) en 17 y en otros en 16 (Brasil, Chile, República Dominicana), 15 (Uruguay) y 14 años (Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá) (CEPAL, 2003a).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (15 PAÍSES): NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				
	Código de la niñez y la adolescencia	Convención sobre los Derechos del Niño	Convenio 138	Convenio 182
Argentina		X		
Bolivia			X	
Brasil			X	X
Chile			X	X
Colombia			X	
Costa Rica	X	X	X	X
Cuba			X	
Ecuador	X		X	X
El Salvador			X	X
Guatemala	X		X	X
México	X			X
Panamá			X	X
Perú				X
República Dominicana	X		X	X
Uruguay	X	X	X	X

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las respuestas de los países a la encuesta sobre programas nacionales para la juventud, 2004, y *Panorama social de América Latina, edición 2002-2003* (LC/G.2209-P/E), Santiago de Chile, 2003. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.185.

En América Latina la proporción de niños que trabaja continúa siendo alta. En los países en que se contaba con esas cifras, la proporción de los jóvenes de 13 a 17 años ocupados oscilaba en 1997 entre 39% en Bolivia y 6% en Chile (CEPAL, 1999 y 2000b). Estas cifras son inferiores al total de los jóvenes y niños insertos en el mercado laboral, dado que, por ser considerado ilegal, el trabajo infantil no se declara, a lo que se agregan las deficiencias propias de los sistemas de información. Existe evidencia acumulada sobre la importancia de invertir en la educación, así como sobre las dificultades que enfrentan los alumnos que trabajan, lo que se traduce en altas tasas de deserción escolar (CEPAL, 2000b y 2002a). Habida cuenta del número de niños y jóvenes ocupados, es aún más apremiante desplegar mayores esfuerzos para imponer la normativa en la práctica y llevar adelante políticas y programas orientados a la población infantil y juvenil que trabaja (CEPAL, 2003a).

b) El marco constitucional de los países latinoamericanos en materia de juventud

Conforme al avance democrático, los países latinoamericanos han ido incorporando el enfoque de los derechos humanos a sus marcos constitucionales, pero sin alcanzar un nivel desagregado específico de derechos. Sin embargo, han podido crear las bases para elaborar una legislación sobre la juventud, que podría ser más orgánica y sustantiva que la que existe en la actualidad, caracterizada más bien por su dispersión y desorden (Bernales, 2001).

i) Las leyes de juventud en los países de América Latina

Al analizar la normativa interna en materia de juventud de los países encuestados, es posible constatar tres situaciones: varios países han logrado aprobar una ley de juventud o ley de la persona joven, que sirve como marco jurídico general para las

políticas nacionales de juventud (Colombia, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana). En otros, la elaboración y lineamientos centrales de esta ley se encuentran actualmente en discusión (Bolivia, Ecuador, El Salvador, República Bolivariana de Venezuela). Finalmente, otros países no se han planteado la promulgación de leyes de juventud (véase el anexo V.3).

Entre los países que cuentan con legislación de juventud se encuentra Colombia, donde el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en 1995 establece la Política de Juventud Nacional, creando leyes, decretos y reglamentos relativos a los jóvenes, y donde recientemente se ha comenzado la puesta en marcha del Programa nacional “Colombia joven”. Por su parte, en Costa Rica, en el 2002 se aprueba la ley general de la persona joven, que aporta las bases para el Sistema Nacional de Juventud. Esta ley ha tenido muchas modificaciones, pero ha permitido reconocer un mayor nivel jerárquico en el organismo encargado del tema, materializado en un Viceministerio de Juventud.

En Nicaragua, en el 2001 se aprobó la Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud, que dio lugar a la ejecución de la política nacional para el desarrollo integral de la juventud y a la creación de la Secretaría de la Juventud, abocada al Plan de Acción. En virtud de esta ley se modificaron las instituciones que regían las políticas de juventud, ocupando en el presente un lugar de vanguardia en la región (Dávila, 2003). En República Dominicana la Ley General de Juventud fue promulgada en el 2000 y tuvo por objeto instaurar el marco jurídico, político e institucional de orientación de las políticas del Estado y la sociedad tendientes a satisfacer las necesidades y expectativas de la población joven y lograr una efectiva participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones. Su finalidad es propiciar el desarrollo integral de los y las jóvenes, sin distinción de sexo, religión, política, raza, etnia u orientación sexual y nacionalidad.

Entre los países que discuten actualmente leyes generales de juventud cabe destacar el caso de Bolivia, donde la Primera Encuesta Nacional de Juventud constituyó la base para la elaboración del “Diagnóstico de la Juventud Boliviana” y de la propuesta de “Lineamientos de Políticas Nacionales de Juventud”. Ello permitió incorporar una propuesta de modificaciones a la Constitución Política del Estado y un anteproyecto de “Ley de Juventud” (OIJ, 2004d). En Ecuador, existe un proyecto de ley de la juventud radicado en la actualidad en la subcomisión de la Ley de la Juventud del Congreso Nacional, donde se trabaja la filosofía, conceptos y temas que abordará la ley. En El Salvador, la Secretaría de Bienestar Social considera la elaboración de una política nacional de juventud y en Honduras, la política de juventud se articula en torno al Plan Nacional de Juventud, pero en su normativa interna no se especifica el marco legal de las políticas de juventud. Finalmente, en la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra en estudio una ley de juventud.

Cabe señalar que la ausencia de leyes generales de juventud puede contribuir a la dispersión legislativa que afecta a los países en esta materia. Para ello confluyen el desconocimiento de un alto porcentaje de legisladores sobre el tema y la manipulación de que por diversas circunstancias son objeto algunas demandas juveniles. Entre las ventajas de una ley marco se cuentan la de organizar, orientar y distribuir competencias y asignar recursos en el tema que se legisla, eliminando con ello el desorden. Una ley marco de la juventud sería la expresión orgánica para la regulación de las políticas sobre el tema, lo que puede traducirse en resultados más eficientes respecto de cuestiones juveniles tuteladas legalmente (Bernal, 2001).

Las especificaciones constitucionales existentes en los países latinoamericanos en materia de juventud se refieren principalmente a los adolescentes y jóvenes menores de 18 años. Estas se centran sobre todo en la protección del ámbito familiar y en la obtención de recursos que aseguren al adolescente y al menor el derecho a la vida, la alimentación,

la salud, la educación, la integridad física, el ocio recreativo, entre otros. La influencia y el esfuerzo por trasladar al derecho interno disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño deben valorarse como algo positivo (Bernaes, 2001).

Al analizar la legislación vigente en materia de ciudadanía es posible constatar que en la mayoría de los países latinoamericanos el derecho a sufragio está fijado en los 18 años. En Cuba y Nicaragua se otorga a los 16 años. En cuanto a la participación política no existe criterio constitucional uniforme

entre los países. Respecto del tema de la imputabilidad por conductas delictivas cabe señalar que lo que consta en los textos constitucionales son las garantías de libertad y seguridad personales que evitan el abuso y la pérdida de la libertad a quienes no han cometido delitos. Hay países que bajo la influencia de la Convención sobre los Derechos del Niño incluyen disposiciones que protegen a los menores de 18 años. Se trata de un dispositivo que permite evitar que la legislación penal incluya a los menores dentro del rigor de las penas que deben aplicarse a mayores de edad (véase el cuadro V.5).

Cuadro V.5

AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS JÓVENES	
País	
Argentina	No es punible el menor de 16 años. Los menores de 18 años son punibles de delitos cuya pena de privación de libertad no exceda los 2 años con multa o inhabilitación
Bolivia	La ley establece responsabilidad penal para los mayores de 16 años; el proyecto de ley del Código del menor la amplía a los 18 años
Brasil	Los niños y adolescentes de 12 a 18 años son responsables ante el sistema judicial del menor, de acuerdo con su legislación específica
Chile a/	Los menores de 16 años son inimputables; entre 16 a 18 años la imputabilidad depende del discernimiento
Colombia	Los niños y adolescentes de 12 a 18 años son responsables ante el sistema judicial del menor
Costa Rica	Los niños y adolescentes de 12 a 18 años son responsables ante el sistema judicial del menor
Ecuador	Los niños y adolescentes de 12 a 18 años son responsables ante el sistema judicial del menor
Guatemala	Los niños y adolescentes de 12 a 18 años son responsables ante el sistema judicial del menor
Honduras	Los menores de 12 años no son imputables. Entre 12 y 18 años, tienen el fuero especial de la ley de jurisdicción de menores
Perú	Los niños y adolescentes de 12 a 18 años son responsables ante el sistema judicial del menor
Uruguay	Los menores de 18 años no son imputables y se les aplican las medidas de protección del Código del niño.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)/Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB), *Construir equidad desde la infancia y la adolescencia en Iberoamérica* (LC/G.2144) Santiago de Chile, septiembre del 2001.

a/ Se discute en el ámbito legislativo rebajar la edad para la responsabilidad penal a los 14 años.

ii) Cambios recientes en la legislación de juventud

Como ya se señaló, la legislación en materia de juventud es dispersa y adolece de problemas de inorganicidad, fragmentación, fragilidad y una marcada inestabilidad. Sin embargo, al analizar los cambios legislativos recientes en materia de juventud se advierte que las prioridades gubernamentales están puestas en la consolidación

de una institucionalidad de juventud (Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Perú), la elaboración de una ley de juventud (Costa Rica, Ecuador (anteproyecto), Nicaragua y República Dominicana) y la definición de una política nacional de juventud (Ecuador, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana) (véase el cuadro V.6 y el anexo V.3).

Cabe destacar también el esfuerzo reciente de los países por introducir modificaciones legales referidas a organizaciones juveniles que estimulan su creación. Esta lenta aproximación al joven como sujeto de derechos y protagonista del desarrollo contribuye a organizar las relaciones que puede establecer el joven con otros sectores de la sociedad. Pese a que las disposiciones por las que se crean organismos públicos especializados en el tema juvenil ayudan a institucionalizar dentro del Estado el tratamiento del joven, no siempre contribuyen a delimitar los derechos de la juventud ni a enfatizar su titularidad de derechos.

Los cambios legislativos observados están orientados a otorgar mayor coherencia a las acciones de juventud. En efecto, los problemas de hiperconcentración y cruces entre instituciones o la ausencia de coordinación de las políticas provienen en gran parte de las falencias de la legislación de juventud. Y no es que esta sea escasa; puede inclusive que sea abundante. Sin embargo, no se trata de tener muchas leyes sobre juventud sino de contar con un orden legislativo que permita individualizar al joven como sujeto de derechos y así tener un marco de referencia específico y general en que las instituciones apliquen sus políticas y programas (Bernales, 2001).

3. LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE JUVENTUD

Los avances en la institucionalidad pública de juventud son variables. En la región latinoamericana existen ministerios, viceministerios, subsecretarías, institutos y direcciones de la juventud con diversos niveles de incidencia y jerarquía política. Las funciones desarrolladas son de diversa índole: rectoría, asesoría y supervisión, así como de promoción de las actividades y servicios orientados a los jóvenes. Parte importante de la oferta programática orientada a los jóvenes tiene un carácter sectorial. Algunos países no cuentan con organismos oficiales a cargo de los sectores juveniles.

a) Dependencia institucional y lineamientos de acción de los organismos gubernamentales de juventud

La política pública de juventud depende en gran parte de la consolidación de una institucionalidad pública que contribuya a otorgarle continuidad y sustentabilidad. En los países encuestados los avances de las instituciones de juventud son variables; en algunos, los organismos oficiales de juventud han sido creados por decreto presidencial, es decir, sin el amparo de una ley y en virtud del acuerdo del titular ejecutivo, lo que los hace vulnerables conforme a la renovación de los gobiernos. En Brasil, por ejemplo, no existe un organismo oficial encargado de la temática juvenil, de manera que las medidas al respecto tienden a concentrarse en los adolescentes y en los niños.

En relación con el nivel de la jerarquía administrativa, es posible distinguir una gran gama de dependencias administrativas que configuran los organismos gubernamentales de juventud: ministerios (Panamá), viceministerios (Bolivia, Costa Rica, Paraguay, República Bolivariana de Venezuela), secretarías de juventud (Nicaragua), subsecretarías, institutos (Chile, México, Uruguay), direcciones (Argentina, Ecuador, El Salvador) y otras. Algunos organismos estatales corresponden a unidades menores en una institución ministerial no especializada y carecen de personalidad jurídica, por lo que se ven limitados administrativa y políticamente (El Salvador y Nicaragua hasta el año 2001). Otros organismos oficiales de juventud están adscritos a una dependencia estatal de alta jerarquía o pueden contar con autonomía administrativa, pero con relación directa de la Presidencia de la República (Guatemala, Nicaragua, República Dominicana). También pueden depender de un ministerio cuya responsabilidad es formular la política nacional de juventud, como puede ser el caso de los Ministerios de Educación (Colombia, El Salvador, República Bolivariana de Venezuela), Deportes y Juventud (Uruguay), Desarrollo Social (Argentina), Desarrollo Sostenible, Planificación y Cooperación (Bolivia, Chile) o del Trabajo (Ecuador). Por otra

parte, estos organismos pueden desempeñarse en el nivel nacional, provincial o local (municipal

o departamental), según su jurisdicción (véase el cuadro V.7).

Cuadro V.6

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (15 PAÍSES): PRINCIPALES TEMAS CONSIDERADOS EN LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS HASTA EL AÑO 2003															
Temas	Argentina	Bolivia	Chile	Colombia	Costa Rica	Cuba	Ecuador	El Salvador	Guatemala	México	Nicaragua	Panamá	Perú	República Dominicana	Uruguay
Institucionalidad y derechos de la juventud															
Institucionalidad de juventud				X	X		X			X	X		X		
Ley general de juventud					X		X			X	X			X	
Reglamentación de corporaciones, cooperativas y organizaciones juveniles			X		X		X								
Política nacional de juventud							X	X			X			X	
Justicia penal juvenil					X										
Políticas de niñez y adolescencia							X	X							
Discriminación										X					
Presupuesto para iniciativas juveniles															X
Derechos y deberes de la juventud		X													
Mayoría de edad			X												
Semana nacional de la juventud					X										
Servicio cívico									X						
Educación, empleo, salud y familia de los jóvenes															
Educación y universidades			X												X
Embarazo adolescente					X							X			
Empleo juvenil															X
Familia								X				X			
Jóvenes migrantes															
Prevención (drogas, alcoholismo, seguridad ciudadana)					X	X									X
Trabajo infantil					X										
Violencia doméstica					X										
Otros					X										

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las respuestas de los países a la encuesta sobre programas nacionales para la juventud, 2004.

Cuadro V.7

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (19 PAÍSES): JERARQUÍA ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES OFICIALES DE JUVENTUD										
País	Fecha de creación	Ministerio	Vice – ministerio	Dirección Nacional de Juventud	Secretaría	Instituto Nacional de la Juventud	Consejo Nacional de Juventud	Programa presidencial	Fundación	Otros
Argentina				X						
Bolivia	1997		X							
Brasil	-									X
Chile	1991					X				
Colombia	2000							X		
Costa Rica	2002		X				X			
Cuba	1962									X
Ecuador	1987			X						
El Salvador				X						
Guatemala	1966						X			
Honduras	1983						X			
México	1999					X				
Nicaragua	2001				X					
Panamá	1997	X								
Paraguay			X							
Perú	2001						X			
República Dominicana										X
Uruguay	1990					X				
Venezuela (República Bolivariana de)	1994						X		X	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las respuestas de los países a la encuesta sobre programas nacionales para la juventud, 2004.

En gran parte los avances en la institucionalización del tema juvenil en los países latinoamericanos son atribuibles al accionar de la OIJ. Entre sus actividades cabe destacar el Proyecto de Desarrollo Institucional de los Organismos Oficiales de Juventud en Centroamérica (Programa DINO), auspiciado por la fundación Ford, que se llevó a cabo en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, con el objeto de potenciar la capacidad técnica y operativa de los organismos oficiales de juventud para el diseño y ejecución de políticas integrales que redundasen en beneficio de la población joven de esos países. El principal desafío consistió en fortalecer institucionalmente a los organismos oficiales de juventud y, al mismo tiempo, generar canales para la ampliación de espacios adecuados para el desarrollo ciudadano integral de los jóvenes.

El programa DINO se ha orientado a la resolución de los siguientes problemas:

- Insuficiencia y bajo impacto de la coordinación existente entre el Estado y la sociedad civil.
- Debilidad de los canales de comunicación y de trabajo conjunto entre los organismos oficiales de juventud y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes.
- Reducidas capacidades institucionales de las asociaciones juveniles y de las ONG que actúan en temas de juventud.

En suma, el programa tiende a generar condiciones más propicias para el desarrollo de una política pública que sirva para mejorar la participación ciudadana de los jóvenes.

En algunos países las acciones programáticas dirigidas a la juventud se orientan hacia la participación juvenil en políticas sociales y culturales y al fortalecimiento de vínculos institucionales en el nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en Argenti-

na existen cuatro ejes para la política de juventud: fortalecimiento de la sociedad civil, desarrollo de políticas locales de juventud, inclusión de juventud en políticas públicas y generación de conocimiento sobre la juventud. En Bolivia, las acciones se encaminan en cuatro áreas: el Plan Nacional Concertado de Desarrollo Sostenible de la Adolescencia y Juventud; el Plan Nacional de Educación Juvenil Alternada; el Plan Nacional de Atención a la Salud Integral de los Adolescentes; el programa de servicio premilitar voluntario de mujeres y el servicio militar obligatorio.

Asimismo, hay un esfuerzo importante de descentralización, como es el caso de Chile, cuyo Instituto Nacional de la Juventud (INJU) posee oficinas municipales en el nivel local y es por ley un organismo eminentemente técnico y de coordinación de esfuerzos institucionales.² La oferta de políticas de juventud está dirigida a adolescentes estudiantes de enseñanza media y superior. Las instituciones del sector ejecutan programas especiales para jóvenes. Existen actualmente 168 organismos locales o municipales de juventud. En Colombia se desarrolla el programa presidencial “Colombia Joven”, cuyas funciones son de articulación en la definición y desarrollo de la política nacional de juventud y de ejecución de planes, programas y proyectos en favor de la juventud. Está abocado a la ejecución del Sistema Nacional de Juventud, al fomento a los Consejos de Juventud, al desarrollo de servicios integrados de juventud, de cuerpos solidarios juveniles, casas de juventud, etc. Colombia Joven ha impulsado la creación de Consejos Municipales de Juventud; sin embargo, se requiere modificar la ley para potenciar su autonomía de los gobiernos locales. En Costa Rica, las orientaciones se estructuran en acciones del Movimiento Nacional de Juventudes centradas en la participación juvenil y ejercicio de derechos y por acciones de coordinación interinstitucional en cinco áreas: participación, capacitación, investigaciones, comunicación y legislación. En Guatemala los programas se ejecutan de manera sectorial y

autónoma y tienen por función afianzar y actualizar las políticas de juventud, los estudios y análisis de la juventud, la promoción de la asociatividad y participación juvenil, administración, monitoreo y gestión del plan nacional de juventud.

Como ya se señaló, en Brasil no existe un organismo oficial encargado de la temática juvenil. Las acciones se orientan a la niñez y adolescencia y el marco de referencia legal para las políticas de adolescentes es el Estatuto de Niños y Adolescentes (1990). El Consejo Nacional de los Derechos del Niño y Adolescente (CONANDA), dependiente del Ministerio de Justicia, está encargado de formular las directrices de tales políticas, en temas de educación, salud y empleo. Cada ministerio coordina las acciones en estas áreas y existe un asesor especial para asuntos de juventud en el Ministerio de Educación, quien efectúa la representación internacional oficial del país en los foros correspondientes al tema.

Un caso diferente es el de Cuba, cuya oferta programática se inicia con la revolución cubana. La Unión de Jóvenes Comunistas Cubanos y el Estado se encargan de las líneas de acción de juventud, llevadas a cabo por ministerios y organismos responsables de su ejecución. Ambos, a través del Parlamento y su Comisión de Infancia, Juventud y Mujer Joven, velan por el cumplimiento de las acciones en las áreas de educación, salud, cultura, educación física y recreación.

Otros países concentran sus líneas de acción en programas orientados a realidades específicas, como es el caso de Ecuador, que se orienta a un proyecto de integración juvenil fronterizo por la paz Ecuador-Perú, además del desarrollo de las oficinas locales de juventud, las casas de la juventud, el empleo juvenil, el fortalecimiento de organizaciones juveniles y el establecimiento de un centro de documentación e información. Por su parte, en El Salvador las iniciativas se orientan hacia adolescentes en programas

2 Entre 1997 y 1999 el INJU contó con un modelo institucional que redujo sus funciones ejecutoras. Solo ejecuta el SIJ, Sistema de Información para la Juventud e Interjoven, orientado a intervenir en aquellas áreas estratégicas y que refuerzan su rol técnico, asesor, articulador y coordinador.

de cobertura variable y ejecutados por diferentes organismos (preventivos, deporte y recreación, culturales, vocacionales, participación, etc.). También en Nicaragua la acción programática gira en torno a funciones orientadas al deporte.

En otro conjunto de países las acciones se encaminan hacia el estudio y planificación de políticas de juventud, la participación cultural de los jóvenes, los estudios de juventud y la ejecución de proyectos y programas de desarrollo juvenil (Guatemala, Honduras). En otros países (Chile, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay) las ofertas están organizadas de manera sectorial, con cierta equivalencia entre la organización de la oferta del INJU (focalizada en juventud) y los ministerios (conjuntos más amplios). Educación, empleo, seguridad ciudadana, derechos juveniles, salud (sexual reproductiva), asociatividad, medio ambiente, consumo (tarjeta joven), información juvenil son las áreas a las que se dirigen las acciones.

b) La gestión de las políticas de juventud

Desde la perspectiva del diseño y gestión de las políticas, las funciones desempeñadas por los organismos gubernamentales de juventud son variadas. La función de rectoría incluye la elaboración de planes de Estado en relación con la política de juventud, hecho que supone el conocimiento de la realidad juvenil y la posibilidad de actuar como organismo de consulta en materias vinculadas. También esta función incluye asesoría y supervisión de programas públicos, apoyo a organizaciones juveniles, estímulos para consejos y foros de organismos públicos de juventud, articulación de servicios orientados a los jóvenes, acciones de sensibilización

y comunicación social, sistemas de información que permitan definir y evaluar desempeños, entre otras cosas (Balardini, 2003).

La más tradicional de las funciones es la de ejecución, que implica capacidad y posesión de recursos para involucrarse de modo directo en la ejecución de programas, lo que otorga mayor exposición pública del organismo y contribuye a su legitimación. Compete a esta función la búsqueda de mecanismos innovadores de gestión con la participación de organizaciones juveniles y la gestión asociada.

La coordinación de las políticas es la función más reciente en relación con la rectoría y ejecución. Implica un mayor respaldo político que permite actuar como instancia coordinadora de políticas dirigidas a jóvenes que se ejecutan en otras instancias de administración (ibíd.). Supone la optimización de recursos del Estado, evitando superposiciones programáticas, y contiene dimensiones inter e intrasectoriales; incluye además la orientación a instituciones autónomas y la dirección de organismos relacionados jerárquicamente. Este plano de la gestión también involucra promover en el seno de los organismos sectoriales la incorporación y discusión conjunta de la temática juvenil, para incluirla en programas y proyectos, lo que debe realizarse por medio de mecanismos multisectoriales y con un enfoque multidisciplinario.

La gestión democrática de políticas locales de juventud es un asunto pendiente, ya que implica desarrollar estrategias diferenciadas y complementarias que integren la participación activa de los jóvenes en todas las etapas, desde el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas.

C. LA OFERTA PROGRAMÁTICA EN MATERIA DE JUVENTUD

Existe una amplia gama de oferta programática para la juventud, se aprecian programas globales de difusión y promoción de derechos y sectoriales en materia de empleo, educación y salud. Sin embargo, salvo contadas excepciones, los países carecen de programas específicos para jóvenes rurales, con un enfoque de género o hacia grupos con discapacidad. Asimismo, los programas enfrentan problemas de focalización y cobertura y, en especial, se carece de una adecuada evaluación.

1. CARACTERÍSTICAS, FINANCIAMIENTO Y TIPOS DE PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Todos los países cuentan con programas de juventud, tanto globales como sectoriales, y algunos específicos de juventud, pero muchas veces subsumidos en programas para adolescentes y niños o con dificultades para responder a las necesidades heterogéneas de la población juvenil (véase el cuadro V.4 del anexo). Pocos países ofrecen atención exclusiva a jóvenes rurales (Bolivia, Colombia y México), jóvenes indígenas (México, Colombia), mujeres jóvenes o programas con un enfoque de género (Colombia, México) y hacia jóvenes discapacitados (Colombia). La mayoría de los programas incluyen estas categorías juveniles, pero no responden completamente a su especificidad. En Costa Rica, Colombia, México y Nicaragua es visible una oferta de programas y proyectos más variada y selectiva hacia los jóvenes.

Según la encuesta realizada, Colombia parece ser el país con una mayor oferta integrada para pobla-

ciones especiales y minorías, en la que se destacan varias líneas de trabajo:

- Asistencia integral a la población indígena, a través de programas y proyectos para el fortalecimiento, recuperación y conservación de la cultura, tradiciones, costumbres, lengua y planes de vida autóctonos de las minorías étnicas colombianas.
- Difusión, promoción, formación y divulgación en derechos humanos para la construcción de territorios de paz y la generación de alternativas productivas con poblaciones vulnerables en 36 municipios colombianos. En esta área las acciones se orientan a jóvenes en zonas de conflicto armado, incluidos también líderes sociales, políticos y ciudadanos objeto de amenazas.
- Asistencia técnica, asesoría y seguimiento para la aplicación y desarrollo de la política de equidad y participación de las mujeres.
- Implantación de un sistema de comunicación pública e inserción social para población con discapacidad.

- Programa para desplazados y de prevención de la violencia en el sector agropecuario nacional.
- Asistencia y apoyo a niños y jóvenes con talentos y capacidades excepcionales.

Cabe destacar también los esfuerzos por poner en marcha programas de difusión de derechos y deberes de la población juvenil, así como de la ley de juventud (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua). Con este tipo de iniciativas se contribuye al fortalecimiento de las organizaciones juveniles, la formación de los funcionarios públicos en materia de legislación vigente y el posicionamiento político del tema juvenil de manera sectorial. Otros temas de menor desarrollo son educación y conservación del medio ambiente (México, Cuba), paz social y proyectos contra la violencia juvenil (Colombia, El Salvador, Perú, Nicaragua), apoyo judicial a jóvenes (Guatemala, México) y prevención y control de la explotación sexual hacia niños, adolescentes y jóvenes.

Respecto de los programas sectoriales, todos los países encuestados están ejecutando programas de empleo, algunos particularmente centrados en la calificación e intermediación laboral (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay) como una manera de responder a los altos niveles de desempleo que se registran en América Latina.

Los programas educativos constituyen la segunda prioridad gubernamental, especialmente en lo que respecta a becas y financiamiento de estudios (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Perú), difusión de nuevas tecnologías (Chile, Cuba, Colombia) y educación sexual (México, Nicaragua, Panamá).

Los esfuerzos por diversificar la oferta especializada a los jóvenes en materia de salud se aprecian en las estrategias por ampliar el acceso a los servicios de salud en casi todos los países, a las que se añaden acciones orientadas a resolver problemas vinculados al embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual (ETS) (Panamá), el VIH

(República Dominicana, Panamá) y la prevención, apoyo y control de la drogadicción (Chile, Colombia, México, Nicaragua, República Dominicana). Programas integrales de salud adolescente y de infancia existen en Chile, Costa Rica, Cuba, Perú y República Dominicana; programas específicamente orientados a la salud mental de los jóvenes sólo se registran en Colombia.

En relación con el difícil acceso a la vivienda que afecta a los jóvenes en América Latina, hay que destacar que sólo en México y Cuba existen programas universales que contienen disposiciones especiales relativa a los jóvenes.

Los vacíos existentes en el plano legal en cuanto a las atribuciones de la institucionalidad pública oficial de juventud (falta de presupuesto propio, de personalidad jurídica y otras) pueden contribuir, tal como ocurre en otro tipo de intervenciones, al manejo voluntarista de los programas. En este sentido, son oportunos los esfuerzos por llevar a cabo sistemas de información y evaluación de los programas de juventud.

Al respecto, Costa Rica ha realizado un estudio para sistematizar el conocimiento sobre los servicios y oportunidades que el Estado costarricense ofrece a la población juvenil, como un medio para evaluar el avance de las políticas de juventud. Ello ha permitido sentar las bases para la construcción de una política pública de largo plazo, con el objeto de:

- Aportar indicadores socioeconómicos que permitan acercarse a los principales problemas de este sector de la población.
- Analizar el marco normativo vigente en materia de juventud y describir la oferta pública de juventud a partir de su clasificación.
- Categorizar las situaciones y necesidades que se pretenden resolver y los sujetos involucrados.

Finalmente, en el estudio se analizan la eficacia de la oferta pública y sus principales limitaciones y retos para la definición de la política de juventud.

En Colombia se realiza un esfuerzo similar con la documentación gubernamental existente sobre oferta pública de juventud. Uno de los propósitos del Programa Presidencial Colombia Joven es poner a disposición del público juvenil una oferta de información clasificada que integra una visión de conjunto de las políticas y programas nacionales. En el marco de la elaboración de herramientas o instrumentos de información que respondan a las necesidades de la población juvenil, se desarrolló el documento *Oferta pública de juventud* como un servicio de información al público que pretende optimizar la localización, análisis y difusión de oportunidades para los jóvenes. El documento comprende la sistematización de un conjunto amplio de proyectos, servicios y programas del gobierno nacional dirigidos a los jóvenes, actualizados anualmente gracias al apoyo de una red de órganos del Estado y de la sociedad civil, que operan como sistema de información coordinado.

Este tipo de herramientas contribuyen a superar los obstáculos que impone la alta rotación de los servicios orientados a la juventud y acumular información para realizar seguimientos a las experiencias desarrolladas. Por otra parte, como herramienta de consulta para los jóvenes, constituye un mecanismo eficaz de relación entre el Estado y las demandas ciudadanas más sentidas, aprovechando el uso de las tecnologías de información y comunicación.

En México este tipo de instrumentos se ha usado para el fortalecimiento institucional de diferentes órganos gubernamentales de juventud. Tanto la Comisión de Asuntos de la Juventud como el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) han realizado esfuerzos para sistematizar información en torno al marco jurídico de apoyo a los estratos jóvenes de población y dar forma a una visión global de la política de Estado destinada a atender los problemas y expectativas de este grupo. Entre sus actividades sobresalen las de estudio de la legislación mexicana, el análisis de experiencias internacionales y el acopio de puntos de vista de instituciones y expertos en los diversos problemas que afectan a los jóvenes.

Actualmente, el Instituto Mexicano de la Juventud desarrolla el Sistema Interno de Control de la Información (SICI), que permite —a partir de abril del 2002— un seguimiento mensual de las metas de cada una de las actividades operativas y administrativas del Instituto. Asimismo, se concluyó el diseño del Sistema de Información de Instancias Estatales de Juventud (SIIE), que integra a todos los programas federales operados por las instancias estatales de juventud (regionales). Por medio de este sistema se dará seguimiento al cumplimiento de metas y comprobación de los recursos del IMJ, según lo establecido en los convenios de colaboración que el IMJ celebra con cada entidad federativa. Otras iniciativas relevantes en México son el sistema de metas presidenciales e indicadores de gestión y el seguimiento de la situación general de jóvenes mediante la Encuesta Nacional de Juventud, que aporta un diagnóstico confiable sobre la realidad de los jóvenes en México y que se ha difundido ampliamente con el objeto de adecuar las acciones que se dirigen hacia este sector.

Los mayores problemas registrados en los programas analizados son la focalización y cobertura, además de otros aspectos más puntuales, como el hecho de que los programas:

- Son temporales y su repetición cíclica depende de recursos presupuestarios que no siempre se otorgan.
- Están a cargo de organismos que no tienen asegurados su funcionamiento y continuidad, salvo cuando se trata de ministerios o institutos nacionales de juventud.
- Tienen un marcado sesgo sectorial y les falta coordinación con otras instituciones encargadas de los mismos temas.
- Carecen de adecuada difusión y tienen problemas de cobertura.
- No siempre responden a las necesidades reales de los jóvenes, dada la ausencia de diagnósticos o falta de información actualizada acerca de su situación.
- Carecen de monitoreo y evaluación e incluso los organismos oficiales de juventud desconocen

información relevante y completa acerca del desarrollo y resultados de los programas.

Con respecto al financiamiento, cabe señalar la ausencia de información sistematizada en algunos países. Muchos de estos programas no han sido creados por ley y por lo tanto son temporales: requieren de la ayuda internacional y de aportes provenientes de la empresa privada, lo que tampoco contribuye a su continuidad.

En varios países se registra la ausencia de apoyo internacional para las acciones programáticas específicas de la juventud, dependiendo estas solo del aporte presupuestario nacional (Cuba, Ecuador, El Salvador y Panamá). Por otra parte, para cierto tipo de programas al interior de un país puede desconocerse esta información (Costa Rica) (véase el cuadro V.8).

Cuadro V.8

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (14 PAÍSES): ORIGEN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS ORIENTADOS HACIA LA JUVENTUD								
País	Presupuesto nacional	Bancos	Fondo internacional reembolsable	Fondo internacional no reembolsable	Organizaciones no gubernamentales	Fundaciones	Combinación	Empresa privada
Argentina	X		X				X	
Chile	X					X		
Colombia	X	X	X					
Costa Rica	X		X				X	
Cuba	X							
Ecuador	X							
El Salvador	X							
Guatemala	X							
México	X	X						
Nicaragua	X		X	X				X
Panamá	X							X
Perú	X	X		X			X	
República Dominicana	X		X					X
Uruguay	X	X	X				X	X

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las respuestas de la encuesta sobre programas nacionales de juventud.

D. AGENDA INTERNACIONAL

Durante el primer semestre del 2004 se llevó a cabo el trigésimo período de sesiones de la CEPAL —en cuyo marco sesionó el Comité Especial sobre Población y Desarrollo— y se realizó la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

El trigésimo período de sesiones de la CEPAL se realizó en San Juan, Puerto Rico, del 28 de junio al 2 de julio del 2004, con la participación de alrededor de 900 delegados de los 41 Estados miembros y 7 asociados de la Comisión, así como de representantes de organismos especializados de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales e invitados especiales. Formaron parte de las delegaciones oficiales ministros de educación, economía, trabajo, planificación y relaciones exteriores de los países, junto con otras autoridades. El encuentro, de máxima relevancia para la CEPAL, se celebra cada dos años, y en él los Estados miembros examinan la marcha de las actividades realizadas durante el bienio anterior y aprueban el plan de trabajo para el siguiente. Es, además, una instancia para analizar temas de importancia para el desarrollo de los países de la región. En esta ocasión, la CEPAL presentó a los gobiernos de la región el documento *Desarrollo productivo en economías abiertas*, en el que se analizan las estrategias adecuadas para lograr un crecimiento sostenible de la región. En la oportunidad se aprobaron 17 resoluciones sobre los temas tratados.

Durante la reunión, sesionó el Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período de sesiones de la CEPAL, en cuyo ámbito se conmemoró

el décimo aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y se realizaron dos mesas redondas sobre temas prioritarios de la Declaración del Milenio: “VIH/SIDA” y “Población y pobreza”. Asimismo, se desarrolló el seminario “Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe” (CEPAL-UNESCO) y se reunió la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

La novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, efectuada en México del 10 al 12 de junio del 2004, tuvo como objetivo examinar la aplicación de los compromisos internacionales acordados en el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001 adoptado en 1994 y en la Plataforma de Acción de Beijing. En la Conferencia participaron 35 delegaciones de Estados miembros y miembros asociados de la CEPAL, una amplia representación de los organismos del sistema de las Naciones Unidas y observadores de la sociedad civil.

La Conferencia Regional sobre la Mujer es un órgano subsidiario de la CEPAL, se reúne regularmente para identificar las necesidades regionales y

subregionales de las mujeres, presentar recomendaciones, realizar evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos y planes regionales e internacionales sobre el tema y proporcionar un foro para el debate sobre estas materias. En esta oportunidad, la CEPAL presentó un documento titulado *Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe*, que sirvió de base para los debates.

Las organizaciones de la sociedad civil, que participaron a título de observadoras en la Conferencia, declararon ante las delegaciones de los países miem-

bros de la Comisión su constante fe en la democracia y en sus instituciones, reafirmaron su apoyo a la Plataforma de Acción de Beijing y expresaron su deseo que las y los delegados en la Conferencia “respondan a las expectativas y las esperanzas de millones de mujeres y de pueblos de nuestra región, empecinados con la democracia, la justicia y los derechos humanos para todos y para todas”.

Entre los principales acuerdos gubernamentales se cuenta el Consenso de México que se sintetiza en el recuadro siguiente:

Recuadro V.3

NOVENA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Lugar y Fecha:	México, 10 al 12 de junio del 2004
Participantes:	34 representantes de gobiernos de los países miembros de la CEPAL, organismos especializados de las Naciones Unidas, organismos no gubernamentales, representantes del ámbito académico, político e institucional e invitados especiales
Organizadores:	CEPAL
Antecedentes:	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión preparatoria para Centroamérica y México de la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Tegucigalpa, 5 y 6 de febrero del 2004 • Reunión preparatoria subregional para el Caribe de la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, San Vicente y las Granadinas, 11 al 13 de febrero del 2004 • Reunión preparatoria subregional para Sudamérica de la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Brasilia, 23 y 24 de marzo del 2004 • XXXVI reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, México, D. F., 9 de junio del 2004
Objetivos:	Examinar la aplicación de los compromisos internacionales adquiridos en el Programa de Acción Regional adoptado en 1994 y en la Plataforma de Acción de Beijing
Acuerdos:	Síntesis del Consenso de México

Los gobiernos de los países reafirman su decisión de hacer lo siguiente:

Implementar políticas públicas que ayuden a superar las condiciones de pobreza que afectan a las mujeres de la región, adoptar políticas proactivas que promuevan la creación de empleos, y reconocer el valor económico del trabajo doméstico y productivo no remunerado.

Fortalecer los esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA, y garantizar el acceso sin discriminación a información, atención, educación y servicios de prevención.

Adoptar las medidas integrales necesarias para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas la violencia familiar, el abuso y acoso sexual, el incesto, la explotación sexual y el tráfico y trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, los asesinatos y las violaciones sistemáticas y la violencia en situaciones de conflicto armado, así como eliminar las medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

Promover la participación plena e igualitaria de hombres y mujeres en todos los niveles de toma de decisiones en el Estado, la sociedad y el mercado y fomentar la participación de la sociedad civil en los procesos de adopción de decisiones en los ámbitos local, nacional, regional y global. Invitar también a los parlamentos de la región a que revisen sus legislaciones para armonizarlas con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de no discriminación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

(continúa)

NOVENA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Impulsar políticas educativas que respondan a las necesidades del desarrollo de los países, favoreciendo la educación de todas las mujeres, y fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres, impulsando programas de concientización en todos los niveles de enseñanza. Examinar las políticas y la legislación, a fin de fortalecer la obligatoriedad del pago de la asistencia económica de niños, niñas, adolescentes y otros dependientes.

Revisar las leyes, para asegurar que se reconozca a las mujeres plenos e iguales derechos a poseer tierras y otras propiedades, y realizar reformas administrativas para otorgarles los mismos derechos que los hombres al crédito y al capital.

Garantizar a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer los recursos financieros y humanos, y reforzar su capacidad política y la consolidación de su rango institucional al más alto nivel.

Exhortar también a los gobiernos que aún no lo han hecho a considerar la ratificación y aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo facultativo.

Los gobiernos reiteran que la plena y eficaz implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe y el Plan de Acción de CARICOM es una contribución esencial para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en el 2000.

Finalmente, acogen con beneplácito la agenda de investigación y los contenidos del documento presentado por la CEPAL, “Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe”.



COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)

ENCUESTA SOBRE PROGRAMAS NACIONALES HACIA LA JUVENTUD

Identificación: Institución _____ País _____
 Persona que contesta cuestionario: _____ Cargo: _____

Responder brevemente

1. ¿Cuáles son los tres principales problemas que enfrenta la juventud en su país? ¿A qué causas obedecen?

Orden	Principales problemas de la juventud	Causas
1		
2		
3		

2. ¿Afectan de la misma forma estos problemas a los jóvenes de distintos sectores sociales?

	Jóvenes en situación de extrema pobreza	Jóvenes adictos / delincuentes	Jóvenes no pobres
Sí / No			
¿Por qué?			

3. ¿Cuáles han sido las principales medidas legislativas orientadas hacia los jóvenes en los últimos cinco años?

4. ¿Existen políticas y programas específicos para enfrentar esos problemas?

Sí _____ No _____

5. ¿Cuáles?

6. ¿Cuál es el tipo, la cobertura, el monto de recursos y el año de inicio de los programas?

Tipo de programa (ejemplo)	Cobertura (urbana, rural, regional)	Monto de recursos		Año de inicio
		Anual	Total	
Institucionales				
Culturales				
Educativos				
Empleo				
Reinserción social				
Otros				

7. ¿Cuál es la población objetivo de los programas hacia la juventud: hombres / mujeres, urbana / rural?

Nombre del programa	Población objetivo			
	Jóvenes hombres	Jóvenes mujeres	Jóvenes urbanos	Jóvenes rurales

8. ¿Qué instituciones coordinan los programas implementados?

--

9. ¿Cuál es el origen de los recursos destinados a los programas orientados hacia la juventud?

Nombre del programa	Origen de los recursos						
	Presupuesto nacional	Bancos	Fondo internacional reembolsable	Fondo internacional no reembolsable	Organizaciones no gubernamentales	Fundaciones	Combinación

10. ¿Cuáles son los mecanismos de diagnóstico, evaluación y monitoreo de estos programas?

Nombre del programa	Mecanismos de		
	Diagnóstico	Monitoreo	Evaluación

11. ¿Cuáles son los aspectos exitosos y los que requieren revisión del programa?

Nombre del programa	Aspectos exitosos	Aspectos que requieren revisión

12. ¿Cuál ha sido la magnitud de la población juvenil beneficiada?

Nombre del programa	Total de población beneficiada			
	Jóvenes hombres	Jóvenes mujeres	Jóvenes urbanos	Jóvenes rurales

Respuestas a: Irma Arriagada, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, CHILE
FAX: (56) 2-2102523, (56) 2-2081946.
De preferencia mediante correo electrónico: iarriagada@cepal.cl

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (15 PAÍSES): PERSONAS E INSTITUCIONES QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO SOBRE PROGRAMAS NACIONALES HACIA LA JUVENTUD

País	Institución	Cargo	Nombre
Argentina	Secretaría de Políticas Sociales, Dirección Nacional de Juventud	Coordinadora General de la Secretaría de Políticas Sociales	Vanesa L. Wainstein
Bolivia	Dirección General de la Juventud	Director General de la Juventud	Álvaro Argandaña
Colombia	Programa Presidencial Colombia Joven	Director	Nicolás Uribe Cristián Urrego
Costa Rica	Consejo de la Persona Joven	-	Gabriela Valverde Murillo
Cuba	Ministerio para la Inversión Extranjera y la Cooperación Buró Nacional de la UJC	Viceministro Miembro	Raúl Taladrid Suárez Kenia Serrano Puig
Chile	Instituto Nacional de la Juventud	Unidad de Relaciones Internacionales	Gerardo Canales
Ecuador	Dirección Nacional de la Juventud	Director Nacional de la Juventud Jefe del Departamento de Investigación y Programación	Darwin Seraquive Abad Gabriel Valencia Chamorro
El Salvador	Ministerio de Educación	Directora de Juventud	Marta Alicia Arias de Canales
Guatemala	Consejo Nacional de la Juventud	Sub Director de Relaciones Internacionales	Bequer Neftalí Chocooj de la Cruz
México	Instituto Mexicano de la Juventud	Director de Investigación y Estudios sobre Juventud	José Antonio Pérez Islas
Nicaragua	Secretaría de la Juventud, Presidencia de la República	Secretario de la Juventud	Lindolfo Monjarretz Martínez
Panamá	Ministerio de la Juventud, la Niñez y la Familia	Jefe del Departamento de Investigación y Formulación de proyectos	Víctor Isamel Rodríguez Ríos
Perú	Comisión Nacional de la Juventud	Gerente de Investigación y Desarrollo	Ruth Jerónimo Zacarías
República Dominicana	Secretaría de Estado de la Juventud	-	Ana Zunilda Millord
Uruguay	Instituto Nacional de la Juventud	Asesores Unidad de Proyectos y Estudios de Juventud	Daniel Picart Javier Díaz

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (16 PAÍSES): CAMBIOS LEGISLATIVOS 1998-2003

País	Ley N°	Fecha	Cambios legislativos 1998-2003
Argentina	-		No se tiene conocimiento sobre medidas legislativas orientadas específicamente a los jóvenes en los últimos años. Existen algunos proyectos de ley aún no sancionados por las Cámaras
Bolivia	Decreto supremo N° 25.290	30 de enero de 1999	Sobre derechos y deberes de la juventud
Chile	Ley N° 19.221	Publicada en el Diario Oficial el 1° de junio de 1993	Fija la mayoría de edad a los 18 años
	Ley N° 19.532	Publicada en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 1997	Crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta normas para su aplicación, a contar desde el inicio del año escolar correspondiente al 2002
	Ley N° 19.688	Publicada en el Diario Oficial el 05 agosto del 2000	Modifica la Ley N° 18.962, orgánica constitucional de enseñanza —en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas o que sean madres de lactantes— de acceder a los establecimientos educacionales
	Decreto supremo N° 833 del Ministerio de Justicia	Publicado en el Diario Oficial el 30 de octubre del 2002.	Estatuto tipo de corporaciones juveniles
	Ley N° 19.876	Publicada en el Diario Oficial el 22 de mayo del 2003	Reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media
Costa Rica	Decreto N° 247 del Ministerio de Relaciones Exteriores	Publicado en el Diario Oficial el 25 de octubre del 2003	Aprobación del Acta de fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), adoptada en la VII Conferencia iberoamericana de ministros de juventud y suscrita en Buenos Aires el 1o de agosto de 1996
		1990	Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño
		30 de abril de 1996	Ley de justicia penal juvenil
		1996	Nueva Ley orgánica del patronato nacional de la infancia
		6 de febrero de 1998	Promulgación del código de la niñez y adolescencia
		1999	Decreto ejecutivo de salud sexual y reproductiva
		2000	Ley de paternidad responsable
	2002	Ley general de la persona joven	
Colombia	Decreto N° 24.667-C		Reglamento general de casas de la juventud
	Decreto N° 256		Estipula que la cuarta semana de abril de cada año será la semana nacional de la juventud
	Decreto N° 25.890-MTSS		Erradicación del trabajo infantil
	Decreto N° 26.084-MP		Reglamento de cooperativas escolares y juveniles de capacitación y producción
Colombia			Reglamento sobre el horario y permanencia de menores en expendios de licores
Cuba	Ley N° 87	16 de febrero de 1999	Introduce nuevas figuras delictivas contrarias al normal desarrollo del menor, como la venta y tráfico de menores
Costa Rica	Ley N° 7.735		Ley general de la protección a la madre adolescente
	Ley N° 7.688		Tarjeta de identidad para los costarricenses mayores de 12 años y menores de 18
	Ley N° 7.586		Ley contra la violencia doméstica
Ecuador			Creación e implementación de la Ley de la juventud
			Diseño del Plan nacional de la juventud
			Creación del Código de la niñez y la adolescencia
			Carta iberoamericana de derechos de la juventud
			Promoción, legalización y fortalecimiento de organizaciones juveniles a nivel nacional
El Salvador			Modificación del Código de familia
			Iniciativa de política de juventud
			Políticas de niñez y adolescencia
Guatemala			Ley de servicio cívico
México			Ley de protección integral de la niñez y adolescencia
		1999	Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
			Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
			Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
			Proyecto de decreto que expide la Ley general de juventud, en virtud de la cual se pretende crear un Consejo Nacional de Juventud
			Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación
	12 de febrero del 2002	Proyecto de decreto que expide la Ley del parlamento nacional de la juventud	
		Proyecto de ley para regular la elaboración de tatuajes permanentes y perforaciones	
	2002	Creación de instancias estatales de juventud	

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (16 PAÍSES): CAMBIOS LEGISLATIVOS 1998-2003			
País	Ley N°	Fecha	Cambios legislativos 1998-2003
Nicaragua	Ley N° 392	julio del 2001 diciembre del 2001 enero del 2002 marzo del 2002 septiembre del 2003	Ley de promoción de desarrollo integral de la juventud nicaragüense Diseño y aprobación de la Política nacional para el desarrollo integral de la juventud nicaragüense Secretaría de la juventud Reglamentación de la Ley para el desarrollo integral de la juventud nicaragüense Comisión Nacional de Juventud
Panamá	Decreto ejecutivo N° 140 Ley N° 39 Ley N° 46 Ley N° 29 Ley N° 18 Ley N° 3 Ley N° 40 Ley N° 17 Decreto ejecutivo N° 18 Ley N° 3	11 de noviembre del 2003 30 de abril del 2003 6 de junio del 2003 13 de junio del 2002 15 de junio del 2000 5 de enero del 2000 1999 15 de junio del 2000 19 de julio de 1999 17 de mayo de 1994	Se crea el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia Modifica y adiciona artículos al Código de la familia, sobre el reconocimiento de la paternidad, y dicta otras disposiciones Modifica artículos de la Ley N° 40 de 1999, sobre el régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia, y dicta otra disposición Garantiza la salud y educación de la adolescente embarazada Aprueba el Convenio 182 de la OIT Sobre las infecciones de transmisión sexual, el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA Régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia Aprueba el Convenio 138 de la OIT Modifica el Decreto ejecutivo N° 25 de 15 de abril de 1997, mediante el cual se crea el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Menor Trabajador Código de la familia
Perú	Ley N° 27.802 Ley N° 27.972 Ley N° 27.802	28 de julio del 2002 22 de julio del 2002 22 de julio del 2002 26 de mayo del 2003	Ley del Consejo Nacional de la Juventud Acuerdo nacional de gobernabilidad Se aprobó la decimosexta política de Estado Ley orgánica de municipalidades Creación del Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU)
República Dominicana		abril del año 1994 julio del año 2000 1998	Código para la protección del niño, niña y adolescente Ley general de juventud Política nacional de juventud
Uruguay		1990 1997	Ratificación de Convención sobre los Derechos del Niño Ley de presupuesto del fondo de iniciativas juveniles Ley de empleo juvenil Proyecto de código de la niñez y la adolescencia (en discusión desde 1995) que reemplaza el Código del niño vigente (1934) Ley de seguridad ciudadana, artículo 37, por la que se crea una Comisión honoraria de promoción a la infancia en situación de riesgo Ley de presupuesto, capítulo relativo a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y ampliación de la cobertura del sistema educativo

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las respuestas de los países a la encuesta sobre programas nacionales para la juventud, 2004.

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES) : TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS HACIA LA JUVENTUD

Tipo	Oferta programática	Objetivos	Población objetivo a/	Institución coordinadora	Logros	Dificultades	Financiamiento	Países
Programas institucionales y de promoción juvenil	Institucionales	Fortalecimiento institucional en políticas de juventud Sistemas de información y evaluación de programas de juventud	Áreas gubernamentales de infancia adolescencia y juventud Instituciones públicas de educación	DINAJU Instancia nacional de coordinación de políticas sociales Instituto Nacional de Juventud Gobiernos municipales Organismos intergubernamentales Embajadas	Aplicación de planes y programas nacionales de juventud Establecimiento de consejos nacionales o locales de juventud Apoyo a gobiernos locales en materias de juventud Diseño del Plan de acción para las políticas de juventud Ampliación del acceso a información sobre y para los jóvenes Alianzas con empresas y redes de jóvenes	Es necesario incorporar procesos de control y evaluación de las políticas y programas Falta integrar enfoque de género Es preciso realizar reformas a la ley de juventud Falta mejorar la calidad de los servicios y la atención que brindan	Presupuesto nacional Fondo internacional reembolsable Fondo internacional no reembolsable Fundaciones	Argentina Bolivia Chile Ecuador Guatemala México Nicaragua Uruguay
	Participación y asociatividad	Fortalecimiento asociativo y organizacional Capacitación y asistencia técnica a organizaciones juveniles Promoción del voluntariado juvenil	Organizaciones juveniles locales Organizaciones de la sociedad civil Población joven	Ministerios Secretaría General de Gobierno Órgano oficial de juventud Instancia descentralizada de juventud Organismos intergubernamentales Organizaciones de voluntarios	Fortalecimiento de organizaciones juveniles y ampliación de vínculos con gobiernos locales Establecimiento de espacios de participación con los jóvenes Promoción de alianzas estratégicas Desarrollo de liderazgos juveniles Legalización de organizaciones Intercambio de experiencias entre organismos gubernamentales y no gubernamentales Promoción del trabajo social de la juventud Movilización de la población juvenil en torno a valores sociales, la solidaridad, y la cooperación	Se requiere ampliar el fomento y la asistencia técnica a las organizaciones Es necesario ampliar la cobertura Se requiere incorporar procesos de monitoreo y evaluación	Presupuesto nacional Fondo Internacional no reembolsable Combinación Fondo internacional reembolsable	Argentina Bolivia Chile Costa Rica Colombia Ecuador El Salvador México Nicaragua Perú Uruguay
	Culturales	Iniciativas juveniles comunitarias Centros de formación juvenil Recreación deportiva Casa culturales Consumo (Tarjeta Joven)	Organizaciones juveniles Población joven	Ministerio de Educación y Cultura Unidades nacionales o descentralizadas de deporte (institutos municipales de juventud, secretarías del deporte, entre otros) Órgano oficial de juventud descentralizado ONG	Aumento de la participación juvenil Integración y creación de estrategias comunitarias Apoyo gubernamental Incorporación empresa privada Espacios propios de la juventud	Es necesario ampliar el apoyo al talento joven, para evitar comportamientos riesgosos Falta seguimiento de las acciones Es necesario ampliar los beneficios y descuentos en relación con el consumo de los jóvenes	Presupuesto nacional Fondo internacional no reembolsable Empresa privada Combinación	Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala México Nicaragua Perú Uruguay
Sectoriales	Educativos	Becas y créditos de estudio Difusión de la Ley de juventud, derechos y obligaciones de la juventud Prevención integral en temáticas de sexualidad, salud reproductiva, drogadicción, alcoholismo, entre otras	Organizaciones juveniles Sociedad civil Población joven	Ministerios (de Educación y Cultura, Desarrollo Social, Justicia, Interior, entre otros) Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Consejo Nacional de Juventud Órgano oficial de juventud ONG Organismo especializado en temáticas de droga Instituciones especializadas en temas de familia Instituciones gubernamentales de ciencia y tecnología OJ	Contribución al posicionamiento político del tema juvenil Promoción del sector y los contenidos científicos Establecimiento de relaciones entre los padres y otros sectores de la comunidad Apoyo a iniciativas culturales y recreativas Cofinanciamiento de iniciativas con el sector privado	Falta mejorar la descentralización del programa Se requiere incorporar procesos de control y evaluación de los programas	Presupuesto nacional Fondo de cooperación reembolsable Bancos estatales y privados Combinación	Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala México Nicaragua Panamá Perú República Dominicana Uruguay

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES) : TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS HACIA LA JUVENTUD

Tipo	Oferta programática	Objetivos	Población objetivo a/	Institución coordinadora	Logros	Dificultades	Financiamiento	Países
Sectoriales	Empleo	Generación de unidades de producción y fomento del empleo juvenil	Juventud desempleada	Ministerios (Trabajo y Empleo, Desarrollo Social, Planificación y Cooperación, Agricultura, entre otros) ONG Instituciones nacionales de promoción del comercio Consejo Nacional de Producción	Generación de empleo	Se requiere elaborar una estrategia preventiva a largo plazo Falta ampliar la cobertura Es necesario incorporar procesos de control y evaluación Falta desarrollo en materia de microemprendimientos y empleo por cuenta propia	Presupuesto nacional Bancos estatales y privados Fondo internacional reembolsable Fondo internacional no reembolsable Sector privado	Argentina Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador México Nicaragua Perú Uruguay
		Reconversión productiva	Organizaciones productivas		Ampliación de negocios			
	Capacitación laboral	Infancia, familia	Ministerio de Salud ONG Órgano oficial de juventud descentralizado	Ampliación del acceso a créditos	Se requiere incorporar procesos de control y evaluación	Presupuesto nacional Combinación Sector privado		
	Apoyo a pyme			Prestación de asistencia de salud especializada a los adolescentes de todo el país				
	Salud	Ampliación del acceso a la atención básica de salud Prevención integral y atención en sexualidad y adicciones Asistencia alimentaria						Chile Colombia Costa Rica Cuba México Perú República Dominicana
	Vivienda	Acceso a crédito hipotecario Subsidio	Sociedad civil	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Social			Presupuesto nacional	México
Otros	Minorías, población excluida o ambos	Estrategias de reinserción social para jóvenes, adolescentes y niños en riesgo social Hogares y albergues	Jóvenes, niños y adolescentes en extrema pobreza, adictos, delincuentes	Ministerios de Educación y Cultura Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Consejo Nacional de Juventud Órgano oficial de juventud	Atención a la juventud con menor acceso a programas gubernamentales Promoción de proyectos de vida personal Desarrollo humano, individual y social Garantía de reinserción laboral y social de los jóvenes ex reclusos y drogadictos, entre otros	Faltan convenios interinstitucionales para otorgar atención permanente Es necesario mejorar la sostenibilidad de las acciones que se han puesto en práctica	Presupuesto nacional Combinación Fondo internacional reembolsable Fondo internacional no reembolsable	Argentina Bolivia Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Perú
		Atención e inclusión de grupos minoritarios de discapacitados Sector juvenil indígena	Población discapacitada	Instituciones nacionales especializadas en discapacidad Ministerio de Educación Ministerio de Educación	Difusión del marco de los derechos humanos Programas de apoyo social			
	Medio ambiente		Organizaciones indígenas Organizaciones juveniles Población joven	Ministerios de medio ambiente y desarrollo territorial, ONG	Permite la formación de las nuevas generaciones en el cuidado, conservación y desarrollo del medio ambiente		Presupuesto nacional	Colombia México Cuba
	Justicia		Sociedad civil	Ministerio de Justicia			Presupuesto nacional Combinación	Chile Guatemala

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las respuestas de los países a la encuesta sobre programas nacionales para la juventud, 2004.

a/ En su mayoría se trata de oferta programática focalizada o universal.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre, Rosario (2004), “Trabajo no remunerado y uso del tiempo. Fundamentos conceptuales y avances empíricos. La encuesta Montevideo 2003”, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), inédito.
- _____ (2003), *Género, ciudadanía social y trabajo*, Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
- Araya, María José (2003), “Un acercamiento a las encuestas sobre el uso del tiempo con orientación de género”, *serie Mujer y desarrollo*, N° 50 (LC/L.2022-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.184.
- Ariza, Marina y Orlandina de Oliveira (2004), *Imágenes de la familia en el cambio de siglo. Universos familiar y procesos demográficos contemporáneos*, México, D.F., Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de México (UNAM), en prensa.
- Aroca, Patricio, Geoffrey Hewings y Jimmy Paredes (2001), “Migración interregional y el mercado laboral en Chile”, *Cuadernos de economía*, vol. 38, N° 115.
- Atkinson, A.B. (1970), “On the measurement of income inequality”, *Journal of Economic Theory*, vol. 2.
- Balardini, Sergio (2003), “Políticas de juventud: conceptos y la experiencia argentina”, *Políticas públicas de juventud en América Latina: políticas nacionales*, O. Dávila (ed.), Viña del Mar, Chile, CIDPA Ediciones.
- Banco Mundial (2003), *Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?*, Washington, D.C.
- _____ (1984), *Informe sobre el desarrollo mundial*, Washington, D.C.
- Barker, Gary (2003), “Men’s participation as fathers in the Latin American and the Caribbean region. A critical literature review with policy considerations”, Washington, D.C., Banco Mundial, inédito.
- Bay, Guiomar, Fabiana del Popolo y D. Ferrando (2003), “Determinantes próximos de la fecundidad. Una aplicación a países latinoamericanos”, *serie Población y desarrollo*, N° 43 (LC/L.1953-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.121.
- Bernales, Enrique (2001), *Situación actual de la legislación iberoamericana en materia de juventud y adolescencia*, Madrid, Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ).
- BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (2004), *Sending Money Home: Remittance to Latin America and the Caribbean*, Washington, D.C.
- _____ (2000), *Desarrollo más allá de la economía. Informe de progreso económico y social en América Latina, 2000*, Washington, D.C.
- _____ (1998), *América Latina frente a la desigualdad. Informe de progreso económico y social en América Latina, 1998-1999*, Washington, D.C.
- Bourdieu, Pierre (1990), “La ‘juventud’ no es más que una palabra”, *Sociología y cultura*, México, D.F., Editorial Grijalbo.
- Brito, Roberto (1997), “Hacia una sociología de la juventud”, *Jóvenes, causa joven*, vol. 1, N° 1, México, D.F.
- Bulatao, R. y J. Casterline (eds.) (2001), “Global fertility transition”, *Population and Development Review*, vol. 27.
- Cachón, Lorenzo (coord.) (2000), *Juventudes y empleos: perspectivas comparadas*, Madrid, Instituto de la Juventud de España (INJUVE).
- Canales, A. (2000), “Migración laboral y flexibilidad laboral en el contexto del TLCAN”, *Revista mexicana de sociología*.

- Carrasco, Cristina (2003), “Los tiempos de trabajo: entre la casa y el mercado. Nuevas aproximaciones de análisis de resultados”, documento presentado a la Reunión de expertos: encuestas sobre uso del tiempo, Santiago de Chile, 11 y 12 de diciembre.
- CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) (1984), “Políticas de redistribución de la población en América Latina”, *Notas de población*, año 12, N° 34.
- Cevallos Chávez, Chrystiam y otros (2000), “Propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos del Ecuador” [en línea], Asociación Americana de Juristas (AAJ)/Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS)/Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) <http://www.ildis.org.ec/planddh/plan08te.htm>.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2004a), *Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2003-2004* (LC/G.2255-P/E), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.2.
- _____ (2004b), “América Latina: tablas de mortalidad, 1950-2025”, *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, julio.
- _____ (2004c), *Desarrollo productivo en economías abiertas* (LC/G.2234(SES.30/3)), Santiago de Chile, junio.
- _____ (2004d), “América Latina y el Caribe: estimaciones y proyecciones de población 1950-2050”, *Boletín demográfico*, N° 73 (LC/G.2225-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/S.03.II.G.209.
- _____ (2004e), *Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe* (LC/L.2114(CRM.9/3)), Santiago de Chile, mayo.
- _____ (2003a), *Panorama social de América Latina, edición 2002-2003* (LC/G.2209-P/E), Santiago de Chile, marzo. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.185.
- _____ (2003b), *Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza en América Latina y el Caribe* (LC/G.2188-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.02.II.G.125.
- _____ (2002a), *Panorama social de América Latina, 2001-2002* (LC/G.2183-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.02.II.G.65.
- _____ (2002b), *Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas* (LC/R.2086/E), Santiago de Chile, abril.
- _____ (2002c), *Globalización y desarrollo* (LC/G.2157(SES.29/3)), Santiago de Chile, abril.
- _____ (2001), *Panorama social de América Latina, Edición 2000-2001* (LC/G.2138-P), Santiago de Chile, octubre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.01.II.G.141.
- _____ (2000a), *Panorama social de América Latina, 1999-2000* (LC/G.2068-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.00.II.G.18.
- _____ (2000b), *La brecha de la equidad. Una segunda evaluación* (LC/G.2096), Santiago de Chile, mayo.
- _____ (2000c), “Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe”, *serie Libros de la CEPAL*, N° 59 (LC/G.2113-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.00.II.G.131.
- _____ (1999), *Panorama social de América Latina, 1998* (LC/G.2050-P), Santiago de Chile, abril. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.99.II.G.4.
- _____ (1998a), *Población, salud reproductiva y pobreza* (LC/G.2015(SES.27/20)), Santiago de Chile, abril.
- _____ (1998b), *Panorama social de América Latina, 1997* (LC/G.1982-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S/E.98.II.G.3.
- _____ (1995), *Panorama social de América Latina, 1995* (LC/G.1886-P), Santiago de Chile, diciembre.

- _____ (1994), *Panorama social de América Latina, 1994* (LC/G.1844-P), Santiago de Chile.
- _____ (1972), *Fertility and family planning in Metropolitan Latin America*, Chicago, Illinois, Universidad de Chicago.
- CEPAL/CELADE (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL (2004), “La fecundidad en América Latina: ¿transición o revolución?”, *serie Seminarios y conferencias*, N° 36 (LC/L.2097-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.34.
- CEPAL/OIJ (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización Iberoamericana de Juventud) (2004), *La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias* (LC/L.2180), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), octubre.
- _____ (2003), *Juventud e inclusión social en Iberoamérica* (LC/R.2108), Santiago de Chile, noviembre.
- CEPAL/UNICEF/SECIB (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia/Secretaría de Cooperación Iberoamericana) (2001), *Construir equidad desde la infancia y la adolescencia en Iberoamérica* (LC/G.2144), Santiago de Chile.
- Chackiel, Juan (2004), “La dinámica demográfica en América Latina”, *serie Población y desarrollo*, N° 52 (LC/L.2127-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mayo. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.55.
- Chackiel, Juan y Susana Schkolnik (2003), “América Latina: los sectores rezagados en la transición de la fecundidad”, *serie Población y desarrollo*, N° 42 (LC/L.1952-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.120.
- Costa Rica, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD) (2002), “Política pública de la persona joven. Documento preliminar”, San José, Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven.
- Cuervo, Luis (2003), “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”, *serie Gestión pública*, N° 40 (LC/L.2008-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.169.
- Cuervo, Luis y Josefina González (1997), *Industria y ciudades en la era de la mundialización. Un enfoque socioespacial*, Bogotá, D.C., Tercer Mundo Editores.
- Daher, Antonio (1994), “Competencia: regiones ganadoras y perdedoras en Chile”, *EURE*, vol. 20, N° 60, agosto.
- Dávila, Oscar (ed.) (2003), *Políticas públicas de juventud en América Latina: políticas nacionales*, Viña del Mar, CIDPA ediciones.
- Domingo, A. (2004), “Tras la retórica de la hispanidad: la migración latinoamericana en España entre la complementariedad y la exclusión”, documento presentado al primer Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, Caxambú, 18 al 20 de septiembre, inédito.
- Esping-Andersen, Gösta (2003), “Against social inheritance”, *Policy Network, Progressive Futures. New Ideas for the Center Left*, Londres.
- _____ (2000), “Social indicators and welfare monitoring”, *Paper on Social Policy and Development*, N° 2, Ginebra, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD).
- Filgueira, Carlos y Andrés Peri (2004), “América Latina: los rostros de la pobreza y sus causas determinantes”, *serie Población y desarrollo*, N° 54 (LC/L.2149-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.77.
- Flórez, C. y J. Núñez (2003), “Teenage childbearing in Latin American countries”, *Critical Decision at a Critical Age, Adolescents and Young Adults in Latin America*, S. Duryea, A. Cox y M. Ureta, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Foster, James, Joel Greer y Erik Thorbecke (1984), “A class of decomposable poverty measures”, *Econometrica*, vol. 52.

- Frone, M.R., M. Russell y M.L. Cooper (1997), "Relation of work-family conflict to health outcomes: a four-year longitudinal study of employed parents", *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, N° 70.
- García, Cristina (2003), "Encuesta de uso de tiempo en España. Aspectos conceptuales y metodológicos", documento presentado en la Reunión de expertos: encuestas sobre uso del tiempo, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 y 12 de diciembre.
- Greenhaus, J.H. y N.J. Beutell (1985), "Sources of conflict between work and family roles", *Academy of Management Review*, N° 10.
- Greenwood, Michael (1997), "Internal migration in developed countries", *Handbook of Families and Population Economics*, M. Rosenzweig y O. Stark (eds.), Amsterdam, Elsevier.
- Guzmán, José (2004), "Proyecciones y desafíos del envejecimiento en Chile", documento presentado al primer seminario Adulto mayor, pobreza y salud, Santiago de Chile, 26 de julio, Universidad del Desarrollo/Hogar de Cristo/Clínica Alemana.
- Guzmán, José y otros (2001), *Diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes en América Latina y el Caribe*, México, D.F., Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
- Guzmán, J.M. y otros (eds.) (1996), *The Fertility Transition in Latin America*, Oxford, Oxford University Press.
- Hilbert, Martin (2003), "Infrastructure", *Building an Information Society: A Latin American and Caribbean Perspective* (LC/L.1845/I), Martin Hilbert y Jorge Katz, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- _____ (2001), "América Latina hacia la era digital", documento presentado al seminario "América Latina hacia la era digital", Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre, inédito.
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2004), *Encuesta nacional sobre el uso del tiempo 2002. Tabulados básicos preliminares*, México, D.F., Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
- Ingram, G. (1997), "Patterns of metropolitan development: what have we learned?", *Policy Research Working Paper*, N° 1841, Washington, D.C., Banco Mundial.
- Jelin, Elizabeth (2004), "The family in Argentina: Modernity, economic crisis, and politics", *Handbook of World Families*, Bert Adams y Jan Trost (eds.), Londres, Sage, en prensa.
- Jusidman, Clara (2003), "Presentación", *Valores y familias. Mitos y realidades*, México, D.F., Causa Ciudadana.
- Krauskopf, Dina (2004), "La construcción de políticas de juventud en América Latina" [en línea], Comunidad Virtual de Gobernabilidad y Desarrollo Humano e Institucional (CVG) <http://www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=494> [fecha de consulta: febrero, 2004].
- _____ (2003), "La construcción de políticas de juventud en Centroamérica", *Políticas públicas de juventud en América Latina: políticas nacionales*, O. Dávila (ed.), Viña del Mar, Chile, CIDPA Ediciones.
- _____ (2000), *Participación social y desarrollo en la adolescencia*, San José, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
- Krauskopf, Dina y M. Mora (2000), "Condiciones de vida de la juventud Centroamericana y el desarrollo de políticas sociales: el reto del 2000", San José, Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), versión preliminar.
- Levi, Giovanni y Jean-Claude Schmitt (1996), *Historia de los jóvenes. La edad contemporánea*, vol. 2, Madrid, Taurus.
- Li, Nan y Zheng Wu (2003), "Forecasting cohort incomplete fertility: a method and an application", *Population Studies*, vol. 57, N° 3.
- Lindstrom, D. y C. Brambila (2002), "Alternative theories of the relationship of schooling and work to family formation: evidence from Mexico", *Social Biology*, vol. 48, N°s 3-4.

- Martínez, Jorge (2003), “El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el género”, *serie Población y desarrollo*, N° 44 (LC/L.1974-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.133.
- Martínez, Jorge y Miguel Villa (2004), “Panorama sobre la migración internacional en América Latina y el Caribe”, documento presentado al simposio Migrações internacionais e a previdência social, Brasília, mayo, inédito.
- Mires, Lylian (2004), “Las políticas de empleo en la Unión Europea”, Organización Internacional del Trabajo (OIT), en prensa.
- Montgomery, M. y otros (2004), *Cities Transformed: Demographic Change and its Implications in the Developing World*, Londres, Earthscan.
- Naciones Unidas (2003a), *World Population Prospects. The 2002 Revision*, vol. 1 (ST/ESA/SER.A/222), Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
- _____ (2003b), *World Population Monitoring. Reproductive Rights and Reproductive Health* (ST/ESA/SER.A/215), Nueva York.
- _____ (2002a), *World Urbanization Prospects: The 2001 Revision; Data, Tables and Highlights* (ESA/P/WP.173), Nueva York, División de Población.
- _____ (2002b), “Completing the fertility transition” [en línea] <http://www.un.org/esa/population/publications/completingfertility/completingfertility.htm>.
- _____ (1987), “Fertility behaviour in the context of development: evidence from the World Fertility Survey”, *Population Studies*, N° 100 (ST/ESA/SER.A/100), Nueva York.
- OIJ (Organización Iberoamericana de Juventud) (2004a), *Las encuestas de jóvenes en Iberoamérica. Un recuento de experiencias recientes. Análisis de las encuestas nacionales de jóvenes de Guatemala, Colombia, Chile, España, México y Portugal (1997-2000)*, Madrid.
- _____ (2004b), *El estado de la juventud en Iberoamérica* [en línea] <http://www.oij.org/pdf/JuventudIberoamericana.pdf> [fecha de consulta: marzo, 2004].
- _____ (2004c), *Convención Internacional de la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud* [en línea] <http://www.oij.org/carta.htm> [fecha de consulta: marzo, 2004].
- _____ (2004d), “Los organismos gubernamentales de juventud: políticas y programas” [en línea] http://www.oij.org/notas/notas_1.htm [fecha de consulta: febrero, 2004].
- _____ (2004e), “Programa DINO Fase I” [en línea] <http://www.oij.org/dino.htm> [fecha de consulta: marzo, 2004].
- _____ (2002), “Texto de la Declaración Final de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud” [en línea] <http://www.oij.org/pdf/XICONFERENCIA.pdf> [fecha de consulta: marzo, 2004].
- _____ (2001), *Informe final del Plan Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina (PRADJAL), 1995-2000*, Madrid, Secretaría General de la OIJ.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2003), *Panorama laboral 2003: América Latina y el Caribe*, Lima, Oficina Internacional del Trabajo.
- ONUSIDA/OMS (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA/Organización Mundial de la Salud) (2002), *Resumen mundial de la epidemia de VIH/SIDA*, Ginebra.
- OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud) (2003), “Monitoreo de la reducción de la morbilidad y mortalidad maternas” (CE132/19), 132ª sesión del Comité Ejecutivo, Washington, D.C., junio.
- OPS/OMS/ONUSIDA (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud/Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA) (2001), *VIH y SIDA en las Américas. Una epidemia multifacética*, Washington, D.C.

- Paz, Jorge y otros (2004), “América Latina y el Caribe: dinámica demográfica y políticas para aliviar la pobreza”, *serie Población y desarrollo*, N° 53 (LC/L.2148-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junio.
- Pellegrino, A. (2004), “Migration from Latin America to Europe: trends and policy challenges”, *Migration Research series*, N° 16, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
- Pinto da Cunha, Marco (2002), “Urbanización, territorio y cambios socioeconómicos estructurales en América Latina y el Caribe”, *serie Población y desarrollo*, N° 30 (LC/L.1782-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.02.II.G 97.
- Rodríguez, Jorge (2004), “Migración interna en América Latina y el Caribe: estudio regional del período 1980-2000”, *serie Población y desarrollo*, N° 50 (LC/L.2059-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), enero. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.3.
- _____ (2003), “La fecundidad alta en América Latina y el Caribe: un riesgo en transición”, documento presentado al seminario “La fecundidad en América Latina: ¿transición o revolución?”, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junio, inédito.
- _____ (2002), “Distribución territorial de la población de América Latina y el Caribe: tendencias, interpretaciones y desafíos para las políticas públicas”, *serie Población y desarrollo*, N° 32 (LC/L.1831-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.02.II.G.137.
- _____ (2001), “Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia conceptual mirando a los jóvenes”, *serie Población y desarrollo*, N° 17 (LC/G.1588-P/E), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.01.II.G.131.
- Rodríguez, Jorge y Miguel Villa (1996), “Demographic trends in Latin America’s metropolises, 1950-1990”, *The Mega-City in Latin America*, Gilbert Alan (ed.), Tokio, Dependencia de Publicaciones de la Universidad de las Naciones Unidas.
- Rodríguez, Ernesto (2002), *Actores estratégicos para el desarrollo: políticas de juventud para el siglo XXI*, México, D.F., Instituto Mexicano de la Juventud, Secretaría de Educación Pública.
- Rodríguez, Ernesto y Bernardo Dabezies (comps.) (1991), *Primer informe sobre la juventud de América Latina, 1990*, Conferencia Iberoamericana de Juventud, Madrid, Instituto de la Juventud de España (INJUVE).
- Rodríguez, Mauricio (2001), “Material de apoyo para la caracterización y análisis de la oferta pública de programas sociales dirigidos a grupos prioritarios”, documento preparado para el Proyecto de fortalecimiento institucional de los organismos oficiales de juventud en Centroamérica, Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ)/Fundación Ford.
- Silié, R., C. Segura y C. Dore (2002), *La nueva inmigración haitiana*, Santo Domingo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
- Silva, Iván (2003), “Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local y regional en América Latina”, *serie Gestión pública*, N° 33 (LC/L.1882-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), abril. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.47.
- Torrado, Susana (1981), “Estrategias familiares de vida en América Latina. La familia como unidad de investigación censal”, *serie Notas de población*, N° 26 y N° 27, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2003), *Alcanzando las metas educativas: informe regional*, Santiago de Chile, Proyecto Regional de Indicadores Educativos.

- Villa, Miguel y Jorge Martínez (2002), “Rasgos sociodemográficos y económicos de la migración internacional en América Latina y el Caribe”, *Capítulos del SELA*, N° 65, mayo-agosto.
- Wainerman, Catalina (2003), “Conyugalidad y paternidad ¿Una revolución estancada?”, documento presentado al Seminario internacional sobre género, familias y trabajo: rupturas y continuidades, Montevideo, Universidad de la República de Uruguay/Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), abril.
- Weller, Jürgen (2003), “La problemática inserción laboral de los y las jóvenes”, *serie Macroeconomía del desarrollo*, N° 28 (LC/L.2029-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.192.
- Yang, N. y otros (2000), “Sources of work-family conflict: a sino-US comparison of the effects of work and family demands”, *Academy of Management Journal*, vol. 43, N°s 113-123.



Anexo estadístico

Cuadro 1	América Latina (19 países): evolución de algunos indicadores económicos, 1990-2003	277
Cuadro 2	América Latina y el Caribe (35 países o territorios): población total, 1980-2005	279
Cuadro 2.1	América Latina y el Caribe (32 países o territorios): tasas de crecimiento total estimadas por quinquenios, 1980-2005	280
Cuadro 2.2	América Latina y el Caribe (33 países o territorios): tasas globales de fecundidad estimadas por quinquenios, 1980-2005	281
Cuadro 2.3	América Latina y el Caribe (32 países o territorios): esperanza de vida al nacer por quinquenios, 1980-2005	282
Cuadro 2.4	América Latina y el Caribe (32 países o territorios): tasas estimadas de mortalidad infantil por quinquenios, 1980-2005	283
Cuadro 3	América Latina (18 países): tasa de participación de hombres y mujeres en la actividad económica, según tramos de edad, zonas urbanas, 1990-2003	284
Cuadro 4	América Latina (18 países): tasa de participación de hombres y mujeres en la actividad económica, según número de años de instrucción, zonas urbanas, 1990-2003	286
Cuadro 5	América Latina (18 países): distribución de la población económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-2003	288
Cuadro 5.1	América Latina (18 países): distribución de la población económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-2003	290
Cuadro 5.2	América Latina (18 países): distribución de la población femenina económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-2003	292
Cuadro 6	América Latina (16 países): distribución de la población económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas rurales, 1990-2003	294
Cuadro 7	América Latina (18 países): ingreso medio de la población económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-2003	296
Cuadro 7.1	América Latina (18 países): ingreso medio de la población masculina económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-2003	298
Cuadro 7.2	América Latina (18 países): ingreso medio de la población femenina económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-2003	300
Cuadro 8	América Latina (15 países): ingreso medio de la población económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas rurales, 1990-2003	302
Cuadro 9	América Latina (18 países): ingreso medio de las mujeres, comparado con el de los hombres, según grupos de edad, zonas urbanas, 1990-2003	304
Cuadro 10	América Latina (18 países): ingreso medio de las mujeres, comparado con el de los hombres, según número de años de instrucción, zonas urbanas, 1990-2003	306
Cuadro 11	América Latina (18 países): población urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado del trabajo, 1990-2003	308
Cuadro 11.1	América Latina (18 países): población masculina urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado del trabajo, 1990-2003	310
Cuadro 11.2	América Latina (18 países): población femenina urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado del trabajo, 1990-2003	312
Cuadro 12	América Latina (18 países): ingreso medio de la población urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado del trabajo, 1990-2003	314
Cuadro 12.1	América Latina (18 países): ingreso medio de la población masculina urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado del trabajo, 1990-2003	316
Cuadro 12.2	América Latina (18 países): ingreso medio de la población femenina urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado del trabajo, 1990-2003	318
Cuadro 13	América Latina (18 países): tasas de desempleo abierto, según sexo y edad, en zonas urbanas, alrededor de 1990, 1994, 1997, 1999 y 2003	320

Cuadro 14	América Latina (18 países): tasas de desempleo abierto, según sexo y número de años de instrucción, en zonas urbanas, alrededor de 1990, 1994, 1997, 1999 y 2003	322
Cuadro 15	América Latina (18 países): magnitud de la pobreza y la indigencia, 1990-2003	324
Cuadro 16	América Latina (18 países): líneas de indigencia (LI) y de pobreza (LP).....	326
Cuadro 17	América Latina (18 países): distribución de los hogares, según tramos de ingreso per cápita, en términos del valor de la línea de pobreza, zonas urbanas, 1990-2003	328
Cuadro 18	América Latina (18 países): incidencia de la pobreza en algunas categorías ocupacionales, zonas urbanas, 1990-2003	330
Cuadro 19	América Latina (15 países): incidencia de la pobreza en algunas categorías ocupacionales, zonas rurales, 1990-2003.....	332
Cuadro 20	América Latina (18 países): distribución del total de personas ocupadas en situación de pobreza, según categorías ocupacionales, zonas urbanas, 1990-2003.....	334
Cuadro 21	América Latina (15 países): distribución del total de personas ocupadas en situación de pobreza, según categorías ocupacionales, zonas rurales, 1990-2003	336
Cuadro 22	América Latina (18 países): magnitud y distribución de la pobreza y la indigencia en hogares encabezados por mujeres, zonas urbanas, 1990-2003	338
Cuadro 23	América Latina (18 países): distribución del ingreso de los hogares, total nacional, 1990-2003	340
Cuadro 24	América Latina (18 países): nivel y distribución del ingreso de los hogares, zonas urbanas y rurales, 1990-2003.....	342
Cuadro 25	América Latina (18 países): indicadores de concentración del ingreso, total nacional, 1990-2003.....	344
Cuadro 26	América Latina (18 países): indicadores de concentración del ingreso, zonas urbanas, 1990-2003	346
Cuadro 27	América Latina (15 países): indicadores de concentración del ingreso, zonas rurales, 1990-2003	348
Cuadro 28	América Latina (18 países): asistencia escolar en áreas urbanas, ambos sexos, según quintil de ingreso per cápita del hogar y grupo de edad, 1989-2002.....	349
Cuadro 29	América Latina (18 países): población de 15 a 24 años de edad, según años de instrucción, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	350
Cuadro 29.1	América Latina (18 países): población masculina de 15 a 24 años de edad, según años de instrucción, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	352
Cuadro 29.2	América Latina (18 países): población femenina de 15 a 24 años de edad, según años de instrucción, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	354
Cuadro 30	América Latina (18 países): población de 25 a 59 años de edad, según años de instrucción, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	356
Cuadro 30.1	América Latina (18 países): población masculina de 25 a 59 años de edad, según años de instrucción, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	358
Cuadro 30.2	América Latina (18 países): población femenina de 25 a 59 años de edad, según años de instrucción, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	360
Cuadro 31	América Latina (18 países): población económicamente activa de 15 años de edad y más, según años de instrucción, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	362
Cuadro 31.1	América Latina (18 países): población masculina económicamente activa de 15 años de edad y más, según años de instrucción, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	364
Cuadro 31.2	América Latina (18 países): población femenina económicamente activa de 15 años de edad y más, según años de instrucción, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	366
Cuadro 32	América Latina (18 países): promedio de años de estudio de la población de 15 a 24 años de edad, según sexo, zonas urbanas y rurales, 1980-2003.....	368
Cuadro 33	América Latina (18 países): promedio de años de estudio de la población de 25 a 59 años de edad, según sexo, zonas urbanas y rurales, 1980-2003.....	370
Cuadro 34	América Latina (18 países): promedio de años de estudio de la población económicamente activa de 15 años y más, según sexo, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	372
Cuadro 35	América Latina (15 países): clasificación de los jóvenes de 15 a 19 años de edad, según su situación a lo largo del ciclo escolar, total nacional, circa 2003	374
Cuadro 36	América Latina (18 países): clasificación de los jóvenes de 15 a 19 años de edad, según su situación a lo largo del ciclo escolar, zonas urbanas, circa 2003	376

Cuadro 37	América Latina (14 países): clasificación de los jóvenes de 15 a 19 años de edad, según su situación a lo largo del ciclo escolar, zonas rurales, circa 2003.....	378
Cuadro 38	América Latina (18 países): tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad, 1990-2003	380
Cuadro 39	América Latina (18 países): tasa de deserción temprana entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad, 1990-2003	381
Cuadro 40	América Latina (18 países): tasa de deserción al finalizar el ciclo primario entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad, 1990-2003	382
Cuadro 41	América Latina (18 países): tasa de deserción en el ciclo secundario entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad, 1990-2003	383
Cuadro 42	América Latina (18 países): CEMIT de jóvenes de 15 a 24 años de edad que trabajan 20 o más horas semanales, según sexo, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	384
Cuadro 43	América Latina (18 países): CEMIT de personas de 25 a 59 años de edad que trabajan 20 o más horas semanales, según años de instrucción, zonas urbanas y rurales, 1980-2003	386
Cuadro 44	América Latina (18 países): indicadores del gasto público social, 1990/1991-2000/2001.....	388
Cuadro 45	América Latina (18 países): indicadores del gasto público social en educación y salud, 1990/1991-2000/2001	390

Cuadro 1

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES ECONÓMICOS, 1990-2003										
País	Año	PIB por habitante (en dólares de 1995)	Ingreso por habitante (en dólares de 1995) a/	Desempleo urbano (porcentaje)	Variación media mensual del índice de precios al consumidor (porcentaje)	Variaciones porcentuales del período				
						Período	PIB por habitante	Ingreso por habitante a/	Remuneración media real	Salario mínimo urbano
Argentina	1990	5 535	5 293	7,4	24,92					
	1999	7 471	7 220	14,3	-0,15	1990-1999	35,0	36,4	4,8	250,7
	2000	7 332	7 186	15,1	-0,06	2000	-1,9	-0,5	2,2	0,9
	2001	6 936	6 781	17,4	-0,13	2001	-5,4	-5,6	-0,7	1,1
	2002	6 127	6 000	19,7	2,90	2002	-11,7	-11,5	13,9	-19,5
	2003	6 601	6 528	15,0	0,30	2003	7,7	8,8	-1,5	3,2
Bolivia	1989	805	843	9,9	1,28					
	1999	942	961	7,2	0,26	1989-1999	17,0	14,0	34,5	106,4
	2000	941	956	7,5	0,28	2001	-0,1	-0,5	0,8	2,9
	2001	934	955	8,5	0,08	2001	-0,7	-0,1	3,8	10,8
	2002	938	959	8,7	0,20	2002	0,4	0,4	3,2	4,7
	2003	939	963	9,5	0,32	2003	0,1	0,5	...	0,7
Brasil	1990	3 817	3 691	4,3	26,53					
	1999	4 125	3 969	7,6	0,72	1990-1999	8,1	7,5	1,4	27,8
	2000	4 225	4 080	7,1	0,48	2000	2,4	2,8	-1,0	3,5
	2001	4 216	4 041	6,2	0,62	2001	-0,2	-1,0	-5,0	9,0
	2002	4 219	4 057	11,7	0,99	2002	0,1	0,4	-2,1	2,6
	2003	4 142	4 004	12,3	0,74	2003	-1,8	-1,3	-8,7	0,6
Chile	1990	3 759	3 493	9,2 b/	2,03					
	1999	5 559	5 230	9,8 b/	0,19	1990-1999	47,9	49,7	38,6	61,8
	2000	5 736	5 404	9,2 b/	0,37	2000	3,2	3,3	1,4	7,1
	2001	5 868	5 442	9,1 b/	0,22	2001	2,3	0,7	1,6	3,8
	2002	5 919	5 513	9,0 b/	0,23	2002	0,9	1,3	2,1	2,9
	2003	6 051	5 671	8,5 b/	0,09	2003	2,2	2,9	0,8	1,3
Colombia	1991	2 147	2 108	10,2	2,00					
	1999	2 272	2 236	19,4	0,74	1991-1999	5,8	6,1	28,6	-0,9
	2000	2 285	2 260	17,2	0,70	2000	0,6	1,1	3,9	0,5
	2001	2 277	2 239	18,2	0,62	2001	-0,4	-1,0	-0,3	1,2
	2002	2 297	2 255	17,6	0,56	2002	0,9	0,7	2,8	0,8
	2003	2 352	2 343	16,7	0,53	2003	2,4	3,9	-0,1	0,1
Costa Rica	1990	2 959	2 901	5,4	2,03					
	1999	3 793	3 379	6,2	0,81	1990-1999	28,2	16,5	21,7	10,4
	2000	3 775	3 360	5,3	0,82	2000	-0,5	-0,6	0,8	-0,5
	2001	3 741	3 438	5,8	0,87	2001	-0,9	2,3	1,0	0,2
	2002	3 767	3 498	6,8	0,77	2002	0,7	1,7	4,1	-0,6
	2003	3 935	3 548	6,7	0,79	2003	4,4	1,4	0,4	-0,4
Cuba	1990	5 086	5 285					
	1999	3 822	3 817	6,0	...	1990-1999	-24,8	-27,8
	2000	4 038	3 964	5,5	...	2000	5,6	3,9
	2001	4 144	4 097	4,1	...	2001	2,6	3,3
	2002	4 181	4 137	3,3	...	2002	0,9	1,0
	2003	4 274	4 239	2,3	...	2003	2,2	2,5
Ecuador	1990	1 669	1 443	6,1	3,41					
	1999	1 740	1 701	14,4	4,03	1990-1999	4,3	17,9	...	20,5
	2000	1 730	1 754	14,1	5,54	2000	-0,6	3,1	...	-3,5
	2001	1 797	1 772	10,4	1,70	2001	3,9	1,0	...	11,5
	2002	1 839	1 835	8,6	0,75	2002	2,3	3,5	...	1,1
	2003	1 855	1 873	9,8	0,49	2003	0,9	2,1	...	6,0
El Salvador	1990	1 406	1 487	10,0	1,48					
	1999	1 755	1 897	6,9	-0,09	1990-1999	24,8	27,6	...	0,5
	2000	1 756	1 883	6,5	0,35	2000	0,1	-0,7	...	-2,2
	2001	1 753	1 951	7,0	0,12	2001	-0,2	3,6	...	-3,7
	2002	1 757	1 892	6,2	0,23	2002	0,3	-3,0	...	-1,7
	2003	1 760	1 865	6,2	0,21	2003	0,2	-1,4	...	2,1
Guatemala	1989	1 347	1 304	6,1 b/	1,54					
	1998	1 546	1 588	3,8 b/	0,60	1989-1998	14,8	21,8	31,7	-51,7
	2000	1 585	1 593	...	0,41	1998-2000	2,5	0,3	9,8	8,3
	2001	1 587	1 612	...	0,71	2001	0,1	1,2	0,5	8,3
	2002	1 582	1 671	3,8 b/	0,51	2002	-0,3	3,7	-0,9	0,3
	2003	1 574	1 685	3,8 b/	0,48	2003	-0,5	0,9	...	7,9

(continúa)

Cuadro 1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES ECONÓMICOS, 1990-2003										
País	Año	PIB por habitante (en dólares de 1995)	Ingreso por habitante (en dólares de 1995) a/	Desempleo urbano (porcentaje)	Variación media mensual del índice de precios al consumidor (porcentaje)	Variaciones porcentuales del período				
						Período	PIB por habitante	Ingreso por habitante a/	Remuneración media real	Salario mínimo urbano
Honduras	1990	686	648	7,8	2,62					
	1999	694	734	5,3	0,87	1990-1999	1,2	13,3	...	-9,7
	2000	714	741	...	0,81	2000	2,8	0,9	...	3,1
	2001	714	749	5,9	0,71	2001	0,1	1,1	...	17,8
	2002	714	751	6,1	0,65	2002	0,0	0,3	...	-11,2
	2003	721	769	7,6	0,55	2003	0,9	2,4	...	8,6
México	1989	3 925	3 853	2,7	1,51					
	1998	4 489	4 440	3,2	1,43	1989-1998	14,4	15,2	8,4	-28,8
	2000	4 811	4 851	2,2	0,72	1998-2000	7,2	9,3	7,6	-2,9
	2001	4 726	4 751	2,5	0,36	2001	-1,8	-2,1	6,7	0,5
	2002	4 691	4 754	2,7	0,46	2002	-0,7	0,1	1,7	0,6
	2003	4 682	4 790	3,2	0,33	2003	-0,2	0,8	1,4	-0,7
Nicaragua	1990	735	687	7,6 b/	50,58					
	1998	765	783	13,2 b/	1,42	1990-1998	4,0	13,9	28,2	...
	2000	820	826	9,8 b/	0,79	1998-2000	7,3	5,4	6,1	-14,9
	2001	828	787	11,3 b/	0,38	2001	0,9	-4,7	4,3	-4,4
	2002	818	799	11,6 b/	0,33	2002	-1,1	1,6	4,3	0,0
	2003	820	805	10,2 b/	0,53	2003	0,2	0,7	2,6	-0,6
Panamá	1991	2 682	2 477	19,3	0,13					
	1999	3 345	3 331	14,0	0,13	1991-1999	24,7	34,5	...	18,1
	2000	3 406	3 411	15,2	0,06	2000	1,8	2,4	...	3,7
	2001	3 367	3 410	17,0	0,00	2001	-1,1	-0,0	...	7,0
	2002	3 378	3 560	16,5	0,16	2002	0,3	4,4	...	-1,2
	2003	3 470	3 502	15,6	0,13	2003	2,7	-1,6	...	0,8
Paraguay	1990	1 472	1 479	6,6	3,09					
	1999	1 355	1 367	9,4	0,44	1990-1999	-7,9	-7,6	12,8	-11,4
	2000	1 278	1 245	10,0	0,69	2000	-5,7	-8,9	1,0	4,2
	2001	1 270	1 231	10,8	0,67	2001	-0,6	-1,1	1,4	3,7
	2002	1 219	1 135	14,7	1,15	2002	-4,0	-7,8	-6,4	-0,7
	2003	1 287	1 161	11,2	0,75	2003	5,6	2,3	-2,0	2,8
Perú	1990	1 879	1 795	8,3	43,69					
	1999	2 307	2 234	9,2	0,31	1990-1999	22,8	24,4	5,8	22,9
	2000	2 334	2 250	8,5	0,31	2000	1,2	0,7	0,8	11,0
	2001	2 301	2 211	9,3	-0,01	2001	-1,4	-1,8	-0,9	1,2
	2002	2 377	2 278	9,4	0,13	2002	3,3	3,0	4,6	-0,2
	2003	2 431	2 325	9,4	0,20	2003	2,2	2,1	0,2	1,2
República Dominicana	1990	1 378	1 380	...	5,02					
	1998	1 831	2 009	14,3 b/	0,63	1990-1998	32,8	45,6	...	27,5
	2000	2 063	2 185	13,9 b/	0,72	1998-2000	12,6	8,7	...	4,8
	2001	2 109	2 248	15,4 b/	0,36	2001	2,3	2,9	...	5,5
	2002	2 164	2 318	16,1 b/	0,84	2002	2,6	3,1	...	-0,5
	2003	2 120	2 257	16,6 b/	3,01	2003	-2,0	-2,6	...	-9,6
Uruguay	1990	4 696	4 566	8,5	7,15					
	1999	5 992	5 925	11,3	0,34	1990-1999	27,6	29,8	13,7	-38,9
	2000	5 833	5 703	13,6	0,41	2000	-2,7	-3,7	-1,3	-1,6
	2001	5 584	5 534	15,3	0,29	2001	-4,3	-3,0	-0,2	-1,3
	2002	4 841	4 829	17,0	1,94	2002	-13,3	-12,7	-10,7	-10,0
	2003	4 953	4 689	16,9	0,81	2003	2,3	-2,9	-12,5	-12,4
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	2 994	3 256	10,4 b/	2,63					
	1999	3 011	2 989	15,0 b/	1,53	1990-1999	0,6	-8,2	-29,9	-6,8
	2000	3 068	3 561	13,9 b/	1,06	2000	1,9	19,1	1,6	3,8
	2001	3 113	3 294	13,3 b/	0,97	2001	1,5	-7,5	2,4	0,8
	2002	2 786	2 992	15,8 b/	2,29	2002	-10,5	-9,2	-10,1	-4,4
	2003	2 470	2 786	18,0 b/	2,02	2003	-11,3	-6,9	-16,7	-11,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.

a/ Ingreso bruto nacional real por habitante.

b/ Total nacional.

Cuadro 2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (35 PAÍSES O TERRITORIOS): POBLACIÓN TOTAL, 1980-2005						
(En miles a mitad de año)						
País o territorio	1980	1985	1990	1995	2000	2005
Antillas Neerlandesas	174	182	188	205	215	224
Argentina	28 094	30 305	32 581	34 779	36 784	38 592
Bahamas	210	234	255	283	303	321
Barbados	249	253	257	263	267	272
Belice	144	163	186	213	240	266
Bolivia	5 355	5 964	6 669	7 482	8 428	9 427
Brasil	121 672	136 178	149 690	162 019	174 719	187 597
Chile	11 174	12 102	13 179	14 395	15 398	16 267
Colombia	28 447	31 659	34 970	38 542	42 321	46 039
Costa Rica	2 347	2 697	3 076	3 475	3 925	4 322
Cuba	9 710	10 115	10 628	10 964	11 199	11 369
Dominica	74	73	72	75	78	79
Ecuador	7 961	9 099	10 272	11 397	12 299	13 215
El Salvador	4 586	4 769	5 110	5 669	6 276	6 875
Granada	89	87	85	83	81	80
Guadalupe	327	355	391	409	428	446
Guatemala	7 013	7 935	8 908	10 004	11 225	12 700
Guyana	761	754	731	741	759	768
Guyana Francesa	68	88	116	139	164	187
Haití	5 454	6 134	6 942	7 622	8 357	9 151
Honduras	3 569	4 186	4 879	5 654	6 485	7 347
Jamaica	2 133	2 297	2 369	2 472	2 580	2 701
Martinica	326	341	360	373	386	397
México	67 570	75 465	83 226	91 145	98 881	106 147
Nicaragua	3 067	3 526	3 960	4 477	4 957	5 483
Panamá	1 949	2 176	2 411	2 670	2 948	3 228
Paraguay	3 114	3 609	4 219	4 828	5 496	6 216
Perú	17 324	19 516	21 753	23 837	25 939	27 947
Puerto Rico	3 197	3 378	3 528	3 683	3 816	3 915
República Dominicana	5 697	6 444	7 066	7 705	8 396	9 100
Santa Lucía	113	121	131	140	146	152
Suriname	355	384	402	409	425	442
Trinidad y Tabago	1 082	1 178	1 215	1 261	1 289	1 311
Uruguay	2 914	3 009	3 106	3 218	3 337	3 455
Venezuela (República Bolivariana de)	15 091	17 318	19 735	22 043	24 311	26 577
Total región	361 831	402 533	443 122	483 171	523 387	563 177

Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision (ST/ESA/SER.A.198)*, vol. I, Nueva York, 2003; y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), julio del 2004.

Cuadro 2.1

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (32 PAÍSES O TERRITORIOS): TASAS DE CRECIMIENTO TOTAL ESTIMADAS POR QUINQUENIOS, 1980-2005 (Tasas por mil)					
País o territorio	1980-1985	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005
Antillas Neerlandesas	9,2	6,4	17,5	9,9	8,3
Argentina	15,2	14,5	13,1	11,2	9,6
Bahamas	21,1	17,9	20,8	13,6	11,3
Barbados	3,0	3,5	4,2	3,7	3,5
Belice	25,2	26,0	27,8	23,6	20,6
Bolivia	21,5	22,3	23,0	23,8	22,4
Brasil	22,5	18,9	15,8	15,1	14,2
Chile	16,0	17,0	17,7	13,5	11,0
Colombia	21,4	19,9	19,5	18,7	16,8
Costa Rica	27,8	26,3	24,4	24,4	19,2
Cuba	8,2	9,9	6,2	4,2	3,0
Ecuador	26,7	24,3	20,8	15,2	14,4
El Salvador	7,8	13,8	20,7	20,4	18,2
Guadalupe	16,5	19,2	9,2	9,1	8,4
Guatemala	24,7	23,1	23,2	23,0	24,7
Guyana	-1,9	-6,1	2,8	4,7	2,4
Haití	23,5	24,7	18,7	18,4	18,2
Honduras	31,9	30,6	29,5	27,5	24,9
Jamaica	14,8	6,2	8,5	8,6	9,2
Martinica	8,6	11,3	7,1	6,5	5,6
México	22,1	19,6	18,2	16,3	14,2
Nicaragua	27,9	23,2	24,6	20,4	20,2
Panamá	22,0	20,6	20,5	19,8	18,2
Paraguay	29,5	31,2	27,0	25,9	24,6
Perú	23,8	21,7	18,3	16,9	14,9
Puerto Rico	11,1	8,7	8,6	7,1	5,2
República Dominicana	24,7	18,4	17,3	17,2	16,1
Santa Lucía	13,9	16,8	12,8	7,9	7,8
Suriname	15,4	9,1	3,7	7,6	8,0
Trinidad y Tabago	17,1	6,2	7,4	4,4	3,4
Uruguay	6,4	6,3	7,1	7,3	7,0
Venezuela (República Bolivariana de)	27,5	26,1	22,1	19,6	17,8
Total región	21,3	19,2	17,3	16,0	14,7

Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision (ST/ESA/SER.A.198)*, vol. I, Nueva York, 2003; y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), julio del 2004.

Cuadro 2.2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (33 PAÍSES O TERRITORIOS): TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD ESTIMADAS POR QUINQUENIOS, 1980-2005 (Hijos por mujer)					
País o territorio	1980-1985	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005
Antillas Neerlandesas	2,36	2,30	2,28	2,10	2,05
Argentina	3,15	3,05	2,90	2,63	2,35
Bahamas	3,16	2,62	2,60	2,40	2,29
Barbados	1,92	1,75	1,60	1,50	1,50
Belice	5,40	4,70	4,35	3,60	3,15
Bolivia	5,30	5,00	4,80	4,32	3,96
Brasil	3,80	3,10	2,60	2,45	2,34
Chile	2,67	2,65	2,55	2,21	2,00
Colombia	3,69	3,17	3,01	2,80	2,62
Costa Rica	3,53	3,37	2,95	2,58	2,28
Cuba	1,83	1,83	1,60	1,55	1,55
Ecuador	4,70	4,00	3,40	3,10	2,82
El Salvador	4,50	3,90	3,52	3,17	2,88
Guadalupe	2,55	2,45	2,10	2,10	2,10
Guatemala	6,10	5,70	5,45	5,00	4,60
Guyana	3,26	2,70	2,55	2,45	2,31
Guyana Francesa	3,58	3,73	4,05	3,83	3,33
Haití	6,21	5,94	4,79	4,38	3,98
Honduras	6,00	5,37	4,92	4,30	3,72
Jamaica	3,55	2,87	2,76	2,50	2,36
Martinica	2,14	2,14	1,94	1,90	1,90
México	4,24	3,61	3,12	2,75	2,49
Nicaragua	6,00	5,20	4,60	3,90	3,30
Panamá	3,52	3,20	2,87	2,79	2,70
Paraguay	5,25	4,90	4,55	4,17	3,84
Perú	4,65	4,10	3,70	3,20	2,86
Puerto Rico	2,46	2,26	2,18	1,99	1,89
República Dominicana	4,24	3,61	3,16	2,88	2,71
Santa Lucía	4,20	3,65	3,15	2,40	2,27
Suriname	3,70	2,92	2,45	2,62	2,45
Trinidad y Tabago	3,22	2,80	2,10	1,65	1,55
Uruguay	2,57	2,53	2,49	2,40	2,30
Venezuela (República Bolivariana de)	3,96	3,65	3,25	2,94	2,72
Total región	3,92	3,40	3,00	2,75	2,57

Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision (ST/ESA/SER.A.198)*, vol. I, Nueva York, 2003; y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), julio del 2004.

Cuadro 2.3

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (32 PAÍSES O TERRITORIOS): ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR QUINQUENIOS, 1980-2005 (Número de años)					
País o territorio	1980-1985	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005
Antillas Neerlandesas	73,8	74,5	74,6	75,5	76,3
Argentina	70,2	71,0	72,1	73,2	74,3
Bahamas	68,1	69,6	68,7	67,3	67,1
Barbados	73,2	74,6	75,4	76,4	77,2
Belice	71,2	72,3	72,5	72,5	71,4
Bolivia	53,9	57,3	60,0	62,0	63,8
Brasil	63,6	65,5	67,5	69,4	71,0
Chile	70,7	72,7	74,3	75,7	77,7
Colombia	66,8	67,9	68,6	70,7	72,2
Costa Rica	73,8	75,2	76,2	77,3	78,1
Cuba	73,9	74,6	75,3	76,0	76,7
Ecuador	64,5	67,5	70,0	72,3	74,2
El Salvador	57,1	63,4	67,1	69,4	70,6
Guadalupe	72,5	73,6	75,9	77,3	78,3
Guatemala	58,3	60,9	63,6	66,3	68,9
Guyana	61,0	62,1	63,8	63,6	63,2
Haití	51,9	53,6	55,4	57,2	59,2
Honduras	61,6	65,4	67,7	69,8	71,0
Jamaica	71,2	72,5	73,7	74,8	75,7
Martinica	74,2	76,3	77,6	78,8	79,1
México	67,7	69,8	71,5	72,4	73,4
Nicaragua	59,5	62,2	66,1	68,0	69,5
Panamá	70,8	71,9	72,9	73,8	74,7
Paraguay	67,1	67,6	68,5	69,7	70,8
Perú	61,6	64,4	66,7	68,3	69,8
Puerto Rico	73,8	74,6	73,9	74,9	75,6
República Dominicana	63,2	65,1	67,0	68,6	70,1
Santa Lucía	70,5	71,0	71,4	71,5	72,5
Suriname	67,1	68,2	69,0	70,1	71,1
Trinidad y Tabago	70,2	72,1	71,9	72,1	71,3
Uruguay	71,0	72,1	73,0	74,1	75,2
Venezuela (República Bolivariana de)	68,8	70,5	71,5	72,2	72,8
Total región	65,6	67,4	69,1	70,6	72,0

Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision (ST/ESA/SER.A.198)*, vol.1, Nueva York, 2003; y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), julio del 2004.

Cuadro 2.4

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (32 PAÍSES O TERRITORIOS):					
TASAS ESTIMADAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR QUINQUENIOS, 1980-2005					
(Defunciones de menores de 1 año por mil nacidos vivos)					
País o territorio	1980-1985	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005
Antillas Neerlandesas	18,0	17,0	16,3	14,2	12,6
Argentina	32,2	27,1	24,4	21,8	15,0
Bahamas	29,6	23,1	20,4	19,1	17,7
Barbados	16,9	15,2	14,0	12,4	10,9
Belice	39,3	35,9	34,6	33,3	31,1
Bolivia	109,2	90,1	75,1	66,7	55,6
Brasil	63,3	52,4	42,5	34,1	27,3
Chile	23,7	18,4	14,1	11,5	8,0
Colombia	48,4	41,4	35,2	30,0	25,6
Costa Rica	19,2	17,4	14,5	11,8	10,5
Cuba	17,0	12,9	10,0	7,5	7,3
Ecuador	68,5	55,5	44,2	33,3	24,9
El Salvador	77,0	54,0	40,2	32,0	26,4
Guadalupe	24,7	22,0	9,2	8,3	7,4
Guatemala	79,3	67,1	54,8	45,5	38,6
Guyana	69,3	65,6	56,7	55,6	51,2
Haití	122,1	100,1	74,1	66,1	59,1
Honduras	65,0	53,0	43,0	35,0	31,2
Jamaica	30,5	27,0	24,3	21,9	19,9
Martinica	14,0	10,1	7,6	7,0	6,8
México	47,0	39,5	34,0	31,0	28,2
Nicaragua	79,8	65,0	48,0	35,0	30,1
Panamá	31,6	29,6	27,0	23,7	20,6
Paraguay	48,9	46,7	43,3	39,2	37,0
Perú	81,6	68,0	55,5	42,1	33,4
Puerto Rico	17,2	13,8	11,6	11,0	10,3
República Dominicana	62,5	54,1	46,6	40,0	34,4
Santa Lucía	22,7	20,1	16,9	16,9	14,8
Suriname	40,3	36,1	33,4	29,1	25,7
Trinidad y Tabago	25,3	19,7	16,3	15,1	14,1
Uruguay	33,5	22,6	20,1	17,5	13,1
Venezuela (República Bolivariana de)	33,6	26,9	23,1	20,7	17,5
Total región	56,9	47,2	38,9	32,7	27,4

Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects. The 2002 Revision (ST/ESA/SER.A.198)*, vol.1, Nueva York, 2003; y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), julio del 2004.

Cuadro 3

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN TRAMOS DE EDAD, ZONAS URBANAS, 1990-2003											
País	Año	Edad									
		Hombres					Mujeres				
		TOTAL	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más	TOTAL	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	76	62	97	97	55	38	41	53	52	19
	1994	76	65	98	97	54	41	43	59	56	21
	1997	76	61	97	97	59	45	44	61	60	27
	1999	76	58	96	97	62	47	42	66	63	29
	2000	76	57	96	97	62	46	43	63	62	29
	2002	75	52	96	98	63	48	40	66	70	28
(Zonas urbanas)	1999	74	53	94	97	59	44	36	62	61	27
	2000	74	52	94	96	60	45	36	62	62	28
	2002	72	48	93	96	60	46	35	64	67	27
Bolivia	1989	73	47	90	97	64	47	35	57	61	34
	1994	75	50	92	98	65	51	37	62	68	37
	1997	75	48	92	98	73	51	35	61	68	42
	1999	75	49	93	98	72	54	40	64	71	46
	2000	77	51	92	98	74	54	36	68	74	42
	2002	77	51	93	98	75	57	39	71	75	49
Brasil	1990	82	78	96	95	59	45	48	56	53	21
	1993	83	77	96	95	60	50	51	60	60	27
	1996	80	72	94	94	59	50	50	63	61	26
	1999	80	72	95	93	59	53	51	67	64	28
	2001	79	70	94	93	59	53	52	67	65	29
Chile	1990	72	47	94	95	56	35	29	47	46	20
	1994	75	49	94	96	62	38	32	50	50	23
	1996	74	44	94	96	62	39	29	53	51	23
	1998	74	44	93	97	64	41	30	57	54	26
	2000	73	39	92	96	64	42	28	57	56	26
	2003	73	41	92	96	64	45	31	61	59	29
Colombia a/	1991	81	62	97	97	69	48	44	63	56	22
	1994	79	58	96	97	65	48	43	65	59	21
	1997	78	55	96	97	65	50	42	68	63	24
	1999	79	59	96	96	64	55	48	73	69	27
	2002	79	61	96	96	65	57	51	76	72	32
Costa Rica	1990	78	62	96	95	61	39	39	53	49	14
	1994	76	59	94	96	57	40	35	54	52	17
	1997	77	60	96	96	58	42	33	61	54	21
	1999	79	61	95	96	65	45	40	58	58	23
	2000	77	59	96	96	60	43	38	59	54	49
	2002	77	57	97	97	61	46	37	63	60	25
Ecuador	1990	80	56	95	98	78	43	33	54	56	31
	1994	81	59	96	98	76	47	39	58	58	34
	1997	81	58	97	98	75	49	38	61	62	35
	1999	82	64	97	98	76	54	45	65	67	36
	2000	80	59	95	97	74	51	41	63	63	36
	2002	81	60	96	98	74	53	40	65	67	41
El Salvador	1990	80	64	95	96	72	51	41	66	66	36
	1995	78	61	95	96	68	49	36	65	69	34
	1997	75	54	95	97	66	48	33	65	68	34
	1999	75	58	93	94	63	52	38	68	69	37
	2000	75	56	93	96	66	51	35	68	70	37
	2001	75	57	93	95	64	51	35	68	70	36
	2002	73	52	92	94	61	51	35	67	70	35
Guatemala	1989	84	69	97	97	78	43	42	50	49	29
	1998	82	66	95	97	77	54	47	60	68	44
	2002	85	75	95	97	78	58	54	65	72	41

(continúa)

Cuadro 3 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN TRAMOS DE EDAD, ZONAS URBANAS, 1990-2003											
País	Año	Edad									
		Hombres					Mujeres				
		TOTAL	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más	TOTAL	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más
Honduras	1990	81	66	95	97	73	43	35	54	57	30
	1994	80	64	93	96	74	43	35	54	51	31
	1997	83	70	96	98	74	51	43	63	63	35
	1999	82	67	97	96	78	54	45	64	69	37
	2002	79	63	94	96	74	47	38	58	62	36
	2003	78	63	93	94	73	50	40	63	66	37
México	1989	77	58	96	97	68	33	31	45	39	18
	1994	81	63	97	97	69	38	34	49	46	21
	1996	80	60	97	97	68	41	36	50	50	24
	1998	81	61	96	98	71	43	39	51	51	28
	2000	82	62	97	97	71	42	36	52	53	26
	2002	79	59	95	96	70	45	36	55	57	29
Nicaragua	1993	71	50	86	89	66	44	26	57	62	32
	1998	81	66	95	95	74	51	36	66	67	38
	2001	83	72	96	95	73	52	40	62	68	39
Panamá	1991	74	58	95	96	52	43	37	59	59	18
	1994	79	62	97	97	56	47	39	61	61	20
	1997	78	60	96	97	59	50	40	66	69	26
	1999	78	62	97	97	60	48	41	61	65	25
	2002	79	58	98	98	65	54	39	71	69	34
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	84	69	97	99	75	50	51	63	58	27
	1994	82	69	99	98	66	58	58	74	76	31
	1996	86	76	97	97	75	59	54	69	71	40
	1999	83	68	97	95	73	54	46	65	66	39
	2000	81	67	95	96	69	57	52	76	68	38
(Zonas urbanas)	1994	86	75	98	98	71	53	53	62	62	32
	1996	86	78	98	97	73	58	54	65	69	40
	1999	83	64	97	95	76	55	47	66	67	42
	2000	81	68	95	96	70	57	51	72	67	40
Perú	1997	83	66	96	98	77	62	54	74	76	45
	1999	73	53	87	91	68	55	49	66	66	39
	2001	74	56	88	92	66	54	46	67	69	38
República Dominicana	1992	86	77	96	98	76	53	57	66	57	25
	1995	78	62	95	98	68	44	40	64	57	20
	1997	83	70	96	97	71	49	44	65	61	22
	2000	78	61	93	95	68	51	41	66	70	26
	2002	78	62	95	97	65	53	45	73	71	25
2003	80	62	96	96	68	51	43	69	66	27	
Uruguay	1990	75	68	98	97	54	44	47	69	64	21
	1994	75	72	97	97	52	47	52	74	70	23
	1997	73	71	96	97	49	47	51	74	71	23
	1999	73	67	96	97	50	50	50	75	74	26
	2000	74	68	96	98	50	50	52	75	75	26
	2002	72	63	96	96	51	50	47	76	76	28
Venezuela (República Bolivariana de) b/	1990	78	55	93	96	71	38	25	51	52	21
	1994	79	58	94	97	68	38	26	52	53	20
	1997	83	66	96	97	73	46	34	59	61	28
	1999	84	67	97	97	75	48	36	61	64	30
	2000	82	64	96	97	72	47	34	60	63	32
	2002	84	67	97	97	74	55	42	69	71	37
	2003	83	65	96	98	75	56	42	71	72	37

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- b/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 4

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS, 1990-2003													
País	Año	Años de instrucción											
		Hombres					Mujeres						
		TOTAL	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	TOTAL	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1990	76	74	86	84	38	31	50	66
	1994	76	74	85	83	41	33	53	70
	1997	76	63	68	73	77	88	45	27	29	35	48	74
	1999	76	60	73	73	79	86	47	28	32	35	50	76
	2000	76	56	63	74	79	87	46	27	32	36	51	72
	2002	75	61	70	73	74	86	48	32	32	36	50	74
(Zonas urbanas)	1999	74	58	71	72	76	80	44	25	30	34	47	70
	2000	70	57	71	70	72	74	42	24	31	34	44	63
	2002	72	60	69	71	73	79	46	27	33	36	48	68
Bolivia	1989	73	78	87	68	71	68	47	50	51	41	40	53
	1994	75	80	87	69	71	75	51	54	56	43	45	57
	1997	75	83	88	67	72	72	51	55	57	41	45	58
	1999	75	78	86	76	71	73	54	57	57	53	47	61
	2000	77	79	92	75	73	74	54	53	63	52	47	58
	2002	77	81	89	72	73	77	57	62	61	52	51	63
Brasil	1990	82	76	84	83	88	91	45	33	41	45	61	77
	1993	83	77	84	83	88	90	50	38	47	50	65	79
	1996	80	73	80	80	86	89	50	36	46	50	64	80
	1999	80	72	80	79	86	88	53	37	47	52	67	79
	2001	79	71	79	78	86	88	53	36	47	51	67	80
Chile	1990	72	59	74	66	74	80	35	20	28	26	35	62
	1994	75	59	74	67	79	80	38	21	28	29	40	58
	1996	74	61	74	67	78	79	39	20	26	31	41	62
	1998	74	60	72	66	78	81	41	23	29	31	43	64
	2000	73	57	70	65	76	80	42	20	28	32	44	64
	2003	73	55	66	64	78	80	45	22	29	33	47	66
Colombia b/	1991	81	80	85	76	81	83	48	37	42	42	56	70
	1994	79	75	84	71	80	86	48	35	43	39	56	76
	1997	78	73	82	69	79	84	50	34	43	42	57	76
	1999	79	74	83	70	79	85	55	38	49	48	61	78
	2002	79	73	82	72	84	80	57	40	51	50	65	74
Costa Rica	1990	78	66	84	73	77	82	39	21	33	35	47	62
	1994	76	62	83	70	77	81	40	22	33	34	46	64
	1997	77	59	82	72	77	83	42	19	37	35	44	68
	1999	79	61	84	75	80	84	45	28	39	38	49	67
	2000	77	58	83	73	76	85	43	20	37	36	49	68
	2002	77	58	82	70	75	86	46	23	40	40	49	70
Ecuador	1990	80	82	90	69	73	81	43	39	39	34	44	65
	1994	81	79	90	70	76	84	47	41	45	37	47	66
	1997	81	81	88	71	76	86	49	43	45	37	46	70
	1999	82	81	89	74	78	86	54	45	50	44	53	72
	2000	80	74	87	75	73	84	51	43	46	43	49	70
	2002	81	76	87	75	76	85	53	45	52	46	51	67
El Salvador	1990	80	80	86	75	78	80	51	45	56	45	56	68
	1995	78	77	84	71	77	79	49	43	52	43	53	67
	1997	75	76	80	71	74	76	48	44	49	40	53	65
	1999	75	72	80	73	75	78	52	43	53	46	57	69
	2000	75	72	78	71	77	78	51	46	52	44	55	65
	2001	75	72	80	70	77	78	51	43	51	46	56	65
	2002	73	68	76	68	75	77	51	43	50	44	56	66
Guatemala	1989	84	90	89	65	81	87	43	38	41	37	57	77
	1998	82	85	88	68	81	82	54	53	54	45	58	74
	2002	85	86	93	78	80	87	58	54	57	56	62	75

(continúa)

Cuadro 4 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS, 1990-2003													
País	Año	Años de instrucción											
		Hombres						Mujeres					
		TOTAL	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	TOTAL	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Honduras	1990	81	84	88	61	80	76	43	39	43	31	59	53
	1994	80	81	88	59	82	79	43	37	45	29	50	63
	1997	83	83	90	72	80	82	51	43	53	38	59	67
	1999	82	85	87	64	81	84	54	48	56	41	61	65
	2002	79	81	87	63	75	80	47	41	48	38	53	65
	2003	78	78	86	65	76	79	50	42	51	42	56	66
México	1989	77	79	87	74	65	80	33	21	33	37	42	55
	1994	81	80	88	81	69	83	38	29	32	41	40	58
	1996	80	75	87	81	71	82	41	32	36	42	41	62
	1998	81	71	83	85	79	81	43	33	39	38	43	63
	2000	82	72	85	87	80	83	42	32	35	36	45	55
	2002	79	73	83	84	79	79	45	29	38	40	47	63
Nicaragua	1993	71	70	74	66	70	83	44	39	43	40	51	67
	1998	81	83	87	79	75	90	51	46	49	46	54	76
	2001	83	84	89	77	78	86	52	43	50	52	58	72
Panamá	1991	74	67	78	69	73	81	43	21	31	37	49	71
	1994	79	70	81	74	78	88	47	18	34	41	52	73
	1997	78	64	76	72	80	85	50	23	39	41	52	73
	1999	78	66	80	75	77	85	48	19	36	40	50	73
	2002	79	75	81	75	77	86	54	45	43	41	54	73
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	84	75	88	82	83	87	50	29	53	45	50	71
	1994	82	64	83	78	82	89	58	39	57	51	57	74
	1996	86	76	91	82	86	91	59	43	57	53	63	81
	1999	83	73	88	79	81	91	54	40	51	49	57	79
	2000	81	69	83	80	79	88	57	39	56	51	58	79
	1994	86	76	92	83	84	91	53	38	53	47	58	78
(Zonas urbanas)	1996	86	77	92	82	87	92	58	44	57	53	63	81
	1999	83	70	87	80	81	91	55	43	49	50	57	78
	2000	81	72	86	80	79	87	57	41	58	50	57	79
	1997	83	77	82	71	85	92	62	58	61	51	62	77
Perú	1999	73	70	71	65	78	83	55	54	58	51	53	70
	2001	74	72	78	69	79	82	54	50	57	50	55	65
	1992	86	87	91	85	85	88	53	38	43	48	61	80
República Dominicana	1995	78	74	81	76	74	86	44	28	37	39	47	72
	1997	83	77	84	84	82	90	49	34	41	42	56	80
	2000	78	70	81	77	77	90	51	30	44	46	55	78
	2002	78	74	80	77	77	87	53	32	45	48	57	79
	2003	80	74	80	77	80	89	51	33	41	45	55	79
	1990	75	50	74	79	84	83	44	18	36	48	57	72
Uruguay	1994	75	41	74	84	82	83	47	17	36	56	61	74
	1997	73	40	70	82	80	84	47	16	35	57	59	71
	1999	73	39	69	83	78	83	50	17	38	57	59	74
	2000	74	39	71	82	77	80	50	18	37	58	59	73
	2002	72	38	67	77	78	83	50	15	36	51	61	74
	1990	78	73	84	74	77	76	38	23	34	34	47	58
Venezuela (República Bolivariana de) c/	1994	79	73	86	78	76	76	38	22	34	36	45	58
	1997	83	80	87	81	82	82	46	28	40	43	53	69
	1999	84	80	88	81	82	83	48	28	41	46	55	70
	2000	82	79	87	81	80	81	47	28	43	44	53	69
	2002	84	80	88	81	83	84	55	35	50	52	59	75
	2003	83	80	88	80	82	82	56	35	52	54	60	74

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Para los años 1990 y 1994 las categorías de instrucción consideradas son: primaria completa y secundaria incompleta; secundaria completa y educación superior.

b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país.

Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 5

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES) : DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En porcentajes)											
País	Año	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Sector privado					Total c/	No profesionales ni técnicos
					Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
							En establecimientos de más de cinco personas b/	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico		
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	5,4	69,0	...	69,0	6,9	44,8	11,6	5,7	25,5	22,9
	1994	4,8	70,2	...	70,2	17,1	34,9	13,4	4,8	25,0	19,7
	1997	5,3	73,2	...	73,2	17,8	35,8	14,5	5,1	21,5	16,7
	1999	4,6	73,2	11,6	61,6	10,7	32,1	13,6	5,2	21,8	17,3
	2000	4,7	73,4	11,8	61,6	10,5	31,3	14,6	5,2	22,0	17,0
2002	4,2	73,5	17,6	55,9	12,4	22,9	15,0	5,6	22,3	17,5	
(Zonas urbanas)	1999	4,4	72,7	15,6	57,1	9,1	28,5	13,7	5,8	23,0	18,6
	2000	4,6	72,0	15,9	56,1	8,9	27,3	14,1	5,8	23,4	19,0
	2002	4,0	73,1	21,7	51,4	10,3	21,1	14,0	6,0	23,0	18,4
Bolivia	1989	2,2	53,9	17,9	36,0	4,3	16,3	9,6	5,8	43,8	41,0
	1994	7,6	54,1	12,8	41,3	6,8	15,5	13,8	5,2	38,4	36,8
	1997	7,0	46,1	10,5	35,6	6,7	14,3	11,0	3,6	46,8	44,9
	1999	4,2	47,6	10,3	37,3	7,3	15,1	11,8	3,1	48,2	45,9
	2000	3,0	48,2	10,7	37,5	5,9	17,2	10,2	4,2	48,8	46,4
2002	4,3	47,6	10,4	37,2	4,6	15,5	13,2	3,9	48,1	45,7	
Brasil d/	1990	5,2	72,0	...	72,0	14,3	34,2	17,3	6,2	22,8	21,5
	1993	4,1	67,2	14,4	52,8	4,6	31,5 e/	8,5	8,2	27,8	26,4
	1996	4,2	68,5	13,7	54,8	4,8	31,7 e/	9,9	8,4	27,3	25,7
	1999	4,7	66,6	13,0	53,6	11,0	25,7	8,4	8,5	28,6	26,5
	2001	4,6	68,8	12,7	56,1	11,6	26,8	8,9	8,8	26,6	24,4
Chile f/	1990	2,5	75,0	...	75,0	12,9	45,7	9,4	7,0	22,5	20,6
	1994	3,3	75,0	...	75,0	15,4	44,9	8,6	6,1	21,8	17,4
	1996	3,9	76,4	10,9	65,5	11,6	38,7	9,1	6,1	19,7	16,1
	1998	4,2	76,0	...	76,0	17,0	43,4	9,7	5,9	19,8	15,2
	2000	4,4	75,7	13,1	62,6	11,2	37,5	7,7	6,2	19,9	14,8
2003	4,1	75,5	11,4	64,1	12,1	38,3	7,2	6,5	20,5	15,0	
Colombia g/	1991	4,2	66,2	11,6	54,6	4,9	44,1	...	5,6	29,6	27,3
	1994	4,8	68,2	8,6	59,6	6,0	48,3	...	5,3	27,1	25,0
	1997	4,4	62,2	9,9	52,3	6,4	41,4	...	4,5	33,4	30,7
	1999	4,3	57,4	8,7	48,7	5,7	37,8	...	5,2	38,3	35,7
	2002	5,1	53,6	7,6	46,0	4,3	35,8	...	5,9	41,4	38,5
Costa Rica	1990	5,5	74,8	25,0	49,7	6,1	29,5	9,7	4,4	19,7	17,6
	1994	6,6	75,3	21,8	53,5	7,5	31,0	11,2	3,8	18,2	16,5
	1997	7,7	72,4	20,5	51,9	7,3	29,9	11,2	3,5	19,8	17,7
	1999	8,0	72,7	17,2	55,5	8,9	29,7	11,8	5,1	19,2	17,2
	2000	5,7	74,6	18,7	55,9	8,4	31,2	11,8	4,5	19,8	17,5
2002	8,1	71,3	17,3	54,0	11,9	27,2	10,9	4,0	20,6	17,8	
Ecuador	1990	5,0	58,9	17,5	41,4	4,5	21,1	11,3	4,5	36,1	34,5
	1994	7,9	58,0	13,7	44,3	5,6	21,8	12,2	4,7	34,1	32,1
	1997	7,8	59,1	13,8	45,3	6,3	23,0	11,0	5,0	33,1	31,1
	1999	8,8	59,0	10,7	48,3	7,0	22,5	13,4	5,4	32,1	31,5
	2000	4,6	59,4	11,0	48,4	6,0	23,9	13,8	5,4	35,9	33,8
2002	6,9	58,3	11,5	46,8	6,4	22,6	13,3	4,5	34,8	32,9	
El Salvador h/	1990	3,4	62,9	13,8	49,1	3,4	26,3	13,3	6,1	33,7	33,3
	1995	6,2	61,8	12,5	49,3	7,2	27,2	10,5	4,4	32,1	31,1
	1997	5,7	61,7	13,3	48,4	7,8	25,0	11,2	4,4	32,6	31,5
	1999	4,6	65,2	12,3	52,9	9,1	25,7	13,8	4,3	30,3	29,2
	2001	5,0	62,1	11,3	50,8	7,5	25,7	13,4	4,2	32,8	31,6
2002	5,0	60,8	11,2	49,6	8,9	24,5	12,5	3,7	34,1	33,0	
Guatemala	1989	2,8	64,2	14,4	49,8	6,2	22,8	13,8	7,0	33,0	30,9
	1998	4,7	59,0	8,2	50,8	7,3	19,5	20,1	3,9	36,3	34,5
	2002	6,8	57,1	6,9	50,2	8,4	24,7	13,1	4,0	36,1	34,5
Honduras	1990	1,5	65,5	14,4	51,1	4,9	26,3	13,2	6,7	33,0	31,7
	1994	4,2	65,0	11,3	53,7	6,8	30,5	11,0	5,4	30,8	29,5
	1997	6,3	60,4	10,1	50,3	6,5	27,7	11,0	5,1	33,4	32,3
	1999	6,2	60,2	9,7	50,5	7,5	27,0	11,2	4,8	33,6	33,1
	2002	4,3	58,7	9,7	49,0	7,2	24,9	12,9	4,0	36,8	34,9
2003	5,1	56,9	9,6	47,3	5,9	23,9	13,4	4,1	38,0	36,8	
México i/	1989	3,3	76,4	...	76,4	9,0	64,7	...	2,7	20,3	18,9
	1994	3,7	74,5	16,1	58,4	6,6	48,1	...	3,7	21,7	20,4
	1996	4,5	73,5	15,1	58,4	7,1	33,1	14,6	3,6	22,1	20,5
	1998	4,8	72,9	14,2	58,7	6,6	33,1	14,9	4,1	22,4	20,5
	2000	4,5	74,2	13,6	60,6	8,1	34,6	14,9	3,0	21,3	19,6
	2002	4,3	73,1	13,2	59,9	6,3	32,0	17,0	4,6	22,7	20,9

(continúa)

Cuadro 5 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES) : DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003											
(En porcentajes)											
País	Año	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Sector privado					Total c/	No profesionales ni técnicos
					Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
							En establecimientos de más de cinco personas b/	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico		
Nicaragua	1993	0,7	60,8	20,3	40,5	6,6	16,0	11,7	6,2	38,5	29,3
	1998	3,8	59,8	...	59,8	13,5	25,4	14,5	6,4	36,5	35,1
	2001	4,7	58,5	11,9	46,6	4,1	22,3	15,8	4,4	36,9	35,3
Panamá	1991	3,4	73,2	26,6	46,6	7,4	27,0	5,2	7,0	23,4	22,4
	1994	2,5	76,3	24,8	51,5	7,2	31,3	5,7	7,3	21,2	20,5
	1997	3,0	73,9	22,4	51,5	10,1	29,4	5,6	6,4	23,0	21,8
	1999	2,8	74,2	19,4	54,8	10,8	31,4	6,5	6,1	23,0	21,9
	2002	3,4	74,3	20,4	53,9	6,7	32,4	8,1	6,7	22,1	20,6
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	8,9	68,4	11,9	56,5	5,5	24,9	15,6	10,5	22,7	21,2
	1994	9,4	67,0	11,6	55,4	6,3	24,3	13,3	11,5	23,6	23,1
	1996	7,0	62,3	11,3	51,0	5,0	22,9	13,8	9,3	30,7	28,6
	1999	6,4	67,7	12,7	55,0	6,9	25,4	13,6	9,1	25,8	23,2
	2000	7,3	65,8	11,5	54,3	7,8	23,9	11,3	11,3	35,4	24,4
(Urbano)	1994	9,2	62,0	10,5	51,5	4,5	21,5	15,0	10,5	28,9	28,6
	1996	6,8	57,9	10,0	47,9	3,8	20,4	14,4	9,3	35,3	33,7
	1999	6,6	62,1	11,8	50,3	5,1	21,1	14,9	9,2	31,2	29,1
	2000	7,6	59,9	11,1	48,8	5,5	19,6	13,3	10,4	32,5	30,1
Perú	1997	5,8	53,7	11,3	42,4	7,4	18,7	11,9	4,4	40,5	38,2
	1999	5,6	52,9	11,0	41,9	7,0	16,1	13,0	5,8	41,5	38,1
	2001	4,8	53,0	12,0	41,0	6,5	15,9	13,4	5,2	42,1	39,6
República Dominicana	1992	2,8	61,9	14,3	47,6	8,7	35,7	...	3,2	35,3	32,8
	1995	4,2	62,8	13,1	49,7	9,0	36,9	...	3,8	33,2	30,6
	1997	3,7	62,5	11,9	50,6	6,7	31,1	8,4	4,4	33,9	31,4
	2000	2,9	64,2	13,8	50,4	7,5	31,0	7,8	4,1	32,9	30,7
	2002	3,9	61,3	13,8	47,5	8,0	28,8	6,4	4,3	34,8	32,7
	2003	3,8	59,2	13,7	45,5	7,6	27,2	6,8	3,9	37,1	34,8
Uruguay	1990	4,6	74,2	21,8	52,4	5,1	30,1	10,3	6,9	21,3	19,0
	1994	4,8	72,3	18,7	53,6	5,4	31,8	9,4	7,0	22,9	20,1
	1997	4,3	72,2	17,7	54,5	5,9	30,5	11,0	7,1	23,6	20,8
	1999	4,0	72,4	16,2	56,2	6,5	31,8	10,4	7,5	23,6	20,6
	2000	3,7	73,3	17,2	56,1	6,3	29,6	11,1	9,1	23,2	19,4
	2002	3,7	70,5	17,3	53,2	5,9	26,4	11,0	9,9	25,8	21,8
Venezuela (República Bolivariana de) j/	1990	7,5	70,0	21,4	48,6	5,8	30,0	6,5	6,3	22,5	21,4
	1994	6,1	64,5	18,1	46,4	6,1	27,1	9,2	4,0	29,3	27,4
	1997	5,0	62,8	16,8	46,0	5,5	25,4	10,8	4,3	32,3	30,3
	1999	5,1	57,9	14,9	43,0	4,9	24,0	12,1	2,0	36,9	35,3
	2000	5,0	56,3	14,6	41,7	4,6	23,8	11,2	2,1	38,6	37,1
	2002	5,4	54,6	13,8	40,8	3,9	23,2	11,1	2,6	39,9	38,2
	2003	5,0	53,4	13,8	39,6	4,0	21,3	11,5	2,8	41,6	39,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En Argentina (excepto 1999 y 2000), Brasil (excepto 1993, 1996 y 1999), Chile (excepto 1996 y 2000), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluyen los asalariados del sector público.
- b/ En los casos de Colombia, México (1989 y 1994) y República Dominicana (1992, 1995 y 1998) no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos. Por lo tanto, los asalariados no profesionales ni técnicos en establecimientos que ocupan hasta cinco personas se incluyeron en la columna correspondiente a los establecimientos con más de cinco personas. Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se consideran los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.
- c/ Incluye profesionales y técnicos.
- d/ La Encuesta nacional de hogares (PNAD) de Brasil no recoge información sobre el tamaño de los establecimientos, salvo en 1993, 1996 y 1999. Por lo tanto, en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas se incluyeron los asalariados con contrato de trabajo ("carteira") y en la de los que ocupan hasta cinco personas a quienes no tienen contrato de trabajo.
- e/ Incluye a los empleados del sector privado no profesionales ni técnicos que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.
- f/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- g/ A partir de 1993, la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- h/ Las cifras de 1990 no son estrictamente comparables con las correspondientes a 1997, debido a cambios en la clasificación de profesionales y técnicos.
- i/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH).
- j/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 5.1

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES) : DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En porcentajes)											
País	Año	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Sector privado						
					Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
							En establecimientos de más de cinco personas b/	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico	Total c/	No profesionales ni técnicos
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	6,9	68,3	...	68,3	6,3	47,8	12,4	1,8	24,7	23,1
	1994	6,2	69,0	...	69,0	14,6	39,5	14,5	0,4	24,7	20,8
	1997	6,4	72,5	...	72,5	14,3	40,3	17,5	0,4	21,1	16,2
	1999	6,0	71,3	8,7	62,6	9,4	37,1	15,9	0,2	22,5	18,1
	2000	5,8	71,1	8,7	62,4	10,4	35,5	16,4	0,1	23,1	18,6
	2002	5,4	67,7	11,6	56,1	11,9	26,6	17,5	0,1	26,9	21,9
(Zonas urbanas)	1999	5,8	70,1	12,3	57,8	8,2	33,6	15,8	0,2	24,1	19,7
	2000	5,8	69,1	12,5	56,6	8,6	31,7	16,1	0,2	25,1	20,6
	2002	5,2	67,0	15,5	51,5	9,8	25,0	16,6	0,1	28,0	23,2
Bolivia	1989	3,2	60,4	20,0	40,4	4,8	22,1	12,9	0,6	36,4	32,8
	1994	10,7	62,0	13,9	48,1	7,8	21,5	18,3	0,5	27,4	25,4
	1997	10,1	52,0	10,0	42,0	7,8	19,6	14,1	0,5	37,9	35,5
	1999	5,8	55,5	10,3	45,2	9,1	20,2	15,6	0,3	38,7	35,5
	2000	4,1	54,2	11,2	43,0	6,7	21,8	14,3	0,2	41,7	38,7
	2002	6,1	54,8	10,2	44,6	5,5	21,8	17,1	0,2	39,1	36,3
Brasil d/	1990	6,9	71,0	...	71,0	10,4	39,1	21,1	0,4	22,1	20,9
	1993	5,6	66,5	11,8	54,7	4,5	39,3 e/	10,1	0,8	27,9	26,7
	1996	5,4	65,8	10,9	54,9	4,4	38,3 e/	11,4	0,8	28,7	27,2
	1999	6,2	63,4	10,2	53,2	9,1	32,8	10,5	0,8	30,4	28,5
	2001	5,9	65,8	9,9	55,9	9,6	34,4	11,1	0,8	28,3	26,4
	2002	5,9	65,8	9,9	55,9	9,6	34,4	11,1	0,8	28,3	26,4
Chile f/	1990	3,1	73,0	...	73,0	9,9	52,9	10,0	0,2	23,9	22,0
	1994	3,9	73,7	...	73,7	13,4	51,1	9,1	0,1	22,5	18,3
	1996	4,5	75,0	9,6	65,4	11,4	44,1	9,7	0,2	20,5	17,0
	1998	5,0	74,2	...	74,2	14,9	49,5	9,7	0,1	20,7	16,4
	2000	5,5	74,1	11,8	62,3	11,0	43,3	7,9	0,1	20,5	15,8
	2002	4,7	72,5	8,4	64,1	11,7	44,6	7,6	0,2	22,7	17,9
	2003	4,7	72,5	8,4	64,1	11,7	44,6	7,6	0,2	22,7	17,9
Colombia g/	1991	5,6	63,1	10,8	52,3	4,4	47,6	...	0,3	31,3	28,5
	1994	6,3	65,3	8,0	57,3	5,2	51,9	...	0,2	28,4	26,1
	1997	5,6	58,8	8,7	50,1	5,9	44,0	...	0,2	35,6	32,5
	1999	5,4	54,4	7,9	46,5	5,1	40,9	...	0,5	40,2	37,4
	2002	6,9	50,6	6,5	44,1	3,8	39,9	...	0,4	42,4	39,3
Costa Rica	1990	7,2	72,1	23,0	49,1	7,0	31,6	10,3	0,2	20,6	18,1
	1994	8,1	73,2	20,1	53,1	7,7	33,5	11,6	0,3	18,7	16,7
	1997	9,9	70,7	16,5	54,2	7,7	33,9	12,4	0,2	19,4	17,1
	1999	10,2	71,2	14,6	56,6	9,6	33,3	13,3	0,4	18,5	16,7
	2000	7,1	71,8	15,7	56,1	8,7	34,7	12,4	0,3	21,0	18,5
	2002	10,3	70,4	13,6	56,8	13,6	31,5	11,4	0,3	19,4	16,1
Ecuador	1990	6,3	60,3	17,4	42,9	4,0	24,5	13,8	0,6	33,5	31,7
	1994	9,7	59,6	13,0	46,6	5,3	26,0	15,0	0,3	30,7	28,5
	1997	9,8	59,6	12,8	46,8	5,7	27,3	13,1	0,7	30,6	28,3
	1999	10,2	60,7	10,4	50,3	5,8	27,3	16,6	0,6	28,2	27,7
	2000	5,9	60,5	9,8	50,7	5,4	27,8	16,8	0,7	33,5	31,1
	2002	8,4	60,5	10,6	49,9	5,6	27,6	16,0	0,7	31,2	28,9
El Salvador h/	1990	4,8	71,4	15,5	55,9	4,2	33,1	18,2	0,4	23,8	23,2
	1995	8,6	68,7	13,0	55,7	8,3	32,6	14,3	0,5	22,7	21,3
	1997	7,6	68,1	14,1	54,0	8,8	30,3	14,6	0,3	24,4	22,9
	1999	6,2	72,4	12,9	59,5	10,3	30,0	18,6	0,6	21,5	20,0
	2000	8,0	68,4	12,9	55,5	10,0	28,3	16,8	0,4	23,6	22,0
	2001	6,4	69,5	11,2	58,3	8,7	30,7	18,4	0,5	24,0	22,1
	2002	7,0	67,5	11,3	56,2	10,2	28,6	16,9	0,5	25,5	23,9
	2003	7,0	67,5	11,3	56,2	10,2	28,6	16,9	0,5	25,5	23,9
Guatemala	1989	3,6	66,1	15,0	51,1	6,2	27,3	17,4	0,2	30,3	28,6
	1998	6,2	64,4	8,4	56,0	7,5	23,8	24,4	0,3	29,5	27,2
	2002	9,4	61,1	7,0	54,1	8,1	29,6	16,3	0,1	29,5	27,6
	2003	9,4	61,1	7,0	54,1	8,1	29,6	16,3	0,1	29,5	27,6
Honduras	1990	1,9	69,8	13,6	56,2	5,4	33,0	17,4	0,4	28,3	26,8
	1994	5,7	65,9	10,3	55,6	6,9	34,5	14,2	0,0	28,4	26,9
	1997	8,8	62,5	8,3	54,2	6,1	31,5	15,8	0,8	28,9	27,8
	1999	8,4	63,3	8,0	55,3	6,6	31,9	16,2	0,6	28,4	28,0
	2002	5,4	60,1	7,7	52,4	7,2	27,6	17,2	0,4	34,6	32,6
	2003	6,7	59,0	7,6	51,4	6,0	26,9	18,0	0,5	34,4	33,1
	2003	6,7	59,0	7,6	51,4	6,0	26,9	18,0	0,5	34,4	33,1

(continúa)

Cuadro 5.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES) : DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En porcentajes)											
País	Año	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Sector privado					Total c/	No profesionales ni técnicos
					Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
							En establecimientos de más de cinco personas b/	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico		
México i/	1989	4,3	76,4	...	76,4	9,3	66,5	...	0,6	19,2	17,4
	1994	4,9	75,5	13,9	61,6	6,9	54,1	...	0,6	19,6	18,0
	1996	5,8	75,2	13,7	61,5	7,2	36,1	17,3	0,9	19,0	17,4
	1998	6,3	75,0	12,9	62,1	6,8	36,7	17,4	1,2	18,9	16,6
	2000	6,0	76,9	11,3	65,6	8,9	37,4	18,4	0,9	17,3	15,3
	2002	5,8	74,2	11,9	62,3	6,2	35,3	19,4	1,4	20,0	18,2
Nicaragua	1993	0,9	64,3	18,8	45,5	6,6	22,4	16,2	0,3	34,9	27,5
	1998	5,6	63,1	...	63,1	11,7	31,5	18,7	1,2	31,3	30,0
	2001	6,3	63,6	9,8	53,8	4,0	28,2	21,5	0,1	30,1	28,6
Panamá	1991	4,4	65,5	23,2	42,3	7,7	28,1	5,9	0,6	30,0	28,8
	1994	3,0	70,6	21,7	48,9	7,4	33,6	6,7	1,2	26,4	25,4
	1997	4,0	68,3	19,3	49,0	10,4	31,6	6,0	1,0	27,8	26,2
	1999	3,6	70,1	17,0	53,1	11,1	33,6	7,4	1,0	26,4	25,1
	2002	4,6	70,0	17,7	52,3	6,2	35,5	9,6	1,0	25,4	23,6
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	13,5	69,2	12,3	56,9	4,9	31,4	20,6	0,0	17,4	16,4
	1994	12,3	68,1	11,7	56,4	6,5	30,2	18,1	1,6	19,5	19,1
	1996	9,3	64,3	10,3	54,0	5,1	29,5	18,4	1,0	26,3	24,6
	1999	8,5	69,4	13,4	56,0	7,4	33,3	14,5	0,8	22,1	19,5
	2000	9,5	66,4	10,5	55,9	7,7	32,2	13,7	2,3	24,0	20,3
(Zonas urbanas)	1994	11,9	63,4	10,2	53,2	4,6	27,0	20,2	1,4	24,7	24,5
	1996	9,1	60,3	9,0	51,3	4,0	27,1	19,3	0,9	30,6	29,2
	1999	9,0	64,0	11,9	52,1	5,3	28,0	17,9	0,9	27,0	25,1
	2000	10,3	60,7	9,9	50,8	5,4	25,8	18,0	1,6	29,1	26,1
Perú	1997	8,5	58,8	11,6	47,2	7,3	23,8	15,9	0,2	32,6	29,5
	1999	8,0	55,8	11,4	44,4	7,6	20,3	16,1	0,4	36,1	32,0
	2001	6,7	58,0	12,6	45,4	7,0	20,4	17,5	0,5	35,4	32,2
República Dominicana	1992	3,9	57,1	13,8	43,3	6,9	36,2	...	0,2	39,0	36,1
	1995	5,3	56,7	11,0	45,7	8,0	37,5	...	0,2	37,9	35,2
	1997	4,9	58,1	11,4	46,7	5,6	31,3	9,4	0,4	37,0	34,5
	2000	3,5	58,6	11,4	47,2	6,3	32,6	7,7	0,6	38,0	35,6
	2002	4,8	55,2	12,5	42,7	6,7	29,1	6,1	0,8	39,9	37,8
	2003	4,9	51,8	11,3	40,5	5,9	27,9	6,3	0,4	43,4	40,9
Uruguay	1990	6,4	73,0	22,8	50,2	4,4	33,9	11,8	0,1	20,5	18,9
	1994	6,3	70,8	18,6	52,2	4,8	36,7	10,6	0,1	23,0	20,7
	1997	5,8	69,2	17,3	51,9	4,9	34,8	12,0	0,2	24,9	22,6
	1999	5,2	69,1	15,6	53,5	5,4	36,2	11,7	0,2	25,6	23,2
	2000	4,9	69,7	16,5	53,2	5,3	35,2	11,4	1,3	25,2	21,9
	2002	4,9	65,6	16,8	48,8	4,9	30,3	12,2	1,4	29,5	25,7
Venezuela (República Bolivariana de) j/	1990	10,2	66,1	16,8	49,3	5,5	33,9	8,0	1,9	23,6	22,5
	1994	8,4	60,6	13,0	47,6	5,2	30,0	10,9	1,5	31,1	29,2
	1997	6,7	61,2	12,1	49,1	5,0	29,2	13,4	1,5	32,0	30,3
	1999	6,9	57,5	10,6	46,9	4,0	27,9	14,9	0,1	35,6	34,1
	2000	6,8	55,6	10,4	45,2	3,7	27,7	13,7	0,1	37,6	36,3
	2002	7,3	54,4	9,9	44,5	3,2	27,4	13,8	0,1	38,3	36,8
	2003	6,7	53,0	9,6	43,4	3,4	25,5	14,3	0,2	40,3	38,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En Argentina (excepto 1999 y 2000), Brasil (excepto 1993, 1996 y 1999), Chile (excepto 1996 y 2000), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluyen los asalariados del sector público.
- b/ En los casos de Colombia, México (1989 y 1994) y República Dominicana (1992, 1995 y 1998) no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos. Por lo tanto, los asalariados no profesionales ni técnicos en establecimientos que ocupan hasta cinco personas se incluyeron en la columna correspondiente a los establecimientos con más de cinco personas. Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se consideran los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.
- c/ Incluye profesionales y técnicos.
- d/ La Encuesta nacional de hogares (PNAD) de Brasil no recoge información sobre el tamaño de los establecimientos, salvo en 1993, 1996 y 1999. Por lo tanto, en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas se incluyeron los asalariados con contrato de trabajo ("carteira") y en la de los que ocupan hasta cinco personas, a quienes no tienen contrato de trabajo.
- e/ Incluye a los empleados del sector privado no profesionales ni técnicos que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.
- f/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- g/ A partir de 1993, la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- h/ Las cifras de 1990 no son estrictamente comparables con las correspondientes a 1997, debido a cambios en la clasificación de profesionales y técnicos.
- i/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH).
- j/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 5.2

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En porcentajes)											
País	Año	Empleadoras	Asalariadas							Trabajadoras por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Sector privado					Total c/	No profesionales ni técnicas
					Total a/	Profesionales y técnicas	No profesionales ni técnicas				
							En establecimientos de más de cinco personas b/	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico		
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	2,8	70,3	...	70,3	8,0	39,6	10,2	12,5	27,1	22,7
	1994	2,4	72,2	...	72,2	21,4	27,0	11,5	12,3	25,4	18,7
	1997	3,5	74,2	...	74,2	23,6	28,3	9,6	12,7	22,2	17,5
	1999	2,6	76,3	15,9	60,4	12,6	24,8	10,3	12,7	20,7	15,3
	2000	3,0	76,8	16,4	60,4	10,7	24,8	12,0	12,9	20,1	15,7
	2002	2,5	81,3	25,9	55,4	13,0	17,6	11,6	13,2	16,2	11,5
(Zonas urbanas)	1999	2,5	76,2	20,4	55,8	10,4	20,7	10,5	14,2	21,3	16,9
	2000	2,8	76,5	21,1	55,4	9,4	20,7	11,1	14,2	20,7	16,5
	2002	2,3	81,6	30,3	51,3	11,0	15,9	10,4	14,0	16,1	11,8
Bolivia	1989	0,8	45,3	15,0	30,3	3,6	8,6	5,2	12,9	54,0	52,2
	1994	3,5	43,7	11,4	32,3	5,4	7,8	7,9	11,2	52,9	51,7
	1997	2,8	38,5	11,1	27,4	5,4	7,3	7,0	7,7	58,7	57,4
	1999	2,2	37,4	10,2	27,2	5,0	8,6	6,9	6,7	60,6	59,3
	2000	1,6	40,7	10,0	30,7	4,9	11,5	4,9	9,4	57,8	56,3
	2002	2,2	39,0	10,7	28,3	3,6	7,8	8,6	8,3	58,7	56,9
Brasil d/	1990	2,5	73,6	...	73,6	20,7	26,1	11,2	15,6	24,0	22,4
	1993	1,8	70,7	18,3	52,4	4,7	21,9 e/	6,0	19,8	27,4	25,8
	1996	2,5	72,3	17,9	54,4	5,4	21,7 e/	7,6	19,7	25,2	23,4
	1999	2,7	71,2	16,9	54,3	13,8	15,5	5,3	19,7	26,1	23,6
	2001	2,8	73,0	16,5	56,5	14,5	16,1	5,9	20,0	24,3	21,6
Chile f/	1990	1,4	78,6	...	78,6	18,4	32,6	8,2	19,4	20,1	18,2
	1994	2,2	77,4	...	77,4	19,1	33,8	7,7	16,8	20,6	15,8
	1996	2,8	78,9	13,2	65,7	12,0	29,2	8,2	16,3	18,4	14,5
	1998	3,0	78,8	...	78,8	20,6	33,3	9,7	15,2	18,1	13,2
	2000	2,5	78,4	15,3	63,1	11,5	28,2	7,4	16,0	19,1	13,3
	2003	3,0	80,0	16,1	63,9	12,8	28,3	6,5	16,3	17,1	10,6
Colombia g/	1991	2,2	70,7	12,8	57,9	5,5	38,8	...	13,6	27,1	25,5
	1994	2,7	72,3	9,4	62,9	7,2	43,0	...	12,7	25,2	23,4
	1997	2,8	66,9	11,6	55,3	6,9	38,0	...	10,4	30,3	28,2
	1999	2,7	61,7	9,9	51,8	6,6	33,7	...	11,5	35,6	33,4
	2002	2,9	57,1	8,9	48,2	4,9	30,6	...	12,7	40,0	37,5
Costa Rica	1990	2,3	79,6	28,7	50,9	4,5	25,8	8,6	12,0	18,1	16,6
	1994	4,0	78,6	24,7	53,9	7,1	26,4	10,3	10,1	17,3	16,1
	1997	4,0	75,7	27,5	48,2	6,6	23,2	9,2	9,2	20,4	18,7
	1999	4,4	75,0	21,5	53,5	7,5	24,0	9,4	12,6	20,4	18,1
	2000	3,2	79,1	23,6	55,5	7,8	25,4	10,9	11,4	17,5	15,7
	2002	4,7	72,8	23,0	49,8	9,3	20,6	10,1	9,8	22,6	20,4
Ecuador	1990	2,7	56,4	17,7	38,7	5,5	14,9	6,7	11,6	40,8	39,5
	1994	5,0	55,5	14,8	40,7	6,2	15,0	7,7	11,8	39,5	37,8
	1997	4,5	57,5	15,5	42,0	7,3	15,8	8,0	10,9	37,1	35,7
	1999	5,0	56,7	11,3	45,4	8,9	15,0	8,4	13,1	38,3	37,4
	2000	2,5	57,7	12,8	44,9	7,0	17,8	9,0	11,1	39,8	38,1
2002	4,5	55,0	12,8	42,2	7,6	14,7	9,1	10,8	40,5	39,3	
El Salvador h/	1990	1,6	52,5	11,7	40,8	2,5	18,0	7,2	13,1	45,9	45,8
	1995	3,3	53,4	11,8	41,6	5,9	20,8	5,8	9,1	43,3	42,8
	1997	3,3	53,9	12,2	41,7	6,5	18,7	7,1	9,4	42,8	42,0
	1999	2,7	57,0	11,5	45,5	7,6	20,9	8,4	8,6	40,2	39,6
	2000	3,4	54,5	12,0	42,5	6,6	20,0	7,7	8,2	42,1	41,5
	2001	3,4	53,9	11,5	42,4	6,2	20,0	7,8	8,4	42,7	42,3
	2002	3,0	53,6	11,1	42,5	7,5	20,2	7,8	7,0	43,4	42,8
	2002	3,3	51,5	6,8	44,7	8,6	18,1	8,8	9,2	45,1	43,9
Guatemala	1989	1,5	61,2	13,4	47,8	6,1	15,7	7,9	18,1	37,3	34,6
	1998	2,7	52,0	7,8	44,2	7,1	14,1	14,6	8,4	45,2	43,9
	2002	3,3	51,5	6,8	44,7	8,6	18,1	8,8	9,2	45,1	43,9
Honduras	1990	0,9	59,0	15,5	43,5	4,1	16,5	6,9	16,0	40,0	39,0
	1994	1,8	63,6	12,9	50,7	6,7	24,3	6,0	13,7	34,6	33,6
	1997	3,1	57,4	12,4	45,0	7,0	22,6	4,7	10,7	39,4	38,3
	1999	3,6	56,6	11,8	44,8	8,6	21,2	5,1	9,9	39,8	39,2
	2002	2,9	57,2	12,4	44,8	7,2	21,4	7,3	8,9	39,9	38,0
	2003	3,0	54,2	12,1	42,1	5,8	20,1	7,5	8,7	42,8	41,6

(continúa)

Cuadro 5.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En porcentajes)											
País	Año	Empleadoras	Asalariadas							Trabajadoras por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Sector privado					Total c/	No profesionales ni técnicas
					Total a/	Profesionales y técnicas	No profesionales ni técnicas				
							En establecimientos de más de cinco personas b/	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico		
México i/	1989	1,3	76,3	...	76,3	8,4	60,8	...	7,1	22,4	21,9
	1994	1,5	72,8	20,3	52,5	6,1	36,8	...	9,6	25,8	25,0
	1996	2,1	70,4	17,5	52,9	7,0	27,7	9,9	8,3	27,5	25,9
	1998	2,2	69,5	16,5	53,0	6,5	26,8	10,7	9,0	28,4	27,1
	2000	1,9	70,2	17,5	52,7	6,6	30,0	9,6	6,5	27,9	26,8
	2002	1,9	71,1	15,2	55,9	6,4	26,7	13,1	9,7	27,0	25,3
Nicaragua	1993	0,5	56,2	22,4	33,8	6,6	7,5	5,6	14,1	43,4	31,7
	1998	1,3	55,4	...	55,4	15,8	17,2	8,9	13,5	43,3	41,9
	2001	2,5	51,2	14,7	36,5	4,2	14,0	8,0	10,3	46,2	44,5
Panamá	1991	1,7	86,1	32,5	53,6	6,9	24,9	4,0	17,8	12,2	11,5
	1994	1,5	86,6	30,3	56,3	6,9	27,3	4,0	18,1	12,0	11,7
	1997	1,4	83,3	27,4	55,9	9,7	25,9	5,0	15,3	15,4	14,8
	1999	1,6	81,1	23,5	57,6	10,3	27,7	5,2	14,4	17,3	16,7
	2002	1,8	81,2	24,6	56,6	7,6	27,8	5,9	15,3	17,1	16,1
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	2,4	67,5	11,3	56,2	6,5	15,5	8,6	25,6	30,2	28,1
	1994	5,7	65,5	11,5	54,0	6,1	16,6	7,0	24,3	28,8	28,2
	1996	4,0	59,5	12,5	47,0	4,9	14,3	7,8	20,0	36,5	33,9
	1999	3,7	65,4	11,7	53,7	6,3	14,9	12,4	20,1	30,8	28,2
	2000	4,8	64,3	12,7	51,6	7,8	14,3	8,4	21,1	30,9	29,0
(Zonas urbanas)	1994	5,3	59,7	10,9	48,8	4,3	13,7	7,5	23,3	34,9	34,5
	1996	3,5	54,7	11,4	43,3	3,5	11,3	7,7	20,8	41,8	39,9
	1999	3,4	59,7	11,6	48,1	5,0	11,6	10,8	20,7	36,9	34,6
	2000	4,2	59,0	12,6	46,4	5,6	11,8	7,5	21,5	36,8	35,2
Perú	1997	2,3	47,3	10,9	36,4	7,6	12,1	6,9	9,8	50,5	49,1
	1999	2,5	49,3	10,5	38,8	6,3	11,0	9,1	12,4	48,2	45,7
	2001	2,4	46,9	11,3	35,6	5,8	10,2	8,3	11,3	50,7	49,0
República Dominicana	1992	0,9	70,9	15,1	55,8	12,1	35,0	...	8,7	28,3	26,7
	1995	2,0	73,7	16,9	56,8	10,7	35,6	...	10,5	24,3	21,9
	1997	1,5	70,1	12,6	57,5	8,6	30,6	6,7	11,6	28,4	25,8
	2000	2,0	73,3	17,7	55,6	9,4	28,4	8,1	9,7	24,8	22,8
	2002	2,4	71,0	15,9	55,1	10,0	28,4	6,7	10,0	26,6	24,6
	2003	1,7	72,2	17,8	54,4	10,5	26,1	7,7	10,1	26,2	24,2
Uruguay	1990	1,9	75,9	20,2	55,7	6,1	24,4	8,1	17,1	22,3	19,1
	1994	2,8	74,4	18,9	55,5	6,2	24,9	7,6	16,8	22,8	19,2
	1997	2,3	75,9	18,1	57,8	7,2	24,4	9,5	16,7	21,8	18,3
	1999	2,3	76,7	17,0	59,7	7,9	25,8	8,6	17,4	21,1	17,1
	2000	2,2	77,7	18,0	59,7	7,6	22,0	10,6	19,5	20,3	15,9
	2002	2,1	77,1	18,0	59,1	7,2	20,9	9,5	21,5	20,9	16,6
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	2,3	77,5	30,4	47,1	6,4	22,3	3,4	15,0	20,2	19,1
	1994	1,7	72,3	28,1	44,2	8,0	21,3	5,9	9,0	26,0	23,9
	1997	1,9	65,7	25,7	40,0	6,4	18,1	5,8	9,7	32,5	30,1
	1999	1,9	58,9	22,7	36,2	6,5	17,1	7,0	5,6	39,2	37,4
	2000	1,9	57,6	22,1	35,5	6,3	16,7	6,9	5,6	40,4	38,4
	2002	2,4	55,0	20,0	35,0	5,1	16,6	6,7	6,6	42,6	40,6
	2003	2,3	53,9	20,5	33,4	5,0	14,5	6,9	7,0	43,8	41,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En Argentina (excepto 1999 y 2000), Brasil (excepto 1993, 1996 y 1999), Chile (excepto 1996 y 2000), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluyen las asalariadas del sector público.
- b/ En los casos de Colombia, México (1989 y 1994) y República Dominicana (1992, 1995 y 1998) no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos. Por lo tanto, las asalariadas no profesionales ni técnicas en establecimientos que ocupan hasta cinco personas se incluyeron en la columna correspondiente a con más de cinco personas. Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se consideran los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.
- c/ Incluye profesionales y técnicas.
- d/ La Encuesta nacional de hogares (PNAD) de Brasil no recoge información sobre el tamaño de los establecimientos, salvo en 1993, 1996 y 1999. Por lo tanto, en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas se incluyeron las asalariadas con contrato de trabajo ("carteira") y en la de los que ocupan hasta cinco personas, a quienes no tienen contrato de trabajo.
- e/ Incluye a las empleadas del sector privado no profesionales ni técnicas que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.
- f/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- g/ A partir de 1993, la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- h/ Las cifras de 1990 no son estrictamente comparables con las correspondientes a 1997, debido a cambios en la clasificación de profesionales y técnicas.
- i/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH).
- j/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 6

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS RURALES, 1990-2003 (En porcentajes)								
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados			Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado a/	Total	Agricultura
Bolivia	1997	100,0	3,3	8,9	2,4	6,5	87,8	79,9
	1999	100,0	1,2	9,2	2,3	6,9	89,6	82,1
	2000	100,0	0,5	8,6	2,8	5,8	90,9	83,0
	2002	100,0	4,2	9,8	2,3	7,5	86,0	79,0
Brasil	1990	100,0	3,0	44,3	...	44,3	52,7	44,3
	1993	100,0	1,9	33,6	5,1	28,5	64,5	58,4
	1996	100,0	1,8	34,3	4,4	29,9	63,8	57,2
	1999	100,0	2,0	34,3	5,2	29,1	63,7	56,4
	2001	100,0	2,5	33,7	4,3	29,4	63,8	57,3
Chile b/	1990	100,0	2,8	64,9	...	64,9	32,3	25,0
	1994	100,0	2,6	66,6	...	66,6	30,8	21,5
	1996	100,0	2,4	64,2	3,6	60,6	33,3	26,6
	1998	100,0	2,8	64,5	...	64,5	32,7	24,4
	2000	100,0	2,5	65,1	4,9	60,2	32,5	24,3
	2003	100,0	2,5	64,1	3,9	60,2	33,3	24,7
Colombia	1991	100,0	6,3	48,6	...	48,6	45,0	25,5
	1994	100,0	4,5	54,2	...	54,2	41,3	22,4
	1997	100,0	4,2	50,6	...	50,6	45,1	25,0
	1999	100,0	3,7	47,2	3,7	43,5	49,2	27,9
	2002	100,0	4,6	40,6	3,5	37,1	54,8	30,2
Costa Rica	1990	100,0	5,1	66,2	10,5	55,7	28,7	16,8
	1994	100,0	6,8	69,0	9,6	59,4	24,2	11,1
	1997	100,0	7,1	67,8	9,0	58,8	25,2	11,3
	1999	100,0	8,2	69,2	8,9	60,3	22,7	9,5
	2000	100,0	5,8	66,9	9,6	57,3	27,3	12,3
	2002	100,0	7,5	63,5	8,8	54,8	29,0	13,2
Ecuador	2000	100,0	3,2	42,4	3,9	38,5	54,3	40,7
El Salvador	1995	100,0	6,0	49,6	3,2	46,4	44,3	26,8
	1997	100,0	4,0	50,9	3,1	47,8	45,1	28,1
	1999	100,0	4,1	50,8	3,9	46,9	45,2	26,3
	2000	100,0	4,6	47,2	3,9	43,3	48,1	26,7
	2001	100,0	3,8	47,0	3,8	43,2	49,2	28,9
	2002	100,0	3,9	45,9	3,8	42,1	50,3	27,6
Guatemala	1989	100,0	0,6	38,7	2,9	35,8	60,7	47,5
	1998	100,0	2,0	42,9	1,7	41,2	55,1	34,8
	2002	100,0	6,3	35,3	1,6	33,7	58,4	38,8
Honduras	1990	100,0	0,6	34,9	4,0	30,9	64,6	47,6
	1994	100,0	1,7	37,0	4,8	32,2	61,4	43,5
	1997	100,0	2,6	34,8	3,4	31,4	62,6	41,6
	1999	100,0	3,1	33,4	3,7	29,7	63,5	41,3
	2002	100,0	1,3	35,0	1,8	33,2	63,7	46,9
	2003	100,0	1,4	35,6	1,9	33,7	63,0	43,6
México c/	1989	100,0	2,5	50,2	...	50,2	47,3	34,6
	1994	100,0	4,0	48,6	5,5	43,1	47,4	30,8
	1996	100,0	5,1	48,1	6,4	41,7	46,7	28,6
	1998	100,0	4,5	45,6	6,0	39,6	49,9	29,2
	2000	100,0	5,0	51,0	6,6	44,4	44,0	25,1
	2002	100,0	3,3	52,4	7,8	44,6	44,3	25,4

(continúa)

Cuadro 6 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS RURALES, 1990-2003 (En porcentajes)								
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados			Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado a/	Total	Agricultura
Nicaragua	1993	100,0	0,2	38,4	6,6	31,8	61,3	45,8
	1998	100,0	3,3	43,7	...	43,7	53,0	39,7
	2001	100,0	5,4	37,4	4,9	32,5	57,2	44,5
Panamá	1991	100,0	2,9	39,1	12,5	26,6	58,0	45,5
	1994	100,0	3,3	47,0	11,8	35,2	49,7	34,4
	1997	100,0	2,2	46,1	10,1	36,0	51,6	33,4
	1999	100,0	3,2	44,9	10,1	34,8	51,9	31,6
	2002	100,0	2,0	40,1	8,3	31,8	57,9	39,1
Paraguay	1997	100,0	2,3	24,8	3,2	21,6	72,8	57,3
	1999	100,0	3,4	27,0	3,4	23,6	69,7	54,0
	2000	100,0	3,6	27,1	2,5	24,6	69,4	53,7
Perú	1997	100,0	5,3	19,8	3,6	16,2	74,8	61,0
	1999	100,0	6,3	19,9	2,3	17,6	73,9	61,9
	2001	100,0	5,4	20,6	4,1	16,5	74,0	61,2
República Dominicana	1992	100,0	4,0	52,4	13,2	39,2	43,7	21,6
	1995	100,0	2,1	56,1	11,5	44,6	41,9	15,7
	1997	100,0	3,4	45,6	10,3	35,3	51,0	28,5
	2000	100,0	1,8	40,3	8,1	32,2	57,8	32,6
	2002	100,0	1,7	36,6	8,3	28,3	61,7	34,9
	2003	100,0	2,7	43,7	8,3	35,4	53,6	23,7
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	100,0	6,9	46,6	8,3	38,3	46,5	33,3
	1994	100,0	7,6	47,6	7,4	40,2	44,8	29,7
	1997	100,0	5,4	49,6	5,4	44,2	44,9	33,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Incluye a los empleados domésticos. En Brasil (1990), Chile (1990, 1994 y 1998), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluyen los asalariados del sector público.

b/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

c/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH).

Cuadro 7

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)												
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado					Total b/	No profesionales ni técnicos
						Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
								En establecimientos de más de cinco personas	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico		
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	6,4	20,6	4,7	...	4,7	9,4	4,5	3,6	2,5	7,9	7,2
	1994	8,6	28,3	6,4	...	6,4	10,2	5,7	4,7	3,3	10,8	9,1
	1997	7,2	24,2	5,6	...	5,6	9,4	4,8	3,7	2,6	8,6	6,5
	1999	6,4	22,0	5,1	6,2	4,8	8,5	4,9	3,5	2,4	7,3	8,1
	2002	4,7	20,9	3,5	3,3	3,5	6,7	3,1	2,1	1,7	5,6	4,1
Bolivia	1989	4,2	16,2	3,9	4,1	3,5	7,7	3,5	2,6	1,6	4,1	3,8
	1994	3,5	10,3	3,2	3,9	3,0	7,3	2,7	2,0	1,0	2,5	2,2
	1997	3,6	10,1	3,9	4,6	3,6	8,8	3,2	2,2	1,1	2,5	2,3
	1999	3,4	8,2	4,1	4,7	3,7	7,4	3,8	2,4	1,8	2,3	2,2
	2002	3,2	7,3	4,0	5,2	3,7	7,7	4,0	2,4	2,0	2,0	1,9
Brasil c/	1990	4,7	16,1	4,1	...	4,1	8,2	3,8	2,6	1,0	3,8	3,4
	1993	4,3	15,6	4,2	6,4	3,6	10,9	3,5 d/	2,0	1,1	3,1	2,7
	1996	5,0	19,1	4,5	7,0	3,9	10,7	3,9 d/	2,5	1,5	4,2	3,7
	1999	4,4	14,7	4,1	6,6	3,5	6,9	3,2 d/	2,1	1,4	3,2	2,8
	2001	4,3	14,8	4,1	6,7	3,5	6,9	3,1 d/	2,1	1,4	3,2	2,8
Chile e/	1990	4,7	24,8	3,8	...	3,8	7,4	3,5	2,4	1,4	5,4	5,0
	1994	6,2	34,2	4,9	...	4,9	9,6	4,0	2,9	2,0	6,3	4,9
	1996	6,8	33,7	5,1	6,5	4,8	11,2	3,8	2,9	2,0	8,3	6,4
	1998	7,4	33,8	5,6	...	5,6	11,7	4,3	3,0	2,2	8,6	6,5
	2000	7,2	32,7	5,8	7,4	5,5	13,3	4,1	3,0	2,4	7,1	5,2
	2003	7,3	36,2	5,7	7,7	5,3	12,3	4,0	2,9	2,4	7,8	5,8
Colombia f/	1991	2,9	7,4	2,7	3,9	2,5	5,3	2,4	...	1,3	2,4	2,2
	1994	3,8	13,1	3,4	5,5	3,1	7,9	2,6	...	1,7	3,4	3,0
	1997	3,8	10,9	3,6	5,7	3,2	6,9	2,7	...	1,6	3,2	2,9
	1999	3,3	9,5	3,7	6,3	3,2	6,8	2,8	...	2,1	2,2	1,9
	2002	3,0	7,2	3,6	6,4	3,1	6,3	3,0	...	1,7	1,8	1,5
Costa Rica	1990	5,2	6,8	5,4	7,3	4,4	9,0	4,3	3,2	1,5	3,7	3,4
	1994	5,7	10,8	5,5	7,8	4,6	8,4	4,4	3,6	1,6	4,4	4,0
	1997	5,6	8,4	5,8	8,2	4,8	9,0	4,8	3,2	1,8	3,8	3,6
	1999	6,0	10,4	5,9	8,8	5,1	9,7	4,8	3,6	1,7	4,4	4,0
	2002	6,5	10,2	6,8	9,5	6,0	9,7	5,9	3,7	2,0	3,7	3,1
Ecuador	1990	2,8	4,8	3,2	4,1	2,8	6,0	2,9	2,3	0,8	1,9	1,9
	1994	2,9	6,6	2,8	3,5	2,5	5,2	2,6	1,9	0,9	2,2	2,0
	1997	3,0	6,0	3,0	3,9	2,7	5,7	2,9	1,8	0,9	2,2	2,1
	1999	2,9	7,6	2,8	3,8	2,6	4,5	2,9	1,7	0,9	1,8	1,8
	2002	3,5	8,7	3,4	4,7	3,1	5,0	3,4	2,1	1,5	2,6	2,4
El Salvador	1995	3,4	8,6	3,5	5,3	3,0	6,9	2,8	2,0	1,0	2,1	2,0
	1997	3,8	9,9	4,5	5,9	3,8	7,8	3,2	2,3	1,9	2,2	2,1
	1999	4,2	9,9	4,6	6,9	4,0	8,2	3,7	2,4	2,1	2,5	2,3
	2001	3,9	9,2	4,2	6,6	3,7	7,4	3,6	2,3	2,0	2,4	2,2
Guatemala	1989	3,5	17,7	3,0	4,8	2,5	5,2	2,6	1,7	1,4	3,2	2,9
	1998	3,4	15,7	3,1	4,5	2,9	5,2	3,4	2,0	0,6	2,2	2,1
	2002	2,9	7,4	3,3	5,6	3,0	5,4	3,2	1,6	1,6	1,4	1,2
Honduras	1990	2,8	16,4	3,1	4,9	2,5	6,5	2,7	1,6	0,8	1,6	1,5
	1994	2,3	7,3	2,2	3,4	2,0	4,5	1,9	1,3	0,5	1,7	1,6
	1997	2,0	6,5	2,1	2,9	1,9	4,2	1,8	1,1	0,5	1,3	1,2
	1999	2,0	5,1	2,1	2,9	1,9	3,0	2,1	1,1	0,5	1,2	1,2
	2002	2,3	5,1	2,7	4,3	2,4	5,3	2,3	1,4	0,8	1,3	1,2

(continúa)

Cuadro 7 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)													
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados		
				Total	Sector público	Sector privado					Total b/	No profesionales ni técnicos	
						Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos					
								En establecimientos de más de cinco personas	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico			
México g/	1989	4,4	21,7	3,5	...	3,5	6,9	3,1	...	1,4	4,8	4,4	
	1994	4,4	18,3	3,9	5,0	3,6	9,5	3,0	...	1,2	3,7	3,3	
	1996	3,7	15,2	3,3	4,9	2,9	6,4	2,8	1,7	1,2	2,5	2,3	
	1998	4,1	18,2	3,5	5,3	3,1	6,9	3,1	1,9	1,3	3,0	2,6	
	2000	4,3	16,5	3,9	5,2	3,6	7,7	3,4	2,1	1,3	3,4	3,0	
	2002	4,1	16,1	3,6	5,4	3,2	7,1	3,3	2,1	1,4	3,5	3,2	
Nicaragua	1993	3,5	8,5	3,3	3,4	3,2	6,1	3,1	2,3	2,1	3,6	2,9	
	1998	3,1	11,1	3,2	...	3,2	6,3	2,6	1,9	1,7	2,1	2,0	
	2001	3,2	14,3	3,1	4,5	2,7	5,4	3,0	1,8	1,4	1,9	1,8	
Panamá	1991	5,0	11,8	5,5	7,4	4,4	9,4	4,1	2,6	1,3	2,5	2,3	
	1994	5,1	17,7	5,1	7,3	4,1	9,4	3,8	2,4	1,3	3,5	3,4	
	1997	5,6	15,4	5,6	8,0	4,6	10,0	4,1	2,6	1,4	3,7	3,4	
	1999	5,8	11,4	6,3	8,7	5,5	11,1	4,8	2,7	2,2	3,3	3,0	
	2002	6,4	13,0	7,1	9,1	6,3	9,7	6,5	5,9	2,5	3,0	2,8	
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	3,4	10,3	2,5	3,4	2,2	4,7	2,6	1,8	0,8	3,8	3,6	
	1994	3,6	10,0	3,0	4,4	2,7	6,7	2,7	2,0	1,3	2,9	2,9	
	1996	3,6	10,6	3,3	5,1	2,9	6,5	3,1	2,3	1,2	2,8	2,5	
	1999	3,6	8,9	3,5	4,6	3,2	6,5	3,4	2,3	1,7	2,7	2,3	
	2000	3,4	8,1	3,4	5,2	3,0	4,5	3,6	2,2	1,6	2,2	1,7	
	(Zonas urbanas)	1994	3,3	9,6	2,8	4,3	2,5	6,6	2,6	1,9	1,2	2,5	2,5
	1996	3,3	9,7	3,1	5,1	2,6	6,3	3,0	2,1	1,1	2,5	2,3	
Perú	1997	3,3	7,9	3,8	4,1	3,7	6,1	3,9	2,3	2,3	1,9	1,7	
	1999	3,2	7,0	3,9	4,6	3,8	6,9	4,2	2,0	2,9	1,8	1,6	
	República Dominicana	1997	4,4	13,5	3,9	4,7	3,7	7,5	3,5	2,4	1,4	4,3	4,0
		2000	4,6	18,5	3,9	4,8	3,6	7,7	3,3	2,3	1,2	4,7	4,3
2002		4,7	19,8	3,9	4,7	3,7	7,0	3,5	2,3	1,3	4,4	4,1	
Uruguay	1990	4,3	12,0	3,7	4,0	3,6	7,6	3,7	2,5	1,5	5,1	5,1	
	1994	4,8	12,3	4,6	5,3	4,2	9,6	4,5	2,9	1,7	3,9	3,5	
	1997	4,9	11,5	4,8	5,9	4,5	9,8	4,6	3,0	1,8	4,0	3,5	
	1999	5,4	14,1	5,3	6,7	4,9	11,2	4,9	3,2	2,1	4,1	3,6	
	2002	4,3	10,6	4,4	5,8	3,9	7,9	4,3	2,6	2,0	3,1	2,4	
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	4,5	11,9	3,7	4,0	3,6	6,6	3,6	2,5	2,1	4,5	4,3	
	1994	3,8	8,9	3,2	2,7	3,4	6,7	3,4	2,0	1,9	4,1	3,8	
	1997	3,6	11,2	2,6	2,9	2,5	5,8	2,4	1,7	1,4	4,2	3,9	
	1999	3,5	9,2	3,2	3,7	2,9	6,4	2,9	2,0	1,4	3,2	3,0	
	2002	3,3	9,9	2,9	4,5	2,4	4,8	2,5	1,7	1,2	2,9	2,8	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En los casos de Argentina (excepto 1999), Brasil (1990), Chile (1990, 1994 y 1998), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluyen los asalariados del sector público. Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se incluyen -cuando se trata de los trabajadores no profesionales ni técnicos- los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos, no se proveen cifras sobre el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.
- b/ Incluye a los trabajadores por cuenta propia profesionales y técnicos.
- c/ La Encuesta nacional de hogares (PNAD) de Brasil no recoge información sobre el tamaño de los establecimientos, salvo en 1993, 1996 y 1999. Por lo tanto en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas se incluyeron los asalariados con contrato de trabajo ("carteira") y en la de los que ocupan hasta cinco personas, a quienes no tienen contrato de trabajo.
- d/ Incluye a los empleados del sector privado no profesionales ni técnicos que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993, la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH).
- h/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 7.1

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)												
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado						
						Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
				En establecimientos de más de cinco personas	En establecimientos de hasta cinco personas			Empleo doméstico	Total b/	No profesionales ni técnicos		
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	7,3	22,2	5,1	...	5,1	11,4	4,7	3,7	4,4	9,4	8,8
	1994	9,7	28,0	7,1	...	7,1	12,3	6,0	4,9	4,5	12,3	10,6
	1997	8,2	25,7	6,0	...	6,0	11,5	5,1	3,8	2,7	10,2	7,6
	1999	7,4	24,0	5,7	7,1	5,3	9,9	5,1	3,8	2,6	8,5	7,1
	2002	5,7	23,8	4,0	3,9	4,0	8,2	3,3	2,2	3,6	6,3	4,7
Bolivia	1989	5,1	17,1	4,3	4,8	4,0	9,6	3,6	2,7	4,0	5,4	4,9
	1994	4,4	10,8	4,4	4,7	3,5	8,3	2,8	2,2	1,7	3,6	3,2
	1997	4,5	10,5	4,4	5,4	4,2	9,8	3,3	2,4	1,8	3,1	2,9
	1999	4,1	7,9	4,5	5,2	4,4	8,0	4,1	2,6	1,9	3,0	2,8
	2002	4,0	7,7	4,5	5,9	4,2	8,8	4,4	2,5	2,6	2,7	2,5
Brasil <i>c/</i>	1990	5,7	17,2	4,8	...	4,8	11,3	4,2	2,8	1,3	4,9	4,4
	1993	5,3	16,6	4,9	7,9	4,2	14,5	3,7 <i>d/</i>	2,0	1,5	4,0	3,6
	1996	6,0	20,1	5,2	8,4	4,6	13,8	4,2 <i>d/</i>	2,6	2,0	5,2	4,7
	1999	5,2	15,5	4,7	7,9	4,1	8,9	3,4 <i>d/</i>	2,2	2,1	4,1	3,6
	2001	5,1	15,8	4,7	8,0	4,1	8,8	3,4 <i>d/</i>	2,2	2,0	4,0	3,5
Chile <i>e/</i>	1990	5,4	27,4	4,4	...	4,4	10,4	3,6	2,5	1,9	5,8	5,3
	1994	7,0	37,6	5,4	...	5,4	12,0	4,1	3,1	2,2	6,7	5,4
	1996	7,7	36,3	5,7	7,2	5,5	13,3	4,0	3,0	2,4	9,2	7,2
	1998	8,4	37,0	6,3	...	6,3	14,1	4,5	3,2	3,3	9,5	7,1
	2000	8,5	36,9	6,6	8,3	6,2	15,8	4,3	3,1	3,0	7,9	5,8
	2003	8,5	40,4	6,3	8,6	6,0	14,6	4,2	3,0	3,4	8,9	6,5
Colombia <i>f/</i>	1991	3,3	7,8	3,1	4,2	2,8	6,5	2,5	...	1,5	3,0	2,7
	1994	4,4	14,5	3,6	6,1	3,3	9,8	2,6	...	1,7	4,0	3,5
	1997	4,4	11,8	4,0	6,4	3,5	8,4	2,9	...	1,6	3,9	3,4
	1999	3,8	10,2	4,0	7,1	3,4	7,9	2,9	...	2,7	2,6	2,3
	2002	3,4	7,6	3,7	6,7	3,3	6,9	3,0	...	2,2	2,2	1,9
Costa Rica	1990	5,8	7,0	6,0	7,9	5,1	9,9	4,6	3,3	1,5	4,8	4,3
	1994	6,4	11,9	6,0	8,2	5,2	9,6	4,7	3,9	2,1	5,3	4,9
	1997	6,1	8,9	6,1	8,7	5,3	9,7	5,0	3,5	2,3	5,0	4,6
	1999	6,8	11,1	6,5	9,5	5,7	10,7	5,1	3,8	2,3	5,6	5,2
	2002	7,2	10,2	7,5	10,3	6,8	10,6	6,3	3,9	2,3	4,6	4,1
Ecuador	1990	3,3	4,9	3,6	4,6	3,2	8,0	3,0	2,4	1,1	2,4	2,3
	1994	3,4	7,2	3,1	3,8	2,9	6,7	2,6	2,0	1,1	2,9	2,6
	1997	3,4	6,3	3,3	4,1	3,1	6,9	2,9	1,8	1,3	2,7	2,6
	1999	3,4	8,2	3,0	4,2	2,7	4,9	2,9	1,7	1,4	2,3	2,3
	2002	4,0	9,6	3,7	5,3	3,3	6,1	3,5	2,1	1,9	3,2	3,0
El Salvador	1995	4,1	9,4	3,9	5,5	3,5	7,6	3,0	2,2	1,7	2,1	2,8
	1997	4,4	10,5	4,3	5,9	3,9	8,5	3,3	2,4	2,8	2,9	2,7
	1999	4,8	10,3	4,8	6,9	4,4	9,1	3,9	2,5	2,9	3,2	2,9
	2001	4,4	10,4	4,4	6,6	4,0	7,7	3,9	2,4	2,3	3,0	2,6
Guatemala	1989	4,0	18,6	3,3	4,8	2,8	6,2	2,7	1,8	2,6	3,9	3,6
	1998	4,3	17,2	3,6	4,9	3,4	6,3	3,7	2,2	1,2	3,1	2,9
	2002	3,6	8,3	3,7	6,1	3,4	6,6	3,5	1,7	1,7	1,8	1,5
Honduras	1990	3,4	20,3	3,3	5,1	2,9	7,3	2,8	1,7	1,6	2,4	2,2
	1994	2,7	7,8	2,5	3,8	2,2	5,2	2,0	1,3	1,6	2,1	2,0
	1997	2,5	7,1	2,2	3,3	2,0	5,3	1,9	1,1	0,8	1,8	1,7
	1999	2,4	6,7	2,3	3,1	2,1	3,8	2,3	1,2	0,8	1,7	1,6
	2002	2,6	5,3	2,9	4,9	2,6	6,1	2,5	1,4	1,2	1,6	1,5
México <i>g/</i>	1989	5,1	23,4	3,8	...	3,8	7,8	3,3	...	2,1	6,1	5,6
	1994	5,2	19,4	4,4	5,6	4,1	11,5	3,2	...	2,0	5,0	4,4
	1996	4,3	16,0	3,6	5,3	3,3	7,7	3,1	1,8	1,9	3,4	3,1
	1998	4,9	19,2	3,9	5,9	3,5	8,2	3,4	2,1	1,9	4,3	3,6
	2000	5,2	17,1	4,3	5,6	4,1	9,3	3,7	2,3	2,1	5,2	4,7
	2002	4,9	16,5	4,0	5,8	3,6	8,3	3,6	2,3	2,0	4,9	4,5

(continúa)

Cuadro 7.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)												
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado					Total b/	No profesionales ni técnicos
						Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
								En establecimientos de más de cinco personas	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico		
Nicaragua	1993	3,8	9,4	3,6	3,9	3,5	7,4	3,1	2,4	1,3	4,1	3,2
	1998	3,7	12,0	3,5	...	3,5	7,9	2,8	2,0	3,3	2,5	2,4
	2001	3,7	14,1	3,3	5,8	2,8	6,9	3,0	1,8	1,0	2,4	2,2
Panamá	1991	5,3	11,9	6,1	7,9	5,0	10,2	4,2	2,7	1,4	2,7	2,5
	1994	5,6	19,2	5,7	8,2	4,6	10,6	3,8	2,3	2,0	3,9	3,7
	1997	6,2	16,6	6,4	9,0	5,3	11,0	4,1	2,6	2,0	4,3	3,8
	1999	6,2	12,1	6,8	9,7	5,9	11,7	4,8	2,7	2,3	3,8	3,5
	2002	7,1	13,3	7,9	10,3	7,1	11,1	6,7	6,6	2,4	3,5	3,3
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	4,2	10,4	2,9	4,0	2,6	5,8	2,6	1,9	...	4,8	4,6
	1994	4,4	10,6	3,5	5,1	3,2	8,5	2,7	2,1	2,1	3,5	3,5
	1996	4,3	11,7	3,6	5,5	3,3	7,3	3,2	2,4	2,0	3,5	3,2
	1999	4,1	8,9	3,8	4,7	3,6	7,0	3,4	2,3	1,9	3,1	2,6
	2000	3,9	7,6	3,7	5,3	3,4	5,5	3,6	2,2	1,9	3,0	2,1
(Zonas urbanas)	1994	4,0	10,0	3,2	5,0	2,9	8,2	2,7	2,0	1,9	3,0	3,0
	1996	3,9	10,3	3,4	5,5	3,0	6,9	3,1	2,2	1,7	3,1	2,9
	1999	3,8	8,7	3,6	5,2	3,2	7,5	3,2	2,0	1,7	2,6	2,3
	2000	3,7	8,8	3,4	5,5	3,0	5,4	3,3	1,9	1,8	2,4	1,9
Perú	1997	4,0	8,5	4,2	4,6	4,1	7,0	4,3	2,5	2,7	2,5	2,3
	1999	3,9	7,9	4,3	5,4	4,1	7,0	4,5	2,1	1,8	2,3	2,1
República Dominicana	1997	4,8	14,5	4,0	4,6	3,9	8,0	3,6	2,6	2,2	4,8	4,5
	2000	5,2	20,1	4,4	5,0	4,2	9,2	3,7	2,4	2,0	5,2	4,9
	2002	5,4	21,7	4,3	4,9	4,1	7,9	3,6	2,3	2,5	4,9	4,6
Uruguay	1990	5,5	13,0	4,3	4,4	4,2	10,1	4,0	2,7	1,5	7,3	7,3
	1994	5,8	13,1	5,5	6,0	5,3	12,5	5,0	3,1	3,0	4,9	4,4
	1997	5,8	12,3	5,6	6,6	5,3	12,9	5,0	3,2	2,0	4,8	4,2
	1999	6,3	14,9	6,2	7,5	5,8	14,6	5,3	3,4	2,7	4,8	4,2
	2002	4,9	11,0	5,0	6,3	4,6	9,9	4,6	2,8	3,3	3,4	2,7
Venezuela (República Bolivariana de)h/	1990	5,1	12,0	4,0	4,4	3,9	7,6	3,7	2,5	3,4	5,1	4,9
	1994	4,3	9,1	3,4	3,1	3,5	7,6	3,4	2,0	2,9	4,6	4,3
	1997	4,0	11,4	2,8	3,2	2,7	6,7	2,5	1,7	2,2	4,6	4,3
	1999	3,8	9,4	3,3	4,1	3,2	7,4	3,0	2,0	2,0	3,7	3,5
	2002	3,6	10,2	2,9	4,8	2,5	5,6	2,6	1,7	1,6	3,3	3,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En los casos de Argentina (excepto 1999), Brasil (1990), Chile (1990, 1994 y 1998), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluyen los asalariados del sector público.
Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se incluyen -cuando se trata de los trabajadores no profesionales ni técnicos- los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos, no se proveen cifras sobre el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.
- b/ Incluye a los trabajadores por cuenta propia profesionales y técnicos.
- c/ La Encuesta nacional de hogares (PNAD) de Brasil no recoge información sobre el tamaño de los establecimientos, salvo en 1993, 1996 y 1999. Por lo tanto en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas se incluyeron los asalariados con contrato de trabajo ("carteira") y en la de los que ocupan hasta cinco personas, a quienes no tienen contrato de trabajo.
- d/ Incluye a los empleados del sector privado no profesionales ni técnicos que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993, la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH).
- h/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 7.2

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)												
País	Año	Total	Empleadoras	Asalariadas							Trabajadoras por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado					Total b/	No profesionales ni técnicas
						Total a/	Profesionales y técnicas	No profesionales ni técnicas				
								En establecimientos de más de cinco personas	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico		
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	4,7	13,6	3,9	...	3,9	6,6	4,0	3,4	2,0	5,8	4,5
	1994	6,7	29,4	5,4	...	5,4	7,8	6,2	4,2	3,2	8,3	6,4
	1997	5,6	19,6	4,8	...	4,8	7,3	5,8	3,4	2,5	6,2	4,7
	1999	4,8	15,0	4,4	5,5	4,0	6,8	4,3	3,0	2,1	5,3	4,3
	2002	3,3	12,4	2,8	3,0	2,7	4,8	2,6	1,8	1,7	4,2	2,7
Bolivia	1989	2,9	10,7	3,6	2,9	3,4	4,1	3,1	2,2	1,6	4,1	2,9
	1994	2,2	8,4	2,3	2,7	2,1	5,3	2,2	1,5	0,9	2,5	1,6
	1997	2,5	8,1	3,0	3,5	2,8	6,8	2,6	1,8	1,0	1,8	1,7
	1999	2,4	9,0	3,2	4,1	2,9	5,8	2,9	1,8	1,8	1,7	1,7
	2002	2,3	5,9	3,1	4,3	2,7	5,7	2,9	2,0	2,0	1,5	1,4
Brasil c/	1990	3,1	11,1	3,1	...	3,1	5,6	2,9	2,0	0,9	2,2	1,9
	1993	2,8	11,1	3,0	4,9	2,3	5,7	2,8 d/	1,8	1,1	1,7	1,4
	1996	3,6	15,4	3,6	5,7	3,1	7,0	3,2 d/	2,3	1,5	2,5	2,0
	1999	3,2	12,4	3,3	5,4	2,6	5,0	2,4 d/	1,8	1,4	2,0	1,6
	2001	3,2	11,7	3,4	5,6	2,7	5,0	2,4 d/	1,8	1,4	2,0	1,6
Chile e/	1990	3,4	14,3	3,0	...	3,0	4,5	3,2	2,2	1,4	4,4	4,2
	1994	4,7	26,4	3,8	...	3,8	6,5	3,5	2,6	2,0	5,8	3,8
	1996	5,1	26,4	4,1	5,5	3,9	7,8	3,6	2,8	2,0	6,4	4,4
	1998	5,6	24,9	4,7	...	4,7	8,8	3,8	2,7	2,2	6,8	5,0
	2000	5,2	18,1	4,7	6,3	4,3	9,4	3,6	2,8	2,4	5,6	3,9
	2003	5,5	25,3	4,7	6,7	4,3	8,9	3,6	2,8	2,4	5,6	4,0
Colombia f/	1991	2,2	5,9	2,3	3,5	2,1	3,9	2,1	...	1,2	1,6	1,4
	1994	3,0	8,4	3,0	4,8	2,7	5,9	2,5	...	1,7	2,3	2,0
	1997	2,9	8,4	3,0	5,0	2,6	5,2	2,4	...	1,6	2,3	2,0
	1999	2,8	7,7	3,4	5,5	2,9	5,7	2,7	...	2,1	1,5	1,3
	2002	2,5	6,1	3,3	6,0	2,8	5,7	2,8	...	1,7	1,1	0,9
Costa Rica	1990	4,0	5,4	4,4	6,5	3,3	6,5	3,7	2,9	1,5	1,9	1,7
	1994	4,4	6,9	4,6	7,1	3,5	6,1	3,7	2,9	1,6	2,7	2,5
	1997	4,7	6,2	5,3	7,7	3,9	7,6	4,2	2,8	1,8	2,2	2,1
	1999	4,7	7,9	5,1	8,0	3,9	7,7	4,1	3,3	1,7	2,5	2,1
	2002	5,3	10,0	5,8	8,7	4,5	7,6	4,9	3,4	2,0	2,6	2,0
Ecuador	1990	2,0	4,5	2,5	3,4	2,0	3,5	2,6	1,9	0,7	1,2	1,2
	1994	2,1	4,8	2,3	3,1	2,1	3,2	2,7	1,7	0,9	1,5	1,4
	1997	2,4	5,2	2,7	3,6	2,4	4,2	3,1	1,7	0,9	1,5	1,4
	1999	2,1	5,3	2,5	3,2	2,3	4,1	2,9	1,4	0,9	1,2	1,2
	2002	2,5	5,9	2,9	3,9	2,6	3,8	3,1	2,1	1,5	1,7	1,6
El Salvador	1995	2,5	5,8	3,0	4,9	2,5	5,7	2,5	1,5	0,9	1,6	1,6
	1997	3,1	8,1	4,0	6,0	3,6	6,6	3,1	2,0	1,8	1,8	1,7
	1999	3,5	8,8	4,2	6,9	3,5	6,8	3,5	2,1	2,0	2,0	2,0
	2001	3,2	6,8	4,0	6,6	3,3	7,0	3,2	2,1	1,9	2,0	2,0
Guatemala	1989	2,6	14,4	2,7	5,0	2,0	3,5	2,4	1,5	1,4	2,1	1,9
	1998	2,2	11,2	2,3	3,9	2,0	3,6	2,7	1,4	0,6	1,5	1,5
	2002	2,0	3,8	2,7	4,8	2,4	4,0	2,6	1,3	1,6	1,0	1,0
Honduras	1990	2,0	4,3	2,2	4,7	1,9	4,8	2,5	1,2	0,8	1,0	0,9
	1994	1,6	5,1	1,8	2,9	1,5	3,3	1,7	1,1	0,5	1,2	1,1
	1997	1,4	4,6	1,7	2,5	1,5	2,9	1,6	0,9	0,5	1,3	0,8
	1999	1,5	3,8	1,8	2,7	1,5	2,4	1,8	1,0	0,5	0,8	0,8
	2002	1,9	4,5	2,5	3,9	2,1	4,4	2,1	1,2	0,8	0,9	0,9

(continúa)

Cuadro 7.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)												
País	Año	Total	Empleadoras	Asalariadas							Trabajadoras por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado					Total b/	No profesionales ni técnicas
						Total a/	Profesionales y técnicas	No profesionales ni técnicas				
								En establecimientos de más de cinco personas	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico		
México g/	1989	2,8	9,4	2,9	...	2,9	4,8	2,8	...	1,3	2,3	2,3
	1994	2,9	11,6	3,0	4,2	2,6	5,3	2,5	...	1,1	2,0	1,8
	1996	2,5	11,8	2,7	4,2	2,2	4,1	2,3	1,4	1,1	1,4	1,3
	1998	2,7	13,2	2,8	4,4	2,3	4,5	2,5	1,5	1,1	1,7	1,6
	2000	2,8	13,4	3,0	4,8	2,5	4,0	2,7	1,6	1,1	1,6	1,5
	2002	2,9	14,1	3,0	4,7	2,5	5,2	2,7	1,7	1,3	1,8	1,7
Nicaragua	1993	2,9	6,6	2,8	2,9	2,7	4,4	2,8	2,3	2,1	3,0	2,6
	1998	2,3	6,0	2,7	...	2,7	4,7	2,4	1,6	1,5	1,7	1,6
	2001	2,5	14,8	2,7	3,3	2,4	3,4	3,1	1,9	1,4	1,7	1,6
Panamá	1991	4,6	11,2	4,8	6,9	3,3	7,9	4,0	2,6	1,3	2,0	1,6
	1994	4,1	12,0	4,2	6,1	3,2	7,1	3,7	2,5	1,2	2,4	2,3
	1997	4,6	10,1	4,8	6,8	3,9	8,3	4,0	2,7	1,4	2,5	2,3
	1999	5,1	8,7	5,7	7,6	4,9	9,9	4,8	2,9	2,2	2,1	1,9
	2002	5,3	11,7	6,0	7,8	5,2	8,1	6,1	4,2	2,5	1,6	1,5
	Paraguay (Región Metropolitana de Asunción)	1990	2,3	9,0	1,8	2,4	1,6	3,4	2,4	1,5	0,8	3,0
1994		2,6	8,6	2,3	3,4	2,0	4,3	2,5	1,8	1,2	2,3	2,3
1996		2,7	7,2	2,8	4,7	2,3	5,5	2,8	2,0	1,2	2,2	1,9
1999		3,0	8,9	3,0	4,4	2,7	5,5	3,1	2,4	1,7	2,2	1,9
2000		2,8	9,1	2,9	5,1	2,4	3,4	3,4	2,1	1,5	4,7	1,3
(Zonas urbanas)	1994	2,4	8,5	2,2	3,4	1,9	4,2	2,4	1,7	1,2	2,0	2,0
	1996	2,4	7,5	2,6	4,6	2,0	5,3	2,7	2,0	1,1	1,9	1,7
	1999	2,7	9,3	2,8	4,3	2,5	5,6	3,0	2,2	1,6	1,8	1,6
	2000	2,4	8,2	2,8	4,8	2,2	3,4	3,3	1,9	1,4	1,3	1,2
Perú	1997	2,3	5,1	3,0	3,5	2,9	5,0	2,8	1,6	2,3	1,4	1,3
	1999	2,4	3,4	3,4	3,5	3,3	6,7	3,3	1,7	2,9	1,3	1,2
República Dominicana	1997	3,6	7,7	3,7	4,7	3,4	7,0	3,5	2,0	1,4	3,3	2,9
	2000	3,6	14,4	3,3	4,6	2,9	6,1	2,7	2,1	1,1	3,5	2,9
	2002	3,7	13,9	3,5	4,4	3,2	6,0	3,2	2,2	1,1	3,2	2,9
Uruguay	1990	2,7	6,9	2,7	3,4	2,5	4,8	2,8	1,9	1,5	2,1	1,8
	1994	3,4	9,9	3,4	4,4	3,1	6,4	3,4	2,5	1,7	2,7	2,2
	1997	3,7	8,3	3,8	5,0	3,4	6,7	3,8	2,6	1,8	2,9	2,3
	1999	4,1	11,5	4,2	5,6	3,8	8,0	4,0	2,8	2,1	3,1	2,4
	2002	3,5	9,2	3,6	5,1	3,1	6,2	3,7	2,2	1,9	2,5	1,8
Venezuela (República Bolivariana de) h/	1990	3,3	10,8	3,2	3,6	2,9	4,9	3,3	2,4	1,7	2,9	2,7
	1994	3,0	7,5	2,8	2,3	3,2	5,6	3,3	2,0	1,5	3,1	2,6
	1997	2,8	9,4	2,4	2,6	2,2	4,5	2,2	1,6	1,2	3,4	3,0
	1999	2,9	7,9	3,0	3,3	2,8	5,4	2,6	1,9	1,3	2,5	2,3
2002	2,8	8,6	3,0	4,3	2,2	4,0	2,3	1,6	1,2	2,3	2,2	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En los casos de Argentina (excepto 1999), Brasil (1990), Chile (1990, 1994 y 1998), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluyen las asalariadas del sector público. Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se incluyen -cuando se trata de las trabajadoras no profesionales ni técnicas- los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos, no se proveen cifras para el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.
- b/ Incluye a las trabajadoras por cuenta propia profesionales y técnicas.
- c/ La Encuesta nacional de hogares (PNAD) de Brasil no recoge información sobre el tamaño de los establecimientos, salvo en 1993, 1996 y 1999. Por lo tanto, en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas se incluyeron las asalariadas con contrato de trabajo ("carteira") y en la de los que ocupan hasta cinco personas, a quienes no tienen contrato de trabajo.
- d/ Incluye a las empleadas del sector privado no profesionales ni técnicas que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993, la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH).
- h/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 8

AMERICA LATINA (15 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS RURALES, 1990-2003								
(En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)								
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados			Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total a/	Sector público	Sector privado	Total b/	Agricultura
Bolivia	1997	1,3	10,5	3,5	3,7	3,4	0,8	0,6
	1999	0,8	3,9	3,4	4,2	3,1	0,6	0,4
	2002	1,2	4,1	3,4	4,2	3,2	0,8	0,6
Brasil	1990	2,0	9,3	2,2	...	2,2	1,5	1,3
	1993	1,8	11,6	2,2	2,9	2,1	1,3	1,2
	1996	2,0	13,5	2,8	4,0	2,6	1,3	1,1
	1999	1,8	12,4	2,6	3,8	2,4	1,0	0,8
	2001	1,7	10,6	2,3	2,8	2,2	1,0	0,9
Chile c/	1990	4,9	39,3	3,2	...	3,2	5,2	5,2
	1994	4,6	28,9	3,8	...	3,8	4,2	3,7
	1996	4,2	24,0	3,5	5,3	3,4	4,0	3,5
	1998	5,3	32,8	3,9	...	3,9	6,3	5,3
	2000	5,3	36,8	4,2	7,0	3,9	5,6	4,8
	2003	5,7	32,7	4,4	7,8	4,2	6,3	5,3
Colombia	1991	3,1	10,7	2,9	...	2,9	2,3	1,7
	1994	2,5	5,8	2,8	...	2,8	1,9	2,3
	1997	2,7	7,0	3,1	5,0	3,0	1,8	1,8
	1999	2,9	5,6	3,9	6,4	3,7	1,8	1,9
	2002	2,9	7,9	3,8	7,6	3,4	1,8	1,9
Costa Rica	1990	5,1	9,9	5,2	8,4	4,6	4,0	3,9
	1994	5,8	11,7	5,4	8,4	4,9	5,4	6,3
	1997	5,6	9,3	5,5	9,4	4,9	4,7	4,9
	1999	6,3	11,3	6,0	10,2	5,4	5,3	5,5
	2002	6,2	9,0	7,2	11,9	6,5	3,2	2,2
El Salvador	1995	2,4	5,5	2,7	5,4	2,6	1,7	1,4
	1997	2,4	4,3	3,1	5,7	2,9	1,5	1,1
	1999	3,4	10,2	3,3	6,8	3,0	2,8	3,1
	2001	2,4	3,8	3,3	6,8	3,0	1,4	0,5
Guatemala	1989	2,5	21,1	2,3	4,9	2,1	2,4	2,1
	1998	2,6	25,3	2,3	3,9	2,2	2,1	2,1
	2002	1,7	5,7	2,3	4,4	2,2	1,0	0,8
Honduras	1990	1,7	14,7	2,2	4,9	1,8	1,3	1,3
	1994	2,0	8,6	2,1	4,1	1,8	1,8	1,8
	1997	1,7	9,0	1,6	3,4	1,4	1,4	1,5
	1999	1,8	6,1	2,0	4,4	1,7	1,4	1,4
	2002	1,4	6,3	1,9	4,7	1,7	1,1	1,0
México d/	1989	3,0	9,3	2,7	...	2,7	3,0	2,6
	1994	2,7	9,7	2,6	5,1	2,3	2,2	1,8
	1996	2,3	7,1	2,4	4,9	2,0	1,6	1,3
	1998	2,6	8,7	2,9	5,2	2,5	1,8	1,6
	2000	3,2	14,9	2,9	5,8	2,5	2,3	1,5
	2002	3,0	10,1	3,2	5,8	2,7	2,2	1,5
Nicaragua	1993	2,2	4,8	2,7	3,0	2,6	1,9	1,4
	1998	2,1	8,8	2,8	...	2,8	1,1	0,8
	2001	1,9	4,6	2,6	3,3	2,5	1,1	0,8

(continúa)

Cuadro 8 (conclusión)

AMERICA LATINA (15 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS RURALES, 1990-2003								
(En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)								
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados			Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total a/	Sector público	Sector privado	Total b/	Agricultura
Panamá	1991	3,4	10,8	5,2	7,7	4,0	1,9	1,9
	1994	3,5	13,8	4,1	6,7	3,2	2,2	1,6
	1997	4,0	16,4	4,5	8,1	3,3	3,1	2,3
	1999	4,2	15,4	5,1	9,7	3,8	3,8	2,3
	2002	4,5	12,8	8,1	8,8	7,9	1,8	1,5
Paraguay	1999	2,2	17,2	2,9	5,3	2,5	1,3	1,1
	2000	1,8	9,4	2,8	5,3	2,6	1,0	0,8
Perú	1997	1,6	4,3	2,8	4,2	2,5	1,0	0,9
	1999	1,4	3,3	2,7	4,7	2,4	0,9	0,8
República Dominicana	1997	4,3	6,6	4,3	6,2	3,8	4,2	3,4
	2000	3,7	13,0	3,0	4,0	2,7	3,8	3,3
	2002	3,5	13,3	2,9	3,5	2,7	3,6	3,3
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	3,8	9,5	3,3	4,3	3,1	3,5	2,9
	1994	3,4	7,2	2,9	4,3	2,6	3,4	3,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Incluye a los empleados domésticos. En los casos de Brasil (1990), Chile (1990, 1994 y 1998), Colombia (1991 y 1994), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluyen los asalariados del sector público.

b/ Incluye asalariados en todas las ramas de actividad.

c/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

d/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH).

Cuadro 9

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LAS MUJERES, COMPARADO CON EL DE LOS HOMBRES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, ZONAS URBANAS, 1990-2003													
(En porcentajes)													
País	Año	Índice de disparidad de los ingresos laborales por grupos de edad a/					Índice de disparidad salarial por grupos de edad b/						
		Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más	Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	65	87	77	61	59	51	76	94	82	72	72	54
	1994	71	87	88	64	72	50	76	94	80	69	73	61
	1997	70	95	83	66	67	49	79	98	92	77	63	66
	1999	65	94	76	64	58	54	79	95	84	69	78	73
	2002	59	89	73	60	54	43	71	82	79	71	61	54
Bolivia	1989	59	71	65	54	54	62	60	74	68	60	54	44
	1994	54	61	61	58	44	40	61	60	71	68	56	40
	1997	60	60	67	72	47	40	69	65	74	85	64	39
	1999	63	72	70	55	67	54	72	81	85	63	72	63
	2002	61	80	68	56	53	44	77	83	90	69	66	43
Brasil	1990	56	73	64	54	47	35	65	77	71	63	57	52
	1993	56	74	66	53	43	48	61	77	68	56	46	54
	1996	62	77	67	62	51	54	68	80	72	65	56	60
	1999	64	80	71	62	57	54	70	83	75	66	58	59
	2001	66	84	74	64	59	52	86	100	91	81	79	79
Chile	1990	61	81	67	60	56	52	66	86	72	63	54	61
	1994	67	81	84	71	56	54	70	84	78	67	64	56
	1996	67	86	82	60	64	57	73	93	82	67	62	67
	1998	66	90	77	69	59	54	74	93	83	69	67	69
	2000	61	87	79	59	50	56	72	91	82	68	64	67
	2003	64	90	80	65	55	56	84	100	92	82	75	93
Colombia c/	1991	68	88	77	64	56	55	77	87	79	73	75	74
	1994	68	97	80	69	52	48	83	104	90	82	67	57
	1997	79	90	95	83	60	58	77	92	85	73	64	60
	1999	75	101	86	69	68	55	83	101	94	76	75	66
	2002	77	99	83	73	73	58	99	108	101	90	97	104
Costa Rica	1990	72	86	75	66	60	61	74	87	78	66	62	81
	1994	69	82	76	64	60	55	75	84	79	70	65	77
	1997	78	99	79	73	74	51	87	102	87	79	87	55
	1999	70	87	75	67	64	59	78	89	79	75	72	70
	2002	75	86	78	69	68	70	85	98	85	79	86	95
Ecuador	1990	66	80	70	61	60	64	67	78	73	63	63	60
	1994	67	77	73	65	57	58	76	81	82	76	65	72
	1997	75	90	84	70	64	67	83	94	90	77	75	62
	1999	67	99	82	61	51	55	83	99	93	78	69	52
	2002	67	83	77	66	55	50	87	95	96	89	69	70
El Salvador	1995	63	76	70	58	52	47	79	80	81	72	85	61
	1997	72	97	74	69	64	53	88	100	85	85	91	73
	1999	75	84	79	71	67	60	88	87	93	84	86	70
	2001	73	87	79	73	62	51	100	95	100	92	104	100
Guatemala	1998	55	87	74	51	34	39	70	85	73	67	71	48
	2002	58	78	62	54	42	45	80	88	81	79	65	73
Honduras	1990	59	77	68	51	56	43	78	81	80	70	89	103
	1994	63	80	72	69	47	43	73	82	80	82	67	32
	1997	60	81	72	58	47	37	77	86	78	74	70	72
	1999	65	78	65	68	51	52	78	80	76	82	69	86
	2002	76	86	78	70	71	63	95	102	90	86	98	103

(continúa)

Cuadro 9 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LAS MUJERES, COMPARADO CON EL DE LOS HOMBRES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, ZONAS URBANAS, 1990-2003													
(En porcentajes)													
País	Año	Índice de disparidad de los ingresos laborales por grupos de edad a/						Índice de disparidad salarial por grupos de edad b/					
		Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más	Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más
México	1989	55	71	63	52	46	48	73	86	78	69	59	82
	1994	57	83	65	57	45	46	68	91	74	78	49	49
	1996	59	83	61	62	45	52	73	90	73	66	72	84
	1998	57	84	71	51	54	40	72	89	79	68	63	72
	2000	58	79	76	53	42	58	72	83	92	65	83	82
	2002	63	83	67	63	59	43	76	87	78	74	72	64
Nicaragua	1993	77	107	87	62	64	67	77	90	88	54	64	95
	1998	65	92	73	60	47	43	77	103	77	73	56	47
	2001	69	87	85	72	34	85	82	94	91	74	66	67
Panamá	1991	80	76	90	83	73	74	80	71	89	86	74	67
	1994	71	81	77	73	58	54	75	80	86	73	63	52
	1997	74	82	81	71	73	52	76	81	87	73	73	50
	1999	83	101	90	79	79	61	94	122	96	86	85	76
	2002	76	76	86	77	70	57	85	83	92	80	79	83
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	55	63	68	52	50	60	63	66	72	58	63	77
	1994	60	73	71	58	68	33	64	77	71	58	70	47
	1996	64	76	66	71	48	56	76	76	74	82	72	93
	1999	71	96	84	67	69	44	79	102	92	70	62	69
	2000	70	86	76	70	55	71	95	102	104	101	81	44
Perú	1997	60	80	67	58	49	41	73	89	79	79	67	48
	1999	63	95	83	63	47	32	78	99	94	86	61	40
	2001	67	91	75	59	59	56	80	92	90	74	63	72
República Dominicana	1997	75	95	77	76	51	69	90	97	87	90	84	67
	2000	69	84	76	67	58	53	84	106	90	71	85	52
	2002	68	87	70	66	60	59	89	101	84	93	71	111
Uruguay	1990	45	63	60	46	37	30	64	79	73	61	59	49
	1994	61	76	65	58	56	51	63	76	66	59	60	51
	1997	65	79	72	63	59	55	67	79	71	64	60	55
	1999	67	79	77	63	65	55	68	79	75	61	66	53
	2002	72	87	79	68	69	61	71	85	78	67	64	62
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	66	80	72	64	57	48	79	86	82	74	68	66
	1994	70	96	77	64	56	57	83	106	84	75	67	69
	1997	69	84	77	62	60	55	83	92	87	77	73	65
	1999	74	92	76	71	65	57	91	99	91	85	79	91
	2002	76	86	80	74	70	58	99	96	97	97	94	90

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ Se refiere a las diferencias de ingreso del total de la población ocupada. Esta diferencia se calcula como el cociente entre el ingreso medio de las mujeres y el de los hombres, multiplicado por 100.
- b/ Se refiere a las diferencias de ingreso total entre los asalariados. Esta diferencia se calcula como el cociente entre el ingreso medio de las mujeres y el de los hombres, multiplicado por 100.
- c/ A partir de 1993, la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- d/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información entre zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 10

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LAS MUJERES, COMPARADO CON EL DE LOS HOMBRES, SEGÚN NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS, 1990-2003													
(En porcentajes)													
País	Año	Índice de disparidad de los ingresos laborales por años de instrucción a/						Índice de disparidad salarial por años de instrucción b/					
		Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina c/ (Gran Buenos Aires)	1990	65	...	66	...	63	51	76	...	73	...	68	62
	1994	71	...	62	65	65	63	76
	1997	70	73	66	67	69	55	79	60	57	69	76	64
	1999	65	64	82	58	63	51	79	63	72	58	77	66
	2002	59	62	81	55	61	46	71	76	68	55	67	60
Bolivia	1989	59	62	67	76	77	46	60	40	49	69	85	49
	1994	54	60	58	67	65	54	61	44	48	56	70	60
	1997	60	59	66	53	75	57	69	61	46	48	79	60
	1999	63	63	64	66	71	66	72	55	59	42	82	65
	2002	61	61	67	75	66	60	77	39	83	95	74	60
Brasil	1990	56	46	46	50	49	49	65	56	51	57	53	52
	1993	56	49	46	49	51	46	61	56	51	56	55	45
	1996	62	57	52	53	53	53	68	65	57	57	57	56
	1999	64	58	51	55	55	56	70	65	58	59	60	57
	2001	66	58	54	55	56	54	86	76	71	70	64	57
Chile	1990	61	56	58	69	62	49	66	64	49	66	69	55
	1994	67	93	70	69	69	54	70	83	68	66	72	58
	1996	67	83	65	70	70	53	73	74	68	74	73	60
	1998	66	71	63	65	71	54	74	72	64	71	75	63
	2000	61	75	71	68	68	48	72	82	73	73	74	60
	2003	64	69	69	65	69	53	84	78	80	73	81	65
Colombia d/	1991	68	57	60	70	72	64	77	71	70	78	78	68
	1994	68	59	68	65	71	57	83	80	81	83	86	66
	1997	79	69	65	108	88	61	77	74	74	71	78	67
	1999	75	66	71	75	73	70	83	79	86	84	81	74
	2002	77	61	68	70	72	73	99	83	88	87	84	79
Costa Rica	1990	72	53	62	65	73	67	74	58	66	67	76	66
	1994	69	61	55	58	64	70	75	61	63	68	67	75
	1997	78	61	58	61	77	75	87	66	67	70	83	77
	1999	70	49	62	57	65	68	78	59	68	66	73	71
	2002	75	62	56	60	72	72	85	74	71	74	79	69
Ecuador	1990	66	49	57	68	79	57	67	42	47	70	77	56
	1994	67	60	61	70	72	59	76	56	59	68	83	66
	1997	75	57	60	61	87	70	83	64	61	63	92	72
	1999	67	63	62	62	71	60	83	55	60	68	87	71
	2002	67	73	69	66	70	57	87	96	90	78	80	64
El Salvador	1995	63	61	56	63	69	65	79	59	56	67	83	72
	1997	72	77	67	76	80	66	88	80	73	85	92	71
	1999	75	73	75	78	80	71	88	79	79	81	88	73
	2001	73	80	69	69	82	69	100	82	78	81	92	78
Guatemala	1998	55	61	52	59	56	53	70	56	58	66	71	61
	2002	58	57	61	65	62	58	80	82	71	81	71	68
Honduras	1990	59	47	50	58	69	54	78	55	55	66	82	63
	1994	63	60	65	66	67	56	73	57	70	80	74	63
	1997	60	52	56	58	66	54	77	60	69	76	76	59
	1999	65	60	62	59	66	66	78	67	68	60	76	74
	2002	76	66	69	67	77	65	95	87	84	81	83	64

(continúa)

Cuadro 10 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LAS MUJERES, COMPARADO CON EL DE LOS HOMBRES, SEGÚN NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS, 1990-2003													
(En porcentajes)													
País	Año	Índice de disparidad de los ingresos laborales por años de instrucción a/						Índice de disparidad salarial por años de instrucción b/					
		Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
México e/	1989	55	61	50	70	62	46	73	71	68	83	78	63
	1994	57	...	58	65	70	48	68	...	59	78	76	56
	1996	59	56	67	71	63	49	73	67	69	81	76	63
	1998	57	72	56	65	63	47	72	61	65	75	78	56
	2000	58	67	59	55	72	49	72	67	61	63	84	60
	2002	63	57	59	61	64	62	76	63	70	68	79	70
Nicaragua	1993	77	95	73	71	91	58	77	86	76	72	77	65
	1998	65	68	80	67	52	53	77	72	75	64	57	67
	2001	69	85	76	60	80	52	82	76	82	66	75	62
Panamá	1991	80	45	55	67	80	72	80	45	52	66	78	76
	1994	71	51	52	60	68	61	75	57	53	62	76	62
	1997	74	58	54	58	69	62	76	49	55	65	75	63
	1999	83	57	60	66	75	71	94	80	78	75	82	70
	2002	76	65	48	55	80	67	85	64	52	67	83	68
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	55	69	55	60	65	42	63	51	50	58	72	58
	1994	60	64	59	66	67	52	64	64	59	66	75	51
	1996	64	69	62	55	67	58	76	56	61	60	81	70
	1999	71	62	76	62	74	63	79	72	75	61	86	67
	2000	70	59	63	78	74	69	95	59	66	97	97	68
Perú	1997	60	69	66	61	71	53	73	79	69	62	80	65
	1999	63	65	65	...	67	62	78	78	80	...	69	72
	2001	67	80	82	72	71	63	80	52	75	74	75	67
República Dominicana	1997	75	57	60	60	75	66	90	67	71	67	95	75
	2000	69	56	53	65	61	60	84	77	74	76	70	65
	2002	68	53	54	60	66	62	89	79	64	73	82	78
Uruguay	1990	45	50	41	40	42	37	64	52	57	63	59	57
	1994	61	59	55	55	56	50	63	57	54	59	59	51
	1997	65	54	57	60	58	56	67	51	57	62	62	57
	1999	67	61	58	61	62	56	68	54	56	63	65	58
	2002	72	76	65	62	66	60	71	61	60	62	68	61
Venezuela (República Bolivariana de) f/	1990	66	62	58	68	61	62	79	73	68	77	78	71
	1994	70	68	62	70	63	67	84	83	75	90	71	76
	1997	69	71	61	64	60	63	83	74	73	71	75	70
	1999	74	71	65	66	63	66	91	83	73	75	77	74
	2002	76	67	67	65	70	69	99	84	80	80	79	85

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ Se refiere a las diferencias de ingreso del total de la población ocupada. Esta diferencia se calcula como el cociente entre el ingreso medio de las mujeres y el de los hombres, multiplicado por 100.
- b/ Se refiere a las diferencias de ingreso total entre los asalariados. Esta diferencia se calcula como el cociente entre el ingreso medio de las mujeres y el de los hombres, multiplicado por 100.
- c/ Los niveles de instrucción de Argentina son 0 a 6 años, 7 a 9 años y 10 años y más.
- d/ A partir de 1993, la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- e/ Salvo en 1990, los niveles de instrucción de México son 0 a 5 años, 6 a 9 años, 10 a 12 años y 13 años y más.
- f/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 11

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003										
(En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Empleo doméstico	Trabajadores independientes no calificados b/		
			Empleadores	Asalariados				Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	44,4	3,8	12,0	0,4	11,6	5,7	22,9	6,9	16,0
	1994	42,7	3,4	14,8	1,4	13,4	4,8	19,7	6,0	13,6
	1997	41,4	3,7	15,9	1,4	14,5	5,1	16,7	4,6	12,1
	1999	40,4	3,2	14,9	1,3	13,6	5,3	17,0	5,1	11,9
	2000	42,2	3,4	16,0	1,4	14,6	5,3	17,5	5,1	12,4
	2002	42,1	2,9	16,1	1,1	15,0	5,6	17,5	6,8	10,7
(Zonas urbanas)	1999	42,2	3,2	14,9	1,4	13,5	5,8	18,3	5,4	12,7
	2000	43,5	3,3	15,4	1,3	14,1	5,9	18,9	5,6	13,2
	2002	42,5	2,9	15,2	1,2	14,0	6,0	18,4	6,4	11,8
Bolivia	1989	58,5	1,1	10,5	0,9	9,6	5,8	41,1	9,8	30,0
	1994	63,0	6,2	14,8	1,0	13,8	5,2	36,8	9,1	27,1
	1997	65,5	5,0	12,0	1,0	11,0	3,6	44,9	11,9	27,7
	1999	64,3	2,5	12,8	1,0	11,8	3,1	45,9	12,1	31,1
	2000	63,1	1,7	10,8	0,6	10,2	4,2	46,4	12,1	30,9
	2002	66,7	3,2	13,9	0,7	13,2	3,9	45,7	12,3	29,4
Brasil d/	1990	49,2	...	21,6	4,3	17,3	6,2	21,4	3,5	15,8
	1993	45,5	1,9	9,0	0,5	8,5	8,2	26,4	4,7	16,0
	1996	46,7	2,0	10,6	0,7	9,9	8,4	25,7	5,0	15,9
	1999	47,3	2,2	10,1	1,7	8,4	8,5	26,5	5,2	16,4
	2001	46,2	2,2	10,8	1,9	8,9	8,8	24,4	4,8	15,4
	Chile e/	1990	38,8	0,8	10,3	0,9	9,4	7,0	20,7	5,7
1994		34,6	1,8	9,4	0,8	8,6	6,1	17,3	5,4	11,2
1996		34,3	2,0	10,1	1,0	9,1	6,1	16,1	4,2	10,7
1998		34,4	2,6	10,7	1,0	9,7	5,9	15,2	4,1	10,2
2000		32,5	2,4	9,0	1,0	8,0	6,2	14,9	4,3	9,6
2003		31,9	2,4	8,0	0,8	7,2	6,5	15,0	4,9	9,2
Colombia f/	1991	5,6	27,3	6,4	20,0
	1994	5,3	25,0	6,2	18,4
	1997	4,5	30,8	7,1	22,9
	1999	5,2	35,7	7,5	26,7
	2002	5,9	38,5	8,0	27,8
	Costa Rica	1990	36,9	4,4	10,5	0,8	9,7	4,4	17,6	6,4
1994		38,0	5,0	12,6	1,4	11,2	3,8	16,6	4,6	11,1
1997		39,6	6,1	12,2	1,0	11,2	3,5	17,8	4,8	12,4
1999		41,6	6,0	13,2	1,4	11,8	5,1	17,3	4,5	11,9
2000		39,1	4,1	13,0	1,2	11,8	4,5	17,5	4,5	11,9
2002		40,2	6,2	12,3	1,4	10,9	4,0	17,7	4,7	12,2
Ecuador	1990	54,5	3,6	11,9	0,6	11,3	4,5	34,5	7,8	24,4
	1994	56,5	6,5	13,2	1,0	12,2	4,7	32,1	6,0	24,1
	1997	56,6	6,2	12,6	0,8	11,8	5,0	32,8	6,9	23,6
	1999	58,9	7,0	15,0	1,6	13,4	5,4	31,5	5,6	23,8
	2000	56,5	3,0	15,0	1,2	13,8	4,7	33,8	7,1	24,1
	2002	56,3	4,8	14,2	0,9	13,3	4,5	32,8	6,9	23,6
El Salvador	1990	55,6	2,7	13,6	0,3	13,3	6,1	33,2	8,7	21,8
	1995	51,0	4,9	10,7	0,2	10,5	4,4	31,0	8,1	20,2
	1997	52,5	4,8	11,8	0,6	11,2	4,4	31,5	7,1	21,5
	1999	52,2	4,1	14,6	0,8	13,8	4,3	29,2	6,7	20,0
	2000	53,8	5,0	13,5	1,0	12,5	4,1	31,2	7,0	21,7
	2002	54,4	4,4	14,1	0,7	13,4	4,2	31,7	6,7	22,8
Guatemala	1989	54,6	2,1	14,6	0,8	13,8	7,0	30,9	7,4	14,9
	1998	64,4	3,6	22,4	2,3	20,1	3,9	34,5	8,2	20,7
	2002	57,6	5,2	13,9	0,8	13,1	4,0	34,5	8,9	19,8
Honduras	1990	53,3	1,0	13,9	0,7	13,2	6,7	31,7	8,9	18,7
	1994	49,9	3,0	11,9	0,9	11,0	5,4	29,5	8,1	16,1
	1997	54,3	5,3	11,6	0,6	11,0	5,1	32,3	7,6	20,4
	1999	55,2	5,1	12,2	1,0	11,2	4,8	33,1	7,4	22,0
	2002	56,5	3,6	14,0	1,1	12,9	4,0	34,9	9,8	20,1
	2003	59,4	4,3	14,3	0,9	13,4	4,1	36,7	10,0	22,0

(continúa)

Cuadro 11 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003										
(En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Empleo doméstico	Trabajadores independientes no calificados b/		
			Empleadores	Asalariados				Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
México g/	1989	...	2,8	2,7	18,9	3,0	12,5
	1994	...	3,3	3,7	20,4	4,2	14,9
	1996	43,6	3,8	15,8	1,2	14,6	3,6	20,4	3,8	15,7
	1998	44,3	3,9	15,9	1,0	14,9	4,1	20,4	3,2	16,4
	2000	42,5	3,9	16,0	1,1	14,9	3,0	19,6	3,6	15,1
	2002	47,2	3,4	18,3	1,3	17,0	4,6	20,9	4,2	16,1
Nicaragua	1993	49,2	0,5	13,3	1,6	11,7	6,2	29,2	7,7	17,5
	1998	60,6	3,0	16,2	1,7	14,5	6,4	35,0	4,3	26,4
	2001	59,9	3,6	16,5	0,7	15,8	4,4	35,4	5,5	25,7
Panamá	1991	37,9	2,6	5,8	0,6	5,2	7,0	22,5	4,3	11,2
	1994	35,4	1,7	6,0	0,3	5,7	7,3	20,4	4,4	11,4
	1997	36,6	2,0	6,4	0,8	5,6	6,4	21,8	4,8	12,6
	1999	37,3	2,1	7,2	0,7	6,5	6,1	21,9	4,6	13,5
	2002	38,4	2,3	8,8	0,7	8,1	6,7	20,6	4,4	15,2
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	55,5	6,8	17,0	1,1	15,9	10,5	21,2	5,2	15,5
	1994	54,6	7,1	14,6	1,3	13,3	11,5	21,4	5,3	15,9
	1996	57,1	4,7	14,6	0,8	13,8	9,3	28,5	6,4	19,9
	1999	51,9	4,7	14,9	1,3	13,6	9,1	23,2	5,2	17,1
	2000	54,5	6,1	13,0	1,7	11,3	11,0	24,4	5,1	19,0
(Zonas urbanas)	1994	61,2	7,2	16,0	1,0	15,0	10,5	27,5	5,4	20,2
	1996	62,9	4,9	15,0	0,6	14,4	9,3	33,7	5,6	24,3
	1999	59,1	5,0	15,8	0,9	14,9	9,2	29,1	5,2	21,3
	2000	61,6	6,4	14,7	1,4	13,3	10,4	30,1	5,3	21,9
Perú	1997	60,6	4,9	13,1	1,2	11,9	4,4	38,2	5,4	28,6
	1999	63,3	4,5	14,9	1,9	13,0	5,8	38,1	4,9	29,4
	2001	63,1	4,0	14,4	1,0	13,4	5,2	39,5	5,0	28,8
República Dominicana	1992	3,2	32,8	5,6	23,0
	1995	3,8	30,6	4,9	22,1
	1997	47,0	2,1	9,1	0,7	8,4	4,4	31,4	6,8	21,3
	2000	45,1	1,8	8,5	0,7	7,8	4,1	30,7	7,3	20,6
	2002	46,3	2,3	7,0	0,6	6,4	4,3	32,7	7,4	22,0
	2003	48,8	2,6	7,5	0,7	6,8	3,9	34,8	7,7	21,5
Uruguay	1990	39,2	2,7	10,6	0,3	10,3	6,9	19,0	5,6	12,0
	1994	40,3	3,3	9,9	0,5	9,4	7,0	20,1	6,4	12,7
	1997	42,2	2,8	11,5	0,5	11,0	7,1	20,8	6,8	12,7
	1999	41,5	2,4	11,0	0,6	10,4	7,5	20,6	7,0	12,7
	2000	42,6	2,4	11,8	0,7	11,1	9,1	19,3	7,3	10,9
	2002	45,7	2,4	11,6	0,6	11,0	9,9	21,8	8,1	12,5
Venezuela (República Bolivariana de) h/	1990	39,2	4,9	6,7	0,2	6,5	6,3	21,3	4,1	15,3
	1994	45,3	4,2	9,7	0,5	9,2	4,0	27,4	5,9	19,0
	1997	49,4	3,6	11,3	0,5	10,8	4,3	30,2	6,1	19,9
	1999	53,7	3,9	12,6	0,5	12,1	2,0	35,2	6,7	23,7
	2000	54,6	3,8	11,6	0,4	11,2	2,1	37,1	7,4	24,7
	2002	56,5	4,2	11,5	0,4	11,1	2,6	38,2	6,5	26,4
	2003	58,3	4,0	11,9	0,4	11,5	2,8	39,6	6,5	27,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se incluyen los que tienen hasta cuatro empleados.
- b/ Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.
- c/ Incluye a los ocupados en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.
- d/ Hasta 1990 se clasificó bajo el encabezamiento "Microempresa" a los asalariados sin contrato de trabajo. En 1993 y de 1996 a 1999, en cambio, esta categoría comprende a los asalariados en establecimientos que ocupan hasta cinco personas, de modo que las cifras no son comparables con las de años anteriores.
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH). Para la encuesta correspondiente a 1994 no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos en que trabajaban los asalariados.
- h/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 11.1

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003										
(En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Empleo	Trabajadores independientes doméstico no calificados b/		
			Empleadores	Asalariados				Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	42,2	4,6	12,7	0,3	12,4	1,8	23,1	8,5	14,6
	1994	41,3	4,4	15,7	1,2	14,5	0,4	20,8	8,4	12,3
	1997	39,8	4,5	18,7	1,2	17,5	0,4	16,2	6,0	10,2
	1999	39,4	4,2	16,9	1,0	15,9	0,2	18,1	7,2	10,8
	2000	40,8	4,1	17,9	1,5	16,4	0,2	18,6	7,2	11,4
	2002	43,9	3,4	18,4	0,9	17,5	0,1	22,0	9,5	12,5
(Zonas urbanas)	1999	40,9	4,1	16,8	1,2	15,6	0,2	19,8	7,6	11,9
	2000	42,5	4,1	17,6	1,5	16,1	0,2	20,6	8,0	12,4
	2002	44,6	3,5	17,7	1,1	16,6	0,1	23,3	9,2	13,8
Bolivia	1989	48,8	1,5	13,8	0,9	12,9	0,6	32,9	11,5	19,9
	1994	53,7	8,6	19,2	0,9	18,3	0,5	25,4	9,1	15,6
	1997	58,4	7,1	15,2	1,1	14,1	0,5	35,6	12,6	17,1
	1999	57,2	3,0	16,7	1,1	15,6	0,3	37,2	12,7	19,5
	2000	56,2	2,2	15,1	0,8	14,3	0,2	38,7	15,3	19,2
	2002	58,5	4,2	17,8	0,7	17,1	0,2	36,3	13,1	18,4
Brasil d/	1990	44,7	...	23,4	2,3	21,1	0,4	20,9	5,1	12,9
	1993	40,6	2,5	10,6	0,5	10,1	0,8	26,7	6,7	14,8
	1996	42,6	2,5	12,0	0,6	11,4	0,8	27,3	7,4	15,1
	1999	43,7	2,9	11,6	1,1	10,5	0,8	28,4	7,5	15,9
	2001	42,3	2,8	12,3	1,2	11,1	0,8	26,4	7,1	14,9
	Chile e/	1990	33,8	0,9	10,7	0,7	10,0	0,2	22,0	6,3
1994		30,1	2,0	9,8	0,7	9,1	0,1	18,2	6,2	10,9
1996		30,2	2,3	10,7	1,0	9,7	0,2	17,0	4,8	10,6
1998		30,0	2,9	10,5	0,8	9,7	0,1	16,5	5,0	10,2
2000		27,9	2,9	9,1	0,9	8,2	0,1	15,8	5,2	9,2
2003		27,8	2,7	8,3	0,7	7,6	0,2	16,6	6,1	9,2
Colombia f/	1991	0,3	28,4	6,2	20,9
	1994	0,2	26,0	6,7	18,7
	1997	0,2	32,6	8,4	22,9
	1999	0,5	37,3	8,4	26,5
	2002	0,4	39,3	8,2	26,7
	Costa Rica	1990	35,1	5,7	11,1	0,8	10,3	0,2	18,1	5,7
1994		36,2	6,1	13,1	1,5	11,6	0,3	16,7	4,4	10,9
1997		38,5	7,8	13,4	1,0	12,4	0,2	17,1	5,2	11,0
1999		39,5	7,7	14,7	1,4	13,3	0,4	16,7	4,4	10,9
2000		37,4	5,1	13,5	1,1	12,4	0,3	18,5	5,3	11,6
2002		37,3	7,9	13,0	1,6	11,4	0,3	16,1	5,1	9,8
Ecuador	1990	50,7	4,3	14,2	0,4	13,8	0,6	31,6	8,0	20,7
	1994	52,5	7,8	15,9	0,9	15,0	0,3	28,5	5,8	20,2
	1997	52,2	7,6	14,8	0,6	14,2	0,7	29,1	6,5	19,5
	1999	54,9	8,6	18,0	1,4	16,6	0,6	27,7	5,4	19,6
	2000	53,6	3,8	18,0	1,2	16,8	0,7	31,1	7,5	20,6
	2002	52,1	5,7	16,8	0,8	16,0	0,7	28,9	6,9	19,4
El Salvador	1990	45,9	3,8	18,6	0,4	18,2	0,4	23,1	6,0	12,8
	1995	43,0	6,7	14,5	0,2	14,3	0,5	21,3	5,2	11,5
	1997	44,7	6,3	15,2	0,6	14,6	0,3	22,9	5,6	12,2
	1999	45,7	5,5	19,6	1,0	18,6	0,6	20,0	4,2	11,3
	2000	47,1	6,6	18,1	1,3	16,8	0,4	22,0	5,0	12,5
	2001	47,5	5,5	19,3	0,9	18,4	0,5	22,2	4,4	13,9
2002	48,4	6,1	18,0	1,1	16,9	0,5	23,8	4,8	14,9	
Guatemala	1989	49,5	2,5	18,2	0,8	17,4	0,2	28,6	5,7	10,1
	1998	59,1	4,7	26,9	2,5	24,4	0,3	27,2	5,6	13,3
	2002	51,5	6,9	16,9	0,6	16,3	0,1	27,6	7,6	11,3
Honduras	1990	46,6	1,2	18,2	0,8	17,4	0,4	26,8	6,6	13,5
	1994	43,0	4,1	12,0	0,9	14,2	0,0	26,9	5,6	12,6
	1997	52,1	7,3	16,2	0,4	15,8	0,8	27,8	4,7	15,7
	1999	52,4	6,7	17,1	0,9	16,2	0,6	28,0	4,1	17,6
	2002	55,7	4,5	18,2	1,0	17,2	0,4	32,6	8,4	15,9
	2003	57,9	5,6	18,8	0,8	18,0	0,5	33,0	8,0	17,1

(continúa)

Cuadro 11.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003										
(En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Empleo	Trabajadores independientes doméstico no calificados b/		
			Empleadores	Asalariados				Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
México g/	1989	...	3,5	0,6	17,5	2,5	10,5
	1994	...	4,4	0,6	17,9	4,0	12,6
	1996	41,7	5,1	18,3	1,0	17,3	0,9	17,4	3,6	12,9
	1998	41,3	5,1	18,4	1,0	17,4	1,2	16,6	2,6	13,2
	2000	40,7	5,1	19,3	1,2	18,1	0,9	15,4	3,6	10,7
	2002	44,9	4,6	20,7	1,3	19,4	1,4	18,2	3,9	13,5
Nicaragua	1993	45,8	0,6	17,4	1,2	16,2	0,3	27,5	6,8	14,2
	1998	55,8	4,2	20,4	1,7	18,7	1,2	30,0	4,9	18,2
	2001	55,7	4,9	22,1	0,6	21,5	0,1	28,6	4,6	17,3
Panamá	1991	39,3	3,4	6,5	0,6	5,9	0,6	28,8	5,4	12,7
	1994	35,7	2,1	7,0	0,3	6,7	1,2	25,4	5,6	13,0
	1997	36,6	2,7	6,7	0,7	6,0	1,0	26,2	6,0	13,2
	1999	36,7	2,5	8,1	0,7	7,4	1,0	25,1	5,5	13,7
	2002	37,8	2,9	10,3	0,7	9,6	1,0	23,6	5,9	16,2
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	48,0	10,2	21,4	0,8	20,6	0,0	16,4	4,3	11,5
	1994	47,9	8,8	19,3	1,2	18,1	1,6	18,2	5,4	11,9
	1996	51,1	6,2	19,3	0,9	18,4	1,0	24,6	6,6	15,0
	1999	43,8	6,1	16,4	1,9	14,5	0,8	20,5	4,9	14,5
	2000	45,7	7,8	15,3	1,6	13,7	2,3	20,3	4,2	15,8
(Zonas urbanas)	1994	55,1	9,0	21,2	1,0	20,2	1,4	23,5	5,3	15,4
	1996	56,7	6,6	20,1	0,8	19,3	0,9	29,1	6,0	18,4
	1999	51,9	6,8	19,1	1,2	17,9	0,9	25,1	4,9	16,8
	2000	55,6	8,6	19,3	1,3	18,0	1,6	26,1	4,8	18,0
Perú	1997	53,7	7,0	17,0	1,1	15,9	0,2	29,5	5,3	19,2
	1999	56,5	6,2	18,0	1,9	16,1	0,4	31,9	5,0	21,7
	2001	56,7	5,5	18,5	1,0	17,5	0,5	32,2	5,4	20,4
República Dominicana	1992	0,2	36,2	5,8	24,0
	1995	0,2	35,1	5,3	24,4
	1997	47,5	2,7	9,9	0,5	9,4	0,4	34,5	8,7	20,8
	2000	46,6	1,9	8,5	0,8	7,7	0,6	35,6	10,1	21,3
	2002	48,1	2,7	6,7	0,6	6,1	0,8	37,9	10,3	22,5
	2003	51,3	3,2	6,8	0,5	6,3	0,4	40,9	10,6	21,9
Uruguay	1990	34,8	3,7	12,1	0,3	11,8	0,1	18,9	5,4	11,7
	1994	36,0	4,2	11,0	0,4	10,6	0,1	20,7	6,9	12,4
	1997	38,2	3,6	12,3	0,3	12,0	0,2	22,1	8,1	12,8
	1999	38,6	3,1	12,1	0,4	11,7	0,2	23,2	9,0	13,0
	2000	38,3	3,1	12,0	0,6	11,4	1,3	21,9	9,6	10,7
	2002	43,0	3,2	12,8	0,6	12,2	1,4	25,6	10,7	13,3
Venezuela (República Bolivariana de) h/	1990	39,1	6,5	8,2	0,2	8,0	1,9	22,5	4,0	15,7
	1994	47,8	5,8	11,3	0,4	10,9	1,5	29,2	6,5	19,0
	1997	50,4	4,8	13,8	0,4	13,4	1,5	30,3	6,8	17,4
	1999	54,6	5,2	15,2	0,3	14,9	0,1	34,1	7,2	19,9
	2000	55,6	5,1	14,0	0,3	13,7	0,1	36,4	8,4	20,6
	2002	56,4	5,6	14,0	0,2	13,8	0,1	36,7	7,1	21,9
	2003	58,6	5,3	14,6	0,3	14,3	0,2	38,5	6,9	22,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se incluyen los que tienen hasta cuatro empleados.

b/ Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

c/ Incluye a los ocupados en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.

d/ Hasta 1990 se clasificó bajo el encabezamiento "Microempresa" a los asalariados sin contrato de trabajo. En 1993 y de 1996 a 1999, en cambio, esta categoría comprende a los asalariados en establecimientos que ocupan hasta cinco personas, de modo que las cifras no son comparables con las de años anteriores.

e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

f/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH). Para la encuesta correspondiente a 1994 no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos en que trabajaban los asalariados.

h/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información entre zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 11.2

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003										
(En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/			Empleo doméstico	Trabajadoras independientes no calificadas b/			
			Empleadoras	Asalariadas			Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicas					No profesionales ni técnicas
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	48,0	2,3	10,6	0,4	10,2	12,5	22,6	4,0	18,6
	1994	45,6	1,6	13,0	1,5	11,5	12,3	18,7	1,8	16,8
	1997	43,9	2,5	11,2	1,6	9,6	12,7	17,5	2,3	15,2
	1999	41,9	1,7	12,2	1,9	10,3	12,7	15,3	1,9	13,4
	2000	44,1	2,2	13,2	1,2	12,0	13,0	15,7	2,0	13,7
	2002	40,0	2,3	13,0	1,4	11,6	13,2	11,5	3,1	8,4
(Zonas urbanas)	1999	44,0	1,7	11,8	1,6	10,2	14,2	16,3	2,1	14,1
	2000	45,2	2,2	12,2	1,1	11,1	14,3	16,5	2,1	14,3
	2002	39,5	2,0	11,8	1,4	10,4	14,0	11,7	2,6	9,1
Bolivia	1989	71,5	0,4	6,1	0,9	5,2	12,9	52,1	7,5	43,6
	1994	75,0	3,1	9,0	1,1	7,9	11,2	51,7	9,1	42,1
	1997	75,2	2,1	7,9	0,9	7,0	7,7	57,5	11,1	41,8
	1999	75,3	1,7	7,6	0,7	6,9	6,7	59,3	11,3	45,9
	2000	71,9	1,1	5,2	0,3	4,9	9,4	56,2	8,1	45,7
	2002	76,7	2,1	9,4	0,8	8,6	8,3	56,9	11,3	42,6
Brasil d/	1990	56,8	...	18,8	7,6	11,2	15,6	22,4	0,9	20,7
	1993	53,2	1,0	6,6	0,6	6,0	19,8	25,8	1,6	17,8
	1996	52,7	1,3	8,3	0,7	7,6	19,7	23,4	1,6	17,1
	1999	53,1	1,3	8,0	2,7	5,3	20,3	23,5	1,7	17,1
	2001	51,6	1,3	8,8	2,9	5,9	20,0	21,5	1,6	16,1
Chile e/	1990	47,5	0,5	9,5	1,3	8,2	19,4	18,1	4,6	13,3
	1994	42,7	1,5	8,6	0,9	7,7	16,8	15,8	4,0	11,7
	1996	41,5	1,5	9,2	1,0	8,2	16,3	14,5	3,2	10,9
	1998	41,7	2,1	11,1	1,4	9,7	15,2	13,3	2,8	10,3
	2000	39,8	1,6	8,9	1,1	7,8	16,0	13,3	2,8	10,2
	2003	38,2	1,9	7,4	0,9	6,5	16,3	12,6	3,1	9,3
Colombia f/	1991	13,6	25,5	6,8	18,6
	1994	12,7	23,4	5,4	17,9
	1997	10,4	28,2	5,2	22,9
	1999	11,5	33,4	6,3	26,8
	2002	12,7	37,4	7,7	29,2
	Costa Rica	1990	40,1	1,9	9,5	0,9	8,6	12,0	16,7	7,7
1994		40,9	3,1	11,5	1,2	10,3	10,1	16,2	4,9	11,3
1997		41,3	3,3	10,1	0,9	9,2	9,2	18,7	4,0	14,7
1999		45,1	3,3	11,0	1,6	9,4	12,6	18,2	4,6	13,5
2000		41,7	2,3	12,3	1,4	10,9	11,4	15,7	3,2	12,4
2002		45,1	3,7	11,2	1,1	10,1	9,8	20,4	4,2	16,0
Ecuador	1990	61,1	2,3	7,6	0,9	6,7	11,6	39,6	7,5	31,0
	1994	62,8	4,4	8,8	1,1	7,7	11,8	37,8	6,2	30,5
	1997	62,8	4,0	9,2	1,2	8,0	10,9	38,7	7,5	30,2
	1999	65,1	4,4	10,3	1,9	8,4	13,1	37,3	5,8	30,5
	2000	61,0	1,7	10,1	1,1	9,0	11,1	38,1	6,5	29,6
	2002	64,1	3,3	10,0	0,9	9,1	10,8	40,0	7,8	30,3
El Salvador	1990	67,9	1,4	7,5	0,3	7,2	13,1	45,9	12,1	33,0
	1995	60,8	2,8	6,1	0,3	5,8	9,1	42,8	11,6	30,7
	1997	62,0	3,0	7,6	0,5	7,1	9,4	42,0	8,9	32,8
	1999	59,6	2,6	8,9	0,5	8,4	8,6	39,5	9,5	29,7
	2000	61,1	3,1	8,3	0,6	7,7	8,2	41,5	9,3	32,0
	2002	62,3	3,1	8,4	0,6	7,8	8,4	42,4	9,3	32,8
Guatemala	1989	62,7	1,3	8,7	0,8	7,9	18,1	34,6	10,1	22,7
	1998	71,2	2,2	16,7	2,1	14,6	8,4	43,9	11,6	30,2
	2002	65,7	2,9	9,8	1,0	8,8	9,2	43,8	10,6	31,2
Honduras	1990	63,3	0,8	7,5	0,6	6,9	16,0	39,0	12,3	26,5
	1994	55,6	1,5	6,8	0,8	6,0	13,7	33,6	12,0	21,4
	1997	57,3	2,7	5,5	0,8	4,7	10,7	38,4	11,4	26,7
	1999	58,5	3,2	6,3	1,2	5,1	9,9	39,1	11,3	27,2
	2002	57,9	2,4	8,6	1,3	7,3	8,9	38,0	11,7	25,6
	2003	61,5	2,6	8,6	1,1	7,5	8,7	41,6	12,6	28,3

(continúa)

Cuadro 11.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003 (En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Empleo doméstico	Trabajadoras independientes no calificadas b/		
			Empleadoras	Asalariadas				Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicas	No profesionales ni técnicas				
México g/	1989	...	1,2	7,1	21,9	4,0	16,7
	1994	...	1,1	9,6	25,0	4,6	19,1
	1996	47,6	2,0	11,4	1,5	9,9	8,3	25,9	4,2	20,7
	1998	49,6	1,9	11,6	0,9	10,7	9,0	27,1	4,4	22,0
	2000	45,7	1,8	10,6	1,0	9,6	6,5	26,8	3,7	22,4
	2002	51,0	1,6	14,4	1,3	13,1	9,7	25,3	4,6	20,3
Nicaragua	1993	54,2	0,5	7,9	2,2	5,7	14,1	31,7	9,0	22,0
	1998	67,4	1,3	10,7	1,8	8,9	13,5	41,9	3,6	37,4
	2001	65,5	1,9	8,7	0,7	8,0	10,3	44,6	6,7	37,2
Panamá	1991	35,1	1,3	4,5	0,5	4,0	17,8	11,5	2,3	8,6
	1994	35,3	1,0	4,5	0,5	4,0	18,1	11,7	2,3	8,7
	1997	37,1	1,0	6,0	1,0	5,0	15,3	14,8	2,8	11,8
	1999	38,6	1,4	6,0	0,8	5,2	14,4	16,8	3,1	13,3
	2002	39,2	1,3	6,5	0,6	5,9	15,3	16,1	2,2	13,8
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	65,9	2,0	10,2	1,6	8,6	25,6	28,1	6,5	21,1
	1994	65,0	4,9	9,0	1,5	7,5	24,3	26,8	5,3	21,1
	1996	65,1	2,8	8,4	0,6	7,8	20,0	33,9	6,3	26,4
	1999	64,3	2,9	13,0	0,6	12,4	20,1	28,3	5,7	22,1
	2000	64,6	4,2	10,3	1,9	8,4	21,1	29,0	6,1	22,7
(Zonas urbanas)	1994	69,9	4,7	8,5	1,0	7,5	23,3	33,4	5,6	27,0
	1996	71,4	2,5	8,1	0,4	7,7	20,8	40,0	5,1	32,4
	1999	69,1	2,5	11,3	0,5	10,8	20,7	34,6	5,6	27,5
	2000	71,9	3,7	9,0	1,5	7,5	21,5	37,7	6,0	26,7
Perú	1997	69,3	2,2	8,2	1,3	6,9	9,8	49,1	5,4	40,4
	1999	71,5	2,5	10,9	1,8	9,1	12,4	45,7	4,8	38,8
	2001	71,7	2,2	9,3	1,0	8,3	11,3	48,9	4,5	39,6
República Dominicana	1992	8,7	26,7	5,2	21,4
	1995	10,5	21,9	4,0	17,8
	1997	46,0	1,1	7,6	0,9	6,7	11,6	25,7	3,6	22,0
	2000	42,8	1,6	8,7	0,6	8,1	9,7	22,8	2,9	19,4
	2002	43,7	1,8	7,3	0,6	6,7	10,0	24,6	2,8	21,3
	2003	44,3	1,5	8,5	0,8	7,7	10,1	24,2	2,8	20,8
Uruguay	1990	46,1	1,4	8,5	0,4	8,1	17,1	19,1	6,0	12,3
	1994	46,3	2,0	8,2	0,6	7,6	16,8	19,3	5,7	13,0
	1997	46,8	1,6	10,2	0,7	9,5	16,7	18,3	5,0	12,6
	1999	45,4	1,6	9,3	0,7	8,6	17,4	17,1	4,4	12,2
	2000	48,2	1,4	11,4	0,8	10,6	19,5	15,9	4,2	11,3
	2002	49,6	1,4	10,1	0,6	9,5	21,5	16,6	4,6	11,5
Venezuela (República Bolivariana de) h/	1990	39,6	1,7	3,7	0,3	3,4	15,0	19,2	4,4	14,6
	1994	40,7	1,2	6,6	0,7	5,9	9,0	23,9	4,7	19,0
	1997	47,9	1,4	6,6	0,8	5,8	9,7	30,2	5,0	24,6
	1999	52,2	1,5	7,7	0,7	7,0	5,6	37,4	5,9	30,6
	2000	52,9	1,5	7,4	0,5	6,9	5,6	38,4	5,6	32,0
	2002	56,6	2,0	7,4	0,7	6,7	6,6	40,6	5,4	33,8
	2003	57,8	1,9	7,5	0,6	6,9	7,0	41,4	5,8	33,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela República Dominicana y Uruguay (1990) se incluyen los que tienen hasta cuatro empleados.
- b/ Se refiere a trabajadoras por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.
- c/ Incluye a las ocupadas en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.
- d/ Hasta 1990 se clasificó bajo el encabezamiento "Microempresa" a las asalariadas sin contrato de trabajo. En 1993 y de 1996 a 1999, en cambio, esta categoría comprende a las asalariadas en establecimientos que ocupan hasta cinco personas, de modo que las cifras no son comparables con las de años anteriores.
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH). Para la encuesta correspondiente a 1994 no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos en que trabajaban las asalariadas.
- h/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 12

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003										
(En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)										
País	Año	Total	Microempresas a/			Trabajadores independientes no calificados b/			Empleo doméstico	
			Empleadores	Asalariados		Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios		
				Total	Profesionales y técnicos					No profesionales ni técnicos
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	6,6	18,4	3,7	7,6	3,6	7,2	7,0	7,4	2,5
	1994	8,3	24,8	5,0	7,7	4,7	9,1	8,8	9,2	3,3
	1997	6,5	23,1	3,9	6,0	3,7	6,5	6,6	6,4	2,6
	1999	5,7	19,7	3,8	6,1	3,5	8,1	5,7	6,2	2,4
	2002	4,0	15,1	2,4	6,4	2,1	4,1	3,7	4,4	1,7
Bolivia	1989	3,6	11,8	2,8	4,5	2,6	3,9	3,3	4,0	1,6
	1994	2,7	8,1	2,4	3,6	2,0	2,2	2,0	2,3	1,0
	1997	2,6	7,1	2,5	5,7	2,2	2,2	2,1	2,6	1,1
	1999	2,5	7,1	2,6	5,0	2,4	2,2	1,9	2,4	1,8
	2002	2,2	5,4	2,4	3,3	2,4	1,8	1,6	2,1	2,0
Brasil d/	1990	4,1	...	3,6	7,6	2,6	3,4	3,3	3,6	1,0
	1993	2,6	11,3	2,2	5,1	2,0	2,7	2,6	3,4	1,1
	1996	3,4	14,0	2,7	5,9	2,5	3,7	3,5	4,5	1,5
	1999	3,0	10,3	2,4	3,6	2,1	2,8	2,7	3,5	1,4
	2001	2,8	10,6	2,4	3,6	2,1	2,8	2,6	3,4	1,4
Chile e/	1990	3,8	18,8	2,6	4,8	2,4	4,7	3,9	5,1	1,4
	1994	4,3	17,4	3,2	6,8	2,9	4,6	4,6	4,6	2,0
	1996	5,6	22,3	3,4	7,9	2,9	6,0	5,5	6,1	2,0
	1998	5,9	24,0	3,4	7,1	3,0	5,9	5,5	6,2	2,2
	2000	5,3	21,8	3,6	8,2	3,0	5,2	5,1	5,4	2,4
	2003	5,7	24,0	3,3	7,3	2,9	5,7	5,5	5,9	2,4
Colombia f/	1991	2,2	2,0	2,3	1,3
	1994	2,9	2,6	2,9	1,7
	1997	2,8	2,4	2,8	1,6
	1999	1,9	1,6	1,9	2,1
	2002	1,4	1,2	1,5	1,7
Costa Rica	1990	3,7	6,5	3,5	6,7	3,2	3,4	2,9	3,6	1,5
	1994	4,3	9,2	3,8	6,3	3,5	4,0	2,9	4,2	1,6
	1997	3,9	7,4	3,3	4,9	3,2	3,6	3,3	3,7	1,8
	1999	4,5	9,3	4,0	7,0	3,6	4,0	3,6	4,1	1,7
	2002	4,3	6,5	4,1	6,9	3,7	3,1	3,2	3,1	2,0
Ecuador	1990	2,0	4,0	2,3	3,4	2,3	1,8	1,7	1,9	0,8
	1994	2,4	6,1	2,0	3,9	1,9	2,0	1,8	2,1	0,9
	1997	2,3	5,5	2,0	5,0	1,8	2,1	1,8	2,2	0,9
	1999	1,9	6,0	1,8	2,6	1,7	1,8	1,6	1,9	0,9
	2002	2,6	6,2	2,2	3,4	2,1	2,4	2,2	2,5	1,5
El Salvador	1995	2,4	6,8	2,0	3,1	2,0	2,0	1,6	2,4	1,0
	1997	2,6	7,3	2,5	6,4	2,3	2,1	2,0	2,4	1,9
	1999	2,9	8,8	2,5	4,4	2,4	2,4	1,7	2,6	2,1
	2001	2,7	7,4	2,4	3,4	2,3	2,2	1,6	2,6	2,0
Guatemala	1989	2,8	13,1	1,8	3,9	1,7	2,8	2,4	3,5	1,4
	1998	2,5	9,9	2,2	3,5	2,0	2,1	1,6	2,4	0,6
	2002	1,7	5,4	1,7	3,9	1,6	1,2	1,1	1,4	1,6
Honduras	1990	1,6	7,6	1,7	3,9	1,6	1,5	1,1	1,6	0,8
	1994	1,6	4,8	1,4	2,5	1,3	1,6	1,1	1,7	0,5
	1997	1,5	4,7	1,2	2,6	1,1	1,2	1,0	1,3	0,5
	1999	1,5	4,4	1,1	1,7	1,1	1,2	1,1	1,3	0,5
	2002	1,5	4,4	1,6	3,5	1,4	1,2	1,0	1,4	0,8
México g/	1989	...	15,5	3,8	3,5	5,2	1,4
	1994	...	13,8	3,3	2,7	3,6	1,2
	1996	3,2	13,7	1,8	2,9	1,7	2,3	1,9	2,4	1,2
	1998	3,1	11,7	2,1	4,7	1,9	2,6	2,1	2,7	1,3
	2000	3,5	12,9	2,2	3,5	2,1	3,0	2,7	3,2	1,3
	2002	3,3	12,6	2,3	5,3	2,1	3,2	2,9	3,3	1,4

(continúa)

Cuadro 12 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Trabajadores independientes no calificados b/			Empleo doméstico
			Empleadores	Asalariados			Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
Nicaragua	1993	3,0	8,8	2,6	4,8	2,3	2,9	2,7	3,3	2,1
	1998	2,3	6,9	2,2	5,2	1,9	2,0	2,1	2,1	1,7
	2001	2,1	6,1	1,9	3,4	1,8	1,8	1,5	2,1	1,4
Panamá	1991	2,5	7,7	3,1	7,4	2,6	2,3	2,5	3,0	1,3
	1994	3,3	11,4	2,6	6,4	2,4	3,4	3,7	4,2	1,3
	1997	3,4	11,6	2,9	5,1	2,6	3,4	3,7	3,9	1,4
	1999	3,4	10,6	3,2	7,8	2,7	3,0	3,1	3,4	2,2
	2002	4,0	9,7	6,1	8,2	5,9	2,8	2,7	2,8	2,5
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	3,1	8,2	1,9	3,8	1,8	3,6	2,4	4,1	0,8
	1994	3,0	8,7	2,3	4,9	2,0	2,4	2,0	2,6	1,3
	1996	2,5	7,2	2,3	3,3	2,3	2,5	2,1	2,7	1,2
	1999	2,6	6,2	2,5	4,1	2,3	2,2	2,2	2,3	1,7
	2000	2,3	6,4	2,3	3,1	2,2	1,7	1,6	1,7	1,6
(Zonas urbanas)	1994	2,7	8,3	2,1	4,7	1,9	2,3	1,9	2,4	1,2
	1996	2,4	6,8	2,2	3,7	2,1	2,3	2,2	2,5	1,1
	1999	2,3	5,7	2,2	3,8	2,1	2,0	1,9	2,1	1,6
	2000	2,1	6,2	2,0	3,1	1,9	1,5	1,4	1,6	1,4
Perú	1997	2,4	6,5	2,4	3,6	2,3	1,8	1,6	1,9	2,3
	1999	2,1	4,5	2,2	3,9	2,0	1,6	1,4	1,7	2,9
República Dominicana	1997	3,8	9,9	2,6	5,1	2,4	4,0	4,2	4,1	1,4
	2000	4,1	14,3	2,8	8,5	2,3	4,3	4,6	4,3	1,2
	2002	4,0	14,5	2,4	4,0	2,3	4,1	4,4	4,2	1,3
Uruguay	1990	3,8	8,9	2,6	4,8	2,5	5,1	2,1	3,0	1,5
	1994	3,5	10,5	3,0	4,6	2,9	3,5	2,8	3,9	1,7
	1997	3,5	9,8	3,1	4,2	3,0	3,5	2,8	3,8	1,8
	1999	3,7	11,6	3,3	5,4	3,2	3,6	3,1	3,9	2,1
	2002	2,4	8,8	2,7	4,2	2,6	2,4	2,1	2,5	2,0
Venezuela (República Bolivariana de) h/	1990	4,2	9,5	2,5	3,5	2,5	4,3	4,0	4,5	2,1
	1994	3,6	7,5	2,2	6,0	2,0	3,8	3,5	4,0	1,9
	1997	3,6	9,4	1,8	2,9	1,7	3,8	4,0	4,2	1,4
	1999	3,1	7,6	2,1	4,0	2,0	3,1	3,3	3,1	1,4
	2002	2,9	8,7	1,7	2,6	1,7	2,8	3,3	2,9	1,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se incluyen los que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos, no se proveen cifras para el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.
- b/ Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.
- c/ Incluye a personas ocupadas en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.
- d/ En el año 1990, se incluyó a los asalariados sin contrato de trabajo bajo "Microempresas".
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH).
- h/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 12.1

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN MASCULINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003
(En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)

País	Año	Total	Microempresas a/				Trabajadores independientes no calificados b/			Empleo doméstico
			Empleadores	Asalariados			Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	8,3	19,9	3,8	8,9	3,7	8,8	7,3	9,6	4,4
	1994	10,1	25,2	5,2	9,4	4,9	10,6	9,3	11,4	4,5
	1997	7,7	23,8	4,0	6,5	3,8	7,6	7,3	7,8	2,7
	1999	7,3	21,7	4,0	7,9	3,8	7,1	6,1	7,8	3,1
	2002	4,8	16,7	2,6	10,0	2,2	4,7	4,1	5,1	3,6
Bolivia	1989	4,6	12,9	2,9	5,4	2,7	4,9	3,6	5,6	4,0
	1994	3,6	8,2	2,3	4,3	2,2	3,2	2,5	3,6	1,7
	1997	3,3	7,3	2,6	5,3	2,4	2,9	2,6	3,8	1,8
	1999	2,9	6,0	2,8	5,0	2,6	2,8	2,6	3,2	1,9
	2002	2,7	5,4	2,5	3,7	2,5	2,5	2,0	3,2	2,6
Brasil d/	1990	4,0	...	3,7	11,6	2,8	4,4	3,5	5,2	1,3
	1993	3,7	12,0	2,2	6,6	2,0	3,5	2,8	4,6	1,5
	1996	4,7	14,4	2,8	7,3	2,6	4,7	3,8	6,0	2,0
	1999	3,8	10,4	2,5	5,0	2,2	3,6	3,0	4,5	2,1
	2002	3,6	11,0	2,4	4,3	2,2	3,5	2,8	4,5	2,0
Chile e/	1990	5,0	21,5	2,8	6,7	2,5	5,2	4,3	5,7	1,9
	1994	5,2	17,5	3,4	8,9	3,0	5,2	5,1	5,4	2,2
	1996	7,0	23,1	3,6	9,1	3,0	7,0	6,4	7,3	2,1
	1998	7,6	27,1	3,6	8,1	3,2	7,0	6,2	7,4	3,0
	2000	7,2	24,5	3,7	9,4	3,1	5,8	5,6	6,2	3,0
	2003	7,7	26,6	3,5	9,5	3,0	6,5	6,2	6,8	3,4
Colombia f/	1991	2,8	2,4	2,9	1,5
	1994	3,5	3,0	3,5	1,7
	1997	3,4	2,6	3,5	1,6
	1999	2,4	1,9	2,4	2,7
	2002	1,9	1,5	2,0	2,2
Costa Rica	1990	4,5	6,8	3,6	8,0	3,3	4,3	3,9	4,5	1,5
	1994	5,4	9,9	4,3	7,4	3,9	4,8	3,7	4,9	2,1
	1997	4,7	7,9	3,7	5,7	3,5	4,5	3,9	4,9	2,3
	1999	5,7	10,1	4,2	8,0	3,8	5,2	4,6	5,5	2,3
	2002	5,2	8,6	4,4	7,7	3,9	4,0	3,7	4,4	2,3
Ecuador	1990	2,5	3,9	2,4	4,0	2,4	2,3	1,9	2,5	1,1
	1994	3,0	6,6	2,2	5,3	2,0	2,6	2,2	2,8	1,1
	1997	2,9	5,6	2,0	7,9	1,8	2,6	2,3	2,8	1,3
	1999	2,8	6,4	1,8	2,9	1,7	2,3	2,1	2,5	1,4
	2002	3,1	6,5	2,2	3,8	2,1	3,0	2,7	3,2	1,9
El Salvador	1995	3,2	7,4	2,2	3,4	2,2	2,8	2,2	3,8	1,7
	1997	3,3	7,9	2,5	5,8	2,4	3,2	2,7	3,5	2,8
	1999	3,5	9,3	2,6	4,5	2,5	2,9	2,4	3,4	2,9
	2001	3,1	7,9	2,5	3,9	2,4	2,6	2,2	3,4	2,3
Guatemala	1989	3,5	13,7	1,9	4,9	1,8	3,6	3,4	5,4	2,6
	1998	3,3	11,3	2,4	4,0	2,2	2,8	2,5	3,7	1,2
	2002	3,1	6,0	1,8	3,9	1,7	1,5	1,6	2,0	1,7
Honduras	1990	2,2	9,4	1,8	4,1	1,7	2,2	1,7	2,4	1,6
	1994	2,1	5,1	1,4	2,5	1,3	2,0	1,6	2,3	1,6
	1997	1,9	5,0	1,1	2,2	1,1	1,7	1,6	1,8	0,8
	1999	1,9	4,7	1,2	1,4	1,2	1,6	2,1	1,8	0,8
	2002	1,8	4,6	1,6	4,4	1,4	1,5	1,5	1,8	1,2

(continúa)

Cuadro 12.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN MASCULINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)										
País	Año	Total	Microempresas a/			Trabajadores independientes no calificados b/			Empleo doméstico	
			Empleadores	Asalariados		Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios		
				Total	Profesionales y técnicos					No profesionales ni técnicos
México g/	1989	...	16,5	5,5	4,8	7,2	2,1
	1994	...	14,2	4,4	3,7	4,9	2,0
	1996	3,9	14,2	1,9	3,1	1,8	3,1	2,5	3,4	1,8
	1998	3,8	11,6	2,3	5,6	2,1	3,6	2,8	3,8	1,9
	2000	4,6	13,5	2,4	3,9	2,3	4,7	3,5	5,4	2,1
	2002	4,4	13,1	2,5	5,5	2,3	4,5	3,8	4,9	2,0
Nicaragua	1993	3,0	9,9	2,7	7,4	2,4	3,2	2,8	4,0	1,3
	1998	2,8	7,1	2,3	5,1	2,0	2,4	2,5	2,8	3,3
	2001	2,3	5,5	1,9	4,6	1,8	2,2	1,9	2,8	1,0
Panamá	1991	4,0	7,5	2,7	7,8	2,7	2,5	2,9	3,4	1,4
	1994	3,8	11,7	2,5	6,7	2,3	3,7	4,1	4,8	2,0
	1997	4,1	12,1	2,8	4,8	2,6	3,8	4,2	4,7	2,0
	1999	3,9	11,3	3,2	8,2	2,7	3,5	3,6	4,2	2,3
	2002	4,8	10,0	6,8	9,5	6,6	3,3	3,0	3,5	2,4
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	4,2	8,2	2,0	4,8	1,9	4,5	2,9	5,2	...
	1994	3,9	9,0	2,3	5,8	2,1	2,9	2,5	3,2	2,1
	1996	3,3	7,6	2,5	3,5	2,4	3,1	2,6	3,6	2,0
	1999	3,0	6,4	2,5	3,9	2,3	2,6	2,4	2,8	1,9
	2000	2,9	7,0	2,4	3,7	2,2	2,1	2,1	2,1	1,9
(Zonas urbanas)	1994	3,5	8,4	2,2	5,3	2,0	2,8	2,5	3,0	1,9
	1996	3,1	7,0	2,3	4,0	2,2	2,9	2,7	3,3	1,7
	1999	2,8	5,8	2,1	3,7	2,0	2,3	2,1	2,6	1,7
	2000	2,7	6,5	2,0	3,6	1,9	1,9	1,8	2,1	1,8
Perú	1997	3,0	6,9	2,6	4,3	2,5	2,3	2,2	2,5	2,7
	1999	2,4	4,9	2,3	4,3	2,1	2,1	2,0	2,3	1,8
República Dominicana	1997	4,4	10,8	2,7	4,8	2,6	4,7	4,6	4,8	2,2
	2000	4,9	15,0	3,0	8,6	2,4	4,9	5,0	5,0	2,0
	2002	4,9	14,8	2,4	3,2	2,3	4,6	4,6	5,0	2,5
Uruguay	1990	6,1	9,6	2,8	6,3	2,7	7,3	2,7	3,8	1,5
	1994	4,7	10,8	3,2	7,0	3,1	4,4	3,5	5,0	3,0
	1997	4,5	10,5	3,3	6,0	3,2	4,1	3,3	4,6	2,0
	1999	4,7	12,1	3,5	7,1	3,4	4,2	3,5	4,7	2,7
	2002	3,3	9,0	2,9	4,7	2,8	2,6	2,3	2,8	3,3
Venezuela (República Bolivariana de) h/	1990	5,1	9,5	2,5	3,9	2,5	4,9	4,8	5,4	3,4
	1994	4,2	7,6	2,2	6,4	2,0	4,2	3,9	4,7	2,9
	1997	4,1	9,5	1,7	2,8	1,7	4,3	4,6	5,0	2,2
	1999	3,4	7,7	2,1	4,3	2,0	3,3	3,8	3,8	2,0
	2002	3,4	8,9	3,3	3,3	1,7	1,7	3,9	3,6	1,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se incluyen los que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos, no se proveen cifras para el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.
- b/ Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.
- c/ Incluye a personas ocupadas en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.
- d/ En el año 1990, se incluyó a los asalariados sin contrato de trabajo bajo "Microempresas".
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH).
- h/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 12.2

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN FEMENINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003										
(En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Trabajadoras independientes no calificadas b/			Empleo doméstico
			Empleadoras	Asalariadas			Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicas	No profesionales ni técnicas				
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	4,2	13,2	3,5	5,8	3,4	4,5	5,7	4,2	2,0
	1994	5,5	23,0	4,4	5,5	4,2	6,4	4,2	6,5	3,2
	1997	4,9	21,1	3,7	5,3	3,4	4,7	3,4	4,9	2,5
	1999	3,7	12,6	3,2	4,6	3,0	4,3	3,4	4,4	2,4
	2002	2,7	11,9	2,0	3,3	1,8	2,7	2,1	2,9	1,7
Bolivia	1989	2,7	6,1	2,4	3,4	2,2	2,9	2,7	3,0	1,4
	1994	1,8	7,5	1,7	2,8	1,5	1,6	1,4	1,7	0,9
	1997	1,9	6,6	2,3	6,3	1,8	1,7	1,3	2,0	1,0
	1999	1,9	9,7	2,1	5,1	1,8	1,6	0,9	1,9	1,8
	2002	1,7	5,4	2,1	2,9	2,0	1,4	1,1	1,6	2,0
Brasil d/	1990	2,2	...	3,5	5,6	2,1	1,9	1,1	2,0	0,9
	1993	1,5	8,4	2,1	3,3	1,8	1,4	1,1	1,9	1,1
	1996	2,2	12,6	2,5	4,1	2,3	2,0	1,5	2,6	1,5
	1999	1,9	10,1	2,2	2,9	1,8	1,6	1,2	2,0	1,4
	2001	1,8	9,5	2,3	3,2	1,8	1,6	1,3	2,0	1,4
Chile e/	1990	2,6	10,2	2,3	3,1	2,2	2,9	2,9	3,9	1,4
	1994	3,2	17,2	2,7	3,8	2,6	3,3	3,2	3,3	2,0
	1996	3,6	20,4	3,1	5,6	2,8	3,9	3,3	4,1	2,0
	1998	3,7	16,8	3,2	6,2	2,6	4,2	3,6	4,4	2,2
	2000	3,5	14,0	3,3	6,6	2,8	3,9	3,6	4,0	2,4
	2003	4,0	18,2	3,0	4,6	2,8	4,0	3,4	4,2	2,4
Colombia f/	1991	2,2	1,9	2,3	1,2
	1994	2,0	1,9	2,0	1,7
	1997	2,0	1,9	2,0	1,6
	1999	1,3	1,1	1,3	2,1
	2002	1,0	0,8	1,0	1,7
Costa Rica	1990	2,1	5,0	3,1	4,5	2,9	1,7	1,6	1,8	1,5
	1994	2,8	6,5	2,9	4,0	2,8	2,5	1,7	2,9	1,6
	1997	2,4	5,3	2,9	3,7	2,8	2,1	2,1	2,1	1,8
	1999	2,7	6,1	3,6	5,6	3,3	2,1	2,0	2,1	1,7
	2002	3,0	9,2	3,6	5,2	3,4	2,0	2,3	1,9	2,0
Ecuador	1990	1,3	4,2	2,0	2,8	1,9	1,3	1,2	1,3	0,7
	1994	1,6	4,4	1,7	1,9	1,7	1,4	1,3	1,4	0,9
	1997	1,7	4,9	1,9	2,9	1,7	1,5	1,0	1,6	0,9
	1999	1,4	4,7	1,6	2,2	1,4	1,2	0,8	1,3	0,9
	2002	1,8	5,2	2,2	2,8	2,1	1,7	1,4	1,8	1,5
El Salvador	1995	1,7	5,2	1,6	2,9	1,5	1,6	1,3	1,7	0,9
	1997	2,1	5,9	2,3	7,2	2,0	1,7	1,5	1,8	1,8
	1999	2,4	7,6	2,2	4,2	2,1	2,0	1,4	2,2	2,0
	2001	2,2	6,3	2,1	2,4	2,1	2,0	1,3	2,2	1,9
Guatemala	1989	1,6	11,1	1,8	2,5	1,5	1,9	1,6	2,1	1,4
	1998	1,6	6,2	1,6	2,8	1,4	1,5	1,0	1,7	0,6
	2002	1,3	3,5	1,6	4,0	1,3	1,0	0,7	1,1	1,6
Honduras	1990	1,0	4,0	1,4	3,5	1,2	0,9	0,7	0,9	0,8
	1994	1,0	3,5	1,3	2,6	1,1	1,1	0,7	1,2	0,5
	1997	0,9	3,5	1,2	2,9	0,9	0,8	0,6	0,9	0,5
	1999	1,0	3,5	1,2	1,9	1,0	0,8	0,7	0,9	0,5
	2002	1,1	4,0	1,4	2,7	1,2	0,9	0,6	1,0	0,8
México g/	1989	...	9,4	2,3	1,7	2,6	1,3
	1994	...	11,6	1,8	1,1	2,1	1,1
	1996	1,7	11,3	1,6	2,6	1,4	1,3	1,1	1,4	1,1
	1998	1,9	12,5	1,6	3,2	1,5	1,6	1,5	1,6	1,1
	2000	1,7	9,7	1,7	2,7	1,6	1,4	1,3	1,5	1,1
	2002	2,0	10,3	2,0	5,0	1,7	1,7	1,9	1,7	1,3

(continúa)

Cuadro 12.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN FEMENINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO, 1990-2003 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Trabajadoras independientes no calificadas b/			Empleo doméstico
			Empleadoras	Asalariadas			Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicas	No profesionales ni técnicas				
Nicaragua	1993	2,5	7,0	2,4	2,8	2,3	2,6	2,6	2,7	2,1
	1998	1,8	6,0	2,2	5,4	1,6	1,6	1,3	1,7	1,5
	2001	1,8	8,0	1,9	2,0	1,9	1,6	1,2	1,7	1,4
Panamá	1991	2,0	8,4	3,1	6,7	2,6	1,6	1,1	1,8	1,3
	1994	1,9	10,1	2,9	6,0	2,5	2,3	1,9	2,5	1,2
	1997	2,4	9,3	3,2	5,5	2,7	2,3	1,8	2,5	1,4
	1999	2,5	8,5	3,5	7,1	2,9	2,0	1,5	2,1	2,2
	2002	2,5	8,8	4,4	5,9	4,2	1,6	1,5	1,6	2,5
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	2,0	8,2	1,8	3,1	1,5	2,9	1,9	3,2	0,8
	1994	2,1	8,0	2,2	4,0	1,8	1,9	1,3	2,1	1,2
	1996	1,8	6,1	2,1	2,8	2,0	1,9	1,4	2,1	1,2
	1999	2,2	5,7	2,5	5,1	2,4	2,1	1,9	2,0	1,7
	2000	1,8	5,2	2,2	2,4	2,1	1,3	1,2	1,3	1,5
(Zonas urbanas)	1994	2,0	7,9	2,0	3,9	1,7	1,8	1,1	2,0	1,2
	1996	1,7	6,1	2,0	2,8	2,0	1,7	1,3	1,9	1,1
	1999	1,9	5,4	2,3	4,0	2,0	1,6	1,6	1,7	1,6
	2000	1,5	5,6	2,0	2,5	1,9	1,2	1,0	1,3	1,4
Perú	1997	1,7	5,0	1,8	2,7	1,6	1,3	0,8	1,5	2,3
	1999	1,7	3,2	2,0	3,5	1,7	1,2	0,6	1,3	2,9
República Dominicana	1997	2,5	5,8	2,4	5,6	2,0	2,9	2,5	3,0	1,4
	2000	2,9	12,9	2,5	8,3	2,1	2,9	2,3	3,0	1,1
	2002	2,9	13,6	2,5	5,4	2,2	2,9	3,3	2,9	1,1
Uruguay	1990	1,9	6,3	2,0	3,1	1,9	1,8	1,2	1,9	1,5
	1994	2,2	9,4	2,5	2,5	2,5	2,2	1,5	2,5	1,7
	1997	2,4	7,4	2,6	2,9	2,6	2,3	1,6	2,6	1,8
	1999	2,5	10,4	2,9	4,1	2,8	2,5	1,9	2,7	2,1
	2002	2,2	7,9	2,3	3,4	2,2	1,8	1,4	2,0	1,9
Venezuela (República Bolivariana de) h/	1990	2,5	9,8	2,5	3,1	2,4	2,7	2,6	2,8	1,7
	1994	2,6	6,7	2,4	5,6	2,0	2,6	2,4	2,6	1,5
	1997	2,6	8,3	1,2	3,0	1,6	3,1	2,5	3,2	1,2
	1999	2,4	6,7	2,1	3,7	1,9	2,3	2,1	2,4	1,3
	2002	2,2	7,7	1,7	2,2	1,6	2,2	2,0	2,3	1,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se incluyen los que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos, no se proveen cifras para el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.
- b/ Se refiere a trabajadoras por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.
- c/ Incluye a personas ocupadas en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.
- d/ En el año 1990, se incluyó a las asalariadas sin contrato de trabajo bajo "Microempresas".
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIGH).
- h/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 13

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO Y EDAD, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990, 1994, 1997, 1999 Y 2003 a/

País	Sexo	Grupos de edad																								
		Total					15 a 24 años					25 a 34 años					35 a 44 años					45 años y más				
		1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003
Argentina (Gran Buenos Aires)	Total	5,9	13,0	14,3	14,7	19,0	13,0	22,8	24,2	24,3	33,8	4,9	10,0	12,7	12,0	15,4	4,1	10,5	10,6	11,6	18,1	3,8	10,3	11,6	12,9	14,1
	Hombres	5,7	11,5	12,4	13,4	18,5	11,5	20,3	21,1	22,8	31,7	5,0	8,8	10,1	11,3	15,3	3,9	7,3	8,6	8,0	14,8	4,2	10,5	11,1	12,7	16,7
	Mujeres	6,4	15,5	17,2	16,5	19,5	15,6	26,7	28,9	26,3	36,3	4,9	11,9	16,8	13,0	15,7	4,3	15,4	13,8	16,1	22,1	3,0	10,0	12,4	13,2	10,3
Bolivia	Total	9,4	3,2	3,7	7,1	6,4	17,4	5,8	6,4	15,3	11,2	8,5	2,8	3,7	6,3	7,1	5,1	2,0	2,9	3,8	4,6	6,6	2,1	2,1	3,7	3,3
	Hombres	9,5	3,4	3,7	6,0	5,2	18,2	6,3	5,8	12,5	9,2	7,5	2,5	3,4	4,8	4,8	5,5	2,1	3,1	2,3	3,2	8,5	2,9	2,8	4,9	4,0
	Mujeres	9,1	2,9	3,7	8,5	7,9	16,5	5,2	7,1	18,5	13,4	9,9	3,2	4,2	8,2	9,7	4,6	1,9	2,5	5,5	6,1	3,8	0,9	1,2	1,9	2,4
Brasil	Total	4,5	7,4	8,0	11,4	10,7	8,3	14,3	15,1	21,7	20,5	4,4	6,9	7,4	10,5	10,0	2,4	4,3	5,0	7,0	6,7	1,5	2,6	3,8	5,5	5,2
	Hombres	4,8	6,4	6,7	9,4	8,7	8,7	12,4	12,8	18,4	17,4	4,7	5,5	5,6	8,0	7,3	2,8	3,8	4,2	5,5	5,2	2,0	2,7	3,7	5,3	5,0
	Mujeres	3,9	8,9	10,0	14,1	13,4	7,7	17,0	18,2	26,2	24,6	3,8	8,8	9,8	13,8	13,4	1,7	5,0	6,2	9,0	8,7	0,6	2,5	4,0	5,8	5,5
Chile	Total	8,7	6,8	6,0	10,1	10,2	17,9	16,1	13,2	21,8	22,2	8,3	6,5	5,9	9,9	10,4	5,1	3,7	4,1	7,4	7,4	5,3	3,7	3,4	6,3	6,7
	Hombres	8,1	5,9	5,1	9,4	8,6	17,0	14,0	10,7	20,4	18,9	7,5	5,5	5,0	9,3	9,2	4,8	3,0	3,6	6,4	5,6	5,6	3,9	3,7	6,7	6,1
	Mujeres	9,7	8,4	7,3	11,2	12,5	19,1	19,3	17,1	23,7	26,5	9,8	8,4	7,4	10,9	12,1	5,8	4,9	5,0	8,9	10,0	4,7	3,4	2,9	5,6	7,6
Colombia	Total	9,3	8,0	11,8	19,2	17,2	19,7	16,2	24,3	36,6	32,0	8,3	7,6	11,8	17,8	17,0	4,2	4,7	6,5	13,2	11,4	3,8	3,3	5,8	10,3	10,1
	Hombres	6,7	5,4	9,7	16,2	14,8	15,3	11,9	20,7	32,0	28,7	5,5	4,4	8,6	14,0	13,4	2,8	3,4	5,4	10,5	9,2	3,7	2,9	6,1	10,6	10,4
	Mujeres	13,0	11,6	14,7	23,0	20,0	24,8	21,0	28,3	41,6	35,6	11,8	11,6	15,6	22,1	20,9	6,2	6,3	7,9	16,4	13,8	3,9	4,2	5,1	9,7	9,7
Costa Rica	Total	5,3	4,2	5,8	6,1	6,8	10,5	9,7	13,0	14,8	16,4	4,9	3,8	4,4	5,3	5,1	2,5	2,3	3,9	3,0	3,7	2,9	1,6	3,0	2,3	3,3
	Hombres	4,9	3,7	5,3	5,3	6,2	9,8	8,6	11,4	14,8	14,7	4,1	3,7	3,6	3,8	4,4	2,3	1,5	3,9	2,1	3,0	3,1	1,6	3,1	1,9	3,4
	Mujeres	6,2	5,1	6,7	7,4	7,7	11,6	11,6	16,2	14,9	19,0	6,2	4,0	5,6	7,4	6,0	2,8	3,5	4,0	4,2	4,6	2,3	1,5	2,8	3,2	3,3
Ecuador	Total	6,1	7,1	9,2	14,2	9,1	13,5	14,9	18,9	25,9	17,4	6,4	6,6	9,7	13,6	9,2	2,7	3,9	4,7	9,0	5,9	1,3	2,7	3,8	8,3	5,2
	Hombres	4,2	5,7	6,9	10,5	5,8	11,2	12,7	15,1	20,0	12,0	3,2	4,4	6,4	8,0	4,7	1,7	3,1	3,6	5,5	3,1	1,3	2,9	3,4	8,6	4,3
	Mujeres	9,2	9,2	12,6	19,5	13,9	17,2	17,8	24,5	33,9	25,5	11,3	9,8	14,3	21,3	15,3	4,5	5,2	6,3	13,6	9,8	1,4	2,2	4,6	7,7	6,7
El Salvador	Total	9,9	6,8	7,3	6,9	6,2	19,3	14,0	14,6	13,9	11,7	9,2	6,8	7,7	6,1	5,9	5,7	2,6	4,4	4,4	4,5	4,3	3,4	3,5	3,8	3,9
	Hombres	10,0	8,3	8,8	8,9	8,6	17,7	15,4	16,1	16,2	14,2	8,4	7,5	8,1	6,0	7,3	7,0	3,7	6,1	6,0	6,9	6,5	5,4	5,4	6,1	6,7
	Mujeres	9,7	4,9	5,5	4,6	3,5	21,3	11,9	12,4	10,6	8,4	10,0	6,0	7,2	5,1	4,3	4,3	1,5	2,5	2,6	2,0	1,3	0,6	0,8	1,0	0,8
Guatemala	Total	3,5	2,8	6,0	7,1	4,8	11,1	2,9	3,8	3,8	1,6	1,8	3,2	1,2	0,9	3,4
	Hombres	3,3	3,6	5,2	7,2	6,0	8,2	2,6	4,5	3,3	1,5	2,4	2,7	1,4	1,3	5,1
	Mujeres	3,8	1,9	7,0	7,0	3,4	14,6	3,4	2,8	4,6	1,8	1,0	3,8	0,9	0,4	0,9
Honduras	Total	6,9	4,1	5,2	5,3	7,5	11,2	7,1	8,9	9,0	12,0	7,0	3,6	5,4	4,7	8,9	4,3	3,1	2,9	2,9	4,4	3,7	1,3	2,3	3,0	3,6
	Hombres	7,6	4,5	5,9	6,2	7,2	11,5	7,5	9,2	10,3	10,9	6,6	3,7	5,6	5,3	7,8	6,0	4,1	4,5	3,6	5,0	5,3	2,0	3,4	4,3	4,2
	Mujeres	5,9	3,4	4,3	4,0	7,8	10,7	6,6	8,5	7,4	13,4	7,6	3,6	5,2	4,1	10,2	2,0	1,3	0,8	2,2	3,8	0,7	0,1	0,7	1,1	2,7
México	Total	3,3	4,5	5,1	3,2	3,4	8,1	9,4	12,5	7,4	7,2	2,4	2,9	3,2	2,8	3,5	0,7	2,3	1,7	1,5	1,5	0,8	3,1	2,8	1,1	1,8
	Hombres	3,4	5,1	5,8	3,6	3,9	8,4	10,0	13,8	8,1	8,2	2,5	3,0	3,4	3,1	3,9	0,9	2,8	2,1	1,8	1,6	1,0	4,2	3,9	1,5	2,2
	Mujeres	3,1	3,6	3,9	2,6	2,6	7,6	8,3	10,3	6,2	5,4	2,0	2,7	2,9	2,3	2,9	0,2	1,2	1,0	0,8	1,3	0,1	0,4	0,5	0,4	1,0
Nicaragua	Total	...	14,1	13,1	13,8	12,5	...	20,1	20,9	20,9	21,5	...	14,5	13,7	11,0	10,2	...	11,1	9,2	12,3	9,7	...	10,6	7,4	10,5	6,3
	Hombres	...	16,5	13,6	14,0	13,1	...	20,3	18,9	17,9	21,8	...	17,3	13,2	10,3	10,7	...	13,5	11,2	14,3	9,6	...	13,9	10,1	12,9	6,6
	Mujeres	...	10,8	12,6	13,6	11,7	...	19,7	23,8	25,8	20,9	...	10,6	14,3	11,7	9,6	...	7,9	7,2	9,9	9,8	...	6,3	3,9	7,0	5,8
Panamá	Total	18,6	15,7	15,4	13,1	19,4	35,1	31,0	31,5	26,9	35,1	20,6	15,1	14,9	12,7	17,6	9,5	9,7	9,7	8,3	11,3	6,9	5,9	6,9	5,6	17,1
	Hombres	15,9	12,4	13,3	10,6	16,5	31,9	27,5	29,2	22,5	31,7	16,5	9,7	10,9	8,7	14,1	7,4	6,8	7,5	6,1	8,3	7,0	5,7	7,4	6,1	14,3
	Mujeres	22,8	21,0	18,2	17,0	23,5	39,9	36,9	34,6	33,5	40,3	26,3	22,7	20,1	18,8	22,0	12,5	14,0	12,2	11,0	15,3	6,5	6,2	6,0	4,6	21,1
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	Total	6,3	4,4	8,4	10,1	11,5	15,5	8,3	17,8	19,5	21,4	4,8	3,2	5,2	6,7	11,8	2,3	2,9	3,4	5,9	4,5	1,4	2,6	5,8	8,4	6,4
	Hombres	6,2	5,1	8,2	10,2	11,0	14,7	9,9	17,4	21,6	21,0	5,0	3,4	4,2	5,2	9,5	3,2	3,1	1,9	6,2	3,0	2,0	3,9	7,6	8,8	8,5
	Mujeres	6,5	3,5	8,7	10,1	12,1	16,5	6,5	18,2	17,1	21,8	4,7	3,0	6,5	8,8	14,3	1,1	2,6	5,1	5,5	6,2	0,0	0,7	3,4	7,7	3,9

(continúa)

Cuadro 13 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO Y EDAD, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990, 1994, 1997, 1999 Y 2003 ^{a/}																										
País	Sexo	Grupos de edad																								
		Total					15 a 24 años					25 a 34 años					35 a 44 años					45 años y más				
		1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003
Perú	Total	10,7	7,3	7,2	18,2	15,3	12,4	7,4	5,5	6,4	6,0	4,1	4,7	10,5	4,5	5,6
	Hombres	8,1	7,0	6,8	15,3	15,3	12,6	4,8	4,7	5,2	2,6	3,8	3,9	9,0	5,0	6,0
	Mujeres	13,8	7,7	7,6	21,3	15,2	12,2	10,3	6,3	7,7	9,7	4,5	5,7	13,0	3,7	5,0
República Dominicana	Total	19,7	17,0	17,0	13,8	18,0	34,1	30,6	27,8	18,8	32,3	17,3	16,1	15,7	13,7	18,2	9,2	10,0	10,2	13,3	13,5	7,4	7,4	8,7	9,4	7,7
	Hombres	11,3	12,1	10,9	8,8	12,0	22,3	24,0	20,0	12,9	25,0	9,2	10,4	8,0	8,0	10,3	5,0	6,3	6,9	7,5	7,1	4,0	5,8	6,1	7,1	6,8
	Mujeres	31,5	24,8	26,0	20,7	26,6	47,3	39,9	38,2	27,1	42,6	27,7	23,4	25,5	20,4	27,8	15,8	15,5	15,0	20,0	22,2	15,4	11,5	14,8	14,0	9,6
Uruguay	Total	8,9	9,7	11,4	11,2	16,9	24,4	24,7	26,3	25,8	37,9	8,2	8,4	10,5	10,0	16,4	4,3	5,5	7,1	7,2	12,1	3,5	3,8	5,3	6,1	9,6
	Hombres	7,3	7,3	8,9	8,6	13,4	22,2	19,8	21,8	21,4	32,0	6,0	4,9	7,5	7,2	12,7	2,5	3,4	4,4	3,7	7,8	3,0	3,4	4,4	4,9	7,7
	Mujeres	11,1	13,0	14,7	14,5	21,1	27,5	31,5	32,7	31,9	46,1	11,0	12,8	14,3	13,5	20,9	6,4	7,8	10,2	11,1	16,8	4,4	4,5	6,7	7,7	12,1
Venezuela (República Bolivariana de) ^{b/}	Total	10,2	8,9	10,6	14,5	16,8	19,3	17,1	19,8	25,7	28,0	11,3	9,1	10,6	14,7	17,6	5,9	5,3	6,8	10,2	11,9	4,5	4,2	5,5	7,8	10,7
	Hombres	11,2	9,1	9,0	13,6	14,4	19,9	17,2	16,4	22,2	23,7	12,3	8,8	8,3	12,8	13,4	6,9	5,9	5,7	10,1	10,1	5,5	4,9	5,6	9,4	11,2
	Mujeres	8,4	8,3	13,6	16,1	20,3	18,0	17,0	26,6	32,6	34,8	9,6	9,6	14,3	17,7	23,3	4,0	4,2	8,5	10,4	14,4	1,7	2,5	5,3	4,7	9,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Los años exactos a los que corresponden las encuestas de cada país figuran, por ejemplo, en el cuadro 11.

b/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 14

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO Y NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990, 1994, 1997, 1999 Y 2003 a/																										
País	Sexo	Años de instrucción																								
		Total					0 a 5 años					6 a 9 años					10 a 12 años					13 y más años				
		1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003
Argentina b/ (Gran Buenos Aires)	Total	5,9	13,0	14,3	14,7	19,0	6,8	14,0	16,8	17,0	17,1	5,9	...	16,6	17,4	20,7	3,0	15,0	14,4	14,5	21,5	...	7,7	9,4	10,2	14,3
	Hombres	5,7	11,5	12,4	13,4	18,5	6,1	13,1	15,6	19,4	23,5	4,7	...	15,7	15,8	20,6	3,4	12,1	9,8	12,2	18,5	...	5,9	7,6	8,1	13,4
	Mujeres	6,4	15,5	17,2	16,5	19,5	8,5	15,8	18,7	13,5	6,5	7,4	...	18,4	20,5	20,9	2,5	19,7	21,3	17,8	25,2	...	9,5	11,3	12,0	15,1
Bolivia	Total	9,4	3,2	3,7	7,1	6,4	7,1	2,4	2,7	3,4	4,2	9,3	2,8	2,1	7,9	7,3	13,1	3,7	5,4	10,5	7,5	8,1	3,8	4,1	6,0	7,0
	Hombres	9,5	3,4	3,7	6,0	5,2	9,0	3,1	3,2	2,8	4,0	8,2	3,1	1,8	7,0	5,9	12,5	3,9	4,6	7,5	6,0	7,9	3,1	4,7	5,5	4,6
	Mujeres	9,1	2,9	3,7	8,5	7,9	5,4	1,7	2,3	3,9	4,4	11,1	2,4	2,6	9,2	9,2	14,1	3,4	6,8	15,7	9,8	8,4	5,0	3,1	6,7	10,0
Brasil	Total	4,5	7,4	8,0	11,4	10,7	4,2	6,5	7,5	9,9	9,6	6,2	11,0	11,3	15,6	14,2	4,5	7,3	7,5	12,2	11,3	1,8	3,3	3,4	5,2	4,8
	Hombres	4,8	6,4	6,7	9,4	8,7	4,8	5,9	6,5	8,5	8,1	6,2	8,8	9,0	12,7	11,5	4,6	5,9	5,8	9,5	8,6	1,6	2,4	2,6	4,0	3,9
	Mujeres	3,9	8,9	10,0	14,1	13,4	3,1	7,4	9,2	12,1	12,1	6,2	14,4	14,8	20,1	18,3	4,5	8,8	9,3	14,9	14,2	2,1	4,2	4,2	6,4	5,6
Chile	Total	8,7	6,8	6,0	10,1	10,2	9,3	5,9	6,7	12,8	10,9	10,1	8,1	6,7	12,2	10,7	9,2	7,8	6,6	10,2	11,3	6,3	4,4	4,0	7,1	7,8
	Hombres	8,1	5,9	5,1	9,4	8,6	9,3	5,8	6,8	14,0	10,6	10,3	7,4	5,9	12,1	9,7	7,9	6,5	5,2	8,7	9,0	4,9	3,3	3,4	5,7	6,3
	Mujeres	9,7	8,4	7,3	11,2	12,5	9,2	6,2	6,6	10,7	11,4	9,5	9,6	8,1	12,5	12,5	11,7	10,2	9,1	12,5	14,8	8,0	6,0	4,8	8,8	9,6
Colombia	Total	9,3	8,0	11,8	19,2	17,2	6,6	6,2	9,3	15,3	13,1	11,3	9,7	14,5	23,2	19,3	12,4	10,2	14,7	23,2	21,1	7,4	5,2	7,6	14,1	16,1
	Hombres	6,7	5,4	9,7	16,2	14,8	5,1	4,7	8,7	13,8	11,4	8,2	6,3	11,5	19,2	16,9	8,1	6,5	11,4	18,6	17,6	0,6	3,4	5,9	12,4	14,5
	Mujeres	13,0	11,6	14,7	23,0	20,0	9,0	8,5	10,4	17,4	15,4	16,3	14,9	18,6	28,2	22,2	17,6	14,6	18,4	28,2	24,9	9,1	7,3	9,6	16,0	17,6
Costa Rica	Total	5,3	4,2	5,8	6,1	6,8	6,4	5,0	5,5	9,2	9,7	6,0	5,0	7,3	7,8	8,4	5,7	4,1	6,1	4,7	6,2	3,0	2,7	3,4	2,8	3,4
	Hombres	4,9	3,7	5,3	5,3	6,2	6,9	4,3	4,8	6,8	11,1	5,4	3,7	6,4	7,1	7,3	4,6	4,3	5,4	3,6	4,6	2,3	2,7	3,2	2,1	2,7
	Mujeres	6,2	5,1	6,7	7,4	7,7	5,2	6,6	7,2	13,3	7,1	7,3	7,5	8,9	9,3	10,4	7,2	3,9	7,1	6,1	8,3	3,9	2,6	3,6	3,6	4,1
Ecuador	Total	6,1	7,1	9,2	14,2	9,1	2,6	5,0	5,9	9,0	7,5	4,8	5,7	7,8	13,8	9,4	10,3	10,2	12,9	19,0	11,1	6,1	6,7	8,1	11,5	7,3
	Hombres	4,2	5,7	6,9	10,5	5,8	3,0	4,9	6,0	8,5	6,1	3,3	4,9	6,4	10,9	5,7	6,8	7,8	9,2	12,8	6,6	4,2	4,9	5,4	7,7	5,0
	Mujeres	9,2	9,2	12,6	19,5	13,9	2,0	5,0	5,9	9,5	9,4	8,0	7,3	10,5	18,8	15,8	14,9	13,6	18,3	27,0	17,2	8,7	9,0	11,7	16,1	10,3
El Salvador	Total	9,9	6,8	7,3	6,9	6,2	8,1	6,0	5,3	4,9	5,4	9,9	6,8	8,0	7,4	5,9	14,6	9,2	9,6	9,3	8,2	7,6	4,9	6,4	6,1	4,9
	Hombres	10,0	8,3	8,8	8,9	8,6	11,0	9,2	8,8	7,8	9,8	9,1	8,1	9,4	9,4	8,6	11,8	9,6	9,8	11,0	9,6	6,9	4,7	5,5	6,5	5,2
	Mujeres	9,7	4,9	5,5	4,6	3,5	5,2	2,6	1,6	1,9	1,3	11,2	4,8	5,8	4,7	2,2	17,8	8,7	9,3	7,3	6,6	8,6	5,2	7,4	5,7	4,5
Guatemala	Total	3,5	2,8	6,0	2,3	1,7	2,0	4,3	2,9	7,0	5,9	5,4	9,1	2,3	1,7	6,9
	Hombres	3,3	3,6	5,2	2,3	3,0	1,5	4,1	4,1	5,8	5,3	5,1	8,2	2,3	0,8	5,8
	Mujeres	3,8	1,9	7,0	2,3	0,3	2,6	4,7	1,1	8,8	6,5	5,8	10,3	2,3	3,3	8,8
Honduras	Total	6,9	4,1	5,2	5,3	7,5	5,1	3,0	4,8	4,8	5,5	7,7	5,0	5,4	6,3	7,3	9,3	4,4	6,3	4,3	9,6	6,3	2,8	3,6	4,0	9,0
	Hombres	7,6	4,5	5,9	6,2	7,2	7,3	3,8	6,6	7,0	5,8	8,1	5,9	6,0	6,9	8,0	8,0	3,8	5,9	4,9	7,6	5,3	2,3	3,3	3,3	7,1
	Mujeres	5,9	3,4	4,3	4,0	7,8	1,7	1,7	2,2	2,0	5,1	6,9	3,5	4,5	5,5	6,3	10,6	5,3	6,7	3,8	11,4	7,8	3,6	4,0	5,0	11,2
México	Total	3,3	4,5	5,1	3,2	3,4	1,3	3,9	3,5	2,1	1,9	4,3	5,0	5,8	2,6	2,8	3,8	4,9	5,2	3,7	3,7	2,4	2,6	4,6	3,9	4,4
	Hombres	3,4	5,1	5,8	3,6	3,9	1,6	5,4	4,8	3,2	2,8	4,4	5,7	6,7	3,0	3,5	4,4	5,3	5,7	4,0	4,1	2,1	2,8	4,2	3,9	4,6
	Mujeres	3,1	3,6	3,9	2,6	2,6	0,4	1,2	1,2	0,5	0,5	4,0	3,7	4,3	1,9	1,7	2,7	4,2	4,2	3,2	3,1	3,3	5,2	5,5	3,9	4,1
Nicaragua	Total	...	14,1	13,1	13,8	12,5	...	14,1	10,9	11,8	8,7	...	15,0	14,3	14,2	14,3	...	12,6	14,9	18,5	16,6	...	13,6	11,6	12,4	11,5
	Hombres	...	16,5	13,6	14,0	13,1	...	16,4	12,5	13,8	9,1	...	16,8	14,7	13,0	15,4	...	14,8	15,1	19,2	19,5	...	19,2	10,7	10,8	9,8
	Mujeres	...	10,8	12,6	13,6	11,7	...	11,1	9,0	9,0	8,0	...	12,0	13,8	16,2	12,5	...	10,2	14,7	17,8	14,1	...	4,8	12,7	14,0	13,6
Panamá	Total	18,6	15,7	15,4	13,1	19,4	10,7	9,6	12,1	7,2	40,3	18,4	16,0	16,6	14,2	19,1	24,9	19,7	18,2	16,2	20,2	14,8	12,5	11,3	9,6	13,2
	Hombres	15,9	12,4	13,3	10,6	16,5	9,6	9,6	13,6	7,1	34,1	16,5	13,2	15,6	12,4	16,9	20,5	13,9	14,4	11,7	16,2	12,9	9,9	8,2	7,1	9,9
	Mujeres	22,8	21,0	18,2	17,0	23,5	13,9	9,3	9,1	7,7	49,7	22,5	21,6	18,4	18,0	23,4	30,4	27,7	23,5	22,7	25,5	16,6	15,1	14,2	12,0	16,1
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	Total	6,3	4,4	8,4	10,1	11,5	4,4	5,2	7,8	16,3	10,3	6,4	5,2	9,4	9,8	12,5	8,4	4,5	10,6	11,1	13,8	3,7	1,3	3,4	5,3	7,8
	Hombres	6,2	5,1	8,2	10,2	11,0	4,2	7,6	9,3	19,8	9,5	6,7	6,2	9,0	9,8	13,9	7,9	4,1	8,8	9,9	13,9	2,9	1,1	3,4	7,1	4,9
	Mujeres	6,5	3,5	8,7	10,1	12,1	4,7	2,5	5,9	12,0	11,0	6,0	3,8	9,8	9,7	13,7	9,1	4,9	12,9	12,8	13,7	4,8	1,5	3,5	12,0	10,8

(continúa)

Cuadro 14 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO Y NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990, 1994, 1997, 1999 Y 2003 a/																										
País	Sexo	Años de instrucción																								
		Total					0 a 5 años					6 a 9 años					10 a 12 años					13 y más años				
		1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003	1990	1994	1997	1999	2003
Perú	Total	10,7	7,3	7,2	9,4	4,9	5,2	11,5	10,0	6,4	12,8	7,1	9,3	8,1	7,7	6,5
	Hombres	8,1	7,0	6,8	7,5	5,8	5,8	10,4	10,1	6,3	8,9	7,0	8,3	5,6	5,8	6,0
	Mujeres	13,8	7,7	7,6	11,0	4,1	4,7	12,9	9,8	6,5	18,2	7,3	10,9	11,4	10,2	7,3
República Dominicana	Total	19,7	17,0	17,0	13,8	18,0	15,6	13,6	15,3	12,0	14,7	19,6	18,7	18,9	13,5	19,4	25,2	21,4	18,1	16,4	21,7	16,6	13,4	15,1	12,9	15,0
	Hombres	11,3	12,1	10,9	8,8	12,0	7,0	10,2	10,4	8,5	9,2	11,1	12,8	11,2	8,3	13,2	15,5	14,3	11,5	9,1	14,4	11,2	10,9	10,0	9,8	10,5
	Mujeres	31,5	24,8	26,0	20,7	26,6	30,5	21,3	24,8	18,7	25,8	34,7	29,8	32,7	22,4	31,4	37,2	30,5	26,2	25,1	30,5	21,8	16,1	19,5	15,8	18,9
Uruguay	Total	8,9	9,7	11,4	11,2	16,9	5,6	5,7	8,1	8,9	13,2	10,2	12,4	13,2	13,1	19,1	10,0	9,5	11,8	11,4	17,8	5,9	4,9	6,8	6,3	12,2
	Hombres	7,3	7,3	8,9	8,6	13,4	5,6	5,2	6,7	7,4	10,6	8,4	9,1	10,1	9,8	15,1	7,5	6,1	8,9	8,6	13,3	4,4	4,0	4,8	4,3	10,2
	Mujeres	11,1	13,0	14,7	14,5	21,1	5,6	6,5	10,7	11,9	18,3	13,0	17,5	18,1	18,2	25,3	12,8	13,3	14,9	14,5	22,7	7,2	5,6	8,3	7,8	13,8
Venezuela (República Bolivariana de) c/	Total	10,2	8,9	10,6	14,5	16,8	9,7	7,9	9,4	11,7	13,4	12,1	9,8	11,0	15,5	17,3	9,3	9,1	12,7	16,2	18,8	6,1	6,7	8,4	12,7	16,6
	Hombres	11,2	9,1	9,0	13,6	14,4	11,4	8,2	7,9	12,2	12,1	12,9	10,4	9,5	14,8	14,8	9,7	9,0	10,6	13,7	16,0	5,6	5,9	6,6	11,2	14,3
	Mujeres	8,4	8,3	13,6	16,1	20,3	5,4	7,1	13,4	10,6	16,2	10,1	8,5	14,3	17,0	21,6	8,7	9,2	15,5	19,7	22,3	6,7	7,8	10,4	14,0	18,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Los años exactos a los que corresponden las encuestas de cada país figuran, por ejemplo, en el cuadro 11.

b/ En 1990, los tramos de años de estudio que contienen datos corresponden a los tramos 0 a 6, 7 a 9 y 10 años y más, respectivamente. En 1994, en cambio, el tramo de 0 a 5 años representa, en realidad, el tramo entre 0 y 9 años de estudio.

c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 15

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): MAGNITUD DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA, 1990-2003											
(En porcentajes)											
País	Año	Población bajo la línea de pobreza ^{a/}					Población bajo la línea de indigencia				
		Total país	Zonas urbanas			Zonas rurales	Total país	Zonas urbanas			Zonas rurales
			Total	Área metropolitana	Resto urbano			Total	Área metropolitana	Resto urbano	
Argentina	1990	21,2	5,2
	1994	...	16,1	13,2	21,2	3,4	2,6	4,9	...
	1997	17,8	4,8
	1999	...	23,7	19,7	28,5	6,7	4,8	8,8	...
	2002	...	45,4	41,5	49,6	20,9	18,6	23,3	...
Bolivia	1989	...	52,6	23,0
	1994	...	51,6	19,8
	1997	62,1	52,3	78,5	37,2	22,6	61,5
	1999	60,6	48,7	45,0	63,9	80,7	36,4	19,8	17,5	29,0	64,7
	2002	62,4	52,0	47,0	58,2	79,2	37,1	21,3	18,8	25,0	62,9
Brasil	1990	48,0	41,2	70,6	23,4	16,7	46,1
	1993	45,3	40,3	63,0	20,2	15,0	38,8
	1996	35,8	30,6	55,6	13,9	9,6	30,2
	1999	37,5	32,9	55,3	12,9	9,3	27,1
	2001	37,5	34,1	55,2	13,2	10,4	28,0
Chile	1990	38,6	38,4	32,1	42,0	39,5	12,9	12,4	9,3	13,9	15,2
	1994	27,5	26,9	18,5	33,2	30,9	7,6	7,1	4,2	9,3	9,8
	1996	23,2	21,8	13,6	27,6	30,6	5,7	5,0	2,4	6,9	9,4
	1998	21,7	20,7	15,4	22,5	27,6	5,6	5,1	3,5	5,5	8,7
	2000	20,6	20,1	14,5	23,5	23,8	5,7	5,3	4,0	6,0	8,3
	2003	18,8	18,6	12,9	22,7	20,1	4,7	4,5	2,9	5,6	6,2
Colombia	1991	56,1	52,7	60,7	26,1	20,0	34,3
	1994	52,5	45,4	37,6	48,2	62,4	28,5	18,6	13,6	20,4	42,5
	1997	50,9	45,0	33,5	48,9	60,1	23,5	17,2	11,3	19,1	33,4
	1999	54,9	50,6	43,1	53,1	61,8	26,8	21,9	19,6	22,7	34,6
	2002	51,1	50,6	39,8	53,8	52,0	24,6	23,7	17,1	25,7	26,7
Costa Rica	1990	26,3	24,9	22,8	27,7	27,3	9,9	6,4	4,9	8,4	12,5
	1994	23,1	20,7	19,1	22,7	25,0	8,0	5,7	4,6	7,1	9,7
	1997	22,5	19,3	18,8	20,1	24,8	7,8	5,5	5,7	5,3	9,6
	1999	20,3	18,1	17,5	18,7	22,3	7,8	5,4	4,3	6,5	9,8
	2002	20,3	17,5	16,8	18,0	24,3	8,2	5,5	5,5	5,6	12,0
Ecuador	1990	...	62,1	26,2
	1994	...	57,9	25,5
	1997	...	56,2	22,2
	1999	...	63,5	31,3
	2002	...	49,0	19,4
El Salvador	1995	54,2	45,8	34,7	55,1	64,4	21,7	14,9	8,8	20,1	29,9
	1997	55,5	44,4	29,8	56,6	69,2	23,3	14,8	6,3	21,9	33,7
	1999	49,8	38,7	29,8	48,7	65,1	21,9	13,0	7,7	19,0	34,3
	2001	48,9	39,4	32,1	47,7	62,4	22,1	14,3	9,9	19,2	33,3
Guatemala	1989	69,4	53,6	77,7	42,0	26,4	50,2
	1998	61,1	49,1	69,0	31,6	16,0	41,8
	2002	60,2	45,3	68,0	30,9	18,1	37,6
Honduras	1990	80,8	70,4	59,9	79,5	88,1	60,9	43,6	31,0	54,5	72,9
	1994	77,9	74,5	68,7	80,4	80,5	53,9	46,0	38,3	53,7	59,8
	1997	79,1	72,6	68,0	77,2	84,2	54,4	41,5	35,5	48,6	64,0
	1999	79,7	71,7	64,4	78,8	86,3	56,8	42,9	33,7	51,9	68,0
	2002	77,3	66,7	56,9	74,4	86,1	54,4	36,5	25,1	45,3	69,5

(continúa)

Cuadro 15 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): MAGNITUD DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA, 1990-2003											
(En porcentajes)											
País	Año	Población bajo la línea de pobreza a/					Población bajo la línea de indigencia				
		Total país	Zonas urbanas			Zonas rurales	Total país	Zonas urbanas			Zonas rurales
			Total	Área metropolitana	Resto urbano			Total	Área metropolitana	Resto urbano	
México	1989	47,7	42,1	56,7	18,7	13,1	27,9
	1994	45,1	36,8	56,5	16,8	9,0	27,5
	1996	52,9	46,1	62,8	22,0	14,3	33,0
	1998	46,9	38,9	58,5	18,5	9,7	31,1
	2000	41,1	32,3	54,7	15,2	6,6	28,5
	2002	39,4	32,2	51,2	12,6	6,9	21,9
Nicaragua	1993	73,6	66,3	58,3	73,0	82,7	48,4	36,8	29,5	43,0	62,8
	1998	69,9	64,0	57,0	68,9	77,0	44,6	33,9	25,8	39,5	57,5
	2001	69,3	63,8	50,8	72,0	76,9	42,3	33,2	24,3	38,9	54,9
Panamá	1991	43,1	39,9	38,2	46,3	50,7	19,4	16,2	15,6	18,3	26,8
	1994	36,1	30,8	28,3	41,2	49,2	15,7	11,4	9,7	18,1	26,2
	1997	33,2	29,7	27,9	37,3	41,9	13,0	10,7	9,9	13,8	18,8
	1999	30,2	25,8	24,2	32,5	41,5	10,7	8,1	7,5	10,6	17,2
	2002	34,0	25,3	48,5	17,4	8,9	31,5
Paraguay	1990	43,2	13,1
	1994	...	49,9	42,2	59,3	18,8	12,8	26,1	...
	1996	...	46,3	39,2	55,9	16,3	9,8	25,2	...
	1999	60,6	49,0	39,5	61,3	73,9	33,9	17,4	9,2	28,0	52,8
	2001	61,0	50,1	42,7	59,1	73,6	33,2	18,4	10,4	28,1	50,3
Perú	1997	47,6	33,7	72,7	25,1	9,9	52,7
	1999	48,6	36,1	72,5	22,4	9,3	47,3
	2001 ^{c/}	54,8	42,0	78,4	24,4	9,9	51,3
República Dominicana	1997	37,2	35,6	39,4	14,4	11,8	17,9
	2000	46,9	42,3	55,2	22,1	18,5	28,7
	2002	44,9	41,9	50,7	20,3	17,1	26,3
Uruguay	1990	...	17,9	11,3	24,3	3,4	1,8	5,0	...
	1994	...	9,7	7,5	11,8	1,9	1,5	2,2	...
	1997	...	9,5	8,6	10,3	1,7	1,5	1,8	...
	1999	...	9,4	9,8	9,0	1,8	1,9	1,6	...
	2002	...	15,4	15,1	15,8	2,5	2,7	2,2	...
Venezuela (República Bolivariana de) ^{b/}	1990	39,8	38,6	29,2	41,2	46,0	14,4	13,1	8,0	14,5	21,3
	1994	48,7	47,1	25,8	52,0	55,6	19,2	17,1	6,1	19,6	28,3
	1997	48,0	20,5
	1999	49,4	21,7
	2002	48,6	22,2
América Latina ^{d/}	1990	48,3	41,4	65,4	22,5	15,3	40,4
	1994	45,7	38,7	65,1	20,8	13,6	40,8
	1997	43,5	36,5	63,0	19,0	12,3	37,6
	1999	43,8	37,1	63,7	18,5	11,9	38,3
	2000	42,5	35,9	62,5	18,1	11,7	37,8
	2001	43,2	37,0	62,3	18,5	12,2	38,0
	2002	44,0	38,4	61,8	19,4	13,5	37,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Incluye a las personas bajo la línea de indigencia o en situación de extrema pobreza.

b/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

c/ Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. Estos valores no son comparables con los de años anteriores debido al cambio del marco muestral de la encuesta de hogares. De acuerdo con el INEI, las nuevas cifras presentan una sobreestimación relativa respecto de la metodología anterior del 25% en la pobreza y del 10% en la indigencia.

d/ Estimación para 19 países de la región.

Cuadro 16

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): LÍNEAS DE INDIGENCIA (LI) Y DE POBREZA (LP)												
(En valores mensuales por persona)												
País	Año	Período de referencia de los ingresos	Moneda a/	Urbano		Rural		Cambio b/	Urbano		Rural	
				LI	LP	LI	LP		LI	LP	LI	LP
				Moneda corriente					Dólares			
Argentina	1990 c/	sep.	A	255 928	511 856	5 791,0	44,2	88,4
	1994	sep.	\$	72	144	1,0	72,0	143,9
	1997 c/	sep.	\$	76	151	1,0	75,5	151,0
	1999	sep.	\$	72	143	1,0	71,6	143,3
	2002	oct.	\$	99	198	3,6	27,5	55,0
Bolivia	1989	oct.	Bs	68	137	2,9	23,8	47,5
	1994	jun.-nov.	Bs	120	240	4,7	25,7	51,4
	1997	may.	Bs	155	309	125	219	5,3	29,4	58,8	23,9	41,8
	1999	oct.-nov.	Bs	167	333	130	228	5,9	28,0	56,1	21,9	38,3
	2002	oct.-nov.	Bs	167	334	133	234	7,4	22,6	45,2	18,1	31,6
Brasil	1990	sep.	Cr\$	3 109	6 572	2 634	4 967	75,5	41,2	87,0	34,9	65,7
	1993	sep.	Cr\$	3 400	7 391	2 864	5 466	111,2	30,6	66,5	25,8	49,2
	1996	sep.	R\$	44	104	38	76	1,0	43,6	102,3	37,2	74,9
	1999	sep.	R\$	51	126	43	91	1,9	26,7	66,2	22,7	48,1
	2001	oct.	R\$	58	142	50	105	2,7	21,2	51,9	18,2	38,2
Chile	1990	nov.	Ch\$	9 297	18 594	7 164	12 538	327,4	28,4	56,8	21,9	38,3
	1994	nov.	Ch\$	15 050	30 100	11 597	20 295	413,1	36,4	72,9	28,1	49,1
	1996	nov.	Ch\$	17 136	34 272	13 204	23 108	420,0	40,8	81,6	31,4	55,0
	1998	nov.	Ch\$	18 944	37 889	14 598	25 546	463,3	40,9	81,8	31,5	55,1
	2000	nov.	Ch\$	20 281	40 562	15 628	27 349	525,1	38,6	77,2	29,8	52,1
	2003	nov.	Ch\$	21 856	43 712	16 842	29 473	625,5	34,9	69,9	26,9	47,1
Colombia	1991	ago.	Col\$	18 093	36 186	14 915	26 102	645,6	28,0	56,1	23,1	40,4
	1994	ago.	Col\$	31 624	63 249	26 074	45 629	814,8	38,8	77,6	32,0	56,0
	1997	ago.	Col\$	53 721	107 471	44 333	77 583	1 141,0	47,1	94,2	38,9	68,0
	1999	ago.	Col\$	69 838	139 716	57 629	100 851	1 873,7	37,3	74,6	30,8	53,8
	2002	Año	Col\$	86 616	173 232	71 622	125 339	2 504,2	34,6	69,2	28,6	50,1
Costa Rica	1990	junio	₡	2 639	5 278	2 081	3 642	89,7	29,4	58,9	23,2	40,6
	1994	junio	₡	5 264	10 528	4 153	7 268	155,6	33,8	67,7	26,7	46,7
	1997	junio	₡	8 604	17 208	6 778	11 862	232,6	37,0	74,0	29,1	51,0
	1999	junio	₡	10 708	21 415	8 463	14 811	285,3	37,5	75,1	29,7	51,9
	2002	junio	₡	14 045	28 089	11 132	19 481	358,1	39,2	78,4	31,1	54,4
Ecuador	1990	nov.	S/.	18 465	36 930	854,8	21,6	43,2
	1994	nov.	S/.	69 364	138 729	2 301,2	30,1	60,3
	1997	oct.	S/.	142 233	284 465	4 194,6	33,9	67,8
	1999	oct.	S/.	301 716	603 432	15 656,8	19,3	38,5
	2002	nov.	S/.	863 750	1 727 500	25 000,0	34,6	69,1
El Salvador	1995	ene.-dic.	₡	254	508	158	315	8,8	29,0	58,1	18,0	35,9
	1997	ene.-dic.	₡	290	580	187	374	8,8	33,1	66,2	21,4	42,8
	1999	ene.-dic.	₡	293	586	189	378	8,8	33,5	66,9	21,6	43,2
	2001	ene.-dic.	₡	305	610	197	394	8,8	34,9	69,7	22,5	45,0
Guatemala	1989	abr.	Q	64	127	50	88	2,7	23,6	47,1	18,7	32,7
	1998	dic.97 - dic.98	Q	260	520	197	344	6,4	40,7	81,5	30,8	54,0
	2002	oct. - nov.	Q	334	669	255	446	7,7	43,6	87,2	33,3	58,2
Honduras	1990	ago.	L	115	229	81	141	4,3	26,5	52,9	18,6	32,6
	1994	sep.	L	257	513	181	316	9,0	28,6	57,1	20,1	35,2
	1997	ago.	L	481	963	339	593	13,1	36,8	73,6	25,9	45,3
	1999	ago.	L	561	1 122	395	691	14,3	39,3	78,6	27,7	48,4
	2002	ago.	L	689	1 378	485	849	16,6	41,6	83,3	29,3	51,3

(continúa)

Cuadro 16 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): LÍNEAS DE INDIGENCIA (LI) Y DE POBREZA (LP)												
(En valores mensuales por persona)												
País	Año	Período de referencia de los ingresos	Moneda a/	Urbano		Rural		Cambio b/	Urbano		Rural	
				LI	LP	LI	LP		LI	LP	LI	LP
				Moneda corriente					Dólares			
México	1989	3er trim.	\$	86 400	172 800	68 810	120 418	2 510,0	34,4	68,8	27,4	48,0
	1994	3er trim.	MN\$	213	425	151	265	3,3	63,6	127,2	45,3	79,3
	1996	3er trim.	MN\$	405	810	300	525	7,6	53,6	107,2	39,7	69,5
	1998	3er trim.	MN\$	537	1 074	385	674	9,5	56,8	113,6	40,7	71,3
	2000	3er trim.	MN\$	665	1 330	475	831	9,4	71,0	142,1	50,7	88,8
	2002	3er trim.	MN\$	742	1 484	530	928	9,9	75,0	150,1	53,6	93,8
Nicaragua	1993	21 feb.-12 jun.	C\$	167	334	129	225	4,6	36,6	73,3	28,2	49,4
	1997	oct.	C\$	247	493	9,8	25,3	50,5
	1998	15 abr. - 31 ago.	C\$	275	550	212	370	10,4	26,3	52,7	20,3	35,5
	2001	30 abr. - 31 jul.	C\$	369	739	284	498	13,4	27,6	55,2	21,3	37,2
Panamá	1991	ago.	B	35	70	27	47	1,0	35,0	70,1	27,1	47,5
	1994	ago.	B	40	80	31	54	1,0	40,1	80,2	31,0	54,3
	1997	ago.	B	41	81	31	55	1,0	40,6	81,3	31,4	55,0
	1999	jul.	B	41	81	31	55	1,0	40,7	81,4	31,5	55,1
	2002	jul.	B	41	81	31	55	1,0	40,7	81,4	31,5	55,0
Paraguay	1990 d/	jun., jul., ago.	G	43 242	86 484	1 207,8	35,8	71,6
	1994	ago.- sep.	G	87 894	175 789	1 916,3	45,9	91,7
	1996	jul.- nov.	G	108 572	217 143	2 081,2	52,2	104,3
	1999	jul.- dic.	G	138 915	277 831	106 608	186 565	3 311,4	42,0	83,9	32,2	56,3
	2000	sep.00 - ago.01	G	155 461	310 922	119 404	208 956	3 718,3	41,8	83,6	32,1	56,2
Perú	1997	4o trim.	N\$	103	192	83	128	2,7	42,1	84,3	31,6	55,3
	1999	4o trim.	N\$	109	213	89	141	3,5	31,2	61,2	25,5	40,5
	2001	4o trim.	N\$	117	230	102	159	3,5	34,0	66,8	29,5	46,0
República Dominicana	1997	abr.	RD\$	601	1 203	451	789	14,3	42,1	84,3	31,6	55,3
	2000	sep.	RD\$	713	1 425	641	1 154	16,5	43,1	86,2	38,8	69,8
	2002	sep.	RD\$	793	1 569	714	1 285	18,8	42,2	83,5	38,0	68,4
Uruguay	1990	2o sem.	NUr\$	41 972	83 944	1 358,0	30,9	61,8
	1994	2o sem.	\$	281	563	5,4	52,1	104,1
	1997	Año	\$	528	1 056	9,4	55,9	111,9
	1999	Año	\$	640	1 280	11,3	56,4	112,9
	2002	Año	\$	793	1 586	21,3	37,3	74,6
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	2o sem.	Bs	1 924	3 848	1 503	2 630	49,4	38,9	77,9	30,4	53,2
	1994	2o sem.	Bs	8 025	16 050	6 356	11 124	171,3	46,9	93,7	37,1	65,0
Bolivariana de)	1997 e/	2o sem.	Bs	31 711	62 316	488,6	64,9	127,5
	1999 e/	2o sem.	Bs	49 368	97 622	626,3	78,8	155,9
	2002 e/	2o sem.	Bs	80 276	154 813	1 161,0	69,1	133,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

a/ Monedas nacionales:

Argentina: (A) Austral; (\$) Peso

Bolivia: (Bs) Boliviano

Brasil: (Cr\$) Cruzeiroiro; (R\$) Real

Chile: (Ch\$) Peso

Colombia: (Col\$) Peso

Costa Rica: (¢) Colón

Ecuador: (S/.) Sucre

El Salvador: (¢) Colón

Guatemala: (Q) Quetzal

Honduras: (L) Lempira

México: (\$) Peso; (MN\$) Nuevo Peso

Nicaragua: (C\$) Córdoba

Panamá: (B) Balboa

Paraguay: (G) Guaraní

Perú: (N\$) Peso

República Dominicana: (RD\$) Peso

Uruguay: (Nur\$) Nuevo Peso; (\$) Peso

Venezuela (República Bolivariana de): (Bs) Bolívar

b/ Serie "rf" del Fondo Monetario Internacional.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Asunción.

e/ Total nacional.

Cuadro 17

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES, SEGÚN TRAMOS DE INGRESO PER CÁPITA, EN TÉRMINOS DEL VALOR DE LA LÍNEA DE POBREZA, ZONAS URBANAS, 1990-2003									
País	Año	Tramos de ingreso per cápita, en términos del valor de la línea de pobreza							
		0 a 0,5 (Indigentes)	0,5 a 0,9	0,9 a 1,0	0,0 a 1,0 (Pobres)	1,0 a 1,25	1,25 a 2,0	2,0 a 3,0	Más de 3,0
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	3,5	10,6	2,1	16,2	7,3	22,5	18,7	35,3
	1994	1,5	6,6	2,1	10,2	7,4	16,7	19,0	46,7
	1997	3,3	7,0	2,8	13,1	7,2	19,0	17,5	43,2
	1999	3,1	8,4	1,6	13,1	6,2	19,1	17,8	43,9
	2002	12,0	15,4	4,2	31,6	8,7	19,3	15,8	24,7
Bolivia	1989	22,1	23,2	4,1	49,4	9,0	16,4	10,6	14,5
	1994	16,8	24,2	4,6	45,6	9,8	19,3	10,2	14,9
	1997	19,2	22,6	5,1	46,8	9,7	17,2	11,2	15,2
	1999	16,4	20,8	5,1	42,3	10,8	18,5	11,4	17,0
	2002	17,3	23,1	4,4	44,9	9,1	18,8	10,2	17,1
Brasil a/	1990	14,8	17,3	3,7	35,8	8,3	16,6	12,3	27,1
	1993	13,5	16,0	3,8	33,3	8,5	19,0	13,3	26,0
	1996	9,7	11,9	3,1	24,6	7,3	17,5	15,5	35,1
	1999	9,9	13,1	3,4	26,4	8,0	18,1	15,3	32,3
	2001	11,0	13,1	3,3	27,4	7,4	18,0	15,4	31,9
Chile	1990	10,2	18,6	4,5	33,3	9,5	20,3	14,3	22,7
	1994	5,9	13,3	3,6	22,8	8,5	20,7	16,6	31,4
	1996	4,3	11,0	3,2	18,5	8,5	20,5	17,2	34,1
	1998	4,3	9,9	2,8	17,0	7,3	19,4	17,6	38,8
	2000	4,3	9,1	2,9	16,3	7,5	19,2	18,0	39,1
	2003	3,7	8,7	2,8	15,2	7,6	19,9	18,5	38,8
Colombia b/	1994	16,2	20,3	4,1	40,6	9,1	18,2	12,6	19,5
	1997	14,6	20,3	4,5	39,5	9,6	18,9	12,6	19,4
	1999	18,7	21,5	4,4	44,6	9,5	17,7	10,8	17,4
	2002	20,7	19,9	4,0	44,6	9,3	17,1	11,2	17,9
Costa Rica	1990	7,8	11,2	3,7	22,2	7,9	21,9	20,2	27,9
	1994	5,6	9,1	3,4	18,1	7,9	20,4	20,7	32,9
	1997	5,2	9,1	2,8	17,1	8,1	20,5	20,3	34,0
	1999	5,4	7,9	2,4	15,7	8,5	19,3	17,7	38,8
	2002	5,5	7,7	2,7	15,9	6,1	19,2	18,3	40,6
Ecuador	1990	22,6	28,1	5,2	55,8	10,5	16,7	8,8	8,2
	1994	22,4	24,7	5,2	52,3	10,1	19,1	9,1	9,4
	1997	18,6	25,6	5,6	49,8	10,0	19,4	10,7	10,0
	1999	27,2	25,5	5,3	58,0	7,9	16,1	7,9	10,1
	2002	16,3	21,7	4,6	42,6	10,5	19,5	12,0	15,5
El Salvador	1995	12,4	22,4	5,1	40,0	12,0	22,0	12,8	13,3
	1997	12,0	21,8	4,8	38,6	11,0	21,8	13,6	15,0
	1999	11,1	19,0	3,9	34,0	9,8	21,7	15,4	19,1
	2001	12,0	18,7	4,0	34,7	10,3	20,8	14,8	19,5
Guatemala	1989	22,9	21,0	4,3	48,2	8,5	17,3	11,0	15,0
	1998	12,2	23,0	6,0	41,3	11,4	20,9	11,6	14,9
	2002	14,8	20,3	4,0	39,0	9,8	20,4	12,9	17,9
Honduras	1990	38,0	22,7	3,8	64,5	8,2	12,0	6,5	8,8
	1994	40,8	24,5	4,3	69,6	7,6	12,0	5,1	5,8
	1997	36,8	26,0	4,2	67,0	8,2	12,5	5,9	6,4
	1999	37,1	24,4	4,2	65,6	8,2	12,9	6,4	7,0
	2002	31,3	24,8	4,4	60,5	8,9	14,5	7,6	8,6

(continúa)

Cuadro 17 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES, SEGÚN TRAMOS DE INGRESO PER CÁPITA, EN TÉRMINOS DEL VALOR DE LA LÍNEA DE POBREZA, ZONAS URBANAS, 1990-2003									
País	Año	Tramos de ingreso per cápita, en términos del valor de la línea de pobreza							
		0 a 0,5 (Indigentes)	0,5 a 0,9	0,9 a 1,0	0,0 a 1,0 (Pobres)	1,0 a 1,25	1,25 a 2,0	2,0 a 3,0	Más de 3,0
México	1989	9,3	19,8	4,8	33,9	11,0	22,3	13,1	19,8
	1994	6,2	18,2	4,6	29,0	10,8	21,8	14,4	24,0
	1996	10,0	22,2	5,3	37,5	10,7	21,3	12,4	18,1
	1998	6,9	19,1	5,1	31,1	11,0	22,0	15,3	20,6
	2000	4,7	17,3	4,5	26,5	10,9	22,7	16,3	23,6
	2002	4,8	16,2	5,0	26,0	11,2	23,2	15,6	24,0
Nicaragua	1993	32,2	23,5	4,6	60,3	8,2	15,7	6,9	9,0
	1998	30,7	24,1	4,5	59,3	8,6	15,8	7,6	8,7
	2001	28,3	25,2	4,2	57,7	8,3	16,4	8,4	9,2
Panamá	1991	13,9	15,5	4,2	33,6	8,5	17,0	13,7	27,2
	1994	8,7	13,2	3,3	25,2	7,7	19,2	16,5	31,3
	1997	8,6	12,2	3,7	24,6	7,5	18,8	15,4	33,7
	1999	6,6	10,9	3,3	20,8	7,7	18,3	16,3	37,0
	2002	8,0	10,5	3,0	21,4	7,5	17,5	16,8	36,8
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	10,4	21,7	4,7	36,8	13,6	19,6	14,2	15,9
	1994	9,5	20,9	5,0	35,4	11,6	20,4	13,4	19,3
	1996	8,0	19,2	6,4	33,5	11,3	22,2	13,5	19,5
	1999	6,9	20,8	5,2	32,9	11,9	19,9	16,2	19,2
	2000	9,1	20,1	5,9	35,0	8,9	21,4	13,2	21,5
Perú	1997	6,5	17,1	4,4	28,0	10,3	23,8	16,2	21,8
	1999	7,4	18,7	4,8	30,9	11,3	24,5	13,0	20,4
República Dominicana	1997	11,0	16,6	4,0	31,6	10,4	21,5	15,6	21,0
	2000	17,7	17,2	4,1	39,0	8,9	18,3	13,9	19,9
	2002	16,0	18,1	4,3	38,4	9,1	18,3	13,9	20,4
Uruguay	1990	2,0	7,0	2,8	11,8	7,1	22,7	23,1	35,3
	1994	1,1	3,4	1,3	5,8	3,6	15,4	23,2	52,0
	1997	0,9	3,5	1,4	5,7	4,0	15,2	21,4	53,8
	1999	0,9	3,4	1,3	5,6	3,6	13,5	20,5	56,9
	2002	1,3	6,1	1,9	9,3	5,6	18,0	21,6	45,5
Venezuela (República Bolivariana de) c/	1990	10,9	17,5	5,0	33,4	10,9	21,5	14,8	19,4
	1994	13,5	22,0	5,4	40,9	10,4	21,4	12,9	14,4
	1997	17,1	20,7	4,5	42,3	10,6	19,3	11,5	16,3
	1999	19,4	20,5	4,1	44,0	10,3	19,5	11,5	14,8
	2002	18,6	20,0	4,7	43,3	9,8	18,9	12,0	15,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En este país los valores de indigencia (0 a 0,5 líneas de pobreza) y de pobreza (0 a 1,0 líneas de pobreza) pueden no coincidir con los que se presentan en el cuadro 14. Esto se debe a que en Brasil se calculó la línea de pobreza multiplicando el valor de la línea de indigencia por un coeficiente variable y no fijo (2,0), como en el resto de los casos.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 18

**AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA POBREZA
EN ALGUNAS CATEGORÍAS OCUPACIONALES, ZONAS URBANAS, 1990-2003 a/**
(En porcentajes)

País	Año	Total población	Total ocupados	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos	
					En establecimientos que ocupan a más de cinco personas	En establecimientos que ocupan hasta cinco personas b/	Empleados domésticos	Industria y construcción	Comercio y servicios
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	21	10	...	12 c/	15	21	6	8
	1994	13	5	...	5 c/	7	10	4	3
	1997	18	8	...	8 c/	12	18	8	6
	1999	20	10	6	9	17	22	14	8
	2002	42	27	40	31	40	43	31	19
Bolivia	1989	53	39	...	42	53	31	46	40
	1994	52	41	35	48	58	31	52	44
	1997	52	43	30	42	50	35	59	46
	1999	49	41	23	41	53	27	66	43
	2002	52	43	25	41	47	30	63	48
Brasil d/	1990	41	32	...	30	48	49	40	36
	1993	40	32	20	31	39	47	43	33
	1996	31	22	14	22	27	35	28	22
	1999	33	24	14	26	32	39	33	27
	2001	34	24	13	26	33	40	35	27
Chile	1990	38	29	...	30 c/	38	37	28	23
	1994	28	20	...	20 c/	27	21	20	17
	1996	22	15	7	18	24	20	10	10
	1998	21	14	...	14 c/	21	19	11	9
	2000	20	14	6	16	22	17	14	12
	2003	19	10	5	14	19	15	10	10
Colombia e/	1991	52	41	27	45 f/	...	38	54	53
	1994	45	34	15	41 f/	...	31	42	42
	1997	40	33	15	37 f/	...	34	48	42
	1999	51	38	12	38 f/	...	35	60	54
	2002	51	40	11	36 f/	...	44	59	56
Costa Rica	1990	25	15	...	15	22	28	28	24
	1994	21	12	5	11	19	25	24	18
	1997	23	10	4	10	17	23	21	18
	1999	18	10	3	9	14	27	17	16
	2002	18	9	1	8	12	18	19	18
Ecuador	1990	62	51	33	50	60	56	70	61
	1994	58	46	31	49	58	56	60	56
	1997	56	45	28	46	62	53	56	54
	1999	64	53	30	55	70	61	68	62
	2002	49	39	18	39	53	51	48	45
El Salvador	1995	54	34	14	35	50	32	50	41
	1997	56	35	13	35	48	40	50	43
	1999	39	29	9	26	44	41	43	35
	2001	39	30	8	28	42	40	45	35
Guatemala	1989	53	42	20	47	61	42	48	35
	1998	49	42	20	45	58	33	50	41
	2002	44	34	8	33	54	42	48	33
Honduras	1990	70	60	29	60	76	51	81	73
	1994	75	66	42	71	83	56	84	77
	1997	73	64	44	69	83	52	84	72
	1999	72	64	41	64	81	58	80	72
	2002	67	58	28	57	75	48	80	68

(continúa)

Cuadro 18 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA POBREZA EN ALGUNAS CATEGORÍAS OCUPACIONALES, ZONAS URBANAS, 1990-2003 ^{a/} (En porcentajes)									
País	Año	Total población	Total ocupados	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos	
					En establecimientos que ocupan a más de cinco personas	En establecimientos que ocupan hasta cinco personas ^{b/}	Empleados domésticos	Industria y construcción	Comercio y servicios
México	1989	42	33	...	37 ^{g/}	...	60	32	28
	1994	37	29	...	33 ^{g/}	...	56	27 ^{h/}	...
	1996	45	38	19	41	59	63	48	41
	1998	39	31	12	36	49	57	39	30
	2000	32	25	11	26	44	38	34	24
	2002	32	25	11	27	40	46	27	21
Nicaragua	1993	66	52	47	54	64	74	60	45
	1998	64	54	...	54 ^{c/}	68	74	59	52
	2001	64	54	36	54	67	74	65	55
Panamá	1991	40	26	12	24	38	31	42	38
	1994	31	18	6	16	30	28	26	25
	1997	33	18	6	17	27	26	32	25
	1999	26	15	5	12	24	20	24	26
	2002	25	14	5	12	15	22	27	29
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	42	32	23	40	49	29	41	31
	1994	42	31	14	38	44	36	42	37
	1996	39	29	13	27	40	33	44	37
	1999	40	26	11	27	40	27	42	31
	2000	43	32	14	37	38	36	42	47
Perú	1997	34	25	14	20	28	16	36	33
	1999	36	28	14	21	32	23	52	36
	2001	42	36	20	37	47	27	43	41
República Dominicana	1997	37	21	21	18	25	26	20	25
	2000	42	27	26	29	35	55	26	26
	2002	42	27	27	28	37	49	29	28
Uruguay	1990	18	11	8	10	17	25	21	14
	1994	10	6	2	6	7	13	12	7
	1997	10	6	2	5	9	12	10	9
	1999	9	5	2	5	9	12	12	9
	2002	15	10	2	8	15	17	21	18
Venezuela (República Bolivariana de) ^{i/}	1990	39	22	20	24	34	33	25	22
	1994	47	32	38	29	48	41	32	32
	1997	48	35	34	44	50	52	27	27
	1999	49	35	28	37	52	50	33	34
	2002	49	35	21	42	51	53	30	33

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ Se refiere al porcentaje de ocupados de cada categoría que reside en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza.
b/ En los casos de Bolivia (1999), Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se consideran solo los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.
c/ Incluye asalariados públicos.
d/ En 1990, las columnas correspondientes a establecimientos que ocupan a más de cinco y hasta cinco personas incluyen a los asalariados con y sin contrato de trabajo ("carteira"), respectivamente.
e/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
f/ Incluye a los asalariados en establecimientos de hasta cinco ocupados.
g/ Incluye a los asalariados públicos y a los pertenecientes a establecimientos de hasta cinco ocupados.
h/ Corresponde al total de trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos.
i/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 19

**AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA POBREZA
EN ALGUNAS CATEGORÍAS OCUPACIONALES, ZONAS RURALES, 1990-2003 a/**

(En porcentajes)

País	Año	Total población	Total ocupados	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos	
					En establecimientos que ocupan a más de cinco personas	En establecimientos que ocupan hasta cinco personas b/	Empleados domésticos	Total	En agricultura, silvicultura y pesca
Bolivia	1997	79	79	35	48	41	49	87	89
	1999	81	80	14	25	58	37	86	88
	2002	79	79	32	42	50	42	84	88
Brasil c/	1990	71	64	...	45	72	61	70	74
	1993	63	57	56	58	53	53	59	60
	1996	56	49	33	46	35	40	54	56
	1999	55	49	39	47	40	41	54	55
	2001	55	48	30	47	42	42	52	53
Chile	1990	40	27	...	28	36	23	22	24
	1994	32	22	...	20	28	13	21	24
	1996	31	21	13	21	27	16	18	21
	1998	28	18	...	16 d/	21	13	17	21
	2000	24	16	9	16	20	10	16	21
	2003	20	11	4	11	17	10	13	14
Colombia	1991	60	53	...	42 d/ e/	...	54	67	73
	1994	62	55	...	55 d/ e/	...	57	61	59
	1997	60	48	16	40 e/	...	48	62	67
	1999	62	50	12	41 e/	...	45	64	66
	2002	52	41	8	32 e/	...	41	52	55
Costa Rica	1990	27	17	...	13	23	22	24	27
	1994	25	14	7	3	20	23	21	24
	1997	25	14	5	9	20	25	21	24
	1999	22	12	3	7	21	22	17	21
	2002	24	15	1	5	13	16	33	46
El Salvador	1995	64	53	24	43	56	50	63	72
	1997	69	58	26	47	57	49	67	79
	1999	65	55	16	42	56	47	71	80
	2001	62	53	14	38	54	49	64	79
Guatemala	1989	78	70	42	72	76	61	71	76
	1998	69	63	42	62	74	53	63	67
	2002	68	60	27	63	62	41	65	73
Honduras	1990	88	83	...	71	90	72	88	90
	1994	81	73	40	65	79	74	78	81
	1997	84	79	37	75	86	74	83	85
	1999	86	81	38	79	89	75	85	89
	2002	86	82	34	65	89	69	86	91
México	1989	57	49	...	53 f/	...	50	47	54
	1994	57	47	...	53 f/	...	53	46	54
	1996	62	56	23	57	67	64	59	68
	1998	58	51	23	48	60	64	55	64
	2000	55	46	16	44	59	64	49	61
	2002	51	44	21	36	54	48	48	62
Nicaragua	1993	83	75	71	64	77	59	82	89
	1998	77	70	...	61	69	49	80	87
	2001	77	70	46	57	67	63	80	87

(continúa)

Cuadro 19 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA POBREZA EN ALGUNAS CATEGORÍAS OCUPACIONALES, ZONAS RURALES, 1990-2003 a/ (En porcentajes)									
País	Año	Total población	Total ocupados	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos	
					En establecimientos que ocupan a más de cinco personas	En establecimientos que ocupan hasta cinco personas b/	Empleados domésticos	Total	En agricultura, silvicultura y pesca
Panamá	1991	51	40	10	25	43	43	52	57
	1994	49	38	6	23	39	40	52	61
	1997	42	29	6	22	39	33	36	42
	1999	42	29	5	19	39	30	37	42
	2002	49	40	6	13	16	27	60	70
Paraguay	1999	74	65	10	47	57	43	75	79
	2000	74	67	13	35	68	44	75	81
Perú	1997	73	66	23	47	57	54	76	77
	1999	73	66	33	42	54	38	73	78
	2001	78	74	39	65	75	53	78	82
República Dominicana	1997	39	25	17	14	26	40	30	42
	2000	55	38	33	35	44	54	39	47
	2002	51	34	29	31	44	58	34	42
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	47	31	22	35	36	44	31	36
	1994	56	42	27	50	50	53	42	44

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere al porcentaje de ocupados de cada categoría que reside en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

b/ En los casos de Bolivia (1999), Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana consideran solo a los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.

c/ En 1990, en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas se incluyeron a los asalariados con contrato de trabajo ("carteira") y en la de los que ocupan hasta cinco personas, a quienes no tienen contrato de trabajo.

d/ Incluye a los asalariados del sector público.

e/ Incluye a los asalariados en establecimientos que ocupan hasta cinco personas.

f/ Incluye a los asalariados del sector público y a los de establecimientos que ocupan hasta cinco personas.

Cuadro 20

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, SEGÚN CATEGORÍAS OCUPACIONALES, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En porcentajes del total de la población urbana ocupada en situación de pobreza)								
País	Año	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos		Total b/
			En establecimientos que ocupan a más de cinco personas	En establecimientos que ocupan hasta cinco personas a/	Empleados domésticos	Industria y construcción	Comercio y servicios	
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	...	53	17	12	6	10	98
	1994	...	52	22	10	6	10	100
	1997	...	49	23	11	5	12	100
	1999	7	36	25	12	7	13	100
	2002	25	26	22	9	8	8	98
Bolivia	1989	18	15	17	5	12	31	98
	1994	11	18	19	4	11	29	92
	1997	7	14	13	3	16	29	82
	1999	6	15	15	2	19	33	90
	2002	6	15	14	3	18	33	88
Brasil c/	1990	...	32	26	10	5	18	91
	1993	9	32	11	12	6	17	87
	1996	8	31	12	13	7	16	87
	1999	7	28	11	14	7	18	85
	2002	7	29	12	15	7	17	87
Chile	1990	...	53	14	10	6	12	95
	1994	...	54	14	8	7	11	94
	1996	6	53	16	9	3	8	95
	1998	...	56	18	10	4	8	96
	2000	7	52	15	9	5	10	98
	2003	6	52	13	10	5	9	95
Colombia d/	1991	...	48 e/	...	5	8	26	87
	1994	4	58 e/	...	5	8	22	97
	1997	4	46 e/	...	5	10	30	95
	1999	3	38 e/	...	5	12	37	95
	2002	2	32 e/	...	6	12	39	91
Costa Rica	1990	...	28	13	8	12	17	78
	1994	11	28	18	9	10	18	94
	1997	7	30	18	8	10	22	95
	1999	6	28	17	15	8	20	94
	2002	3	24	15	8	10	25	85
Ecuador	1990	11	21	13	5	11	29	90
	1994	9	23	15	6	8	29	90
	1997	9	24	15	6	8	27	89
	1999	6	23	18	6	7	27	87
	2002	5	23	18	6	9	27	89
El Salvador	1995	5	28	15	4	12	25	89
	1997	5	25	16	5	10	27	88
	1999	4	23	21	6	10	24	88
	2001	3	24	19	6	10	27	88
Guatemala	1989	7	26	20	7	8	12	80
	1998	4	21	28	3	10	20	86
	2002	2	24	21	5	13	19	83
Honduras	1990	7	27	17	6	12	23	92
	1994	7	33	14	5	10	19	88
	1997	7	30	14	4	10	23	88
	1999	6	27	14	4	9	25	85
	2002	5	24	17	3	14	24	86

(continúa)

Cuadro 20 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, SEGÚN CATEGORÍAS OCUPACIONALES, ZONAS URBANAS, 1990-2003 (En porcentajes del total de la población urbana ocupada en situación de pobreza)								
País	Año	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos		Total b/
			En establecimientos que ocupan a más de cinco personas	En establecimientos que ocupan hasta cinco personas a/	Empleados domésticos	Industria y construcción	Comercio y servicios	
México	1989	...	72 e/	...	5	3	11	91
	1994	...	71 e/	...	7	17 f/	...	95
	1996	7	36	23	6	5	17	94
	1998	14	33	15	4	3	16	85
	2000	6	36	27	5	5	15	94
	2002	6	35	28	9	5	13	95
Nicaragua	1993	19	17	15	9	9	15	84
	1998	...	25	18	9	5	26	83
	2001	8	22	19	6	7	26	88
Panamá	1991	12	24	8	8	7	16	75
	1994	9	30	19	14	7	19	98
	1997	8	29	9	10	9	18	83
	1999	6	26	10	8	8	24	83
	2002	7	28	9	10	8	31	93
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	8	30	24	10	7	15	94
	1994	5	30	19	14	7	19	94
	1996	5	22	19	11	10	26	93
	1999	6	26	21	10	8	20	91
	2000	5	28	13	12	7	28	93
Perú	1997	7	15	14	3	8	38	85
	1999	5	12	15	5	9	38	84
	2001	7	17	18	4	6	33	84
República Dominicana	1997	12	27	10	6	7	26	88
	2000	13	33	10	8	7	20	92
	2002	14	30	9	8	8	23	91
Uruguay	1990	16	30	11	15	10	15	97
	1994	8	32	13	16	13	15	97
	1997	7	27	17	15	12	19	97
	1999	5	26	15	17	15	20	98
	2002	4	20	16	17	17	23	97
Venezuela (República Bolivariana de) g/	1990	19	33	10	10	5	15	92
	1994	21	26	14	5	6	19	91
	1997	17	32	15	7	5	15	91
	1999	12	26	18	3	7	24	90
	2002	8	28	16	4	6	25	87

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En los casos de Bolivia (1999), Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay (1990) se consideran solo a los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.
- b/ En la mayoría de los casos el total no suma 100% debido a que se ha excluido a los empleadores, los profesionales y técnicos y los asalariados del sector público.
- c/ En 1990, en las columnas correspondientes a establecimientos que ocupan a más de cinco y hasta cinco personas se considera a los asalariados con y sin contrato de trabajo ("carteira"), respectivamente.
- d/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- e/ Incluye a los asalariados en establecimientos de hasta cinco ocupados.
- f/ Corresponde al total de trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos.
- g/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 21

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, SEGÚN CATEGORÍAS OCUPACIONALES, ZONAS RURALES, 1990-2003								
(En porcentajes del total de la población rural ocupada en situación de pobreza)								
País	Año	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos		Total b/
			En establecimientos que ocupan a más de cinco personas	En establecimientos que ocupan hasta cinco personas a/	Empleados domésticos	Total	Agricultura	
Bolivia	1997	1	2	2	0	94	89	99
	1999	0	1	2	0	95	90	98
	2002	1	2	2	0	91	88	97
Brasil c/	1990	...	9	26	4	57	51	96
	1993	5	23	2	3	66	61	99
	1996	3	21	2	3	70	65	99
	1999	4	20	2	3	69	64	98
	2001	3	22	2	3	69	64	99
Chile	1990	...	40	29	3	27	23	99
	1994	...	39	26	2	31	25	98
	1996	2	29	35	3	30	27	99
	1998	...	36	25	3	35	31	99
	2000	3	40	22	2	33	28	100
	2003	2	37	23	3	34	30	99
Colombia	1991	...	34 d/	...	2	58	35	94
	1994	...	47 d/	...	4	45	24	96
	1997	1	35 d/	...	3	57	35	96
	1999	1	31 d/	...	3	62	36	97
	2002	1	25 d/	...	4	68	40	98
Costa Rica	1990	-	25	23	6	41	27	95
	1994	5	20	28	7	35	19	95
	1997	3	20	28	9	36	19	96
	1999	2	19	34	10	30	16	95
	2002	1	9	16	5	62	41	91
El Salvador	1995	1	23	15	3	52	36	94
	1997	1	23	15	4	54	39	97
	1999	1	18	17	5	55	38	96
	2001	1	13	19	5	58	43	96
Guatemala	1989	2	23	12	2	61	52	100
	1998	1	22	19	1	54	37	98
	2002	1	18	15	1	63	47	97
Honduras	1990	2	11	17	2	68	51	100
	1994	3	14	15	2	65	49	99
	1997	2	13	16	2	65	45	98
	1999	2	12	16	2	66	45	98
	2002	1	9	21	1	67	52	99
México	1989	...	50 d/	...	3	45	38	98
	1994	...	50 d/	...	3	45	35	98
	1996	3	20	22	4	49	35	98
	1998	6	19	18	2	49	29	94
	2000	2	20	27	3	46	33	98
	2002	4	14	28	5	48	36	98
Nicaragua	1993	6	13	11	4	62	54	96
	1998	-	17	16	3	60	49	96
	2001	3	11	13	3	65	55	96

(continúa)

Cuadro 21 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, SEGÚN CATEGORÍAS OCUPACIONALES, ZONAS RURALES, 1990-2003 (En porcentajes del total de la población rural ocupada en situación de pobreza)								
País	Año	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos		Total b/
			En establecimientos que ocupan a más de cinco personas	En establecimientos que ocupan hasta cinco personas a/	Empleados domésticos	Total	Agricultura	
Panamá	1991	3	9	9	3	75	65	99
	1994	3	10	15	4	68	56	100
	1997	2	11	17	4	65	50	99
	1999	2	9	20	4	65	45	100
	2002	1	5	5	2	86	68	99
Paraguay	1999	1	5	10	3	80	66	99
	2000	1	3	13	3	78	66	98
Perú	1997	1	5	7	1	82	71	96
	1999	1	4	7	1	82	73	95
	2001	2	7	9	1	78	68	96
República Dominicana	1997	7	12	9	5	63	48	96
	2000	7	17	8	7	59	40	98
	2002	7	15	7	8	60	43	97
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	5	27	15	4	47	39	98
	1994	5	23	19	6	45	31	98

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En los casos de Bolivia (1999), Chile (1996), El Salvador, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana se consideran solo los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.
- b/ En la mayoría de los casos el total no suma 100% debido a que se ha excluido a los empleadores, los profesionales y técnicos y los asalariados del sector público.
- c/ En 1990, las columnas correspondientes a establecimientos que ocupan a más de cinco y hasta cinco personas incluyen a los asalariados con y sin contrato de trabajo ("carteira"), respectivamente.
- d/ Incluye a los asalariados en establecimientos de hasta cinco ocupados.

Cuadro 22

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): MAGNITUD Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN HOGARES ENCABEZADOS POR MUJERES, ZONAS URBANAS, 1990-2003									
País	Año	Porcentaje de hogares encabezados por mujeres en cada estrato de pobreza				Distribución de los hogares encabezados por mujeres según estratos de pobreza			
		Total hogares	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres	Total hogares	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	21	26	12	22	100	4,3	7,0	88,7
	1994	24	22	20	24	100	1,0	7,5	91,1
	1997	26	32	24	26	100	4,1	9,0	86,9
	1999	27	37	28	27	100	4,2	10,4	85,4
	2002	27	20	25	28	100	8,9	18,5	72,6
Bolivia	1989	17	23	16	15	100	30,2	25,5	44,3
	1994	18	20	17	18	100	18,1	27,0	54,9
	1997	21	24	22	19	100	22,2	30,0	47,8
	1999	21	24	19	21	100	19,2	23,4	57,4
	2002	24	24	19	26	100	17,6	22,1	60,3
Brasil	1990	20	24	23	18	100	16,0	25,1	58,9
	1993	22	23	21	22	100	12,3	20,9	66,8
	1996	24	24	22	24	100	7,7	15,9	76,4
	1999	25	24	24	26	100	6,7	18,3	74,9
	2002	26	27	25	27	100	8,2	18,3	73,5
Chile	1990	21	25	20	22	100	11,7	21,3	67,0
	1994	22	27	21	22	100	7,1	16,0	76,8
	1996	23	29	22	23	100	5,3	13,6	81,1
	1998	24	28	23	24	100	4,9	12,3	82,7
	2000	24	28	23	24	100	5,0	11,5	83,6
	2003	18	26	16	18	100	2,3	9,0	88,7
Colombia a/	1991	24	28	22	24	100	19,8	27,6	52,6
	1994	24	24	24	24	100	16,1	24,0	59,9
	1997	27	32	28	25	100	17,5	25,9	56,6
	1999	29	31	27	29	100	20,4	24,0	55,6
	2002	30	34	29	30	100	23,1	22,8	54,1
Costa Rica	1990	23	36	25	21	100	10,9	16,5	72,6
	1994	24	42	27	22	100	9,8	14,0	76,2
	1997	27	51	36	24	100	9,9	15,7	74,4
	1999	28	56	39	25	100	10,9	14,1	75,0
	2002	28	48	34	27	100	9,2	12,5	78,3
Ecuador	1990	17	22	16	15	100	28,9	31,2	39,9
	1994	19	23	18	18	100	27,3	28,1	44,6
	1997	19	24	19	17	100	23,9	31,1	45,0
	1999	20	23	21	18	100	30,9	31,4	37,6
	2002	21	26	21	20	100	20,0	26,0	53,9
El Salvador	1995	31	38	31	29	100	15,4	28,1	56,5
	1997	30	36	33	28	100	14,2	29,3	56,5
	1999	31	36	36	29	100	12,6	25,9	61,5
	2001	35	37	40	33	100	12,6	25,9	61,5
Guatemala	1989	22	23	21	22	100	24,2	24,3	51,5
	1998	24	26	21	26	100	12,9	24,8	62,3
	2002	22	30	21	21	100	19,8	22,7	57,5
Honduras	1990	27	35	21	21	100	50,4	21,1	28,5
	1994	25	28	25	21	100	45,8	29,2	25,0
	1997	29	32	28	28	100	40,3	28,6	31,1
	1999	30	32	30	28	100	39,4	28,7	31,9
	2002	31	32	31	31	100	31,7	29,0	39,3

(continúa)

Cuadro 22 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): MAGNITUD Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN HOGARES ENCABEZADOS POR MUJERES, ZONAS URBANAS, 1990-2003									
País	Año	Porcentaje de hogares encabezados por mujeres en cada estrato de pobreza				Distribución de los hogares encabezados por mujeres según estratos de pobreza			
		Total hogares	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres	Total hogares	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres
México	1989	16	14	14	17	100	8,2	21,9	69,9
	1994	17	11	16	18	100	4,0	21,3	74,7
	1996	18	17	15	19	100	9,8	23,0	67,3
	1998	19	18	16	20	100	6,3	20,0	73,7
	2000	20	14	16	21	100	3,4	17,5	79,1
	2002	21	24	22	21	100	5,4	21,4	73,1
Nicaragua	1993	35	40	34	32	100	36,8	27,2	36,1
	1998	35	39	36	30	100	34,9	30,2	34,9
	2001	34	37	36	32	100	30,2	30,7	39,0
Panamá	1991	26	34	29	24	100	18,0	22,0	60,0
	1994	25	35	25	24	100	12,1	16,2	71,7
	1997	28	37	29	26	100	11,4	16,7	71,9
	1999	27	45	28	26	100	10,8	14,4	74,8
	2002	29	44	31	27	100	12,3	14,6	73,1
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	20	21	23	18	100	11,2	30,5	58,3
	1994	23	20	26	22	100	8,4	29,3	62,3
	1996	27	25	26	27	100	7,4	24,7	67,9
	1999	27	30	23	29	100	7,7	21,9	70,4
	2000	31	37	29	32	100	10,6	23,7	65,7
Perú	1997	20	21	19	21	100	8,0	18,6	73,3
	1999	21	17	21	21	100	6,3	23,9	69,7
	2001	22	22	21	23	100	7,2	25,2	67,6
República Dominicana	1997	31	50	31	29	100	17,5	20,5	62,0
	2000	31	48	33	26	100	27,2	22,3	50,5
	2002	34	54	39	27	100	25,2	25,6	49,2
Uruguay	1990	25	28	22	26	100	2,2	8,4	89,4
	1994	27	21	23	27	100	0,8	4,0	95,1
	1997	29	27	23	29	100	0,8	3,9	95,3
	1999	31	29	26	31	100	0,8	4,0	95,2
	2002	32	31	27	33	100	1,3	6,7	92,0
Venezuela (República Bolivariana de) b/	1990	22	40	25	18	100	19,6	25,4	55,1
	1994	25	34	28	21	100	18,7	30,8	50,5
	1997	26	28	29	24	100	18,6	28,4	53,0
	1999	27	34	27	25	100	23,8	24,8	51,3
	2002	29	35	29	26	100	24,0	24,1	51,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, solo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

b/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 23

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES, TOTAL NACIONAL, 1990-2003 ^{a/} (En porcentajes)								
País	Año	Ingreso promedio ^{b/}	Participación en el ingreso total del:				Relación del ingreso medio per cápita ^{c/}	
			40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico	D10/D (1 a 4)	Q5/Q1
Argentina ^{d/}	1990	10,6	14,9	23,6	26,7	34,8	13,5	13,5
	1997	12,4	14,9	22,3	27,1	35,8	16,0	16,4
	1999	12,5	15,4	21,6	26,1	37,0	16,4	16,5
	2002	8,1	13,4	19,3	25,3	42,1	20,0	21,8
Bolivia	1989 ^{e/}	7,7	12,1	22,0	27,9	38,2	17,1	21,4
	1997	5,8	9,4	22,0	27,9	40,7	25,9	34,6
	1999	5,7	9,2	24,0	29,6	37,2	26,7	48,1
	2002	6,1	9,5	21,3	28,3	41,0	30,3	44,2
Brasil	1990	9,3	9,5	18,6	28,0	43,9	31,2	35,0
	1996	12,3	9,9	17,7	26,5	46,0	32,2	38,0
	1999	11,3	10,1	17,3	25,5	47,1	32,0	35,6
	2001	11,0	10,2	17,5	25,6	46,8	32,2	36,9
Chile	1990	9,4	13,2	20,8	25,4	40,7	18,2	18,4
	1996	12,9	13,1	20,5	26,2	40,2	18,3	18,6
	2000	13,6	13,8	20,8	25,1	40,3	18,7	19,0
	2003	13,5	13,8	20,8	25,7	39,7	18,6	18,3
Colombia	1994	8,4	10,0	21,3	26,9	41,8	26,8	35,2
	1997	7,3	12,5	21,7	25,7	40,1	21,4	24,1
	1999	6,7	12,3	21,6	26,0	40,1	22,3	25,6
	2002 ^{f/}	7,2	11,9	22,2	26,8	39,1	25,0	29,6
Costa Rica	1990	9,5	16,7	27,4	30,2	25,6	10,1	13,1
	1997	10,0	16,5	26,8	29,4	27,3	10,8	13,0
	1999	11,4	15,3	25,7	29,7	29,4	12,6	15,3
	2002	11,7	14,5	25,6	29,7	30,2	13,7	16,9
Ecuador ^{f/}	1990	5,5	17,1	25,4	27,0	30,5	11,4	12,3
	1997	6,0	17,0	24,7	26,4	31,9	11,5	12,2
	1999	5,6	14,1	22,8	26,5	36,6	17,2	18,4
	2002	6,7	15,4	24,3	26,0	34,3	15,7	16,8
El Salvador	1995	6,2	15,4	24,8	26,9	32,9	14,1	16,9
	1997	6,1	15,3	24,5	27,3	33,0	14,8	15,9
	1999	6,6	13,8	25,0	29,1	32,1	15,2	19,6
	2001	6,7	13,4	24,6	28,7	33,3	16,2	20,3
Guatemala	1989	6,0	11,8	20,9	26,8	40,6	23,5	27,3
	1998	7,1	14,3	21,6	25,0	39,1	20,4	19,8
	2002	6,8	14,2	22,2	26,8	36,8	18,4	18,7
Honduras	1990	4,3	10,1	19,7	27,0	43,1	27,4	30,7
	1997	4,1	12,6	22,5	27,3	37,7	21,1	23,7
	1999	3,9	11,8	22,9	28,9	36,5	22,3	26,5
	2002	4,3	11,3	21,7	27,6	39,4	23,6	26,3
México	1989	8,6	15,8	22,5	25,1	36,6	17,2	16,9
	1994	8,5	15,3	22,9	26,1	35,6	17,3	17,4
	2000	8,5	14,6	22,5	26,5	36,4	17,9	18,5
	2002	8,2	15,7	23,8	27,3	33,2	15,1	15,5
Nicaragua	1993	5,2	10,4	22,8	28,4	38,4	26,1	37,7
	1998	5,6	10,4	22,1	27,1	40,5	25,3	33,1
	2001	5,9	12,2	21,5	25,7	40,7	23,6	27,2

(continúa)

Cuadro 23 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES, TOTAL NACIONAL, 1990-2003 a/								
(En porcentajes)								
País	Año	Ingreso promedio b/	Participación en el ingreso total del:				Relación del ingreso medio per cápita c/	
			40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico	D10/D (1 a 4)	Q5/Q1
Panamá f/	1991	9,5	13,3	23,9	28,6	34,2	18,3	22,7
	1997	12,0	13,3	22,4	27,0	37,3	19,6	21,6
	1999	12,2	14,2	23,9	26,8	35,1	17,1	19,1
	2002	11,9	14,2	25,0	28,2	32,7	15,0	17,9
Paraguay	1990 g/	7,7	18,6	25,7	26,9	28,9	10,2	10,6
	1996 f/	7,4	16,7	24,6	25,3	33,4	13,0	13,4
	1999	6,2	13,1	23,0	27,8	36,2	19,3	22,6
	2000	6,2	12,9	23,5	26,4	37,3	20,9	25,6
Perú	1997	8,1	13,4	24,6	28,7	33,3	17,9	20,8
	1999	8,2	13,4	23,1	27,1	36,5	19,5	21,6
	2001	6,2	13,4	24,6	28,5	33,5	17,4	19,3
República Dominicana	1997	8,5	14,5	23,6	26,0	36,0	16,0	17,6
	2000	7,2	11,4	22,2	27,6	38,8	21,1	26,9
	2001	7,2	12,2	22,5	27,0	38,3	19,1	23,0
	2002	7,2	12,0	22,6	27,0	38,3	19,3	24,9
Uruguay f/	1990	9,3	20,1	24,6	24,1	31,2	9,4	9,4
	1997	11,2	22,0	26,1	26,1	25,8	8,5	9,1
	1999	11,9	21,6	25,5	25,9	27,0	8,8	9,5
	2002	9,4	21,6	25,4	25,6	27,3	9,5	10,2
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	8,9	16,7	25,7	28,9	28,7	12,1	13,4
	1997	7,8	14,7	24,0	28,6	32,8	14,9	16,1
	1999	7,2	14,6	25,1	29,0	31,4	15,0	18,0
	2002	7,1	14,3	24,9	29,5	31,3	14,5	18,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ Hogares del conjunto del país ordenados según su ingreso per cápita. En el cuadro 24 se presentan las cifras desagregadas por área urbana y rural.
- b/ Ingreso promedio mensual de los hogares, en múltiplos de la línea de pobreza per cápita.
- c/ D (1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 es el 10% de los hogares de más altos ingresos. La misma notación se usa en el caso de los quintiles (Q), que representan grupos de 20% de los hogares.
- d/ Gran Buenos Aires.
- e/ Ocho ciudades principales y El Alto.
- f/ Total zonas urbanas.
- g/ Área metropolitana de Asunción.

Cuadro 24

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): NIVEL Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1990-2003 a/											
(En porcentajes)											
País	Año	Ingreso medio b/	Participación en el ingreso total del:				Ingreso medio b/	Participación en el ingreso total del:			
			40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico		40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico
ZONAS URBANAS						ZONAS RURALES					
Argentina c/	1990	10,6	14,9	23,6	26,7	34,8
	1997	12,4	14,9	22,3	27,1	35,8
	1999	12,5	15,4	21,6	26,1	37,0
	2002	8,1	13,4	19,3	25,3	42,1
Bolivia	1989 d/	7,7	12,1	22,0	27,9	38,2
	1997	7,2	13,6	22,5	26,9	37,0	3,6	9,8	19,4	28,8	42,0
	1999	7,2	15,2	24,1	28,0	32,7	3,1	6,9	21,3	33,6	38,3
	2002	7,7	13,9	21,4	26,4	38,4	3,5	8,2	21,6	30,7	39,5
Brasil	1990	10,4	10,3	19,4	28,5	41,8	4,7	14,5	21,3	26,1	38,2
	1996	13,6	10,5	18,1	27,0	44,3	6,8	13,4	23,3	23,7	39,6
	1999	12,3	10,6	17,7	26,1	45,7	6,7	14,0	23,1	22,8	40,2
	2001	11,8	10,5	17,7	26,0	45,7	6,5	13,9	23,8	23,2	39,1
Chile	1990	9,4	13,4	21,2	26,2	39,2	9,7	13,8	20,4	20,6	45,1
	1996	13,5	13,4	20,9	26,4	39,4	9,4	16,8	24,3	23,4	35,6
	2000	14,1	14,0	20,9	25,4	39,7	10,6	16,9	24,5	22,4	36,1
	2003	13,8	14,1	21,1	25,7	39,1	11,0	16,5	22,7	22,3	38,5
Colombia	1994	9,0	11,6	20,4	26,1	41,9	5,7	10,0	23,3	32,2	34,6
	1997	8,4	12,9	21,4	26,1	39,5	5,3	15,4	26,3	28,2	30,1
	1999	7,3	12,6	21,9	26,6	38,8	5,6	13,9	24,7	25,9	35,5
	2002	7,2	11,9	22,2	26,8	39,1
Costa Rica	1990	9,6	17,8	28,7	28,9	24,6	9,3	17,6	28,0	29,9	24,5
	1997	10,5	17,3	27,6	28,4	26,8	9,6	17,3	27,9	28,9	25,9
	1999	11,9	16,2	26,8	29,9	27,2	10,9	15,8	26,7	29,3	28,2
	2002	12,3	15,5	26,2	29,3	29,0	10,8	14,4	26,6	29,2	29,8
Ecuador	1990	5,5	17,1	25,4	27,0	30,5
	1997	6,0	17,0	24,7	26,4	31,9
	1999	5,6	14,1	22,8	26,5	36,6
	2002	6,7	15,4	24,3	26,0	34,3
El Salvador	1995	6,9	17,3	25,1	25,8	31,7	5,1	17,0	29,6	27,3	26,1
	1997	7,1	17,2	24,8	26,9	31,1	4,7	19,4	28,6	27,3	24,7
	1999	7,7	16,3	25,9	28,6	29,2	4,9	15,6	28,8	29,8	25,9
	2001	7,6	15,6	25,1	28,5	30,8	5,2	14,7	27,4	30,3	27,7
Guatemala	1989	7,7	12,1	22,6	27,4	37,9	5,0	14,4	24,7	25,7	35,1
	1998	8,2	16,0	22,4	24,7	36,9	6,3	15,7	23,5	23,5	37,3
	2002	7,9	13,9	22,8	26,6	36,7	6,1	17,1	24,7	27,7	30,6
Honduras	1990	5,5	12,2	20,8	28,1	38,9	3,3	13,1	22,1	27,3	37,4
	1997	4,7	14,3	22,8	26,1	36,8	3,6	14,4	24,6	27,5	33,5
	1999	4,6	14,3	24,0	27,9	33,9	3,3	13,9	23,9	29,1	33,0
	2002	5,3	13,8	23,3	26,0	36,8	3,3	15,4	23,1	28,3	33,2
México	1989	9,6	16,3	22,0	24,9	36,9	6,7	18,7	26,5	27,4	27,4
	1994	9,7	16,8	22,8	26,1	34,3	6,6	20,1	25,3	27,6	27,0
	1998	8,6	17,2	22,3	25,7	34,8	6,2	18,0	23,7	26,8	31,5
	2000	9,0	17,0	23,3	26,1	33,6	7,4	15,6	21,5	24,3	38,7
	2002	8,9	17,9	24,0	27,0	31,2	6,9	18,0	23,2	26,5	32,3

(continúa)

Cuadro 24 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): NIVEL Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1990-2003 a/ (En porcentajes)											
País	Año	Ingreso medio b/	Participación en el ingreso total del:				Ingreso medio b/	Participación en el ingreso total del:			
			40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico		40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico
ZONAS URBANAS						ZONAS RURALES					
Nicaragua	1993	6,1	12,9	23,6	26,9	36,5	3,9	12,4	24,3	30,0	33,4
	1998	6,4	12,3	22,3	26,4	39,1	4,5	10,8	24,1	27,8	37,3
	2001	6,8	13,2	21,2	24,3	41,4	4,4	14,3	26,4	28,6	30,7
Panamá	1991	9,5	13,3	23,9	28,6	34,2	7,3	15,0	23,7	25,7	35,6
	1997	12,0	13,3	22,4	27,0	37,3	8,6	14,9	22,4	25,0	37,7
	1999	11,6	15,0	25,1	27,8	32,2	7,8	17,3	23,6	25,4	33,7
	2002	11,9	14,2	25,0	28,2	32,7	8,5	11,1	23,9	30,7	34,3
Paraguay	1990 e/	7,7	18,6	25,7	26,9	28,9
	1996	7,4	16,7	24,6	25,3	33,4
	1999	7,1	16,5	24,9	25,8	32,8	5,0	15,1	21,2	24,3	39,4
	2000	7,4	15,9	23,4	27,5	33,1	4,6	14,6	24,9	27,7	32,9
Perú	1997	9,2	17,3	25,4	26,7	30,6	4,4	17,8	27,1	29,4	25,7
	1999	9,2	16,2	23,6	26,6	33,7	4,4	17,4	17,9	23,8	40,9
	2001	7,6	16,9	25,4	27,0	30,8	3,7	19,2	27,6	28,0	25,2
República Dominicana	1997	9,0	14,8	23,8	25,8	35,5	7,7	16,5	25,7	25,2	32,6
	2000	8,2	11,4	22,2	28,0	38,4	5,5	14,0	25,6	27,0	33,5
	2002	8,2	11,6	21,7	28,4	38,4	5,5	15,0	27,5	29,1	28,5
Uruguay	1990	9,3	20,1	24,6	24,1	31,2
	1997	11,2	22,0	26,1	26,1	25,8
	1999	11,9	21,6	25,5	25,9	27,0
	2002	9,4	21,6	25,4	25,6	27,3
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	9,1	16,8	26,1	28,8	28,4	7,7	19,8	28,6	27,8	23,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Hogares de cada zona del país ordenados según su ingreso per cápita.

b/ Ingreso medio mensual de los hogares, en múltiplos de la línea de pobreza per cápita.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Ocho ciudades principales y El Alto.

e/ Área metropolitana de Asunción.

Cuadro 25

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, TOTAL NACIONAL, 1990-2003 ^{a/}							
País	Año	Porcentaje de personas con ingreso per cápita menor que:		Índices de concentración			
		el promedio	el 50% del promedio	Gini ^{b/}	Varianza logarítmica	Theil	Atkinson
Argentina ^{c/}	1990	70,6	39,1	0,501	0,982	0,555	0,570
	1997	72,1	43,4	0,530	1,143	0,601	0,607
	1999	72,5	44,2	0,542	1,183	0,681	0,623
	2002	74,0	47,9	0,590	1,603	0,742	0,702
Bolivia	1989 ^{d/}	71,9	44,1	0,538	1,528	0,574	0,771
	1997	73,1	47,7	0,595	2,024	0,728	0,795
	1999	70,4	45,5	0,586	2,548	0,658	0,867
	2002	73,6	49,6	0,614	2,510	0,776	0,865
Brasil	1990	75,2	53,9	0,627	1,938	0,816	0,790
	1996	76,3	54,4	0,638	1,962	0,871	0,762
	1999	77,1	54,8	0,640	1,913	0,914	0,754
	2001	76,9	54,4	0,639	1,925	0,914	0,760
Chile	1990	74,6	46,5	0,554	1,258	0,644	0,671
	1996	73,9	46,9	0,553	1,261	0,630	0,667
	2000	75,0	46,4	0,559	1,278	0,666	0,658
	2003	74,7	45,6	0,550	1,198	0,668	0,641
Colombia	1994	73,6	48,9	0,601	2,042	0,794	0,817
	1997	74,2	46,4	0,569	1,399	0,857	0,822
	1999	74,5	46,6	0,572	1,456	0,734	0,945
	2002 ^{e/}	74,2	47,0	0,575	1,413	0,714	0,701
Costa Rica	1990	65,0	31,6	0,438	0,833	0,328	0,539
	1997	66,6	33,0	0,450	0,860	0,356	0,535
	1999	67,6	36,1	0,473	0,974	0,395	0,573
	2002	68,5	37,1	0,488	1,080	0,440	0,646
Ecuador ^{e/}	1990	69,6	33,8	0,461	0,823	0,403	0,591
	1997	68,9	34,8	0,469	0,832	0,409	0,510
	1999	72,1	42,0	0,521	1,075	0,567	0,597
	2002	72,3	39,8	0,513	1,031	0,563	0,593
El Salvador	1995	69,7	38,4	0,507	1,192	0,502	0,695
	1997	69,9	40,2	0,510	1,083	0,512	0,583
	1999	68,5	40,6	0,518	1,548	0,496	0,798
	2001	69,1	40,8	0,525	1,559	0,528	0,779
Guatemala	1989	74,9	47,9	0,582	1,477	0,736	0,700
	1998	75,3	46,6	0,560	1,182	0,760	0,618
	2002	72,8	47,9	0,543	1,142	0,589	0,595
Honduras	1990	75,1	52,3	0,615	1,842	0,817	0,746
	1997	72,5	45,4	0,558	1,388	0,652	0,697
	1999	71,8	46,4	0,564	1,560	0,636	0,746
	2002	72,8	49,6	0,588	1,607	0,719	0,709
México	1989	74,2	43,5	0,536	1,096	0,680	0,598
	1994	73,1	44,7	0,539	1,130	0,606	0,592
	2000	73,2	44,0	0,542	1,221	0,603	0,621
	2002	71,7	41,2	0,514	1,045	0,521	0,571
Nicaragua	1993	71,5	45,9	0,582	1,598	0,671	0,802
	1998	73,1	45,9	0,584	1,800	0,731	0,822
	2001	74,6	46,9	0,579	1,594	0,783	0,767

(continúa)

Cuadro 25 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, TOTAL NACIONAL, 1990-2003 a/							
País	Año	Porcentaje de personas con ingreso per cápita menor que:		Índices de concentración			
		el promedio	el 50% del promedio	Gini b/	Varianza logarítmica	Theil	Atkinson
Panamá e/	1991	70,3	44,2	0,545	1,312	0,577	0,656
	1997	71,8	45,6	0,552	1,362	0,632	0,673
	1999	71,4	43,8	0,533	1,223	0,558	0,629
	2002	70,3	41,1	0,561	1,217	0,488	0,640
Paraguay	1990 f/	69,2	33,4	0,447	0,737	0,365	0,468
	1996 e/	72,9	37,9	0,493	0,916	0,515	0,544
	1999	72,3	46,3	0,565	1,555	0,668	0,716
	2000	72,9	44,4	0,570	1,705	0,702	0,782
Perú	1997	70,1	41,4	0,532	1,348	0,567	0,663
	1999	71,7	42,7	0,545	1,358	0,599	0,673
	2001	70,3	41,5	0,525	1,219	0,556	0,636
República Dominicana	1997	71,4	39,8	0,517	1,075	0,557	0,603
	2000	71,6	44,3	0,554	1,250	0,583	0,635
	2001	71,3	43,1	0,541	1,175	0,564	0,616
	2002	71,6	43,0	0,544	1,216	0,570	0,637
Uruguay e/	1990	73,2	36,8	0,492	0,812	0,699	0,519
	1997	66,8	31,3	0,430	0,730	0,336	0,475
	1999	67,1	32,2	0,440	0,764	0,354	0,483
	2002	67,9	34,6	0,455	0,802	0,385	0,661
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	68,0	35,5	0,471	0,930	0,416	0,545
	1997	70,8	40,7	0,507	1,223	0,508	0,985
	1999	69,4	38,6	0,498	1,134	0,464	0,664
	2002	68,7	38,8	0,500	1,122	0,456	0,866

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Calculados a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas del conjunto del país. En los cuadros 26 y 27 se presentan las cifras desagregadas por área urbana y rural.

b/ Incluye a las personas con ingreso igual a cero.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Ocho ciudades principales y El Alto.

e/ Total zonas urbanas.

f/ Área metropolitana de Asunción.

Cuadro 26

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, ZONAS URBANAS, 1990-2003 a/							
País	Año	Porcentaje de personas con ingreso per cápita menor que:		Índices de concentración			
		el promedio	el 50% del promedio	Gini b/	Varianza logarítmica	Theil	Atkinson
Argentina c/	1990	70,6	39,1	0,501	0,982	0,555	0,570
	1997	72,1	43,4	0,530	1,143	0,601	0,607
	1999	72,5	44,2	0,542	1,183	0,681	0,623
	2002	74,0	47,9	0,590	1,603	0,742	0,702
Bolivia	1989 d/	71,9	44,1	0,538	1,528	0,574	0,771
	1997	72,5	43,0	0,531	1,772	0,573	0,627
	1999	70,4	40,2	0,504	1,131	0,487	0,680
	2002	74,7	46,6	0,554	1,286	0,633	0,657
Brasil	1990	74,7	52,2	0,606	1,690	0,748	0,749
	1996	75,7	53,1	0,620	1,735	0,815	0,728
	1999	76,5	53,8	0,625	1,742	0,865	0,729
	2001	76,4	53,3	0,628	1,777	0,875	0,738
Chile	1990	73,8	45,1	0,542	1,204	0,600	0,663
	1996	73,5	45,7	0,544	1,206	0,604	0,662
	2000	74,7	45,9	0,553	1,246	0,643	0,654
	2003	74,8	44,9	0,546	1,179	0,654	0,641
Colombia	1994	74,6	48,1	0,579	1,491	0,749	0,724
	1997	73,8	46,5	0,577	1,571	0,714	0,866
	1999	74,2	46,1	0,564	1,312	0,707	0,701
	2002	74,2	47,0	0,575	1,413	0,714	0,701
Costa Rica	1990	63,6	29,6	0,419	0,727	0,295	0,493
	1997	65,3	32,2	0,429	0,779	0,323	0,507
	1999	66,3	34,5	0,454	0,881	0,356	0,538
	2002	67,3	35,2	0,465	0,916	0,398	0,564
Ecuador	1990	69,6	33,8	0,461	0,823	0,403	0,591
	1997	68,9	34,8	0,469	0,832	0,409	0,510
	1999	72,1	42,0	0,521	1,075	0,567	0,597
	2002	72,3	39,8	0,513	1,031	0,563	0,593
El Salvador	1995	69,5	34,3	0,466	0,836	0,428	0,526
	1997	70,0	34,6	0,467	0,864	0,428	0,523
	1999	68,0	35,7	0,462	1,002	0,388	0,768
	2001	68,6	36,8	0,477	1,090	0,435	0,702
Guatemala	1989	72,2	45,6	0,558	1,377	0,640	0,679
	1998	74,5	40,3	0,525	0,997	0,653	0,568
	2002	71,8	42,2	0,524	1,106	0,532	0,596
Honduras	1990	73,1	46,6	0,561	1,397	0,661	0,679
	1997	71,8	40,9	0,527	1,142	0,578	0,650
	1999	70,8	41,6	0,518	1,138	0,528	0,630
	2002	72,3	42,3	0,533	1,227	0,580	0,659
México	1989	75,2	42,5	0,530	1,031	0,678	0,583
	1994	73,6	41,6	0,512	0,934	0,544	0,534
	1998	73,2	41,5	0,507	0,901	0,578	0,530
	2000	72,1	38,7	0,493	0,856	0,500	0,512
	2002	71,6	31,2	0,477	0,800	0,444	0,489
Nicaragua	1993	71,4	42,6	0,549	1,256	0,595	0,661
	1998	72,3	43,4	0,551	1,271	0,673	0,689
	2001	73,9	44,0	0,560	1,225	0,746	0,658

(continúa)

Cuadro 26 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, ZONAS URBANAS, 1990-2003 a/							
País	Año	Porcentaje de personas con ingreso per cápita menor que:		Índices de concentración			
		el promedio	el 50% del promedio	Gini b/	Varianza logarítmica	Theil	Atkinson
Panamá	1991	70,3	44,2	0,545	1,312	0,577	0,656
	1997	71,8	45,6	0,552	1,362	0,632	0,673
	1999	71,4	43,8	0,533	1,223	0,558	0,629
	2002	70,3	41,1	0,515	1,217	0,488	0,640
Paraguay	1990 e/	69,2	33,4	0,447	0,737	0,365	0,468
	1996	72,9	37,9	0,493	0,916	0,515	0,544
	1999	70,0	39,1	0,497	0,997	0,490	0,575
	2000	72,0	40,2	0,511	1,081	0,549	0,638
Perú	1997	70,4	36,0	0,473	0,852	0,453	0,523
	1999	74,0	39,4	0,498	0,954	0,499	0,581
	2001	70,6	35,7	0,477	0,903	0,465	0,572
República Dominicana	1997	71,9	39,5	0,509	1,003	0,538	0,574
	2000	71,5	43,6	0,550	1,236	0,569	0,636
	2001	70,9	43,6	0,542	1,208	0,560	0,627
	2002	71,8	44,4	0,548	1,232	0,569	0,639
Uruguay	1990	73,2	36,8	0,492	0,812	0,699	0,519
	1997	66,8	31,3	0,430	0,730	0,336	0,475
	1999	67,1	32,2	0,440	0,764	0,354	0,483
	2002	67,9	34,6	0,455	0,802	0,385	0,661
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	67,7	34,4	0,464	0,903	0,403	0,538

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Calculados a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas de las zonas urbanas.

b/ Incluye a las personas con ingreso igual a cero.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Ocho ciudades principales y El Alto.

e/ Área metropolitana de Asunción.

Cuadro 27

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, ZONAS RURALES, 1990-2003 a/							
País	Año	Porcentaje de personas con ingreso per cápita menor que:		Índices de concentración			
		el promedio	el 50% del promedio	Gini b/	Varianza logarítmica	Theil	Atkinson
Bolivia	1997	75,4	53,6	0,637	2,133	0,951	0,788
	1999	71,3	52,9	0,640	2,772	0,809	0,846
	2002	73,4	51,2	0,632	2,662	0,799	0,851
Brasil	1990	72,5	45,5	0,548	1,266	0,627	0,704
	1996	73,1	47,6	0,578	1,424	0,727	0,675
	1999	73,8	47,4	0,577	1,357	0,773	0,662
	2001	73,0	47,2	0,581	1,451	0,790	0,687
Chile	1990	79,0	47,9	0,578	1,269	0,854	0,663
	1996	73,9	36,2	0,492	0,887	0,542	0,554
	2000	74,5	38,7	0,511	0,956	0,669	0,576
	2003	75,5	38,3	0,507	0,913	0,622	0,553
Colombia	1994	69,8	45,5	0,570	2,047	0,621	0,806
	1997	73,8	46,5	0,554	1,571	0,714	0,866
	1999	72,1	39,5	0,525	1,291	0,626	0,963
	2002	70,8	38,1	0,507	1,153	0,549	0,759
Costa Rica	1990	63,3	27,9	0,419	0,771	0,301	0,518
	1997	65,7	30,4	0,426	0,757	0,316	0,498
	1999	66,8	33,0	0,457	0,895	0,377	0,551
	2002	67,5	34,6	0,481	1,056	0,436	0,658
El Salvador	1995	64,4	29,9	0,442	0,961	0,352	0,656
	1997	66,3	31,0	0,423	0,670	0,343	0,441
	1999	64,8	34,0	0,462	1,302	0,382	0,768
	2001	65,2	35,5	0,477	1,329	0,414	0,730
Guatemala	1989	72,6	37,6	0,513	1,076	0,593	0,620
	1998	75,0	40,6	0,510	0,882	0,697	0,541
	2002	72,5	36,1	0,470	0,794	0,420	0,490
Honduras	1990	73,9	45,6	0,558	1,326	0,692	0,658
	1997	70,9	38,7	0,504	1,083	0,520	0,630
	1999	69,8	39,8	0,512	1,244	0,516	0,695
	2002	71,8	42,6	0,519	1,072	0,567	0,593
México	1989	68,8	33,5	0,453	0,769	0,401	0,490
	1994	69,5	34,9	0,451	0,720	0,385	0,458
	1998	70,2	41,5	0,486	0,846	0,467	0,506
	2000	75,3	46,1	0,553	1,125	0,682	0,592
	2002	72,7	39,7	0,498	0,879	0,528	0,519
Nicaragua	1993	69,2	41,6	0,536	1,348	0,553	0,790
	1998	68,2	42,4	0,558	1,765	0,598	0,819
	2001	67,6	37,9	0,506	1,367	0,503	0,734
Panamá	2002	70,3	41,1	0,515	1,217	0,488	0,640
Paraguay	1999	74,1	47,1	0,570	1,389	0,839	0,684
	2000	70,6	42,4	0,548	1,483	0,752	0,750
Perú	1997	66,5	33,9	0,451	0,868	0,383	0,525
	1999	65,8	31,1	0,427	0,803	0,320	0,507
	2001	66,9	31,8	0,439	0,745	0,380	0,478
República Dominicana	1997	69,8	36,2	0,483	0,940	0,484	0,570
	2000	70,2	37,0	0,501	0,969	0,456	0,557
	2002	67,0	34,4	0,473	0,919	0,403	0,560
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	67,0	31,3	0,431	0,724	0,348	0,468

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Calculados a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas de las zonas rurales.

b/ Incluye a las personas con ingreso igual a cero.

Cuadro 28

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): ASISTENCIA ESCOLAR EN ÁREAS URBANAS, AMBOS SEXOS, SEGÚN QUINTIL DE INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR GRUPO DE EDAD, 1989-2002										
(En porcentajes de población de la misma edad)										
País	Año	7 a 12 años			13 a 19 años			20 a 24 años		
		Total	20% más pobre	20 % más rico	Total	20% más pobre	20 % más rico	Total	20% más pobre	20 % más rico
Argentina	1990 a/	98,4	97,9	100,0	68,8	62,6	79,3	23,6	12,4	39,8
	2002 b/	99,4	99,1	100,0	83,2	76,3	96,4	40,5	21,7	61,6
Bolivia	1989 c/	97,3	95,9	96,3	85,0	84,4	87,5	44,3	45,6	52,7
	2002	96,9	95,6	98,3	84,6	84,2	88,2	43,3	32,9	74,3
Brasil	1990	91,4	83,6	98,5	64,6	56,1	86,7	19,8	11,6	39,8
	2001	97,6	95,8	99,6	77,5	72,6	90,6	27,5	18,7	52,9
Chile	1990	98,8	97,9	99,4	78,7	74,6	89,6	18,7	8,4	41,7
	1998	99,2	98,6	99,8	81,5	75,1	92,2	30,0	12,9	62,3
	2003	99,4	99,1	99,6	85,2	81,4	93,9	35,1	19,1	67,5
Colombia	1990 d/	96,0	92,6	99,1	74,9	66,3	92,8	28,1	15,3	48,9
	2002	96,3	94,0	99,4	68,2	64,3	85,0	23,9	13,1	52,7
Costa Rica	1990	96,8	95,3	98,4	68,6	57,9	86,2	28,5	20,0	52,1
	2002	98,5	97,2	99,4	76,9	72,9	90,2	43,3	29,7	60,6
Ecuador	1990	97,8	97,1	98,6	77,2	78,1	84,5	35,4	32,5	42,0
	2002	95,9	92,6	98,6	73,3	68,1	87,3	30,2	17,1	50,4
El Salvador	1995	92,2	85,8	99,6	70,5	64,2	87,0	27,2	13,1	49,6
	2001	92,6	85,9	100,0	73,4	66,0	87,0	25,5	11,3	49,5
Guatemala	1990
	2002	90,4	84,2	94,3	66,9	63,3	78,3	25,5	11,1	43,9
Honduras	1990	89,5	85,1	98,3	57,7	51,2	79,2	22,2	13,4	41,1
	2002	92,3	86,2	98,1	63,8	50,0	85,8	26,9	9,8	51,1
México	1992	97,4	95,8	99,5	62,7	55,6	80,7	23,9	7,1	47,3
	2002	98,1	96,3	99,6	68,9	57,6	92,8	30,7	16,4	55,1
Nicaragua	1993	88,7	82,5	97,3	69,5	56,7	80,4	24,4	17,1	34,0
	2001	93,1	88,1	96,3	69,9	61,5	79,2	31,5	15,4	52,1
Panamá	1991	97,6	95,9	99,5	72,6	61,7	89,8	30,7	16,8	54,2
	2002	98,9	98,4	99,3	81,4	78,0	89,1	35,6	22,6	55,0
Paraguay	1994	96,0	94,5	99,2	71,2	62,0	85,3	23,6	12,0	43,0
	2000	97,7	97,4	99,9	74,1	63,8	86,8	31,9	13,7	61,5
Perú	1997	97,6	96,2	99,5	72,4	73,1	84,1	29,8	20,7	44,6
	2001	98,6	97,7	98,9	72,9	72,2	74,8	27,7	18,9	40,6
República Dominicana	2000	97,6	95,3	99,5	82,6	84,6	87,6	43,2	38,6	56,3
	2002	97,7	95,9	99,2	83,7	83,3	89,3	44,3	34,4	60,5
Uruguay	1990	99,1	98,9	100,0	70,6	60,5	89,4	26,7	8,6	54,2
	2002	98,2	98,2	98,8	76,5	64,2	94,9	34,8	12,7	73,0
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	95,4	94,3	97,9	68,7	68,8	78,3	27,3	27,0	39,3
	2002 e/	96,7	94,6	98,6	67,2	62,7	77,8	33,6	20,8	54,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Área metropolitana.

b/ Veintiocho aglomerados urbanos.

c/ Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Trinidad.

d/ Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Pasto.

e/ Nacional.

Cuadro 29

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7,6		77,3	15,0
	1990	3,3		78,6	18,2
	1994	3,9		77,2	18,9
	1999	2,5	40,6	41,5	15,5
	2002	2,9	35,2	44,5	17,4
Bolivia	1997	11,9	31,1	44,4	12,6	48,3	34,9	15,3	1,5
	2002	8,8	29,5	45,8	15,9	44,3	34,1	20,5	1,2
Brasil	1979	48,2	34,6	14,1	3,1	86,8	9,7	1,9	1,6
	1990	41,0	37,5	18,2	3,3	79,0	16,9	3,7	0,3
	1993	40,7	38,9	17,6	2,8	77,9	17,4	4,3	0,3
	1999	27,0	42,7	26,7	3,7	62,8	27,2	9,5	0,5
	2002	20,8	41,1	33,7	4,4	54,3	33,7	11,5	0,5
Chile	1990	5,6	33,1	45,5	15,8	16,9	56,5	22,6	4,1
	1994	4,2	31,2	46,4	18,2	14,4	54,8	26,1	4,7
	2000	2,7	30,1	51,1	16,2	8,5	49,9	37,0	4,6
	2003	1,6	28,2	51,8	18,4	5,6	45,6	44,0	4,9
Colombia b/	1980	31,2	40,9	21,1	6,8
	1990	19,6	40,4	31,0	9,0
	1991	21,8	37,9	29,7	10,6	60,1	25,7	13,6	0,5
	1994	17,7	37,9	35,9	8,4	55,8	29,5	14,0	0,7
	1999	14,6	32,4	43,2	9,8	46,2	30,7	21,8	1,3
	2002	13,5	29,5	37,1	19,9
Costa Rica	1981	7,3	50,5	33,9	8,2	19,8	64,7	13,8	1,7
	1990	9,1	50,1	29,8	10,9	20,0	64,5	13,6	2,0
	1994	8,6	49,6	30,9	10,9	21,2	64,3	12,3	2,2
	1999	8,5	50,8	28,3	12,4	18,5	61,9	15,9	3,7
	2002	7,3	49,4	30,4	12,8	19,1	61,4	15,5	4,0
Ecuador	1990	5,8	45,9	37,0	11,4
	1994	4,8	42,3	39,5	13,4
	1999	6,0	41,0	39,5	13,6
	2002	6,5	39,4	37,6	16,5
El Salvador	1995	20,6	41,4	28,8	9,2	60,4	31,2	7,3	1,1
	1999	15,6	38,7	33,5	12,2	49,7	38,5	10,0	1,9
	2001	13,8	39,5	33,7	13,0	43,9	41,8	12,3	2,0
	2003	14,2	40,5	32,8	12,6	42,9	42,7	12,7	1,7
Guatemala	1989	33,9	42,6	19,2	4,3	75,9	21,8	2,1	0,2
	1998	25,3	43,5	24,3	6,9	67,3	29,1	3,4	0,2
	2002	19,1	42,4	30,2	8,3	56,5	35,4	7,2	0,8
Honduras	1990	24,1	55,7	15,3	5,0	57,6	39,8	2,3	0,3
	1994	20,5	56,1	17,3	6,0	45,9	49,3	4,4	0,4
	1999	16,3	57,7	19,9	6,2	45,5	49,1	5,2	0,3
	2003	16,1	52,4	23,8	7,7	45,4	49,9	4,1	0,6
México a/	1989	8,3	60,5	22,1	9,1	31,4	59,2	7,7	1,7
	1994	7,5	57,5	24,4	10,6	25,8	65,1	8,0	1,1
	1998	6,0	55,2	24,3	12,3	21,6	62,3	12,7	3,0
	2002	6,3	42,2	37,2	14,3	15,2	59,7	20,2	4,9

(continúa)

Cuadro 29 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Nicaragua	1993	24,6	53,8	19,5	2,1	68,9	26,5	4,3	0,3
	1998	21,7	50,5	22,2	5,5	61,2	32,6	5,3	0,9
	2001	19,8	46,4	26,1	7,7	60,5	33,2	5,5	0,7
Panamá	1979	6,3	49,1	35,5	9,1	20,5	61,3	16,2	1,9
	1991	6,3	42,7	39,5	11,5	15,6	57,3	23,6	3,5
	1994	5,0	45,9	36,4	12,6	16,4	56,3	23,3	4,0
	1999	3,9	40,8	39,1	16,2	12,9	55,4	26,3	5,4
	2002	3,5	38,6	41,8	16,1	20,2	53,6	21,2	5,1
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	10,6	50,9	31,1	7,5
	1990	7,3	46,7	36,8	9,3
	1994	7,9	49,0	34,8	8,3
	1997	6,2	48,1	37,1	8,6	33,2	54,2	11,4	1,3
Perú	2001	7,3	39,0	40,7	12,9	32,0	48,8	17,2	1,9
	1999	3,4	32,9	49,6	14,1	25,1	49,0	22,7	3,2
República Dominicana	2002	4,7	30,3	44,4	20,6	20,3	48,8	24,9	6,0
	2000	13,1	35,5	37,1	14,3	37,4	38,7	20,4	3,5
Uruguay	2003	10,7	35,9	38,1	15,3	26,4	38,0	28,9	6,7
	1981	7,4	55,5	31,8	5,3
	1990	3,7	52,6	35,4	8,3
	1994	3,5	51,1	37,6	7,8
	1999	2,8	48,6	39,4	9,2
Venezuela (República Bolivariana de) ^{c/}	2002	3,3	47,4	35,5	13,8
	1981	13,5	58,5	20,4	7,7	46,1	46,4	6,8	0,7
	1990	10,3	56,5	23,6	9,6	39,0	51,3	8,5	1,2
	1994	10,2	48,2	28,8	12,8	38,2	48,4	10,9	2,5
	1999	10,7	48,2	27,3	13,8
	2003	9,5	45,1	29,9	15,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 29.1

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7,6		78,9	13,5
	1990	3,1		81,6	15,3
	1994	4,8		80,1	15,0
	1999	2,5	46,0	39,9	11,7
	2002	3,7	39,2	41,6	15,4
Bolivia	1997	9,2	31,3	46,6	12,9	40,0	39,1	19,8	1,1
	2002	6,8	29,1	48,6	15,5	37,5	36,1	24,9	1,5
Brasil	1979	49,2	34,6	13,1	3,1	87,0	9,5	1,6	2,0
	1990	44,4	37,0	15,8	2,9	81,7	15,6	2,6	0,2
	1993	44,8	37,4	15,5	2,2	81,0	15,6	3,2	0,2
	1999	30,7	42,9	23,4	3,0	68,1	23,7	7,8	0,4
	2002	23,8	42,0	30,6	3,6	60,1	30,3	9,3	0,3
Chile	1990	6,0	33,5	45,6	14,9	18,8	57,0	20,5	3,6
	1994	4,5	32,1	45,6	17,8	16,2	55,5	24,1	4,1
	2000	2,8	31,0	49,7	16,5	9,5	52,4	34,5	3,6
	2003	2,0	29,1	51,0	17,9	6,4	46,4	43,2	4,0
Colombia b/	1980	29,5	42,7	21,3	6,6
	1990	18,2	42,5	30,7	8,6
	1991	22,1	39,8	28,4	9,7	64,3	23,5	11,6	0,5
	1994	18,1	39,0	35,1	7,8	60,3	28,3	10,9	0,5
	1999	15,0	34,0	42,2	8,9	50,2	29,7	19,1	1,0
	2002	14,3	30,8	36,1	18,8
Costa Rica	1981	7,8	52,4	31,6	8,2	19,6	65,8	12,7	1,9
	1990	10,5	50,1	28,6	10,8	22,3	63,7	12,2	1,8
	1994	9,4	47,9	31,5	11,2	22,4	64,7	11,0	1,9
	1999	9,5	52,0	26,8	11,6	19,3	63,3	13,6	3,7
	2002	8,0	50,5	29,8	11,7	20,9	61,9	13,4	3,7
Ecuador	1990	6,7	48,9	33,9	10,6
	1994	4,9	42,9	39,9	12,3
	1999	6,0	43,7	39,2	11,0
	2002	7,1	40,5	37,2	15,2
El Salvador	1995	20,7	43,5	26,7	9,1	61,1	31,5	6,7	0,7
	1999	16,0	38,7	32,8	12,4	48,6	40,6	9,0	1,8
	2001	13,0	41,6	33,4	11,9	42,4	43,6	12,0	2,0
	2003	13,5	43,3	30,8	12,4	41,9	44,4	12,4	1,4
Guatemala	1989	27,6	47,5	18,6	6,2	70,8	26,5	2,5	0,2
	1998	24,3	45,8	21,8	8,1	61,1	34,8	3,9	0,1
	2002	14,4	45,9	30,1	9,6	51,8	40,6	6,0	1,6
Honduras	1990	23,8	57,3	14,6	4,3	60,2	38,2	1,6	0,1
	1994	21,4	56,2	15,9	6,5	48,2	47,9	3,5	0,4
	1999	17,7	58,8	18,5	5,0	46,7	49,0	4,2	0,1
	2003	18,1	53,4	21,5	7,0	48,6	47,4	3,6	0,5
México a/	1989	7,6	58,1	23,8	10,5	31,4	58,6	8,4	1,5
	1994	7,1	56,1	25,2	11,5	27,4	63,5	7,9	1,2
	1998	6,2	55,5	25,3	12,4	19,9	62,6	13,6	3,4
	2002	5,3	44,3	35,9	14,5	14,9	61,2	19,7	4,3

(continúa)

Cuadro 29.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Nicaragua	1993	26,0	54,2	17,7	2,1	72,1	23,3	4,4	0,2
	1998	24,0	50,7	20,6	4,7	65,7	30,1	3,5	0,8
	2001	23,5	49,0	21,3	6,2	64,2	30,7	4,7	0,4
Panamá	1979	6,5	52,6	32,3	8,6	20,3	63,5	14,6	1,6
	1991	7,2	47,1	36,0	9,7	17,8	58,2	21,2	2,8
	1994	5,6	49,5	34,8	10,1	18,2	59,1	19,9	2,8
	1999	4,3	43,9	37,9	13,8	14,8	59,4	21,9	3,9
	2002	4,1	42,3	40,0	13,6	19,0	58,1	19,5	3,4
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1990	5,6	46,6	38,8	9,1
	1994	7,4	47,5	37,2	7,8
	1997	5,3	45,8	40,1	8,7	36,5	53,2	10,0	0,3
	2001	6,5	41,9	40,3	11,3	35,0	46,1	17,7	1,2
Perú	1999	3,1	33,3	50,0	13,7	20,3	50,6	27,5	1,6
	2002	4,6	31,3	45,6	18,5	14,3	51,2	28,5	6,0
República Dominicana	2000	15,6	39,4	33,9	11,0	41,9	38,1	17,3	2,8
	2003	13,0	39,0	36,3	11,7	30,9	40,0	25,1	4,0
Uruguay	1981	8,8	57,4	28,7	5,1
	1990	4,0	57,3	31,8	6,9
	1994	4,1	56,5	33,2	6,2
	1999	3,3	55,4	34,2	7,2
	2002	4,0	52,4	32,8	10,7
Venezuela (República Bolivariana de) c/	1981	15,3	59,0	18,6	7,1	49,0	44,5	6,0	0,5
	1990	11,9	58,4	21,1	8,6	44,4	48,8	6,0	0,8
	1994	12,2	51,0	26,0	10,8	43,5	45,2	9,7	1,6
	1999	13,5	51,4	24,7	10,4
	2003	12,1	49,2	26,7	12,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 29.2

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003										
(En porcentajes)										
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales				
		Años de instrucción				Años de instrucción				
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7,7		75,9		16,5	
	1990	3,4		75,2		21,3	
	1994	3,0		74,1		22,9	
	1999	2,4	35,4		43,0	19,1	
	2002	2,1	31,4		47,3	19,2	
Bolivia	1997	14,5	30,9		42,3	12,4	56,9	30,5	10,8	1,8
	2002	10,5	29,9		43,4	16,3	52,0	31,7	15,4	0,8
Brasil	1979	47,3	34,5		15,0	3,2	86,6	9,9	2,2	1,3
	1990	37,9	38,0		20,4	3,7	76,1	18,5	5,0	0,4
	1993	36,8	40,3		19,5	3,4	74,3	19,5	5,7	0,4
	1999	23,4	42,4		29,9	4,3	56,7	31,1	11,5	0,7
	2002	17,8	40,2		36,7	5,3	47,5	37,7	14,1	0,7
Chile	1990	5,3	32,6		45,4	16,7	14,7	55,9	24,7	4,6
	1994	3,8	30,3		47,2	18,6	12,5	54,0	28,2	5,3
	2000	2,5	29,2		52,5	15,8	7,4	47,2	39,8	5,6
	2003	1,1	27,3		52,6	18,9	4,6	44,7	44,9	5,8
Colombia b/	1980	32,5	39,5		21,0	7,0
	1990	20,8	38,7		31,2	9,3
	1991	21,5	36,3		30,8	11,4	55,9	28,0	15,6	0,5
	1994	17,4	37,1		36,6	8,9	50,9	30,8	17,4	0,8
	1999	14,3	31,1		44,0	10,6	41,8	31,8	24,8	1,7
	2002	12,9	28,3		38,0	20,8
Costa Rica	1981	6,9	48,7		36,2	8,2	19,9	63,7	14,8	1,6
	1990	7,7	50,1		31,1	11,1	17,4	65,4	15,0	2,2
	1994	7,7	51,4		30,3	10,6	19,8	63,9	13,8	2,5
	1999	7,5	49,7		29,7	13,1	17,8	60,5	18,1	3,6
	2002	6,6	48,2		31,1	14,0	17,2	60,8	17,8	4,2
Ecuador	1990	5,0	43,1		39,8	12,1
	1994	4,8	41,8		39,2	14,3
	1999	5,9	38,3		39,8	16,0
	2002	5,9	38,3		38,0	17,8
El Salvador	1995	20,5	39,6		30,6	9,3	59,7	30,9	7,8	1,5
	1999	15,3	38,7		34,1	12,0	50,8	36,4	11,0	1,9
	2001	14,6	37,6		33,9	13,9	45,5	40,0	12,6	1,9
	2003	14,8	37,9		34,5	12,8	43,9	41,1	13,0	2,0
Guatemala	1989	38,9	38,7		19,6	2,8	80,8	17,4	1,7	0,2
	1998	26,2	41,5		26,6	5,8	73,2	23,7	2,8	0,3
	2002	23,4	39,2		30,3	7,1	60,8	30,7	8,3	0,1
Honduras	1990	24,2	54,4		15,9	5,5	55,0	41,5	3,1	0,4
	1994	19,8	56,0		18,5	5,6	43,4	50,8	5,3	0,4
	1999	15,2	56,7		21,1	7,1	44,2	49,2	6,3	0,4
	2003	14,3	51,6		25,7	8,3	42,0	52,6	4,8	0,6
México a/	1989	8,9	62,7		20,5	7,8	31,4	59,8	6,9	1,9
	1994	7,8	58,8		23,6	9,8	24,3	66,7	8,1	0,9
	1998	5,8	54,9		23,4	12,3	23,2	62,0	11,7	2,6
	2002	7,3	40,0		38,5	14,2	15,5	58,3	20,6	5,6

(continúa)

Cuadro 29.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Nicaragua	1993	23,4	53,4	21,1	2,1	65,7	29,8	4,3	0,3
	1998	19,7	50,3	23,7	6,3	56,4	35,4	7,2	1,0
	2001	16,4	44,0	30,5	9,1	56,4	36,0	6,5	1,0
Panamá	1979	6,1	46,1	38,2	9,6	20,8	58,6	18,2	2,3
	1991	5,4	38,4	42,9	13,3	12,9	56,2	26,5	4,4
	1994	4,5	42,3	38,0	15,2	14,4	53,0	27,2	5,4
	1999	3,5	37,7	40,3	18,5	10,8	51,1	31,2	7,0
	2002	3,0	34,6	43,6	18,8	21,5	48,5	23,0	7,0
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	12,4	49,9	31,0	6,7
	1990	8,7	46,7	35,1	9,4
	1994	8,3	50,2	32,8	8,7
	1997	6,9	50,1	34,5	8,5	29,6	55,2	12,9	2,2
	2001	8,0	36,6	41,1	14,3	28,2	52,4	16,6	2,8
Perú	1999	3,6	32,6	49,3	14,5	30,3	47,2	17,4	5,1
	2002	4,8	29,2	43,3	22,7	26,8	46,3	20,9	6,0
República Dominicana	2000	10,6	31,8	40,2	17,4	32,5	39,4	23,9	4,2
	2003	8,4	32,8	39,9	18,8	21,1	35,8	33,2	9,9
Uruguay	1981	6,1	53,9	34,6	5,5
	1990	3,3	48,0	38,9	9,7
	1994	2,8	45,8	42,0	9,4
	1999	2,3	41,6	44,8	11,3
	2002	2,7	42,3	38,2	16,9
Venezuela (República Bolivariana de) c/	1981	11,8	58,0	22,0	8,2	42,2	48,8	7,9	1,0
	1990	8,7	54,5	26,2	10,6	32,5	54,3	11,5	1,7
	1994	8,3	45,3	31,6	14,8	32,0	52,1	12,4	3,5
	1999	7,7	44,9	30,0	17,4
	2003	6,8	40,9	33,1	19,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 30

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina <i>a/</i> (Gran Buenos Aires)	1980	21,6	67,4		11,1
	1990	12,4	69,6		18,0
	1994	10,3	70,7		19,0
	1999	8,5	38,2	30,6	22,7
	2002	7,6	37,0	29,7	25,7
Bolivia	1997	34,1	17,3	28,4	20,3	78,3	12,2	5,8	3,8
	2002	31,0	18,6	25,7	24,6	74,6	16,5	6,4	2,5
Brasil	1979	70,0	12,6	10,0	7,3	96,0	1,9	1,0	1,0
	1990	55,5	17,1	16,8	10,7	89,2	6,3	3,7	0,8
	1993	53,4	19,0	17,7	10,0	88,3	6,8	3,9	1,0
	1999	45,3	21,6	21,8	11,3	82,6	10,2	5,8	1,4
	2002	41,4	21,7	24,8	12,1	81,8	10,9	6,2	1,1
Chile	1990	15,7	29,4	34,6	20,3	43,7	37,5	13,1	5,7
	1994	14,0	24,2	39,0	22,8	39,6	38,7	15,8	5,9
	2000	10,0	23,4	40,3	26,3	35,1	43,5	16,8	4,7
	2003	8,8	21,5	42,0	27,8	30,2	45,1	19,4	5,3
Colombia <i>b/</i>	1980	52,4	22,3	13,7	11,6
	1990	37,4	23,4	23,1	16,1
	1991	39,9	23,0	21,3	15,8	78,2	12,4	7,3	2,1
	1994	35,9	22,9	25,3	15,9	76,2	12,0	9,5	2,4
	1999	33,3	21,5	27,6	17,6	72,8	12,5	10,9	3,9
	2002	33,2	19,0	26,8	21,0
Costa Rica	1981	27,2	41,5	17,8	13,5	58,1	33,5	5,8	2,6
	1990	16,7	40,5	22,1	20,7	40,0	44,8	10,6	4,5
	1994	14,1	39,5	24,9	21,5	34,8	49,2	10,7	5,3
	1999	12,7	41,1	22,5	23,7	28,8	52,0	11,7	7,5
	2002	11,0	42,4	21,7	24,9	28,8	53,0	10,3	7,9
Ecuador	1990	16,1	43,0	21,9	19,0
	1994	11,7	39,8	24,6	24,0
	1999	11,5	37,2	27,1	24,2
	2002	11,4	36,5	25,5	26,5
El Salvador	1995	35,8	30,2	19,7	14,3	80,2	16,3	2,6	0,9
	1999	30,6	29,8	22,0	17,7	75,2	19,6	3,7	1,5
	2001	29,7	29,9	22,9	17,5	72,2	21,0	5,1	1,8
	2003	26,9	30,4	24,3	18,3	69,4	22,8	5,9	1,8
Guatemala	1989	51,5	26,6	13,8	8,1	90,7	7,3	1,5	0,5
	1998	42,4	29,9	17,5	10,2	87,1	10,2	2,3	0,5
	2002	34,5	30,4	21,3	13,8	80,1	16,0	2,6	1,3
Honduras	1990	42,7	31,0	18,2	8,1	81,4	15,9	2,5	0,2
	1994	35,1	34,4	22,0	8,5	69,9	25,1	4,5	0,5
	1999	31,4	36,6	21,0	11,0	69,3	24,8	5,0	0,9
	2003	29,7	37,8	20,0	12,5	68,5	27,4	3,2	0,9
México <i>a/</i>	1989	29,5	47,2	9,6	13,7	70,0	25,1	2,3	2,6
	1994	23,0	48,4	11,8	16,8	63,3	31,4	3,4	1,9
	1998	19,7	49,0	13,1	16,8	51,9	38,0	4,6	2,9
	2002	17,2	43,3	21,3	18,1	50,3	36,9	7,6	5,2

(continúa)

Cuadro 30 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Nicaragua	1993	41,4	34,1	15,9	8,7	81,7	15,0	2,1	1,1
	1998	36,5	35,2	14,0	14,4	75,9	16,6	4,1	3,4
	2001	37,6	33,8	17,3	11,4	76,8	18,0	3,6	1,5
Panamá	1979	18,2	47,8	20,5	13,5	57,4	36,6	4,4	1,7
	1991	13,8	39,6	25,1	21,6	37,6	43,9	12,3	6,1
	1994	11,2	39,9	26,6	22,3	35,0	44,8	13,2	6,9
	1999	8,0	38,7	27,8	25,4	27,2	48,4	16,1	8,3
	2002	6,6	36,3	29,1	28,0	32,5	47,7	13,3	6,6
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	21,6	37,5	23,3	17,6
	1990	16,9	40,5	28,1	14,6
	1994	17,9	42,1	22,9	17,1
	1997	17,0	39,0	25,5	18,5	59,5	34,1	4,8	1,7
Perú	2001	17,5	34,6	26,7	21,3	53,8	38,1	4,3	3,8
	1999	21,3	13,8	35,3	29,6	69,3	15,7	10,9	4,2
República Dominicana	2002	21,1	15,0	31,3	32,5	60,2	19,8	13,9	6,0
	2000	26,4	29,0	23,5	21,1	58,6	26,6	10,4	4,3
Uruguay	2003	25,1	27,7	24,5	22,7	48,3	29,8	14,2	7,7
	1981	26,6	46,4	18,2	8,8
	1990	17,2	46,3	23,6	12,8
	1994	14,5	46,3	25,3	13,8
	1999	9,2	47,8	27,4	15,6
Venezuela (República Bolivariana de) c/	2002	8,0	43,7	27,2	21,1
	1981	29,9	49,4	11,9	8,7	73,5	22,8	2,8	0,9
	1990	19,4	48,3	17,8	14,5	61,0	32,4	5,2	1,4
	1994	18,5	45,8	20,2	15,5	54,0	36,3	7,0	2,8
	1999	18,6	45,2	20,0	16,3
2003	18,0	42,7	20,6	18,7	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 30.1

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	20,9	66,1		13,1
	1990	11,2	70,1		18,7
	1994	9,1	71,9		19,1
	1999	8,1	39,8	31,4	20,7
	2002	8,5	39,0	28,9	23,6
Bolivia	1997	25,1	18,4	32,3	24,2	71,3	15,6	7,9	5,2
	2002	22,9	19,5	30,2	27,3	64,5	22,3	9,8	3,3
Brasil	1979	67,9	13,7	9,7	8,6	95,9	2,0	1,0	1,1
	1990	54,6	17,8	16,6	11,0	89,0	6,6	3,4	0,9
	1993	52,8	19,7	17,4	10,1	88,4	6,9	3,7	1,0
	1999	45,7	22,6	20,6	11,1	83,5	10,3	5,0	1,3
	2002	42,1	22,5	23,9	11,5	83,2	10,7	5,2	0,9
Chile	1990	13,8	28,5	35,3	22,4	42,9	38,5	12,9	5,7
	1994	12,9	23,6	39,5	24,0	38,3	40,4	15,1	6,2
	2000	9,6	22,4	40,2	27,8	35,3	44,2	16,0	4,4
	2003	7,9	21,0	42,1	29,0	29,3	46,6	19,0	5,1
Colombia b/	1980	48,8	21,0	13,8	16,4
	1990	34,6	22,8	23,3	19,2
	1991	36,9	23,0	21,6	18,5	78,0	12,4	7,3	2,2
	1994	33,8	22,8	25,4	18,0	76,9	11,4	9,2	2,6
	1999	31,8	21,2	27,4	19,6	73,9	12,1	10,3	3,7
	2002	32,5	18,9	26,7	22,0
Costa Rica	1981	25,4	40,3	18,4	15,8	55,5	35,9	5,9	2,7
	1990	15,0	40,1	22,1	22,9	38,1	46,6	10,7	4,7
	1994	13,4	38,3	24,5	23,7	34,3	49,9	10,3	5,5
	1999	11,7	41,8	22,0	24,5	28,2	53,2	11,3	7,3
	2002	10,3	43,2	20,9	25,7	28,0	54,4	9,4	8,2
Ecuador	1990	14,0	43,4	20,6	22,1
	1994	10,1	39,7	23,7	26,5
	1999	10,1	37,8	25,8	26,3
	2002	10,1	37,4	24,5	28,0
El Salvador	1995	29,4	32,8	20,4	17,3	75,0	20,6	3,4	1,0
	1999	25,4	31,8	22,5	20,3	70,2	24,0	4,3	1,5
	2001	24,2	32,3	23,9	19,6	67,0	24,8	6,5	1,7
	2003	21,6	33,2	24,5	20,8	64,6	26,6	7,0	1,8
Guatemala	1989	45,3	29,9	13,9	10,9	87,9	9,9	1,6	0,6
	1998	34,2	34,6	17,9	13,3	82,2	14,1	3,1	0,6
	2002	27,0	34,3	20,9	17,9	73,2	22,4	2,5	2,0
Honduras	1990	39,7	32,9	17,2	10,2	81,0	16,5	2,2	0,3
	1994	32,3	34,3	21,9	11,5	69,0	26,8	3,6	0,6
	1999	29,3	38,2	18,7	13,8	71,2	23,1	4,7	1,0
	2003	29,7	38,5	18,0	13,8	69,5	26,8	2,7	1,0
México a/	1989	25,3	43,9	10,7	20,1	66,8	25,7	3,6	3,9
	1994	19,8	45,5	12,3	22,4	59,7	33,0	4,4	2,9
	1998	17,2	44,3	15,7	20,9	47,5	38,2	5,4	3,6
	2002	15,5	42,2	19,9	22,4	47,4	38,9	7,4	6,2

(continúa)

Cuadro 30.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Nicaragua	1993	36,6	37,4	15,3	10,6	80,3	15,9	2,1	1,6
	1998	32,3	38,0	13,9	15,8	75,8	17,5	3,4	3,3
	2001	35,9	35,7	15,0	13,3	76,3	17,9	3,7	2,2
Panamá	1979	17,6	46,8	20,4	15,1	56,5	37,3	4,5	1,7
	1991	13,9	40,3	24,5	21,3	37,3	45,0	12,1	5,5
	1994	11,4	40,4	26,4	21,7	35,4	46,5	11,7	6,4
	1999	7,8	40,3	27,7	24,3	27,4	50,8	14,6	7,1
	2002	6,5	38,8	29,4	25,4	31,4	51,4	12,5	4,7
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	17,4	37,6	23,7	21,3
	1990	15,1	40,6	28,3	16,0
	1994	15,7	42,2	23,3	18,8
	1997	13,3	39,4	28,5	18,9	57,7	35,4	5,0	1,9
Perú	2001	14,3	34,9	28,2	22,6	51,0	40,8	4,8	3,4
	1999	14,6	14,2	37,7	33,5	59,3	19,9	16,0	4,8
República Dominicana	2002	15,6	14,6	34,8	34,9	50,3	23,6	18,4	7,6
	2000	25,9	30,1	23,2	20,8	56,9	28,2	9,9	5,0
Uruguay	2003	24,1	30,2	24,0	21,8	48,2	31,3	13,6	6,9
	1981	26,6	47,4	18,3	7,7
	1990	17,5	47,4	23,4	11,7
	1994	14,7	47,7	25,7	11,9
	1999	9,8	50,2	26,6	13,4
Venezuela (República Bolivariana de) c/	2002	8,5	46,1	26,7	18,7
	1981	26,0	50,9	12,1	11,1	70,9	25,0	2,9	1,2
	1990	17,5	49,6	17,4	15,5	58,9	34,5	5,1	1,6
	1994	17,3	46,5	19,7	16,4	53,6	37,4	6,2	2,8
	1999	18,4	47,1	19,7	14,8
2003	18,7	44,3	20,4	16,5	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 30.2

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	22,3	68,3	9,4	
	1990	13,5	69,1	17,4	
	1994	11,4	69,7	19,0	
	1999	8,8	36,8	29,9	24,6	
	2002	6,8	35,1	30,4	27,7	
Bolivia	1997	42,0	16,3	24,9	16,8	85,3	8,8	3,6	2,3
	2002	38,3	17,8	21,7	22,2	85,0	10,5	2,9	1,6
Brasil	1979	72,0	11,6	10,3	6,1	96,2	1,8	1,1	0,9
	1990	56,2	16,4	17,0	10,3	89,4	5,9	3,9	0,8
	1993	53,9	18,4	17,9	9,8	88,1	6,7	4,2	1,0
	1999	45,0	20,6	22,9	11,5	81,7	10,2	6,6	1,6
	2002	40,8	21,0	25,6	12,6	80,2	11,2	7,2	1,4
Chile	1990	17,4	30,1	34,0	18,5	44,5	36,4	13,4	5,8
	1994	15,0	24,7	38,5	21,8	40,9	37,0	16,5	5,6
	2000	10,4	24,3	40,4	24,9	34,8	42,7	17,6	5,0
	2003	9,5	22,0	41,9	26,6	31,0	43,6	19,8	5,6
Colombia b/	1980	55,5	23,5	13,7	7,4
	1990	39,9	23,9	22,9	13,3
	1991	42,3	23,0	21,1	13,6	78,4	12,4	7,3	2,0
	1994	37,6	23,0	25,3	14,2	75,5	12,6	9,7	2,2
	1999	34,6	21,8	27,7	16,0	71,5	12,9	11,5	4,1
	2002	33,8	19,1	26,9	20,1	69,7	13,5	11,7	5,1
Costa Rica	1981	28,7	42,6	17,3	11,4	60,9	31,1	5,6	2,5
	1990	18,2	40,9	22,1	18,9	42,0	43,0	10,6	4,4
	1994	14,8	40,4	25,3	19,5	35,3	48,5	11,1	5,1
	1999	13,6	40,4	22,9	23,0	29,5	50,8	12,1	7,7
	2002	11,6	41,7	22,5	24,3	29,5	51,7	11,3	7,5
Ecuador	1990	18,0	42,7	23,1	16,2
	1994	13,1	39,8	25,4	21,7
	1999	12,8	36,6	28,3	22,3
	2002	12,7	35,6	26,5	25,1
El Salvador	1995	40,7	28,2	19,1	12,0	84,7	12,6	1,9	0,7
	1999	34,7	28,2	21,5	15,6	79,5	15,9	3,1	1,5
	2001	33,9	28,0	22,2	15,9	76,6	17,8	3,8	1,8
	2003	31,2	28,3	24,1	16,4	73,5	19,6	5,1	1,8
Guatemala	1989	56,7	23,9	13,7	5,8	93,4	4,9	1,3	0,3
	1998	49,0	26,2	17,1	7,6	91,3	6,8	1,5	0,4
	2002	41,2	27,0	21,6	10,1	86,6	9,9	2,7	0,8
Honduras	1990	45,1	29,6	18,9	6,4	81,8	15,4	2,7	...
	1994	37,4	34,5	22,1	6,0	70,8	23,5	5,3	0,5
	1999	33,1	35,4	22,8	8,7	67,6	26,3	5,3	0,9
	2003	29,7	37,2	21,6	11,5	67,6	28,0	3,7	0,7
México a/	1989	33,3	50,1	8,6	8,1	72,9	24,6	1,1	1,4
	1994	25,9	51,0	11,3	11,9	66,6	29,9	2,5	1,1
	1998	22,0	53,1	10,7	13,1	55,9	37,8	3,9	2,2
	2002	18,7	44,2	22,6	14,5	52,8	35,2	7,6	4,4

(continúa)

Cuadro 30.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Nicaragua	1993	45,5	31,1	16,3	7,0	83,1	14,1	2,1	0,6
	1998	39,9	32,9	14,0	13,3	76,0	15,7	4,8	3,5
	2001	38,9	32,2	19,2	9,7	77,4	18,2	3,6	0,8
Panamá	1979	18,6	48,6	20,6	12,1	58,3	35,9	4,2	1,6
	1991	13,7	39,0	25,6	21,8	37,9	42,7	12,6	6,7
	1994	10,9	39,5	26,8	22,8	34,6	43,1	14,7	7,5
	1999	8,3	37,3	27,9	26,5	26,9	45,9	17,6	9,5
	2002	6,7	34,0	28,9	30,4	33,7	43,6	14,1	8,6
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	25,4	37,5	22,9	14,3
	1990	18,4	40,3	27,9	13,3
	1994	19,8	42,0	22,6	15,6
	1997	20,3	38,7	22,9	18,1	61,4	32,6	4,5	1,5
	2001	20,1	34,3	25,5	20,1	56,9	35,1	3,8	4,1
Perú	1999	27,2	13,6	33,1	26,2	78,5	11,8	6,1	3,6
	2002	26,0	15,4	28,2	30,3	70,1	16,0	9,5	4,5
República Dominicana	2000	26,8	28,2	23,7	21,4	60,4	25,0	10,9	3,6
	2003	26,0	25,5	24,9	23,6	48,4	28,2	14,9	8,6
Uruguay	1981	26,6	45,6	18,1	9,7
	1990	17,0	45,4	23,9	13,7
	1994	14,4	45,2	25,0	15,4
	1999	8,7	45,6	28,2	17,6
	2002	7,6	41,4	27,7	23,3
Venezuela (República Bolivariana de) c/	1981	33,6	48,1	11,7	6,6	76,5	20,1	2,7	0,6
	1990	21,3	46,9	18,1	13,6	63,5	30,0	5,4	1,1
	1994	19,6	45,1	20,7	14,6	54,4	35,0	7,9	2,8
	1999	18,7	43,3	20,2	17,7
	2003	17,2	41,1	20,8	20,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 31

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003									
(En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	17,8	67,2		15,0
	1990	13,1	69,0		17,9
	1994	8,1	70,2		21,7
	1999	7,3	35,9	32,7	24,2
	2002	7,2	34,1	31,9	26,8
Bolivia	1997	31,7	19,7	30,8	17,8	74,5	15,9	6,7	2,8
	2002	27,3	21,2	29,3	22,2	69,1	19,5	9,4	2,0
Brasil	1979	60,9	19,2	12,4	7,6	93,2	4,0	1,3	1,4
	1990	47,5	24,3	18,4	9,8	85,0	10,3	3,9	0,8
	1993	53,6	23,0	16,2	7,2	86,5	9,2	3,6	0,7
	1999	39,5	25,4	24,5	10,6	79,3	13,1	6,5	1,1
	2002	35,0	24,5	28,8	11,6	76,6	15,1	7,4	0,9
Chile	1990	12,9	26,9	36,5	23,8	36,8	40,9	15,2	7,1
	1994	11,7	22,8	40,2	25,4	34,3	40,9	17,7	7,1
	2000	8,8	22,0	42,1	27,1	32,1	42,5	20,0	5,4
	2003	7,6	19,9	44,1	28,4	27,3	42,3	24,5	5,8
Colombia b/	1980	47,1	25,3	16,1	11,5
	1990	28,4	28,2	26,9	16,5
	1991	35,3	24,4	24,2	16,0	75,9	13,5	8,8	1,8
	1994	32,0	23,1	28,7	16,2	73,1	13,3	11,2	2,4
	1999	29,3	21,5	31,7	17,5	68,4	14,0	13,8	3,7
	2002	29,6	19,1	29,9	21,4	66,1	14,2	14,6	5,2
Costa Rica	1981	20,4	43,4	23,0	13,3	42,0	47,3	8,2	2,5
	1990	14,1	41,1	24,1	20,7	32,9	50,7	11,7	4,6
	1994	12,7	39,7	25,8	21,7	31,1	52,6	11,2	5,0
	1999	11,6	41,9	23,2	23,3	26,3	54,0	12,2	7,5
	2002	10,1	42,0	22,7	25,2	26,2	54,2	11,2	8,4
Ecuador	1990	14,5	43,1	24,1	18,2
	1994	11,1	39,5	27,0	22,4
	1999	11,3	38,0	28,4	22,3
	2002	12,0	37,4	25,9	24,7
El Salvador	1995	33,7	31,5	21,3	13,5	74,2	20,9	4,0	1,0
	1999	28,9	30,3	24,2	16,5	68,0	25,0	5,4	1,6
	2001	27,6	30,6	25,5	16,3	64,2	26,9	7,1	1,8
	2003	25,4	31,7	25,8	17,1	61,8	28,3	8,1	1,8
Guatemala	1989	45,5	29,9	16,2	8,4	84,1	13,5	1,9	0,5
	1998	39,5	31,8	19,0	9,7	80,2	16,8	2,6	0,4
	2002	30,1	34,2	23,2	12,5	71,0	23,6	4,1	1,3
Honduras	1990	38,2	36,7	18,2	7,0	74,8	22,2	2,8	0,2
	1994	32,0	38,9	20,5	8,7	62,3	32,2	4,9	0,6
	1999	29,3	41,0	20,3	9,4	63,1	30,9	5,2	0,9
	2003	28,6	39,7	20,3	11,3	63,6	32,1	3,3	1,0
México a/	1989	21,7	50,4	13,2	14,6	59,8	34,1	3,5	2,6
	1994	19,0	50,0	14,0	16,9	54,6	39,4	4,0	2,0
	1998	17,3	49,7	15,2	17,8	47,1	43,7	6,3	3,0
	2002	14,7	42,9	23,5	18,9	45,2	40,1	9,7	5,0

(continúa)

Cuadro 31 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Nicaragua	1993	33,5	41,0	18,1	7,4	74,1	21,4	3,5	1,1
	1998	33,8	38,0	15,3	12,9	70,9	21,8	4,4	2,9
	2001	33,6	36,7	18,8	10,9	71,8	22,6	4,4	1,2
Panamá	1979	14,0	46,3	25,3	14,4	47,8	42,3	7,8	2,1
	1991	11,7	37,6	29,1	21,6	34,0	45,2	14,9	5,8
	1994	9,3	38,7	29,2	22,8	32,4	45,8	15,2	6,6
	1999	7,2	36,7	29,8	26,3	26,9	48,0	16,8	8,3
	2002	7,6	34,4	30,7	27,3	34,8	45,7	13,2	6,3
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	18,7	40,8	24,8	15,7
	1990	14,7	41,6	29,3	14,4
	1994	15,7	42,1	25,8	16,4
	1997	15,0	39,8	27,9	17,3	53,8	37,9	6,4	1,9
2001	15,3	34,4	29,1	21,2	51,0	38,5	7,2	3,2	
Perú	1999	19,7	17,3	36,8	26,2	62,9	21,7	12,3	3,0
	2002	19,7	17,2	33,4	29,7	56,0	24,0	15,0	5,0
República Dominicana	2000	22,7	29,0	26,2	22,1	54,6	27,7	12,6	5,0
	2003	21,5	27,6	27,3	23,6	45,5	29,2	16,9	8,4
Uruguay	1981	21,3	47,4	21,8	9,5
	1990	14,2	46,3	26,2	13,3
	1994	12,2	46,9	27,6	13,4
	1999	8,4	47,5	28,7	15,3
	2002	7,1	43,2	28,5	21,2
Venezuela (República Bolivariana de) c/	1981	24,3	52,3	14,7	8,7	67,0	28,8	3,5	0,8
	1990	16,6	49,6	19,7	14,1	56,7	36,1	5,8	1,4
	1994	16,3	45,9	22,1	15,7	51,4	37,8	7,9	2,9
	1999	17,3	44,6	21,5	16,6
	2003	17,1	42,2	22,3	18,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 31.1

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	18,6	68,1		13,3
	1990	12,5	71,1		16,3
	1994	8,3	73,7		18,0
	1999	7,4	40,7	32,7	19,2
	2002	7,7	38,8	30,7	22,7
Bolivia	1997	25,7	21,0	34,3	18,9	68,2	19,1	9,0	3,6
	2002	22,0	22,0	33,0	23,0	61,6	23,5	12,6	2,4
Brasil	1979	63,5	19,2	10,4	7,0	93,7	3,9	1,0	1,4
	1990	51,4	23,8	16,2	8,6	87,3	9,2	2,9	0,6
	1993	53,7	23,4	15,5	7,4	87,5	8,8	3,1	0,7
	2001	40,1	26,0	24,5	9,3	80,8	13,4	5,1	0,6
	2002	38,4	25,7	26,1	9,8	78,5	14,8	6,0	0,7
Chile	1990	13,2	28,7	37,3	20,8	39,2	42,0	13,8	5,0
	1994	12,2	24,2	40,7	22,8	36,4	42,0	16,0	5,5
	2000	9,6	23,3	42,0	25,1	34,9	43,6	17,6	4,0
	2003	7,9	21,6	44,4	26,1	29,8	43,8	22,0	4,4
Colombia b/	1980	46,8	25,3	15,3	12,7
	1990	29,8	28,6	25,4	16,1
	1991	36,8	25,5	22,5	15,2	78,4	13,0	7,2	1,4
	1994	33,8	24,1	27,0	15,1	77,0	12,8	8,4	1,8
	1999	31,1	22,0	30,1	16,7	73,3	13,2	10,9	2,6
	2002	31,8	19,7	28,7	19,7	70,8	13,3	12,2	3,7
Costa Rica	1981	21,7	45,6	20,5	12,2	44,9	46,3	6,9	2,0
	1990	15,7	43,1	22,4	18,8	35,7	50,9	10,0	3,4
	1994	13,9	41,7	24,7	19,7	33,9	52,7	9,5	3,9
	1999	12,2	44,9	22,1	20,7	29,1	54,7	10,6	5,7
	2002	11,0	44,9	21,6	22,4	28,9	55,2	9,4	6,4
Ecuador	1990	14,2	46,9	21,9	17,1
	1994	10,8	41,9	26,2	21,2
	1999	11,2	40,8	27,2	20,8
	2002	11,6	39,6	25,2	23,6
El Salvador	1995	31,7	34,4	20,6	13,3	74,6	21,1	3,6	0,7
	1999	27,0	32,9	23,7	16,4	68,2	25,9	4,7	1,2
	2001	25,3	33,5	25,3	15,9	64,3	27,6	6,9	1,3
	2003	23,1	34,4	25,6	17,0	61,9	29,0	7,7	1,3
Guatemala	1989	45,0	32,1	14,1	8,8	84,2	14,0	1,4	0,4
	1998	36,6	35,2	17,7	10,6	78,0	19,1	2,6	0,4
	2002	26,6	37,4	21,9	14,0	68,4	26,7	3,4	1,6
Honduras	1990	39,1	38,7	15,1	7,1	76,0	22,1	1,7	0,2
	1994	32,7	39,3	19,0	9,1	64,9	31,7	2,9	0,5
	1999	30,0	42,8	17,5	9,8	65,8	29,7	3,9	0,7
	2003	30,5	41,4	17,4	10,7	66,0	30,8	2,4	0,7
México a/	1989	23,3	48,5	12,3	15,9	59,8	34,1	3,5	2,5
	1994	19,1	49,6	13,4	17,8	54,5	39,9	3,7	1,9
	1998	17,0	49,0	16,2	17,8	46,5	44,1	6,4	3,0
	2002	15,0	44,8	21,2	18,9	44,1	42,4	8,8	4,6

(continúa)

Cuadro 31.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Nicaragua	1993	33,3	42,2	16,6	7,8	78,0	18,2	2,7	1,1
	1998	33,9	40,6	14,0	11,5	74,3	20,5	3,0	2,1
	2001	35,9	38,6	15,3	10,2	74,7	20,6	3,5	1,2
Panamá	1979	16,2	48,3	22,8	12,8	50,6	42,3	5,8	1,3
	1991	14,2	42,0	26,4	17,5	38,3	46,0	11,9	3,8
	1994	11,5	42,2	27,5	18,7	36,5	47,2	11,8	4,4
	1999	8,8	40,9	28,8	21,5	30,6	50,2	13,6	5,5
	2002	7,9	39,3	30,3	22,5	35,7	49,2	11,5	3,6
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	17,5	40,8	24,3	17,4
	1990	14,6	41,5	30,0	13,8
	1994	14,9	43,3	26,2	15,6
	1997	13,1	39,6	30,8	16,5	55,9	37,4	5,4	1,3
	2001	13,9	36,4	29,8	20,0	50,6	39,2	7,6	2,6
Perú	1999	15,7	17,3	40,1	26,9	54,4	25,9	16,5	3,1
	2002	16,3	17,8	36,7	29,1	48,3	27,2	18,7	5,8
República Dominicana	2000	25,6	31,6	24,4	18,4	58,1	27,5	10,1	4,4
	2003	23,9	30,8	26,2	19,1	50,3	29,2	14,6	5,9
Uruguay	1981	22,9	49,6	20,4	7,2
	1990	16,0	49,4	24,3	10,3
	1994	13,8	50,5	25,7	10,0
	1999	9,8	51,8	26,6	11,8
	2002	8,4	47,8	26,9	16,8
Venezuela (República Bolivariana de) c/	1981	25,6	53,8	12,5	8,1	68,7	28,0	2,6	0,6
	1990	17,8	52,5	17,4	12,3	58,7	35,8	4,6	1,0
	1994	18,1	48,8	19,8	13,4	55,2	36,8	6,1	1,9
	1999	19,7	48,0	19,7	12,7
	2003	19,8	45,1	20,8	14,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 31.2

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	16,2	65,6		18,2
	1990	14,0	65,7		20,3
	1994	7,7	64,5		27,7
	1999	7,1	29,1	32,6	31,2
	2002	6,5	27,5	33,7	32,4
Bolivia	1997	39,6	17,9	26,3	16,2	82,4	12,0	3,8	1,9
	2002	33,7	20,2	24,8	21,3	79,7	14,0	4,9	1,4
Brasil	1979	55,7	19,1	16,3	9,0	91,8	4,5	2,0	1,6
	1990	41,6	25,0	21,7	11,7	80,0	12,7	6,3	1,1
	1993	53,4	22,7	16,7	7,1	85,4	9,7	4,2	0,7
	1999	34,9	23,8	28,6	12,7	76,7	13,5	8,3	1,4
	2002	30,7	22,9	32,5	14,0	73,6	15,5	9,6	1,3
Chile	1990	12,3	23,5	35,1	29,2	24,8	35,2	22,5	17,4
	1994	10,6	20,3	39,3	29,8	25,2	36,1	24,8	13,9
	2000	7,5	20,0	42,2	30,4	22,2	38,6	28,5	10,6
	2003	7,1	17,5	43,7	31,8	19,5	37,4	32,7	10,3
Colombia b/	1980	47,6	25,4	17,4	9,6
	1990	26,5	27,6	29,0	16,9
	1991	33,2	22,8	26,8	17,2	69,9	14,8	12,5	2,8
	1994	29,4	21,7	31,1	17,8	63,4	14,7	18,2	3,7
	1999	27,1	20,8	33,6	18,5	57,5	15,9	20,5	6,2
	2002	27,0	18,4	31,2	23,4	56,6	16,0	19,3	8,0
Costa Rica	1981	17,5	38,8	28,0	15,7	31,1	51,3	13,3	4,3
	1990	11,4	37,5	27,1	24,0	23,5	50,2	17,6	8,7
	1994	10,6	36,4	27,7	25,3	22,5	52,5	16,6	8,4
	1999	10,6	37,3	24,9	27,2	18,8	52,3	16,6	12,2
	2002	8,7	37,7	24,2	29,4	19,0	51,8	15,8	13,5
Ecuador	1990	15,1	36,6	28,0	20,2
	1994	11,6	35,8	28,3	24,3
	1999	11,5	34,0	30,0	24,5
	2002	12,7	34,1	26,8	26,3
El Salvador	1995	36,2	28,0	22,0	13,8	73,0	20,3	5,0	1,7
	1999	31,3	27,3	24,8	16,7	67,7	22,7	7,0	2,7
	2001	30,4	27,2	25,6	16,8	63,9	25,3	7,7	3,1
	2003	28,1	28,5	26,2	17,2	61,5	26,7	8,9	2,9
Guatemala	1989	46,3	26,3	19,8	7,6	83,8	11,2	4,0	1,0
	1998	43,3	27,6	20,6	8,5	85,0	11,6	2,8	0,6
	2002	34,7	30,0	24,7	10,6	76,4	17,3	5,5	0,8
Honduras	1990	36,8	33,7	22,7	6,8	69,6	22,7	7,3	0,4
	1994	31,0	38,2	22,8	8,0	53,6	33,9	11,4	1,1
	1999	28,4	38,8	23,8	9,0	56,3	33,8	8,6	1,4
	2003	26,2	37,4	24,1	12,2	56,1	36,1	6,1	1,6
México a/	1989	18,5	54,4	15,0	12,0	60,0	33,8	3,2	2,9
	1994	18,9	50,6	15,1	15,3	54,9	38,4	4,5	2,2
	1998	17,7	50,9	13,6	17,8	48,2	42,9	5,9	3,0
	2002	14,1	39,8	27,2	18,9	47,1	35,6	11,5	5,7

(continúa)

Cuadro 31.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Nicaragua	1993	33,6	39,5	20,0	6,9	62,3	30,8	5,7	1,2
	1998	33,6	34,6	17,0	14,8	60,5	25,6	8,5	5,3
	2001	30,4	34,1	23,5	11,9	63,9	27,8	6,9	1,4
Panamá	1979	10,6	43,3	29,1	16,9	32,1	42,2	19,2	6,5
	1991	7,9	30,7	33,4	28,0	17,5	42,2	26,5	13,8
	1994	5,7	33,0	31,9	29,4	18,2	40,8	26,8	14,2
	1999	4,7	30,4	31,3	33,6	15,1	40,8	27,1	17,0
	2002	7,2	27,7	31,2	33,9	32,0	35,8	18,0	14,1
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	20,2	40,9	25,4	13,5
	1990	14,7	41,8	28,3	15,2
	1994	16,8	40,4	25,3	17,5
	1997	17,3	40,1	24,5	18,1	48,4	39,2	8,9	3,4
Perú	1999	24,6	17,3	32,9	25,2	74,6	16,1	6,6	2,8
	2002	24,1	16,3	29,1	30,5	66,2	19,6	10,2	4,0
República Dominicana	2000	18,7	25,3	28,7	27,3	45,3	28,4	19,5	6,8
	2003	18,1	23,1	28,9	29,9	34,4	29,3	22,1	14,2
Uruguay	1981	18,6	43,7	24,2	13,4
	1990	11,6	42,0	29,0	17,4
	1994	10,0	42,2	30,0	17,8
	1999	6,6	42,1	31,5	19,8
	2002	5,4	37,6	30,6	26,5
Venezuela (República Bolivariana de) c/	1981	21,2	48,9	19,9	9,9	56,9	33,5	8,2	1,5
	1990	14,0	43,9	24,3	17,8	46,7	38,0	12,1	3,2
	1994	12,8	40,2	26,6	20,4	37,1	41,6	14,7	6,6
	1999	13,1	38,9	24,7	23,3
	2003	13,2	37,9	24,5	24,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 32

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7,8	7,8	7,7
	1990	9,0	8,9	9,2
	1994	9,1	8,8	9,4
	1999	10,1	9,8	10,5
	2002	10,4	10,2	10,6
Bolivia	1989	10,2	10,6	9,9
	1994	10,0	10,3	9,7
	2002	10,1	10,2	9,9	6,6	7,2	6,0
Brasil	1979	6,4	6,4	6,4	4,2	4,4	4,1
	1990	6,6	6,3	6,8	3,6	3,3	4,0
	1993	6,5	6,2	6,8	3,7	3,4	4,2
	1999	7,5	7,2	7,9	4,9	4,4	5,4
	2002	8,1	7,8	8,4	5,4	4,9	5,9
Chile	1987	9,9	9,9	10,0	7,4	7,1	7,6
	1990	10,1	10,0	10,2	7,9	7,6	8,1
	1994	10,4	10,4	10,5	8,2	8,0	8,4
	2000	10,6	10,6	10,7	8,9	8,7	9,2
	2003	10,9	10,8	11,0	9,4	9,3	9,6
Colombia b/	1980	7,5	7,6	7,5
	1990	8,5	8,5	8,5
	1991	8,5	8,4	8,7	5,5	5,2	5,8
	1994	8,7	8,6	8,8	5,8	5,5	6,2
	1999	9,2	9,0	9,3	6,5	6,2	6,8
	2002	9,8	9,6	10,0
Costa Rica	1981	8,8	8,7	8,9	6,7	6,6	6,8
	1990	9,1	8,9	9,3	6,9	6,7	7,2
	1994	8,8	8,8	8,8	6,6	6,5	6,7
	1999	8,8	8,6	9,0	7,0	6,8	7,1
	2002	9,0	8,8	9,1	7,1	6,9	7,3
Ecuador	1990	9,4	9,1	9,6
	1994	9,7	9,6	9,8
	1999	9,6	9,4	9,8
	2002	9,7	9,5	9,8
El Salvador	1997	8,8	8,7	8,9	5,2	5,2	5,1
	1999	9,0	8,9	9,0	5,5	5,5	5,5
	2001	9,2	9,2	9,2	6,0	6,0	5,9
	2003	9,2	9,1	9,2	6,0	6,0	6,0
Guatemala	1989	6,7	7,3	6,2	2,9	3,4	2,4
	1998	7,5	7,6	7,5	3,6	4,1	3,1
	2002	8,2	8,5	7,9	4,5	4,9	4,2
Honduras	1990	7,0	6,9	7,0	4,1	3,9	4,3
	1994	7,3	7,2	7,4	4,8	4,7	5,0
	1999	7,6	7,3	7,8	4,9	4,7	5,1
	2003	7,9	7,6	8,1	4,9	4,7	5,1

(continúa)

Cuadro 32 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
México a/	1984	9,7	9,9	9,5	8,3	8,5	8,1
	1989	8,7	8,9	8,6	6,8	6,8	6,7
	1994	8,9	9,0	8,8	7,0	6,9	7,1
	2002	9,8	9,9	9,8	7,9	7,9	7,9
Nicaragua	1993	7,0	6,8	7,2	3,6	3,3	4,0
	1998	7,5	7,2	7,8	4,2	3,8	4,6
	2001	7,9	7,4	8,3	4,3	4,0	4,6
Panamá	1979	9,2	9,0	9,3	6,9	6,8	7,0
	1991	9,6	9,2	9,9	7,6	7,3	8,0
	1994	9,6	9,3	9,9	7,6	7,3	8,1
	1999	10,0	9,8	10,3	8,0	7,6	8,4
	2002	10,2	9,9	10,5	7,4	7,3	7,5
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	8,7	9,0	8,5
	1990	9,3	9,5	9,1
	1994	9,1	9,1	9,0
	2001	9,6	9,6	9,6	6,6	6,5	6,7
Perú	1997	9,0	9,0	9,0	6,1	6,4	5,7
	2002	10,3	10,2	10,4	7,7	8,1	7,2
República Dominicana	2000	9,4	8,8	9,9	6,7	6,3	7,2
	2003	9,6	9,1	10,0	7,8	7,3	8,4
Uruguay	1981	8,6	8,4	8,7
	1990	9,2	8,9	9,4
	1994	9,2	8,9	9,5
	1999	9,5	9,1	9,8
	2002	9,6	9,2	10,0
Venezuela (República Bolivariana de)	1981	8,0	7,7	8,2	5,1	4,9	5,4
	1990	8,4	8,2	8,7	5,7	5,2	6,2
	1994	8,7	8,4	9,1	6,0	5,7	6,4
	1999	8,8	8,2	9,3
	2003	9,0	8,5	9,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 33

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003							
(En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7,4	7,0	7,7
	1990	8,8	8,9	8,8
	1994	9,0	9,0	9,0
	1999	10,2	10,1	10,3
	2002	10,5	10,2	10,7
Bolivia	1989	8,8	9,9	7,8
	1994	9,3	10,3	8,3
	2002	9,2	10,1	8,3	4,0	5,1	3,0
Brasil	1979	5,1	5,3	4,9	2,4	2,5	2,3
	1990	6,2	6,3	6,1	2,6	2,6	2,6
	1993	6,3	6,4	6,2	2,7	2,7	2,8
	1999	7,0	6,9	7,1	3,3	3,2	3,4
	2002	7,3	7,2	7,4	3,4	3,2	3,6
Chile	1987	9,3	9,7	9,0	5,5	5,6	5,5
	1990	9,7	10,1	9,5	6,2	6,3	6,2
	1994	10,2	10,4	10,0	6,6	6,7	6,5
	2000	10,8	11,0	10,6	6,8	6,7	6,8
	2003	11,1	11,3	10,9	7,3	7,3	7,2
Colombia b/	1980	6,8	7,4	6,2
	1990	8,2	8,6	7,8
	1991	8,1	8,5	7,8	4,1	4,1	4,1
	1994	8,3	8,6	8,1	4,4	4,3	4,4
	1999	8,6	8,9	8,4	4,8	4,7	4,9
	2002	9,3	9,4	9,2	5,1	5,0	5,2
Costa Rica	1981	7,5	7,9	7,3	4,6	4,7	4,5
	1990	9,6	10,0	9,3	6,3	6,6	6,0
	1994	9,1	9,3	8,9	6,0	6,0	6,0
	1999	9,3	9,4	9,1	6,5	6,5	6,5
	2002	9,4	9,5	9,3	6,5	6,5	6,5
Ecuador	1990	8,9	9,2	8,6
	1994	9,7	10,0	9,5
	1999	9,9	10,1	9,7
	2002	10,1	10,3	9,9
El Salvador	1997	7,9	8,7	7,4	2,9	3,3	2,6
	1999	8,2	8,8	7,7	3,2	3,6	2,9
	2001	8,3	8,9	7,9	3,5	3,9	3,2
	2003	8,6	9,2	8,2	3,8	4,1	3,5
Guatemala	1989	5,6	6,4	4,9	1,5	1,9	1,1
	1998	6,5	7,2	5,8	1,9	2,4	1,4
	2002	7,4	8,3	6,6	2,5	3,0	2,0
Honduras	1990	6,4	6,8	6,1	2,5	2,6	2,4
	1994	7,0	7,5	6,6	3,4	3,4	3,4
	1999	7,3	7,6	7,1	3,5	3,5	3,6
	2003	7,5	7,5	7,4	3,5	3,4	3,6

(continúa)

Cuadro 33 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
México a/	1984	8,4	8,8	8,1	6,9	7,1	6,7
	1989	7,5	8,1	7,0	4,7	5,0	4,5
	1994	8,0	8,5	7,6	5,0	5,3	4,8
	2002	9,1	9,6	8,7	5,3	5,5	5,1
Nicaragua	1993	6,4	6,8	6,0	2,4	2,4	2,3
	1998	7,0	7,4	6,6	3,2	3,2	3,2
	2001	6,9	7,1	6,7	3,1	3,2	3,0
Panamá	1979	8,5	8,6	8,3	4,4	4,4	4,3
	1991	9,6	9,6	9,7	6,1	6,1	6,2
	1994	9,9	9,9	10,0	6,4	6,3	6,6
	1999	10,4	10,4	10,5	7,1	6,9	7,2
	2002	10,8	10,6	11,0	6,4	6,3	6,5
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	8,8	9,4	8,3
	1990	9,0	9,3	8,8
	1994	8,9	9,2	8,6
	2001	9,6	9,9	9,3	5,1	5,3	4,9
Perú	1999	10,1	10,9	9,5	4,6	5,7	3,6
	2002	10,4	11,1	9,8	5,4	6,5	4,3
República Dominicana	2000	8,9	8,9	8,9	5,1	5,2	5,0
	2003	9,1	9,1	9,1	6,1	6,0	6,2
Uruguay	1981	7,3	7,3	7,3
	1990	8,3	8,3	8,4
	1994	8,6	8,6	8,7
	1999	9,2	9,0	9,3
	2002	9,7	9,5	9,9
Venezuela (República Bolivariana de) c/	1981	6,8	7,3	6,4	3,1	3,3	2,7
	1990	8,2	8,4	8,0	4,0	4,2	3,8
	1994	8,3	8,4	8,1	4,7	4,7	4,6
	1999	8,3	8,2	8,5
	2003	8,6	8,4	8,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 34

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS, SEGÚN SEXO, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7,4	7,0	8,2
	1990	8,7	8,6	8,9
	1994	9,3	9,0	9,7
	1999	10,4	10,0	11,1
	2002	10,7	10,2	11,2
Bolivia	1989	9,0	9,7	8,2
	1994	9,3	10,0	8,5
	2002	9,2	9,8	8,6	4,5	5,3	3,3
Brasil	1979	5,9	5,6	6,4	3,1	3,0	3,4
	1990	6,7	6,3	7,2	3,0	2,7	3,5
	1993	6,0	6,0	6,0	2,8	2,7	2,9
	1999	7,3	6,9	7,9	3,5	3,3	3,8
	2002	7,8	7,4	8,3	3,7	3,5	4,0
Chile	1987	9,9	9,7	10,3	6,2	5,9	7,6
	1990	10,2	10,0	10,6	6,8	6,4	8,5
	1994	10,6	10,4	10,9	7,1	6,8	8,3
	2000	11,0	10,8	11,3	7,2	6,8	8,4
	2003	11,3	11,1	11,6	7,7	7,3	8,7
Colombia b/	1980	7,1	7,2	6,9
	1990	8,7	8,6	8,8
	1991	8,4	8,2	8,6	4,3	4,1	4,9
	1994	8,6	8,4	8,9	4,7	4,3	5,6
	1999	8,9	8,7	9,1	5,1	4,7	6,1
	2002	9,5	9,2	9,8	5,5	5,1	6,4
Costa Rica	1981	8,1	7,8	8,6	5,4	5,2	6,3
	1990	10,1	9,7	10,6	6,7	6,4	7,8
	1994	9,2	9,0	9,7	6,2	5,9	7,1
	1999	9,3	9,1	9,7	6,6	6,3	7,5
	2002	9,5	9,2	10,0	6,7	6,3	7,7
Ecuador	1990	9,0	8,8	9,3
	1994	9,7	9,6	10,0
	1999	9,8	9,6	10,0
	2002	9,9	9,8	10,0
El Salvador	1997	8,1	8,2	7,9	3,5	3,5	3,6
	1999	8,3	8,5	8,2	3,9	3,8	4,0
	2001	8,5	8,6	8,3	4,2	4,1	4,4
	2003	8,7	8,8	8,5	4,4	4,3	4,6
Guatemala	1989	6,1	6,2	6,0	2,2	2,2	2,2
	1998	6,7	6,9	6,4	2,5	2,7	2,1
	2002	7,6	8,0	7,2	3,3	3,5	2,9
Honduras	1990	6,5	6,4	6,8	2,9	2,8	3,4
	1994	7,1	7,1	7,2	3,8	3,6	4,7
	1999	7,2	7,1	7,4	3,8	3,6	4,4
	2003	7,4	7,2	7,8	3,8	3,5	4,4

(continúa)

Cuadro 34 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS, SEGÚN SEXO, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
México a/	1984	8,9	8,8	9,0	7,2	7,2	7,3
	1989	8,0	8,0	8,1	5,2	5,2	5,2
	1994	8,3	8,3	8,3	5,5	5,5	5,5
	2002	9,4	9,4	9,6	5,6	5,6	5,6
Nicaragua	1993	6,8	6,8	6,9	3,0	2,7	4,1
	1998	7,1	7,0	7,3	3,5	3,2	4,6
	2001	7,1	6,8	7,5	3,4	3,2	4,1
Panamá	1979	8,9	8,6	9,5	5,0	4,7	6,8
	1991	9,9	9,2	10,8	6,4	5,8	8,6
	1994	10,2	9,6	11,0	6,6	6,0	8,6
	1999	10,6	10,1	11,5	7,1	6,5	9,0
	2002	10,7	10,3	11,3	6,3	5,9	7,3
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	8,9	9,1	8,6
	1990	9,2	9,2	9,1
	1994	9,1	9,1	9,1
	2001	9,7	9,8	9,7	5,4	5,4	5,3
Perú	1999	10,0	10,4	9,4	4,8	5,6	3,7
	2002	10,3	10,6	9,9	5,4	6,3	4,3
República Dominicana	2000	9,3	8,8	10,0	5,5	5,1	6,5
	2003	9,5	9,0	10,2	6,4	5,8	7,7
Uruguay	1981	7,8	7,5	8,2
	1990	8,6	8,2	9,2
	1994	8,8	8,4	9,3
	1999	9,3	8,9	9,8
	2002	9,8	9,3	10,4
Venezuela (República Bolivariana de) c/	1981	7,2	7,0	7,7	3,5	3,4	4,3
	1990	8,4	8,1	9,2	4,3	4,1	5,3
	1994	8,5	8,1	9,3	4,9	4,6	6,3
	1999	8,5	7,9	9,5
	2003	8,7	8,1	9,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de estudio. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 35

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): CLASIFICACIÓN DE LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SU SITUACIÓN A LO LARGO DEL CICLO ESCOLAR, TOTAL NACIONAL, CIRCA 2003 a/														
(En porcentajes)														
País	Año	Sexo	Situación de estudios									Total		
			No ingresaron al sistema educativo	Desertores escolares				Subtotal desertores	Estudiantes y egresados				Subtotal estudiantes y egresados	
				Desertores tempranos (durante el ciclo primario)	Desertores al finalizar el ciclo primario	Desertores al inicio del ciclo secundario	Desertores al término del ciclo secundario		Estudiantes muy retrasados	Estudiantes poco retrasados	Estudiantes al día			Egresados
Bolivia	2002	Ambos sexos	0,8	21,3	7,0	6,9	10,1	45,3	9,1	9,7	22,4	12,6	53,8	100,0
		Hombres	0,6	21,1	6,4	6,4	9,6	43,5	8,6	11,6	23,1	12,5	55,8	100,0
		Mujeres	1,1	21,6	7,5	7,4	10,6	47,1	9,6	8,0	21,6	12,7	51,9	100,0
Brasil b/	2002	Ambos sexos	2,2	15,5	3,8	2,2	21,5	24,2	11,2	29,2	11,7	76,3	100,0	
		Hombres	2,9	16,4	3,5	2,2	22,1	27,8	11,7	25,8	9,7	75,0	100,0	
		Mujeres	1,5	14,6	4,0	2,1	20,7	20,5	10,8	32,6	13,8	77,7	100,0	
Chile	2003	Ambos sexos	0,3	2,9	3,4	2,3	3,1	11,7	6,0	13,8	50,7	17,5	88,0	100,0
		Hombres	0,4	3,4	3,5	2,2	2,8	11,9	6,9	15,5	48,6	16,8	87,8	100,0
		Mujeres	0,2	2,5	3,4	2,4	3,5	11,8	5,1	11,9	52,8	18,3	88,1	100,0
Colombia	2002	Ambos sexos	2,0	6,7	9,6	10,0	4,3	30,6	14,4	9,9	20,1	23,0	67,4	100,0
		Hombres	2,6	7,9	10,3	9,9	3,8	31,9	16,0	10,4	19,1	19,9	65,4	100,0
		Mujeres	1,5	5,5	8,8	10,0	4,7	29,0	12,9	9,4	21,2	26,0	69,5	100,0
Costa Rica	2002	Ambos sexos	1,3	7,7	18,9	4,8	2,2	33,6	20,6	11,5	19,7	13,2	65,0	100,0
		Hombres	1,2	8,9	19,5	5,6	2,3	36,3	22,0	11,4	17,2	11,9	62,5	100,0
		Mujeres	1,4	6,4	18,3	4,1	2,1	30,9	19,2	11,5	22,4	14,5	67,6	100,0
El Salvador b/	2003	Ambos sexos	4,7	28,2	6,3	2,1	36,6	10,3	7,5	32,2	8,8	58,8	100,0	
		Hombres	4,9	26,8	5,9	1,9	34,6	12,5	8,7	31,6	7,7	60,5	100,0	
		Mujeres	4,4	29,7	6,7	2,2	38,6	8,1	6,4	32,8	9,9	57,2	100,0	
Guatemala	2002	Ambos sexos	13,7	20,8	14,0	7,1	0,9	42,8	11,2	5,9	22,7	3,7	43,5	100,0
		Hombres	9,1	20,2	16,1	7,3	0,7	44,3	13,5	7,1	22,3	3,8	46,7	100,0
		Mujeres	17,8	21,3	12,2	6,8	1,0	41,3	9,1	4,9	23,2	3,7	40,9	100,0
Honduras	2003	Ambos sexos	6,1	17,1	26,7	3,4	2,5	49,7	13,3	6,9	17,0	7,1	44,3	100,0
		Hombres	7,0	19,8	27,7	3,2	1,8	52,5	13,1	6,6	15,1	5,7	40,5	100,0
		Mujeres	5,3	14,4	25,7	3,5	3,2	46,8	13,5	7,2	18,8	8,6	48,1	100,0
México	2002	Ambos sexos	2,6	4,9	11,6	20,6	2,4	39,5	5,3	7,3	32,9	12,3	57,8	100,0
		Hombres	1,7	5,6	11,8	21,0	1,8	40,2	6,0	8,6	32,0	11,6	58,2	100,0
		Mujeres	3,5	4,3	11,4	20,2	3,0	38,9	4,7	6,1	33,8	13,0	57,6	100,0
Nicaragua	2001	Ambos sexos	10,6	17,6	10,2	6,8	2,1	36,7	14,9	8,8	18,6	10,2	52,5	100,0
		Hombres	12,9	20,8	10,5	6,8	2,2	40,3	15,7	9,5	14,7	7,1	47,0	100,0
		Mujeres	8,2	14,3	10,0	6,9	2,1	33,3	14,2	8,1	22,7	13,5	58,5	100,0
Panamá	2002	Ambos sexos	1,6	5,0	12,7	9,5	2,5	29,7	9,4	8,2	36,3	14,6	68,5	100,0
		Hombres	1,0	5,6	13,8	10,2	2,1	31,7	11,7	9,5	33,4	12,8	67,4	100,0
		Mujeres	2,3	4,4	11,5	8,7	3,1	27,7	6,9	6,9	39,5	16,7	70,0	100,0
Paraguay	2001	Ambos sexos	1,8	15,1	14,5	7,4	1,5	38,5	6,3	6,7	37,8	9,0	59,8	100,0
		Hombres	1,6	17,7	13,0	8,0	1,4	40,1	7,5	6,3	36,9	7,5	58,2	100,0
		Mujeres	2,0	12,1	16,2	6,7	1,5	36,5	4,8	7,1	38,9	10,7	61,5	100,0

(continúa)

Cuadro 35 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): CLASIFICACIÓN DE LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SU SITUACIÓN A LO LARGO DEL CICLO ESCOLAR, TOTAL NACIONAL, CIRCA 2003 ^{a/}														
(En porcentajes)														
País	Año	Sexo	Situación de estudios									Total		
			No ingresaron al sistema educativo	Desertores escolares				Subtotal desertores	Estudiantes y egresados				Subtotal estudiantes y egresados	
				Desertores tempranos (durante el ciclo primario)	Desertores al finalizar el ciclo primario	Desertores al inicio del ciclo secundario	Desertores al término del ciclo secundario		Estudiantes muy retrasados	Estudiantes poco retrasados	Estudiantes al día			Egresados
Perú	2002	Ambos sexos	0,9	5,9	6,8	5,1	3,8	21,6	13,4	10,2	27,4	26,5	77,5	100,0
		Hombres	0,7	4,4	6,6	5,2	3,7	19,9	15,3	11,1	27,0	26,0	79,4	100,0
		Mujeres	1,0	7,4	7,1	4,9	4,0	23,4	11,3	9,3	27,9	27,2	75,7	100,0
República Dominicana	2003	Ambos sexos	2,7	10,6	2,8	1,2	1,4	16,0	16,8	12,2	38,7	13,7	81,4	100,0
		Hombres	3,3	12,2	2,5	0,6	1,2	16,5	21,4	13,8	34,8	10,3	80,3	100,0
		Mujeres	2,1	8,8	3,1	1,9	1,6	15,4	11,9	10,5	42,8	17,3	82,5	100,0
Venezuela (República Bolivariana de) ^{c/}	2003	Ambos sexos	1,7	23,9	3,0	1,0		27,9	13,8	8,9	22,7	25,0	70,4	100,0
		Hombres	2,1	28,6	2,5	0,8		31,9	15,8	9,6	20,6	19,9	65,9	100,0
		Mujeres	1,3	19,0	3,4	1,2		23,6	11,8	8,1	25,0	30,3	75,2	100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ La metodología de construcción de esta clasificación puede verse en CEPAL, *Panorama social de América Latina 2001-2002* (LC/G/2183-P), cuadros III.1 y III.5.
- b/ El país tiene un ciclo secundario de solo tres años, por lo que la categoría “desertores al inicio del ciclo secundario” está incluida en “desertores al término del ciclo secundario”.
- c/ El país tiene un ciclo secundario de solo dos años, por lo que la categoría “desertores al término del ciclo secundario” está restringida a la falta de un año para completar el ciclo secundario.

Cuadro 36

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CLASIFICACIÓN DE LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SU SITUACIÓN A LO LARGO DEL CICLO ESCOLAR, ZONAS URBANAS, CIRCA 2003 a/														
(En porcentajes)														
País	Año	Sexo	Situación de estudios									Total		
			No ingresaron al sistema educativo	Desertores escolares				Subtotal desertores	Estudiantes y egresados				Subtotal estudiantes y egresados	
				Desertores tempranos (durante el ciclo primario)	Desertores al finalizar el ciclo primario	Desertores al inicio del ciclo secundario	Desertores al término del ciclo secundario		Estudiantes muy retrasados	Estudiantes poco retrasados	Estudiantes al día			Egresados
Argentina b/	2002	Ambos sexos	0,2	2,9	5,0	4,5	3,4	15,8	7,3	12,7	46,4	17,6	84,0	100,0
		Hombres	0,4	3,8	6,0	4,0	2,9	16,7	6,7	15,2	44,2	17,0	83,1	100,0
		Mujeres	0,0	2,0	4,0	5,1	3,9	15,0	8,0	10,1	48,7	18,2	85,0	100,0
Argentina	2002	Ambos sexos	0,3	3,0	6,7	4,9	2,8	17,4	9,4	12,7	42,0	18,1	82,2	100,0
		Hombres	0,4	4,1	7,9	4,8	2,4	19,2	9,9	14,0	40,0	16,4	80,3	100,0
		Mujeres	0,2	1,9	5,5	4,9	3,2	15,5	9,0	11,4	44,1	19,7	84,2	100,0
Bolivia	2002	Ambos sexos	0,3	10,3	6,1	7,4	11,2	35,0	8,4	10,5	28,0	17,7	64,6	100,0
		Hombres	0,2	9,0	6,1	7,3	9,8	32,2	7,7	12,6	29,1	18,1	67,5	100,0
		Mujeres	0,4	11,4	6,1	7,5	12,3	37,3	9,1	8,7	27,1	17,3	62,2	100,0
Brasil c/	2001	Ambos sexos	1,6	13,5	3,9	2,3	19,7	21,5	11,6	32,1	13,3	78,5	100,0	
		Hombres	2,1	14,4	3,7	2,4	20,5	25,0	12,3	28,8	11,3	77,4	100,0	
		Mujeres	1,2	12,6	4,0	2,3	18,9	18,2	11,0	35,4	15,4	80,0	100,0	
Chile	2003	Ambos sexos	0,3	2,0	2,8	2,2	3,0	10,0	5,7	13,8	51,9	18,5	89,9	100,0
		Hombres	0,4	2,4	2,8	2,1	2,6	9,9	6,4	15,5	50,0	17,8	89,7	100,0
		Mujeres	0,1	1,7	2,7	2,2	3,4	10,0	4,9	11,9	53,8	19,3	89,9	100,0
Colombia	2002	Ambos sexos	1,2	3,5	5,8	9,7	4,4	23,4	13,1	10,4	23,4	28,5	75,4	100,0
		Hombres	1,5	3,6	6,2	9,6	4,1	23,5	15,1	11,5	22,7	25,6	74,9	100,0
		Mujeres	0,9	3,4	5,5	9,7	4,6	23,2	11,3	9,5	23,9	31,2	75,9	100,0
Costa Rica	2002	Ambos sexos	1,0	4,6	11,8	5,3	2,4	24,1	22,2	13,1	22,6	17,1	75,0	100,0
		Hombres	0,4	5,0	12,2	6,0	2,6	25,8	23,4	13,8	20,1	16,5	73,8	100,0
		Mujeres	1,5	4,2	11,4	4,6	2,2	22,4	20,9	12,3	25,1	17,8	76,1	100,0
Ecuador	2002	Ambos sexos	1,4	3,2	13,1	8,3	2,6	27,2	8,3	7,8	36,7	18,6	71,4	100,0
		Hombres	1,7	3,5	14,0	7,9	2,5	27,9	7,6	8,7	37,0	17,1	70,4	100,0
		Mujeres	1,1	2,8	12,1	8,8	2,6	26,3	9,0	6,9	36,4	20,1	72,4	100,0
El Salvador c/	2003	Ambos sexos	2,1	17,9	6,0	2,7	26,6	9,0	7,9	41,3	13,1	71,3	100,0	
		Hombres	1,6	17,6	5,3	2,6	25,5	10,5	9,7	41,0	11,7	72,9	100,0	
		Mujeres	2,6	18,2	6,6	2,9	27,7	7,4	6,1	41,6	14,5	69,6	100,0	
Guatemala	2002	Ambos sexos	6,0	11,1	11,2	10,4	1,7	34,4	8,7	6,8	37,1	6,9	59,5	100,0
		Hombres	2,8	10,7	13,3	11,4	1,2	36,6	8,9	8,4	37,0	6,2	60,5	100,0
		Mujeres	8,9	11,5	9,3	9,4	2,2	32,4	8,5	5,4	37,3	7,5	58,7	100,0
Honduras	2003	Ambos sexos	2,8	8,5	19,3	4,6	3,2	35,6	13,2	8,6	26,9	12,8	61,5	100,0
		Hombres	3,1	10,1	20,3	4,5	2,9	37,8	12,8	8,6	26,9	10,7	59,0	100,0
		Mujeres	2,5	7,2	18,5	4,6	3,6	33,9	13,6	8,6	26,9	14,6	63,7	100,0
México	2002	Ambos sexos	2,3	3,1	7,3	19,5	3,1	33,0	5,2	7,0	36,4	16,0	64,6	100,0
		Hombres	1,0	3,2	7,5	20,8	2,7	34,2	5,8	7,7	36,3	14,8	64,6	100,0
		Mujeres	3,7	3,0	7,1	18,2	3,4	31,7	4,7	6,3	36,4	17,2	64,6	100,0

(continúa)

Cuadro 36 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CLASIFICACIÓN DE LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SU SITUACIÓN A LO LARGO DEL CICLO ESCOLAR, ZONAS URBANAS, CIRCA 2003 a/ (En porcentajes)														
País	Año	Sexo	Situación de estudios									Total		
			No ingresaron al sistema educativo	Desertores escolares				Subtotal desertores	Estudiantes y egresados				Subtotal estudiantes y egresados	
			Desertores tempranos (durante el ciclo primario)	Desertores al finalizar el ciclo primario	Desertores al inicio del ciclo secundario	Desertores al término del ciclo secundario		Estudiantes muy retrasados	Estudiantes poco retrasados	Estudiantes al día	Egresados			
Nicaragua	2001	Ambos sexos	4,9	9,5	8,8	8,2	2,5	29,0	13,7	11,3	25,5	15,6	66,1	100,0
		Hombres	6,2	11,9	10,0	9,1	3,0	34,0	15,0	13,5	20,6	10,9	60,0	100,0
		Mujeres	3,7	7,3	7,6	7,3	2,1	24,3	12,5	9,2	30,2	20,1	72,0	100,0
Panamá	2002	Ambos sexos	0,7	1,8	6,0	9,1	2,9	19,8	9,0	9,2	42,9	18,4	79,5	100,0
		Hombres	0,7	2,2	6,3	9,4	2,4	20,3	11,2	10,5	40,9	16,6	79,2	100,0
		Mujeres	0,6	1,4	5,7	8,9	3,5	19,5	6,6	7,8	45,2	20,3	79,9	100,0
Paraguay d/	2001	Ambos sexos	0,4	5,4	8,4	8,2	3,3	25,3	5,9	5,4	47,1	15,8	74,2	100,0
		Hombres	0,5	5,0	6,5	9,9	3,4	24,8	5,7	4,9	48,6	15,5	74,7	100,0
		Mujeres	0,4	5,8	10,2	6,6	3,3	25,9	6,1	5,8	45,7	16,1	73,7	100,0
Paraguay	2001	Ambos sexos	0,8	6,5	9,9	8,4	2,4	27,2	7,0	6,1	45,1	13,9	72,1	100,0
		Hombres	0,7	6,4	8,9	9,1	2,3	26,7	8,5	6,4	44,9	12,7	72,5	100,0
		Mujeres	0,9	6,6	10,9	7,7	2,4	27,6	5,5	5,8	45,3	15,0	71,6	100,0
Perú	2002	Ambos sexos	0,5	2,8	3,0	5,0	4,2	15,0	9,7	9,0	32,2	33,6	84,5	100,0
		Hombres	0,5	2,6	3,0	5,4	4,1	15,1	10,9	9,4	31,4	32,5	84,2	100,0
		Mujeres	0,5	3,0	3,0	4,5	4,3	14,8	8,4	8,5	33,1	34,8	84,8	100,0
República Dominicana	2003	Ambos sexos	1,7	7,5	2,7	1,4	1,3	12,9	14,2	13,5	40,8	16,9	85,4	100,0
		Hombres	2,2	9,1	2,6	0,7	1,2	13,6	16,8	16,1	37,5	13,8	84,2	100,0
		Mujeres	1,2	5,9	2,8	2,2	1,5	12,4	11,6	10,8	44,0	19,9	86,3	100,0
Uruguay	2002	Ambos sexos	0,2	2,6	9,7	13,3	3,9	29,5	9,9	11,9	39,0	9,4	70,2	100,0
		Hombres	0,1	3,5	12,5	13,9	3,8	33,7	10,6	12,7	35,7	7,2	66,2	100,0
		Mujeres	0,2	1,7	6,7	12,7	4,0	25,1	9,3	11,0	42,6	11,8	74,7	100,0
Venezuela (República Bolivariana de) e/	2003	Ambos sexos	1,7	23,9	3,0	1,0		27,9	13,8	8,9	22,7	25,0	70,4	100,0
		Hombres	2,1	28,6	2,5	0,8		31,9	15,8	9,6	20,6	19,9	65,9	100,0
		Mujeres	1,3	19,0	3,4	1,2		23,6	11,8	8,1	25,0	30,3	75,2	100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ La metodología de construcción de esta clasificación puede verse en CEPAL, *Panorama social de América Latina 2001-2002* (LC/G/2183-P), cuadros III.1 y III.5.

b/ Gran Buenos Aires.

c/ El país tiene un ciclo secundario de solo tres años, por lo que la categoría “desertores al inicio del ciclo secundario” está incluida en “desertores al término del ciclo secundario”.

d/ Asunción y Departamento Central.

e/ Total nacional. El país tiene un ciclo secundario de solo dos años, por lo que la categoría “desertores al término del ciclo secundario” está restringida a la falta de un año para completar el ciclo secundario.

Cuadro 37

AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): CLASIFICACIÓN DE LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SU SITUACIÓN A LO LARGO DEL CICLO ESCOLAR, ZONAS RURALES, CIRCA 2003 a/														
(En porcentajes)														
País	Año	Sexo	Situación de estudios										Total	
			No ingresaron al sistema educativo	Desertores escolares				Subtotal desertores	Estudiantes y egresados					Subtotal estudiantes y egresados
				Desertores tempranos (durante el ciclo primario)	Desertores al finalizar el ciclo primario	Desertores al inicio del ciclo secundario	Desertores al término del ciclo secundario		Estudiantes muy retrasados	Estudiantes poco retrasados	Estudiantes al día	Egresados		
Bolivia	2002	Ambos sexos	1,7	40,7	8,6	6,0	8,3	63,6	10,2	8,4	12,4	3,7	34,7	100,0
		Hombres	1,1	38,7	7,0	5,1	9,3	60,1	9,8	10,0	14,4	4,4	38,6	100,0
		Mujeres	2,4	43,2	10,5	7,2	7,0	67,9	10,7	6,3	9,8	2,8	29,6	100,0
Brasil b/	2001	Ambos sexos	5,0	25,5	3,4		1,2	30,1	37,3	9,2	14,6	3,7	64,8	100,0
		Hombres	6,4	25,6	2,7		1,3	29,6	40,9	8,7	12,0	2,4	64,0	100,0
		Mujeres	3,3	25,4	4,2		1,2	30,8	33,2	9,8	17,7	5,1	65,8	100,0
Chile	2003	Ambos sexos	0,5	8,7	7,7	3,0	4,0	23,4	8,3	13,7	42,9	11,2	76,1	100,0
		Hombres	0,4	9,6	7,8	2,8	4,0	24,2	9,9	15,1	39,8	10,6	75,4	100,0
		Mujeres	0,6	7,7	7,5	3,3	4,1	22,6	6,5	12,2	46,4	11,8	76,9	100,0
Colombia	2002	Ambos sexos	3,8	13,7	17,7	10,6	4,0	46,0	17,2	8,8	13,1	11,1	50,2	100,0
		Hombres	4,8	16,6	18,6	10,6	3,1	48,9	17,7	8,4	11,7	8,6	46,4	100,0
		Mujeres	2,7	10,6	16,8	10,7	5,0	43,1	16,7	9,2	14,6	13,8	54,3	100,0
Costa Rica	2002	Ambos sexos	1,9	12,2	29,4	4,1	1,9	47,6	18,4	9,2	15,6	7,4	50,6	100,0
		Hombres	2,4	14,6	30,1	4,9	1,7	51,3	20,0	8,1	12,9	5,4	46,4	100,0
		Mujeres	1,3	9,6	28,7	3,3	2,0	43,6	16,7	10,3	18,4	9,6	55,0	100,0
El Salvador b/	2003	Ambos sexos	7,9	41,6	6,7		1,2	49,5	11,9	7,1	20,4	3,1	42,5	100,0
		Hombres	9,1	38,7	6,6		1,2	46,5	15,0	7,5	19,4	2,4	44,3	100,0
		Mujeres	6,7	44,5	6,8		1,3	52,6	8,9	6,7	21,3	3,9	40,8	100,0
Guatemala	2002	Ambos sexos	18,8	27,2	15,9	4,9	0,3	48,3	12,8	5,3	13,2	1,6	32,9	100,0
		Hombres	13,3	26,6	17,9	4,6	0,3	49,4	16,6	6,3	12,3	2,1	37,3	100,0
		Mujeres	23,5	27,7	14,1	5,1	0,3	47,2	9,5	4,5	13,9	1,3	29,2	100,0
Honduras	2003	Ambos sexos	9,1	24,8	33,4	2,2	1,8	62,2	13,4	5,4	7,9	1,9	28,6	100,0
		Hombres	10,0	27,5	33,6	2,2	0,9	64,2	13,4	5,1	5,7	1,6	25,8	100,0
		Mujeres	8,1	21,9	33,3	2,2	2,8	60,2	13,4	5,7	10,3	2,2	31,6	100,0
México	2002	Ambos sexos	2,9	7,8	18,3	22,3	1,4	49,8	5,5	7,9	27,5	6,5	47,4	100,0
		Hombres	2,7	9,3	18,5	21,2	0,4	49,4	6,2	10,0	25,1	6,6	47,9	100,0
		Mujeres	3,1	6,3	18,0	23,4	2,4	50,1	4,7	5,8	29,9	6,4	46,8	100,0
Nicaragua	2001	Ambos sexos	19,0	29,4	12,4	4,8	1,6	48,2	16,7	5,2	8,5	2,4	32,8	100,0
		Hombres	21,8	32,4	11,1	3,8	1,2	48,5	16,6	4,2	6,9	2,1	29,8	100,0
		Mujeres	15,7	25,8	14,0	6,2	2,1	48,1	16,9	6,3	10,4	2,7	36,3	100,0
Panamá	2002	Ambos sexos	3,3	10,8	24,6	10,1	1,8	47,3	10,2	6,6	24,5	8,0	49,3	100,0
		Hombres	1,6	11,4	26,3	11,5	1,5	50,7	12,5	7,8	21,0	6,5	47,8	100,0
		Mujeres	5,4	10,1	22,6	8,4	2,1	43,2	7,5	5,2	28,9	9,9	51,5	100,0
Paraguay	2001	Ambos sexos	3,0	26,2	20,4	6,1	0,3	53,0	5,3	7,4	28,5	2,7	43,9	100,0
		Hombres	2,6	30,1	17,5	6,8	0,4	54,8	6,5	6,3	28,1	1,8	42,7	100,0
		Mujeres	3,6	20,7	24,4	5,3	0,2	50,6	3,7	9,1	29,0	4,0	45,8	100,0

(continúa)

Cuadro 37 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): CLASIFICACIÓN DE LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SU SITUACIÓN A LO LARGO DEL CICLO ESCOLAR, ZONAS RURALES, CIRCA 2003 ^{a/}
(En porcentajes)

País	Año	Sexo	Situación de estudios									Total		
			No ingresaron al sistema educativo	Desertores escolares				Subtotal desertores	Estudiantes y egresados				Subtotal estudiantes y egresados	
				Desertores tempranos (durante el ciclo primario)	Desertores al finalizar el ciclo primario	Desertores al inicio del ciclo secundario	Desertores al término del ciclo secundario		Estudiantes muy retrasados	Estudiantes poco retrasados	Estudiantes al día			Egresados
Perú	2002	Ambos sexos	1,6	11,7	14,1	5,3	3,1	34,2	20,4	12,5	18,2	13,0	64,1	100,0
		Hombres	1,1	7,7	12,9	5,0	2,9	28,5	23,1	14,0	19,1	14,2	70,4	100,0
		Mujeres	2,2	16,5	15,5	5,6	3,4	41,0	17,2	10,9	17,1	11,6	56,8	100,0
República Dominicana	2003	Ambos sexos	4,7	16,5	2,9	0,8	1,5	21,7	21,9	9,7	34,6	7,4	73,6	100,0
		Hombres	5,2	17,5	2,3	0,4	1,2	21,4	29,3	9,7	30,1	4,0	73,1	100,0
		Mujeres	4,1	15,3	3,6	1,2	1,9	22,0	12,7	9,6	40,0	11,6	73,9	100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ La metodología de construcción de esta clasificación puede verse en CEPAL, *Panorama social de América Latina 2001-2002* (LC/G/2183-P), cuadros III.1 y III.5.

b/ El país tiene un ciclo secundario de solo tres años, por lo que la categoría “desertores al inicio del ciclo secundario” está incluida en “desertores al término del ciclo secundario”.

Cuadro 38

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA GLOBAL DE DESERCIÓN ENTRE LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, 1990-2003 a/ (En porcentajes)										
País		Nacional			Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina (Gran Buenos Aires) (Zonas urbanas)	1990	36	38	33
	2002	16	17	15
	1999	23	25	21
	2002	17	19	16
Bolivia	1999	51	49	54	45	42	47	67	64	70
	2002	46	44	48	35	32	37	65	61	70
Brasil	1990	46	49	43	40	43	37	65	67	62
	2002	22	23	21	20	21	19	32	32	32
Chile	1990	27	27	28	21	20	21	56	57	56
	2003	12	12	12	10	10	10	24	24	23
Colombia	1991	43	45	40	30	30	30	59	63	55
	2002	24	24	23
Costa Rica	1990	53	53	53	33	32	34	69	69	68
	2002	34	37	31	24	26	23	49	53	44
Ecuador	1990	24	28	21
	2002	28	28	27
El Salvador	1995	45	44	46	32	31	34	63	61	65
	2003	38	36	40	27	26	28	54	51	56
Guatemala	1998	59	59	60	40	40	41	76	73	78
	2002	49	49	50	37	38	35	59	57	62
Honduras	1990	66	69	63	49	52	46	81	84	79
	2003	53	57	49	37	39	35	69	71	66
México	2000	45	45	45	35	35	36	60	59	60
	2002	41	41	40	34	35	33	51	51	52
Nicaragua	1993	44	43	45	32	31	33	65	63	67
	2001	41	46	36	31	36	25	60	62	57
Panamá	1991	35	39	32	28	31	26	53	58	48
	2002	30	32	28	20	20	20	49	52	46
Paraguay (Asunción y Dpto. Central) (Zonas urbanas)	1994	34	26	41
	2001	25	25	26
	1994	40	36	43
	2001	39	41	37	27	27	28	55	56	53
Perú	1999	26	26	27	16	17	16	45	42	49
	2002	22	20	24	15	15	15	35	29	42
República Dominicana	1997	23	25	21	19	23	17	28	28	28
	2003	16	17	16	13	14	13	23	23	23
Uruguay	1990	37	41	32
	2002	30	34	25
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	44	46	41	40	42	38	65	69	61
	2003	28	33	24

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ La metodología de construcción de las tasas de deserción puede verse en CEPAL, *Panorama social de América Latina 2001-2002* (LC/G/2183-P), recuadros III.1 y III.5.

Cuadro 39

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE DESERCIÓN TEMPRANA ENTRE LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, 1990-2003 ^{a/} (En porcentajes)										
País	Año	Nacional			Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina (Gran Buenos Aires) (Zonas urbanas)	1990	2	2	2
	2002	3	4	2
	1999	2	2	2
	2002	3	4	2
Bolivia	1999	21	19	24	10	8	12	48	43	54
	2002	22	21	22	10	9	11	41	39	44
Brasil	1990	40	44	38	34	36	31	61	64	58
	2002	16	17	15	14	15	13	27	27	26
Chile	1990	11	12	10	7	7	6	30	32	28
	2003	3	3	2	2	2	2	9	10	8
Colombia	1991	16	18	13	7	8	7	26	30	22
	2002	4	4	3
Costa Rica	1990	12	13	11	5	5	4	18	19	16
	2002	8	9	6	5	5	4	12	15	10
Ecuador	1990	4	4	3
	2002	3	4	3
El Salvador	1995	37	36	38	23	22	24	56	54	58
	2003	30	28	31	18	18	19	45	43	48
Guatemala	1998	32	30	34	16	15	17	46	42	50
	2002	24	22	26	12	11	13	33	31	36
Honduras	1990	27	30	25	15	16	15	38	42	35
	2003	18	21	15	9	10	7	27	31	24
México	2000	7	8	6	4	4	3	12	12	12
	2002	5	6	4	3	3	3	8	10	7
Nicaragua	1993	24	25	22	12	14	10	44	45	42
	2001	20	24	16	10	13	8	36	41	31
Panamá	1991	6	7	5	4	5	3	11	13	9
	2002	5	6	4	2	2	1	11	12	11
Paraguay Asunción y Dpto. Central	1994	7	6	7
	2001	5	5	6
	1994	12	13	12
	2001	15	18	12	7	6	7	27	31	22
Perú	1999	8	5	10	2	1	2	18	12	25
	2002	6	4	8	3	3	3	12	8	17
República Dominicana	1997	17	19	16	12	14	11	25	25	24
	2003	11	13	9	8	9	6	17	19	16
Uruguay	1990	2	3	2
	2002	3	3	2
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	36	40	31	32	35	28	61	66	55
	2003	24	29	19

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ La metodología de construcción de las tasas de deserción puede verse en CEPAL, *Panorama social de América Latina 2001-2002* (LC/G/2183-P), recuadros III.1 y III.5.

Cuadro 40

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE DESERCIÓN AL FINALIZAR EL CICLO PRIMARIO ENTRE LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, 1990-2003 a/ (En porcentajes)										
País	Año	Nacional			Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina (Gran Buenos Aires) (Zonas urbanas)	1990	20	20	20
	2002	5	6	4
	1999	12	14	11
	2002	7	8	6
Bolivia	1999	7	7	7	6	6	6	12	12	11
	2002	9	8	10	7	7	7	15	12	19
Brasil	1990	7	7	6	7	7	6	7	8	7
	2002	5	4	5	5	4	5	5	4	6
Chile	1990	8	7	8	5	4	5	24	23	25
	2003	4	4	3	3	3	3	8	9	8
Colombia	1991	18	19	17	10	9	10	32	34	29
	2002	6	7	6
Costa Rica	1990	36	35	36	19	17	20	51	52	50
	2002	21	22	20	13	13	12	34	36	32
Ecuador	1990	12	14	10
	2002	14	15	13
El Salvador	1995	11	11	11	10	10	9	14	14	14
	2003	9	9	10	7	7	8	13	13	14
Guatemala	1998	29	31	27	16	16	17	46	48	43
	2002	21	23	20	14	15	12	29	30	29
Honduras	1990	46	49	44	31	35	28	65	67	64
	2003	35	38	32	22	23	20	51	54	48
México	2000	16	15	16	10	10	11	24	24	25
	2002	13	13	12	8	8	8	20	21	20
Nicaragua	1993	16	17	15	12	14	11	25	25	26
	2001	14	16	13	10	12	9	24	24	24
Panamá	1991	19	22	15	12	15	10	36	41	30
	2002	14	15	12	6	6	6	29	30	27
Paraguay Asunción y Dpto. Central	1994	15	7	20
	2001	9	7	11
	1994	17	12	20
	2001	17	16	19	11	10	12	29	26	32
Perú	1999	9	9	9	4	3	4	21	20	22
	2002	7	7	8	3	3	3	16	14	19
República Dominicana	1997	3	4	3	4	5	4	2	2	3
	2003	3	3	3	3	3	3	4	3	4
Uruguay	1990	13	14	12
	2002	10	13	7
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	5	4	5	5	4	5	5	4	5
	2003	4	4	4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ La metodología de construcción de las tasas de deserción puede verse en CEPAL, *Panorama social de América Latina 2001-2002* (LC/G/2183-P), cuadros III.1 y III.5.

Cuadro 41

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE DESERCIÓN EN EL CICLO SECUNDARIO ENTRE LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, 1990-2003 (En porcentajes)										
País	Año	Nacional			Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina (Gran Buenos Aires) (Zonas urbanas)	1990	17	20	15
	2002	9	8	10
	1999	10	10	10
	2002	9	8	9
Bolivia	1999	34	32	35	35	33	37	27	27	27
	2002	24	22	26	22	20	24	29	27	32
Brasil	1990	3	2	3	3	3	3	1	2	1
	2002	3	3	3	3	3	3	2	2	2
Chile	1990	11	11	12	11	10	11	19	18	19
	2003	6	5	6	5	5	6	8	8	9
Colombia	1991	17	17	17	16	16	16	19	20	19
	2002	16	16	16
Costa Rica	1990	17	16	18	14	14	13	22	21	24
	2002	10	11	8	9	11	8	11	13	9
Ecuador	1990	11	13	9
	2002	13	13	14
El Salvador	1995	3	2	3	3	2	4	2	1	3
	2001	3	3	4	3	3	4	3	3	2
	2003	3	3	4	4	3	4	3	3	3
Guatemala	1998	16	15	17	15	16	15	17	13	23
	2002	15	15	16	17	17	16	14	12	16
Honduras	1990	13	14	12	12	12	12	14	17	12
	2003	12	11	12	11	11	11	12	11	14
México	2000	30	29	30	25	24	26	39	39	40
	2002	28	28	29	26	27	25	33	31	36
Nicaragua	1993	13	8	18	12	7	16	17	10	23
	2001	15	16	13	14	17	12	16	14	19
Panamá	1991	16	16	15	15	15	15	19	20	18
	2002	15	15	14	13	13	13	19	21	17
Paraguay ^{c/} Asunción y Dpto. Central	1994	18	15	20
	2001	13	15	12
	1994	18	16	19
	2001	13	14	12	13	14	12	13	14	11
Perú	1999	12	14	11	11	13	10	15	17	13
	2002	10	10	11	10	10	9	12	10	14
República Dominicana	1997	3	4	3	4	6	3	2	2	3
	2003	3	2	4	3	2	4	3	2	4
Uruguay	1990	25	30	21
	2002	20	21	18
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	8	6	9	8	6	9	7	5	9
	2003	1	1	2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ La metodología de construcción de las tasas de deserción puede verse en CEPAL, *Panorama social de América Latina 2001-2002* (LC/G/2183-P), cuadros III.1 y III.5.

Cuadro 42

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CEMIT DE JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE TRABAJAN 20 O MÁS HORAS SEMANALES, SEGÚN SEXO, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 ^{a/}							
(En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de CEMIT			Promedio de CEMIT		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina (Gran Buenos Aires)	1980	5,1	5,3	4,8
	1990	2,7	2,6	2,7
	1994	5,2	5,2	5,2
	1999	4,1	3,9	4,4
	2002	2,6	2,6	2,6
Bolivia	1989	2,4	2,8	2,0
	1994	2,0	2,3	1,6
	1999	2,4	2,6	2,1	2,1	2,3	1,3
	2002	2,1	2,2	2,0	2,1	2,2	1,8
Brasil	1979	2,8	3,1	2,2	1,8	2,0	1,5
	1990	2,3	2,5	2,0	2,1	2,2	1,7
	1993	2,3	2,5	2,1	1,8	1,9	1,5
	1999	2,4	2,6	2,3	2,0	2,1	1,8
	2001	2,5	2,5	2,4	1,9	2,0	1,8
Chile	1990	2,2	2,3	2,0	2,3	2,4	2,3
	1994	3,1	3,3	2,8	2,9	2,9	2,7
	1998	3,5	3,5	3,4	3,4	3,5	3,2
	2000	3,5	3,6	3,2	3,5	3,5	3,4
	2003	3,5	3,6	3,4	3,8	3,9	3,8
Colombia ^{b/}	1980	2,2	2,3	2,2
	1990	2,3	2,3	2,2
	1991	1,8	1,9	1,7	2,2	2,4	1,7
	1994	2,1	2,1	2,1	1,9	2,0	1,7
	1999	2,2	2,1	2,3	2,8	2,9	2,4
	2002	2,0	1,9	2,1
Costa Rica	1981	3,8	3,7	4,0	3,3	3,4	2,8
	1990	3,5	3,6	3,4	4,2	4,3	3,6
	1994	3,6	3,7	3,4	4,2	4,4	3,7
	1999	3,9	3,9	3,9	4,5	4,6	4,4
	2002	4,4	4,5	4,2	5,1	5,2	4,8
Ecuador	1990	2,2	2,3	2,0
	1994	2,1	2,3	1,9
	1999	1,7	1,8	1,7
	2002	2,3	2,4	2,2
El Salvador	1997	2,9	2,9	2,9	2,5	2,6	2,4
	1999	2,8	2,9	2,5	3,1	3,2	2,9
	2001	2,8	2,9	2,6	3,1	3,2	2,8
Guatemala	1989	2,3	2,5	2,1	2,2	2,2	1,9
	1998	2,0	2,1	2,0	1,5	1,6	1,1
	2002	2,2	2,3	2,1	2,1	2,2	1,8
Honduras	1990	1,6	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4
	1994	1,3	1,4	1,2	1,7	1,7	1,5
	1999	1,5	1,6	1,4	1,6	1,6	1,7
	2002	1,6	1,6	1,5	1,2	1,1	1,8

(continúa)

Cuadro 42 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CEMIT DE JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE TRABAJAN 20 O MÁS HORAS SEMANALES, SEGÚN SEXO, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 a/							
(En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de CEMIT			Promedio de CEMIT		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
México	1984	3,2	3,1	3,3	2,6	2,6	2,8
	1989	2,4	2,6	2,0	2,0	2,0	1,7
	1994	2,0	2,1	1,9	2,0	2,2	1,6
	1998	1,7	1,4	2,1	1,1	1,0	1,5
	2000	2,1	2,2	1,9	1,9	2,0	1,7
	2002	1,6	1,7	1,5	1,7	1,8	1,5
Nicaragua	1993	2,6	2,4	2,8	2,3	2,2	2,9
	1998	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	1,8
	2001	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,1
Panamá	1979	3,9	4,3	3,4
	1991	2,8	3,1	2,3
	1994	2,8	2,9	2,4
	1999	3,8	3,7	3,8
	2002	4,3	4,8	3,5	6,1	6,7	3,1
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	1,4	1,7	1,1
	1990	1,6	1,9	1,2
	1994	2,1	2,4	1,8
	1999	1,6	1,5	1,8
	2001	2,0	2,1	2,0	1,7	1,6	1,8
Perú	1997	2,1	2,3	2,0	1,9	2,0	1,7
	1999	2,1	2,2	2,0	1,8	1,9	1,3
	2001	1,9	2,0	1,7	1,6	1,7	1,4
República Dominicana	1997	3,2	3,1	3,3	4,0	4,2	3,5
	2002	2,8	2,8	2,7	3,1	3,3	2,7
Uruguay	1981	3,1	3,3	2,8
	1990	2,3	2,4	2,1
	1994	2,8	2,9	2,7
	1999	3,2	3,3	3,0
	2002	2,6	2,5	2,6
Venezuela (República Bolivariana de) c/	1981	5,7	5,9	5,3	5,9	6,0	5,3
	1990	3,3	3,4	2,9	3,2	3,3	2,9
	1994	2,9	2,9	2,9	2,8	3,0	2,2
	1999	2,6	2,6	2,6
	2002	2,5	2,5	2,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ CEMIT significa “capacidad equivalente mensual de ingresos por trabajo” y corresponde al ingreso mensual equivalente a 44 horas semanales de trabajo de acuerdo con el valor de la hora laboral, expresado en líneas de pobreza. Este indicador no incluye a los familiares no remunerados.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 43

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CEMIT DE PERSONAS DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD QUE TRABAJAN 20 O MÁS HORAS SEMANALES, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 a/ (En promedios)											
País	Año	Zonas urbanas					Zonas rurales				
		Promedio de CEMIT					Promedio de CEMIT				
		Total	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	Total	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina (Gran Buenos Aires)	1980	9,0	5,7	7,4	12,2	16,3
	1990	4,6	2,9	3,4	4,6	7,9
	1994	9,7	6,0	6,8	10,0	16,4
	1999	7,6	4,2	4,6	7,2	12,6
	2002	5,6	2,5	3,2	4,5	9,6
Bolivia	1989	4,8	3,2	3,6	4,7	7,6
	1994	4,6	2,5	3,2	4,0	8,4
	1999	4,0	2,4	2,7	3,7	6,5	1,7	1,2	2,1	3,1	6,4
	2002	4,1	2,3	2,6	3,5	7,9	2,8	2,3	3,2	3,8	7,6
Brasil	1979	7,0	4,2	7,4	10,8	20,7	3,1	2,9	6,6	9,6	11,0
	1990	5,7	3,0	4,5	7,1	15,2	3,4	2,9	5,3	7,2	16,8
	1993	5,7	2,9	4,4	7,1	15,8	3,3	2,7	5,4	7,1	17,5
	1999	5,6	2,8	3,9	6,2	14,8	3,2	2,4	4,0	6,4	18,1
	2001	5,6	2,6	3,7	6,0	15,7	3,0	2,5	3,7	6,1	13,5
Chile	1990	4,1	2,1	2,4	3,2	7,5	3,3	2,5	2,6	3,7	8,8
	1994	6,5	3,2	3,5	5,1	12,1	4,6	3,0	3,4	5,3	15,9
	1998	7,9	3,3	4,0	6,0	14,3	5,5	3,9	4,1	7,7	16,1
	2000	7,9	3,2	3,8	5,4	14,7	5,2	3,7	4,3	6,2	15,3
	2003	8,0	3,4	3,9	5,6	14,3	6,0	3,8	4,5	6,6	20,2
Colombia b/	1980	4,6	2,3	3,7	5,9	12,3
	1990	4,3	2,3	3,0	4,6	8,6
	1991	3,1	1,9	2,4	3,3	5,8	3,7	3,0	4,7	6,4	10,1
	1994	4,1	2,1	2,7	4,1	8,9	2,9	2,4	3,1	4,2	8,2
	1999	3,6	1,9	2,1	3,4	7,6	3,4	2,6	3,4	5,1	8,5
	2002	3,5	1,7	1,9	3,0	7,2
Costa Rica	1981	7,8	5,2	6,1	8,8	13,9	8,0	7,1	7,5	11,4	18,3
	1990	5,7	3,2	4,0	5,9	9,4	5,9	4,9	5,4	7,4	11,6
	1994	6,3	3,6	4,3	6,2	10,1	6,5	5,2	5,8	8,0	13,7
	1999	6,4	3,4	4,3	6,2	10,3	7,0	5,2	6,1	8,2	14,1
	2002	7,1	3,5	4,1	6,5	12,1	7,0	4,9	5,6	8,3	16,2
Ecuador	1990	3,5	2,1	2,7	3,8	5,7
	1994	3,4	1,8	2,4	3,5	5,2
	1999	3,5	1,6	2,0	3,2	6,0
	2002	4,1	2,2	2,8	3,6	6,5
El Salvador	1997	4,8	2,2	3,3	5,7	9,9	3,2	2,8	4,9	2,9	13,8
	1999	5,2	2,8	3,7	5,3	10,1	4,4	4,0	4,8	5,7	10,9
	2001	5,1	2,8	3,6	5,2	9,8	4,6	4,0	5,0	6,9	10,6
Guatemala	1989	4,4	2,6	3,8	6,3	10,5	3,4	3,1	4,6	8,5	15,9
	1998	4,1	2,2	3,0	5,8	9,4	3,3	2,8	5,1	6,3	14,1
	2002	4,6	2,8	3,1	4,7	10,5	3,7	3,0	4,6	6,4	14,3
Honduras	1990	3,4	1,6	2,5	5,2	10,0	2,3	1,9	3,3	7,4	8,4
	1994	2,6	1,4	1,8	3,1	7,0	2,7	2,0	3,7	5,2	6,6
	1999	2,9	1,5	2,1	3,5	6,6	2,5	2,0	2,5	7,1	6,0
	2002	2,8	1,3	1,9	3,5	6,6	1,8	1,3	2,2	5,2	9,4

(continúa)

Cuadro 43 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CEMIT DE PERSONAS DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD QUE TRABAJAN 20 O MÁS HORAS SEMANALES, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS Y RURALES, 1980-2003 a/											
(En promedios)											
País	Año	Zonas urbanas					Zonas rurales				
		Promedio de CEMIT					Promedio de CEMIT				
		Total	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	Total	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
México	1984	5,4	2,4	4,6	6,4	8,8	4,0	2,5	3,9	8,0	10,6
	1989	4,8	3,1	3,8	5,8	8,8	3,7	3,0	4,5	6,0	7,9
	1994	5,1	2,3	3,6	5,8	10,1	3,4	2,6	3,8	6,3	8,8
	1998	5,8	1,9	3,3	5,4	12,0	3,8	2,1	3,1	26,0	10,2
	2000	4,8	2,3	3,1	4,6	9,6	4,4	2,4	3,5	6,7	17,6
	2002	3,5	1,7	2,2	3,7	6,9	2,7	1,5	2,3	4,0	10,5
Nicaragua	1993	3,7	2,8	3,4	4,0	6,9	2,7	2,3	3,7	4,6	9,1
	1998	4,0	2,0	3,1	4,0	9,6	2,9	2,2	3,6	4,2	8,5
	2001	3,6	2,2	2,6	3,1	10,4	2,7	2,3	3,4	3,8	9,2
Panamá	1979	7,0	3,8	5,0	8,0	13,2
	1991	6,5	3,3	4,1	5,9	10,7
	1994	6,2	3,4	3,8	5,7	10,3
	1999	6,7	3,1	3,9	6,1	10,8
	2002	7,0	4,3	4,5	5,7	11,0	5,6	4,0	5,2	6,9	11,1
Paraguay (Área Metropolitana de Asunción)	1986	3,7	1,5	2,3	4,1	7,4
	1990	3,7	2,0	2,7	4,0	7,1
	1994	4,0	1,9	2,7	4,1	8,3
	1999	4,7	1,9	4,8	3,4	9,5
	2001	4,1	1,9	2,5	3,4	8,1	2,9	1,8	3,0	9,8	6,7
Perú	1997	3,6	2,2	2,6	3,3	5,6	2,4	2,0	2,8	3,3	5,9
	1999	3,6	2,0	2,2	2,9	5,6	2,3	1,9	2,0	3,6	4,7
	2001	3,3	2,1	2,2	2,6	5,2	2,0	1,6	1,9	2,6	4,7
República Dominicana	1997	5,2	3,5	4,4	5,1	9,0	5,2	4,6	5,6	6,1	8,8
	2002	5,3	3,6	3,9	4,7	8,9	4,2	3,7	4,0	5,2	6,5
Uruguay	1981	6,3	4,3	5,4	7,2	12,1
	1990	4,3	2,8	3,4	5,0	6,8
	1994	5,3	3,4	4,1	5,9	8,8
	1999	6,0	3,7	4,4	6,5	10,2
	2002	4,9	2,7	3,4	4,8	7,8
Venezuela (República Bolivariana de)c/	1981	9,1	6,1	8,1	11,4	17,8	7,4	6,2	9,3	14,2	23,3
	1990	5,4	3,9	4,6	5,8	8,5	5,1	4,4	5,8	6,8	9,4
	1994	4,3	3,1	3,7	4,5	6,7	4,1	3,5	4,6	4,7	7,1
	1999	4,3	2,7	3,5	4,4	7,2
	2002	4,4	2,8	3,6	4,5	7,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ CEMIT significa “capacidad equivalente mensual de ingresos por trabajo” y corresponde al ingreso mensual equivalente a 44 horas semanales de trabajo de acuerdo con el valor de la hora laboral, expresado en líneas de pobreza. Este indicador no incluye a los familiares no remunerados.
- b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren solo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997, el diseño muestral de la encuesta no permite desglosar la información en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 44

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL 1990/1991 - 2000/2001 a/								
País y cobertura d/	Período	Gasto público social b/			Período	Variaciones porcentuales del gasto público social c/		
		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total
Argentina e/ (SPNF consolidado)	1990/91	1211	19,3	62,2	1990/91 - 1994/95	31,3	1,8	3,5
	1994/95	1589	21,1	65,6	1994/95 - 1998/99	7,5	-0,3	-1,7
	1998/99	1709	20,8	63,9	1998/99 - 2000/01	-3,4	0,8	-1,5
	2000/01	1650	21,6	62,4	1990/91 - 2000/01	36,3	2,3	0,3
Bolivia (GG)	1990/91	1990/91 - 1994/95
	1994/95	121	12,4	47,3	1994/95 - 1998/99	39,3	3,9	9,5
	1998/99	169	16,3	56,8	1998/99 - 2000/01	8,6	1,6	3,6
	2000/01	183	17,9	60,4	1990/91 - 2000/01
Brasil f/ (SPNF consolidado)	1990/91	786	18,1	48,9	1990/91 - 1994/95	15,2	1,2	9,4
	1994/95	906	19,3	58,2	1994/95 - 1998/99	3,4	0,1	-2,7
	1998/99	936	19,3	55,5	1998/99 - 2000/01	0,0	-0,5	6,1
	2000/01	936	18,8	61,6	1990/91 - 2000/01	19,1	0,7	12,8
Chile (GC)	1990/91	441	11,7	60,8	1990/91 - 1994/95	35,6	0,6	4,0
	1994/95	598	12,3	64,8	1994/95 - 1998/99	40,1	2,5	2,2
	1998/99	838	14,7	66,9	1998/99 - 2000/01	11,8	1,3	2,8
	2000/01	936	16,0	69,7	1990/91 - 2000/01	112,2	4,3	8,9
Colombia (SPNF)	1990/91	158	6,8	28,8	1990/91 - 1994/95	88,0	4,7	11,1
	1994/95	297	11,5	39,9	1994/95 - 1998/99	20,2	2,6	-6,6
	1998/99	357	14,0	33,4	1998/99 - 2000/01	-5,6	-0,4	0,1
	2000/01	337	13,6	33,5	1990/91 - 2000/01	113,3	6,8	4,7
Costa Rica (SPNF consolidado)	1990/91	469	15,6	38,9	1990/91 - 1994/95	13,6	0,3	-0,6
	1994/95	533	15,8	38,3	1994/95 - 1998/99	14,4	0,6	2,4
	1998/99	610	16,4	40,7	1998/99 - 2000/01	13,0	1,8	-0,1
	2000/01	689	18,2	40,5	1990/91 - 2000/01	46,9	2,6	1,6
Ecuador g/ (GC)	1990/91	88	5,5	35,4	1990/91 - 1994/95	37,5	1,9	0,7
	1994/95	121	7,4	36,1	1994/95 - 1998/99	3,7	0,7	-4,4
	1998/99	126	8,1	31,8	1998/99 - 2000/01	4,4	0,8	-2,0
	2000/01	131	8,8	29,8	1990/91 - 2000/01	48,9	3,3	-5,6
El Salvador (GC)	1990/91	1990/91 - 1994/95
	1994/95	63	3,4	23,7	1994/95 - 1998/99	24,8	0,7	7,6
	1998/99	78	4,1	31,3	1998/99 - 2000/01	5,1	0,2	-0,4
	2000/01	82	4,2	30,9	1990/91 - 2000/01
Guatemala (GC)	1990/91	52	3,4	29,9	1990/91 - 1994/95	29,1	0,8	10,7
	1994/95	67	4,1	40,6	1994/95 - 1998/99	54,9	1,9	3,3
	1998/99	103	6,0	43,9	1998/99 - 2000/01	5,3	0,2	1,7
	2000/01	109	6,2	45,6	1990/91 - 2000/01	110,7	2,8	15,7
Honduras (GC)	1990/91	60	7,9	36,5	1990/91 - 1994/95	0,0	-0,2	-4,2
	1994/95	60	7,8	32,3	1994/95 - 1998/99	-4,2	-0,3	-0,9
	1998/99	57	7,5	31,4	1998/99 - 2000/01	34,2	2,5	7,4
	2000/01	77	10,0	38,7	1990/91 - 2000/01	28,6	2,1	2,3
México (Sector público presupuestario)	1990/91	259	6,5	40,8	1990/91 - 1994/95	38,0	2,3	11,6
	1994/95	358	8,8	52,4	1994/95 - 1998/99	13,8	0,4	7,1
	1998/99	407	9,2	59,5	1998/99 - 2000/01	11,9	0,6	2,0
	2000/01	456	9,8	61,5	1990/91 - 2000/01	75,9	3,3	20,7
Nicaragua (GC presupuestario)	1990/91	48	11,1	34,1	1990/91 - 1994/95	2,1	1,1	5,9
	1994/95	49	12,2	39,9	1994/95 - 1998/99	17,5	0,9	-2,9
	1998/99	57	13,0	37,0	1998/99 - 2000/01	6,1	0,2	1,4
	2000/01	61	13,2	38,4	1990/91 - 2000/01	27,4	2,1	4,3

(continúa)

Cuadro 44 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL 1990/1991 - 2000/2001 ^{a/}								
País y cobertura ^{d/}	Período	Gasto público social ^{b/}			Período	Variaciones porcentuales del gasto público social ^{c/}		
		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total
Panamá (SPNF)	1990/91	497	18,6	40,0	1990/91 - 1994/95	22,0	1,2	3,2
	1994/95	606	19,8	43,2	1994/95 - 1998/99	17,6	1,9	-1,1
	1998/99	712	21,6	42,2	1998/99 - 2000/01	19,8	3,9	7,6
	2000/01	853	25,5	49,7	1990/91 - 2000/01	71,8	7,0	9,7
Paraguay (GC ^{e/} presupuestario)	1990/91	57	3,1	39,9	1990/91 - 1994/95	133,6	3,9	3,5
	1994/95	132	7,0	43,4	1994/95 - 1998/99	15,9	1,5	1,2
	1998/99	153	8,5	44,6	1998/99 - 2000/01	-3,6	0,0	-0,8
	2000/01	148	8,5	43,8	1990/91 - 2000/01	161,1	5,4	3,9
Perú (GC)	1990/91	76	4,0	33,9	1990/91 - 1994/95	93,4	2,7	6,4
	1994/95	146	6,7	40,2	1994/95 - 1998/99	21,9	1,0	3,2
	1998/99	178	7,7	43,4	1998/99 - 2000/01	4,8	0,4	3,4
	2000/01	187	8,0	46,8	1990/91 - 2000/01	147,0	4,0	13,0
República Dominicana (GC)	1990/91	60	4,3	38,4	1990/91 - 1994/95	73,9	1,8	2,8
	1994/95	104	6,1	41,2	1994/95 - 1998/99	27,1	0,5	-1,5
	1998/99	132	6,6	39,7	1998/99 - 2000/01	29,3	1,1	5,5
	2000/01	170	7,6	45,2	1990/91 - 2000/01	185,7	3,3	6,8
Uruguay (GC)	1990/91	888	16,9	62,4	1990/91 - 1994/95	40,5	3,4	8,5
	1994/95	1248	20,3	70,8	1994/95 - 1998/99	22,8	2,5	1,4
	1998/99	1533	22,8	72,2	1998/99 - 2000/01	-2,5	0,7	2,8
	2000/01	1494	23,5	75,0	1990/91 - 2000/01	68,2	6,6	12,6
Venezuela (República Bolivariana de) (GC)	1990/91	320	8,5	32,9	1990/91 - 1994/95	-10,3	-1,0	2,5
	1994/95	287	7,6	35,3	1994/95 - 1998/99	7,2	0,9	1,3
	1998/99	307	8,4	36,6	1998/99 - 2000/01	30,9	2,9	1,3
	2000/01	402	11,3	37,9	1990/91 - 2000/01	25,8	2,8	5,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información extraída de la base de datos sobre gasto social.

a/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y asistencia social, y vivienda y alcantarillado.

b/ Las cifras corresponden al promedio simple del bienio referido.

c/ Las dos últimas columnas corresponden a diferencias entre los porcentajes del período final y del inicial.

d/ SPNF: Sector público no financiero; GG: Gobierno general; GC: Gobierno central.

e/ Incluye el gasto del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y el gobierno central de Buenos Aires, y de los gobiernos municipales.

f/ Estimación del gasto social consolidado, que incluye el gasto federal, estadual y municipal.

g/ Incluye una estimación del volumen de gastos en seguridad social, que no forma parte del presupuesto del Gobierno Central.

Cuadro 45

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EDUCACIÓN Y SALUD, 1990/1991 - 2000/2001							
País y cobertura a/	Período	Gasto público social en educación b/			Gasto público social en salud b/		
		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total	per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total
Argentina c/ (SPNF consolidado)	1990/91	226	3,6	11,6	271	4,3	14,0
	1994/95	318	4,2	13,1	371	5,0	15,3
	1998/99	385	4,7	14,4	394	4,8	14,8
	2000/01	385	5,0	14,6	379	5,0	14,3
Bolivia (GG)	1990/91
	1994/95	52	5,3	20,2	31	3,1	12,0
	1998/99	62	6,0	21,0	36	3,4	11,9
	2000/01	66	6,5	21,8	38	3,7	12,5
Brasil d/ (SPNF consolidado)	1990/91	162	3,7	9,9	156	3,6	9,6
	1994/95	212	4,6	13,7	157	3,4	10,1
	1998/99	202	4,2	12,0	140	2,9	8,3
	2000/01	185	3,8	12,2	151	3,0	9,9
Chile (GC)	1990/91	87	2,4	12,0	70	1,9	9,6
	1994/95	131	2,7	14,1	109	2,2	11,8
	1998/99	206	3,7	16,5	147	2,6	11,7
	2000/01	238	4,1	17,7	165	2,8	12,3
Colombia (SPNF)	1990/91	63	2,7	11,5	23	1,0	4,2
	1994/95	86	3,4	11,6	75	2,9	10,1
	1998/99	118	4,6	11,1	94	3,7	8,8
	2000/01	97	3,9	9,6	107	4,3	10,5
Costa Rica (SPNF consolidado)	1990/91	114	3,8	9,4	148	4,9	12,3
	1994/95	136	4,1	9,8	158	4,7	11,4
	1998/99	160	4,3	10,7	177	4,8	11,8
	2000/01	189	5,0	11,1	199	5,3	11,7
Ecuador (GC)	1990/91	45	2,9	18,3	14	0,9	5,6
	1994/95	51	3,1	15,3	16	1,0	4,9
	1998/99	55	3,5	13,9	18	1,1	4,5
	2000/01	45	3,0	10,1	16	1,1	3,6
El Salvador (GC)	1990/91
	1994/95	37	2,0	14,0	24	1,3	9,2
	1998/99	48	2,5	19,4	28	1,5	11,3
	2000/01	51	2,6	19,0	29	1,5	11,0
Guatemala (GC)	1990/91	25	1,6	14,3	14	0,9	8,1
	1994/95	29	1,8	17,3	14	0,9	8,7
	1998/99	40	2,3	16,8	19	1,1	7,9
	2000/01	46	2,6	19,2	19	1,1	7,9
Honduras (GC)	1990/91	32	4,3	19,9	20	2,6	12,0
	1994/95	29	3,8	15,6	20	2,6	10,9
	1998/99	33	4,2	17,7	18	2,3	9,7
	2000/01	45	5,8	22,6	24	3,1	12,0
México (Sector público presupuestario)	1990/91	104	2,6	16,4	118	3,0	18,6
	1994/95	157	3,8	23,0	96	2,4	14,0
	1998/99	169	3,8	24,7	82	1,9	12,0
	2000/01	190	4,1	25,6	86	1,9	11,6

(continúa)

Cuadro 45 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EDUCACIÓN Y SALUD, 1990/1991 - 2000/2001							
País y cobertura a/	Período	Gasto público social en educación b/			Gasto público social en salud b/		
		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total	per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total
Nicaragua (GC presupuestario)	1990/91	19	4,3	13,0	20	4,7	14,5
	1994/95	20	4,8	15,8	19	4,8	15,6
	1998/99	26	5,8	16,7	20	4,6	13,2
	2000/01	28	6,1	17,7	22	4,8	13,9
Panamá (SPNF)	1990/91	125	4,7	10,2	164	6,1	13,3
	1994/95	151	5,0	10,8	204	6,7	14,5
	1998/99	220	6,7	13,0	249	7,6	14,8
	2000/01	199	6,0	11,6	274	8,2	16,0
Paraguay (GC presupuestario)	1990/91	22	1,2	15,8	6	0,3	3,8
	1994/95	61	3,2	20,0	21	1,1	6,7
	1998/99	75	4,1	21,7	23	1,3	6,8
	2000/01	70	4,0	20,6	19	1,1	5,7
Perú (GC)	1990/91	31	1,7	13,8	17	0,9	7,4
	1994/95	59	2,7	16,1	28	1,3	7,6
	1998/99	57	2,5	13,9	35	1,5	8,5
	2000/01	58	2,5	14,4	41	1,8	10,2
República Dominicana (GC)	1990/91	17	1,2	10,5	14	1,0	8,7
	1994/95	35	2,1	13,9	22	1,3	8,7
	1998/99	56	2,8	16,9	30	1,5	9,0
	2000/01	67	3,0	17,7	42	1,9	11,1
Uruguay (GC)	1990/91	130	2,5	9,1	154	2,9	10,8
	1994/95	151	2,5	8,6	212	3,5	12,1
	1998/99	218	3,3	10,3	188	2,8	8,9
	2000/01	213	3,4	10,7	175	2,8	8,8
Venezuela (República Bolivariana de) (GC)	1990/91	128	3,4	13,2	57	1,6	5,9
	1994/95	139	3,7	17,1	41	1,1	5,0
	1998/99	140	3,8	16,7	50	1,4	5,9
	2000/01	178	5,0	16,8	50	1,4	4,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información extraída de la base de datos sobre gasto social.

a/ SPNF: Sector público no financiero; GG: Gobierno general; GC: Gobierno central.

b/ Las cifras corresponden al promedio simple del bienio referido.

c/ Incluye el gasto del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y el gobierno central de Buenos Aires, y de los gobiernos municipales.

d/ Estimación del gasto social consolidado, que incluye el gasto federal, estadual y municipal.